La crisis que sufre la región tiende a generar una poderosa concentración del poder, como consecuencia de la reestructuración de la economía, y una acción colectiva fragmentada, dispersa y multidimensional. Los movimientos sociales surgidos en Sudamérica bajo esa presión de la crisis revelan un momento de inflexión en las orientaciones societales: renovación de movimientos sociales seculares y tradicionales como el movimiento obrero, el movimiento campesino o los movimientos nacionalistas y, al mismo tiempo, surgimiento de nuevas y múltiples identidades e intencionalidades: movimientos urbanos, de mujeres, étnicos, de jóvenes, de violencia revolucionaria, etcétera.

Este volumen intenta reflejar, a través de síntesis nacionales y una síntesis global, basadas en cincuenta y cuatro trabajos de investigación sobre los movimientos sociales más relevantes de diez países de la región, toda la riqueza y complejidad de estos verdaderos espacios de reacción y de resistencia a los impactos de la crisis, que en sus diversos gritos y deseos son portadores de nuevos horizontes colectivos.

Pocas veces hemos podido contar con un material similar, de carácter analítico-sincrónico capaz de arrojar luz sobre una realidad tan extensa y diversa, pero a la vez surcada por determinaciones comunes tan significativas.

Los ensayos compilados en este volumen corresponden a los siguientes autores: E. Ballón, F. Calderón G., G. Campero, T. Dos Santos, C. Filgueira, L. Gómez Calcaño, E. Jelin, R. Laserna, D. Rivarola, F. Rojas y L. Verdesoto.

Los movimientos sociales ante la crisis

Biblioteca de ciencias sociales núm. 18

Fernando Calderón G.
Compilador

Los movimientos sociales ante la crisis

Universidad de las Naciones Unidas

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

IISUNAM
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

Los movimientos sociales ante la crisis

Biblioteca de Ciencias Sociales
Directores: Mario R. dos Santos
y Cristina Micieli

Programa de Publicaciones
Asistente: Ariel Scher

I.S.B.N. 950-9231-14-4

Diseño Gráfico: Beatriz Burecovics y Viviana Barletta
Composición y armado: Ricardo Flaquér y Juan C. Eirín
Impresión: Artes Gráficas Santo Domingo
Santo Domingo 2739, Buenos Aires
Primera Edición: marzo de 1986
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Copyright de todas las ediciones en español por
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

E. Jelin, T. Dos Santos,
C. Filgueira, R. Laserna,
L. Verdesoto, E. Ballón,
F. Rojas, L. Gómez,
G. Campero, D. Rivarola,
F. Calderón Gutiérrez.

Los movimientos sociales ante la crisis

Universidad
de las Naciones
Unidas

clacso
Consejo
Latinoamericano
de Ciencias
Sociales

IISUNAM
Instituto de
Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional
Autónoma de México

Esta publicación divulga los trabajos de síntesis nacionales y síntesis regional realizados para el proyecto "Movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", coordinado por Fernando Calderón.

Dicho proyecto se inscribe en el programa Perspectivas de América Latina (PAL), cuyo coordinador general es Pablo González Casanova del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de México (IISUNAM).

El proyecto para Sudamérica ha sido auspiciado mediante un convenio entre la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Agradecimientos

Este libro sería imposible sin los cincuenta y cuatro estudios específicos realizados en los diez países involucrados; aunque la responsabilidad de la coordinación fue personal, quiero reiterar el reconocimiento al trabajo de todos estos colegas, cuyos nombres aparecen en cada caso nacional y en las notas correspondientes.

Asimismo deseo agradecer por los comentarios y sugerencias, sobre todo al texto de análisis general acerca de los movimientos sociales ante la crisis, a Pablo González Casanova, Alain Touraine, Enzo Faletto, Juan Enrique Vega, Orlando Plaza, Sergio Zermeño, José Luis Reyna, Elizabeth Jelin, Pablo Vila y Héctor Palomino. También deseo expresar mi agradecimiento por su apoyo y solidaridad permanentes a Mario dos Santos, Cristina Micieli, Waldo Ansaldi, Patricia Provoste y, particularmente, a Magdalena Felgueras, quien con admirable paciencia y gentileza trabajó con varios manuscritos.

Especialmente deseo agradecer a Manuel Castells, quien con sus críticas, valiosas sugerencias y el tiempo generosamente dedicado a revisar el texto final de síntesis me ha brindado una inapreciable ayuda.

Finalmente, quiero mencionar que para la coordinación de los trabajos y para elaborar el mismo texto de síntesis conté con la asistencia y apoyo invalorables de Laura Gaustein.

Fernando Calderón
Buenos Aires, noviembre de 1985

Países y autores de las síntesis nacionales y la síntesis regional

Argentina, por Elizabeth Jelin
Brasil, por Theotonio Dos Santos
Uruguay, por Carlos H. Filgueira
Bolivia, por Roberto Laserna R.
Ecuador, por Luis Vedesoto Custode
Perú, por Eduardo Ballón
Colombia, por Fernando Rojas
Venezuela, por Luis Gómez Calcaño
Chile, por Guillermo Campero
Paraguay, por Domingo M. Rivarola
Los movimientos sociales ante la crisis, por Fernando Calderón Gutiérrez.

Introducción

Este libro trata la relación entre prácticas sociales y crisis, pero no sólo en relación con el impacto de ésta en la sociedad, sino muy especialmente en términos de las respuestas que las sociedades sudamericanas han sido capaces de generar, y de sus posibilidades de constituir sujetos fundamentales de nuevos órdenes societales.

Se vive en la región un momento de inflexión. Por una parte, de potencialidades de renovación y transformación de los movimientos sociales seculares, como el movimiento campesino y el movimiento obrero, o los movimientos nacionalistas (en sus diferentes orientaciones industrialistas y modernizantes); por la otra, la emergencia de nuevos movimientos sociales, múltiples y diversos en sus orientaciones y en sus identidades, que se constituyen en verdaderos espacios de reacción y de resistencia a los impactos de la crisis y que en sus diversos gritos y deseos son portadores de nuevos horizontes colectivos.

Cada texto nacional es una reflexión acerca de los cinco o seis movimientos sociales relevantes en cada uno de los diez países estudiados que, aunque no constituyen estudios rigurosamente comparativos, permiten apreciar las tendencias recurrentes y contrastantes de los movimientos sociales en la región, en función de algunos parámetros comunes:

- *el carácter concreto y específico de la crisis en cada formación nacional, teniendo en cuenta, en un extremo, los condicionamientos internacionales y, en el otro, la cotidianeidad de los actores sociales, perspectiva que en alguna medida permite comprender la peculiaridad de la crisis en cada país y el papel que juegan allí los actores y los movimientos sociales en sus mutuas relaciones;*

- *una caracterización de los movimientos sociales estudiados, en términos de sus conflictos y orientaciones, sus identidades, y sus efectos sobre el sistema político y la sociedad global;*
- *finalmente, una reflexión acerca de la prospectiva de los movimientos sociales en cada país en cuanto a sus potencialidades para construir nuevos órdenes sociales, incidir en nuevos modelos de desarrollo y condicionar la emergencia de nuevas utopías.*

El conjunto de los movimientos sociales estudiados plantea en alguna medida el problema de la relación entre participación y representación en el sistema político.

En realidad, si bien el conjunto de los trabajos parte de y se sustenta en estudios empíricos de las múltiples realidades sociales, dado el nivel del desarrollo de la investigación, el presente texto apunta más bien a un conjunto de preguntas e hipótesis sobre las posibilidades y las características de los movimientos sociales en la región.

Creemos que estos textos pueden ser leídos "en clave de la democracia", sobre todo si entendemos que esta cuestión abarca un espectro que va desde las diferenciaciones tradicionales entre democracia real y formal, representativa y directa, democracia social y política, etcétera, hasta los tratamientos y lecturas más contemporáneos sobre la ética en la democracia, el autogobierno de la sociedad, la solidaridad y la reciprocidad de la cultura política, la nueva ciudadanía social, la auto y cogestión económica, la autonomía y la diversidad de identidades y la misma noción de movimientos sociales como productores de democracias emergentes. Hemos organizado este texto tomando como criterio la posición de cada nación y sus movimientos sociales frente al tema de la democracia. En efecto, creemos que las orientaciones de los movimientos sociales en un contexto de crisis, y sus respuestas a la misma, pueden ser inscritas en contextos más abarcativos, como la situación nacional en relación con la democracia, el cierre de los canales democráticos, la transición a la democracia, el pacto social y las demandas de democracia social, etcétera.

En Argentina, Brasil y Uruguay, la problemática de la transición a la democracia y el papel de las prácticas colectivas están fuertemente condicionados por experiencias de resistencia a los regímenes autoritarios, por la emergencia y la recreación de valores ciudadanos, pero sobre todo por vivencias de larga historia de un conjunto de prácticas sociales del pasado: en Argentina y el Brasil, prácticas relacionadas con el populismo, y en el Uruguay, con el pacto social y el "Estado de bienestar".

En este período de transición resalta como aspecto importante el tipo de relación que los diferentes movimientos sociales establecen con el Estado, y el papel que éste asume frente a las presiones y demandas sociales que brotan de la crisis y de la reestructuración de la economía internacional. La pregunta que se plantea en este contexto es acerca de

la capacidad de los movimientos sociales para insistir y adecuar en sus demandas e intereses sin cuestionar la democracia que ellos mismos posibilitaron. En alguna medida, la crisis condiciona una mayor distancia entre los movimientos sociales en sus múltiples versiones, el Estado y los partidos políticos.

En los países andinos resalta la presencia de prácticas sociales dispersas: de orden regional, étnico-cultural, de género, de clase, etcétera, y una serie de tensiones entre orientaciones hacia la modernización y el cambio, la industrialización y la campesinización, hacia la democracia abierta y el orden social. Parecería ser que el problema de la identidad nacional es un referente global en el conjunto de estas prácticas y orientaciones.

En Bolivia, el proceso democrático implicó la explosión de múltiples y diversas protestas colectivas altamente fraccionadas pero fuertemente solidarias, que a la vez acentuaron la situación de ingobernabilidad del Estado. La política en estos tres años democráticos se hacía en las calles. En Ecuador, el proyecto liberal del nuevo régimen parece haber posibilitado la emergencia de protestas sociales y cierta tendencia a la unificación de la acción colectiva, sobre todo entre obreros, pobladores y campesinos. En Perú, la pérdida de centralidad política de varios actores sociales clásicos más el cuestionamiento a la democracia formal por parte de movimientos guerrilleros de fines últimos, debilitaron el orden social, pero posibilitaron la reemergencia de actores políticos con orientaciones modernizantes plurisociales y nacionales.

¿Cómo integrar protesta social con regulación democrática y constitución nacional, en un contexto de crisis económica acelerada? Parecería que ésta es la pregunta que se empeñan en responder los principales componentes sociales del mundo andino, tendencia que de alguna manera parte de orientaciones segmentarias, particularistas y de resistencia de los movimientos sociales.

Colombia y Venezuela son países que tuvieron cierta continuidad democrática sustentada en seculares acuerdos políticos, en los cuales los actores sociales clásicos se subordinaron a los grupos dominantes, participando así de cierto "Estado de bienestar".

Una de las incógnitas abiertas por el impacto de la crisis en estos países gira en torno de las posibilidades de quiebre o de reformulación de los pactos sociopolíticos originales. En el corazón de este proceso se ubicarían la reconversión de actores sociales tradicionales, el movimiento obrero, las nuevas prácticas colectivas —movimiento cooperativo, movimientos de cuadro de vida, comunidades eclesiales de base, etcétera, en Venezuela; movimientos de mujeres, paros cívicos, movimientos indígenas y campesinos, e incluso movimiento guerrillero, en Colombia.

¿Es posible en estos países la constitución de nuevos actores so-

ciales que dentro de marcos democráticos disputen la historicidad a los sectores tradicionalmente dominantes? ¿Qué implicaciones de transformación en el sistema político y en el modelo de desarrollo conllevaría esto?

No obstante algunos rasgos en común, las características particulares, tanto internas como externas, condicionarán en cada uno de estos países el nuevo sistema de actores sociales.

Chile y Paraguay sufren fuertes procesos autoritarios de larga duración que dificultan las posibilidades de desarrollo y expansión de los movimientos sociales. Las restricciones en cuanto a su identidad y a sus posibilidades de protesta parecen limitar la constitución de los actores sociales. Sin embargo, en ambos países, a pesar de sus diferentes historias y culturas, y de las variaciones en la intensidad de la acción social, lo central en la acción colectiva es la presencia de demandas de democratización.

En Chile, doce años de dictadura militar no lograron destruir ni a los actores colectivos reales ni a su cultura y a su imaginario societal. La crisis parece haber fortalecido la necesidad de autonomía de los actores frente al Estado y frente al sistema de representación política, fenómeno que se revela en una proliferación de las acciones colectivas de diferente sentido e intensidad, protagonizadas por viejos y nuevos actores sociales.

En Paraguay, aunque la cultura autoritaria de corte patrimonial tiende a copar los espacios sociales, y si bien el peso de la sociedad civil es aún muy débil, no deja de desarrollarse un conjunto de acciones, tanto urbanas como campesinas, que pretenden llevar adelante —sobre todo en términos defensivos— prácticas y demandas democráticas y de autonomía nacional que se han visto fagocitadas por el impacto de la crisis en el país. La reemergencia democrática en ambos países seguramente estará condicionada en esta etapa a experiencias de este tipo.

Pero la crisis no es sólo el resultado de una estagnación de las actividades productivas o de sus efectos sociales o estatales de dependencia financiera, ni siquiera de los modelos nacionales de desarrollo. La crisis es mucho más comprensiva que esto; tiene que ver, por una parte, con el deterioro creciente de las relaciones económicas internacionales (el efecto de la crisis del petróleo, la liquidez financiera, el déficit fiscal norteamericano primero; más adelante se relaciona con el deterioro del Estado de bienestar en los países centrales y el actual endeudamiento externo) y, por otra parte, con la emergencia de una reestructuración de la economía mundial particularmente a través de la asociación creciente entre revolución tecnológica y capital financiero y, en definitiva, con un nuevo modelo de acumulación en los países centrales (EE.UU./Japón) de fuertes características excluyentes y marginadoras para el resto de las economías nacionales.

Las características de dispersión, fragmentación y reacción particularista de varios de los movimientos sociales estudiados, no impiden que éstos se constituyan en los primeros espacios de resistencia a esta crisis multidireccional y multidimensional. Pero ¿qué posibilidades tienen estas acciones colectivas de cuestionar el nuevo sistema de dominación?, ¿qué distancias existen entre la materialidad de las nuevas fuerzas de dominio mundial y la materialidad de las oposiciones de los movimientos sociales latinoamericanos?

La crisis también significa un momento de decisión, y los movimientos sociales que pretendemos estudiar aquí juegan y jugarán un papel central; tal vez estemos viviendo la emergencia de nuevos actores históricos, demandas y utopías que responden más adecuadamente al nuevo sistema de dominación cultural que empezamos a vivir...

La última parte del texto, que pretende ser una síntesis, intenta comprender teóricamente estas preguntas y aventurar algunas hipótesis al respecto que, al tiempo que reflejan una visión crítica de cierta actitud y perspectiva estructuralista de los análisis predominantes en la región respecto de los movimientos sociales, busca esbozar una tipología de los campos de conflicto de la acción social regional.

Este libro es el resultado de un año de trabajo conjunto y coordinado de 54 investigadores, jóvenes en su mayoría, 10 coordinadores nacionales, y un coordinador general. En efecto, en cada país se realizaron cinco o seis investigaciones que culminaron en monografías sobre los movimientos sociales más relevantes del período actual, bajo la guía y supervisión del coordinador nacional. La finalización de los trabajos de investigación se cerró en todos los casos con un seminario nacional en el que participaron los actores sociales invitados, quienes leyeron, discutieron y criticaron los textos, que fueron revistos y perfeccionados a partir de la discusión y el intercambio teórico de los seminarios.

Puntualmente, los textos que presentamos en este volumen son las síntesis nacionales de los diez coordinadores, sobre la base de las investigaciones realizadas en su país, y de los trabajos teóricos y de investigación.

Por último, el proyecto concluyó con un seminario final realizado en Lima, en la sede de DESCO, que celebraba en esa ocasión su 20º aniversario, organismo al que CLACSO quiere brindar con este libro un especial homenaje. En el seminario de Lima colaboraron, en todas las instancias de discusión, síntesis y elaboración de los documentos finales, invitados con amplia y fecunda trayectoria teórica y de investigación en las ciencias sociales a quienes queremos agradecer su importante contribución; son ellos: Pablo González Casanova, Coordinador General del Programa PAL de las Naciones Unidas (Las Perspectivas de América Latina), en el que se inscribe este proyecto, José Luis Reyna, Sergio Zermeño, Juan Enrique Vega, Orlando Plaza y Sinecio López.

Cabe añadir que la investigación se llevó a cabo en un clima de profunda libertad, amplitud y pluralismo académico, donde, en última instancia, las guías teóricas y metodológicas que proporcionamos en ningún momento pretendieron coartar las perspectivas más disímiles y heterogéneas de los investigadores. También esto se refleja en lo multicolor de los trabajos, así como en las diversas lecturas —de las ya de por sí contrastantes realidades de nuestras sociedades latinoamericanas— que que el texto permite.

Fernando Calderón Gutiérrez

Buenos Aires, agosto de 1985

Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la Argentina*

Elizabeth Jelin **

¿Por dónde introducir el tema de los movimientos sociales en la Argentina contemporánea? ¿Comenzar rescatando las peculiaridades de la sociedad argentina, tan marcada por la existencia de canales corporativos de agregación de intereses y por la apelación al Estado como proveedor de servicios? ¿Privilegiar el alcance y la extensión de la ciudadanía social y sus raíces históricas en el peronismo? Desde esta perspectiva, la Argentina aparece como una sociedad "organizada", con una gran densidad de instituciones para la expresión de demandas y la canalización de intereses. Los períodos dictatoriales y autoritarios podrían ser vistos como momentos de suspensión temporaria de esos vasos de comunicación y de la movilización callejera que los acompaña, para reaparecer, en un vaivén pendular signado por los avatares del régimen político, cuando (¿cíclicamente?) se recrean los espacios de participación democrática. Los movimientos sociales en esta perspectiva, constituyen las vías alternativas, las válvulas de (ex) presión cuando los canales institucionales están ocluídos ¿O son otra cosa?

Leyendo la literatura reciente sobre movimientos sociales y políticos lo que se descubre como orientación general es bien diferente. Surgen de esta literatura tres maneras de encarar la relación entre movimientos sociales y contexto político-social. Una primera es la visión incremental y gradualista, finalista: los movimientos sociales, más o menos

* Trabajo preparado como resumen e introducción al estudio de los movimientos sociales en la Argentina. Participaron en el programa de trabajo: María Sondereguer, sobre derechos humanos; Pablo Vila, sobre el rock nacional y los jóvenes; María del Carmen Feijóo y Mónica Gogna, sobre las mujeres; Héctor Palomino, sobre el movimiento sindical; Daniel García Delgado y Juan Silva, sobre el movimiento fomentista; Inés González, sobre los "vecinazos" y Luis Fara, sobre los asentamientos de San Francisco Solano.

** Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires.

espontáneos, más o menos acotados en la extensión de sus demandas, van agregándose y consolidándose en un "movimiento popular", que logra aglutinarlos y darles dirección política para la transformación social. O sea, un proceso de gradual politización de los movimientos sociales. Una segunda visión toma en cuenta la crisis de las instituciones políticas tradicionales (especialmente los partidos y las representaciones parlamentarias), y descubre en los movimientos sociales las "nuevas formas de hacer política", con actores sociales que se van definiendo de manera novedosa: los jóvenes, los inmigrantes, las mujeres. El tema en cuestión, en este caso, es cómo los nuevos actores se vinculan con las viejas estructuras. En tercer lugar, podemos mencionar una visión más "culturalista" y societal: estos movimientos sociales nuevos no deben ser interpretados en clave política (si por esto se entiende una lucha por el poder) sino como prácticas centradas en la construcción de identidades colectivas en el reconocimiento de espacios de relaciones sociales.

Desde esta tercera perspectiva, lo que se enfatiza es la emergencia de algo nuevo, en formación: nuevos actores, identidades, formas de acción y contenidos. ¿De dónde surge toda esta novedad social? ¿Cuál es su pronóstico en términos de permanencia y/o de dirección de cambios? Es en este contexto, de contrastar, ponderar y sopesar las visiones cíclicas y recurrentes que privilegian los aspectos constantes en el tiempo histórico argentino por un lado, y las que enfatizan el descubrimiento de tendencias recientes y novedosas por el otro, que se inscribe el estudio de los movimientos sociales en la Argentina reciente. Pero antes de referirnos a ellos, se requieren algunas precisiones conceptuales e históricas.

Antecedentes históricos

Por lo general, cuando se habla de un movimiento social se está haciendo referencia a acciones colectivas con alta participación de base, que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. Existe además un supuesto (¿implícito?): el que todo esto constituye (potencialmente) una amenaza al orden social vigente y un germen de una organización social alternativa. ¿Qué y cuánto de todo esto existió, o pudo existir, en la Argentina de los últimos años? ¿Qué papel jugó en el proceso de democratización actual? ¿Sobre qué trasfondo institucional y cultural se fue elaborando?

En primer lugar, hay que considerar cuáles son los sujetos de la escena social, económica y política. Muchas veces se ha dicho que en

comparación con otras realidades latinoamericanas, la sociedad argentina es socialmente homogénea. En un sentido, esto es así: no hay poblaciones indígenas de importancia (fueron exterminadas tempranamente) ni raíces culturales y étnicas fuertes. Los orígenes europeos de la gran mayoría de la población, especialmente la urbana y la de las regiones centrales, unida a una historia de alta movilidad social, dan cuenta de la relativa falta de cortes y clivajes sociales. Estructuralmente, además, existe desde temprano un predominio y penetración del mercado nacional y del espacio político nacional en toda la extensión del territorio. Esto ha llevado a pensar que la homogeneidad socio-cultural y la integración (y centralismo) económico y político son buenos indicadores de la existencia de un espacio y una identidad nacionales claramente constituidos.

Sin embargo, la "cuestión nacional" es relevante aún hoy en día en el país, aunque de manera diferente que en otras realidades latinoamericanas. La construcción de una sociedad y un estado en áreas relativamente vacías, basada en la inmigración ultramarina reciente, tiene como consecuencia la ausencia de una perspectiva histórica popular, la ausencia de una memoria colectiva que podría permitir fortalecer identidades no cuestionadas, con fuertes raíces históricas. Como consecuencia, el sentimiento de falta de arraigo y la posibilidad de la primacía de intereses de corto plazo en la escena política son mayores. En este trasfondo histórico de falta de fuertes anclajes definitorios de identidades culturales, el escenario social y político argentino se fue conformando, a partir de la segunda guerra mundial y el peronismo, con un espectro amplio de actores.

En lo que aquí interesa, el sector popular (llámese pueblo, clase obrera o "cabecita") no es un emergente nuevo, producto de la industrialización y urbanización de las décadas de los sesenta y setenta, sino que ya estaba instalado en la realidad social del país, reconocida su presencia desde hace unas décadas. En esta historia, el peronismo de la post-guerra tuvo un impacto fundamental. A través de la extensión de los derechos sociales, de la operación discursiva de nombrar e interpelar al "pueblo" (a quien se otorgaba al mismo tiempo una identidad "digna") y a la expansión del mercado interno y del consumo de masas, se fue dando la incorporación de estos sectores. Esta incorporación se hizo a través de símbolos de participación (especialmente en el consumo) más que apelando a raíces ancestrales o a identidades históricas.

Sin embargo, esa incorporación no tuvo, como correlato unívoco y directo, la creación de canales institucionales para la agregación y expresión de intereses. De hecho, la organización corporativa de intereses ha sido muy fuerte en la Argentina: la iglesia, los sectores empresarios, los militares, el sindicalismo, son, reconocidamente, los grandes y poderosos actores en la escena política. En un sentido, el ciudadano digno

y con derechos, a menos que se integre y canalice sus demandas a través de los sindicatos —y no siempre lo ha hecho, ya que las demandas sindicales han estado orientadas hacia reclamos salariales más que de derechos o servicios públicos y hubo además una importante franja social de no sindicalizados— lo hace frente al Estado, de manera relativamente directa y poco articulada institucionalmente. O sea, un fuerte peso de la relación líder-masa, basada en el carisma y responsabilidad social de Perón, que queda vacía y sin efecto con los cambios en los regímenes políticos y en el liderazgo del Estado. Esta vinculación directa del ciudadano con los organismos y líderes del Estado se ha manifestado históricamente en otra característica de la sociedad argentina urbana: una alta presencia callejera, masiva, movilizada por y desde la política, aunque no necesariamente en función de demandas estrictamente político-partidarias. Es la Plaza de Mayo como espacio-símbolo de esta relación.

Los años 1972-1975 fueron años de gran presencia de gente en las calles y en la Plaza: era el momento del segundo auge del peronismo, y tanto éste en su conjunto, como sus organizaciones juveniles sindicales, convocaban al pueblo a las manifestaciones, con diversos motivos y consignas. En todos los casos, los rituales y símbolos estaban presentes: bombos, cánticos, banderas, pancartas. Más allá de su motivo explícito de convocatoria, estas manifestaciones reforzaban el contenido simbólico de las solidaridades, las identidades colectivas y el reconocimiento de oponentes.

El régimen militar de 1976 cortó, por la vía de la represión, toda posibilidad de expresión de intereses y demandas populares. No más organizaciones e instituciones legítimas, no más manifestaciones callejeras, no más huelgas y protestas, no más declaraciones o solicitadas en los medios de comunicación de masas. Entonces, ¿qué? La propuesta gubernamental era la búsqueda del orden y la disciplina de la privatización e individuación. cada uno, en el mercado, define su posición, sus prioridades, sus intereses. No más actores colectivos, acciones solidarias, identidades grupales. Durante un tiempo, esto funcionó con bastante éxito y eficacia. Pero después, poco a poco el panorama fue cambiando: primero las madres en la plaza y la posterior ampliación del movimiento de derechos humanos, los jóvenes en los conciertos de rock, tímidas acciones colectivas en barrios obreros y villas, alguna manifestación de mujeres, una que otra protesta que trasciende la fábrica o lugar de trabajo.

¿Son estos los movimientos sociales de los que queremos hablar aquí? ¿Son estos los nuevos actores, con nuevas demandas, propuestas, identidades? ¿O son sólo tímidas manifestaciones colectivas en momentos de represión, destinadas a desaparecer o hibernar durante los tiempos de la democracia institucionalizada?

Movimientos sociales, política y sociedad

En un reciente trabajo, T. Evers[1] plantea algunas ideas importantes para la reflexión sobre los movimientos sociales: que las ciencias sociales latinoamericanas, preocupadas desde siempre por el poder y la voluntad de transformación política, estuvieron mirando la realidad de los movimientos sociales en nuestros países demasiado centradas en cuestiones de poder. Desde la perspectiva de la transformación política, las expresiones colectivas no institucionalizadas de los sectores populares fueron interpretadas como protestas pre-políticas o como embriones de participación popular a ser encauzados por un partido-vanguardia. El reconocimiento de que estas manifestaciones colectivas no pueden ser fácilmente incorporadas a un partido revolucionario llevó a una primera reinterpretación de su sentido político: por un lado, los que se ocuparon de señalar su carácter limitado, reaccionario o reformista; por el otro, los que, perplejos, comenzaron a reconocer la urgencia de mirar más profundamente en el interior de esos movimientos, para poder así descubrir sin preconceptos sus potencialidades y limitaciones, contextuadas históricamente. Es en esta nueva orientación que se empieza a identificar a los movimientos sociales con las "nuevas formas de hacer política". En esto, sin embargo, el tema del poder sigue siendo el ordenador del pensamiento interpretativo. Quizá sea hora de volver a mirar los movimientos sociales desde otra perspectiva: no se trataría solamente de nuevas formas de hacer política, sino de nuevas formas de relaciones y de organización social; lo que se estaría transformando o engendrando es una sociedad, más que una política, nueva.[2]

El significado e interés analítico de los movimientos sociales reside en buscar en ellos evidencias de transformación profunda de la lógica social. Lo que está en cuestión es una nueva forma de hacer política y una nueva forma de sociabilidad. Pero, más profundamente, lo que se intuye es una nueva manera de relacionar lo político y lo social, el mundo público y la vida privada, en la cual las prácticas sociales cotidianas se incluyen junto a, y en directa interacción con, lo ideológico y lo institucional-político. La pregunta que surge de inmediato, imposible de responder a ciencia cierta, es si se trata de una "nueva realidad" o si la vida social siempre fue así, y sólo nosotros, ciegos por el peso de los paradigmas dominantes, no la estábamos viendo.

Lo importante, en este momento del desarrollo de nuestro conocimiento, es reconocer el campo abierto y —por qué no— reflexionar sobre las condiciones sociales de emergencia de estas reinterpretaciones de la vida social y política. No cabe duda de que, por lo menos en el Cono Sur, la ofensiva ideológica y represiva de los regímenes autoritarios tuvo efectos importantes en las redefiniciones de la relación entre lo público y lo privado, así como en la perspectiva interpretativa de las cien-

cias sociales. Citando a Lechner. "Lo que ocurre es un traslado de lo público a lo social. Lo público es reinterpretado *qua* público consumidor... La constitución del sujeto ya no remite al ciudadano, sino al consumidor... El ámbito privado deja de ser una protección de la individualidad y es incorporado a la publicidad del mercado".[3]

Además, al transformar las condiciones de vida y de acción de los mismos investigadores, éstos, al igual que el resto de la población pero con más conciencia crítica, incorporan en su propio pensamiento la cotidianeidad: "El desplazamiento del ámbito público y la trivialidad del discurso político oficial dirigen la atención hacia la vida cotidiana... En la medida en que las rutinas —lo normal y natural— se vuelven problemáticas, aumenta la complejidad del diario vivir... La pérdida de certidumbre y el incremento de las decisiones obligadas se suman generando una experiencia dolorosa."[4]

Por supuesto, estos desarrollos no son exclusivos del trabajo intelectual bajo regímenes autoritarios. La incorporación de la cotidianeidad como área de reflexión e investigación en la cual se condensan y manifiestan de manera compleja las estructuras y mecanismos del funcionamiento político y social; la consideración de la subjetividad de los actores y de los investigadores; el análisis de los significados y sentidos de las acciones y prácticas; todas estas orientaciones que sólo recientemente se han convertido en los ejes de análisis de la política y de las prácticas colectivas deben ser contadas como desarrollos importantes del corpus de las ciencias sociales a nivel internacional. Influye en esto la revisión de nuestro saber que, desde el feminismo, plantea el reconocimiento de la dimensión política de lo personal y la relectura de la familia como ámbito social-político-público.[5]

Este es el espacio intelectual privilegiado en el que encontramos a los movimientos sociales en proceso de formación: en la espontaneidad, no institucionalización, ambigüedad de demandas, sentidos contradictorios y multifacéticos, pero acción y práctica colectivas, más que propuestas ideológicas o aparatos institucionales. Es el investigador quien propone la lectura de estas prácticas como movimiento social, sobre la base de una operación analítica a partir de la interpretación de su inserción en el contexto socio-político y de su desarrollo en el tiempo. O sea, la labor del investigador es la de búsqueda del sentido de una práctica colectiva, sentido que obviamente está anclado en la conceptualización de los propios sujetos, pero que va más allá de la misma.[6]

En resumen, entramos a investigar el tema con algunas orientaciones generales más que con una teoría conformada. Partimos de que los movimientos sociales son objetos construidos por el observador, que no coinciden con la forma empírica de la acción colectiva.[7] Pueden presentar grados diversos de unidad hacia afuera, pero internamente son siempre heterogéneos, con significados, formas de acción y de organización

muy diversos. Tomamos a los movimientos sociales como indicación de la existencia de conflictos sociales entre actores colectivos en los cuales se pone en cuestión (de manera manifiesta o no) el sistema de relaciones sociales: "Los movimientos no son fenómenos residuales del desarrollo o manifestaciones de descontento de las categorías marginales. No son sólo el producto de la crisis, los últimos efectos de una sociedad que muere. Por el contrario, son los signos de aquello que está naciendo".[8]

La transición a la democracia: voces y silencios

La intención de este análisis no es dar una respuesta unitaria a las preguntas sobre el rol de los movimientos sociales en la Argentina contemporánea. Más bien, se trata de observar la realidad social, detectar potencialidades, explorar su significado contextual y analítico, y a partir de estas exploraciones comenzar a esbozar respuestas. La metodología seguida fue inductiva: elegimos áreas de indagación y exploramos qué pasó, sin partir presuponiendo que estábamos eligiendo movimientos sociales ya constituídos. Más bien, la exploración se hizo con la pregunta de si y cómo se fueron constituyendo (o abortaron en el proceso) actores sociopolíticos no tradicionales. Algunas de las áreas en las que íbamos a explorar parecen no requerir una justificación; su propia presencia en la escena histórica contemporánea imponía la necesidad de su análisis. En otras la situación fue opuesta: la tarea de indagación se orientó a seguir el proceso por el cual se podría *o no* crear un nuevo espacio y un nuevo actor. Que haya ocurrido (o no) es el final de la historia todavía no concluida y no una premisa para su inclusión. Finalmente, están los temas ausentes, sea por carencia de información o por criterio de realidad.

Antes de entrar a ver el lado de las inclusiones, vale la pena señalar una limitación-carencia de este trabajo: es todo urbano, fundamentalmente porteño. No hay movimentos o actores rurales, no está el interior del país, no hay regiones. Esto tiene que ver con características de la sociedad argentina y con características del momento histórico que se está analizando.

La Argentina es un país altamente urbanizado, aun cuando la producción agropecuaria constituye el eje de la dinámica económica del país por su rol en el comercio exterior. Más aún, es un país macrocefálico, con una ciudad-aglomerado urbano que aglutina a la tercera parte de la población, pero a la casi totalidad de las decisiones políticas y económicas. Esta centralidad de Buenos Aires se agrava en períodos autoritarios, de concentración del poder y limitación a la actividad política. Todo se discute y resuelve en un pequeño círculo de actores, en el centro del poder.

Lo que pasa en el interior no se ve ni se muestra.[9] Si molesta, puede ser reprimido con más eficacia e impunidad. De hecho, durante la dictadura la trama social anónima y compleja de la gran ciudad constituyó, en alguna medida, una protección para las actividades de oposición. Es bien sabido que hubo más espacios que escaparon al control represor en el área de Buenos Aires que en otras ciudades y regiones del país.

O sea, durante la última década los atisbos de movimientos regionales fueron realmente mínimos, la represión y el miedo más intensos, su visibilidad y presencia en la escena nacional prácticamente nulos. El proceso de democratización se generó a partir de la crisis interna de las fuerzas armadas y éstas, obviamente, tienen presencia en todo el país. Sin embargo, su distribución espacial responde a lógicas internas a las FF.AA. y no a sus relaciones con la sociedad nacional o con las sociedades regionales y provinciales. Esta crisis, acelerada por la derrota en la guerra de Las Malvinas, fue acompañada por presencias parciales y demandas explícitas de actores y fuerzas sociales opositoras (tanto movimientos sociales como los aquí delineados como partidos y otras organizaciones) pero siempre el nivel del cuestionamiento y el escenario de las oposiciones fue de carácter global-nacional. Los contenidos regionales no estaban ni siquiera delineados.[10]

Con la instauración de la democracia y el parlamento, el mapa político del país cambia considerablemente, y se va dando un proceso de desconcentración del poder y de descentralización políticos. Las sociedades provinciales y la dinámica política en cada una de ellas se activan. Por un lado, están las elecciones de gobernadores y autoridades locales; por otro, la presencia parlamentaria del interior, tanto más fuerte que su peso poblacional. Coyunturalmente, la presencia del interior está muy fortalecida por la peculiar composición del senado, donde los representantes de algunos partidos provinciales tiene en sus manos el fiel de la balanza para las votaciones y, por lo tanto, su poder y visibilidad social han crecido enormemente. La crisis interna en el peronismo, así como el peso de las doce provincias con gobernadores peronistas, también manifiestan esta presencia del interior del país.

Hasta ahora, sin embargo, esta revitalización de las sociedades y la política del interior se manifiestan en las instituciones políticas propiamente dichas, más que en movimientos y actores nuevos. Sólo una investigación en profundidad podrá descubrir si estos procesos constituyen los gérmenes de actores sociales nuevos, aun cuando utilicen formas y canales institucionales tradicionales (en desuso por muchos años). Por otro lado, la democracia ha permitido que movimientos y actores que sólo se habían manifestado en Buenos Aires hicieran sentir su presencia en las ciudades de provincia (las recientes manifestaciones en torno de los derechos humanos son notorias en este aspecto).

Como fue dicho, hemos elegido concentrar la atención en algunas

áreas de la vida social argentina y observar qué ha pasado en ellas en los últimos años. La mirada no es ingenua, sin embargo. La selección no es casual, y apunta a encontrar aquellas manifestaciones colectivas que escapan a los canales corporativos y a las instituciones establecidas en el escenario sociopolítico. Apunta a procesos de formación (potenciales al menos) de nuevas demandas y nuevos actores, aun cuando en cada caso se reconozcan y rastreen sus raíces históricas.

a. Los derechos humanos [11]

Quizás el caso más claro de un movimiento social en formación durante los años de la dictadura es el movimiento por los derechos humanos. No es que no existieran antecedentes institucionales. Existían en la Argentina algunas organizaciones especializadas en esta temática desde antes: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue fundada en 1937, respondiendo a la política del Partido Comunista; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se funda a fines de 1975, siendo pluripartidista; el Servicio de Paz y Justicia trabaja en la Argentina desde 1974, con la coordinación general para América Latina de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos se conforma en febrero de 1976 con la participación de religiosos y laicos acompañados por obispos de iglesias católicas y protestantes.

Frente a la represión desatada más abiertamente a partir del golpe militar de marzo de 1976, la actitud es netamente defensiva. La movilización defensiva y reactiva en esa coyuntura surgió al calor de la represión, en la medida en que se iban cometiendo las violaciones, a partir de los vínculos familiares de los afectados. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, se constituyen entre 1976 y 1977 con los familiares de los afectados.

Las primeras acciones parten de las relaciones directas de parentesco, de personas que averiguan y buscan a sus familiares. De este vínculo primario y familístico, en la medida en que se reconocen (inclusive literalmente, al volver a ver las mismas caras en los diversos despachos) es que comienzan la solidaridad y la acción colectiva, totalmente ancladas en las relaciones familiares con las víctimas. El contraste entre una madre o un familiar preguntando por la suerte de su hijo o hermano y el clamor internacional por los derechos humanos en la Argentina es enorme. No hay nada más privado que la experiencia de ser madre, nada más público que el Papa hablando desde los balcones del Vaticano sobre el mismo tema o las presentaciones en cortes de justicia inter-

nacionales. Lo público y lo privado se confunden —o se funden— en el límite de la vida.

Internamente, el movimiento es heterogéneo: sobre la base firme y persistente de los compromisos familiares, se van agregando otros actores, otros personajes, que se acercan desde distintos orígenes y con diversas identidades: desde el humanismo cristiano, simbolizado en el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel; desde los liderazgos políticos de los partidos democráticos; desde la intelectualidad comprometida; desde la población en general. Con este reclutamiento de orígenes heterogéneos, con grados y tipos de compromiso variados, con propuestas ideologicas y experiencias vitales tan dispares, se puede encontrar un núcleo mínimo de unidad, dada por la definición del opositor-enemigo y simbolizada en alguna consigna unificadora en cada momento de la historia. "Aparición con vida" fue la consigna aglutinadora durante el período de auge del movimiento. Esta consigna condensa el sentido de la lucha del movimiento por los derechos humanos, operando sobre dos dimensiones: como memoria de la sociedad, construyendo y recuperando su identidad; como proyecto hacia el futuro, planteando las alternativas de sociedad posible. La crisis de esa consigna en el momento de apertura democrática indica ahora la diversidad y heterogeneidad interna del movimiento.

Lo que surge del seguimiento a lo largo de varios años de estas acciones colectivas es cómo, a partir del ataque frontal a los derechos más elementales —básicamente la vida— se puede generar un movimiento que, aunque heterogéneo socialmente y en cuanto a demandas o consignas, introduce una dimensión ideológica nueva en el debate político (es de esperar, de manera duradera): la consideración ética, que apela a un sistema de valores fundamentales. "La vida, la verdad, la justicia, planteando una exigencia ética de fundamentos humanitarios" se convierten en proyecto: "Los derechos humanos ya no son sólo aquello que está antes y hay que respetar, sino aquello que está después y hay que construir. Se presentan como horizonte, como utopía".[12]

Hasta 1979, el gobierno contaba prácticamente con el silencio de los partidos políticos, los sindicatos y la cúpula de la iglesia. Con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA (setiembre, 1979) y el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel en 1980 se abre un mayor espacio de difusión. Los derechos humanos se constituyen en tema de debate público.

Durante el transcurso de 1981 el tema es paulatinamente asumido por las diversas fuerzas políticas y sociales. Si en los comienzos del régimen la actitud del gobierno de las Fuerzas Armadas había sido de desconocimiento del problema, a partir de 1979 se pretente encontrar algún tipo de legitimación que garantice la imposibilidad de revisión de lo actuado. Sin embargo, en los inicios de 1982 el gobierno aparece

profundamente cuestionado. La movilización popular del 30 de marzo y los avatares de la guerra de las Malvinas dan por tierra con las intenciones de continuismo.

Ya en 1983 el movimiento de derechos humanos logra aglutinar bajo sus banderas a las fuerzas sociales y políticas, ocupando un lugar relevante en la definición de las condiciones de transición a la democracia. Con su lucha contra el terrorismo estatal había ido creando un espacio de participación y movilización popular crecientes, generando una práctica de lucha que define una estrategia no violenta como modo de ruptura ante la violencia del régimen autoritario.

A lo largo de estos años, el movimiento planteó una confrontación política, y así se siguió definiendo y redefiniendo. Aun cuando haya por detrás un planteo ético, es un movimiento orientado hacia el Estado más que hacia la transformación de las relaciones sociales en ámbitos de la vida fuera del control estatal. En este sentido, la respuesta lógica desde el Estado, independientemente de las demandas manifiestas, parecería ser la creación de mecanismos institucionales para su defensa. La Subsecretaría de Derechos Humanos, recientemente creada, aunque no satisfaga las demandas del movimiento, es, de hecho, el tipo de respuesta que el régimen democrático puede dar.

¿Y hacia la sociedad? ¿Y hacia las demás organizaciones? ¿Qué reclama el movimiento? Quizás allí esté el foco de sus limitaciones. Motor fundamental del proceso de democratización formal, ahora el desafío está en su rol ético en el proceso de democratización del conjunto de las relaciones sociales.

b. Los actores barriales

En alguna medida, los movimientos de barrios populares tienen rasgos opuestos a los movimientos de derechos humanos. El contenido de las demandas y reivindicaciones es, manifiestamente, limitado y específico a las condiciones de vida; en la mayoría de los casos, a aspectos limitados de las mismas, los ligados a la infraestructura urbana de cada barrio o área de la ciudad, difícilmente generalizables o traducibles a demandas con contenidos éticos profundos. Además, por lo menos en teoría, el contrincante puede no ser el Estado —inclusive puede no haber otro opositor, como en algunas organizaciones de auto-ayuda o cooperativas.

Las movilizaciones barriales, incluyendo la toma colectiva y organizada de terrenos de los últimos años en la Argentina, se dieron en el contexto de una larga historia de luchas y demandas en las áreas urbanas populares. En esa historia, la organización barrial clave fue la sociedad de fomento, agrupación de vecinos que tiene a su cargo la infraestructura

colectiva, con patrones centrados en la solidaridad/cooperativismo/autoayuda o en la presión sobre los organismos del Estado según el período histórico (del país y de cada barrio) y la coyuntura. El fomentismo, más o menos ligado a corrientes o partidos políticos, más o menos centralizado o disperso, forma ya parte de la tradición urbana de las grandes ciudades, especialmente de Buenos Aires.

Otro rasgo central de la historia urbana argentina es la limitada presencia estatal. Las necesidades habitacionales de los sectores populares han estado desde siempre en manos del núcleo familiar que resuelve su problema de vivienda en el mercado inmobiliario. Los planes de vivienda estatales han sido muy escasos, cubriendo un porcentaje mínimo de la demanda. El Gran Buenos Aires es un inmenso espacio de "lotes propios" (comprados en interminables cuotas) con viviendas en permanente estado de autoconstrucción.[13] El derecho a la "vivienda digna", aunque forma parte de más de una plataforma política, nunca llegó a transformarse en un derecho social reconocido. Existe una bien establecida tradición de acudir a redes de solidaridad familiar, de parentesco y de vecindario,[14] más que una tradición de protestas y reivindicaciones frente al Estado. Además, los servicios básicos de infraestructura colectiva en áreas suburbanas tampoco han estado prioritariamente en manos del Estado; antes bien, formaron parte del paquete de mejoras que los loteadores y especuladores de tierra ofrecían al vender los terrenos. El Estado (en sus diversas instancias: municipal, provincial, nacional) emergía en la escena urbana como aparato legal cuando se planteaban conflictos entre los pobladores y los intereses capitalistas relacionados con el barrio, como por ejemplo luchas por la legalización de la tenencia de terrenos cuando se comprueban estafas. Frente a este panorama histórico, los vecinazos y la invasión organizada de terrenos de Solano pueden ser vistos como experiencias realmente nuevas, que presentan formas de acción sin tradición en la historia urbana argentina.

Tradicionalmente, las invasiones de terrenos habían sido producto de acciones individuales-familiares de ocupación paulatina, a diferencia del estilo de invasiones organizadas colectivamente que se conocen en otros países de América Latina. En Solano hacia fines de 1981, se dio un proceso de invasión de tierras y de organización vecinal novedosos. La invasión comenzó poco a poco, casi espontáneamente. El primer grupo de pobladores, con el espacio físico y político brindado por la parroquia católica de la zona, desarrolló en forma embrionaria lo que luego sería la Comisión Vecinal. Desde allí organizaron y dirigieron el resto de la invasión, que incluyó a 20.000 personas. Desde el comienzo, se evitó la urbanización irregular. La insistencia en construir barrios, sin hacinamiento, fijando el trazado de lotes y calles, se vincula con el intento de evitar la represión y con el deseo de minimizar conflictos entre vecinos, pero también con la idea de la propiedad privada presente y valo-

rada. Los ocupantes se autoidentificaban como víctimas de una situación de injusticia de la que ellos no se sentían responsables. Vivían ésta como la única alternativa habitacional que les quedaba y eran unánimes en su disposición a legalizar la situación mediante el pago del lote ocupado.

En cierto sentido, esta invasión generó un espacio de lucha política en el que se confrontó la ilegalidad con la legitimidad. La legitimidad de los reclamos tuvo su soporte ideológico en el sentimiento compartido de ser sujetos de derechos socialmente sancionados, frente a la injusticia del régimen. La respuesta del régimen fue la represión, con un cerco policial que se mantuvo durante meses. Frente a la amenaza externa, el asentamiento creció en organización, pero además, buscó solidaridad y apoyo en organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones gremiales, etc. Nada fue suficiente; sólo la propia crisis de la dictadura permitió que la correlación de fuerzas variara lo suficiente como para obligar al gobierno a levantar el cerco.

Con la crisis, se abría el proceso de democratización y los partidos volvían a ocupar el centro de la escena política. La organización vecinal, que no sin dificultades decidió mantener su autonomía sin desaprovechar el espacio que las reglas del juego político otorgaban, enfrentó la recreada democracia con dos desafíos principales: el primero, la legalización de la ocupación, resuelto favorablemente con la expropiación de los terrenos por ley provincial. El segundo, sin duda de mayor trascendencia política, se refiere a la posibilidad de institucionalizar las formas de organización autogestionarias que los sectores populares se fueron dando para reclamar por sus derechos en largos años de autoritarismo.[15]

Los "vecinazos" fueron una experiencia diferente: una movilización popular en la primavera de 1982, desatada por una protesta en contra de una cuota adicional de impuestos municipales. En el lema *"impuestos sí, aumentos no"* se resumen los argumentos esgrimidos por las asociaciones vecinales. Los vecinos no piden ser eximidos de la obligación de tributar, pero invocan la falta de razonabilidad en el cobro y en el aumento de tributos que no se correspondían en absoluto con las crecientes carencias urbanas y de prestaciones sociales que padecían . Ligan el conflicto por la cuota adicional con la crítica situación socioeconómica que atravesaba el sector popular y lo expresan en la consigna: *"No pagar, no porque no se quiere sino porque no se puede"* También rechazan la opción del gobierno de eximir del pago a familias de "probada indigencia" argumentando que eso equivale a admitir un "certificado de pobreza" insultante para la población.

Desde las primeras protestas, de unos cientos de manifestantes, el movimiento fue creciendo hasta el "Lanusazo", que convocó a más de 20.000 manifestantes. El conflicto no tenía perspectivas de solucionarse ante la negativa del gobierno a derogar la cuota y su respuesta represiva. Pero frente a la posibilidad de un plan de movilizaciones

conjuntas de todo el Gran Buenos Aires, el gobierno intenta reencauzar el conflicto. Por un lado, la gobernación de la provincia convoca al fomentismo tradicional al diálogo y a la participación en un ente consultivo. Por otra parte, las entidades vecinales comprometen a los partidos políticos a declarar una moratoria apenas asuman las autoridades democráticas. La cuota, origen y reivindicación más explícita del movimiento vecinal, no es derogada pero tampoco abonada por la mayoría de los contribuyentes.

El movimiento vecinal protagonista de estas protestas estaba constituido, en su núcleo, por el fomentismo, pero también incluyó a otras instituciones de la vida local: juntas vecinales, centros de jubilados, de comerciantes, ateneos y bibliotecas populares, comisiones de amas de casa. También fue heterogénea la composición social, convocada a partir de la identidad de vecinos propietarios de viviendas populares en el Gran Buenos Aires.

Por último, el sentir anti-militarista que se expresó en las protestas evidenció que, más allá de las autoridades locales, el destinatario final del repudio popular era la dictadura militar en su totalidad. Abierto impugnador de los proyectos de continuismo político, el movimiento vecinal se convirtió también en un activo portavoz de la demanda democrática de la sociedad argentina. Hacia fines del verano de 1983, la calma había retornado a los barrios y el país se entregaba de lleno a la campaña electoral.[16]

En estos dos casos estudiados, la acción colectiva tiene un significado que va más allá de su sentido reivindicativo inmediato: las demandas y la organización están ancladas en la cotidianeidad, en los comportamientos ligados a las necesidades diarias de mantenimiento y reproducción de la vida doméstica. Visto en perspectiva, estamos frente a una "socialización" —en tanto entrada en la escena social pública— de asuntos que tradicionalmente se discutían y resolvían en el ámbito doméstico/privado. Sin duda, esta experiencia es significativa en cuanto a las nuevas prácticas sociales y a la redefinición (aunque más no sea para los actores sociales involucrados) de cuáles son los temas que *pueden* ser presentados y tratados en la arena pública.

Una pregunta ligeramente diferente es en qué medida este tipo de acciones es de carácter político, o cuál es el significado/uso político de los mismos. Obviamente, los agentes políticos tradicionales, los funcionarios de Estado y de partidos, no se mantuvieron al margen de estas acciones colectivas. Era una población y una temática demasiado atractivas como para dejarlas pasar, además de que las demandas específicas (pago de impuestos, legalización de ocupación de tierras) requerían de acción gubernamental y podían fácilmente convertirse en moneda para transacciones políticas. Pero nuestra pregunta es otra: ¿en qué medida experiencias como éstas transforman o influyen significativamente sobre

partidos y otras organizaciones? ¿En qué medida se convierten ellas mismas en nuevas formas de hacer política?

Al hacer el balance crítico de los movimientos sociales urbanos en Brasil, Rut Cardoso señala que en la literatura sobre el tema habitualmente se presenta a los movimientos populares como instrumentos políticos nuevos, sobre la base de tres características hipotéticas: primero, como movimientos que cuestionan el Estado autoritario, obligando o demandando la democratización; segundo, como manifestación visible y explícita de la presencia social de los oprimidos; tercero, como nuevos actores políticos que, al colocarse junto a partidos y sindicatos, los renuevan, en tanto tienen la capacidad de intervenir autónomamente en la correlación de fuerzas.[17]

Al confrontar las hipótesis con la realidad brasilera, las conclusiones de la autora no son demasiado optimistas. En realidad, el Estado puede flexibilizarse frente a las demandas y responder a ellas, sin que se lleguen a transformar en demandas de cambio político global. En cuanto a la segunda cuestión, su resolución en Brasil parece ser paradójica, ya que la mayor visibilidad de los oprimidos permite al gobierno legitimar como interlocutores válidos a los liderazgos de barrio, relegando a los partidos al olvido. En cuanto a la tercera hipótesis, Cardoso señala que no hay ninguna garantía de que esto suceda, dada la autonomía ideológica de los movimientos sociales. Existen coyunturas en las cuales es posible una acción conjunta de los diversos actores colectivos de orientación democrática, pero cuando se habla de plazos más largos y de organizaciones más estables, el consenso generado por la vivencia común del movimiento social tiende a quebrarse. El "tomar partido" resta fuerzas al movimiento; al mismo tiempo, la labor partidaria se dificulta por la imposibilidad de incorporar reivindicaciones parceladas y a menudo contradictorias de los heterogéneos movimientos barriales.

Antes de volver a la situación argentina, conviene recordar una tendencia estructural de las sociedades capitalistas avanzadas (analizada por Castells);[17 bis] la transformación del rol del Estado como proveedor de servicios colectivos y la "desprivatización" concomitante de estas actividades. Esta nueva realidad constituye el marco para una transformación en el tipo de actividades y demandas que favorecen la solidaridad y la acción colectiva. Estos procesos están en estado embrionario en la Argentina, habiendo sufrido inclusive los efectos del intento del régimen militar de retroceder en el proceso de creciente socialización y de volver a manos privadas gran parte de las actividades colectivas ligadas a la reproducción. En la coyuntura analizada, lo que se dio en realidad fue la confluencia de tendencias contradictorias, entre los intentos políticos de privatización y una creciente presencia del Estado en la vida cotidiana y en el ámbito de la reproducción.

En este complejo escenario urbano, vemos la aparición de nuevas

prácticas, especialmente en lo que se refiere a la organización del consumo colectivo y a las pautas de interacción cotidiana. Los actores son, en alguna medida, los mismos de antes, pero con demandas diferentes. Esto plantea un desafío a las organizaciones más tradicionales a cargo de las demandas de servicios (las sociedades de fomento): ¿podrán adquirir la capacidad política que les permita llevar a cabo no sólo una actividad circunscrita a la conquista de la infraestructura urbana, sino al conjunto de la problemática local? Esto supone integrar demandas de diversos sectores afectados por la crisis, y promover la transformación institucional del municipio, constituyéndose en el centro de referencia de otras organizaciones territoriales. Esta ampliación de su accionar puede llevar a presionar no sólo por reformas institucionales que hacen al movimiento, sino más indirectamente por la intervención en procesos decisionales que afectan a la comunidad política más directamente.[18]

c. Los jóvenes y el rock nacional

Al formular los lineamientos de este proyecto y definir los actores y movimientos a incluir, dirigimos la atención hacia categorías sociales subordinadas y poco reconocidas en la arena pública, fundamentalmente las mujeres y los jóvenes. Conviene hacer una aclaración de entrada. Hay actores de edad joven en numerosos movimientos e instituciones. Los estudios centrados en tiempos biográficos y en el ciclo de vida indican que los adultos jóvenes tienden a estar presentes en actividades públicas, especialmente las más participativas y menos formalizadas. Estudiarlos como activistas o como militantes de diversas causas, sin embargo, no es nuestro propósito aquí. Importan los jóvenes en la medida en que se convierten en un actor social reconocido, diferenciado, nombrado y auto-identificado como tal. O sea, estudiamos los movimientos y prácticas colectivas en las cuales la "juventud" constituye un elemento identificatorio fundamental del sujeto.

Desde una perspectiva histórica hay dos candidatos posibles de los sectores juveniles, con presencia visible y reconocida en la escena pública: el movimiento estudiantil y las juventudes políticas (articulados de diferentes maneras y grados con los partidos políticos). De hecho, ambas categorías han tenido una larga historia de actuación en la vida nacional.

El movimiento estudiantil universitario tiene sus raíces en la reforma universitaria de 1918. En aquel momento, las demandas estaban centradas en la democratización de la universidad: "queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad". Y las hacían desde la propia identidad juvenil: "...la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud..." (*Manifiesto liminar*, citado por Clementi).[19]

Desde entonces, la historia del movimiento estudiantil ha sido parte indisoluble de la historia política del país. La universidad fue siguiendo los avatares de los complejos e inestables procesos políticos nacionales, de tal modo que resulta difícil descubrir en su desarrollo la presencia de focos que reflejaran "nuevas formas de hacer política" o un cuestionamiento y replanteo de las relaciones sociales. Durante la reciente dictadura militar, además, la represión afectó de manera extrema a las universidades, provocando un congelamiento y desmovilización sin precedentes. Resulta fácil de entender, entonces, que el movimiento estudiantil estuviera ausente, en silencio. Sólo comenzó a reaparecer y a reorganizarse (siguiendo las líneas político-partidarias vigentes en este momento en el país) a partir del proceso de normalización de las universidades nacionales.

Por su parte, los partidos políticos argentinos han apelado desde siempre a los jóvenes. Como votantes, como activistas entusiastas, como cuadros, los jóvenes han estado presentes en las organizaciones políticas, aunque escasamente en las posiciones dirigentes. Un fenómeno más reciente es la organización de la juventud como cuerpo separado del resto de la estructura partidaria. Estas estructuras se expandieron en la década del sesenta, aunque hubo importantes experiencias anteriores. Diversas "juventudes" —comunista, radical, de grupos de izquierda y especialmente la juventud peronista— aparecieron en la escena política y fueron cobrando peso propio (en algunos casos, ligadas a movimientos de lucha armada). Todavía está sin hacer la investigación que permita rastrear en qué conyuntura política, o siguiendo qué procesos, los jóvenes comenzaron a tener identidad y presencia propia en la política. Se trata, sin duda, de un proceso complejo, que incluye formas preferidas de participación (más movilizantes, más "ruidosas"), la aceptación por parte de los líderes de los partidos de estas estructuras juveniles y, finalmente, el ir ganando peso y poder real.[20]

La expansión del movimiento político juvenil durante la década del sesenta fue parte del proceso de cambio en el papel de la juventud, tanto a nivel internacional como en el plano nacional. En el primero, el consumo de masas se fue orientando cada vez más hacia y por el gusto juvenil (la ropa, los deportes, la música, etc.); también hubo importantes manifestaciones culturales y políticas (los Beatles primero, el mayo francés y Woodstock, la guerra de Vietnam y el auge del movimiento hippie, para nombrar sólo algunos ejemplos) en la misma dirección. En la Argentina, fue la época del Cordobazo, el comienzo de la lucha armada, los primeros conjuntos de rock nacional (así como la expansión del consumo de blue jeans), todos ellos signos de la emergencia cultural y política de la juventud como sujeto activo y como destinatario de mensajes especialmente dirigidos a ella.

Volviendo a las juventudes políticas, después de este auge de la

movilización, que duró hasta entrada la década del setenta, su historia reciente fue paralela a la del movimiento estudiantil. La represión dura primero, la movilización de las juventudes de partidos como parte de la activación en la transición a la democracia, más recientemente. En la coyuntura actual, está creciendo su presencia dentro de cada partido; asimismo, en el escenario socio-político más amplio, los jóvenes están ocupando un espacio cada vez más visible (por ejemplo, en las manifestaciones callejeras de protesta por los acuerdos con el FMI y la presión de la deuda externa).

¿Qué pasó con los jóvenes durante la dictadura, cuando ni el movimiento estudiantil ni los partidos pudieron canalizar su activismo? ¿Se refugiaron en el individualismo de mercado que proponía el régimen o lograron alguna vía de expresión más colectiva? Recordemos que la represión y la muerte fueron fenómenos que atacaron de manera violenta y directa fundamentalmente a los jóvenes. La mayoría de los desaparecidos lo eran. También, que el ser joven se convirtió en una señal de peligro para el régimen, poniendo a la persona en el papel de sospechoso. A pesar de esta situación y del miedo que indudablemente se generaba, hubo un campo en el que se manifestó el espíritu juvenil: fue en la música, en el llamado "rock nacional".

La vitalidad del rock nacional durante la dictadura (una vitalidad que no fue constante, sino que tuvo altibajos y fue evolucionando a lo largo del período) puede entenderse a partir del vacío generado por el cierre de los canales de participación, por la imposibilidad de acción colectiva y, además, por lo poco atractivo de las propuestas políticas que los partidos hicieron a los jóvenes.

El éxito del rock nacional se manifestó en la masiva asistencia a recitales (que llegaron a contar con 60.000 personas), en la proliferación de revistas dirigidas a la juventud y, en el plano más microsocial, en los grupos de amigos cuya actividad principal era escuchar. Pero la música no era sólo eso: era una vía para reconocerse y solidarizarse con el otro, en un proceso de construcción de una identidad colectiva y un "sentido de la vida"; era un canal de expresión de oposición al régimen (el "se va a acabar..." en los recitales, la represión y presencia policial); era también —por lo menos para importantes sectores— un proceso de construcción ideológico-simbólico de valores nuevos, modelos de conducta, símbolos: "El hecho de haber sido socializados en sus ideales y de haber encontrado en su interior valores, modelos de conducta, símbolos, etc., válidos y pertinentes para su propia vida y para su desarrollo personal, hacen que estos jóvenes sean portadores de una visión del mundo que les confiere una identidad muy particular".[21]

En resumen, en el movimiento de rock juvenil encontramos la simbiosis de los varios elementos que hacen a la constitución de estas nuevas formas de expresión que venimos explorando: lo político y lo estético

fundidos en una misma actividad; lo expresivo-simbólico ligado a la construcción de identidades y de valores colectivos; el refugio de valores universales (paz, amor, justicia, solidaridad, etc.) en un movimiento cultural que no tiene, ni pretende tener, impacto o efecto directo en el plano político pero que llegó a tener una fuerte presencia contestataria. Lo que detectamos como fuerza democratizante (y no todo el movimiento lo tiene; recordemos la heterogeneidad de las propuestas y la presencia de los "heavy") se refiere a las relaciones sociales cotidianas, más que a los grandes acontecimientos políticos nacionales.

Todavía está por verse en qué medida, al activarse la sociedad política, queda vigente esta propuesta y los espacios que fue abriendo.

d. Las mujeres

Al igual que en el caso de los jóvenes, interesa estudiar a las mujeres no como activistas y militantes de movimientos e instituciones, sino en tanto su participación va dando a su presencia una identidad propia. Con una condición adicional: no se trata solamente de una identidad *qua* mujeres, sino de una identidad crítica, cuestionadora del orden vigente, transformadora. En la historia de los países occidentales se pueden encontrar numerosas organizaciones y movimientos de mujeres. La gran mayoría (o la gran mayoría de los que se registran en la memoria oficial) fueron movimientos conservadores, que apelaban a la beneficiencia y la caridad, basados en la identificación de las mujeres con la tradición, con el *statu quo*, con la transmisión de la herencia cultural y de los valores morales, a menudo ligados a la iglesia. Sin embargo, no faltan ejemplos de otro tipo. En nuestro país, las primeras huelgas fabriles y los grupos de mujeres en el anarquismo y en el socialismo de principios de siglo, el movimiento sufragista después. Se trata de una historia heroica, desde el campo de los sectores sociales subordinados, buscando la extensión de derechos ciudadanos a las mujeres, mayor justicia, más espacios de participación.[22]

Las circunstancias en que se dieron los movimientos de mujeres en las décadas del setenta y el ochenta fueron y son diferentes. A nivel internacional, surge el feminismo como movimiento social masivo, que lleva a las mujeres a convertirse en sujetos activos, luchando por el reconocimiento social de su situación subordinada y la legitimación de sus demandas. También es el momento de la proliferación de convenciones y reuniones internacionales sobre el tema, dentro de un marco de mayor reflexión y comprensión teórica de la problemática y mejores estudios empíricos de la realidad social en diversos países.[22 bis]

A nivel nacional, el retraso es enorme, especialmente en lo que hace al reconocimiento y legitimación del problema desde el Estado, así como

a la implementación de acciones y programas concretos. Fueron especialmente las mujeres de los sectores populares quienes se habrían de convertir doblemente en víctimas del proceso económico-social desatado por la dictadura: vía su condición de responsables del rol reproductivo y vía su pertenencia al sector más desfavorecido en términos de clase. Además de las medidas generales, el gobierno tomó medidas puntuales que agravaban la situación de las mujeres, como la anulación de la legislación que estipulaba la igualdad de derechos entre esposas y concubinas y el mantenimiento de las políticas natalistas implementadas por el anterior gobierno constitucional. En otro orden de cosas, la propaganda a través de los medios de comunicación de masas propiciaba un "retorno a la familia" que reforzaba la posición subordinada de la mujer, a quien se interpelaba como madre y como esposa. Ella debía constituirse en custodio del orden familiar y más aún en policía, como lo mostraban las propagandas que instaban a los padres, sin ningún pudor, a ejercer sobre los jóvenes una clara tarea de vigilancia. Pese a la retórica oficial dirigida a sacralizar el papel de la mujer en el hogar, sería ingenuo suponer que esto liberó a las mujeres de constituirse en víctimas de la represión. Por el contrario, para ellas se inventaron métodos aun más perversos que las castigaban cruzando simultáneamente sus roles en el mundo público con el mundo privado (al ser castigadas como estudiantes, activistas, delegadas, pero también como mujeres y madres). Esto se ve claramente en la proporción de mujeres en las listas de detenidos-desaparecidos, que alcanzaba al 30 %.[23]

¿Cuál fue la reacción de las mujeres frente a esta situación? Visto retrospectivamente, parecería que lo que permitió comenzar a pensar en una tímida resistencia fue el mismo proyecto de la Junta Militar de ejercer su papel salvacionista sobre el país sin límite temporal. "El proceso no tiene plazos sino objetivos" fue la fórmula en que se acuñó esa pretensión de permanencia. Si esta propuesta iba a ser así, monolítica y eterna, entonces seguramente había que resistirla de la misma manera. Así, alrededor de los años 79-80 se produjo una revitalización de los grupos feministas, después de la parálisis del 76; núcleos nuevos, en algunos casos, grupos que en silencio habían intentado sortear la represión, en otros. Pero todas estas respuestas de las mujeres habían sido precedidas por otra novedosa y revulsiva, ética, como fue la presencia de las Madres ocupando el lugar físico de la política: la Plaza de Mayo. Irónicamente, la idea de que los niños son temas de mujeres —como lo señala la fórmula conservadora de las 3 K— tenía aquí una salida impensada. Las Madres comienzan a reunirse en la Plaza de Mayo en abril del año 1977 organizándose desde el dolor y la rebeldía para no soportar pasivamente la desaparición de sus hijos. La aparición y posterior consolidación, primero de las Madres y después de las Abuelas, como una fuerza social constituye una importante mutación del mapa político nacional. Insultadas por la prensa, incomprendidas por algunos sectores, respetadas en silencio y con temor por otros, las Madres de Plaza de Mayo se fueron convirtiendo en el símbolo más claro de que la oposición a la dictadura no sólo era posible sino que era además una cuestión ética.

Pero estos procesos que unificaron a las mujeres girando en buena medida sobre su condición reproductiva no podrían entenderse sin hacer una referencia al enorme shock que significó el episodio de la Guerra de las Malvinas. Sea cual sea la lectura que hagamos de cuáles son los problemas propios de la mujer, lo cierto es que este episodio —como el de los 30.000 desaparecidos— tocó un punto crucial en la constitución de lo femenino: el tema de la generación y el cuidado de la vida humana. Siguiendo las huellas de las Madres, las mujeres se rebelaron contra el servicio militar obligatorio, institución intocable en sus casi ochenta años de vida, planteándose la necesidad de su revisión. Posteriormente, se unieron también otros grupos de padres y de objetores de conciencia pero por primera vez fueron las mujeres en la Argentina contemporánea las que sacudieron la fatalidad y alzaron voces públicas dispuestas a cuestionarlo. En este contexto de rápido cambio del año 1982, las feministas se lanzaban a una importante campaña para lograr la patria potestad compartida, abriéndose paulatinamente al tema del divorcio, los derechos reproductivos de las mujeres, la demanda de educación sexual y la igualdad hereditaria de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, entre otros.

También desde la arena reproductiva aparecieron las primeras protestas de diversos grupos de amas de casa —unos nacidos durante la dictadura, otros reaparecidos de su latencia— que empezaban a revelarse contra el alza del costo de vida, ensayando novedosas estrategias de resistencia.[24]

A pesar de la diversidad de objetivos, de la variedad de los orígenes, de la heterogeneidad de las participantes, estos movimientos y acciones colectivas comparten ciertas características que permiten focalizar la atención sobre la especificidad de la participación y la organización de mujeres. En primer lugar, ser madres y ser ama de casa constituyen roles tradicionales de las mujeres, que resultan de la división sexual del trabajo prevaleciente: la mujer a cargo del ámbito privado de la familia y la reproducción. A partir de esa inserción tradicional, las mujeres se movilizaron públicamente, con demandas dirigidas al Estado, con protestas orientadas a cuestionar el orden de las cosas vigente y con propuestas de transformación de los patrones de relaciones sociales y políticas. Son casos donde lo privado y lo personal se transforman en el eje de actuaciones y enfrentamientos públicos, no por una elaboración ideológica abstracta, sino a partir de los afectos y de las necesidades de las personas particulares con quienes las mujeres se relacionan (no cualquier hijo sino *su* hijo, no necesidades de barrio sino de *su* casa y *su* familia).

En segundo lugar, en algún sentido se trata de acciones y movi-

mientos paradigmáticos, que surgen "naturalmente" de la vida cotidiana. La vida y la identidad de las mujeres se constituye en lo cotidiano, lo habitual, lo trivial y menudo, lo invisible. Poco (o para pocas) cuenta el mundo de los grandes acontecimientos. Pero en esa realidad cotidiana, las mujeres viven las manifestaciones y las derivaciones de los grandes dramas históricos. Al mismo tiempo, esa cotidianeidad se transforma y puede llegar a influir sobre la vida pública social. Por la posición social que ocupan, entonces, las mujeres pueden llegar a ser los sujetos sociales claves para la conformación de movimientos sociales cuestionadores de las formas tradicionales de hacer política, de la relación entre política y vida social, de las relaciones sociales mismas. Que esto ocurra, y cómo, depende de condiciones históricas y del mismo desarrollo de las fuerzas sociales.

En nuestro caso, la represión de la dictadura, al golpear con tanta fuerza la organización de la cotidianeidad y al intentar replantear los parámetros ideológicos y prácticos de la distinción entre lo privado y lo público, provocó la desubicación social de las mujeres, una crisis en las formas y contenidos de su cotidianeidad. Estas, aunque en apariencia sólo buscaban reestablecer un equilibrio, estaban planteando los gérmenes de profundas transformaciones que se manifiestan en tendencias democratizantes, en una reversión de las prioridades de la política (la inclusión del afecto y del deseo, por ejemplo), en principios éticos no negociables. Aunque parten de la cotidianeidad, estas acciones de hecho destruyen lo conocido y esperado. La realización de su potencialidad queda, por supuesto, para el futuro.

e. El movimiento sindical y la democracia

¿En qué sentido puede ser incluido el movimiento sindical en un proyecto sobre movimientos sociales en la Argentina? Es bien sabido que existe en el país una poderosa organización corporativa de los trabajadores que, con antecedentes históricos importantes, fue ampliada considerablemente durante el primer peronismo. A lo largo de los últimos cuarenta años, la situación relativa del sindicalismo en el escenario político y en la distribución del poder fue variando considerablemente; sin embargo, nunca dejó de ser un actor significativo. Más aún, ha tenido siempre un espacio reconocido y considerado por los demás actores, fueran aliados u opositores.

La estructura sindical que se desarrolló a lo largo de estas décadas está formalmente centrada en organizar y canalizar los intereses y demandas sectoriales de los trabajadores (fundamentalmente de los asalariados). La normatividad legal regula las formas organizativas (tipos de sindicatos, posiciones y formas de acceso a las mismas, áreas de incumbencia, reclu-

tamiento de miembros, etc.), las funciones específicas de los sindicatos (negociación colectiva, regulación, arbitraje y conciliación en situaciones de conflicto, etc.) y otras actividades y funciones a cargo de los sindicatos (obras sociales, principalmente). Pero el sindicalismo ha ido más allá de estas funciones y de estas estructuras establecidas y legisladas.

Por un lado, ha sido llamado (o ha impulsado) a participar directamente en la formulación y control de la política económica (Pacto Social de 1973, negociación en curso sobre la concertación social); por otro, ha cumplido una función política mucho más amplia que la que se desprende de la lectura de las leyes. En efecto, el sindicalismo ha sido parte ("columna vertebral", al decir de algunos) del movimiento peronista, participando activamente y reflejando en su interior las peripecias, los logros y la conflictualidad del peronismo en diversas coyunturas.

No es éste el lugar para hacer la historia del sindicalismo argentino, de su relación con el Estado, de su dinámica interna y su relación con la base obrera. La pregunta que guía este trabajo parte de otro ángulo de mira: reconociendo el lugar institucional del sindicalismo y la lucha que éste tuvo que dar para defender y reconquistar su espacio y su poder frente a la dictadura, reconociendo también su papel (con todas las contradicciones, conflictos internos y alianzas más o menos explícitas) en la demanda social de democratización ¿qué más está ocurriendo? ¿Estamos frente a una lucha por restablecer un orden institucional perdido (con las adaptaciones coyunturales necesarias) o hay también en las filas obreras la emergencia de nuevas propuestas? Si las hay ¿qué cuestionan?, ¿quiénes son sus portavoces?, ¿de dónde surgen?

El contexto socioeconómico informa de una serie de transformaciones en el mercado de trabajo que afectaron profundamente la composición de los asalariados. La caída del empleo industrial, la terciarización de las ocupaciones y la expansión del trabajo independiente, se sumaron en años recientes a la disminución del rol estratégico de ciertas capas de trabajadores que, como los obreros de las grandes plantas industriales y los obreros y empleados de empresas públicas, habían constituido un eje central de desarrollo de la clase obrera desde la década del cincuenta. El efecto de estos cambios sobre la composición de los asalariados se traduce como un aumento de su heterogeneidad y una atomización o dispersión en sus condiciones de trabajo, que conspiran contra sus posibilidades de organización y de acción colectiva. Estos cambios se manifestaron agudamente a partir del período inaugurado por la dictadura militar en 1976, continuando en algunos casos tendencias preexistentes de la estructura ocupacional.

La crisis del régimen militar luego de la derrota de las Malvinas, y el triunfo de Alfonsín en las elecciones de octubre de 1983, constituyeron dos elementos decisivos en el terreno político que posibilitaron

el surgimiento del movimiento de democratización sindical. Las movilizaciones por salarios, que se multiplicaron en la segunda mitad de 1982, constituyeron la ocasión para que en varios gremios los trabajadores desplazaran conducciones percibidas por ellos como aliadas al régimen militar: esas conducciones habían antepuesto su necesidad de perdurar bajo el régimen a la expresión de las demandas de los trabajadores. De allí que la función más tradicional de los sindicatos, la reivindicación económica, se constituyera en terreno de confrontación política en términos de la redefinición de la relación de los dirigentes con sus bases.

En ese nuevo contexto, en varios sindicatos diversas agrupaciones, militantes y activistas sindicales tuvieron la oportunidad de competir electoralmente con la viejas conducciones, varias de ellas desprestigiadas por su connivencia con el régimen militar. De esas agrupaciones, de sus consignas y tradiciones, pueden establecerse dos grandes campos. Uno de ellos, el que llamamos sindicalismo de base, constituye un conglomerado de líneas y tendencias cuyo rasgo común es la reivindicación de tradiciones provenientes de las alternativas a la burocracia sindical peronista de fines de los '60 y principios de los '70. Despojadas, en general, del "revolucionarismo" de aquellos años, se plantean hoy un sindicalismo "independiente de los patrones, de los partidos y del Estado", enfatizando la democratización de los sindicatos como eje de sus propuestas. El otro campo es el del sindicalismo peronista, dividido hoy en varias líneas y corrientes de opinión, algunas de las cuales se muestran en posiciones cercanas a los sindicalistas de base, enfatizando la democratización como eje de acción. Otras tendencias del sindicalismo peronista, en cambio, se muestran proclives a sostener la vieja ortodoxia de una CGT "monolíticamente organizada" y vinculada al partido justicialista.

Cambios en la composición social, divisiones organizativas y fracaso electoral de la orientación que durante años predominó en el movimiento obrero, constituyen factores de cambio en las orientaciones de éste, aun cuando resulte difícil actualmente estimar la dirección de las orientaciones futuras. Precisamente el movimiento de democratización sindical supone la coexistencia de corrientes y tendencias políticas diferentes y el pluralismo en la conducción del movimiento obrero. Su desarrollo supondría una atenuación de la tradicional hegemonía peronista en los sindicatos. Lo paradojal de esta situación es que pese a lo que se ha dado en llamar "desmovilización estructural" de la clase obrera, ésta encuentra en su seno, y a favor de cierto contexto, posibilidades de cambio y transformación de sus prácticas —en el sentido de la redefinición de la relación de los dirigentes con sus bases, de la democratización sindical— que no llegara a consolidar en otras ocasiones tal vez más favorables en términos económicos y sociales.[25]

Los cambios recientes en el sindicalismo abren numerosas preguntas e interrogantes, sin duda difíciles de responder. Fundamentalmente es

poco lo que sabemos —excepto en lo que se refleja en la participación electoral— sobre la relación entre el liderazgo nuevo y viejo y la base (achicada, acosada por la crisis económica, la inflación y la recesión). Tampoco sabemos nada —sólo podemos señalar la presencia, novedosa, sorprendente— de vínculos entre las organizaciones sindicales y otros movimientos sociales, especialmente los derechos humanos y las mujeres.

A modo de conclusión

Un tema general se refiere a los movimientos sociales en la crisis. Existe una dificultad básica con la noción de crisis: se trata de una palabra aplicable a una gran variedad de fenómenos, con múltiples referentes y múltiples significados. De ahí la necesidad, aunque más no sea para ordenar el discurso, de identificar en qué sentido se la utiliza en el análisis. Para la Argentina, nuestro referente básico es el sistema político: una crisis de legitimidad, simbolizada y corporizada en el régimen dictatorial y en el proceso de transición a la democracia, que podría ser concebido como la "salida de la crisis". No es que la Argentina escape a los otros sentidos y significados de la noción de crisis: la recesión económica, la inflación, la situación del país en el contexto internacional, la crisis de valores. Elegimos trabajar sobre un marco más inmediato y vivido que —pensamos— incluye la manifestación y el impacto de los otros niveles en el plano de las relaciones sociales.

Ahora bien, privilegiar el proceso de transición a la democracia hace centrar la atención en la periodización del proceso político. Sin embargo, esto no significa privilegiar el análisis de lo político-institucional. Por un lado, la situación internacional es un parámetro fundamental para interpretar el período: recordemos la guerra de las Malvinas y su impacto dentro del país en la desarticulación del poder militar y en la apertura de espacios de debate. Por otro lado, el análisis de la democratización se extiende más allá de los cambios político-formales. Nuestra preocupación básica está en la democratización de la vida social y económica. En este contexto, al encarar el estudio de los movimientos sociales estamos apuntando a las transformaciones y reformulaciones en las representaciones del sentido común y en las prácticas sociales, especialmente en lo que se refiere a la relación entre vida cotidiana y no cotidiana, y entre lo privado y lo público. El cuestionamiento de las prácticas sociales, además, está cargado de un sentido ético: la búsqueda de una nueva moralidad y de la superación de las antinomias entre lo político y la moral, entre las relaciones de poder autoritario y una perspectiva humanizante y democratizadora.

En síntesis, la dictadura, que llevó a la desactivación forzada de la vida pública, a la represión y al miedo, provocó primero la parálisis y la

inacción. Poco a poco, formas de resistencia cultural, sordas, ocultas, fueron apareciendo. Los espacios de resistencia fueron de muy distinto carácter, todos ellos marcados por la imposibilidad de plantear abiertamente y de manera masiva la oposición política.[26]

Se podría decir que el interés y la energía que la población argentina había dedicado históricamente a la discusión y a la participación politizada se fue canalizando y transformando en otra cosa. En primer lugar, mencionamos y estudiamos los recitales de rock. Estos recitales fueron definidos y percibidos como acontecimientos recreativo-culturales, con un sentido de identidad juvenil opositora, de ámbito de reconocimiento y solidaridad centrado en compartir un objeto cultural, sin que los actores lo identificaran como ámbito político. Por ausencia de canales y actividades alternativas, estos recitales llegaron a tener un eco importante en la sociedad argentina, poniendo al descubierto una capacidad contestataria que existía como potencialidad en muchas otras actividades y objetos culturales compartidos.

Alternativamente, la energía pudo dirigirse a instituciones existentes que por su definición institucional no-política, no fueron tan abierta y directamente reprimidas. Es el caso de las sociedades de fomento. Durante la dictadura la única presencia institucional en los barrios era esta institución, quizás acompañada, tímidamente y dependiendo de la orientación ideológica de cada obispado, por algunas parroquias y comunidades de base. Las demandas e intereses canalizados por las sociedades de fomento son, para usar nuevamente una palabra muy cargada, "genuinas". La provisión de servicios habitacionales había sufrido un deterioro muy grande. Nuevos barrios y villas se habían ido formando como resultado directo de las políticas del régimen, de modo que la solidaridad barrial (tan frecuente e importante en los primeros estadios de instalación de barrios) tuvo espacio para desarrollarse. Que toda esta sorda acción colectiva —al mismo tiempo solidaria y conflictiva— terminara unos años después en los vecinazos y en acciones como las que llevaron al asentamiento de Solano, indican la vitalidad potencial de la movilización de base residencial.

Una tercera forma de cultura de la resistencia fue mucho más difícil de conocer y detectar durante el Proceso. La expresión "cultura de catacumbas", utilizada para referirse a la proliferación de grupos de estudio y cursos privados como mecanismos alternativos frente a la carencia educativa con espíritu crítico, puede ser extendido a otras actividades: un grupo de estudio puede reunirse en casa de un instructor privado para hacer un taller literario o estudiar los últimos textos de Lacan. También puede un grupo de jóvenes compartir los discos y cassettes y encontrarse sistemáticamente a escuchar música, o un grupo de mujeres preocuparse por la formas de opresión y por su identidad. El desarrollo posterior de estas experiencias "privadas" es incierto; depende de la forma en

que se inserten en el contexto institucional más amplio en el momento de apertura.

Notas y referencias bibliográficas

[1] Evers, Tilman, *"Identidade: a face oculta dos novos movimientos sociais", en Novos Estudos, Vol. 2. núm. 4, 1984, págs. 11-23.*

[2] En esto, la lógica de Evers es impecable: si detectamos movimientos sociales nuevos en sociedades con regímenes políticos de lo más diversos, ¿cómo atribuirles una causalidad y una finalidad política? Quizás su emergencia esté ligada, dice el autor, a la lógica de la organización social capitalista. Pero (y aquí escapo yo del argumento de Evers) ¿no se encuentran movimientos similares en sociedades no capitalistas? La emergencia de movimientos sociales, ¿no tendrá que ver con el industrialismo y la complejidad de los procesos de diferenciación y especialización institucionales, que en un momento requieren una reconstrucción globalizante de identidades segmentadas?

[3] Lechner, Norbert, "¿Qué significa hacer política?", en N. Lechner (ed.), *¿Qué significa hacer política?,* DESCO, Lima, 1982, págs. 21 a 23.

[4] Lechner, Norbert, ob. cit., pág. 24.

[5] Jelin, Elizabeth, *Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada,* Estudios CEDES, 1983.

[6] La relación entre la concepción e interpretación de la acción por parte de los propios sujetos y por parte del observador es una relación problemática en la historia de las ciencias sociales. Desde el establecimiento de parámetros de verdad externos que permiten hablar de "conciencia verdadera" o "falsa conciencia", hasta la identificación observador-actor que acepta acríticamente todo lo que el actor hace y dice como verdad (ambos extremos imposibilitan el análisis, convirtiendo a la investigación en declaración de fe), éste ha sido un tema recurrente sin solución única.

[7] Melucci, Alberto, *L'invenzione del presente: Movimenti, identità, bisogni individuali,* Il Mulino, Bologna, 1982.

[8] Melucci, Alberto, ob. cit., pág. 8.

[9] La imagen internacional que se intentó dar durante el mundial de fútbol de 1978 es un claro ejemplo de esta concepción del país.

[10] En términos de defensa de intereses económicos, hay algunos casos en que lo sectorial se alinea con lo regional, como en el vino o el azúcar, pero en la Argentina se discute en términos sectoriales más que regionales.

[11] Los apartados siguientes se basan en los trabajos elaborados especialmente para el proyecto de la Universidad de Naciones Unidas. Estos párrafos intentan resumir los puntos fundamentales de cada monografía y ofrecer un principio de interpretación contextualizada de cada movimiento social.

[12] Sondereguer, María, *El movimiento de derechos humanos en Argentina,* trab. mimeografiado, Buenos Aires, 1985.

[13] Feijóo, María del Carmen, *Buscando un techo: familia y vivienda popular,* Estudios CEDES, 1983, y Yujnovsky, Oscar, "Revisión histórica de la política de vivienda en la Argentina desde 1880", en *Summa,* Buenos Aires, 1978.

[14] Ramos, Silvina, *Las relaciones de parentesco y ayuda mutua en los sectores populares urbanos: Un estudio de caso,* Estudios CEDES, Buenos Aires, 1981.

[15] Fara, Luis, *Luchas reivindicativas urbanas en un contexto autoritario. Los asentamientos de San Francisco Solano,* trab. mimeografiado, 1985.

[16] González Bombal, María Inés, *Protestan los barrios, el murmullo suburbano de la política,* trab. mimeografiado, Buenos Aires, 1985.

[17] Cardoso, Ruth C. L., *"Movimentos sociais urbanos: Balanço crítico".* En Bernardo Sorj y María H. Tavares de Almeida (eds.), *Sociedade e política no Brasil pós-64,* Editora Brasiliense, San Pablo, 1983.

[17 bis] Castells, Manuel, *Ciudad, democracia y socialismo,* Siglo XXI, Madrid, 1979.

[18] García Delgado, Daniel, y Silva, Juan, *El movimiento vecinal y la democracia: participación y control en el Gran Buenos Aires,* trab. mimeografiado, Buenos Aires, 1985.

[19] Clementi, Hebe, *Juventud y política en la Argentina,* Siglo Veinte, Buenos Aires, 1982, pág. 45.

[20] La investigación histórica del discurso político argentino, aún no hecha, permitiría indagar de qué manera, en qué momento y en relación con qué temas, comienzan a ser nombrados —y así reconocidos— los jóvenes como actores políticos. Obviamente, esta pregunta también puede ser hecha para otros actores no tradicionales.

[21] Vila, Pablo, *Rock nacional: crónicas de la resistencia juvenil,* trab. mimeografiado, Buenos Aires, 1985.

[22] Feijóo, María del Carmen, *Las feministas* (La vida de nuestro pueblo), C.E.A.L., Buenos Aires, 1982.

[22 bis] La convocatoria para la concentración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue hecha por una gran cantidad de entidades, incluyendo numerosos sindicatos. En las paredes de los organismos públicos, un póster de la UPCN invita a participar en este acto.

[23] CONADEP, *Nunca más,* Eudeba, Buenos Aires, 1984.

[24] Feijóo, María del Carmen y Gogna, Mónica, *Las mujeres en la transición a la democracia,* trab. mimeografiado, 1983.

[25] Palomino, Héctor, *El movimiento de democratización sindical,* trab. mimeografiado, Buenos Aires, 1985.

[26] No nos estamos refiriendo a formas clandestinas de hacer política. También las hubo, pero lo que aquí interesa es la caracterización de las prácticas culturales que —es nuestra hipótesis— contenían el germen de tendencias democratizantes de largo plazo para la sociedad argentina.

Crisis y movimientos sociales en Brasil*

*Theotonio dos Santos***

1. Ubicación del tema

Los movimientos sociales no son un fenómeno nuevo en la historia. Desde la antigüedad podemos encontrar tentativas más o menos profundas de organizar determinados sectores sociales que realizan actividades permanentes o eventuales para alcanzar los objetivos derivados de su propia condición.

De este modo los enfrentamientos clasistas entre patricios y plebeyos en la Roma Antigua, las revueltas de esclavos en el Imperio Roma-

* En este ensayo se sistematizan algunas ideas a modo de síntesis de las investigaciones sobre Brasil hechas en el marco del proyecto "Crisis y movimientos sociales en América Latina" (patrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas). Tales investigaciones fueron las siguientes: Ruy Mauro Marini, *"O movimento operário no Brasil";* Maria Conceição D'Inção, *"O movimento de Guariba: o papel acelerador da crise economica";* Pedro Jacobi, *"Movimentos sociais urbanos e a crise: da explosão social a participação popular autonoma";* Vania Bambirra, *"Favelas e movimentos de favelados no Estado do Rio de Janeiro";* Joel Rufino dos Santos, *"O movimento negro e a crise brasileira";* H. Saffioti y Vera Ferrante, *"Formas de participação da mulher em movimentos sociais".*

El texto se basa en una presentación del autor realizada en el seminario sobre el mismo tema promovido por la Fundação Escola de Serviço Público (FESP), también con los auspicios de la ONU y de CLACSO en marzo de 1985.

** *Fundação Escola de Serviço Público (FESP), Río de Janeiro.*

no, los movimientos religiosos y nacionales y las rebeliones campesinas en la Edad Media, el mismo bandidismo medieval y moderno, las huelgas, y la organización proveniente de los movimientos sindicales son todos fenómenos que se inscribirían en un concepto amplio de movimientos sociales. Sin embargo, con el gran desarrollo de las sociedades urbanas contemporáneas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron creando las condiciones para un nuevo tipo de movimientos sociales que dio origen a un conjunto de reflexiones, más o menos originales, intentando rescatar las especificidades de los mismos, que se distinguirían de otras formas más clásicas y cristalizadas de movimientos sociales.

Nó hay duda de que el gran desarrollo de los servicios sociales, de las tareas de planeamiento y de las informaciones, gestaron un vasto mundo social con nuevo tipo de demandas y objetivos. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por la ideología expresada en la idea de una sociedad opulenta. Por el contrario, la creciente dependencia del conjunto de la población con respecto a los servicios y actividades realizados por el Estado o por grandes empresas privadas transformó a sectores enteros de la sociedad en marginales y carenciados.

Sería pues una clara desviación teórica y analítica restringir los movimientos sociales a aquellas expresiones de las nuevas formaciones sociales derivadas del avance de las fuerzas productivas, tanto en el capitalismo como en el socialismo. Y es preciso ver que un importante factor de movilización y organización de los movimientos sociales deriva exactamente de las carencias y de la marginación provocada por este desarrollo.

No hay duda de que el enorme avance científico y tecnológico de la humanidad transforma esas carencias y marginaciones en fenómenos históricamente anacrónicos.

Es exactamente por esta razón que estos movimientos se intensifican al descubrir como superables las limitaciones que experimentan y la posibilidad histórica de eliminar los obstáculos que se anteponen a una plena realización.

La actual crisis económica internacional acentúa esta contradicción entre las enormes posibilidades científicas y tecnológicas de que dispone la humanidad para elevarse a un nuevo estadio civilizatorio y los obstáculos socio-económicos y políticos que impiden tales cambios. Los problemas sociales se acentúan y en consecuencia se amplían el área de acción y la gama de los movimientos sociales emergentes.

Para analizar la relación entre la crisis y los movimientos sociales en el Brasil, se hace necesario establecer, por lo tanto, un conjunto de premisas conceptuales que nos guíen en el análisis del fenómeno de los movimientos sociales (brasileros), ya que para ello disponemos de un conjunto de investigaciones extremadamente interesantes de las que po-

demos partir y que serán citadas a lo largo de este trabajo. Realizaremos esta tarea intentando determinar los principales niveles en los que se debe desplegar nuestra marcha analítica.

2. Los niveles de análisis

Movimientos sociales, clases sociales y desarrollo capitalista

El primero de los niveles que nos toca analizar es el relativo a la teoría de los movimientos sociales. Desde este punto de vista, se ubica como premisa conceptual el análisis de la relación entre las clases y los movimientos sociales. Los movimientos obreros y los de los trabajadores agrícolas son, entre los que analizamos, los que mayor correspondencia de clases presentan. Sin embargo, aun en estos casos, los movimientos sociales no se identifican directamente con las clases. A pesar de haberse originado de las relaciones de trabajo fundantes de esas clases, como el sindicalismo, y de haber estado influenciados por su evolución y su estructura, no se agotan con el análisis de la constitución de las mismas. Existen otros elementos que merecían un tratamiento teórico importante como la memoria histórica, las tradiciones, el proceso subjetivo de formación y desarrollo de los movimientos sociales, sus propias organizaciones, que no permiten una reducción al fenómeno de las clases propiamente dicho.

Al mismo tiempo, se integran como movimientos sociales los estamentos[1] derivados de diferentes orígenes, como sería el caso de las mujeres y de los grupos étnicos. Por otro lado, existen movimientos más permanentes como los de vivienda, favelados, etcétera, o más circunstanciales, como el caso de los desocupados, de manifestaciones de violencia urbana u otros. Estos últimos reflejan sujetos sociales que están relacionados con ciertos sectores más permanentes de la producción, pero que también, de algún modo, tienen su propia dinámica, su realidad propia y que exigen, por lo tanto, un análisis específico.

Esto nos introduce en un segundo nivel de análisis: la relación entre los movimientos sociales y la identidad y permanencia de las clases y de los estamentos. Estas cuestiones de identidad y permanencia no se limitan a la conciencia de clase porque la condición femenina es mucho más estable que la de pertenecer a una clase social. Y la condición étnica, a pesar de ser históricamente más circunstancial, también puede tener un contenido histórico secular más profundo que el de la condición de clase, sobre todo si pensamos en pueblos de culturas y civilizaciones más antiguas que fueron reducidos a la condición de grupos étnicos. Eso se manifiesta fuertemente en la cuestión del negro y de la cultura africana. Se trata de una cultura secular, que a pesar del socavamiento que sufre en el proceso de esclavitud y de trasplante de esas

masas negras hacia otras regiones, mantiene su identidad cultural. Esta se manifiesta como algo que supera en mucho un segmento social producido por un sistema social específico. Y por lo tanto, cuando Joel Rufino dos Santos[2] reivindica que la cuestión negra traspasa inclusive el problema civilizador de nuestra sociedad occidental contemporánea, está hablando de cuestiones de orden emocional, cultural, de sensibilidad humana, de plástica, sensibilidad corporal, sensibilidad en relación con varios elementos culturales que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte, elementos rituales y religiosos. La reivindicación por el reconocimiento de las religiones negras, por ejemplo, es algo muy serio en un país como el Brasil, donde la recuperación y revitalización de esas religiones populares demuestran que el problema no puede ser equiparado a una discusión específica sobre el capitalismo como sistema económico. Hay un problema de identidad, de permanencia histórica, un problema cultural que no puede ser tratado simplemente desde el punto de vista de un sistema socio-económico específico, que no puede ser agotado en el análisis del modo de producción capitalista.

Se llega, en consecuencia, al tema de la posibilidad de refuncionalización o no de ciertas formas que traspasan el modo de producción capitalista en particular, para servir a los intereses y necesidades de su funcionamiento. Es un hecho comprobable la capacidad que tiene este sistema de refuncionalizar otras culturas y otras situaciones históricas para atender sus intereses. Otros modos de producción de carácter universal, como es actualmente el caso del socialismo, tienen esa misma capacidad... El modo de producción asiático y el mismo feudalismo, que ocuparan vastas regiones muy diferenciadas culturalmente entre sí, también tuvieron que convivir —y de alguna manera articularse— con elementos que sobrepasan sus necesidades internas de funcionamiento y su dinámica *específica como modo de* producción.

Tal vez los casos de las mujeres y de los grupos étnicos, como el del movimiento negro, se colocan respecto del modo de producción en una dimensión supra. Ellos jamás podrían ser absorbidos totalmente por un modo de producción particular. Pero, al mismo tiempo, todos los modos de producción conviven y atribuyen papeles y funciones a la mujer y a los grupos étnicos distintos.

El mismo socialismo, como forma de transición histórica, no tiene condiciones de absorber totalmente ésas situaciones estamentales, culturales o civilizatorias. Esta absorción puede verse facilitada por las formaciones sociales socialistas que favorecen el proceso de entrecruzamiento de esas culturas y su articulación, su enriquecimiento y su universalización. Los soviéticos discuten mucho el ideal del hombre soviético, que es una figura en proceso de creación en un país donde existen tantas culturas y tantas naciones.

Los yugoeslavos permiten que sus ciudadanos escojan la nacionalidad con la que se identifican, inclusive la nacionalidad Yugoeslava, que no existe por que no existía históricamente la nación yugoeslava que nace como un nuevo Estado socialista. ¿Cuándo se podrá elegir la identidad planetaria? Existe jurídicamente la figura de "apátrida" pero no la de "ciudadano del mundo" como Trotsky se calificó cierta vez, en el auge del romanticismo intenacionalista. Tal calificación parece inclusive ridícula para un mundo donde las naciones son una realidad demasiado fuerte. La identidad de ciudadano del mundo es extremadamente abstracta en la realidad concreta en la que vivimos.

En resumen, los movimientos sociales tienen una dimensión que sobrepasa en muchos casos la condición subordinada a procesos sociales concretos y la dinámica con la que están situados en un país, en una región, o en una época histórica. Existen en su identificación y permanencia elementos más profundos que deben ser tomados en consideración.

Llegamos así a un tercer nivel de análisis, que está ligado a los anteriores. Se trata de situar los movimientos sociales en el contexto del desarrollo del capitalismo en general y del capitalismo brasilero en particular que determina fuertemente el carácter y el funcionamiento de los movimientos sociales. A pesar de que su identidad y permanencia puedan no ser reductibles a los regímenes y modos de producción, tales movimientos no pueden existir fuera de un contexto de determinaciones más concretas, como es el desarrollo del capitalismo en general y en cada país.

Al mismo tiempo que pueden expresar tendencias y necesidades que no se agotan y no se agotarán jamás dentro de un modo de producción capitalista, éstas existen solamente en las condiciones particulares de desarrollo de un determinado modo de producción y de las variadas formaciones sociales en las que se expresan.

La cuestión de los movimientos sociales adquiere relevancia, en la actualidad, porque el desarrollo del capitalismo adopta el carácter de un capitalismo monopolista de Estado. Ya no existe el capitalismo sin el Estado; no puede funcionar sin él. En la medida en que funciona a través del Estado, coloca todas las categorías sociales (desde las clases, los estamentos, grupos sociales, etcétera) en una relación directa con él. En ese sentido, la postura identificada de los movimientos sociales urbanos, y a veces incorporada en el trabajo de Jacobi,[3] de pensar una sociedad civil autorregulada dentro del capitalismo monopolista de Estado tiene grandes dificultades de sustentarse en las condiciones contemporáneas. No es posible analizar ninguna realidad fuera del fenómeno estatal.

El trabajo de H. Saffioti[4] nos muestra que hay regiones históricamente privadas, como la familia, que ya fueron incorporadas casi completamente al ámbito legal, estatal. Por el papel cada vez más abarcador del capitalismo monopolista de Estado, los proyectos y la ac-

ción de los movimientos sociales tienden a ser refuncionalizados por el Estado capitalista.

Si se trata de una cuestión habitacional, ella se convierte de inmediato en un item de política habitacional, de política industrial de construcción civil, englobando la propiedad de la tierra, el sistema financiero, etcétera, todo ello inevitablemente *relacionado con las políticas* estatales.[1]

En la literatura sociológica y económica latinoamericana, hay una tendencia inicial de analizar los movimientos sociales a la luz del desarrollo del capitalismo, como (un) resultado y (una) respuesta a sus leyes y tendencias de desarrollo, que condiciona la evolución de las clases, segmentos y grupos y su organización en movimientos sociales, políticos e ideológicos.

3. Movimientos sociales y sujeto histórico

En las investigaciones de los últimos tiempos, particularmente la que se está desarrollando en torno del proyecto dirigido por Pablo González Casanova,[5] sobre las perspectivas de América Latina, se intenta empero, un cambio de óptica para entender los movimientos sociales desde el punto de vista de la formación de un sujeto social nuevo. O mejor dicho, se busca repensar el problema del desarrollo del capitalismo y del Estado, desde el punto de vista de los movimientos sociales. En consecuencia, la cuestión de la independencia de los movimientos sociales ante el Estado y del desarrollo del capitalismo, no puede ser pensada en el sentido de un aislamiento e independencia absoluta y sí como un proceso de desarrollo de esos movimientos, en el sentido de refuncionalizar el desarrollo del capitalismo y del Estado, sometiéndolo a sus propios objetivos y adquiriendo, por lo tanto, el papel de sujetos sociales.

En el seminario correspondiente a la primera fase del proyecto dedicado al análisis de los movimientos sociales, realizado en Costa Rica, después de estudiar los distintos casos latinoamericanos, se concluyó que todos ellos apuntaban a la formación de un sujeto social nuevo en América Latina a partir de la relación de los movimientos sociales, con los partidos, sindicatos y organizaciones. Esta comprobación vuelve a justificar una investigación de esa dimensión y la profundización del tema, porque ese sujeto social emergente comienza a tener un movimiento y una dinámica lo suficientemente rica como para determinar una línea de investigación, pues el fenómeno nos permite anticipar inclusive un proceso de transformación social profundo.

Se puede concluir que existe una relación entre varios sujetos particulares, que se van desarrollando en varios movimientos sociales concretos, en el sentido de formación de un sujeto social más global, que en América Latina adopta el nombre de "movimientos populares". Movimientos que reúnen sectores sociales muy distintos y diversificados que van desde el movimiento obrero y de trabajadores agrícolas, que es una presencia permanente en ese tipo de movimiento popular, hasta formas nuevas como las asociaciones de barrio, los movimientos étnicos, estudiantiles, de mujeres, etcétera.

En Ecuador, por ejemplo, existe una central sindical que incluye los movimientos de barrio, de clase media y de empresarios de clase media. En el mismo Brasil, como aparece destacado en el trabajo de Ruy Mauro Marini,[6] se formó entre 1962 y 1964 un movimiento importante pero poco estudiado. Se trata del Frente de Movilización Popular, FMP que partía de la conquista de una central sindical, la CGT, para buscar una articulación social más amplia. En torno de la CGT se agruparon en el Frente Organizaciones y Movimientos que formaban el esbozo de un nuevo sujeto social. El FMP estaba compuesto, además de la CGT, por las Ligas Campesinas, la Unión Nacional de Estudiantes, la Confederación Nacional de Trabajadores de Agricultura (CONTAG), la Unión Brasilera de Estudiantes Secundarios (UBES), el Movimiento de Sargentos, los Oficiales Nacionalistas, el Frente Parlamentario Nacionalista e incluía también los partidos de izquierda.

La Asamblea Popular de Bolivia fue el resultado de la unión de fuerzas populares obreras, estudiantiles, campesinas; representaciones de los sectores sociales más diversos se articulaban en la Asamblea Popular con la intención de lograr el poder estatal, llegando a enfrentar el poder central. Esto último debido a las particularidades del proceso y del pensamiento político boliviano, marcado por la presencia constante de la tesis de dualidad de poderes, desde la insurrección revolucionaria de 1952.[7] Esa tendencia retorna una vez más en el momento actual, cuando la Confederación Obrera Boliviana (COB) se vuelve a ubicar como un poder estatal en Bolivia, intentando ejercer la dirección de los transportes, de la distribución de alimentos, etcétera.

En el caso chileno, las formas de participación llegaron a adquirir una dimensión legal cuando el gobierno de la Unidad Popular creó por ley el sistema de participación popular. Pero en la práctica, esos organismos suplantaron la propuesta legal. Fue así como, por ejemplo, se evolucionó desde un sistema de representación por empresa hacia formas enteramente inesperadas. Según el esquema legal, cada empresa estatal tendría un consejo electo por sus trabajadores que la dirigirían junto con el representante del Estado. Pero, de repente, ante las amenazas y sabotajes de la derecha, los órganos de representación se articularon y se convirtieron en los "cordones industriales". Ellos unificaban las direcciones obreras de varias empresas, formando una dirección política de defensa de las conquistas en el barrio. Se producía una

simbiosis compleja entre la gestión empresarial y la de los barrios. Al mismo tiempo, se crearon en el sector agrícola los "comandos comunales", contra la orientación legal que pretendía mantener la diferenciación formal entre los gobiernos locales y los órganos de representación sindical, de las asociaciones de pequeños campesinos, etcétera. Sin embargo, ante la amenaza de la contrarrevolución, los sindicatos se unieron con los campesinos que pasaron a dirigir las regiones en donde se localizaban sus tierras y crearon los comandos comunales.

Ese tipo de comportamiento social no puede ser aleatorio. Tiende a repetirse y a presentar elementos permanentes en situaciones históricas de democracia avanzada, en las cuales el poder de represión de la derecha se desestructura por alguna razón, ya sea por el avance del movimiento popular, o por una crisis interna. En esos momentos, ese sujeto en formación se perfila como una fuerza histórica en nuestro continente. No se trata, por lo tanto, de cuestiones locales; debe haber una causa más profunda, común a esas experiencias distintas que anuncian una presencia creciente del "pueblo" como sujeto del proceso político continental. Y ella se explica por el avance de la industrialización y de la urbanización, formadoras de nuevas clases y grupos sociales. Esta modernización se encuentra con realidades históricas que exigen un análisis específico.

Es el caso del fenómeno indígena, sobre todo en las regiones ligadas a los imperios aztecas, maya e inca. Esos pueblos indígenas transformados en trabajadores agrícolas o en trabajadores urbanos proyectan sus especificidades en la formación de la subjetividad popular. Lengua, religión, cultura, costumbres indígenas se asocian a una nueva cultura popular latinoamericana. El problema indígena es una cuestión histórica de grandes dimensiones, que reaparece en todas las circunstancias en las que ese sujeto histórico, social, cultural y político de carácter global se desarrolla y se manifiesta explorando las posibilidades democráticas. El movimiento indígena tiene un contenido de resistencia y tiende a constituir un sujeto propio.

4. Movimientos sociales y proyectos históricos

La idea de un proyecto propio nos aproxima a la cuestión ideológica en general. El proyecto de una fuerza social, como lo destaca Joel Rufino dos Santos[8] al referirse a una visión histórica del Brasil, se ubica también en el nivel de América Latina, exactamente por ese carácter inconcluso de nuestras sociedades. Cada nueva generación tiene que estar constantemente reproyectándose, tratando de encontrarse como nación. Ocurre sin embargo que las clases dominantes locales se pierden en la alienación del colonizador o del neo-colonizador y

van cediendo espacio progresivamente a las nuevas clases revolucionarias que asumen la tarea de constituir las naciones que las oligarquías y las burguesías no conseguirán forjar.

En consecuencia, es posible detectar la voluntad de esos sujetos históricos de constituir un nivel de elaboración teórico-doctrinario capaz de generar un proyecto global nacional y latinoamericano. Esta pretensión supera inclusive los límites de los partidos políticos, porque un proyecto de ese tipo puede expresarse en varios partidos. Si nosotros analizamos lo que pasó en la Rusia del siglo XIX hasta la revolución, y estudiamos las obras de un Danielson, un Plejanov, un Lenin, un Bujarin, un Trotsky u otros más, encontraremos una profunda reubicación permanente de la problemática teórica del marxismo en el contexto concreto del destino ruso, del problema ruso en particular. Nada quedaba suelto y muchas cosas, que podían parecer sueltas, se refuncionalizaban en torno de un proyecto. ¿Cómo fue que la clase obrera rusa dio origen a una visión de ese tipo? Tal vez fuese la misma nobleza rusa, la que en sus sectores decadentes pensaba a Rusia desde ese punto de vista, aliándose con la clase obrera.

En el Brasil, la cuestión de ese proyecto nacional vuelve a aparecer en cada generación. Sin embargo, es necesario entender la relación entre cualquier proyecto nacional viable y la idea de un proyecto latinoamericano. En los procesos de democratización avanzada en los distintos países, hay siempre un fuerte contenido latinoamericano, desde Bolívar, pasando por Martí, Sandino, los populistas, Fidel, la experiencia chilena y la revolución nicaragüense, etcétera. Siempre que un liderazgo popular se proyecta y produce un movimiento popular fuerte en América Latina adquiere un carácter latinoamericano. La cuestión de la identidad latinoamericana surge inmediatamente en esas situaciones.

Es por lo tanto muy difícil pensar al Brasil, desde un punto de vista popular, sólo como un proyecto nacional. Se trata de un proyecto más amplio, con una dimensión mucho más abarcadora que la de los límites nacionales.

La cuestión del indígena, del negro, se destaca en ese contexto, porque cuando se habla de América Latina inmediatamente se plantea la cuestión de los orígenes ibéricos (portugués o español) pero son las poblaciones indígenas y negras las que en mayor medida forman el elemento popular identificado con las grandes masas de la región. La transformación de esos sujetos en un sujeto global, capaz de formular un proyecto de cambio social es una tendencia histórica concreta, y es muy difícil analizar los movimientos sociales sin tomar en consideración ese hecho étnico-cultural.

5. Movimientos sociales, sociedad civil, ciudadanía

Por otro lado, la formación de los movimientos sociales latinoamericanos se asocia también con la gestación de ciudadanía y la constitución de nuestra democracia, la cual lucha por afirmarse y consolidarse. En el Brasil, recientemente, vimos cómo todos los movimientos sociales convergían en la campaña por "elecciones directas ya". El aspecto esencial de ese movimiento que movilizó a millones de personas en las calles de todo el país era la búsqueda del reconocimiento del derecho del ciudadano de elegir la autoridad máxima.[9]

Es pues necesario integrar los elementos culturales y étnicos con los proyectos de transformaciones económicas y estructurales del país. En su conjunto, la cuestión ideológica, los partidos políticos, aparecen como momentos tal vez más particulares de ese proceso más global. De esa manera, en los países de América Latina es casi imposible aislar los movimientos sociales de su dimensión política explícita o implícita.

En ese contexto la relación entre los movimientos sociales y el Estado adquiere un carácter cada vez más complejo. No se trata solamente de la necesaria intervención estatal en los aspectos particulares reivindicados por cada movimiento. Se trata del contenido mismo del Estado, que lleva a reubicar la relación entre liberalismo y democracia. Un liberalismo tradicional de origen europeo o norteamericano, en las condiciones de Brasil y de América Latina en general (excepto en los casos atípicos de Argentina, Chile y Uruguay, que son países de formación poscolonial), es un pensamiento oligárquico. Fueron las élites coloniales, las oligarquías exportadoras y las clases medias las que defendieron una concepción liberal de la economía. La burguesía industrial, formada en la lucha por el proteccionismo cambiario, y el proletariado urbano estuvieron en permanente choque con el liberalismo oligárquico y elitista que intentaba imponer una sociedad política europea por encima de sus propias tradiciones culturales. Esas fuerzas estuvieron siempre en una línea democrático-sindical, donde la noción de ciudadanía se completa con la idea de participación popular en el Estado. Y a pesar de toda la modernización realizada por el avance del capitalismo monopolista de Estado, dependiente, excluyente y marginador, la vocación de una democracia participativa y de masas continuará siendo la marca identificadora del movimiento popular latinoamericano.

El primer interrogante que surge es hasta qué punto las clases dominantes tienen condiciones de realizar concesiones reales a esa cultura manifiesta en las demandas de las clases y grupos sociales que forman el movimiento popular. Esta es la verdadera clave para saber si estamos ante una época de reforma o ante un proceso revolucionario.

En el famoso prólogo de la *Contribución a la crítica de la economía política*, Marx ya decía que, en la medida en que las fuerzas productivas pudiesen desarrollarse en el marco de un modo de producción dado, dicho modo no podrá ser superado. Es preciso observar sin embargo, que para Marx las fuerzas productivas no se reducen al fenómeno tecnológico, como creen muchos. Para él, la principal fuerza productiva es el hombre, el productor, el trabajador, que dirige y organiza los medios de producción. Por lo tanto, podemos afirmar que mientras el sistema vigente sea capaz de absorber productivamente una parte significativa de la población y atender sus presiones, es inviable la gestación de una situación revolucionaria. La situación revolucionaria se produce cuando el sistema se opone a estas demandas, cuando, por alguna razón, no se tiene más capacidad de atender las aspiraciones sociales derivadas de los avances alcanzados.

La relación histórica entre reforma y revolución,. tal como fue discutida a fin del siglo XIX por Rosa Luxemburgo, Kautzky y Bernstein, muestra la imposibilidad de pensar una cosa separada de la otra. El marxismo rompe con la idea de una revolución que venga desde afuera del sistema. La revolución, tal como el marxismo la concibe, es un proceso interno, un resultado de los avances que ya se han dado dentro del sistema. Es imposible, de esta manera, pensar en América Latina la cuestión de los movimientos sociales fuera del contexto del antiguo debate entablado en los últimos 20 a 30 años en torno del problema "reforma o revolución". Después de la revolución boliviana, de la revolución guatemalteca y de la revolución cubana que dio el salto cualitativo, se fue reubicando recolocando constantemente la cuestión de la revolución en América Latina hasta alcanzar su punto más alto en el proceso de la Unidad Popular en Chile. El capitalismo latinoamericano, a pesar de tener un dinamismo importante y conseguir avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas, lo hace siempre de una manera excluyente y resulta incapaz de resolver el problema de la revolución. Por eso es imposible pensar los movimientos sociales en América Latina fuera de ese contexto.

No se trata del contenido específico de los movimientos, porque es evidente que el movimiento de mujeres no es revolucionario en sí mismo, ni el movimiento indígena, ni el movimiento por la vivienda, ni el movimiento de la reforma agraria; ninguno de ellos es revolucionario aisladamente. Pero en un contexto de un desarrollo capitalista que no tiene condiciones de satisfacer las demandas más elementales de esos sectores, pasan a tener un contenido revolucionario. Y esto se hace más evidente cuando se aceleran esas demandas, en circunstancias concretas, particularmente en las situaciones de democracia avanzada en donde el sistema no tiene condiciones de controlarlas. En esos momentos las clases dominantes recurren a las formas de represión más brutales para poder sobrevivir, a través de regímenes que contengan las manifestaciones populares y repriman, por largos períodos, las expresiones de los movi-

mientos sociales, como ocurrió en Brasil de 1964 a 1979.

Desde 1974, el mismo régimen de excepción se viene autorreformando, manteniendo la iniciativa política y el control ideológico de un proceso que, sin embargo, se radicaliza permanentemente. En el comienzo se trataba de una "descompresión controlada". En seguida se pasó al concepto de "apertura" liberal, con el objetivo de reformar el régimen sin modificar sus principios basicos. Después de una sucesión de derrotas electorales se fue aceptando la necesidad de una "transición democrática" que llevase a un nuevo régimen constitucional. De esta manera, las fuerzas populares fueron adquiriendo progresivamente capacidad de organización. En este marco los distintos movimientos sociales adquirieron capacidad de autoproducción, capacidad de iniciativa y de autoorganización. De acuerdo con el breve análisis que hicimos de la evolución del capitalismo latinoamericano y brasileño en particular, cabe formular la siguiente hipótesis: si las determinaciones que llevan a otras situaciones históricas no erradican esa acumulación de demandas de los distintos movimientos sociales, eso podrá llevar a una situación de democracia avanzada y hará resurgir las dificultades del sistema para controlar el conjunto de demandas y mantenerse en una perspectiva democratizante. Así, el proceso de acumulación de demandas va a plantear otra vez la cuestión del poder. El carácter propio del proceso supera nuestra capacidad de anticipación analítica. Las fuerzas políticas que orientan o expresan estos movimientos serán la clave de su destino. Si fueran capaces de utilizar esa acumulación en sentido transformador y revolucionario, colocarían la realidad socio-económica del país en un nuevo estadio, el del camino hacia el socialismo, o sufrirían nuevas y cada vez más brutales derrotas contrarrevolucionarias, al no conseguir adaptarse a las nuevas circunstancias.

Nuestra capacidad de detectar esas realidades por el análisis y por el conocimiento de las relaciones entre los movimientos sociales y el desarrollo del capitalismo permite ver un surgimiento de aquéllos colocados ante problemáticas más amplias, y esto podrá derivar en una contribución a la lucha social y política concreta. Para alcanzar ese objetivo, tenemos que ser extremadamente rigurosos, no sólo en el análisis de las determinaciones más generales, sino también en el estudio de las articulaciones entre los distintos fenómenos particulares y esos procesos más globales de desarrollo del capitalismo.

6. Crisis y movimientos sociales

Al mismo tiempo, debemos destacar la irreductibilidad analítica que existe entre esos movimientos sociales y el desarrollo del capitalismo. Nos toca pues aproximarnos a un nuevo nivel de análisis y hacer algunas

consideraciones sobre la relación de los movimientos sociales con la coyuntura actual. Esta se caracteriza, por un lado, por una profunda crisis económica y, por otro, por la superación de un régimen político de excepción y la transición hacia una etapa democrática. Situar nuestros estudios dentro de ese contexto fue bastante positivo, porque los desdoblamientos de los movimientos sociales en el Brasil estuvieron condicionados profundamente por esa coyuntura política y por la crisis económica y sus implicaciones sociales.

La crisis actual tiene una dimensión internacional. En el I Congreso Internacional sobre Política Económica, patrocinado por la FESP en agosto de 1984, *"Alternativas para la crisis"*, con la participación de invitados del mundo entero, pudimos consolidar algunas tesis centrales sobre la actual crisis, entre otras la idea de que estamos viviendo una depresión económica de largo plazo. En general existe consenso en situar la crisis desde 1967 hasta el presente, entendiéndola como una onda larga de Kondratiev. Se concluyó, en este debate, que a partir del final de esta década tendríamos posibilidades de una recuperación a largo plazo en la economía internacional. Pero no podemos confiar en la recuperación actual, apoyada en una política económica basada en los gigantescos déficits presupuestarios y de la balanza de pagos de los Estados Unidos. La política económica brasileña actual tiende a adaptarse a esa situación, buscando ajustarse a una perspectiva de recuperación de la economía mundial y de reorientación de las exportaciones en dirección a los Estados Unidos, aprovechando el aumento de demanda internacional norteamericana, considerada el elemento clave para la recuperación económica interna.

Si esa hipótesis es correcta, es bastante probable que llegue a producirse a corto plazo una coyuntura de crecimiento, manteniendo la tendencia del año pasado de recuperación de la producción, volcada hacia el sector exportador. Sin embargo, esta política tendrá piernas cortas y nos llevará nuevamente a una tensión social extremadamente profunda y a un cuestionamiento brutal de las políticas económicas que van orientando el desarrollo brasileño. Esto nos llevará nuevamente a plantear cuestiones de fondo, que están siendo de alguna manera pasadas por alto en el período actual. El contexto de democratización ha servido inclusive como una fórmula para huir del enfrentamiento de los grandes problemas nacionales, que van siendo dejados de lado en nombre de ciertas transformaciones institucionales que no tocan las cuestiones sustanciales que enfrenta el pueblo brasileño.

Ese contexto de crisis en que se da la transición democrática habrá de afectar muy profundamente los movimientos sociales, por lo menos en dos aspectos reflejados en los trabajos que sirvieron de apoyo a esta elaboración citados al comienzo. El primer elemento que se puede resaltar, dentro de ese contexto, es la nueva relación entre los movimientos

sociales y el Estado. En las investigaciones realizadas se siente la presencia de esos nuevos elementos: los movimientos sociales avanzaron en el Brasil en un marco de confrontación con el régimen autoritario que les prohibía la participación e inclusive el mismo diálogo. Después de las elecciones de 1982 para gobernadores y prefectos, se abre una nueva expectativa de diálogo y participación de los movimientos sociales.

Algunos trabajos reflejan una frustración de las expectativas por parte de los sujetos sociales, pues aquéllas no están siendo lo suficientemente atendidas. Eso se refleja mucho, por ejemplo, en el trabajo de Pedro Jacobi sobre los movimientos sociales urbanos de San Pablo y en el trabajo sobre los trabajadores agrícolas temporarios *(bóias-frías)*,[10] de María Concepción d'Inção.[11]

En otros trabajos, como aquellos sobre los movimientos de mujeres o el movimiento negro, encontramos la idea de que la apertura política, en cierto modo, provoca una pérdida de intensidad de estos movimientos. Quiero decir que la apertura genera una decepción en el seno del movimiento, no tanto respecto del comportamiento de los gobiernos estaduales, sino respecto del comportamiento de los mismos movimientos. Es posible pensar que, ante la apertura, concretamente a partir de las elecciones de 1982, éstos pierden su capacidad de articulación y entran en cierta crisis frente a las nuevas condiciones políticas y sociales en que se encuentran.

En el caso del movimiento obrero, se observa también que se produce una gran división interna entre la Central Unica de Trabajadores (CUT) [12] y la Confederación Nacional de las Clases Trabajadoras (CONCLAT) [13] y una pérdida de dinamismo en su militancia y actividad.

Otra problemática por ser resuelta en estos movimientos gira en torno de la manera en que éstos se relacionan con el Estado en gobiernos democráticos. Acostumbrados a ver que los gobiernos dictatoriales favorecen a la patronal e intervienen los sindicatos impidiendo su movilización, tienden a recibir con cierta perplejidad una acción más neutra y a veces favorable a los trabajadores. En el trabajo de Vania Bambirra [14] sobre el movimiento de los favelados en el Estado de Río de Janeiro, se presenta cierta crisis del mismo Estado y del mismo gobierno en la medida en que se abren a un diálogo mayor con el movimiento de favelados y con otros sectores sociales. No siempre están lo suficientemente preparados y tienen una política social elaborada para articularse con esa nueva realidad, que entra en contradicción con el sistema institucional existente y plantea una serie de problemas nuevos extremadamente ricos para el debate y para la gestión de políticas públicas.

Al mismo tiempo, existen implicaciones internas de esa situación respecto de los movimientos sociales. Ante esa relación nueva con el Estado, los movimientos se sienten paralizados por una amenaza de cooptación y se plantea para ellos la necesidad de desarrollar una línea independiente, un proyecto propio ante el Estado, el cual no debe confundirse con una posición de confrontación permanente y definitiva.

Otro tema que marca esa coyuntura y se refleja en los trabajos citados es el efecto de la crisis sobre los movimientos sociales. En la investigación de Pedro Jacobi, hay una referencia constante a la hipótesis de que la crisis debería haber provocado una mayor dinámica en los movimientos sociales. Inclusive el movimiento de los desocupados aparece como una consecuencia directa de la crisis, que tendría que haber llevado a una movilización mayor. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, los trabajos sobre movimiento obrero, o el mismo movimiento de mujeres, o de los negros, etcétera, el contexto de la crisis parece haber sido mucho más desmovilizador que movilizador. Históricamente, las crisis tienden más a desmovilizar los movimientos organizados. Ellas incrementan la acción de los movimientos no orgánicos como los de los desocupados, que no están ligados al funcionamiento permanente del sistema económico. En estos, sin embargo, la tendencia de la crisis es desmovilizadora. Inclusive, si aceptamos los datos que han sido presentados, en el sentido de que habría habido cierta recuperación en el año pasado, podríamos analizar las últimas manifestaciones del movimiento obrero, sobre todo en el caso de los trabajadores agrícolas, como un resultado de esa recuperación económica. Ciertamente sería necesario profundizar más ese análisis sobre la relación entre la crisis, la movilización social y la dinámica de los movimientos sociales.

Quedan pendientes algunas cuestiones teóricas más amplias, como por ejemplo la relación con los nuevos movimientos sociales de los dos grandes movimientos sociales tradicionales: el obrero y el de los trabajadores agrícolas. Si bien los movimientos de vivienda y de favelados ya existían históricamente, es importante subrayar que adquirieron un dinamismo muy grande en los últimos tiempos. La cuestión fundamental es investigar si esos movimientos tienden a permanecer dentro de la estructura de funcionamiento de una democracia o si serían movimientos circunstanciales. Con el rápido desarrollo del capitalismo en el Brasil en los últimos 30 años, ya se cristalizaron en la estructura económica y social los elementos de un vasto sector de servicios dedicado a la circulación, a la complementación de la producción y a la reproducción de la población.

Como ya destacamos, en una sociedad cada vez más integrada en un sistema productivo nacional e internacional le toca un papel creciente a las instituciones privadas o estatales en la satisfacción de las necesidades de la población. Así, las condiciones de vivienda, educación, salud, alimentación pasan a depender de una estructura de servicios públicos y dejan de estar basadas en el presupuesto familiar, incapaz de cubrir la organización de servicios tan vastos y complejos. En consecuencia,

los movimientos sociales urbanos adquieren nuevas formas de actuación para canalizar las demandas de esos servicios y presionar al Estado para la mejor atención de esas necesidades.

La crisis, como vimos, alteró y deprimió en parte los centros productivos que forman el núcleo del movimiento. La transición democrática se canalizó en gran medida hacia la lucha por la democracia y las libertades públicas, como las grandes campañas por la amnistía, las elecciones de 1982 y la campaña por las "directas ya".

En la medida en que se detiene el proceso recesivo y se recupera la organización de los movimientos obrero y de los trabajadores urbanos y rurales, todo el conjunto anárquico descrito anteriormente encuentra una columna vertebral orientada a la formación de un sujeto colectivo nacional. Si tales tendencias fueran acompañadas por una similar evolución en el campo político (doctrinaria, estratégica y táctica) pronto veremos levantarse un enorme gigante socio-político en el país. Sus pasos, aun siendo vacilantes, harán temblar las estructuras tradicionales de nuestro continente.

Notas

[1] Con la noción de estamento intento designar aquellos grupos sociales cuya pertenencia no es adscrita sino dada.

[2] dos Santos, Joel, *El movimiento negro y la crisis brasileña,* ob. cit.

[3] Jacobi, Pedro, *Movimientos urbanos y crisis: de la explosión social a la participación popular autónoma,* ob. cit.

[4] Saffioti, Heleieth, *Formas de participación de la mujer en los movimientos sociales,* ob. cit.

[5] González Casanova, Pablo, *Los movimientos sociales en América Latina,* ob. cit.

[6] Marini, Ruy Mauro, *El movimiento obrero en el Brasil,* ob. cit.

[7] En este sentido, fue el pensamiento político boliviano el que produjo una de las reflexiones más sistemáticas sobre el poder dual en América Latina. Véase de Zavaleta Mercado, René, *El poder dual,* Siglo XXI, 1977, 24a. edición.

[8] dos Santos, Joel Rufino, ob. cit.

[9] Sobre el papel del movimiento por las "Directas ya" en la articulación de los distintos movimientos sociales brasileños, sería necesario un trabajo aparte con mayor investigación y horizonte temporal. Véase de Noé, Alberto, *Movimientos sociales en el Brasil, 1970-1983. Nuevos actores en el escenario político,* Proyecto UNU-FLACSO, San José, Costa Rica, 1984.

[10] Bóias-frías: trabajadores agrícolas temporarios.

[11] d'Incão, María Concepción, *El movimiento de Guariba: el papel acelerador de la crisis económica,* ob. cit.

[12] La CUT tiene una fuerte influencia del Partido de los Trabajadores (PT) y la participación de otras fuerzas, como un sector del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT).

[13] En la CONCLAT se observa la presencia de cuerpos directivos comprometidos con la dictadura, de militantes del PCB, del Partido Comunista del Brasil y del MR-8.

[14] Bambirra, Vania, *Favelas y movimientos de favelados en el Estado de Rio de Janeiro,* ob cit.

Movimientos sociales en la restauración del orden democrático: Uruguay, 1985

Carlos H. Filgueira *

I. Introducción

Durante el período autoritario, entre fines del año 1973 e inicios de 1985, son reconocibles tres etapas del sistema político uruguayo que afectaron en forma diferente la existencia, expresión y funcionamiento de los movimientos sociales.[1]

La primera etapa,cuyos antecedentes se reconocen aun antes del año 1973, corresponde al cierre de los canales de expresión de la sociedad civil y política, congelamiento de las organizaciones tradicionales de agregación y articulación de demandas, desestructuración de las formas colectivas de identificación de los actores sociales, y pérdida consecuente de los marcos de referencia de las orientaciones individuales. En esencia se trató de un período de fuerte desmovilización social y política sustentada en la represión y coerción abierta (supresión de los gremios y libertades sindicales, control e ilegalidad de los movimientos sociales, persecución a los líderes, disolución de los partidos políticos, control de agremiaciones, supresión de libertad de reunión, de comunicación, etcétera).

Podemos ubicar preliminarmente el final de esta etapa sobre los umbrales de la década del ochenta. Hasta ese momento las organizaciones sociales y políticas preexistentes y otras nuevas que se crean en el período, dan lugar a formas clandestinas o semiclandestinas de escasa presencia pública en virtud de las restricciones impuestas para su desenvolvimiento. En algunos casos, se trató apenas de organizaciones congeladas tendientes a mantener el "acervo" ideológico-cultural del movimiento original, en otros, de organizaciones larvarias que, bajo objetivos explícitos y públicos aceptados por el régimen, ocultaron subyacentes intereses y propuestas de los movimientos originarios o de los nuevos surgidos en el período.

Como consecuencia de la derrota experimentada por el régimen en el Plebiscito de 1980 y de los pasos siguientes (elecciones internas de algunos partidos políticos tendientes a reconstituir las autoridades partidarias, en 1982), se abrió un espacio antes inexistente para las expresiones y organizaciones políticas. Ello incluyó, en la práctica, no solamente a los actores "legitimados" por el régimen para su constitución, sino también a otros actores políticos partidarios y sociales que encontraron "de facto" un clima político propenso para su desarrollo. Si cabe una denominación sintética de esta etapa, digamos que no se trató ya de una fase "defensiva" de la sociedad civil y política. Al contrario, fue una fase reactiva de los movimientos sociales y partidos políticos que procuraban imponer, desde los escasos espacios obtenidos, nuevas reglas de juego opuestas a las del régimen.

Ello fue posible porque, de hecho, la realización de las dos instancias de consulta popular —plebiscito y elecciones internas— ya habían socavado el monopolio de la iniciativa política que hasta ese momento había retenido para sí el régimen militar.

En esta etapa se manifiestan públicamente —y se organizan internamente— muchos de los nuevos y viejos movimientos sociales y partidarios que no habían podido expresarse públicamente en el momento anterior. Entre ellos el movimiento estudiantil universitario y secundario (ASCEEP), los movimientos cooperativistas de vivienda (FUCVAM), organizaciones gremiales y sindicales (PIT), otros movimientos juveniles, movimientos de amas de casa, "ollas populares", movimientos comunales, organizaciones rurales de pequeños y medianos productores, movimientos de mujeres, etcétera. Paralelamente, en la esfera político partidaria, también se asiste a la reconstitución de los dos partidos tradicionales —en sus múltiples fracciones—, de la coalición de izquierda a través de la recomposición de los partidos y fracciones que la integran. A pesar del permanente conflicto que signa esta fase —establecido alrededor de las violaciones de las leyes del juego, que el régimen aduce en contra de los actores que no se sujetan a ellas—, parece claro de cualquier forma que es esta una etapa esencialmente reconstitutiva de la trama social y política precedente al golpe de Estado. Con ello se afirma como antes la

* Centro de Investigaciones y Estudios Sociales del Uruguay (CIESU)

importancia que en el sistema político habían tenido los diferentes movimientos sociales.

Por último, es posible identificar el inicio de la tercera etapa con la culminación del proceso de negociación entre el régimen militar y las fuerzas de la oposición democrática que da lugar a las nuevas reglas del juego acordadas en el Club Naval y el llamado a elecciones nacionales para el año 1984. Con esta instancia, el proceso de apertura democrática —proscripciones de líderes y partidos mediante— alcanza el punto más avanzado que se conoce desde 1973 y consolida el espacio de facto para casi todas las fuerzas y movimientos sociales existentes.

Esta etapa se caracteriza por la acción de los movimientos sociales y partidos políticos tendiente a enfrentar la instancia electoral del '84, y por la rearticulación de aquéllos dentro del sistema de partidos reemergente. Dos hechos merecen señalarse como indicativos de esta etapa: en primer lugar, la acción de algunos movimientos sociales haciéndose presentes en el nuevo escenario político en forma de oposición abierta al régimen —por ejemplo, la negativa del Movimiento Cooperativo de Vivienda a pagar las cuotas del régimen de prestaciones estatal, las oposiciones obreras y la movilización estudiantil— y en segundo lugar, la plena participación de los movimientos sociales en la Concertación Nacional Programática que se lleva a cabo en el período previo a las elecciones.

El mecanismo de la Concertación establecido incluyó en su momento diversas instancias que culminan finalmente con la constitución de la CONAPRO (Concertación Nacional Programática), en la cual los partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, movimientos corporativos, gremiales empresariales, se constituyeron en múltiples Comisiones (Política Económica, Política Habitacional, Salud, Seguridad Social y otras) encargadas de establecer los acuerdos mínimos y lineamientos de la política futura del gobierno democrático.

En esta etapa, por lo tanto, la acción de los movimientos sociales tiene ya un carácter positivo —no reactivo o defensivo— y su referente está dado por la legitimación del nuevo orden democrático.

Como consecuencia de este proceso brevemente descrito, no cabe duda de que los movimientos sociales se incorporaron al proceso democrático que se abre a partir de marzo de 1985, en forma plena y revitalizados por su acción en el período autoritario. Por una parte, la supresión de los mecanismos tradicionales de mediación política y de la expresión de intereses y demandas de la sociedad parece haber actuado reforzando manifestaciones espontáneas de la sociedad civil. Por otra parte, la misma inexistencia de instancias articuladoras y mediadoras constituidas por los partidos políticos, gremios y sindicatos, parece haber incidido en la máxima autonomía relativa de esos movimientos con respecto a sus matrices históricas de inserción. En cualquier caso, es claro que si

algo caracterizó a los movimientos sociales en el período autoritario, fue su diversificación, autonomía y espontaneísmo.

En segundo lugar, es destacable igualmente la heterogeneidad de este tipo de manifestaciones. A diferencia del período democrático preautoritario, donde la dominante de los movimientos sociales se nucleaba alrededor del sindicalismo, resulta notoria ahora la presencia de movimientos "nuevos', asentados en múltiples demandas organizadas alrededor del consumo, o las políticas públicas, de cierto tipo de demandas "single issues" y de los movimientos generacionales y de género. Algunas de estas organizaciones son compatibles —y están articuladas— con los movimientos sindicales; otras les son totalmente ajenas, o constituyen segmentos de reivindicaciones circunscritas dentro del sindicato, constituyéndose a veces en formas superpuestas y redundantes o, alternativamente, en formas competitivas con otros movimientos.

En tercer lugar, otro rasgo distintivo de los movimientos sociales emergentes en el sistema democrático es su heterogeneidad con respecto a sus formas asociativas y organizativas. Son identificables, al respecto, desde las organizaciones de protesta más inarticuladas hasta los movimientos sociales más institucionalizados, desde los más homogéneos o definidos por áreas de igualdad amplia, hasta los más estructurados en sus liderazgos y mecanismos decisorios.

Por último, en cuarto lugar, es evidente que todos los movimientos sociales constituidos en este momento, están sujetos a transformaciones internas y externas en virtud de las nuevas condiciones democráticas. Por ello también, para estas organizaciones se trata de un período de transición y reacomodación en sus referentes de acción, a la presencia del Estado, de los partidos políticos y de otras formas institucionalizadas de mediación política. Es posible, en consecuencia, formular la hipótesis de que gran parte de la autonomía, espontaneísmo e "igualdad de base" que caracterizaron a los movimientos sociales en el período autoritario tenderán a experimentar tensiones en el sentido opuesto: dependencia —o articulaciones con otras instancias mediadoras—, institucionalización y diferenciación interna —pérdida de áreas de igualdad—, eventual cooptación desde el Estado, etcétera.

Cabe entonces preguntarse si muchos de estos movimientos sobrevivirán manteniendo las características organizativas, metas y formas de funcionamiento propias del período autoritario. Teóricamente, ello implica indagar acerca de la naturaleza más o menos permanente o bien coyuntural de este avance de los movimientos sociales, y del papel que los mismos pueden desempeñar en un nuevo sistema de mediación política más alejado de las instituciones clásicas del liberalismo político (partidos, elecciones, parlamento).

II. Acerca de la demarcación de los "movimientos sociales"

Hasta el momento hemos empleado el término "movimientos sociales" para denominar un conjunto heterogéneo de organizaciones colectivas desarrolladas alrededor de algún tipo de solidaridad específica. La literatura especializada no contribuye a aclarar el tema, desde el momento en que existe una considerable ambigüedad en la definición del concepto de "movimientos sociales".

La primera pregunta, entonces, es relativa a la pertinencia de englobar bajo el término de "movimientos sociales" a toda la gama de expresiones colectivas a las que se ha hecho referencia. En otras palabras, examinar en qué medida es útil para el análisis político —y pertinente teóricamente— una demarcación inclusiva de todas estas expresiones para dar cuenta de un solo actor relevante en el juego político. El riesgo es obvio; si se ponen en el mismo saco actores muy diferentes, la conceptualización pierde sentido y confunde más que aclara.

Si se adopta una definición amplia, como es frecuente en muchos trabajos, se incluirán en la categoría de "movimientos sociales" a todas aquellas expresiones colectivas, no partidarias, que: a) se organizan alrededor de ciertos intereses (o valores) socialmente determinados; b) establecen ciertas áreas de igualdad entre sus miembros alrededor de las cuales se dan solidaridades específicas, y c) inciden (o buscan incidir) en algún nivel del proceso de toma de decisiones políticas.

De acuerdo con los cinco estudios desarrollados para el Uruguay, dentro del marco del Proyecto sobre Movimientos Sociales, una conceptualización de esta naturaleza llevaría a incluir indiscriminadamente en esta amplia categoría de la participación política extrapartidaria, a las organizaciones comunales o barriales orientadas a la satisfacción de sus necesidades básicas (por ejemplo, movimientos populares organizados para la atención de la salud, el mejoramiento de las condiciones ambientales y habitacionales, ollas populares); otro tipo de movimientos afines a formas corporativas o gremiales (pequeños y medianos productores rurales), sindicatos obreros de orientaciones clasistas, movimientos feministas identificados con diferentes propuestas de cambio social, organizaciones desarrolladas alrededor de la defensa de los derechos humanos, etcétera.

Alternativamente, una definición "estrecha" de los "movimientos sociales" entendería como tales sólo a las expresiones colectivas de carácter extraestatal. En esta hipótesis, los "movimientos sociales" conceptualmente corresponderían nada más que a los que se proponen fines amplios o limitados de reforma de la sociedad como una empresa colectiva para establecer un orden social alternativo. Quedarían excluidos en consecuencia todos los restantes "movimientos" que tienen un referente estatal positivo para su acción —solidaridades políticas que se

forman en la lucha de los intereses privados—, como los grupos de interés, los grupos corporativos, asociaciones voluntarias o "subculturas".

Las dos opciones presentan virtudes e inconvenientes. Sin pretender una definición formal del tópico, es importante sin embargo, discutir sus implicaciones.

La primera opción —demarcación amplia— corresponde, como ha sido reiteradamente señalado, a una conceptuación excesivamente inclusiva y en consecuencia poco útil para demarcar un tipo específico de comportamiento político. En la práctica, la demarcación amplia incluye dentro de los movimientos sociales a cualquier forma de expresión colectiva que además de ser extrapartidaria tenga un referente de naturaleza política en su acción (directo o indirecto).

La segunda opción, en cambio, ha sido defendida en la medida en que recupera una "diferencia específica" de mayor utilidad para demarcar diferentes formas de expresiones colectivas. Al mismo tiempo, porque centra el punto de atención en aquel tipo de expresiones que contienen en sí un germen de cambio y transformación de la sociedad. Si por movimientos sociales se entiende solamente las expresiones colectivas de la sociedad (privada o política) con fines amplios o limitados de transformación de las desigualdades estructurales (clasistas, autogestionarias, cooperativas, etcétera), todas las formas que no contemplan esta condición —reafirmación o no cuestionamiento de la estructura de desigualdades— corresponderían a otra categoría conceptual de las expresiones colectivas. No nos interesa calificar estas "otras" expresiones colectivas, pero sí interesa preguntarnos qué es lo que estamos dejando de lado al demarcar en términos estrechos la noción de "movimientos sociales".

Parece claro, en primer lugar, que en esta opción dejaríamos de lado muchos de los movimientos que han ido característicos del período autoritario y a los que se hizo referencia en la Introducción. Más aun, no parece aventurado afirmar que también se estaría dejando de lado un tipo de movimiento que en América Latina desde la década del sesenta ha estado presente como un fenómeno nuevo en el escenario político.[2] Puede aducirse que todos estos tipos de manifestaciones colectivas no tienen la misma importancia para el cambio social que aquellos que expresan una conciencia y propuestas de transformaciones más o menos radicales (en particular aquellos que asumen expresiones de conflictos de clase). Sin embargo, las dificultades no son pocas desde esta perspectiva cuando se coloca la discusión en un contexto más amplio de la participación política. Ni se puede ignorar por una parte, el profundo impacto que se deriva de la emergencia de movimientos "no contestatarios" sobre los mecanismos de articulación y mediación política y por ende de la legitimidad. Ni tampoco se puede ignorar que incluso cuando se focaliza el interés en los movimientos sociales radicales

y sus potencialidades de cambio, los "otros movimientos" insertos en el sistema estatal no pueden dejar de considerarse. Precisamente si alguna enseñanza han dejado los estudios históricos acerca de la (in) compatibilidad entre capitalismo y democracia, es la importancia que adquieren estas otras formas de movimientos insertos positivamente en la esfera del Estado como mecanismos de atenuación del conflicto y del resentimiento propio de las opciones radicales.[3] Las modalidades de acción insertas positivamente en el Estado ya sea dentro de formas de cooptación o clientela estatal, corporativas o como grupos de presión e interés son en consecuencia igualmente importantes para entender el cambio de la sociedad, como lo son los "movimientos sociales" estrechamente definidos como agentes explícitos autoconscientes de esos fines.

En segundo lugar, la oposición entre movimientos insertos en el Estado y los extraestatales no sólo es una dicotomía que separa conceptualmente diferentes tipos de movimientos sino que, con frecuencia, separa orientaciones (ambivalentes) de un mismo movimiento.

De allí que las dificultades para establecer una demarcación precisa al respecto no sólo provienen de la definición de cuáles son los fines (amplios o limitados) de reforma de la sociedad de un movimiento, sino también de que virtualmente las formas puras de acciones orientadas en la esfera estatal o extraestatal no son las únicas. Por ello, las dificultades de conceptualizar los movimientos sociales son las mismas que se enfrentan cuando se procura identificar las áreas de solidaridad política que se generan en el sistema de desigualdades sociales y en la lucha por los intereses privados. La ambivalencia de la privatización del poder político dada por la superposición de áreas de igualdad frente al Estado (ciudadanía) y desigualdad de la estructura social coloca dos fuertes referentes en la acción política que en el Estado moderno tienden a producir las formas mixtas —no puras— de participación política (superposición de solidaridades insertas en el sistema estatal y solidaridades extraestatales).

Por último, un tercer elemento que debe ser introducido en esta discusión se refiere al carácter cambiante de los movimientos sociales y su transformación en otro tipo de expresiones colectivas. Como lo ha señalado Mayntz [4] y más específicamente Pizzorno [5] con referencia a los movimientos sociales, este tipo de expresiones colectivas no son formas estables de participación política; o bien alcanzan sus fines o se transforman. "Las condiciones que los hacen surgir pueden resumirse en las situaciones de movilización social, que generalmente conllevan mutaciones en la estructura de la sociedad civil". A su vez, podríamos agregar, la transformación de los movimientos sociales en otras modalidades de participación política, tiene lugar cuando el movimiento se transforma en partido político (o es cooptado total o parcialmente por un partido político), cuando alcanza sus fines y se disuelve, o bien cuando se produce una mutación en los referentes de su acción con respecto al Estado (acción inserta positivamente en el sistema estatal o aceptación del Estado como normador del orden civil existente versus acción extraestatal).

El grado de inestabilidad de los movimientos sociales alude, por supuesto, a un concepto relativo, pero en cualquier caso la consideración de la dinámica de transformación de las diferentes formas de participación política abre un campo de interrogantes de mucho mayor interés que la consideración estática de las tipologías —o demarcaciones definitorias estrechas. Por qué surgen diferentes formas de participación política, cuáles son sus trayectorias, qué factores contribuyen a la mayor permanencia de algunos y a la transformación de otros y qué papel juegan en los mecanismos de articulación social, son algunas de las preguntas que parece más relevante formular. En este sentido, entonces, tampoco parece pertinente una definición estrecha de los "movimientos sociales" circunscrita a las formas de solidaridades extraestatales.

III. Sociedad y movimientos sociales

Cuando se caracterizó el primer momento de la dictadura militar como una etapa fuertemente "desmovilizadora", se hacía referencia a un rasgo del autoritarismo que no tiene, hablando con propiedad, nada de excepcional si se lo compara con procesos similares. Lo que sí en cambio constituye una diferencia importante respecto de otras experiencias es la intensidad y la profundidad con que se llevó a cabo este proceso desmovilizador, la amplitud de instituciones, individuos y organizaciones que alcanzó a afectar, y la persistente política de control y cercenamiento de las libertades de asociación, expresión y reunión, que se prolongaron incluso en las instancias de distensión de las negociaciones políticas entre militares y la oposición democrática.

Ninguno de estos rasgos de la represión serían comprensibles si no se tomara en cuenta el carácter plenamente participativo y altamente movilizado de la sociedad que precede al golpe de Estado.

Como no es éste el lugar para tratar los procesos de formación histórica que dieron como resultado una peculiar matriz estructural de la sociedad uruguaya, recordemos por lo menos algunos de los rasgos que la caracterizaron.

Como es bien sabido, el Uruguay es un caso relativamente atípico en la región. Todas las tipologías elaboradas sobre los países de América Latina así lo indicaron. Ello se expresó en algunos indicadores muy conocidos: un elevado nivel de vida (asegurado por uno de los más elevados PBI per cápita de la región, "mesocráticamente" distribuido), el predominio de formas de vida urbana desde la formación del Estado moder-

no, las mas altas tasas de educación y los más bajos índices de analfabetismo, una homogeneidad étnica, cultural y regional que no conoce equivalentes en la región, a la vez que el desarrollo temprano de un "welfare state" que siguió adelante hasta su reversión bajo la política neoliberal del régimen autoritario (Estado prescindente).[6]

En la esfera política los indicadores equivalentes, y que sólo anotamos, son la larga permanencia de los partidos tradicionales (Colorado y Nacional) existentes prácticamente desde la independencia nacional, la alta estabilidad política a lo largo de todo este siglo, el carácter no excluyente de la participación ciudadana, la temprana participación de toda la población en las instancias electorales, la vigencia de un sistema pluralista democrático, la intensidad de la participación e inclusión política de la población, y una elevada tasa de participación política no partidaria a través de los movimientos y otras expresiones de formación (y reformación) de intereses y demandas.[7]

Durante todo lo que va del siglo y particularmente en los dos impulsos modernizantes, uno de principios de siglo (período batllista) caracterizado por la consolidación y expansión del Estado moderno y otro hacia mediados de siglo ("neobatllismo"), a partir de la movilización industrial, se avanzaron los procesos de modernización social y "desarrollo hacia adentro". Con ello se cristalizó una estructura social caracterizada por la presencia dominante de las clases medias urbanas y sectores obreros plenamente incorporados a la economía formal, cuyo perfil se asemejó más al de las sociedades europeas de desarrollo intermedio que al de las sociedades excluyentes y duales latinoamericanas. La alta movilidad social que predominó durante la primera mitad del siglo, sostenida por las profundas transformaciones estructurales y las pautas reproductivas, a la vez que la gestión líder que encaró el Estado en materia de redistribución progresiva, permitieron una incorporación creciente de casi la totalidad de los sectores sociales a los "beneficios del desarrollo". Como resultado de ello, sobre la década del sesenta, el Uruguay compartía con la Argentina indiscutiblemente una posición privilegiada en el marco de las naciones latinoamericanas, pues estaban a la cabeza del sistema regional en todos los indicadores de desarrollo y modernización social que pudieran considerarse.

Sin embargo, por detrás de la eficiencia distributiva y de la exitosa capacidad de atenuación de conflictos que el sistema político logró desarrollar garantizando por más de medio siglo la compatibilidad del orden democrático con su forma capitalista, fueron notorias las dificultades de crecimiento económico y sostenimiento de las bases productivas en que el sistema se asentaba. En rigor, lo que se hizo notorio ya sobre la década del cincuenta, fue el carácter "modernizante-conservador" del modelo que no pudo remover su dependencia de las fuentes tradicionales de poder económico. La rigidez creciente de la esfera productiva, y

en consecuencia las limitaciones de los recursos económicos que pudiera sostener el modelo redistributivista, contrastaron con las altas aspiraciones y expectativas de vida que la sociedad toda había acumulado a lo largo de varias décadas y que siguieron adelante aun en los momentos de crisis económica. La expansión del sistema educacional en el período 1950-60, con tasas excepcionales de crecimiento de los niveles medios y altos, contribuyó poderosamente a incrementar y legitimar las aspiraciones de los sectores medios y de las clases bajas incorporados al sistema. Al mismo tiempo, el segundo empuje industrializador del período "neobatllista" en la posguerra, hizo lo mismo con los estratos bajos urbanos (movilización por migraciones del campo a la ciudad, conformación de un proletariado urbano dependiente moderno). A ello se agregó la capacidad de organización y demandas de los diferentes grupos y sectores involucrados en la esfera laboral, cuyo ingrediente novedoso fue su alta capacidad de movilización.

Las consecuencias de este proceso de expansión diferencial del orden social sobre pautas modernas y de la rigidez de la estructura de poder económico incapaz de dar continuidad a un crecimiento capitalista sostenido, se manifestó en la tensión estructural creciente característica de las crisis reiteradas de los modelos de modernización conservadora.[8] En tanto los sectores populares movilizados a través de diferentes movimientos sociales desarrollados alrededor del trabajo, el consumo, la prestación de servicios del Estado, la seguridad social, el sistema educativo, la política de viviendas, etcétera, presionan sobre el aparato estatal y los gobiernos de turno con nuevas demandas, desde el Estado se apeló a políticas de corto plazo de escaso grado de racionalidad económica tendientes a resolver emergencias y sostener la legitimidad.

La primera expresión electoral del deterioro de este exitoso modelo de convivencia logrado por el país a lo largo de medio siglo, fue la derrota del batllismo en 1958, después de más de noventa años de continuidad en el poder, y su desplazamiento por el Partido Nacional. Paradojalmente, sin embargo el grado de tensión y la movilización social consecuente que erosionó las bases de legitimidad secular del Partido Colorado, no significó un afianzamiento de los sectores populares de izquierda en la esfera electoral sino que dio lugar en rigor, a una forma de "restauración conservadora". De allí en adelante, los gobiernos blancos y colorados que se sucedieron hasta el golpe de Estado de 1973 debieron manipular el sistema de dominación bajo una situación potencialmente explosiva por el "desborde" de los movimientos sociales en un clima de polarización y radicalización ideológica donde crecieron en los dos extremos del espectro ideológico las opciones autoritarias.

El punto más importante a destacar es, sin embargo, que la forma que adquiere el conflicto y el poder relativo de los actores involucrados,

no se establecen en la arena electoral parlamentaria como una oposición de empate o equilibrio de fuerzas, sino que opera en diferentes planos; en el sistema partidario-electoral-parlamentario por una parte, y en el sistema de los movimientos sociales por otra. La hegemonía electoral continuó perteneciendo a los dos grandes partidos tradicionales cuya naturaleza "catch all" les permite una amplia base de apoyo, pero las expresiones contestatarias se expresaron como forma efectiva de ejercicio de poder de la izquierda, minoritaria electoralmente, en los movimientos sociales. Esta incapacidad de trasladar al plano electoral y parlamentario el equivalente del poder de movilización, demandas, "veto" y capacidad de presión de los movimientos sociales, al igual que la escasa representatividad de los grandes partidos multiclasistas, evidenciaron, sin duda, uno de los más críticos problemas de mediación del sistema político.[9]

Es precisamente en este contexto —el de mediación y representatividad del sistema político— donde corresponde ubicar el papel que juegan los movimientos sociales en la crisis, y el que pueden venir a jugar, en el proceso de profundización de la democracia.

Sociedad y movimientos sociales

Estamos por lo tanto ahora en condiciones de discutir con más propiedad las características de los movimientos sociales, sus orígenes, sus trayectorias y sus posibilidades de transformación en la reconstitución del orden democrático.

En la extensa literatura especializada que se ha generado en las últimas décadas acerca de los movimientos sociales, tanto en referencia a Latinoamérica como al mundo desarrollado, surgieron dos grandes aproximaciones: por una parte la literatura sobre América Latina se ha desarrollado alrededor de dos supuestos básicos: a) el carácter excluyente del sistema político y la cuestión nacional como un problema no resuelto y b) la ausencia del papel articulador de los partidos políticos como instancias de mediación efectiva.

Los movimientos sociales como formas colectivas de solidaridad han sido tradicionalmente explicados como resultantes de procesos incompletos o truncados de conformación de las sociedades nacionales. En consecuencia los movimientos sociales se vieron como la expresión de tensiones estructurales por grandes mutaciones en la estructura de la sociedad civil derivadas ya sea de: a) la definición de la territorialidad nacional (conflictos de centralización, conflictos entre poderes locales, etcétera); b) los movimientos surgidos alrededor de solidaridades religiosas, étnicas o culturales en competencia entre sí y con la solidaridad nacional; c) la conflictiva integración de la "periferia" al "centro" (exclusión de la participación política, cuestión de la ciudadanía), o bien, d) la lucha alrededor de la estructura de desigualdades económicas y privilegios

sociales de la estructura socioeconómica (cuestiones de redistribución, acceso, movilidad social y conflictos de clase).[10]

La inexistencia de una plena incorporación de la población a un sistema político con mecanismos eficientes de intermediación, ha señalado a su vez a los partidos políticos como los "grandes ausentes" del rol que los mismos jugaron tradicionalmente en los sistemas pluralistas democráticos de los países más desarrollados. En este sentido, la literatura ha insistido en el papel alternativo de la participación política en los movimientos sociales, como respuesta a la omisión de mecanismos representacionales plenamente institucionalizados (inestabilidad política, fragilidad de las instituciones propias del liberalismo político, carácter excluyente o elitista de la política).[11]

Por otra parte, cuando se consideran las interpretaciones acerca de los "nuevos" movimientos en los países más desarrollados, los supuestos son otros y se concentran casi con exclusividad en las mutaciones estructurales derivadas de: a) las más recientes formas de gestión del Estado *(welfare state)* y la proliferación consecuente de una gran diversidad de solidaridades (re) creadas alrededor de las clientelas estatales[12]; b) los desplazamientos de los procesos de acumulación (importancia creciente del conocimiento en desmedro de los recursos materiales)[13] y c) la pérdida relativa de centralidad del conflicto capital-trabajo en desmedro de los conflictos desarrollados alrededor del consumo, condiciones de bienestar, y calidad de vida.[14] La crisis de los partidos políticos como instancia de mediación y representación eficientes (y no la ausencia de ese papel) es, por otra parte, otro de los temas recurrentes en los estudios, y se le atribuye la emergencia de nuevos actores colectivos. En sus versiones más elaboradas lo es también la forma de mediación concertada (neo-corporativa) por su carácter excluyente de otros intereses que no se organizan alrededor del capital y del trabajo. Al respecto, en palabras de Schmitter[15] "lo que ha cambiado extensiva e irreversiblemente —en las sociedades capitalistas avanzadas— son los procesos de intermediación política por los cuales el volumen potencial de demandas societales es capturada y concentrada y a través de los cuales los patrones eventuales de las políticas públicas son analizados y evaluados".

En suma, si se trata de caracterizar la naturaleza de los movimientos sociales en el mundo desarrollado y en los países latinoamericanos, parecen existir suficientes evidencias que sugieren la conveniencia de evitar extrapolaciones simplistas entre uno y otro contexto. Como lo plantea Grossi en su estudio,[16] "contrariamente a lo que pasa con los movimientos sociales en los países de capitalismo avanzado, que no presentan como prioritarias reivindicaciones de aumento de participación y de representación en el sistema político, estas reivindicaciones son fundamentales en América Latina ya que el problema de la incorporación ple-

na de los sectores populares al sistema político aún no ha encontrado solución".

Nosotros no discutiremos esta aseveración —que sin duda es correcta— en tanto constituye una caracterización de los rasgos dominantes de la región, pero sí tenemos objeciones si se trata de generalizar la afirmación de Grossi como un patrón válido para cualquier país de la región.

De la discusión previa acerca de la conformación de la estructura social y política del Uruguay, se desprenden con claridad algunos rasgos que lo aproximan más a la "tipología" de las sociedades más desarrolladas que a las latinoamericanas.

En primer lugar, con respecto al problema de la incorporación —o marginalidad— al sistema político, las crisis reiteradas de incorporación política (ampliación del mercado político), que generaron recurrentemente en la región inestabilidad endémica (o coerción más o menos abierta), no estuvieron presentes en la formación del Uruguay moderno. La incorporación, al contrario, operó como un tránsito relativamente fácil tanto en la faz de absorción de los nuevos sectores proletarios en los dos empujes industrializadores, como en la emergencia de las modernas clases medias urbanas. Incluso las clases bajas rurales, sectores éstos donde se localiza la marginalidad política dominante en los países de la región, estuvieron tradicionalmente incorporados a los partidos históricos.

En segundo lugar, los partidos políticos jugaron un papel capital como agencias mediadoras del sistema político. Su estabilidad y continuidad seculares tienen, en este sentido, mucho más afinidad con el papel histórico de los partidos en las democracias liberales de los países desarrollados que con las débiles estructuras partidarias latinoamericanas. En este sentido, también es pertinente hablar de una crisis de un sistema que fue eficiente y luego fracasó como instancia de intermediación entre la sociedad civil y la política. Si se quiere expresarlo con más propiedad, puede afirmarse que las instituciones clásicas del liberalismo político tuvieron plena vigencia y en ellas descansó el excepcional modelo de desarrollo económico y estabilidad democrática del país. Por ello, también las condiciones que generaron la ruptura del orden democrático en 1973 deben ser vistas, en sentido estricto, como el agotamiento de un modelo de dominación mediante un eficiente sistema de representación y mediación política y no como una ausencia o una institucionalidad nunca lograda.

En tercer lugar, la proximidad del modelo uruguayo al "polo desarrollado" también se manifiesta en la intensidad y el tipo de tensiones a que dan lugar las diversas formas de expresiones colectivas partidarias y extrapartidarias. Dos aspectos son señalables al respecto: por una parte la centralidad que ocupan las tensiones propias de la estructura de desigualdades socioeconómicas en oposición a la escasa relevancia de las tensiones de las etapas anteriores de la formación del Estado nacional (territorialidad, identidad cultural y ampliación del mercado político). Por otra parte, el elevado grado de libre asociabilidad expresado en la intensidad del fraccionamiento y diversificación de las solidaridades de grupos y sectores alrededor de intereses específicos.

IV. Movimientos sociales; tipos y características

Los cinco trabajos elaborados sobre Uruguay dentro del marco del Programa de Movimientos Sociales han cubierto las siguientes áreas: organizaciones urbanas en las áreas de consumo y organización barrial, movimientos sociales de mujeres, movimientos juveniles, organizaciones laborales y movimientos rurales.[17]

La elección es relativamente arbitraria y naturalmente deja de lado otras expresiones de organizaciones colectivas de indudable relevancia para una visión más completa del tópico. Sin embargo, en la medida en que ello sea posible, se procurará discutir comparativamente otros casos que no caben dentro de estos estudios.

Una segunda aclaración introductoria es necesaria: la demarcación temática que siguen esos estudios no será adoptada como guía del desarrollo que aquí se efectúa. Seguiremos en cambio, una ordenación de la exposición de acuerdo con los criterios expuestos en los puntos precedentes, procurando distinguir tipos de movimientos de acuerdo con los referentes de su acción.

a) Movimientos sociales barriales orientados a las necesidades básicas

En esta categoría se incluye una multiplicidad de formas organizativas de los grupos de vecinos y comunidades barriales tendientes a enfrentar las condiciones de deterioro de sus niveles de vida a partir de las políticas instrumentadas por el régimen autoritario. Muchas de estas organizaciones ya existían con anterioridad a 1973, aunque como derivación de aquellas políticas tomaron mayor vigor o redefinieron sus objetivos.

En esencia, se trata del "surgimiento y articulación de una multiplicidad de organizaciones populares de base territorial que se nuclean a partir de sus necesidades básicas y asumen paulatinamente conciencia real de la globalidad de su problemática, definiendo a sus interlocutores, estableciendo mecanismos de presión ante las autoridades y creando sus propias formas solidarias para el desarrollo de su acción".[18] En otros casos, el origen de los movimientos deriva de algún tipo de política pública específica que afecta por igual a un sector específico de la población (por ejemplo, políticas habitacionales, desalojos, etcétera).

En esta categoría se encuentran los Servicios de Salud Populares

Privados (SSPP) que comprenden Unidades Básicas para la atención de la salud, los Clubes de Compra y las ollas populares, orientados a la satisfacción de las necesidades básicas alimentarias (estrategias tendientes a eliminar la intermediación, establecimiento de centros de abastecimiento, asociación de familias para la adquisición colectiva, las cooperativas de consumo y elaboración colectiva de viandas familiares y de atención a la alimentación de niños y ancianos). Por su naturaleza, estrechamente vinculada a la división de roles de género, aquí se incluyen también muchas organizaciones de mujeres (organizaciones barriales de amas de casa, organizaciones de amas de casa constituidas en torno de los sindicatos y organizaciones de mujeres surgidas en relación con el trabajo de comunidades religiosas).[19]

También en esta categoría se incluyen los grupos de relocalización o reconstrucción barriales cuyos orígenes se refieren en algunos casos a consecuencias directas de políticas habitacionales, como el nucleamiento inicial de nueve barrios en la Comisión Pro Vivienda Decorosa a raíz de la política de desalojos y relocalización instrumentada por el gobierno y del intento de erradicación de las zonas de "cantegriles" (viviendas de emergencia en el cinturón de la Capital). Este movimiento Pro Vivienda Decorosa (MOVIDE), se transformará luego, como lo discutiremos más adelante, en otro de fines más amplios, el Movimiento Pro Vida Decorosa.

Como regla general, todos estos movimientos provienen o encuentran su apoyo en otro tipo de instituciones ya constituidas. En particular, al igual que lo que ha ocurrido en otros países como Chile y Brasil, la Iglesia católica y otras comunidades religiosas tienen un activo papel de promoción, cobertura y orientación de las actividades de estos grupos. Con respecto a los SSPP, se estima que en 1985 y luego de un período relativamente largo de existencia, de los 55 Servicios de Salud detectados en Montevideo, un 62,5 % tienen relación directa con instituciones religiosas. Algo similar, aunque no estimado en su magnitud, se calcula para las organizaciones involucradas en otras actividades como en la gestión por alimentación y vivienda. Otras organizaciones comprenden desde los grupos de vecinos organizados en Comisiones Vecinales, hasta los sindicatos (principalmente las organizaciones de amas de casa) pasando por otro tipo de organizaciones populares como las cooperativas de vivienda y los grupos sociales y deportivos y otras cooperativas de producción. Existen, a su vez, instancias organizativas de segundo grado que agrupan y coordinan las actividades y programas de cada organización particular. Así, para las SSPP desde 1983 se constituye la Coordinadora de Policlínicas Barriales; para los Clubes de Compra, la Mesa Coordinadora, en tanto que para las organizaciones dedicadas a la elaboración de alimentos se constituye la COP (Coordinadora de Ollas Populares).

En materia de objetivos, metas y propuestas, no es posible establecer generalizaciones que serían arriesgadas —o, en el peor de los casos, equivocadas— de manera de incluir todos estos movimientos en una sola categoría. No obstante, de acuerdo con los estudios elaborados, parecen existir ciertos patrones comunes en la dinámica de formación y reformulación posterior de sus objetivos.

Se destaca al respecto que las formas iniciales de organización de estos grupos tienden a establecerse en forma "reactiva", focal —o estrecha— en la definición de sus intereses, por lo general circunscritas a las necesidades inmediatas —individuales o familiares— y no más allá de un escaso número de actores que interactúan en la pequeña unidad territorial de la comunidad, el círculo de amigos o las relaciones laborales. La constitución del MOVIDE es un ejemplo de ello, en la medida en que políticas públicas generan ciertas áreas de igualdad y alrededor de ellas se comienzan a establecer vínculos de solidaridad movilizadores. Lo mismo ocurre en las ollas populares y las SSPP, donde solidaridades preexistentes en núcleos de acción con otros fines dan lugar a organizaciones especializadas en un "issue" particular de las necesidades básicas.

En un segundo momento, el objetivo estrecho de reivindicación es ampliado y colocado en un marco más general —y abstracto— de referencia del problema en cuestión. De alguna forma se trata de una "ideologización" a la cual no son ajenos agentes externos movilizadores, como profesionales, técnicas en promoción y grupos políticos e ideológicos.

En estos procesos de transformaciones desde una perspectiva "reactiva", hacia otra "de iniciativa"[20] parece también claro que juegan un papel importante las organizaciones de segundo grado que coordinen las actividades de cada movimiento particular.

En los movimientos que agrupan a las SSPP, a partir de un primer momento de acciones parciales y estrechamente orientadas, se da lugar a una plataforma de acción conjunta a través de la coordinadora, en donde se establece una referencia explícita a las definiciones internacionales de la salud de la Organización Mundial de la Salud, se vinculan los problemas inmediatos de atención de la salud con las cuestiones de condiciones de vida, de educación, saneamiento, trabajo y alimentación, y se establecen objetivos más generales ya de naturaleza política: generar conciencia de la responsabilidad institucional del Estado y crear vías de instrumentación de presiones, fomentar la participación de la comunidad en las policlínicas y en la Coordinadora, estudiar el financiamiento común, unificar recursos e iniciar actividades de formación, apoyo e intercambio de experiencias y asesoramiento.

Como resultado de esta reformulación de intereses las SSPP participan finalmente en la concertación nacional programática de 1984 (CONAPRO) y proponen la creación de un Servicio Nacional de Salud de cuyo órgano representativo, de acuerdo con lo resuelto, formarán parte.

La transformación del MOVIDE en el Movimiento Pro Vida Decorosa, es también un ejemplo de la transformación de los objetivos. A partir de una fase reactiva tendiente a la defensa de los intereses de los afectados por las políticas públicas, se pasa a una fase de iniciativa centrada en la cuestión habitacional, para luego ampliar los objetivos de la organización incluyendo otros tópicos y una interpretación de sus condiciones de vida (trabajo, vivienda y educación). Esta formación, de acuerdo con Rodé, Marsiglia y Piedracueva, implica un cambio desde una postura reivindicativa-reformista a otra política transformadora.

En este movimiento aparece claramente, en forma explícita, un conjunto de actitudes de rechazo a los políticos. Actitudes que están presentes también en movimientos que no excluyen un referente estatal en su acción. Por último, en su faz programática las reivindicaciones de este movimiento se extienden a la demanda de políticas más generales que incluyen reivindicaciones de otros movimientos: plan nacional de trabajo, expropiación de todos los terrenos, apoyo estatal a comedores barriales con la participación de los vecinos y adecuación de la educación a la realidad social.

En tercer lugar, con respecto a las organizaciones de amas de casa en donde la constitución de una multiplicidad de unidades barriales con objetivos focales en los aspectos de la vida cotidiana y reproducción de la familia había tenido lugar como defensa frente al deterioro del nivel de vida, se registran también reformulación de intereses a través de la agregación de unidades en forma coordinada. La constitución de FUADEC (Federación Uruguaya de Amas de Casa) en el año 1984 establece un programa de transformaciones políticas, económicas y sociales donde se destacan las reivindicaciones de trabajo, salario, defensa de la canasta familiar, sistema único de salud, aplicación del Plan Nacional de Viviendas, enseñanza democrática participativa, y como reivindicación específica de la mujer, unificación de todos los movimientos de mujeres del Uruguay.

Finalmente, corresponde señalar un movimiento de naturaleza un tanto diferente a los discutidos hasta aquí, el Movimiento Juvenil Cooperativo (MJC).

Se trata de una organización de jóvenes de los estratos populares que constituye un fenómeno relativamente atípico en el contexto uruguayo, donde predominan en la juventud los movimientos de clase media. Perteneciente a la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM), es una derivación de acciones conjuntas que FUCVAM desarrolló con la Asociación Cristiana de Jóvenes. El MJC presenta un interés especial porque permite identificar otro tipo de movimientos, existentes con anterioridad al período autoritario. El FUCVAM en efecto, deriva de la larga tradición cooperativa del país entroncada con políticas públicas del "Estado de bienestar". Se trata sin

duda de un movimiento que en su origen comprende los aspectos de necesidades básicas (vivienda) y a la vez de una forma autogestionaria-cooperativa de producción.

Con respecto a sus fines, también aquí son reconocibles desde la constitución del MJC una amplia gama de reivindicaciones y propósitos que guardan relación con los de su institución "madre" (defensa de la legislación de viviendas cooperativas, administración de servicios comunales de las unidades cooperativas —guarderías, comedores, policlínicas, bibliotecas, ollas populares, etcétera—) a la vez que objetivos más generales: solidaridad y apoyo a las reivindicaciones de movimientos juveniles y populares en general.[21]

En suma, los movimientos aquí referidos parecen haberse constituido durante el período autoritario en formas efectivas de participación popular, a través del reforzamiento de los lazos primarios con la comunidad de pertenencia y el estímulo a formas de solidaridad desarrolladas alrededor de "nuevas" áreas de igualdad creadas por el autoritarismo. En este sentido, no son solamente razones económicas (deterioro de niveles de vida) las que explican el vigor de estos movimientos, sino también factores sociales (desestructuración y anomia), los que tienden a reforzar las relaciones primarias, y factores de naturaleza política (pérdida de nexos de articulación con el Estado y con los partidos políticos).

En segundo lugar, también deben mencionarse como efectos derivados de este tipo de movilización, los procesos de formación de capacidades autogestionarias y la legitimación de derechos. Aunque es cierto que algunas dudas caben acerca del carácter "asistencialista" o dirigido de muchos de estos movimientos y de la consecuente relativa pasividad de sus miembros.

Por otra parte resulta claro también que, con la misma evolución de los movimientos y sobre todo con las instancias de coordinación en un nivel organizativo superior, se dieron dos procesos que tienen implicaciones para su desarrollo futuro: por una parte la difusividad y pérdida de perfil de las reivindicaciones (o áreas de interés) del movimiento; por otra, las reivindicaciones de naturaleza corporativa en algunos de ellos que los llevan a reclamar una participación (representación) directa en esferas decisorias, sin la mediación de ninguna otra instancia política.

Obviamente, de afirmarse estas dos tendencias en un mismo movimiento, se estaría en presencia de solicitaciones contradictorias. Por otra parte, si tiene lugar la demanda de participación directa de estas expresiones de intereses colectivos, ello sólo sería posible si el sistema global de mediación se orientara en términos corporativos o semicorporativos.

b) Movimientos gremiales y corporativos rurales

Discutiremos aquí tres tipos de experiencias rurales que han sido desarrolladas en los trabajos preliminares del Proyecto. Por una parte, el intento de creación de un Movimiento de Agricultores Familiares sobre los finales del período autoritario,[22] por otra parte, dos experiencias de movimientos juveniles rurales, uno de larga data formado a mediados de la década del cuarenta, el Movimiento de la Juventud Agraria (MJA) y el segundo constituido en 1981, la Federación Rural de Jóvenes (FRJ). [23]

Los dos movimientos juveniles tienen su origen a partir de otras instituciones de naturaleza gremial; en el caso de los MJA su creación proviene de un auspicio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay; los FRJ a su vez, son de hecho una rama particular de la Federación Rural del Uruguay. Esta y la Asociación Rural constituyen las más fuertes agremiaciones de los grandes empresarios agropecuarios.

Se estima que aproximadamente un 3,3 % del total de jóvenes rurales del país participan del MJA, en tanto que la cobertura del MRJ es considerablemente menor.

En sus aspectos programáticos, los objetivos de ambos movimientos coinciden en acciones orientadas hacia la producción y al desarrollo de la juventud rural, afianzamiento de una conciencia ruralista, afincamiento de la juventud en el medio, mejoramiento de la calidad del trabajo rural, fortalecimiento de los lazos de solidaridad de las comunidades rurales, mejoramiento de la producción, etcétera.

Como diferencia, se destaca que los MJA han experimentado una transformación paulatina de sus fines hacia actividades productivas (líneas de crédito, comercialización, etcétera), en tanto el MJR, por su inserción en una institución gremial y sus estrechos contactos y fuentes de financiación provenientes de la Asociación Rural y otras sociedades de fomento rural locales, han tendido a desarrollar actividades más generales y amplias. A su vez, a diferencia de otros movimientos rurales y urbanos que son característicos de este período, el MJR ha sido el único movimiento juvenil que a partir de 1974 comenzó a recibir un apoyo del Estado. En relación con las formas organizativas, dada la naturaleza de estos dos movimientos juveniles, se trata de modalidades semiautónomas de sus instituciones "madres". Los MJA se organizan de acuerdo con Clubes Agrarios Juveniles (CAJ) reunidos en torno de escuelas rurales (principalmente concentrados en las regiones sur y litoral oeste del país). Cada unidad, coordinadamente con la Federación, desarrolla principalmente actividades tendientes a propiciar la solidaridad y cooperación de sus miembros y con la comunidad de pertenencia y elevar el nivel social y cultural de sus miembros. Por su parte, el MJR se organiza en ocho grupos concentrados en las mismas regiones que el MJA.

Por último, en cuanto a la composición de sus integrantes, ambos movimientos constituyen expresiones de las "clases medias", comprendiendo casi exclusivamente jóvenes hijos de productores o bien estudiantes de diversas disciplinas agropecuarias. Las clases bajas rurales quedan por lo tanto excluidas de hecho y por ello "se encuentran absolutamente desmovilizadas, al no contar con organizaciones específicas que los nucleen, los organicen y los movilicen en procura del respeto de sus legítimos derechos".[24] La misma localización geográfica de las unidades que componen ambos movimientos indican a su vez su escasa —o nula— cobertura en las regiones de predominio de la ganadería extensiva, con altos índices de trabajo asalariado, y al contrario, su presencia en las regiones donde predomina la empresa mediana y familiar agrícola. Por estas razones, es difícil considerar a estos movimientos como formas de participación política popular, al mismo nivel que el de las experiencias urbanas ya referidas.

El movimiento de pequeños y medianos productores, más que un movimiento social plenamente constituido, es un proyecto de movimiento que se origina sobre el año 1984 (ya en pleno período de distensión política). Sin embargo, nos interesa considerarlo aquí porque: a) pone en evidencia el proceso de reformulación de intereses en un sector específico y b) ilustra sobre alguna de las posibles trayectorias de otros movimientos en la nueva fase democrática.

Si en los movimientos anteriores se destacó la presencia de una institución u organismo "superior" como patrocinante o fundador, en este caso las solidaridades que dan lugar al movimiento derivan del conflicto de intereses de un sector dentro de una institución "superior".

El Plenario de Pequeños y Medianos Productores nace de una fractura de las gremiales hegemónicas del sector rural representante de los grandes intereses ganaderos; la Federación Rural (FR) y la Asociación Rural del Uruguay (AR). Su objetivo es la representación de los intereses de los empresarios rurales pequeños y medianos distinguiendo un "área de igualdad" específica y diferente de los otros sectores. La propuesta de su constitución lo expresa claramente: "coordinar la acción gremial de los pequeños y medianos productores del país y *solidaridad* de los hombres y las instituciones afines; representar frente a los partidos políticos, los sectores sociales y otras instituciones, los *intereses* específicos de los pequeños y medianos productores agropecuarios, reivindicando el legítimo derecho a *representar* a sí mismos, discutir y formular una plataforma reivindicatoria constituida por las grandes líneas de política económica necesaria a estos intereses; reclamar y defender el derecho a la participación directa en los organismos encargados de diseñar, formular y ejecutar la política económica para éste".[25]

El origen de la ruptura radica en la convocatoria que los partidos políticos (en formación) dirigen a los empresarios y a otras fuerzas so-

ciales, tendientes a establecer los lineamientos de una concertación futura. Las dos grandes gremiales, a raíz de la convocatoria, proponen a las nueve agremiaciones de segundo grado que se constituyen en Comisión, una propuesta que es rechazada básicamente por dos gremiales que no aceptan las políticas de corte "neoliberal" en que se funda. De hecho, esta política había afectado duramente a la agricultura familiar durante el período autoritario y había generado una resistencia latente de los pequeños y medianos productores.

Como consecuencia de la propuesta referida del Plenario de Pequeños y Medianos Productores, liderada por la Asociación de Colonos y por Intergremial Lechera, se produce la rápida respuesta de las grandes gremiales; "Esto hay que erradicarlo de raíz" —son palabras del Presidente de la Federación Rural—, "queremos decir con toda convicción que las instituciones madres AR y FR, pretendemos y así lo hacemos, representar a todo el sector agropecuario y a todos los productores rurales del país... sin distinción de tamaño, de tendencia o de color".

Finalmente, como resultado del conflicto abierto desatado entre las partes, y de la negociación e intermediación de las otras agremiaciones que componen la "Comisión de los Nueve", se arriba a una fórmula de transacción; el Plenario de Pequeños y Medianos Productores pasa a integrar como décimo miembro la Comisión, pasa a ser uno de los representantes de la "Comisión de los Nueve" en las negociaciones de la Concertación, y se arriba a una propuesta común en donde: a) cada parte cede posiciones, b) los puntos conflictivos de discrepancia se expresan en términos abstractos y generales y c) en varios puntos el programa propuesto por la Comisión es contradictorio.[26]

También, como resultado de esa incorporación a las negociaciones con los partidos políticos, el Plenario de Pequeños y Medianos Productores no vuelve a reunirse en los cuatro meses siguientes, no demuestra ningún otro signo de actividad y prácticamente no existe.

Dejando a un lado lo anecdótico de la experiencia referida, hay por lo menos dos puntos que merecen atención; uno es específico y el otro de carácter más general.

En primer lugar, la experiencia de los pequeños y medianos productores rurales pone en evidencia ciertas condiciones que, de estar presentes, pueden inducir a la constitución de un movimiento. El impacto de la crisis de la empresa familiar, como consecuencia de la política neoliberal es una de estas condiciones, pero no es suficiente. La otra condición parece ser la ruptura de las articulaciones políticas y gremiales derivadas del desmantelamiento de los mecanismos tradicionales de mediación impuestos por el régimen autoritario (cierre de los canales de clientelismo político, desaparición de liderazgos locales, resentimiento de los mecanismos gremiales, atomización y segmentación de las solidaridades grupales). No en vano los movimientos de pequeños y medianos

productores agrícolas habían estado tradicionalmente vinculados bajo formas cooptativas a uno de los grandes partidos políticos y a las redes de influencia y "favores" de los aparatos estatales.

En este sentido, la autonomía que manifiesta el Movimiento de Pequeños y Medianos Productores en el momento de su constitución parece haber dependido de un proceso de combinación de factores políticos y económicos, pero, por otra parte, el hecho de que bajo el período autoritario no hubieran existido condiciones para que esa "autonomía" se manifestara, indica el carácter tardío de ese proceso. Cuando se manifiesta, lo hace porque ya el sistema político-institucional inicia su ciclo de recomposición (convocatoria de los partidos políticos) y el movimiento es rápidamente absorbido por aquél. Hasta qué punto jugaron un papel desmovilizador las instituciones de mediación recreadas, la articulación y superposición de los liderazgos políticos y gremiales en reconstitución, o las presiones "concertantes" de las fuerzas democráticas en su conflicto con el enemigo común (los militares), son hipótesis que no desarrollaremos aquí pero que sugieren la misma interpretación del fenómeno de autonomía-dependencia de los movimientos sociales.

Por último, estas consideraciones evidencian la imposibilidad de analizar la formación y reformulación de intereses en la participación política sólo como simples expresiones representacionales, de "abajo hacia arriba". Sugieren, al contrario, la necesidad de ver la formación de intereses como procesos dependientes de organizaciones altamente especializadas en capturar, orientar y dirigir las demandas de la sociedad.

Finalmente, no queremos cerrar este punto sin elaborar algunas consideraciones acerca de las características de las formas de participación política extraestatales —o ausencias— en el contexto rural uruguayo.

Los tres "movimientos" discutidos hasta aquí, son de hecho formas corporativas o puramente gremiales. No son movimientos rurales o campesinos como los que caracterizan gran parte de los conflictos rurales en América Latina, ni se parecen a ellos. Por qué ocurre esto es sin duda una pregunta "mayor" que no puede responderse simplemente y mucho menos en un trabajo cuyos objetivos son otros.

Sin embargo, parece posible sostener la hipótesis de que las particularidades de la oposición y conflictos rurales del Uruguay tienen mucho que ver con las características de una "organización productiva y social" un tanto peculiar y muy poco estudiada.[27]

Existen, como es bien sabido, múltiples tipologías que caracterizan diferentes sistemas asociados a la producción de bienes primarios y "complejos exportadores". Probablemente entre ellas la tipología económica más importante sea la de Barraclough,[28] en tanto que desde una perspectiva socio-política se cuentan las elaboradas por Steward y otros,[29] Wolf,[30] Stinchcombe[31] y Paige.[32]

Llama la atención, sin embargo, que en todas ellas los sistemas pro-

ductivos —y sus formas sociales consecuentes— en la ganadería extensiva, ocupen un lugar secundario o a veces estén totalmente ausentes. Cuando se los incorpora a las tipologías es más por razones de "cierre del campo" (exhaustividad) que por un interés específico en ellas. Entre las tipologías socio-políticas, Stinchcombe es el único que incluye explícitamente este tipo:

"La producción extensiva, lana y carne empleando mano de obra asalariada se desarrolló en el oeste norteamericano, en Australia, en Inglaterra y en Escocia durante y después de la Revolución Industrial, como también en la Patagonia, en otras partes de Sudamérica y en el norte de México... La característica social de estas empresas es una mano de obra móvil, de libre desplazamiento, a menudo con escasos lazos familiares, que vive en barracas y come en algún tipo de comedor colectivo del establecimiento".[33] (Traducción propia)

De todas formas el tratamiento de este tipo, termina prácticamente en la enumeración de estas características.

El sesgo existente en estas tipologías hacia los sistemas de hacienda, plantación, pequeña propiedad y empresas familiares en arrendamiento tiene sin duda una explicación: se origina en el tipo de sociedades que estudiaban sus autores y en los tipos predominantes de organización de la producción. Sin embargo, no se explica tan claramente este sesgo cuando los trabajos han tenido metas más ambiciosas y han procurado caracterizar las formas de solidaridad, cohesión y conflicto en las sociedades rurales de América Latina en el correr del siglo. Es probable que aquí se encuentre una explicación de la ausencia del tipo "ganadería extensiva". De hecho la escasa atención prestada a la "cultura of wool and beef" tiene mucho que ver con que los objetivos de estas tipologías estaban centrados en los problemas de inestabilidad, reforma y revolución en el campo, y éstos no han sido los rasgos contemporáneos más salientes de la organización extensiva ganadera.

Si los sistemas de hacienda fueron señalados como contextos favorables a la revuelta nacionalista agraria y los sistemas de arrendamiento como contextos favorables a la revolución agraria, las líneas de conflicto en los sistemas extensivos ganaderos de América Latina se establecieron más al nivel del reformismo (commodity) centrado en la distribución del ingreso más que en la propiedad de la tierra. Como regla general, el conflicto alrededor de la tierra tuvo escasa relevancia en relación con la presencia del conflicto derivado del acceso al capital financiero, industrial y comercial (maquinaria, facilidades de almacenamiento, procesamiento industrial, crédito y transporte).

En ausencia del conflicto típico del sistema de hacienda —de tipo suma cero— sobre el factor tierra, o de la relación asalariada alrededor del sistema plantación, las principales líneas de oposición bajo el sistema extensivo ganadero favorecieron un enfrentamiento característico por la

oposición al sistema de intermediación comercial (barraquero, acopiador) industrial (saladero, primero; frigorífico, después). Oposición que enfrenta los intereses rurales a los urbanos, o del campo a la política del Estado, más que oposición dentro del sector.

Ausentes en el sistema de producción ganadera extensiva las modalidades de reclutamiento de mano de obra características de la hacienda bajo la forma de coerciones extraeconómicas, reducida la población asalariada a escasos núcleos obreros sujetos a una alta rotación, y sin la presencia dominante de una forma productiva basada en el arrendamiento, no se establecieron las condiciones estructurales para que se manifestaran líneas internas de ruptura importantes que enfrentaran en su seno a los diferentes sectores de la sociedad rural. Todas estas líneas de conflicto sin duda existieron, pero ninguna de ellas pareció adquirir importancia suficiente para trasladarse a la arena política en una expresión que contrarrestara la ideología general de homogeneidad del sector rural en oposición al conflicto externo campo-ciudad. Ni las relaciones entre la gran y pequeña propiedad se expresó como una oposición de clase, dado el énfasis puesto en la propiedad de la tierra, ni la línea de ruptura asalariado-propietario fue definitivamente clara, dada la combinación de fuerza de trabajo asalariada ocasional con la pequeña propiedad.

Bajo estas condiciones, las líneas de conflicto y consenso de la producción ganadera tendieron a favorecer el liderazgo de los sectores más organizados en un conflicto que enfrenta principalmente al campo y la ciudad.

La expresión política rural fue por lo tanto conservadora, arrastrando tras de sí a los sectores más bajos rurales. "No resulta probable que los productores agrarios que obtienen su ingreso de la tierra formen fuertes partidos de propietarios de tierras..."[34] (Traducción propia)

"... Cualquiera sea la naturaleza de la organización externa que proporcione el marco de los movimientos integrados por agricultores que producen para el mercado, es probable que su objetivo esté constituido por los intermediarios que forman la verdadera clase alta agrícola. Este conflicto puede adquirir forma política, pero, dado el comportamiento político de una clase alta comercial, es más seguro que implique una lucha económica en torno del control del mercado de bienes. Lipset dice que la organización inicial de los productores de trigo de Saskatchewan se dio como un *pool* del trigo destinado a romper el poder de los operadores de silos y de los acopiadores de granos. Los intermediarios respondieron tratando de anular el *pool*, pero éste último tuvo éxito hasta el momento de caída extrema del mercado mundial de granos, durante la Depresión. Las demandas de los movimientos populistas norteamericanos en cuanto a poder acuñar plata o papel moneda pueden ser comprendidas como una forma de lucha económica para obtener tasas de interés más bajas, reduciendo el valor de los préstamos."

"En tales enfrentamientos económicos el centro de la problemática de los agricultores comerciales deriva en forma directa de sus relaciones de una clase alta integrada por intermediarios y prestamistas. Las relaciones entre las dos clases se basan en un tira y afloje por la obtención de una parte mayor de las ganancias derivadas del mercado de bienes, no en un conflicto indisoluble en torno de un recurso limitado." [35] (Traducción propia).

La expresión de estas formas de solidaridad y conflicto en el interior del sector rural se encuentra en el tipo de "nacionalismo agrario" que Real de Azúa [36] señalara como uno de los principales aglutinadores políticos del sector ganadero en el Uruguay, y en las organizaciones gremiales de los sectores rurales. Es claro que la representación consensual del sector ganadero como un todo homogéneo no ha sido siempre perfecta y tanto la historia del Partido Nacional como la de las gremiales rurales así lo han demostrado. Sin embargo, incluso en los momentos de ruptura gremial de la representación, la capacidad de absorción del conflicto por parte del sistema político demostró el papel central que la articulación partidaria tradicional ha jugado como factor de integración.

Ello se manifestó en una oportunidad en la secuencia irrupción-absorción del Movimiento Ruralista liderado por Benito Nardone, [37] y posteriormente, como lo hemos discutido, en el intento de constitución del Movimiento de Pequeños y Medianos Productores Rurales.

c) Movimientos urbanos: sindicato y estudiantes

Existen buenas razones para agrupar en una misma categoría los movimientos sindicales y estudiantiles. Ambos constituyen los movimientos de mayor permanencia y estabilidad, son los de mayores alcances, tanto por su cobertura numérica como por sus proyecciones en la sociedad, y a la vez comprenden las expresiones extraestatales más institucionalizadas. En cierta forma se trata de dos "movimientos clásicos"; uno de ellos por el carácter "universalista" de las solidaridades que los define (clase), el otro como movimiento social típico de una expresión latinoamericana de las clases medias.

1. Con respecto al origen del movimiento estudiantil, "aunque podrían rastrearse importantes antecedentes, como los relativos a la Asociación de Estudiantes del Uruguay en 1893, y la realización del Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos en 1908, será a partir del influjo de la Reforma de Córdoba en 1918 y el surgimiento de la Federación Universitaria del Uruguay (FEUU) en 1929 que se estructurará con gran fuerza el movimiento estudiantil".

Se podría agregar que esa fuerza lo distinguió de los movimientos similares de otros países de la región, por el hecho de que alcanzó a institucionalizar una participación formal en el poder universitario a

través de la Ley Orgánica de la Universidad de la República en 1958. La misma asegura la autonomía de la Universidad con respecto al poder político, así como la constitución de tres corporaciones que la gobiernan (profesores, estudiantes y egresados). [38] En la práctica, por lo tanto, el movimiento estudiantil —en su componente dominante que es el universitario— no es sólo un sector subalterno a una estructura institucional, sino que constituye una de las corporaciones gobernantes de esa estructura.

A partir de 1973 y bajo el régimen autoritario (y aun antes de aquel momento), el movimiento estudiantil experimentó una de las más duras represiones por parte del régimen en razón del elevado grado de movilización y radicalismo político de las posiciones políticas asumidas. Por tratarse de un movimiento donde predominaron abrumadoramente las posiciones de izquierda —y extrema izquierda—, se constituyó, conjuntamente con el movimiento sindical, en uno de los movimientos sobre el cual los objetivos de desmovilización del régimen fueron más intensos.[39]

Con posterioridad al período autoritario, y en el mismo desarrollo de la "apertura política", la reconstitución del movimiento estudiantil fue rápida aunque dificultosa.

Su primera expresión pública y formal fue la constitución de la ASCEEP (Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública), la cual comienza a reconstituir las estructuras organizativas y a organizar las primeras movilizaciones estudiantiles. Antes, en forma clandestina y a través de apariciones esporádicas, ya existían organizaciones estudiantiles típicas del período de "resistencia". En cuanto a sus características y orientaciones actuales, Rodríguez[40] señala que algunas diferencias significativas son reconocibles en el "nuevo movimiento estudiantil..." entre otras; la mayor pluralidad ideológica existente en su seno (incluyéndose expresiones organizadas —no menores— correspondientes a los partidos tradicionales, especialmente del Partido Nacional); una actitud de fuerte crítica a la "Universidad autónoma" (1958-1973) que contrasta con la "idealización" que de la misma hicieron y hacen sus principales protagonistas; la todavía inexistente "alineación" internacional actual, que contrasta con la integración de la FEUU en la UIE (Organización Latinoamericana de Estudiantes y Unión Internacional de Estudiantes, respectivamente); y la considerable existencia de "independientes" formando parte de la "militancia" estudiantil.

Finalmente habría que señalar que, a partir de la Convención de mayo de 1984, el movimiento se estructura en base a cuatro ramas: ASCEEP-FEUU a nivel universitario (unificándose a partir de entonces las tendencias internas), ASCEEP-FES (Federación de Estudiantes de Secundaria), ASCEEP-CGEUTU (Coordinadora Gremial de Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay —enseñanza técnica—) y

ASCEEP-FEI (Federación de Estudiantes del Interior). Salvo en el nivel universitario, la representatividad de los otros tres organismos es muy baja, aunque las razones son diferentes en cada caso particular, por lo que las posibilidades de superación de las limitaciones en número de adherentes, niveles de organización y movilización, etcétera, también son diferentes en cada caso concreto.

La extensión del movimiento estudiantil es relativamente baja en general, aunque más significativa en el nivel universitario, donde aproximadamente la tercera parte de los estudiantes matriculados están afiliados a la ASCEEP.

Los debates internos en cuanto al rol del movimiento estudiantil, la realidad nacional e internacional, etcétera, están siendo particularmente fértiles, aunque han sido pocas las instancias en las que dichos debates se han procesado.

Debería agregarse a ello que en la actual coyuntura, caracterizada por la acumulación de tendencias de largo plazo y la reversión de las condiciones de vida que el modelo autoritario-neoliberal produjo sobre todos los sectores sociales y particularmente sobre las clases medias, se trata ahora de un movimiento que refleja: a) la profunda caída de estos sectores y clases sociales que habían experimentado niveles de vida superiores en un momento anterior, b) el bloqueo de los canales de movilidad social en donde el sistema educativo había jugado un rol preponderante (devaluación de la educación), c) la masificación educativa que ha seguido adelante, y d) la intensa competencia en el mercado ocupacional de los "saberes superiores" acreditados por el sistema educacional.

Todo ello configura una situación en la cual la devaluación de las credenciales educativas probablemente no sólo conduce al fenómeno de las "expectativas frustradas" del profesional que egresa, sino que la frustración anticipada del estudiante que ingresa al sistema educativo es la dominante durante todo su período escolar. Se trata sin duda de un incremento considerable de la tensión estructural en un área particularmente sensible del cuerpo social dentro de un proceso global de "proletarización" de las clases medias.

2. En cuanto al movimiento sindical, y en virtud del proceso de transición y recomposición de sus fuerzas con posterioridad al período autoritario, es poco también lo que se puede afirmar sobre estructuras actuales y tendencias futuras. Incluso con respecto a momentos anteriores, a pesar de su gravitación como actor relevante del juego político, se conocen escasos estudios sistemáticos y documentos al respecto. Más allá de algunos pocos trabajos especializados, algunos de ellos elaborados por líderes sindicales, se está lejos de tener un conocimiento equivalente al que se tiene para los movimientos sindicales de la Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. El trabajo de Cosse al respecto viene a llenar este importante vacío.

Gran parte de la centralidad que han tenido los movimientos sindicales en la polémica y en las proposiciones más o menos elaboradas de los actores directamente involucrados en la actividad sindical, se ha desarrollado alrededor de los aspectos ideológicos y estratégicos del movimiento, pero poco es lo que se conoce de otros aspectos de indudable importancia. Los temas de las relaciones laborales y el sindicalismo, tecnología y organización del trabajo, estructuras sindicales, reclutamiento de líderes, identidades, jerarquías internas y relaciones líderes-masa, son tópicos prácticamente no abordados —salvo raras excepciones— por ningún estudio específico.

Si se observa la reconstitución del movimiento sindical durante y con posterioridad al momento autoritario, se verifican pautas muy similares a las que se señalaron para el movimiento estudiantil. La diferencia es tal vez que en este caso, la misma política desarrollada por el régimen militar clausuró y a la vez abrió espacio para ciertas formas de actividades gremiales inmediatamente después del golpe de Estado. Luego de un intento de mantener controlados los "nuevos" sindicatos, y ante el fracaso en lograr extirpar las viejas estructuras que tienden a recrearse por la libre afiliación de los trabajadores, el gobierno pone en marcha un sistema de "empresas paritarias" en donde se excluye a los dirigentes gremiales del período democrático. El proceso se concreta sólo en 1981 y, de hecho, durante este período se congela la actividad sindical en el país. Sin embargo, esta reglamentación sindical forzada por el régimen mantiene latente una actividad que luego dará lugar a una restructuración plena bajo la forma inicial del PIT y luego PIT-CNT.

Refiriéndose a las características que toma esta recomposición, Cosse [41] indica: "En primer lugar hay que señalar la aparición de un nuevo grupo de dirigentes y cuadros intermedios que sustituyeron a los que estaban en el exilio o la cárcel. Surgidos en las difíciles condiciones del autoritarismo, en una etapa de receso aunque no de inmovilismo, les tocó la difícil responsabilidad de reorganizar al movimiento popular".

"En segundo lugar, en una situación de semilegalidad —una central sindical estaba prohibida aunque era de hecho tolerada por el régimen— el Plenario Intersindical de los Trabajadores (PIT) declara ser la continuación de la CNT en la etapa actual, y asume sus definiciones y posiciones pasadas como parte de su "memoria organizativa". A medida que el proceso de apertura avanza, esto se va volviendo más explícito y público, y en la primavera de 1984 la central sindical pasaba a denominarse PIT-CNT. Es interesante que en ningún momento se plantee "renovar" la organización corporativa de los trabajadores; nadie cuestiona, ni en la izquierda ni en los partidos tradicionales, dentro o fuera del movimiento sindical, la vigencia y la legitimidad actual de la CNT. También es interesante anotar que este proceso de simbiosis de las viejas

y las nuevas estructuras corporativas fue mucho más conflictivo y peor resuelto en el movimiento estudiantil".

"En tercer lugar, es importante destacar que ya desde 1983 el PIT plantea un conjunto de demandas y movilizaciones bajo consignas que abarcan aspectos que refieren directamente a los intereses de los trabajadores (salarios, empleo, etcétera) y de aspectos que remiten directamente al proceso político en curso: amnistía, reposición de los destituidos, relegalización de todos los partidos, desproscripción total, elecciones en 1984, etcétera. En ciertas coyunturas, el movimiento popular va más adelante que los partidos tradicionales".

Ahora bien, restaurado el sistema democrático y superada la etapa de transición, el movimiento sindical deberá enfrentar condiciones internas y externas diferentes a las que se habían registrado en un momento anterior. Algunas derivan de la coyuntura político-económica inmediata, en tanto otras, de naturaleza estructural, obedecen a tendencias de largo plazo que se vienen manifestando en la estructura productiva y en la sociedad.

En primer lugar, una de estas nuevas condiciones se refiere a la cuestión de la segmentación del mercado de trabajo. Se trata sin duda de un tópico por demás relevante para la comprensión del alcance y cobertura del sindicalismo.

A lo largo de la última década y como consecuencia de las políticas aplicadas bajo el autoritarismo, una de las consecuencias más notorias ha sido el crecimiento de la informalización de la economía. Se da una situación atípica del Uruguay en el escenario latinoamericano: la sociedad postautoritaria es ahora más próxima a las economías de la región que la estructura altamente formalizada que registraba en momentos anteriores. Las tendencias, además, si se consideran las estimaciones de PREALC,[42] indican igualmente que la informalización urbana tenderá a incrementarse.

En segundo lugar, la heterogeneidad interna del sector subalterno también se expresa en el grado creciente de "feminización" de la PEA.[43] Como consecuencia de las mismas políticas —y de la emigración internacional que restó al país casi un 10 por ciento de su población— la reposición de la fuerza de trabajo primaria por secundaria (mujeres, jóvenes y ancianos) debe considerarse como un cambio cualitativo de especial significación sobre la participación de la mujer que asciende de un 26 por ciento a un 37 por ciento, cifra sólo comparable con las de sociedades más desarrolladas. A su vez —fenómeno que no es seguro que vuelva a repetirse—, gran parte de esos nuevos contingentes de fuerza de trabajo femenina, se incorporan a actividades manufactureras y no a servicios personales.

En tercer lugar, otro rasgo que ya se manifestaba antes de 1973 pero que continúa como tendencia de largo plazo, es la creciente heterogeneidad de la composición de clase del movimiento laboral. En particular el crecimiento sostenido y la participación cada vez mayor de los gremios de clase media en desmedro de los sectores obrero-industriales, los cuales se ven afectados por la recesión en la industria.

El proceso es lento al principio de los años '50, pero tiende a acelerarse sobre la década del sesenta. Los gremios en los que se verificó en mayor proporción este proceso, como los del sector financiero, sectores de servicios y sobre todo los gremios de los empleados del Estado, restaron centralidad al predominio clásico del proletariado industrial.[44] En aquéllos se incluyen algunos de los sectores más estratégicos y visibles en sus movilizaciones, como lo son los gremios de la enseñanza pública y privada, de la educación (docentes, administrativos y servicios), y de los servicios básicos de las empresas del Estado.

En cuarto lugar, de acuerdo con las tendencias indicadas hasta aquí, también es evidente el cambio que se ha producido en la composición de los líderes sindicales —y también de la masa— en materia de incremento de sus niveles educativos. En parte por el hecho de la incorporación plena y activa de los sindicatos de clase media, pero también por la evolución rápida de las tasas educacionales de la población en general, el perfil del sindicalismo se aproxima a niveles educacionales medios y altos. Ello es particularmente notorio en la composición de las nuevas camadas de dirigentes jóvenes.

En quinto lugar, como consecuencia de una transformación tecnológica nunca bien estudiada, parece igualmente importante considerar los efectos de las nuevas tecnologías sobre el mercado de trabajo, las formas de desocupación y la organización y gestión del trabajo.[45]

No cabe duda de que la crisis y su impacto sobre la desocupación han ocultado otras formas menos visibles de desocupación y problemas laborales derivados de la introducción de nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra. Es posible formular la hipótesis de que una nueva área de conflictos hasta ahora poco visible (ciertamente no lo fue en algunos casos, como en el sector gráfico) ocupará una centralidad cada vez mayor en las próximas décadas, colocando ante nuevos problemas al movimiento sindical.

En sexto lugar, la reemergencia del sindicalismo desde una década de autoritarismo y la "memoria" de los procesos que condujeron al quiebre de la larga estabilidad democrática lo afectará, como afecta a todos los actores políticos, en términos de un replanteo acerca de estrategias, tácticas y reevaluación de su papel en el proceso de afianzamiento de la democracia.

En su conjunto, estas transformaciones nada indican sobre alternativas ciertas del movimiento sindical, pero sugieren una serie de interrogantes acerca de los problemas de cobertura y representatividad, compa-

tibilización de identidades, democratización interna, eficiencia de los liderazgos y posibles nuevas áreas de conflictos.

Dentro del proceso fuertemente restaurador de las instituciones y liderazgos políticos y gremiales, la reestructuración centralizada de los aparatos sindicales asegura la presencia de una instancia superior de captación, procesamiento y dirección de las demandas de los sectores subalternos. Sin embargo, ello no dependerá solamente del movimiento sindical "per se", sino de las transformaciones que operen en los partidos políticos, el Estado y otras instancias de mediación. En la faz interna, los cambios estructurales a que aludíamos (heterogeneidad, presencia de clases medias, cambios tecnológicos, etcétera) acarrearían desafíos en la captación y formulación de demandas. En la faz externa, en las formas de canalización y dirección de las demandas.

d) Movimientos de mujeres y feministas

Entre los años 1982 y 1984 se configura en el país un conjunto de organizaciones desarrolladas alrededor de múltiples intereses y demandas, compuestos por mujeres.

En una clasificación muy primaria, las organizaciones femeninas, considerando básicamente su composición y en algunos casos sus objetivos, podrían caracterizarse como sigue:

—*Organizaciones barriales de amas de casa,* surgidas principalmente en zonas periféricas de Montevideo, o en el seno de cooperativas de vivienda construídas por el sistema de ayuda mutua.

—*Organizaciones de amas de casa constituidas en torno a un sindicato* y apoyadas o promovidas por éstos (por ejemplo, mujeres de trabajadores metalúrgicos o de la construcción).

—*Organizaciones de mujeres trabajadoras:* Comisión de Mujeres de AEBU (empleadas bancarias), Asociación de Mujeres Periodistas, Asociación de Empleadas Domésticas, etcétera. Por su composición social y objetivos son muy distintas entre sí.

—*Organizaciones de Derechos Humanos,* varias de ellas compuestas casi totalmente por mujeres (como la de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar, Familiares de Desaparecidos y Familiares de Exiliados).

—Organizaciones surgidas en relación con el *trabajo social de diferentes comunidades religiosas* (como el Grupo de Mujeres Ecuménicas).

—*Grupos de investigación-acción* que llevan a cabo proyectos específicos, como el proyecto "Condición de la Mujer" patrocinado por la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar y Reproducción Humana (AUPFIRH).

—*Organizaciones feministas de antigua data* como el Consejo Nacional de Mujeres, que se reorganizó en 1980 y constituye la continuación del movimiento originario de las feministas históricas, fundado en 1916. Tiene varias asociaciones federadas que la integran.

—*La tarea de investigación sobre el tema de la mujer* llevada a cabo en el ámbito académico por el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer (GRECMU), se anticipa a esta dinámica, estructurándose ya en 1979.

—*Los grupos de mujeres políticas* constituyen otra novedad a nivel de los diferentes partidos. Esto incluye grupos de reciente creación y otros ya existentes que redefinen sus objetivos. Se caracterizan en general por su escasa formalización.[46]

En realidad la constitución de este tipo de organizaciones de mujeres no es un hecho novedoso en el Uruguay, aunque difiere de los movimientos precedentes en su naturaleza y objetivos.

Antes, y sobre todo en el período de formación del Estado moderno, desde fines de siglo pasado y hasta la década del cuarenta, emergieron movimientos feministas característicos de la etapa de ampliación de la ciudadanía (derechos políticos y civiles de la mujer). Con las leyes de 1932 y 1946, a las que se agregaron otras medidas legislativas del período batllista; estos movimientos desaparecen o pierden vigor y presencia pública. De alguna forma, se trata de la inestabilidad de los movimientos sociales que se disuelven al alcanzar sus fines.

Los "nuevos" movimientos, en cambio, provienen de solidaridades establecidas a partir de las estructuras de desigualdades, ya sea en la esfera de la redistribución económica (movimientos pre-políticos desde el punto de vista feminista, en el sentido que le atribuye Hosbawn),[47] o bien en términos de desigualdades de género (subordinación de la mujer).

Los factores que pueden explicar esta reformulación de intereses, luego de un período letárgico de los movimientos de mujeres, derivan por una parte de las mismas condiciones que fueron analizadas anteriormete: la defensa de la sociedad civil ante el autoritarismo y sus políticas económicas, y por otra parte, de los alcances limitados —y a veces negativos— del igualamiento formal logrado en el plano jurídico por las feministas históricas (percepción de las desigualdades reales de género en los aspectos económicos, sociales y culturales).

Entre las organizaciones de diversa naturaleza constituidas en este período, tres de ellas merecen una atención especial en virtud de que son agrupaciones de unidades menores. El PLEMUU (Plenario de Mujeres Uruguayas), la CMU (Comisión de Mujeres Uruguayas) y la FUADEC (Federación Uruguaya de Amas de Casa), institución ésta ya mencionada en el punto primero.

En todos los casos, se trata de movimientos sociales emergentes y aún no plenamente estructurados, razón por la cual su estructura de funcionamiento, división de tareas, atribuciones y cometidos son poco definidos o diferenciados. Estos rasgos no parecen derivar sólo de su

reciente constitución, sino de un fuerte componente antijerárquico y antiformalista.

A su vez, como denominador común de los tres movimientos, cabe hacer notar que su origen radica en una motivación inicial de oposición y defensa de la dictadura y la reivindicación de las necesidades básicas de la unidad doméstica.

El PLEMU se constituye como una instancia de segundo y tercer grado de coordinación de diversas instituciones que operaban en forma aislada o independiente. Comprende tanto a mujeres afiliadas individualmente como a representantes de grupos menores y otras Coordinadoras (por ejemplo FUADEC forma parte del PLEMUU). Entre otras instituciones, forman parte del PLEMUU, la Federación de Amas de Casa del Uruguay, Grupos Barriales, Grupos de Derechos Humanos, Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar, Secretariado de la Mujer Demócrata Cristiana, Integrantes de las Coordinadoras de Por la Patria (Partido Nacional), Grupo de Mujeres Ecuménicas, Mujeres del Partido Colorado y Equipos de Programa.

En cuanto a su composición, se trata de mujeres de diferentes orígenes sociales y una heterogénea composición ideológica, primando sin embargo las mujeres de clase media.

Por último, la orientación de PLEMUU desde su constitución hasta 1984, expresa las transformaciones operadas en sus objetivos y demandas, desde la definición de un área de solidaridad alrededor de la lucha contra el régimen autoritario (demanda de libertad, democracia, vigencia de los Derechos Humanos, trabajo, salario, abaratamiento de la canasta familiar, derechos a la vivienda, salud y educación, elecciones libres sin proscripciones), hasta las reivindicaciones particulares acerca de la condición de la mujer. Como lo señala el documento de PLEMUU presentado en el Seminario sobre Organizaciones Populares de 1984:

"Una segunda etapa (...) es la que estamos viviendo, en la que, reabiertos los canales de participación tradicional, surge como preocupación concreta la problemática específica de la mujer y se fortalece la reflexión en torno a la necesidad de una doble militancia femenina, la que acompaña las reivindicaciones generales de construcción de un proyecto de país nuevo y la que específicamente se relaciona con la condición de la mujer en ese proyecto, tratando de que él no incluya una actitud discriminatoria de la que algunas éramos conscientes y otras, en la medida que comenzaron a participar, fueron conociéndolo".

La CMU, por su parte, es un movimiento más volcado a la esfera sindical y su origen se confunde inicialmnente con las demandas del Sindicato de la Construcción (SUNCA) y del movimiento sindical en general, en el momento en que éste surge. Posteriormente lo integran básicamente: trabajadoras, entre las cuales figura también la Comisión de la

Mujer de AEBU (empleadas bancarias), grupos barriales de amas de casa (La Teja, Colón y Parque Batlle) y estudiantes.

"La elaboración de su programa fue paulatina, tomando primeramente las mismas reivindicaciones del movimiento sindical (libertad, trabajo, salario y amnistía). Muy rápidamente fue evolucionando hasta denunciar claramente la opresión específica de la mujer, cuya emancipación se conquistará siempre y cuando logremos una transformación profunda de las estructuras sociales".[48]

Dada su composición social y cultural, menos heterogénea que el PLEMUU —donde también predominan las mujeres de clase media—, y puesto que se trata de un movimiento de mujeres jóvenes, el grado de elaboración ideológica del movimiento es mucho mayor y más específicas e integradas las reivindicaciones de género (el derecho de la mujer a organizarse en torno a sus reivindicaciones, organización integrada sólo por mujeres, educación en torno a la opresión de la mujer en la sociedad, política solidaria con otras organizaciones de mujeres, etcétera).

El FUADEC por último, constituido formalmente en 1984 es, de las tres, la organización más homogénea en virtud de su composición social: amas de casa de los sectores obreros y populares.

Formado a partir del encuentro de varios grupos independientes de amas de casa de diferentes barrios (Cerro, La Teja, Complejo Boulevard, La Cabaña), sindicatos (SUNCA, Metalúrgicos, Transporte y Municipales), sus objetivos son inespecíficos con respecto a la condición de la mujer y no se diferencia de los movimientos populares a que pertenecen (demandas y reivindicaciones generales). Políticamente, las solidaridades que genera esta organización tienden más a reforzar las demandas de esos movimientos que a reivindicar una dimensión específica de la problemática de la mujer.

En su conjunto, los tres movimientos no constituyen organizaciones de masas aunque desarrollan una tarea efectiva a partir de las unidades de base diseminadas en diferentes áreas geográficas y laborales. A su vez, en diferentes instancias de resistencia al régimen autoritario desarrollaron múltiples actividades cuya presencia pública fue, por su magnitud, una de las expresiones más importantes de los movimientos de mujeres en muchas décadas. Cabe por otra parte señalar que en la esfera de las organizaciones partidarias también se constituyeron grupos de mujeres que tuvieron un activo papel en la coordinación de puntos de acción en común: la Comisión de Mujeres del Frente Amplio, que retoma las actividades de la Coordinadora Femenina de 1971, el Secretariado de la Mujer Demócrata Cristiana, el grupo de Mujeres de las Coordinadoras del Movimiento Por la Patria, Corriente Popular Nacionalista, y la Comisión de Mujeres Batllistas, Libertad y Cambio y la Corriente Batllista Independiente.

Las líderes de estos movimientos no se ubican, sin embargo, en las

posiciones altas o "centrales" de sus estructuras partidarias. Si bien tienen activa participación en las instancias de acciones "de base", su marginalidad con respecto a las estructuras partidarias parece ser elevada.[49] Tampoco las posturas adoptadas por las mujeres integrantes de los partidos políticos con respecto a sus reivindicaciones específicas sobre la condición de la mujer parecen haber ocupado un lugar importante en las plataformas y propuestas electorales de los partidos políticos. Se señala al respecto que sólo el Frente Amplio les otorgó algún espacio, pero aun así de escasa visibilidad. Otros partidos, en tanto, no les incorporaron. Ello puede explicar la marginación de los movimientos de mujeres en la etapa de la preconcertación, en la cual esos movimientos acordaron efectuar una preconcertación paralela.

Como balance de estas experiencias parece claro en primer lugar que el conjunto de movimientos que aquí discutimos corresponden más a los "movimientos de mujeres" que a los "feministas". Al menos ello parece ser cierto si se consideran los objetivos y las "áreas de igualdad" que definen las solidaridades que nuclean a sus miembros. Con todo, no pudo perderse de vista, que en el interior del conjunto de grupos que componen esos movimientos son distinguibles variaciones en ambas orientaciones, tanto entre grupos como dentro de los grupos. En este sentido es importante el papel que juegan las mujeres de clase media en la formulación de propuestas feministas, y sobre todo aquéllas que ideológicamente tienen condiciones para establecer identidades alrededor de la problemática femenina.

En segundo lugar, como lo señalan Prates y Rodríguez Villamil [50] existe la posibilidad de que, pasado el período de resistencia al autoritarismo y superada la etapa de movilización electoral, muchos de estos movimientos se disuelvan o pierdan vigor en virtud del predominio de otras lealtades.

Es difícil, con todo, comparando las características de la sociedad uruguaya con aquéllas en las que el feminismo contemporáneo se ha desarrollado, que se cierren las posibilidades para el afianzamiento de estos movimientos. Lo que sí es una interrogante son sus alcances y cobertura social.

V. Consideraciones finales

Durante el período autoritario, las formas de participación política de la sociedad civil fueron todas de carácter extraestatal. El Gobierno autoritario fracasó tanto en sus intentos de cooptación de las formas políticas preexistentes como en su capacidad de movilización "desde arriba". Ciertamente, tampoco puso mucho empeño en ello.

Es así, que no se registraron, como en otros regímenes autoritarios,

ni movimientos sociales inducidos, subsidiados o sancionados por el Estado, como tampoco políticos creados (o recreados) por el régimen.

Desde las primeras manifestaciones de la apertura democrática a partir de los años '80, fue notorio en cambio el crecimiento excepcional de diferentes formas de participación política cuyo denominador común fue el rechazo al régimen y la búsqueda de una salida democrática.

La uniformidad de estos objetivos no pudo ocultar, sin embargo, sus diferencias. Como resultado de la supresión de los mecanismos tradicionales de mediación y articulación política, las modalidades de participación conocieron una amplia gama de formas organizativas desarrolladas en torno a áreas específicas de igualdad y solidaridad. Un elevado grado de atomización, autonomía y espontaneísmo, fue la característica de esta multiplicidad de formas de participación.

Como se pudo apreciar del análisis efectuado, en algunos casos se trató de los "nuevos" movimientos sociales generados en torno a las necesidades básicas, y que se nuclearon ya sea en la pequeña comunidad urbana, vecinal o barrial, en los subsectores del trabajo organizado, o en las formas cooperativas de consumo. En otros casos se trató de la reactivación de viejos y tradicionales movimientos, bajo nuevas demandas, liderazgos y "rótulos". Y por último, tampoco fueron ajenos a estas transformaciones, los fraccionamientos o reagrupaciones de diversos movimientos corporativos previamente existentes.

En principio, lo ocurrido parece entonces confirmar la proposición teórica que identifica la emergencia de los movimientos sociales en relación con las grandes mutaciones que han operado en la estructura social. No es este el caso sin embargo y debe recordarse que: a) la "gran" mutación fue política, y b) la misma no destruyó el sistema político preexistente sino que lo congeló.[51]

Es por ello que como se vio en el punto precedente, esa alta diferenciación, atomización y extraestatalidad iniciales tendieron a modificarse en al medida en que las fuerzas democráticas tomaron las iniciativa, desplazaron el monopolio de la iniciativa política de los militares, y finalmente restauraron el orden político antecedente al golpe de Estado.

Del análisis efectuado se deriva en primer lugar, que una de estas transformaciones estuvo constituida por la creciente pérdida de "especificidad" de los nuevos movimientos. Las áreas de igualdad establecidas inicialmente alrededor de demandas específicas (solidaridades puntuales) tendieron a perder importancia en relación con reivindicaciones y demandas de carácter más general (por ejemplo, salarios, empleo, calidad de vida, etcétera).

En segundo término, la atomización de múltiples focos de solidaridad confinados a límites territoriales o sectoriales estrechos, también

tendieron a perder importancia al integrarse en unidades mayores (instancias de agregación de solidaridades de segundo grado).

En tercer lugar, el carácter extraestatal de los movimientos, ante la inminencia primero y la realidad después de un escenario democrático, tendió a desaparecer. Con la reconstitución del pluralismo político y las instituciones propias del régimen democrático, aparecieron a su vez en los movimientos, gremios y corporaciones, fuertes demandas orientadas positivamente hacia el Estado por participación e involucramiento en la toma de decisiones o instancias similares. En consecuencia se debilitó el perfil "extraestatal puro" de los movimientos.

En cuarto lugar, los nuevos movimientos y las fracciones nuevas de las estructuras corporativas antiguas que se crearon en ese período, fueron rápidamente reabsorbidas o neutralizadas por las estructuras tradicionales de agregación de intereses.

En particular, el movimiento sindical pasó a ocupar el lugar central que ocupara antes como la expresión más importante de las reivindicaciones populares, y algo similar ocurrió con los gremios rurales históricos.

Del examen de los cinco "estudios de caso" que se han desarrollado en este trabajo, surgen también algunos otros puntos de interés teórico.

El primero se refiere a la falsa oposición entre las interpretaciones de la participación política como resultado de transformaciones estructurales (mutaciones en la estructura socio-económica), versus la dimensión propiamente política. Lo que han mostrado concluyentemente los estudios que discutimos en este trabajo es el rol fundamental que juegan en la formación de áreas de igualdad y solidaridades, las agencias especializadas, funcionalmente encargadas de captar, procesar y dirigir las demandas societales. No podríamos explicar la emergencia de las nuevas formas de participación ni su reformulación posterior meramente en referencia a las mutaciones en la estructura social. La existencia de agentes explícitos, internos o externos a los movimientos, ha sido un lugar común en todo el proceso de formación y reformulación de los movimientos sociales. Y los mismos muestran la relativa autonomía del orden político en la conformación de los mismos. Hemos tratado de mostrar que tanto las orientaciones como los liderazgos no se forman sólo a partir de las áreas de igualdad definidas por la estructura social, sino también desde las matrices políticas más generales.

En segundo lugar, el análisis también sugiere la importancia de la conceptuación de los movimientos sociales en términos amplios y no circunscritos a las orientaciones extraestatales. Cuestiones semánticas aparte y si se quiere evitar la polémica en torno a definiciones, digamos que la alternativa de circunscribir el análisis solamente a aquellas formas de participación política que buscan la transformación amplia o

limitada del orden social, hubiera sido una manera de empobrecer el análisis.

Por último, el estudio sugiere que existe una clara correlación entre los diferentes contextos políticos y el tipo de movimientos sociales que pueden generarse en su seno. Las matrices históricas que cristalizan una sociedad "atípica" en la región como lo es el Uruguay, han dado lugar a ciertas formas transicionales de movimientos sociales en el proceso de apertura política, al igual que un retorno a los viejos clivajes en el nuevo orden democrático.

Ello no implica que las nuevas áreas de igualdad y solidaridad no puedan desenvolverse en el futuro y dar lugar a una matriz renovada de agencias de articulación de intereses, pero conviene no confundir lo coyuntural, propio de la transición a la democracia, con las tendencias de largo plazo de mutación de la sociedad.

Notas

[1] Respecto de la transición del Estado de excepción a la democracia véase: González, L. E., "Uruguay 1980-81: Una apertura inesperada" en *Latin American Research Review,* 1983; Amarillo, Ma. del H., "Participación Política de las Fuerzas Armadas", en Guillespie, Ch., Goodman, L., Rial, J. y Winn, P., *Uruguay y la Democracia,* EBU, Uruguay, 1984; Rial, J., *La reorganización de los Partidos Tradicionales,* Serie Documentos de Trabajo, CIESU, núm. 41, Montevideo, 1984; Rial, J., *The Political Cojunture in Uruguay,* Serie D. de T., CIESU, Montevideo, 1984; Filgueira, C., "Puesta al día: el caso Uruguay", en *Debates,* núm. 1, Buenos Aires, 1984; Gillespie, Ch., *From Suspended Animation to Animated Suspension: Political Parties and the Difficult Birth of Uruguay's Transition 1973-83,* D. de T., CIESU núm. 94, Montevideo, 1985; SIJAU, *Uruguay y Paraguay: la Transición del Estado de Excepción a la Democracia,* EBU, Temas del Siglo, Uruguay, 1985.

[2] Boschi y Valladares en el estudio de las características de los movimientos populares en Brasil señalan la ausencia de una orientación de cambio radical o transformación social en estos movimientos, su identidad desarrollada alrededor de lo cotidiano, carencia de identidades inmediatas de clase y ausencia de una conciencia crítica acerca de la ilegitimidad de la estructura de desigualdades. Al contrario, una defensa de los derechos mínimos de ciudadanía (énfasis en la incorporación). Al respecto, véase Grossi, M., "Movimientos populares en Brasil (1970-1983)", en *Movimientos sociales en América Latina,* FLACSO, Costa Rica, Universidad de N. Unidas, 1983.

[3] Offe, C., *Competitive party democracy and the Keynesian Welfare State,* 1981 (trab. mimeografiado).

[4] Mayntz, *Sociología de la Organización,* Alianza Editorial, Madrid, 1967.

[5] Pizzorno, A., "Introducción al estudio de la participación política", en Pizzorno, A., Kaplan, M. y Castels, M., *Participación y cambio social en la problemática contemporánea,* SIAP, 1976.

[6] Con todo, no fue como en el caso de Chile, una reversión plenamente "ortodoxa" que alcanzara a desmantelar instituciones y servicios públicos propios del Estado de bienestar.

[7] Rial, J., ob. cit.

[8] Moore, B., *Social origins of Dictatorship and Democracy,* Beacon Press, Boston, 1967.

[9] Véanse, Solari, A., *Estudio sobre la sociedad uruguaya,* Tomo II, Arca, Montevideo, 1967; y Aguiar, C., *La doble escena: Clivajes y Subsistema electoral,* en Gillespie y otros, ob. cit. También los resultados del Informe de Equipos Consultores, *Los Sindicatos,* Estudios vol. 1, núm. 1, Montevideo, mayo, 1985.

[10] Las cuatro categorías corresponden a la distinción que,efectúa Rokkan acerca de la formación de los Estados Nacionales. Véase al respecto Calderón, F., y Laserna R., *Nación, Estado y movimientos sociales en América Latina,* FLASCO, Universidad de Naciones Unidas (Programa PAL), Costa Rica, 1983.

[11] Grossi, M., ob. cit.

[12] Schmitter, Ph., *"Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary Western Europe and North America",* en Berger (comp.), *Organizing Interest in Western Europe,* Cambridge University Press, 1980. Touraine, A., *Actores Sociales y Pautas de Acción Colectiva en América Latina,* PREALC, Santiago de Chile, 1984.

[13] Sunkel, O. y otros, *Transnacionalización y Dependencia,* Cultura Hispánica, Madrid, 1980.

[14] Schmitter, Ph., ob. cit.

[15] Schmitter, Ph., ob. cit.

[16] Grossi, M., ob. cit.

[17] Rodríguez, Enresto, *"La juventud como movimiento social ',* Foro juvenil; Prates, Suzana y Rodríguez Villamil, Silvia, *"Los movimientos sociales de mujeres en la transición a la democracia",* GRECMU; Rodé, Patricio, Marsiglia, Javier y Piedracueva, Enrique, *"Experiencias recientes de movilización barrial",* CLAEH; Cosse, Gustavo, *"Clase obrera, democracia y autoritarismo"* CIEDUR, y Piñeiro, Diego, *"El plenario de pequeños productores: un intento de crear un movimiento de agricultores familiares",* CIESU.

[18] Rodé, P., Marsiglia, J., Piedra Cueva, E., *Experiencias recientes de movilización urbana en las áreas de la salud, nutrición y organización barrial,* CLAEH, 1985.

[19] Prates, Suzana y Rodríguez Villamil, Silvia, *Los movimientos sociales de mujeres en la transición a la democracia,* CIESU, Montevideo, 1985.

[20] Grossi, M., ob. cit.

[21] Rodríguez, Ernesto, *La juventud como movimiento social. Elementos para el estudio del caso uruguayo,* Foro juvenil, Montevideo, 1985. Trabajo realizado en el marco del programa "Los movimientos sociales frente a la crisis en Sudamérica", auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas (Programa América Latina) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

[22] Piñeiro, D. E., *El plenario de pequeños y medianos productores: un intento de crear un movimiento de agricultores familiares,* CIESU, Montevideo, 1985. Presentado en el Seminario "Los movimientos sociales frente a la crisis: Uruguay, tendencias y perspectivas", auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas (Programa América Latina).

[23] Rodríguez, E., ob. cit.

[24] Rodríguez, E., ob. cit.

[25] Piñeiro, D. E., ob. cit.

[26] Piñeiro, D. E., ob. cit.

[27] Prates, S., *Ganadería extensiva y población: condiciones de emergencia de un tipo organizativo de la producción rural,* CIESU, Cuaderno núm. 11, Montevideo, 1977.

[28] Barraclough, *S.* y Flores, A., *Reforma agraria en América Latina,* Fondo de Cultura Económica, México, 1968.

[29] Steward, J. *M.* y otros, *The people of Puerto Rico: A study in social Anthropology,* University of Illinois Press, Illinois, 1956.

[30] Wolf, E. R., *Peasant Wars of the twentieth century,* Harper & Row, Nueva York, 1969.

[31] Stinchcombe, A. L., *"Agricultural enterprise and rural class relations",* en *American Sociological Review,* núm. 67, 1961.

[32] Paige, J., *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World,* Free Press, Nueva York, 1975.

[33] Stinchcombe, A. L., ob. cit.

[34] Lipset, S. M., *Agrarian Socialism,* Doubleday Anchor, New York, 1968.

[35] Paige, ob. cit.

[36] Real de Azúa, C., "Herrera: el nacionalismo agrario", en *Encielopedia Uruguaya,* núm. 50, Montevideo, 1969.

[37] Cosse, G., "Acerca de la democracia, el sistema político y la movilización social, el caso del 'ruralismo' en Uruguay", en *Estudios Rurales Latinoamericanos,* vol. 5, núm. 1, 1982, pág. 77 a 100.

[38] No es posible aquí retomar la vieja polémica acerca de los procedimientos de "concesiones" políticas a las reivindicaciones populares: si éstas fueron "arrancadas" por la movilización popular, o si el Estado benefactor se "adelantó" a concederlas. Lo que sí parece claro en este caso, como en otros, es que existió una alta permisividad del sistema político y de los gobiernos de turno hasta los años '60, para ampliar el espacio político de manera de absorber esas demandas.

[39] Los movimientos de izquierda más extremos ideológicamente y las formas de "guerrilla urbana" que se conocen sobre la década del sesenta, tuvieron todas como característica saliente la intensa participación, liderazgo y reclutamiento de los "altos educados". También los indicadores políticos de los resultados electorales muestran el fuerte apoyo de los estudiantes a las diferentes fracciones del Frente Amplio. Véase al respecto Pucci, *F.* y Papadopulos, J., ***Participación electoral juvenil: un estudio de casos,*** en D. de T., núm. 57, CIESU, 1983.

[40] Rodríguez, E., ob. cit.

[41] Cosse, G., ***Clase obrera, democracia y autoritarismo,*** CIESU, Montevideo, 1985. Presentado en el Seminario "Los movimientos sociales frente a la crisis: Uruguay, tendencias y perspectivas", auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas (Programa América Latina).

[42] PREALC, ***Sector informal: funcionamiento y políticas,*** Santiago de Chile, 1981. También PREALC, ***La subutilización de la mano de obra en los países subdesarrollados,*** D. de T., Santiago de Chile, agosto, 1974.

[43] Prates, S., "Cambios estructurales y movimientos populares: reflexión sobre la concertación social en el Uruguay post-autoritario", en ***7 Enfoques sobre la Concertación,*** CIESU, Banda Oriental, Montevideo, 1984.

[44] Debe notarse un aspecto que no es suficientemente conocido o evaluado: la alta proporción del empleo generado por el Estado, que alcanza casi a un 25 por ciento del total de la PEA.

[45] Filgueira, *C.*, y Argenti, G., ***Implicaciones del Conflicto entre Tecnología y Sociedad: notas preliminares sobre el caso uruguayo,*** Cuadernos de CIESU, 1984.

[46] Prates, *S.* y Rodríguez Villamil, S., ob. cit.

[47] Hobsbawn, E. J., ***Rebeldes primitivos,*** Ariel, Barcelona, 1983.

[48] Prates, *S.* y Rodríguez Villamil, S., ob. cit.

[49] La escasa presencia de las mujeres en cargos directivos de los partidos políticos, hecho que ha sido tradicional en el sistema político uruguayo, fue aun mayor en la recomposición democrática. Esta discriminación se aprecia también en los candidatos a las elecciones nacionales y en la integración parlamentaria.

[50] Prates, *S.* y Rodríguez Villamil, S., ob. cit.

[51] González, L. E., ob. cit.

La acción social en la coyuntura democrática*

Roberto Laserna R. **

1. Antecedentes

En diciembre de 1984, en medio de una huelga general nacional que se prolongó por dieciocho días en protesta por la política económica del gobierno, una reunión de partidos políticos con representación parlamentaria aceptó la iniciativa presidencial de reducir en un año su mandato constitucional. Poco después, el Congreso aprobó la ley de convocato-

* El presente texto es fundamentalmente la síntesis de un conjunto de informes presentados en el seminario "La acción social en la actual coyuntura boliviana" realizado los días 13 y 14 de diciembre de 1984, organizado en CERES bajo los auspicios de la Universidad de las Naciones Unidas y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Las ponencias presentadas figuras en la bibliografía con la fuente "CERES-CLACSO-UNU".

De esta manera, el capítulo correspondiente al movimiento obrero se basa sobre todo en las ponencias de René Mayorga ("La crisis del sistema democrático y la COB") y Ricardo Calla ("Temas del movimiento obrero contemporáneo"), ampliadas con un trabajo específico realizado por el autor para la reunión de la Comisión de Movimientos Laborales de CLACSO (Santiago, 20 al 23 de mayo de 1985), para el que contó con la asistencia de M. Teresa Zegada. La parte del movimiento campesino sintetiza la ponencia de Silvia Rivera ("El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática"), teniendo como fondo referencial el trabajo preparado por Gustavo Deheza "Movimientos sociales y diferenciación campesina: el caso del Valle Alto de Cochabamba". Y para el capítulo correspondiente a los que denominamos "nuevos actores" hemos contado con los trabajos de Isabel Arauco ("Acción social de los sectores medios: el caso de la burocracia estatal"), Gonzalo Flores ("El movimiento regional cruceño") y el realizado por el autor ("La protesta territorial: la acción regional y urbana"). Naturalmente, cuando lo hemos creído conveniente, recurrimos a trabajos anteriores realizados fuera del marco de este proyecto.

Aunque la responsabilidad final del texto es personal, no debe olvidarse que sus méritos son el resultado de un esfuerzo colectivo.

** Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), La Paz.

ria a elecciones, disipando algo las presiones sobre el gobierno que parecían conducir a su brusca renovación por la habitual vía del golpe de Estado.

Como los militares que le entregaron el mando en 1982, Siles Zuazo renunciaba a un año de gobierno presionado por casi todas las fuerzas y grupos sociales organizados del país, así como por el deterioro aparentemente incontrolable de la situación económica.

El de *crisis* es, sin duda, un concepto que sintetiza con precisión y plenitud la historia de Bolivia en los últimos años. Por su intensidad, magnitud y extensión, la crisis ha dejado de ser un trasfondo explicativo para adquirir, a los ojos de la sociedad, los contornos monstruosos de un destino adverso contra el que poco o nada puede hacerse. Evidentemente, hay mucho de enajenación en ello, y es que si bien es cierto que toda crisis torna visibles características y contradicciones esenciales en una sociedad, también es cierto que la nitidez encandila. Más aún si, como en el caso boliviano, la crisis se presenta en sus más diversas y múltiples dimensiones, expandiéndose aceleradamente en todas direcciones.

En los años '70 el autoritarismo militar contó con cierto crecimiento de la economía para ocultar la crisis de legitimidad que implicaba su recurso a la violencia. Pero hacia 1977, a la presión internacional que reivindicaba como nunca antes el tema de los derechos humanos, se sumó el previsible deterioro de la situación económica, convenciendo al régimen de Banzer sobre la necesidad de intentar su legitimación mediante la formalidad democrática. Un tercer elemento que pesó en esa decisión fue la seguridad de que la oposición se hallaba desarticulada y no podría reponerse rápidamente de la dura represión que había pesado sobre ella durante los años precedentes. Sin embargo, su proyecto de democracia controlada fue desbordado por el movimiento popular, cuyo empuje contestatario puso en evidencia y aprovechó tanto las debilidades políticas e institucionales del régimen como las fricciones existentes en la cúpula militar.

Si en las caídas de Banzer (21 de julio de 1978), y de su efímero sucesor, el general Pereda (4 de noviembre de 1978), prima todavía la cuestión de la democracia como justificativo, los posteriores gobiernos tratarán de afirmarse, y serán derrocados, en nombre de la crisis y la necesidad de enfrentarla.

Walter Guevara, ungido presidente interino (7/8/1979) luego de que el Congreso elegido fuera incapaz de dirimir el empate electoral entre Hernán Siles y Víctor Paz, planteó la prórroga de su mandato aduciendo razonablemente que la gravedad de la crisis económica requería continuidad y estabilidad política y que por lo tanto, no se podía pensar en enfrentarla con éxito si apenas se le otorgaba un año de gobierno dando prioridad a la realización de una tercera consulta electoral. Antes de que cumpliera tres meses, un golpe civil-militar encabezado por el

coronel Natusch lo derrocó acusándolo de prorroguista y ofreciendo soluciones radicales a la crisis. La resistencia popular, que en esos quince días de noviembre alcanzó niveles de heroísmo y extraordinario vigor político, impuso la negociación emergiendo de ella un nuevo interinato, el de la presidenta Lidia Gueiler.

Con más coraje pero menos prudencia la señora Gueiler buscó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aprobó algunos correctivos económicos que resquebrajaron notablemente el consenso inicial de su gobierno, sin detener, empero, la rápida descomposición de la economía. Poco después de que alcanzara con éxito la misión que el Congreso le había encomendado de organizar y presidir las elecciones de 1980, fue derrocada por el golpe militar del general Luis García Meza. A diferencia de todas las asonadas anteriores, ésta no buscó pretextos para justificar su acción, pero, cuando lo hizo, se refirió a la dramática crisis "que afectaba principalmente al pueblo y que amenazaba engendrar una guerra civil".

A García Meza lo sucedieron los generales Torrelio y Vildoso, y contra todos ellos se enarboló, además de la reivindicación democrática y el rechazo a la corrupción, la acusación de ineficiencia para enfrentar la crisis. De hecho, la crisis económica legitimaba la acción social, incluso cuando ésta contenía planteamientos políticos claramente antidictatoriales.

La evidente aceleración de la crisis y el paulatino deterioro de las condiciones de vida y de consumo, contrastaban con mucha nitidez con la oferta a través de la cual unos y otros gobernantes buscaban una base de legitimación. Enredados en su propia trampa, se vieron obligados a retroceder bajo el vigoroso empuje de las fuerzas y los movimientos sociales y agobiados por una crisis que escapaba totalmente a su control.

Extremando las metáforas, podría decirse que el 10 de octubre de 1982, cuando en presencia del Alto Mando Hernán Siles toma posesión de la presidencia, los militares en realidad se rinden ante el pueblo, pero también ante la crisis.

En todos estos años, la múltiple presencia de la crisis y su aparente autonomía han hecho que, para muchos, esa percepción metafórica adquiera tanta realidad que no es extraño encontrar, pintarrajeada en la pared de un pueblito del valle, la consigna "Muera la Crisis".

2. Características económicas de la crisis

Hacia 1982, cuando se concreta la transferencia del poder al gobierno democrático, la crisis económica había ya ingresado en su pendiente más pronunciada, pues los factores estructurales se deterioraban aun más por la ausencia de una política económica coherente y la enor-

me carga de la deuda externa que drenaba los reducidos excedentes generados por la actividad exportadora. La situación era angustiante. Desde que el gobierno Torrelio confesó su impotencia para controlar el mercado de divisas, el dólar subió de 25 a 300 pesos en poco más de seis meses, lo cual encareció ostensiblemente el costo de vida y desalentó la producción industrial, que dependen de importaciones en un 30 y un 50 por ciento respectivamente.

A esa angustia apelaron, con demagogia y precipitación, quienes se opusieron tenazmente a los gobiernos militares, incluyéndose entre ellos los partidos de la UDP y sus dirigentes. En algunos momentos podía verificarse en la ideología común una relación tan estrecha entre crisis económica y dictadura, que más de uno se convenció de que bastaba cambiar uno de los términos para que el otro también fuera superado. Por eso, la distancia entre la realidad de los hechos y las expectativas económicas puestas en la democracia se agigantó, resquebrajando muy rápidamente el impresionante respaldo con que inició su gestión el nuevo gobierno.

El Producto Bruto Interno, cuyo ritmo de crecimiento empezó a decaer en 1977, alcanzó tasas negativas desde 1981, disminuyendo 9,1 % en 1982, 7,6 % en 1983, para recuperar apenas un 1,2 % en 1984.[1]

La situación en el importante sector externo de la economía se tornó dramática. Después de haber alcanzado a exportar 11 millones de barriles de petróleo en 1973, la producción y las reservas comenzaron a caer impidiendo toda exportación desde 1980 y obligando a la empresa estatal del petróleo a redoblar esfuerzos para exportar gas natural. Los precios de los minerales, especialmente del estaño, el cobre, el plomo, el bismuto, el antimonio y la plata, cayeron notablemente en 1982 manteniéndose desde entonces en niveles considerablemente bajos. En ese año, el Banco Central sólo pudo adquirir divisas por 591 millones de dólares, cuando el promedio de los dos años anteriores fue de 1365. Y si por un lado disminuían las disponibilidades, y por lo tanto la capacidad económica del Estado, por el otro aumentaban las necesidades. El servicio de la deuda externa no pudo ser cubierto desde 1982, produciéndose una moratoria de facto que impidió recurrir al mercado financiero internacional. A consecuencia de ello, las importaciones también se redujeron, contrayendo la oferta interna de bienes de consumo y de materias primas para una industria altamente dependiente.[2]

Por si todo eso fuera poco, en 1982 los desastres naturales empezaron a afectar el atrasado pero sólido y estable sector agropecuario, que debió afrontar una aguda y prolongada sequía en las zonas de altiplano y valles, y varias inundaciones en extensas áreas tropicales.

Según estimaciones citadas por Prudencio,[3] la sequía afectó directamente al 35 por ciento del territorio nacional, causando en algunas partes la pérdida del 80 al 100 por ciento de la producción agrícola, y

provocando migraciones por hambre, consumo de semillas adaptadas y desaparición de hasta un tercio de ganado. Los departamentos más afectados por la seguía fueron Potosí, Oruro, Chuquisaca y, en menor escala, La Paz y Cochabamba. Es decir, los productores tradicionales de alimentos.

Casi al mismo tiempo se inundaron los pastizales del Beni, destruyendo parte del ganado vacuno; las llanuras cercanas a Santa Cruz, arrasando tierras de cultivo y viviendas urbanas; y las zonas bajas del trópico cochabambino ocupadas por pequeños productores campesinos. Muchos caminos quedaron intransitables y las riadas destrozaron puentes, perdiéndose así parte de la producción agrícola que se había salvado del desastre.

En 1983 la superficie cultivada representaba sólo las tres cuartas partes de la correspondiente a 1981, habiéndose reducido en una proporción aun mayor —por los bajos rendimientos debidos a la irregularidad climática— la producción de alimentos básicos como trigo, arroz, maíz, papa, cebolla, tomate, haba, arveja, yuca, etcétera.[4]

La fuerte y rápida contracción de la oferta interna de bienes aceleró una inflación que venía escondiéndose por lo menos desde 1976, cuando el valor real del dólar, por ejemplo, era ya superior al oficialmente reconocido alcanzando una sobrevaluación del 100 por ciento ya en 1978.[5]

Por la magnitud de las obligaciones a corto plazo,las reservas internacionales netas se mantienen negativas desde 1979, de modo que el sistema monetario se asienta en el crédito al sector público y el financiamiento inflacionario del creciente déficit fiscal.[6] En 1982 los ingresos fiscales apenas alcanzaron a cubrir el 30 por ciento de la ejecución presupuestaria del gobierno central, estimándose que en 1984 sólo cubrieron el 12 por ciento. La pérdida de importancia relativa de los ingresos tributarios se comprueba también en el hecho de que mientras ellos representaron proporciones superiores al 10 por ciento del PBI en los años 70, en 1982 el sistema tributario apenas logró captar poco más del 5 por ciento del PBI, bajando dicha proporción a la mitad en 1983. La inflación se ha convertido ya en la principal fuente de recursos fiscales. Los últimos datos señalan que entre febrero de 1984 y el mismo mes de 1985, los precios al consumidor se multiplicaron en promedio ochenta veces, y hay quienes estiman que durante 1985 el índice inflacionario podría alcanzar cifras de cinco dígitos.[7]

En todos estos años, y a medida que la crisis económica se hace más profunda, se ha podido verificar la creciente impotencia de la política económica. El gobierno democrático no ha podido recuperar el control de las variables macroeconómicas y todo lo que se ha propuesto para frenar el deterioro de la economía ha sido totalmente sobrepasado por los hechos. Debiendo destinar, como en 1983, el 43,6 % de las divi-

sas obtenidas por exportaciones al servicio de la deuda, sus estipulaciones sobre el tipo de cambio sólo han ocasionado cuantiosas pérdidas a las empresas del Estado, que son las principales exportadoras, y subvención de actividades especulativas en el sector privado que logró recursos al cambio oficial, sin haber podido controlar el mercado negro de divisas. En él, el precio del dólar ha aumentado más de quinientas veces entre octubre de 1982 y marzo de 1985, período en el que las devaluaciones formales no alcanzaron nunca el nivel real impuesto por el mercado de divisas.

A esta situación contribuyó la persistente resistencia opuesta por las fuerzas y organizaciones sociales a la política económica gubernamental, que incluyó un efectivo bloqueo a sus medidas y disposiciones en entidades claves como el Banco Central, cuyos sindicatos boicotearon continuamente los planes del gobierno en materia monetaria.

En este panorama, parece inverosímil imaginar siquiera que el país pueda sobrevivir en forma medianamente digna. Y sin embargo, uno puede observar convoyes ferroviarios completos transportando vehículos de lujo para su venta en el país; innumerables tiendas de ropa abastecidas desde Miami, San Pablo o Buenos Aires; vendedores ambulantes que en las calles ofrecen minicomputadoras, relojes y calculadoras electrónicas; y en las tiendas de abarrotes una gama inmensa de conservas, licores y golosinas importadas. El contraste es abismal.

Las cifras anteriores reflejan la dramática realidad de una parte de la economía, que ahora vive subrepticiamente el auge inesperado de la otra parte.

El rubro fundamental de lo que se ha dado en llamar la "economía clandestina" está constituido por la agroindustria de la coca y la exportación ilegal de sus derivados. El aumento de la demanda de cocaína, principalmente en el mercado estadounidense, estimuló extraordinariamente la producción de la hoja de coca en Bolivia, que pasó de ser de menos de 6 mil toneladas en los '60 a más de 80 mil en los años '80. Se ha estimado que la masticación tradicional y el uso industrial legalizado insumen 15 mil toneladas anuales, en tanto que las 65 mil restantes son transformadas en cocaína, calculándose que representan 325 toneladas de pasta básica (sulfato de cocaína). El valor FOB de dicha mercadería alcanza a 1650 millones de dólares, que puestos en Colombia ascienden a cerca de 5000, y previamente purificados y diluidos alcanzarán a 39.000 millones de dólares al consumidor en Estados Unidos. De ese total, los campesinos productores de la hoja perciben menos de 114 millones de dólares, que sin embargo representan sumas extraordinariamente elevadas a nivel individual y en comparación con los ingresos de que disponen otros sectores sociales.[8]

Suponiendo, lo que no es cierto, que los traficantes bolivianos venden sólo pasta básica y no salen del país, tendríamos que este rubro

genera divisas por 1625 millones de dólares al año, cifra que duplica el total de las exportaciones de minerales, hidrocarburos y productos no tradicionales legalmente contabilizados. Naturalmente, una buena parte de esta suma queda en poder de la cúpula de la mafia y se invierte en Estados Unidos, ya sea directamente o a través de intermediarios financieros. Otra parte, más reducida, retorna al país bajo la forma de artículos de consumo que son ingresados en su mayor parte de contrabando, un mecanismo muy utilizado para el "blanqueo" de estos fondos. Finalmente, otra parte, compuesta sobre todo por pagos a los productores, ingresa directamente en la circulación sustentando el mercado negro de divisas, y abasteciendo de ese modo tanto las necesidades del comercio y la industria legalmente establecidas pero que no tienen acceso al mercado oficial, como las de los pequeños ahorristas que defienden sus recursos especulando con el dólar. En todo caso, esta rama de la economía permite márgenes importantes de acumulación y consumo suntuario, pero también el abastecimiento de productos esenciales para la canasta familiar, y si bien alimenta y estimula actividades especulativas, por otro lado también ofrece espacios de subsistencia, sobre todo a sectores medios que se desplazan del ámbito legal de la economía porque ya no pueden satisfacer en él sus expectativas de consumo.

En términos generales, el auge de la coca ha atenuado notablemente el impacto de la crisis económica y ésta, a su vez, ha hecho posible que el impacto de ese auge tenga efectos estructurales que difícilmente serán revertidos en el corto plazo. Así, el estímulo a la producción de coca ha acelerado las migraciones modificando su carácter, y ha provocado una creciente especialización productiva entre los campesinos del área tropical, cuya economía se ha monetarizado y se ha hecho cada vez más dependiente del mercado. El fortalecimiento de actividades comerciales y especulativas, la presencia de empleos altamente remunerados y que no exigen conocimientos especializados, y los nuevos niveles y patrones de consumo son también efectos que desde esta rama de la economía se difunden hacia el resto. Y finalmente, tampoco se puede ignorar que la elevada rentabilidad de la economía clandestina absorbe, directa o indirectamente, una parte importante del crédito bancario, cuyas condiciones resultan extremadamente duras para las empresas legales en crisis.

Pero al mismo tiempo que aligera el impacto de la crisis económica, agrava las características de las otras dimensiones de la crisis que vive el país.

3. Dimensiones político-ideológicas de la crisis

El grave deterioro de la economía y las dificultades que enfrenta el Estado para controlar ese proceso, no son aspectos que por sí solos puedan explicar la actual coyuntura boliviana. La crisis tiene otras dimensiones, y aunque en gran medida se han hecho más visibles por los problemas económicos, de ningún modo puede pensarse que han sido suscitadas por éstos.

El advenimiento de la democracia no ha podido resolver la paulatina pérdida de legitimidad del Estado, que se origina en la descomposición del poder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a poco de haber iniciado el proceso de transformaciones que se conoce como la Revolución Nacional. El quiebre inevitable de la alianza de clases que constituyó al pueblo como sujeto histórico en 1952, y la incapacidad de las fuerzas políticas para organizarse en un sistema consistente de relaciones democráticas, generaron un vacío de poder que intentó ser cubierto por la Fuerzas Armadas intentando imposibles soluciones militares para los problemas políticos.[9]

En ausencia de grupos o sectores sociales con capacidad hegemónica sobre el conjunto y con posibilidades de orientar el proceso histórico, el Estado como tal, con creciente autonomía, ha ido ocupando ese papel. Es a partir del Estado, desde 1952, que se gesta el orden económico y político en el país mediante su acrecentada intervención en la producción y su notable capacidad de absorber empleo. En ese proceso, las ideologías legitimadoras se organizaron en torno del "nacionalismo revolucionario", como ideologema constitutivo del Estado,[10] y del "desarrollismo" como su rostro prospectivo.[11]

Hoy, la ideología oficial del Estado, el "nacionalismo revolucionario", ha perdido vigor, "capacidad de producir historia" como decía René Zavaleta; ha dejado de ser un escenario articulador de los intereses sociales convirtiéndose en el objeto de la disputa ideológica. Prácticamente todo el espectro político sigue teniendo como referencia, aunque obviamente con énfasis distintos, los elementos del "nacionalismo revolucionario" y, por lo tanto, un proceso que pese a sus logros dejó pendientes muchos problemas nacionales. Problemas que, como los étnicos y regionales, motivan la acción de importantes sujetos colectivos que no se reconocen ni se sienten interpelados por el "nacionalismo revolucionario", sintiéndose marginados por el sistema estatal del '52.

Por otro lado, el "desarrollismo", que en su oferta de bienestar futuro iluminó sacrificios y alimentó esperanzas en los estratos de ingresos inferiores, ha perdido credibilidad frente a la magnitud de la crisis. Así, tanto los proyectos de la derecha como los de la izquierda, que se presentaban como alternativas de desarrollo económico, muestran

ahora los estrechos límites de un discurso político que se hizo marcadamente economicista, y que ahora parece no tener correlatos materiales posibles.

La Unidad Democrática y Popular (UDP), antes de ser gobierno, apeló con éxito a las preocupaciones economicistas de la población para repudiar a los gobiernos militares por su ineficiencia para enfrentar la crisis. Pero lo hizo a riesgo de introducir en la población la falsa idea de que la democracia representaba un modelo económico para superar la crisis y desarrollar la economía nacional. El costo de esa demagógica actitud puede verse ahora en la orfandad política en que se debate el régimen.

La crisis político-ideológica se manifiesta también, entonces, como la crisis de un discurso desarrollista y modernizante que ha perdido el arraigo que tuvo en los años '60 y '70, o que induce ahora patrones de comportamiento colectivo corporatistas, inmediatistas y economicistas.

Sin embargo, permanece todavía vigente la percepción paternalista del Estado proyectada por ese sistema ideológico, y hacia esa maquinaria agigantada y aparentemente poderosa convergen todavía las presiones y las expectativas de campesinos, empresarios, obreros, empleados y funcionarios, estudiantes, amas de casa y desocupados. Sólo que, ahora, esa percepción choca con la reducida capacidad económica del Estado para continuar desarrollando las relaciones clientelares y prebendalistas que sustentaron tal imagen. Por último, también forma parte de esta crisis ideológico-política la superposición de valores culturales disímiles y hasta contradictorios, que se ha hecho mucho más perceptible con esta coexistencia entre una aguda crisis económica en las ramas "tradicionales" de la economía y un auge expansivo en las ramas de la economía "clandestina". Los atributos que otorgan prestigio y reconocimiento social se han hecho mucho más confusos, porque mientras persisten la normatividad *señorial*, en la que el prestigio es en cierto modo hereditario y se basa en la conservación de status y comportamientos familiarmente transmitidos, y la normatividad *comunitaria*, en la que el prestigio corresponde a la capacidad de servicio recíproco, se expande aceleradamente una normatividad *mercantil-consumista*, en la que los atributos que otorgan prestigio son la ostentación, el gasto y el consumo. La rápida expansión de este sistema de valores se debe, más que al gradual proceso de desarrollo de la economía mercantil, al auge de la corrupción y del tráfico de estimulantes, que facilitan el rápido enriquecimiento individual y encuentran cierto margen de aceptación social, justamente, en la valoración mercantil-consumista.

4. La democracia de la crisis

Este conjunto de manifestaciones nos lleva a admitir que, efectivamente, nuestra sociedad vive una *crisis orgánica* que atraviesa, penetra y corroe el conjunto de la vida social y política del país.

La coincidente presencia de un agudo proceso de deterioro de la economía tradicional y formal, en contraste con el auge de la economía clandestina, y un proceso de democratización política, ha puesto al desnudo la desarticulación de las relaciones sociales, el carácter dependiente y precario de la estructura económica y la artificialidad del Estado.

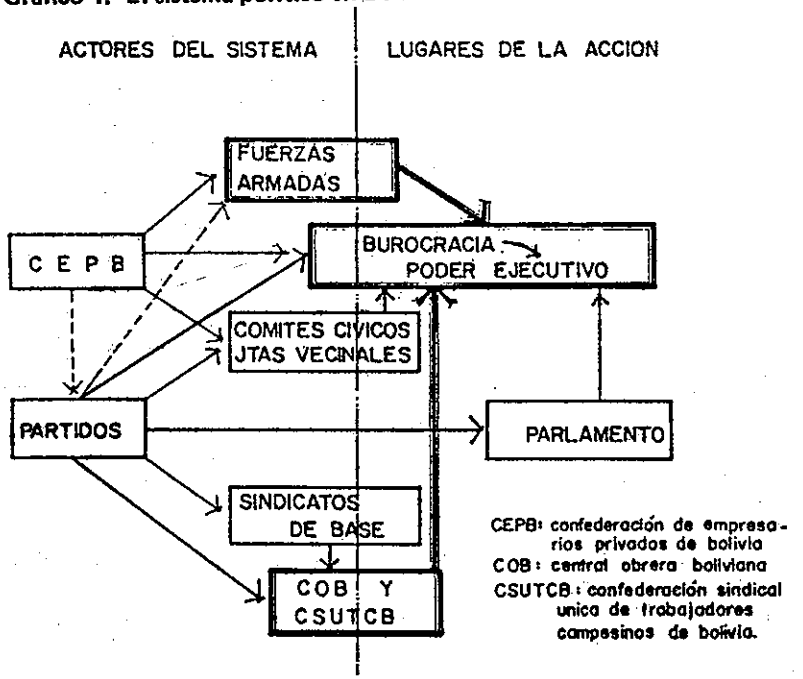
Frente al resquebrajamiento de la base material, el sistema estatal muestra una pérdida creciente de credibilidad y de capacidad para ofrecer referencias de identidad colectiva a la población. Y cuando aludimos al sistema estatal, estamos hablando ciertamente del gobierno y de los aparatos del Estado, pero también de los partidos y las organizaciones sociales de base económica y territorial. La acción social se ha hecho dispersa y fragmentada, predominando la búsqueda de objetivos defensivos y corporativos. Aun así, puede verificarse un reflujo de las organizaciones sociales hacia sus cúpulas dirigentes, cada vez más alejadas de sus bases, a las que apenas pueden apelar de un modo inconsistente, fugaz y discontinuo.

Esto implica, por cierto, que hay una crisis de representación, en la que se agrandan las brechas entre liderazgo y masas, entre la organización y la espontaneidad, entre la burocracia y la democracia dentro de las instituciones del sistema político.[12] Como sugiere Calderón,[13] "la política ya no es más una representación, sociedad y política se confunden". Toda acción en la sociedad civil parece capaz de generar un efecto estatal, pero el Estado forma parte también de la sociedad civil.

En el *gráfico 1* intentamos resumir esquemáticamente la composición del sistema político boliviano. Lo primero que quisiéramos destacar es el hecho de que la mayor parte de los *actores* del sistema son, al mismo tiempo, *escenarios* de la acción, en unos casos más que en otros, salvo en los partidos políticos (nominalmente más de sesenta), y la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), aunque en este caso más que inexistente la lucha política es poco visible en su interior. Por otro lado, importa destacar también que el principal campo de la acción política, el gobierno y los aparatos estatales ejecutivos, se sitúa también como actor (o actores) del sistema, en tanto que el Congreso se mantiene como un escenario pero escasamente relevante. Se diría que hay una oficialidad del sistema político (partidos, parlamento, gobierno), que si bien conserva su correspondiente ubicación, resulta marginal en el sistema real. En éste, las fuerzas y los movimientos sociales no admiten ser representados y desarrollan por sí solos la acción política que les interesa. Esta doble

característica, de ser actor y escenario de la acción política al mismo tiempo, es lo que permite referirse a la Central Obrera Boliviana (COB) como un "órgano de poder".[13] Es en ella donde se puede observar más nítidamente esta doble condición, que, sin embargo, no le es privativa en absoluto. En todo caso, de aquí resulta claro que los elementos no oficiales, pese a su debilidad, se ven obligados a actuar en un sistema fragmentado, disperso y confuso.

Gráfico 1. El sistema político en Bolivia



Siguiendo las líneas de acción política en el gráfico podemos observar la enorme complejidad del sistema. Basta retener la imagen que corresponde a los partidos, para entender hasta qué punto es complejo el panorama en el que se insertan y, por lo tanto, las enormes dificultades que enfrentan para consolidarse como instituciones. En el mejor de los casos, lo que se produce es una especialización entre los partidos según el campo de la acción. Mientras algunos alcanzan relevancia en escenarios como el Parlamento o la gestión estatal, otros lo hacen en los organismos sindicales (la COB, la CSUTCB y Federaciones Nacionales) o en los Comités Cívicos, pero casi nunca se encuentran partidos capaces de actuar en todos los escenarios con el mismo éxito.

Es posible, también, encontrar en esta perspectiva, una explicación adicional a la casi tradicional historia de divisiones de los partidos políticos.

Estas características del sistema político boliviano son, probablemente, resultado de los efectos distorsionantes del largo ciclo militar autoritario, que proscribió deliberadamente a los partidos y estigmatizó a la política, pero son también efectos de una concepción *libertaria* de la democracia, cultivada justamente por oposición a todo lo que significó la dictadura. En efecto, aunque es cierto que un problema de la democracia en Bolivia está referido a la gran diversidad de contenidos que se le atribuyen,[15] también lo es que exista un acuerdo básico: el de la irrestricta vigencia de libertades sociales e individuales. Acuerdo establecido por la práctica de actores y grupos sociales que, menospreciando leyes y procedimientos, han puesto de manifiesto todas sus contradicciones, aspiraciones y valores a través de la acción colectiva. Parece existir un consenso mínimo que acepta "la fuerza de la masa" como regla suprema y la presión como lenguaje social. En ese sentido, se diría que la democracia, en ausencia de un sistema de mediaciones políticas, implicó la ruptura de todo sistema normativo e institucional para la expresión y la resolución de los problemas colectivos.

Por los datos del *cuadro 1* puede verse que hay, en este período, una extraordinaria eclosión social. La cantidad de eventos sociales* que registra la prensa supera notablemente a otras coyunturas, incluso a las que tuvieron cierta semejanza como las de Ovando-Torres y Guevara-Gueiler. En esos 52 eventos que ha debido enfrentar mensualmente el gobierno democrático, se está expresando con nitidez esa concepción libertaria de la democracia, pues prácticamente ninguno de ellos se realizó siguiendo las pautas mínimas que contempla la ley, y una gran parte fue protagonizada por grupos sobre cuya actuación y presencia no hay nada previsto: amas de casa, funcionarios del Estado, juntas vecinales, grupos estudiantiles, etcétera. Naturalmente, a esa manera de percibir la democracia hay que añadir la crítica situación económica, que por un lado genera angustia en muchos sectores impulsándolos a la protesta, y por el otro ha constreñido la capacidad del mismo Estado, sea para satisfacer exigencias y requerimientos, sea para mediatizarlos a través de la cooptación, el clientelismo o la prebenda.

* Se considera "evento social" a los hechos que implicaron la manifestación pública de grupos sociales organizados en torno de objetivos o reivindicaciones comunes. Se trata de acciones colectivas ya sea de carácter conflictivo o simplemente expresivo.

Cuadro 1. Eventos colectivos según coyuntura política (1970-1985*)

COYUNTURA		Meses	Eventos	Promedio Mensual
Ovando - Torres	(01/01/70 - 20/08/71)	19.66	705	35.85
Bánzer	(21/08/71 - 20/07/78)	82.99	876	10.55
Pereda - Padilla	(21/07/78 - 05/08/79)	12.50	265	21.20
Guevara - Gueiler	(06/08/79 - 16/07/80)	11.37	346	30.43
G. Meza - Vildoso	(17/07/80 - 09/10/82)	26.77	473	17.68
Siles Zuazo	(10/10/82 - 06/08/85)	33.90	1799	53.13
Total		187.19	4464	23.85

Fuente: CERES, Proyecto Regional. Registro de Prensa.

Estos son, a grandes rasgos, los rostros de una coyuntura compleja y difícil, en la que coincidieron democracia y crisis económica para poner al desnudo la extrema debilidad constitutiva del Estado, la multiplicidad de contradicciones que atraviesan a la sociedad y, por lo tanto, el enorme desafío que se presenta a movimientos sociales que no buscan sólo sobrevivir, sino construir una historia colectiva.

5. Panorama de la acción social en Bolivia (1970-1983)

Aunque no es un camino habitual, intentaremos aprehender una visión panorámica de la acción colectiva en Bolivia recurriendo a información de prensa cuantificada sobre los eventos sociales registrados en el lapso de 14 años comprendidos entre 1970 y 1983.* Estamos conscientes de las dificultades metodológicas que ello implica, pero también de su interesante potencialidad analítica.

Las dificultades provienen de la fuente de información, la prensa, que seguramente no ha registrado todos los eventos, omitiendo sobre todo los "periféricos" (rurales, provinciales o de departamentos alejados del eje central), y tampoco los ha registrado exactamente tal como ocurrieron en la realidad; pero también de la propia cuantificación.

A medida que se iban cumpliendo los pasos necesarios para ello, seguramente se fueron perdiendo detalles importantes para la comprensión de cada evento, pero se ha ganado una perspectiva que, por la distan-

* El fichaje de prensa y el procesamiento cuantitativo de los datos han sido realizados en el Programa de Investigaciones sobre Formaciones y Movimientos Regionales de CERES.

cia que permite entre el analista y la dinámica que estudia, ofrece una visión global de la acción colectiva.

El *cuadro 2* muestra qué grupos, y con qué objetivos, protagonizaron los eventos registrados. Resalta la frecuencia con que se movilizaron grupos provenientes de los *sectores medios* (56,3 % de las huelgas, manifestaciones y bloqueos), y en especial los *estudiantes* (17,9 %) y grupos de *funcionarios del Estado* (14,5 %). En el *cuadro 3* puede verse, sin embargo, que mientras los estudiantes pierden importancia relativa en los últimos años, los empleados públicos la aumentan notoriamente. Hacia fines de los '70 este grupo va logrando una centralización organizativa a través de la cual alcanza, durante la coyuntura democrática, una destacada influencia política,[16] influencia que se debió más a su posición estructural en el aparato estatal que al sentido de sus luchas, pues éstas tuvieron más objetivos económico-laborales (66 %) que las del promedio (48,4 %) *(cuadro 2).*

Otros grupos importantes por la cantidad de eventos que protagonizan, entre los sectores medios, son los de *maestros* (7,6 %) y *empleados bancarios* (4,8 %), cuyas luchas están marcadas, fundamentalmente, por problemas económicos. En el caso de los primeros, dependientes del presupuesto fiscal, prevalecen acciones destinadas a lograr el pago de sueldos atrasados o el cumplimiento de convenios anteriores, en tanto que entre los segundos se observa una permanente pugna por mejorar sus niveles salariales.

Los grupos *obreros*, considerados en conjunto, desarrollaron el 22,7 % del total de eventos registrados en el período, distribuyéndose de un modo relativamente regular a lo largo de las diversas coyunturas, aunque con intensidad relativamente superior durante las dictaduras militares. En general, sus luchas fueron fundamentalmente económicas (53 %), pero alcanzaron intensidad superior al promedio también en eventos que persiguieron objetivos de política coyuntural *(cuadro 2).* Sobresalen por su importancia los obreros con adscripción *fabril* (8,5 % de los eventos), y los trabajadores *mineros* (7,1 %). Aunque las diferencias en su condición estructural son muy significativas, por lo general ambos grupos han actuado en los marcos de una organización sindical con fuerte tradición política, la Central Obrera Boliviana (COB), y una consolidada institucionalidad centralizada: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Nacional de Fabriles, con sus correspondientes Federaciones Departamentales. Este hecho, sumado al impacto directo que tienen sus acciones sobre el sistema productivo, hace que a partir de los obreros se constituyan los actores colectivos de mayor importancia en el país.

En los grupos *campesinos,* protagonistas del 4 % de los eventos, es seguramente donde más se notan las limitaciones de esta visión cuantitativa. En primer lugar, por la diferenciación social existente en el inte-

Cuadro 2. Eventos colectivos por sector y objetivos (1970-1983)

Objetivos principales

Sector	Político institucional	Sociales	Político coyuntural	Económicos	(Generales)	(Laborales)	Organizacionales	Otros	Total
Obreros	104	65	101	395	(81)	(314)	45	35	745
Mineros	40	22	35	124	(36)	(88)	11	2	234
Fabriles	40	12	26	158	(17)	(141)	22	20	273
Resto	16	30	28	110	(26)	(84)	11	10	205
COB	8	1	12	3	(2)	(1)	1	3	28
Campesinos	7	38	24	39	(31)	(8)	15	8	131
Sector popular urbano	10	13	11	71	(61)	(10)	4	4	113
Sectores medios	333	213	183	370	(42)	(828)	153	103	1855
Magisterio	24	20	10	181	(3)	(178)	11	4	250
Bancarios	28	9	10	83	(1)	(82)	24	5	159
Estudiantes	169	101	112	88	(22)	(66)	64	53	587
Empleados públicos	37	63	33	314	(7)	(7)	10	19	476
Resto	75	20	10	204	(9)	(195)	44	22	383
Grupos cívicos	10	17	18	89	(89)	(—)	2	13	149
Otros	43*	22	54*	126	(17)	(109)	10	34	289
	507	368	391	1590	(321)	(1269)	229	197	3282

Fuente: CERES, Proyecto Migración, Registro de Prensa.

* Incluye dos sin información.

rior del sector, que es muy grande y difícilmente justifica su consideración como algo homogéneo; en segundo lugar, por su característica de productores parcelarios, que hace que su acción sea de forma y naturaleza muy distinta a la de los grupos anteriormente reseñados y, en tercer lugar, por la cantidad de población que suele estar involucrada en estos eventos. Parte de estos aspectos se percibe en el hecho de que tuvieron mayor importancia relativa los eventos que perseguían objetivos sociales (de participación y control de gestión: 29 %) *(cuadro 2)*, así como en la desigual distribución de su presencia en las diferentes coyunturas políticas *(cuadro 3)*. Esto último tiene que ver tanto con el surgimiento de nuevas capas campesinas (por ejemplo, los colonizadores de las zonas tropicales), como con el proceso de reorganización sindical que ha renovado la fuerza del sector transformando los términos de su inserción en la escena política y social.[17]

Los *sectores populares urbanos* (3,4 %) y los grupos *cívicos* (4,5 %) tienen en común el constituir actores con una base territorial de identidad (el barrio, la provincia, la región) y, por lo tanto, el hecho de que en sus acciones se ven involucrados grandes contingentes de población provenientes de distintas capas sociales.[18] Aunque su presencia varía en intensidad a lo largo de las últimas coyunturas consideradas *(cuadro 3)*, se trata de nuevos tipos de actores que han logrado ya un importante lugar en el sistema político institucional. Finalmente el *cuadro 4* señala que, en términos generales, prevalecen en el país los eventos de *adhesión pasiva* (60,8 %), sobre todo para los actores con identidad económica y estructuralmente dependientes (obreros y empleados); en tanto que la *adhesión activa* corresponde a eventos protagonizados por grupos sin adscripción productiva (estudiantes, sectores populares urbanos) o económicamente independientes, como los campesinos. Y esto, naturalmente, cualifica la presencia de los actores de modo distinto que si nos limitáramos a considerar la cantidad de eventos que protagonizan. Como también lo hace el considerar el carácter fundamentalmente *expresivo* de algunas formas de acción (las huelgas de plazo fijo y las marchas, por ejemplo), en relación con la *presión* que ponen en juego otras buscando un efecto o un desenlace más o menos inmediato (las huelgas indefinidas, los bloqueos y las tomas o intervenciones). Y ahí es interesante observar que los grupos que recurren con más frecuencia a formas de presión son los que generan un impacto económico más débil con su acción (maestros, campesinos, empleados públicos), en tanto que los otros (obreros mineros y fabriles, por ejemplo) no parecen necesitar pasar con tanta frecuencia de la expresión a la presión final.

A partir de esta visión panorámica de la acción colectiva será menos difícil comprender la importancia relativa de los principales actores y su ubicación en la, a veces, convulsionada escena social y política del país. Esto nos permite disponer, además, de algunos antecedentes inmediatos

Cuadro 3. Eventos colectivos por sector y coyuntura política (1970-1983)

Sector	Ovando Torres	Banzer FNP	Banzer FF.AA.	Pereda Padilla	Guevara Gueiler	G. Meza Vildoso	Siles UDP	Total
	Coyuntura política							
Obreros	133	99	103	70	75	141	124	745
Mineros	36	43	50	21	16	43	25	234
Fabriles	43	38	48	32	23	54	40	278
Resto	48	18	5	15	28	37	54	205
COB	6	–	–	2	8	7	5	28
Campesinos	60	22	3	4	12	5	25	131
Sector popular urbano	22	16	7	15	13	14	26	113
Sectores medios	371	249	269	139	202	248	377	1855
Magisterio	45	42	33	31	29	34	36	250
Bancarios	8	29	16	14	23	39	30	159
Estudiantes	184	109	149	31	32	31	51	587
Empleados públicos	67	29	13	23	70	86	188	476
Resto	67	40	58	40	48	58	72	383
Grupos cívicos	44	15	15	19	16	17	23	149
Otros	75	47	31*	18	28	48	42	289
	705	448	428	265	346	473	617	3282

Fuente: CERES, Proyecto Regional: Registro de Prensa.

* Incluye dos sin información.

Cuadro 4. Eventos colectivos por sector según tipo de adhesión (1970-1983)

Sector	ADHESION PASIVA					ADHESION ACTIVA						
	Paro cívico	Huelga p. fijo	Huelga indef.	Huelga brazos caídos	Sub Total	Bloqueos	Marchas	Tomas	Huelga de hambre	Sub Total	Eventos no clasificados	Total
Obreros	5	279	208	19	511	15	80	39	96	230	4	745
Mineros	–	107	62	3	172	7	24	17	11	59	3	234
Fabriles	–	105	72	8	185	5	15	8	64	92	1	278
Resto	5	57	70	8	140	3	28	13	21	65	–	205
COB	–	10	4	–	14	–	13	1	–	14	–	28
Campesinos	–	–	1	–	1	34	16	70	5	125	5	131
Sector popular urbano	2	7	3	–	12	36	37	9	17	99	2	113
Sectores medios	–	653	631	52	1336	51	197	115	150	513	6	1855
Magisterio	–	82	124	1	207	8	8	5	22	43	–	250
Bancarios	–	90	52	9	151	–	1	1	5	7	1	159
Estudiantes	–	137	100	1	238	27	162	89	67	345	4	587
Empleados públicos	–	163	225	33	421	5	14	10	26	55	–	476
Resto	–	181	130	8	319	11	12	10	30	63	1	383
Grupos cívicos	92	–	2	–	94	7	28	17	1	53	2	149
Otros	–	22	17	1	40	12	59	31	139	241	8	289
	99	961	862	72	1994	155	417	281	408	1261	27	3282

Fuente: CERES, Proyecto Regional. Registro de Prensa.

importantes para el análisis de la acción social en la presente coyuntura de crisis y democracia.

6. El movimiento obrero (1982-1985)

El 16 de setiembre de 1982, ante insistentes y fuertes presiones de las bases, la COB decretó huelga general e indefinida en todo el país demandando al régimen militar la entrega inmediata del poder a los elegidos en 1980. Veintiún horas después de iniciada la huelga, el general Vildoso anunciaba que las Fuerzas Armadas reconocían la legitimidad de los comicios de aquel año, y estaban dispuestas a acatar las decisiones del Congreso, que se reuniría de inmediato. Así culminó un proceso de intensificación de las luchas políticas y sociales, en las que ciertamente el papel más destacado estuvo en manos de las organizaciones laborales, a las que se incorporó prácticamente la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, el 10 de octubre, fecha de la toma de posesión del gobierno de Siles Zuazo, era en cierto modo la expresión de un liderazgo obrero, real en los hechos pero no reconocido como tal, ni siquiera por los propios dirigentes obreros que, si bien podían moverse cómodamente dentro de la UDP, no controlaban ni conducían los aparatos partidarios.

En efecto, la iniciativa en la lucha por la democracia y la fuerza fundamental fueron aportadas por los sectores obreros. Los restantes grupos los empresarios, los comités cívicos, los partidos, las juntas vecinales), si bien se sumaban a las acciones obreras y ampliaban sus repercusiones, no les explicitaban su apoyo ni reconocían su importancia. Ahí podía detectarse ya la existencia de distintos proyectos de democracia.

Es importante mencionar esto, porque de otro modo sería difícil entender cómo evolucionaron las actitudes de unos y otros frente al proceso democrático mismo. Todos se sentían partícipes de su construcción, sus propietarios, y en esa medida esperaban ser retribuidos, ya fuera contribuyendo a la definición de las políticas estatales, ya fuera beneficiándose con ellas. Se percibía la magnitud de la crisis económica y se temían sus consecuencias, pero también se confiaba en que el gobierno podía arbitrarlas y distribuirlas.

Sobre la base de estas percepciones iniciales, trataremos de analizar y describir la acción obrera en la coyuntura democrática. En términos generales, pensamos que pueden identificarse siete campos temáticos en los que se ubicó el movimiento sindical boliviano, los cuales, a su vez, pueden ser relacionados con los dos componentes que caracterizan de un modo singular la coyuntura que nos ocupa: democracia y crisis *(gráfico 2).*

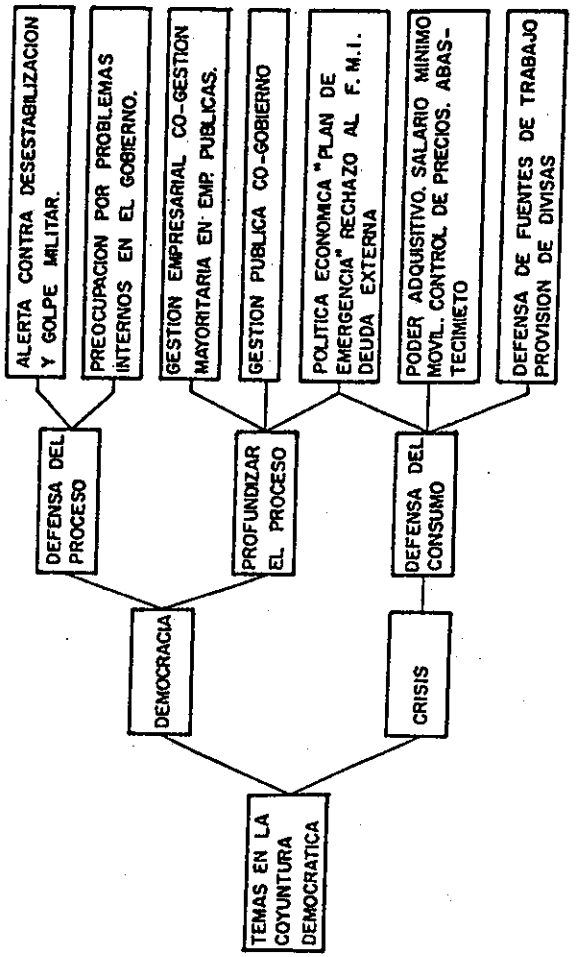


Gráfico 2. Temas del movimiento sindical

Defender la democracia

En lo que concierne al proceso democrático, podemos diferenciar dos tipos de actitudes: las que tienen que ver con el *proceso* mismo, y las que tienen que ver con el *gobierno* democrático.

Durante casi todo el tiempo los voceros y dirigentes del movimiento laboral han expresado su disposición a defender el proceso independientemente de lo que pueda hacer o no el gobierno, y esto se expresa en un estado permanente de alerta frente a posibles intentos golpistas e incluso frente a acciones desestabilizadoras de otros sectores sociales o de grupos sindicales. Esta actitud se ha ido debilitando con el curso del tiempo, hasta culminar en marzo de 1985 con el pedido de la renuncia del Presidente planteado por altos dirigentes de la COB, y la sospecha de que la huelga nacional de ese mes habría formado parte de un intento insurreccional destinado a "profundizar la democracia" evitando las elecciones de julio de 1985 y el inminente triunfo de partidos de derecha. Sin embargo, más que al movimiento sindical como tal, que está muy consciente de la importancia que reviste para sus propias organizaciones la vigencia de un clima de libertades irrestrictas, esa actitud puede ser atribuida a la estrategia política coyuntural de los partidos que controlan la cúpula del movimiento.* No hay que olvidar que tiene lugar precisamente en un momento de aguda descomposición institucional, que provoca un gran distanciamiento entre bases, dirigentes y gobierno.

La preocupación por la suerte del proceso se plasmó también, en varias oportunidades, en relación con los problemas internos del frente gobernante. Las pugnas interpartidarias, la presencia de ministros "independientes", la recomposición del frente, han concitado también la atención del movimiento sindical, que en determinado momento intervino directamente ante el Presidente considerando que la inconsistencia política del gobierno ponía en riesgo al proceso mismo. Si bien es cierto que esta actitud coincide con la presencia de militantes del Partido Comunista de Bolivia (PCB) tanto en el gobierno como en la COB, estos planteamientos surgieron también de sindicatos de base y de dirigentes de diversa filiación política.

* En septiembre de 1984 se realizó el VI Congreso de la COB en medio de duras pugnas intrasindicales y un despiadado antagonismo partidario exento, sin embargo, de debate político. El desarrollo del Congreso y sus resultados, muestran que el mismo no tuvo otro fin que la captura del Comité Ejecutivo por parte de una efímera alianza que tomó el nombre de Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) integrada por partidos de la izquierda opositora.

Por otro lado, están las actitudes más directamente relacionadas con la *gestión* de gobierno, y que sólo pudieron plantearse bajo el supuesto de que había en el Ejecutivo una predisposición favorable al movimiento sindical.

La *participación obrera* en la gestión de las empresas públicas, y especialmente en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), es ya un tema tradicional en el movimiento sindical boliviano, y fue planteada desde el mismo momento en que se inició el gobierno de Siles Zuazo.

La cogestión fue ejercida de hecho en 1945 por los trabajadores mineros de Morococala en respuesta a un lock-out dispuesto por la empresa, y al año siguiente fue incorporada como reivindicación obrera en el Congreso Minero de Pulacayo. Luego de la nacionalización de la minería del estaño, en 1952, fue instituida como "control obrero con derecho a veto", y después de varios años de gobierno militar volvió a discutirse durante el gobierno de Torres sin que entonces lograra cristalizar.[19] Por eso, no podía llamar la atención que incluso desde antes de la asunción del gobierno democrático volviera a plantearse la cuestión, ni que entre las primeras medidas de política económica la UDP expresara la intención de establecer la cogestión obrero-estatal en el conjunto de empresas públicas del país.

Tal intención, sin embargo, quedó en el papel, y en abril de 1983, frente a una prolongada huelga de técnicos de la COMIBOL, los dirigentes de la FSTMB ocupan las instalaciones centrales de la empresa y se hacen cargo de la gestión de la misma, conminando al gobierno a legalizar de una vez su ofrecimiento, cosa que ocurre sólo en septiembre de ese año.

Lo particular del tema en la coyuntura está dado por el hecho de que la cogestión no es justificada sólo como reivindicación obrera, sino sobre todo como una actitud autodefensiva de los trabajadores. Como decía Víctor López, "Si la COMIBOL se hunde, el país se hunde, y [los trabajadores] estamos en la obligación de proteger la empresa, que es propiedad del pueblo boliviano".[20]

Y es que, evidentemente, si la crisis económica es grave, lo es aun más para la COMIBOL. Prácticamente desde que se nacionalizaron las minas no se han modernizado los métodos de trabajo ni se han incorporado nuevas vetas a la producción, disminuyendo constantemente las reservas y la ley del mineral extraído, pese a que el número de técnicos y empleados aumentó por lo menos cuatro veces. A eso debe añadirse la caída en la producción física, la contracción del mercado y el decremento de los precios, y los elevados costos de producción que determinan la virtual quiebra de la empresa, cuyas pérdidas representan una carga cada vez más pesada para el erario fiscal. Para los trabajadores mineros el futuro se presentaba en términos de cesantía o de cooperativización

forzada, alternativas ambas que hacían perceptible su inminente disolución como clase proletaria, ya que ningún gobierno parecía interesado en vigorizar económicamente a la COMIBOL.

En el planteamiento de la cogestión había, pues una lucha por sobrevivir económica y políticamente, y el proletariado minero se planteó una resolución no conservadora de su problema. Por temor a la manipulación institucional, que ya había sido experimentada durante el gobierno del MNR (1952-64), la Federación de Mineros exigió intransigentemente cogestión "mayoritaria", que implica el control absoluto de la empresa.

Por otro lado, como señalara Lebot[21] y confirmaran diversos dirigentes sindicales, como Filemón Escóbar y José Pimentel,[12] "la cogestión es la puesta en práctica de un proyecto político: la salvación de la COMIBOL es presentada como una necesidad nacional y la participación en el poder económico, como un paso en la futura distribución del poder político".

La factibilidad y el éxito de la cogestión aparecen, entonces, condicionados a la adopción de toda una línea política en la que se reconocía un lugar predominante a la efectiva participación del movimiento sindical en el gobierno, que es otro de los temas fundamentales en la coyuntura.

Cogobierno

Como el anterior, el tema de la participación del movimiento sindical en el gobierno a través de la COB tiene importantes antecedentes históricos en el país, y podría decirse que forma parte de la memoria colectiva popular.

La COB, que sustituyó a varios esfuerzos de centralización organizativa de los trabajadores, fue fundada a los pocos días de haberse producido la victoriosa insurrección popular de 1952. Este hecho ha marcado profundamente la historia posterior de la COB por varios motivos. En primer lugar, porque la Central se fundó por convocatoria de dirigentes sindicales que ya habían asumido funciones de gobierno como Ministros del nuevo régimen. En segundo lugar, porque la vigorosa presencia de la Federación de Mineros en el acto insurreccional se traduce en su conversión en núcleo motriz y articulador de la COB, que se plasma institucionalmente en el predominio político de los trabajadores mineros, reconocidos y autorreconocidos como la auténtica vanguardia proletaria. Y, en tercer lugar, porque la COB se plantea desde sus primeros momentos como un mecanismo de participación política de los trabajadores y también de otros estratos populares. Bajo la *forma sindicato* se organizan y movilizan no solamente los asalariados, sino también los

campesinos, los pequeños comerciantes, los estudiantes, los transportistas, los inquilinos urbanos e incluso los carabineros y los contrabandistas, logrando todos una representación en la COB como órgano superior del pueblo triunfante.

La COB, entonces, nace cerca del Estado, cerca del poder, y asume funciones de representación política para el conjunto de las capas subalternas. Ello no ocurre, sin embargo, de un modo clientelar ni bajo la cooptación del Estado, pues desde su primer manifiesto, emitido el 1° de mayo de 1952, se impone un "deber ser" crítico incluso frente a ese proceso revolucionario que han iniciado los trabajadores con su insurgencia. En esa oportunidad, la COB define las tareas centrales de la Revolución Nacional: nacionalización de minas y ferrocarriles, confiscación de latifundios y distribución de la tierra, voto universal, etcétera. Como lo señala Guillermo Lora,[23] la COB en ese momento se impone la tarea de fijar pautas de conducta al nuevo régimen y controlar la ejecución del programa nacional popular que se había ido configurando en la lucha antioligárquica.

Para ello, fue necesario que la COB situara su acción, tanto a nivel de la sociedad, organizando sindicatos y movilizando y apoyando a los distintos sectores, como a nivel del gobierno, donde la COB tenía el derecho de designar ministros y ejecutivos de algunas instituciones públicas.

Es posible, como lo plantea Zavaleta,[24] que el *cogobierno* hubiera imposibilitado el pleno desarrollo de un poder dual que pudo conducir al control absoluto del poder por los obreros, y es posible, como afirma Lora,[25] que el cogobierno no pasara de ser la expresión de pugnas y acuerdos entre fracciones del partido gobernante; pero lo que es innegable es que el cogobierno quedó grabado en la memoria del movimiento sindical como testimonio de su fuerza, de su potencia estatal y política. Sólo así se explica que después de la ruptura y el distanciamiento entre la COB y el MNR, a partir de la cual la "autonomía de clase" se traduce en actitudes escisionistas respecto del Estado, volviera también a plantearse, de un modo recurrente, la cuestión del cogobierno.

Durante la corta presidencia del general Juan José Torres (1970-71), cuyo ascenso fue posible precisamente por la decisión de la COB de respaldar su resistencia al golpe preparado por elementos reaccionarios del Ejército, se planteó la imperiosa necesidad de fortalecer al régimen mediante la participación organizada de los trabajadores en el Poder Ejecutivo. El temor de provocar la reacción de la derecha, y el temor de ser manipulados por el "reformismo" impidieron que se concretara una nueva experiencia de cogobierno, y esa frustración de alguna manera quedó asociada a la derrota que significó para el movimiento obrero el golpe militar de Banzer en agosto de 1971.

Esto explica por qué no podía sorprender que se discutiera la posibilidad de un cogobierno COB-UPD aun antes de que Siles Zuazo se hiciera cargo de la presidencia.

A medida que la política económica de la UDP se mostraba impotente para controlar la crisis y el deterioro de la economía suscitaba mayor descontento popular, se fue abriendo paso la idea de que era preciso que la COB participara en el gobierno, a fin de evitar que su inestabilidad interna pusiera en riesgo el proceso democrático y de potenciar al movimiento obrero para su inevitable enfrentamiento con el enemigo principal: el fascismo, según los insistentes planteamientos del dirigente minero Filemón Escóbar.[26]

Notablemente, el II Congreso de la Confederación de Campesinos respaldó en julio de 1983 la idea del cogobierno, a través del cual se expresaría una voluntad de defensa y de profundización de la democracia. En agosto de ese año el Presidente invitó a los dirigentes de la COB a discutir su participación en el gobierno. En respuesta, éstos condicionaron su aceptación a la previa aprobación de un Plan de Emergencia elaborado por asesores y dirigentes del movimiento sindical. El gobierno expresó su coincidencia con varios de los plateamientos contenidos en dicha propuesta, pero se negó a aceptarla en su totalidad, determinando así el fracaso de las negociaciones. A partir de ese momento cobran fuerza las posiciones salarialistas en la COB, que se traducirán en el distanciamiento COB-gobierno y en el retorno a una política de choque y enfrentamiento entre ambos.

Sin embargo, durante la huelga nacional de marzo de 1985 volvió a plantearse la posibilidad del cogobierno, esta vez por inciativa gubernamental. El gobierno sólo logró el respaldo de la Confederación Campesina y algunos pocos dirigentes obreros; la mayor parte de los líderes sindicales tenía preocupaciones exclusivamente economicistas.

Según las primeras evaluaciones hechas por sus mismos protagonistas, la imposibilidad de concretar una nueva experiencia de cogobierno debe ser considerada como causa fundamental del fracaso de la cogestión, así como de la dispersión política del movimiento obrero.[27]

Propuesta de política económica

Luego de que fracasaron las negociaciones sobre el cogobierno, la COB se impuso la tarea de promover un cambio en la política económica y de imponer la aplicación de su Plan de Emergencia. Este continuaba una línea, ya planteada anteriormente, de rechazo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de postergar el pago de la deuda externa, pero contenía una amplia gama de objetivos y propuestas que iban desde el "salario mínimo vital con escala móvil" hasta la necesidad de una reforma educativa inmediata. En opinión de Mayor-

ga,[28] "no se puede evitar la impresión de que el Plan de Emergencia es una declaración general de intenciones radicales que no tienen asidero en planes viables [y] la expresión de una estrategia política [que] resulta de una mezcla ideológica y políticamente heterogénea".

Luego de tres infructuosas huelgas nacionales en las que la COB expresó su protesta por la situación económica intentando forzar al gobierno a aceptar su Plan, el VI Congreso realizado en Cochabamba en setiembre de 1984 ratificó los contenidos de dicha propuesta enfatizando el objetivo de "salario mínimo y escala móvil".

En cierto modo, como quisimos destacarlo en el *gráfico 2*, en el tema de la política económica convergen las preocupaciones del movimiento sindical respecto de los dos campos que caracterizan la coyuntura. Subyace en ello la convicción de que uno de los riesgos más graves para la democracia está, justamente, en la crisis económica, que generaliza el descontento popular y desacredita al gobierno y al sistema.

En ese mismo plano se colocaría la decisión del gobierno de postergar el pago de la deuda externa a la banca privada. Esta postergación, si bien ya se había dado en los hechos por estrechez financiera, fue públicamente expuesta a raíz de la presión de la COB. Sin embargo, los efectos de esta decisión "soberana y antiimperialista" podrían ser económicamente muy costosos en el largo plazo.[29]

No se puede dejar de reconocer, empero, que muchas de las demandas del Plan de Emergencia, imposibles de realizar, parecen expresar una deliberada intención de conservar las distancias entre la COB y el gobierno, obstaculizando un acercamiento que pudiera poner en riesgo la independencia sindical y el predominio logrado por los sectores más radicales en la COB.

Salario mínimo y móvil

Ante el limitado éxito de las presiones en torno de la política económica, y el evidente agravamiento de las condiciones de consumo, cobró fuerza dentro de la COB la posición salarialista, ideológicamente respaldada por las corrientes trotskistas. Tipificando a la democracia como una forma encubierta de la dictadura burguesa, consideraban que la lucha por el salario mínimo vital tendería a acorralar al gobierno y a preparar una insurrección popular que instauraría la dictadura del proletariado. Sin adherir plena o explícitamente a esta ilusión, la mayor parte de los dirigentes sindicales llegaron a convencerse de que no había en el gobierno una voluntad política favorable a los trabajadores, y que no quedaba otro camino que el de la imposición y el enfrentamiento.

Bajo el signo de este reflujo economicista se ha conducido la COB, particularmente desde su VI Congreso, organizando en el curso de cinco

meses cuatro huelgas nacionales que paralizaron buena parte del país durante treinta y cinco días en total. Durante estos hechos, unos 12 mil trabajadores de la minería estatal ocuparon la ciudad de La Paz.

En este tiempo no se ha producido la insurrección popular, pero el gobierno se ha visto obligado a renunciar a un año de mandato convocando a elecciones generales para julio de 1985; tampoco se ha logrado el salario mínimo y los aumentos obtenidos han sido rápidamente absorbidos por la inflación. La imagen del gobierno se ha deteriorado notablemente, pero también el movimiento sindical se ha desprestigiado, incluso entre los trabajadores de base; y las banderas de la democracia han sido levantadas por quienes en el pasado impusieron el autoritarismo y la represión.

Defensa de la fuente de trabajo

Un último tema que quisiéramos destacar en esta reseña es la defensa de la industria establecida, por medio del pedido de asignación de divisas para regularizar su funcionamiento. Este ha sido un planteamiento expuesto durante todo el período por los sindicatos de base más que por los órganos centrales del movimiento laboral. Preocupados por la situación de sus fuentes de trabajo, los sindicatos de base intentan mejorarla con recursos que significarían en los hechos una importante subvención para la empresa, ya que el tipo oficial de cambio siempre ha estado muy por debajo del tipo real fijado en el mercado paralelo. Con frecuencia el gobierno se ha visto obligado a ceder a estas presiones, sin haber logrado con ello ni siquiera establecer un mayor control sobre la correcta utilización de esos fondos, ya sea por sí mismo o a través de los sindicatos.

En esta temática aflora un economicismo defensivo y sectorial que, sin embargo, ha tenido otras expresiones incluso más violentas. Hoy se habla de la "feudalización" de algunas empresas públicas, aludiendo al control que ejercen sobre ellas sus sindicatos en beneficio propio, aunque revistiendo siempre sus acciones de una retórica izquierdista y antiimperialista. Tal es el caso del Banco Central de Boliva, que bloquea la política gubernamental, aumenta los sueldos y resiste la fiscalización de la Contraloría, o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que establece privilegios para los trabajadores mientras éstos realizan huelgas para imponer alzas en los precios de los carburantes o lograr la utilización autónoma de cupos de divisas.*

* Evidentemente, esto también tiene que ver con el deterioro de la economía fiscal que hoy hace mucho más visibles las características prebendalistas del funcionamiento del Estado.

Entrampados en el "basismo" y la sacralización de la Asamblea, los más altos dirigentes del movimiento sindical no pueden controlar esos brotes y con frecuencia se han visto arrastrados por ellos.

Tendencias y cambios en la coyuntura

En términos generales, puede percibirse a lo largo de la coyuntura democrática un desplazamiento en las posiciones y actitudes del movimiento sindical en su conjunto, que podría tener importantes y peligrosas repercusiones en el futuro inmediato.

Entre las primeras, de la mayor importancia es la declinación económica de la minería, cuya significación real para el conjunto de la economía nacional ha disminuido notablemente. Al tratar la cogestión ya mencionamos algunas cifras. Basta añadir que el aporte de divisas del sector petrolero (YPFB) es más de cuatro veces superior al de la COMIBOL, y que el costo de producción del estaño representa el doble del precio vigente en el mercado mundial. De ahí que la presión que puede ejercer una huelga minera sobre el gobierno sea tan reducida, que se vaya haciendo necesario realizar otras acciones adicionales, como la marcha sobre la capital durante la huelga de marzo. El poder sindical de los trabajadores mineros ya no tiene el sustento material que antes tenía, aunque sin duda conserva el liderazgo ideológico basado en su tradición e historia de luchas. Se diría que hay una creciente inconsistencia entre su poder "hacia afuera" y su poder "hacia adentro" de la COB. Y esto ya ha sido percibido por los mineros, y también por otros sectores que reclaman una mayor representatividad en el Comité Ejecutivo de la COB, o que desafían sus resoluciones expresando problemas de reconocimiento. De modo que los conflictos internos podrían agudizarse si en la COB no se modifica con realismo la composición de sus órganos decisorios, otorgando mayor peso a sectores como los fabriles, petroleros y campesinos e incorporando a grupos nuevos como los de empleados del Estado.

Entre los cambios que han ocurrido dentro de la COB está el notable fortalecimiento de las Centrales Obreras Departamentales (COD), que pese a tener una limitada participación en las instancias deliberativas de la COB, son muy representativas a nivel de cada Departamento. Por momentos, parecería que los dirigentes de la COB consideran a las COD como meras delegaciones territoriales de su autoridad, cuando en verdad se constituyen autónomamente y están obligadas a responder por sus actos ante las bases departamentales y no ante la cúpula nacional. Este fenómeno forma parte, además, de un lento pero persistente proceso de surgimiento y consolidación de identidades regionales en el país, a través de movimientos que plantean problemas territoriales restringidos y que por lo tanto no pueden ser adecuadamente resueltos en una organización excesivamente centralizada a nivel nacional. La regionalidad, que tiende a expresarse con fuerza social creciente, constituye otro desafío que la COB deberá enfrentar en un futuro inmediato.

De una posición amplia y abierta a la interrelación con otras fuerzas y con el Estado, se ha ido pasando paulatinamente a una política de enfrentamiento e imposición que tiende a aislar, debilitar y fragmentar al movimiento laboral, poniendo en evidencia una creciente inconsistencia entre su base material y su organización institucional.

El explícito rechazo a una política de concertación, con el argumento de que no es posible pactar con los enemigos de clase, y la abierta crítica a la posición conciliatoria del gobierno democrático, acusado de haberse entregado a los intereses de la empresa privada y del FMI, son posiciones expuestas con frecuencia por los dirigentes de la COB en los últimos meses. Reflejo de ello es la radicalización en las *formas* de lucha y la "economización" de los objetivos.

La huelga general e indefinida decretada por la COB el 8 de marzo de 1985, que se prolongó por espacio de 16 días, fue precipitada por algunos sindicatos mineros que, ante la falta de respuesta a sus exigencias de abastecimiento regular de bienes de consumo y materiales de trabajo, tomaron sectorialmente dicha actitud, convocaron a la solidaridad de otros sectores y marcharon sobre La Paz en busca de soluciones inmediatas. La cúpula dirigente de la COB decretó la huelga y dispuso que nuevos contingentes de mineros se fueran trasladando a La Paz paulatinamete y expresó, por medio de sus más altos dirigentes, el pedido de renuncia del Presidente. La huelga se cumplió de manera muy irregular. Por "disciplina sindical", ningún sector la objetó públicamente, pero en los hechos fue desacatada por varios grupos de trabajadores y en distintas regiones del país.

Este acontecimiento reveló, más allá del desacuerdo existente con los objetivos o la conducción de la huelga, algunos cambios que se han suscitado en los últimos años en el sistema productivo, que aún no han sido incorporados en la organización de la COB, y otros que ocurrieron en la misma organización y que tampoco han sido considerados por los dirigentes superiores.

7. El movimiento campesino en la coyuntura democrática

A pesar de la persistente opresión económica y cultural que han soportadc los trabajadores del agro en el país, han sido capaces de producir movimientos y, a través de ellos, generar hechos históricos de gran trascendencia para sí mismos y para el conjunto de la sociedad.[30]

La participación indígena campesina ha sido fundamental a lo

largo de toda la historia colonial y republicana del país, alcanzando particular relevancia social y política en los momentos de crisis del orden dominante. Para referir sólo tres hitos clave, habría que señalar que las republiquetas guerrilleras que acosaron durante quince años al poder colonial español e hicieron posible la independencia de Charcas, no habrían podido sostenerse si el campesinado indio no se hubiera incorporado a las luchas autonomistas de criollos y mestizos con decisión y coraje.* La guerra federal de 1899, que reconstituyó el orden oligárquico instaurando el largo período liberal, fue también decidida por la presencia masiva de verdaderos ejércitos rurales cuya vigorosa perspectiva de liberación económica y cultural sólo pudo ser ahogada por la violenta represión que ejercieron los criollos triunfadores inmediatamente después de su victoria.[31] Y, finalmente, la Revolución Nacional de 1952 fue otro escenario en el que la movilización campesina tuvo un carácter determinante y decisivo.** [32]

En este último caso, la participación campesina determinó la orientación de la reforma agraria mediante las tomas de tierras y su distribución inmediata en parcelas de cultivo familiar, en un proceso muy rápido y que debió ser reconocido y ratificado por la legislación posterior.

En ese contexto cobró un impulso extraordinario la organización campesina a través de sindicatos, contando para ello con las ya exitosas experiencias de sindicatos organizados en algunas localidades desde los años '30.

Como lo han hecho notar todos los que han estudiado las movilizaciones campesinas en Bolivia, los sindicatos rurales se organizaron teniendo como referencia los sindicatos minero y fabril, pero desarrollaron sus propias características a medida que los campesinos actuaban en ellos y a través de ellos. Luego del proceso inicial; en el que se consolida distribuyendo las tierras de hacienda y fortalece su presencia institucional con el respaldo de milicias campesinas, el sindicato se convierte en el mecanismo de articulación y relación de los campesinos con el Estado y el resto de la sociedad. El sindicalismo campesino canalizó y mediatizó el apoyo político al gobierno del MNR (1952-1964) y ofreció significativos márgenes de respaldo social a posteriores gobiernos militares, que institucionalizaron el "Pacto Militar Campesino" como una forma de control con apariencias de reciprocidad.[33]

* Un testimonio muy importante de esto se encuentra en el *"Diario de un guerrillero de la independencia"* atribuido al Tambor mayor Vargas y rescatado por Gunnar Mendoza (México, Siglo XXI, 1981).

** Más que el combate insurreccional mismo (9 al 11 de abril de 1952), nos referimos al proceso social que éste inició. Y si bien es cierto que aquél fue fundamentalmente urbano y obrero, en el proceso el campesinado tuvo un peso gravitante.

Pero donde verdaderamente adquiere notoriedad el sindicato campesino es a nivel de las bases locales, donde "llegó a ser una organización de autogobierno local y de afirmación de una identidad étnica y legitimación de ciudadanía y de ejercicio político".[34]

De modo que "el sindicato campesino es una síntesis orgánica de relaciones económicas y sociales, políticas y culturales del campesinado" y, como el sindicato obrero, cumple el doble rol de defender reivindicaciones vinculadas con el trabajo y la producción, y de constituir a sus afiliados como grupo de acción histórica sobre la sociedad en su conjunto.[35] La movilización campesina en el contexto de la Revolución Nacional alcanzó, pues, importantes resultados y modificó radicalmente la situación en el área rural, especialmente en las zonas andinas.

Pero pese a la distribución de las tierras, el reconocimiento de ciudadanía, el impulso dado a la educación y el impacto de la expansión mercantil, quedaron pendientes muchos problemas de índole étnico-cultural, así como problemas económico-sociales en las comunidades originarias. Estos problemas no encontraron cabida en el sindicalismo oficial, tanto porque no eran considerados en los marcos del Estado "nacionalista revolucionario" como porque no tenían verdadera importancia para los grupos campesinos más activos y fuertes en ese momento: los parcelarios y mestizos de los valles.

Pero esos problemas no podían ser continuamente ignorados, ya que constituían espacios de conflicto no ocupados por mediaciones institucionales, y en torno de ellos fueron surgiendo efectivamente movimientos contestatarios que minaron el aparato sindical cooptado por el Estado.

Adicionalmente, la parcelación minifundista de la tierra, las migraciones hacia zonas tropicales, y el desarrollo de una agricultura capitalista en el Oriente del país, generaron un intenso proceso de diferenciación social y económica en el campesinado, determinando el surgimiento de nuevos intereses y de nuevas fracciones campesinas que también salían de los marcos del sindicalismo oficial.

A fines de la década del sesenta ya se comenzaron a percibir resquebrajamientos en el sindicalismo campesino, especialmente en torno del rechazo al proyecto de impuesto único agrario.[36] Por otro lado, en forma subterránea pero permanente se fue gestando un movimiento cultural aymara que logró un sólido arraigo en los sindicatos en comunidades del altiplano, y desde ellos ocupó espacios cada vez más importantes en el aparato oficial. En 1971 la fuerza de este movimiento logró colocar a uno de sus líderes más importantes, Genaro Flores, en la cúspide de la Confederación Campesina oficialista.[37]

El golpe de Estado presidido por Banzer reprimió violentamente esos brotes contestatarios y trató, con extraordinaria torpeza, de servirse del Pacto Militar Campesino, sin comprender su lógica ni su dinámica. Al

masacrar campesinos que bloqueando carreteras reclamaban justamente la vigencia del Pacto,[38] Banzer puso al descubierto su falsedad, iniciándose entonces un acelerado proceso de descomposición del sindicalismo oficialista y de avance de los grupos contestatarios.

En 1979, en el contexto de la apertura democrática, logra constituirse un nuevo órgano central del sindicalismo campesino: la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), liderada por los *kataristas*.

Esta organización ha jugado, desde entonces, un papel muy destacado en las luchas políticas y sociales del país y, aunque forma parte de la COB, ha tratado celosamente de conservar su propia identidad y su autonomía organizativa, tanto respecto del Estado y los partidos políticos, como respecto de las mismas organizaciones sindicales obreras.

El movimiento campesino, a través de la CSUTCB, ha participado activamente en las luchas por la democracia durante la última década, abriéndose mucho más a una relación con la sociedad civil que a una relación con el Estado, y restableciendo la posibilidad de una nueva alianza con el movimiento obrero de las minas y las ciudades. Alianza cuyos gérmenes ya han sido percibidos en momentos clave, como la resistencia a los golpes de Natush (noviembre de 1979) y García Meza (julio de 1980), no sólo a nivel de las cúpulas, sino sobre todo de las bases obreras y campesinas.[39]

Una reciente evaluación de Silvia Rivera,[40] muestra, sin embargo, que el movimiento campesino vive una dinámica de avances y retrocesos. El ritmo de esta dinámica, tan cercano a la coyuntura económica y política nacional, ritmo al que viven otros actores sociales, testimonia con elocuencia la profunda inserción del movimiento campesino en los problemas actuales que enfrenta la sociedad boliviana.

Así, Rivera distingue dos fases en la coyuntura democrática abierta en octubre de 1982; la primera, signada por una creciente capacidad articulatoria entre lo social y lo político, lo étnico y lo clasista, lo obrero y lo campesino, culmina con las discusiones acerca del cogobierno en agosto-setiembre de 1983. La segunda fase, a su vez, se abriría con el fracaso de dichas discusiones y estaría marcada por la agudización de contradicciones que tienden a fragmentar, dispersar y debilitar al movimiento campesino.

De la participación al economicismo

Apenas iniciado el gobierno democrático, los sindicatos campesinos empezaron a organizar tomas e intervenciones de entidades estatales vinculadas con la actividad agropecuaria, y que hasta entonces se habían caracterizado por su inoperancia y corrupción o, en el mejor de los casos,

por su ignorancia de los verdaderos problemas que aquejaban a la población que pretendían atender.

Estas acciones aumentaron en frecuencia a intensidad a medida que los campesinos comprobaban que no había en el nuevo gobierno una voluntad decidida a cambiar la lógica clientelar y paternalista con que funcionaban esos organismos.

Las demandas de base giraban en torno del control de proyectos de desarrollo rural o de instituciones descentralizadas del Ministerio de Agricultura. Fueron recogidas a nivel de la Confederación y planteadas globalmente en términos de participación campesina tanto en el diseño de las políticas agropecuarias como en su administración.

Esta reivindicación estuvo continuamente articulada con planteos semejantes del movimiento obrero. Por ejemplo en abril de 1983, mientras la Federación de Mineros ocupaba la COMIBOL estableciendo la cogestión, los campesinos realizaban un bloqueo nacional de caminos con el que abrieron negociaciones con el gobierno en las que, además, expresaron su pleno respaldo a la iniciativa laboral minera.

Como vimos anteriormente, en su II Congreso Nacional, los campesinos afiliados a la CSUTCB aprobaron una resolución que autorizaba a sus dirigentes a participar en la formación de un gobierno UDP-COB-CSUTCB, y que lo planteaba como solución a la crisis política. Este respaldo al cogobierno estimuló su tratamiento en el seno de la COB, e impulsó las negociaciones establecidas en agosto de 1983 con tal fin.

La iniciativa, sin embargo, no pudo ser concretada, para beneplácito de algunas fracciones del gobierno y de la COB, y a partir de ese momento cobran mayor importancia las corrientes radicalizadas que no ven otra forma de relación con el Estado que el enfrentamiento.

A semejanza de lo que ocurre en el movimiento obrero, los mecanismos de participación ya establecidos a nivel productivo estimulan posiciones economicistas, al no haber podido ser situados como parte de una exitosa estrategia política que debía culminar en el cogobierno.

Así, el proyecto de una Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA), que debía coordinar inversiones en infraestructura y equipos de apoyo a la economía campesina como "empresa de propiedad social autogestionaria", se convierte, según Rivera[41] en el equivalente del salarialismo obrero, porque "su funcionamiento depende de concesiones arrancadas al gobierno [...] y no de un esfuerzo concertado que permita equilibrar las demandas campesinas con las posibilidades reales de las finanzas estatales".

La imposibilidad de cristalizar las propuestas participativas se vive, dentro del movimiento, como el fracaso político de sus propugnadores, lo cual es aprovechado por las corrientes adversas que coexistían en su interior para ocupar situaciones de mayor control e influencia. Es decir, en la segunda fase de la coyuntura se agudizan las pugnas partidistas, y

ello tiene repercusiones negativas sobre el conjunto del movimiento campesino. La CSUTCB pierde capacidad articulatoria y representativa, mientras que por otro lado las disputas políticas estimulan también la dispersión de las demandas campesinas de base y su planteamiento sectorializado.

Sin embargo, en enero de 1984 todavía logra aprobarse un esfuerzo programático que busca vincular lo político y lo sindical: el proyecto de Ley Agraria Fundamental, a partir del cual se plantea una nueva reforma del régimen de propiedad según la cual "el trabajo *personal* es la base del derecho a la propiedad de la tierra", y que contempla el establecimiento de una nueva institucionalidad participativa de los campesinos en el Estado.[42]

El proyecto ha sido aprobado en un Congreso extraordinario con delegados de todo el país, y ha sido puesto a consideración de la sociedad. Pese a sus limitaciones y problemas, contiene una potencialidad transformadora del Estado que podría cristalizar en el futuro.

Otras contradicciones

El deterioro económico y la descomposición política alentada por la agudización de la crisis nacional, suscitan el resurgimiento de otras contradicciones en el movimiento campesino.

Siempre en la evaluación de Silvia Rivera, si en la primera fase la CSUTCB logró mantener el equilibrio *katarista* entre una *memoria corta* (que recuerda el momento democrático de la Revolución Nacional) y una *memoria larga* (que recuerda las luchas anticoloniales) en una síntesis expresada en la lucha por la participación en el Estado y la autonomía organizativa del campesinado, en la segunda afloran fricciones interregionales dentro del propio campesinado, que se superponen a las pugnas partidistas permitiendo que reaparezcan prácticas político-sindicales de corte clientelar y burocrático y concepciones clasistas que enfatizan la condición campesina sobre la condición india, disociando una de otra y resquebrajando el puente urbano-rural que ofrecía la cuestión cultural.

Estos problemas han puesto de relieve, una vez más, cuán difícil resulta superar prácticas profundamente arraigadas, incluso cuando ya se ha alcanzado un importante nivel de rechazo de las mismas en el plano ideológico, como lo atestiguan los documentos programáticos de la CSUTCB y su Tesis Política aprobada en el Congreso de 1983.[43]

El reflujo de las propuestas culturales en el movimiento campesino es el resultado de una actitud convergente de los sectores más reaccionarios del país, que practican formas disfrazadas de segregación racial pero acusan al *katarismo* de racista, y de grupos de la izquierda y el movimiento obrero, para quienes la cuestión cultural no es sino el reflejo secundario de la lucha de clases y, por lo tanto, un velo ideológico que hay que ignorar o combatir. Esta posición tiene, como ya se señaló, adherentes dentro del mismo movimiento campesino, con arraigo en las extensas zonas mestizas del agro.

Pero ignorar o menospreciar la dimensión cultural étnica no la hará desaparecer, y existirá siempre "la posibilidad subyacente de una derivación violenta y 'catártica' de estas fricciones si es que las demandas cultural-étnicas no son adecuadamente incorporadas en los discursos y en las prácticas institucionales de la sociedad", de modo que no se puede descartar en el futuro "la regresión 'revanchista' en los movimientos sociales definidos en términos étnicos".[44]

Estrechamente vinculado al resurgimiento de estos problemas se da, en la segunda fase, un distanciamiento obrero-campesino, menos expresado en el nivel ideológico organizativo que en el de las prácticas y reivindicaciones reales. Luego de la convergencia que se dio en torno del tema de la participación, la agudización de la crisis económica ha vuelto a poner de manifiesto el antagonismo subyacente entre la preocupación por los precios en los pequeños productores campesinos y la preocupación por los salarios en los obreros y empleados, así como la desigual relación que unos y otros tienen con el medio ambiente y la naturaleza; esto ha dificultado que los avances en el replanteamiento de las relaciones obrero-campesinas puedan consolidarse.

Por último, formando parte de la fragmentación y el debilitamiento del movimiento campesino en los últimos meses, se han puesto de manifiesto de un modo cada vez más nítido las rigideces organizativas en la CSUTCB para tratar adecuadamente las demandas que surgen de sectores regionalmente diferenciados y de los grupos femeninos como la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Aunque no podemos detenernos mucho en este punto, vale la pena mencionar que, entre los primeros, uno de los temas más difíciles e importantes de tratar es el de la producción y comercialización de la hoja de coca. Los productores, en su mayor parte pequeños propietarios, se han visto beneficiados por un continuo aumento de los precios y la demanda a raíz del "boom" de la cocaína, y no están dispuestos a renunciar a tales beneficios por consideraciones de orden moral. En sus Congresos y en sus acciones colectivas (bloqueos y huelgas de hambre), han expresado que están dispuestos a defender el cultivo de la coca y su libre comercialización, acusando al gobierno de "entregarse al imperialismo norteamericano", planteando la necesidad de industrializar la coca para usos legales (anestésicos, antidepresivos, etcétera) antes que renunciar a lo que ellos consideran "un recurso nacional estratégico".

La real importancia económica de la coca y la retórica coherentemente planteada han logrado la adhesión, por lo menos formal, del movimiento sindical y campesino, sobre todo ante el temor de que estos

vastos y fuertes sectores sociales puedan caer bajo el control de políticos vinculados con el narcotráfico.

Problemas de representación

En la evaluación anterior se ha puesto más énfasis en los límites que en las posibilidades del movimiento campesino para apuntar, sobre todo, al hecho de que la crisis actual representa un enorme desafío para sus organizaciones. "Se trata de una crisis estructural, de la que también han resultado víctimas la CSUTCB y la COB, que en los inicios de la presente coyuntura presentaron las posibilidades más promisorias para la articulación de un proyecto de sociedad alternativo" pero cuyo fracaso "puede atribuirse a la rigidez con que las organizaciones políticas plantearon su relación con el movimiento social y sindical y con el conjunto de demandas democráticas que éste canalizó",[45] que es lo que está, en definitiva, en la base de esta "crisis de representación" que no podrá ser resuelta recurriendo a las prácticas y modalidades de conducción y liderazgo habituales.

8. Los nuevos actores frente a la coyuntura democrática

En esta parte haremos una rápida referencia a lo que ha representado durante el período que consideramos la acción de algunos movimientos no tradicionales, cuya importancia ha ido en aumento durante los últimos años. Nos limitaremos a tratar tres de ellos, sin que ello implique ignorar o desconocer el impacto que pueden tener otros. En este sentido, es de lamentar la inexistencia de estudios que analicen sistemáticamente a los *empresarios*, cuya organización ha cobrado fuerza a partir de los años '70 y que, en la presente coyuntura, se han ubicado también en el escenario social protagonizando acciones masivas, sobre todo en Santa Cruz, pero también a nivel nacional, convocados por su Confederación.

Otros sectores cuya ausencia puede ser llamativa en este trabajo son los *transportistas*, los *militares* y los *estudiantes*. Cabe señalar una perceptible disminución de la influencia de los primeros en relación con la que alcanzaron durante las épocas dictatoriales, que es posiblemente el resultado de una deliberada política gubernamental y del rechazo hacia sus reivindicaciones puesto de manifiesto por las organizaciones populares, que han alentado tanto la formación de la Empresa Nacional de Transportes (ENTA) como el fortalecimiento de los sindicatos de asalariados y las cooperativas de transporte, resistiendo estoicamente las huelgas realizadas en el sector en demanda de aumentos de tarifas y fletes.

Entre los militares, según lo expuesto por Carlos Escobar y Andrés Soliz Rada,[46] habrían cobrado vigor nuevas posiciones institucionales

tendientes a reorientar el rol desempeñado por las Fuerzas Armadas en las últimas décadas. Así, aunque parecen persistir tendencias que conciben a éstas como "la institución tutelar de la Patria", nuevas actitudes generacionales plantean la necesidad de colocar a los militares junto a quienes se proponen metas de desarrollo y liberación nacional a partir de nociones de defensa y soberanía nacional más cercanas a la problemática económica y de recursos naturales.

Y en lo que respecta al movimiento estudiantil, ya destacamos anteriormente los datos que muestran una tendencia a disminución de su importancia. Es posible que ello se deba a que la sobreideologización de sus cúpulas dirigentes no tiene *correspondencia* con una masa estudiantil explosivamente creciente, y al hecho de que la masificación plantea graves problemas económicos y presupuestarios a las universidades que, pese a su calidad legalmente autónoma, siguen dependiendo de los limitados recursos fiscales.

Es posible prever la necesidad de prestar además mayor atención en el futuro a otros movimientos, por ejemplo, los emergentes en el campo de los problemas específicamente *femeninos* (como la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa) y en el campo político. En este último, parece gestarse un movimiento generacional que se orientaría a *transformar* las *formas* habituales de la política, dadas las enormes limitaciones demostradas por los partidos durante la última etapa.

8.1. El movimiento regional

Las profundas repercusiones espaciales del conjunto de transformaciones iniciadas durante la Revolución Nacional mostraron, poco a poco, que la heterogeneidad estructural y el pluriculturalismo que caracterizan a la sociedad boliviana tenían también una correspondencia territorial. De hecho, esto es lo que fueron reivindicando los Comités Cívicos a través de los cuales las regiones comenzaron a constituirse en sujetos colectivos.

La identidad regional en la que ponen el acento estos movimientos tiene una referencia central en el territorio, pero también en todo lo que éste significa y recuerda de una historia, una cultura y una ecología local, logrando de ese modo que en su seno converjan diversos sectores y capas sociales para actuar en torno de objetivos e intereses que se presentan como generales, y que en cada momento son específicamente definidos.[47]

Los comités cívicos, con una acción y un discurso persistentes y en muchos casos inmediatamente exitosos en el enfrentamiento con el poder central, han logrado construir y controlar un espacio ideológico altamente movilizador y con fuerte capacidad de convocatoria y de legitimación social.

Por la predominante importancia que durante muchos años tuvieron en su seno las élites empresariales y profesionales, los movimientos regionales podían ser considerados prácticas sociales de los sectores dominantes. En algunos departamentos, como Santa Cruz, el regionalismo se convirtió en el articulador de la hegemonía de un bloque formado por los terratenientes y el nuevo empresariado agrícola, pero en otros, como Cochabamba, no pasó de disfrazar el logro de objetivos particularistas no sólo de los grupos empresariales sino de quien fuera capaz de utilizar con eficacia el discurso y la organización.[48]

Estos movimientos, y sus organizaciones, se fortalecieron notablemente durante el régimen autoritario presidido por el general Banzer entre 1971 y 1978. Su política desarrollista, avalada por la disponibilidad de grandes recursos financieros provenientes de mejores precios de exportación y endeudamiento externo, tuvo en los movimientos regionales un respaldo decisivo, ya que gran parte de las acciones de éstos se orientaron en torno de proyectos de inversión de gran envergadura en cada una de las regiones. Además, mientras se reprimía duramente a las organizaciones políticas y sindicales, se concedía un amplio margen a los comités cívicos, incluso cuando en muchos casos, llegaran a poner en juego temas de la economía y de la política.

Como lo señalamos en otra oportunidad, los comités cívicos y las acciones regionales funcionaron como "operadores de legitimidad" del autoritarismo, al emitir un conjunto de *símbolos* que aparentemente desmentían la naturaleza del régimen. Así, al efectivo verticalismo en sus decisiones, la acción regional oponía la imagen de fiscalizar y controlar desde abajo al gobierno, frente a la exclusión dictatorial, el regionalismo ofrecía un campo de participación social; y en un medio en el que el debate y el diálogo habían sido proscritos, en los comités cívicos podía encontrarse un escenario de concertación.[49]

Así, se justificaba que al iniciarse la apertura democrática en 1978 los movimientos regionales y sus expresiones organizativas, los comités cívicos, fueran considerados como a la derecha del espectro político, y motivaran la desconfianza de quienes habían sido reprimidos en el pasado inmediato.

Sin embargo, en la misma acción regional habían comenzado a formarse nuevas actitudes y nuevos objetivos que, en un plazo muy corto, terminaron colocando a estos actores en una perspectiva democrática.

Las luchas en torno de las decisiones del gobierno central motivaron aspiraciones de participación y autodeterminación local, tanto más fuertes cuanto más evidente se hacía que el Estado no contaba con una institucionalización adecuada a la diversidad regional. Por otro lado, a medida que se consolidaban como entidades, los comités cívicos plantearon y buscaron su autonomía organizativa respecto del Estado y de los partidos políticos, y tendieron a ampliar su representatividad incorporando a nuevos sectores, en particular a través de los sindicatos obreros.

En la coyuntura 1980-82, los comités cívicos resisten exitosamente los esfuerzos de cooptación y control que realizó la dictadura y se incorporaron con acciones y objetivos a la lucha por la democracia.

Ello no fue suficiente, sin embargo, para superar los prejuicios políticos existentes contra los movimientos regionales, considerados ya sea como instrumentos manipulados por la derecha al servicio de un proyecto burgués o, en otros casos, como entidades en las que se agazapaba el autoritarismo. De modo que no podía sorprender que, apenas iniciado el gobierno democrático, los comités cívicos se sintieran obligados a intensificar acciones que, bajo cualquier pretexto, mostraban su decisión de conservar su lugar en el sistema político y afirmar su presencia en la escena social. Así, la revisión de prensa nos muestra que en la coyuntura democrática se ha realizado un paro cívico mensual, duplicando la frecuencia promedio registrada para los diez años anteriores.

Parte de este fenómeno es el surgimiento y la afirmación de comités cívicos en zonas periféricas, como las regiones alejadas del eje central formado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, o como las mismas provincias en éstos y otros departamentos del país.

Los objetivos fundamentales de estas movilizaciones han sido, en su mayor parte, las tradicionales exigencias de mayor atención estatal, asignación de recursos o localización de nuevas inversiones públicas, a las que se sumaron, representando por lo menos un tercio del total de los paros, reivindicaciones directamente vinculadas a la crisis: protestas contra la política económica, el desabastecimiento o la inoperancia frente a los desastres naturales.

Vale la pena mencionar, como signo del grado de desarrollo institucional alcanzado por estas organizaciones, el hecho de que diferencian cuidadosamente sus formas de acción para adecuarlas a los objetivos perseguidos.

Entre éstos, el más importante sin duda es el de la descentralización política y administrativa del Estado. Esta comenzó a plantearse en plena lucha por la democracia y en mayo de 1984 alcanzó expresión formal en un Congreso Extraordinario de Comités Cívicos, a partir del cual se han presentado varios proyectos de ley para llevarla a cabo según lo dispone la misma Constitución Política del Estado de 1967.

La propuesta descentralizadora es fundamental para el movimiento regional, puesto que le permite superar el particularismo de sus luchas, y articularse como un actor de dimensiones y alcances nacionales, aunque conserva expresiones regionalmente diferenciadas.

Y es también fundamental para el país en tanto representa un planteamiento novedoso sobre el crucial problema de la constitución nacional. Si con su sola existencia los movimientos regionales ponían en evidencia una sociedad heterogénea en sus referencias económicas, cultura-

les y geográficas, con la descentralización apuntan a una reforma del Estado orientada a conformar una nueva institucionalidad que reconozca esa configuración social diversa. De este modo, se objeta la tradición centralista que postula la construcción de la nación desde el Estado, concibiéndola como una comunidad homogénea o uniformizada por una hegemonía, para plantear el desafío de *reconstruir al Estado desde la nación* reconociendo su constitución económicamente heterogénea, culturalmente múltiple e históricamente plural.

Sin embargo, los movimientos regionales tampoco han sido ajenos a la fragmentación y dispersión que afecta a otros actores colectivos, pues ante el agravamiento de la crisis han tendido a refluir hacia posiciones económicamente defensivas, enfatizando sus exigencias al Estado y replanteando las formas de asignación de recursos, en una actitud que ha sido calificada, en algunos casos, como la reedición económica del "separatismo" que suele esconderse en las posiciones regionalistas.

8.2. El movimiento vecinal

El movimiento vecinal urbano se expresa orgánicamente en Juntas Vecinales que aglutinan a los habitantes de un barrio o una zona para luchar por el hábitat. Las primeras Juntas Vecinales datan de 1916, y se formaron en barrios suburbanos de la ciudad de La Paz. Desde entonces, con un ritmo muy cercano al de la urbanización, han proliferado a lo largo y ancho del país, y, aunque en 1979 alcanzaron a centralizarse en una Confederación Nacional de Juntas Vecinales, es imposible conocer su número y mucho menos la cantidad de miembros con que cuentan.

Las luchas barriales han tenido, por lo general, una evolución muy semejante. La cohesión entre los miembros, por ejemplo, y por lo tanto la representatividad de la Junta, han dependido mucho de la evolución de los objetivos y de la relación establecida con el Estado local, especialmente las Alcaldías, aunque también ha influido en muchos casos la homogeneidad cultural y la existencia de previos lazos de vinculación entre los miembros de una Junta.

Así, puede percibirse cierta gradualidad jerarquizada de objetivos que van desde la apropiación de terrenos y su posesión legal, hasta la construcción de escuelas, postas sanitarias y parques, pasando por la construcción de viviendas, la dotación de servicios urbanos y el abastecimiento. A medida que se van cumpliendo los objetivos primarios, la participación y combatividad de los integrantes de la Junta se van diluyendo para reaparecer esporádicamente cuando las necesidades colectivas se hacen muy urgentes o cuando parece cercano el logro de nuevas metas.

Este modelo, sin embargo, varía notablemente cuando el barrio está formado por migrantes provenientes de una misma zona. La cohesión étnica y la existencia de múltiples vínculos de amistad y parentesco llegan a expresarse, en algunos casos, en el reconocimiento de la Junta Vecinal como una suerte de órgano de autogobierno local, que organiza el trabajo comunal, canaliza la relación con instituciones externas al barrio e incluso dirime pequeños conflictos imponiéndose como autoridad coercitiva en resguardo de una mínima normatividad barrial.

Las Juntas Vecinales cobraron mayor importancia política desde que la designación de autoridades municipales dejó de pasar por procedimientos electorales y fue realizada desde el poder central. Las últimas elecciones municipales se efectuaron en 1949, y no fueron convocadas más hasta 1984, sin que hasta la fecha se hubieran realizado por distintos factores. El principal, sin duda, tiene que ver con la modalidad centralista de funcionamiento del Estado, congruente con el proyecto "nacionalista revolucionario" de creación de un poder central unificador y articulador del conjunto de transformaciones iniciadas con la insurrección de abril de 1952, generándose entonces una costumbre que fue continuada y aprovechada por los posteriores regímenes militares y civiles. En tal situación, los Alcaldes buscan legitimarse después de haber tomado posesión del cargo, y para ello las Juntas Vecinales resultaban muy útiles como contraparte de la Municipalidad en la definición de las políticas urbanas.[50] Mientras los Alcaldes trataban de conseguir el reconocimiento, el respaldo y el asesoramiento de las Juntas, los dirigentes vecinales intentaban definir con su amistad y apoyo la realización de obras en sus barrios, lo cual abría un fértil campo para el clientelismo político que, aún hoy, marca las relaciones entre el movimiento vecinal y las Alcaldías, sobre todo a nivel de Juntas de base.

Esta afirmación del rol político de las Juntas Vecinales estimuló su centralización organizativa en Federaciones, primero, y en una Confederación Nacional después, con lo que alcanzaron nuevos niveles de interlocución en el sistema político y con el Estado, pero también aumentaron el riesgo de hacer menos consistente su acción.

En efecto, las Federaciones lograron un rápido reconocimiento de las Alcaldías y demás entidades del Estado local porque a éstas les resultaba más fácil negociar globalmente las reivindicaciones urbanas y la asignación de recursos que enfrentar demandas dispersas y poco conectadas entre sí. Pero de ese modo también los planteamientos de las Federaciones tendieron a hacerse más generales y globales, abriéndose la posibilidad de introducir en el movimiento temas y objetivos de tipo político (vigencia de derechos humanos, democracia, participación en los planos urbanos, etcétera), que se distanciaban de las necesidades y reivindicaciones situadas en la base, es decir, en el barrio.

Estos problemas se han visto con claridad en los últimos años. La incorporación del movimiento vecinal en la lucha por la democracia, por ejemplo, parece haberse originado más en una militancia política a nivel

de los dirigentes de nivel superior, que en una conciencia generalizada entre las bases.

Las preocupaciones de los miembros de base se sitúan mucho más en el campo económico inmediato, sobre todo con el creciente deterioro de las condiciones de vida que implica la crisis. Para no perder el respaldo de las bases, las Juntas Vecinales han intensificado sus acciones en este campo, lo que ha implicado un paulatino desplazamiento del principio de identidad de sus movilizaciones desde lo territorial hacia el mercado. La condición residencial, vecinal, se pone en juego cada vez menos y cada vez más lo hace la condición de consumidor.

Así, de las 88 acciones vecinales registradas en la prensa en octubre de 1982 y diciembre de 1984, el 64 % giró en torno de la elevación de los precios, el desabastecimiento y la política económica del gobierno. De esta manera, si bien las Federaciones y la Confederación han logrado ampliar su convocatoria inmediata capitalizando el descontento popular, lo han hecho en detrimento de su capacidad autónoma de movilización y organización y a costa de distanciarse de su base original que, en definitiva, podría debilitar sus posibilidades de acción. Es como si se hubiera abandonado el barrio y la idea de que la política, la participación y la democracia podían realizarse allí también. Se ha deslocalizado la acción y el discurso territorial ha perdido sus raíces, aunque por el momento los dirigentes vecinales hayan alcanzado un grado no desdeñable de influencia.

Y todo esto ocurrió sin que los contenidos políticos propuestos desde la cúpula hubieran sido realmente absorbidos por las bases. Por ejemplo, las luchas referidas a la designación de autoridades y que en el fondo plantean la participación vecinal, han sido explicitadas como luchas en contra de la política, a la que se concibe como el ámbito de la corrupción, el favoritismo, la imposición arbitraria y el sectarismo. Del mismo modo, a pesar de que con frecuencia aparecen en sus documentos consignas por la defensa de la democracia o su profundización con elecciones municipales, en los hechos tales motivos no han suscitado ninguna acción colectiva con efecto político. Finalmente, las protestas "contra el agio y la especulación", los aumentos de precios y el ocultamiento, o la insensibilidad de comerciantes y transportistas, tampoco han desarrollado su potencial contenido antimercantil al quedarse como presiones dirigidas al Estado, supuesto como "poder protector" capaz de revertir tendencias que son estructurales.

En suma, pese a la importancia del movimiento vecinal en las acciones colectivas y a la incorporación de nuevos términos en su discurso, no puede verse en él a un actor consistente y orientado en un sentido histórico claro. Tal vez eso explica la "fraternal" desconfianza con que es tratado por los dirigentes del movimiento obrero, por los líderes políticos y por los mismos dirigentes cívicos, y la creciente renuencia de las autoridades estatales a establecer relaciones continuas con él.

8.3. El movimiento sindical de los funcionarios

Como lo señalara Touraine,[51] el sistema político es uno de los principales instrumentos de formación de las clases medias. En Bolivia esto es evidente, y muy en especial durante las tres últimas décadas.

Uno de los resultados de la Revolución Nacional fue el crecimiento de los aparatos del Estado, que se desarrolló a un ritmo incluso superior al necesario para desempeñar las amplias y variadas funciones que requería la nueva organización de la sociedad y la economía. Ello se debió, en parte, a la inestabilidad política que imponía integrar, aunque fuera clientelarmente, a los descontentos potenciales, y que ha generado una acumulación extraordinaria de empleados, ya que cada nuevo gobierno recluta funcionarios entre sus adherentes pero no se deshace de los anteriores a fin de evitarse nuevos conflictos. Según lo señala Arauco,[52] estos factores explican que en estos momentos el Estado tenga unos 130 mil funcionarios y que en la ciudad de La Paz se concentre el 57 %.*

Este numeroso contingente humano comenzó a sentir los efectos de la crisis económica desde sus primeras manifestaciones, en el deterioro paulatino de sus condiciones de vida y la frustración de las aspiraciones consumistas alentadas durante el "desarrollismo" banzerista, a lo cual hay que añadir el hecho de que la cada vez más limitada capacidad del Estado repercute inmediata y directamente sobre su trabajo cotidiano, ya sea a través de las continuas presiones y protestas que deben recibir, como en las dificultades para conseguir los más elementales materiales de trabajo.

La crisis económica, plantea Arauco, es "el ingrediente decisivo para el surgimiento —en este momento y en estas condiciones— de la burocracia con los rasgos de un nuevo actor en el escenario social boliviano".[53]

La presencia de este actor, sin embargo, se percibe con franca nitidez en los momentos de apertura democrática, pues mientras en 1981, por ejemplo, los funcionarios estatales protagonizaron sólo una huelga, en 1983 la cifra alcanza a 72. Muchas de esas huelgas fueron prolongadas y abarcaron las dependencias de uno o más ministerios. Estos datos permiten matizar la afirmación de que la organización de

* Estas cifras no incluyen a todo el personal dependiente del Estado, sino sólo a funcionarios de la administración central. Si se incluyera al magisterio fiscal, personal de salud y efectivos de seguridad, y defensa, la cifra ascendería a cerca de 225.000 personas (datos obtenidos de Arauco, Isabel, ob. cit., pág. 7).

Federaciones Departamentales y la Confederación Nacional de Trabajadores del Estado representan un cambio trascendental en el que "un grupo social que luego de haber permanecido por mucho tiempo en una actitud sumisa y pasiva con relación a la historia y el desarrollo nacionales, pasa a ejercer una conducta organizada y por momentos agresiva",[54] rechazando experiencias pasadas de clientela insegura de los gobiernos y redefiniendo su identidad y su rol.

Evidentemente, este hecho ha sido detectado en el estudio de Arauco que reconoce "contenidos corporativos latentes" en la acción de la burocracia, pues mientras observa la politización de su discurso, y la radicalización de sus formas de lucha, encuentra que sus objetivos se hacen más economicistas y defensivos a medida que la crisis se hace menos controlable.

Ello es explicado en parte por la novedosa presencia de actividades de la izquierda radical y maximalista en las organizaciones sindicales de los funcionarios, y en parte por el deterioro de las relaciones "entre el Estado y su burocracia" debido a la incapacidad fiscal para responder a las demandas salariales.

Así, aunque persiste el problema de lograr el funcionamiento legal de los sindicatos de funcionarios, expresamente prohibidos en el ordenamiento jurídico del país, estamos en presencia de un actor reivindicativo muy importante, pues por su lugar estructural alcanza efectos y repercusiones políticas aun cuando no se lo proponga.

Por otro lado, si bien puede percibirse en este movimiento una "incipiente pero innegable corriente democratizadora de los aparatos del Estado", es todavía muy difícil predecir hasta dónde puede llegar, e incluso si logrará permanecer en otro contexto político.

Las relaciones de este movimiento con otros actores colectivos son muy complejos y difíciles. En muchos casos, por ejemplo, ha sido evidente la utilización legitimadora del discurso de la COB para encubrir acciones particularistas, como en abril de 1984 cuando los empleados del Banco Central declararon una huelga salarial que se prolongó ya como protesta contra la política económica "antipopular y fondomonetarista"; en otros casos, la huelga es rechazada porque afecta servicios indispensables para la población obrera (pago de salarios, atención de salud, etcétera). A estas dificultades se suma la fragmentación de la acción sindical como tendencia persistente, por la cual cada grupo busca conservar ventajas o acrecentarlas según el poder relativo de que dispone dentro del andamiaje institucional del Estado, lo que genera continuos conflictos internos sin que se disponga de procedimientos institucionales para resolverlos.

En resumen, el movimiento sindical de los trabajadores del Estado, que ha puesto en la escena de la coyuntura democrática acciones colectivas de gran impacto y repercusión, no ha pasado de constituir un actor

circunstancial que tiene tantas posibilidades de consolidarse como de disolverse en el futuro inmediato. Es seguro, sin embargo, que el ejercicio de la autoridad estatal a partir de ahora ya no será el mismo, porque deberá contar con una memoria participativa que en la ideología de los funcionarios seguramente olvidará que nació como una práctica irregular, distorsionada o inconsistente.

9. Hacia la reconstitución nacional-popular

De una manera que se diría habitual en Bolivia, la coyuntura democrática que se inicia en octubre de 1982 fue un genuino producto de la acción social. Para lograrlo, convergieron sujetos colectivos constituidos desde principios de identidad muy diversos, y con historias particulares también muy distintas, convocados en una suerte de consenso de disolución del autoritarismo que fue propuesto y buscado, con hechos más que con palabras, por el movimiento obrero.

Se trataba, sin embargo, de una convergencia incompleta, circunstancial. Detrás del acuerdo anidaban tantas razones y tantos objetivos como actores, grupos y fracciones lo habían establecido. Por eso, la plenitud de la democracia fue también la plenitud de las divergencias, que comenzaron a aflorar y a manifestarse en torno del gobierno apenas éste se hubo constituido, acosándolo de tal modo que en ningún momento alcanzó a ser la expresión de un poder. Obviamente, el gobierno se negó a reconocer esta realidad, del mismo modo que los actores concurrentes a su formación se negaron a reconocer que carecían de la fuerza suficiente para llenar ese vacío por sí solos. Así, mientras unos se aferraban a la artificialidad de un Estado en crisis, los otros reproducían paulatinamente una lógica de confrontación y aislamiento que al mismo tiempo que acentuaba aun más la crisis del Estado, debilitaba también sus propias posibilidades de construcción de un nuevo orden político en el que sus intereses y su identidad encontraran cabida y reconocimiento.

Pero si la coyuntura democrática es una producción de los movimientos sociales, y en especial del movimiento obrero, que se inserta en sus largas luchas de autodeterminación, también es cierto que su búsqueda fue precipitada por la urgencia de enfrentar una crisis económica que se intuía devastadora para los sectores populares.

Ambos aspectos, crisis y democracia, caracterizan este período y definen las preocupaciones de los actores sociales.

Cabe remarcar que la coincidente presencia de ambos elementos, sobre todo por la magnitud y la profundidad de la crisis, y el ejercicio libertario de la democracia, han permitido o facilitado la percepción de contradicciones y problemas no resueltos que tienen una larga historia pero que de algún modo no habían emergido, permaneciendo ocultos a la

visibilidad política y social. En su conjunto, estas contradicciones y problemas configuran un cuadro de crisis orgánica que objeta la validez de las ideologías vigentes, de las pautas de comportamiento político, de las formas de representación y del mismo Estado.

Es en ese contexto que debe comprenderse la intensificación de las acciones colectivas en el período, que si bien puede correlacionarse con la continua pérdida de capacidad política y económica del Estado, también correspondería a la perplejidad de los actores y sus organizaciones que, ante la gravedad de la situación y las urgencias que ella plantea, tienden a producir respuestas fragmentadas y dispersas.

El *gráfico 3* sintetiza algunos elementos que describen este complejo proceso, tomando como parámetros temporales el inicio del gobierno democrático (10 de octubre de 1982) y el mes de marzo de 1985, fecha para la cual ya se había iniciado la campaña electoral que debería culminar con la instauración de un nuevo gobierno en agosto.

Dos indicadores empíricos de la crisis están expuestos en la base del gráfico: la evolución del tipo de cambio, a nivel económico, y el adelgazamiento partidario del frente gobernante, a nivel político. En este caso, habría que mencionar también los fraccionamientos que ocurren en los partidos mismos cuando todavía se hallan en funciones de gobierno, de los que sólo se salva el Partido Demócrata Cristiano.

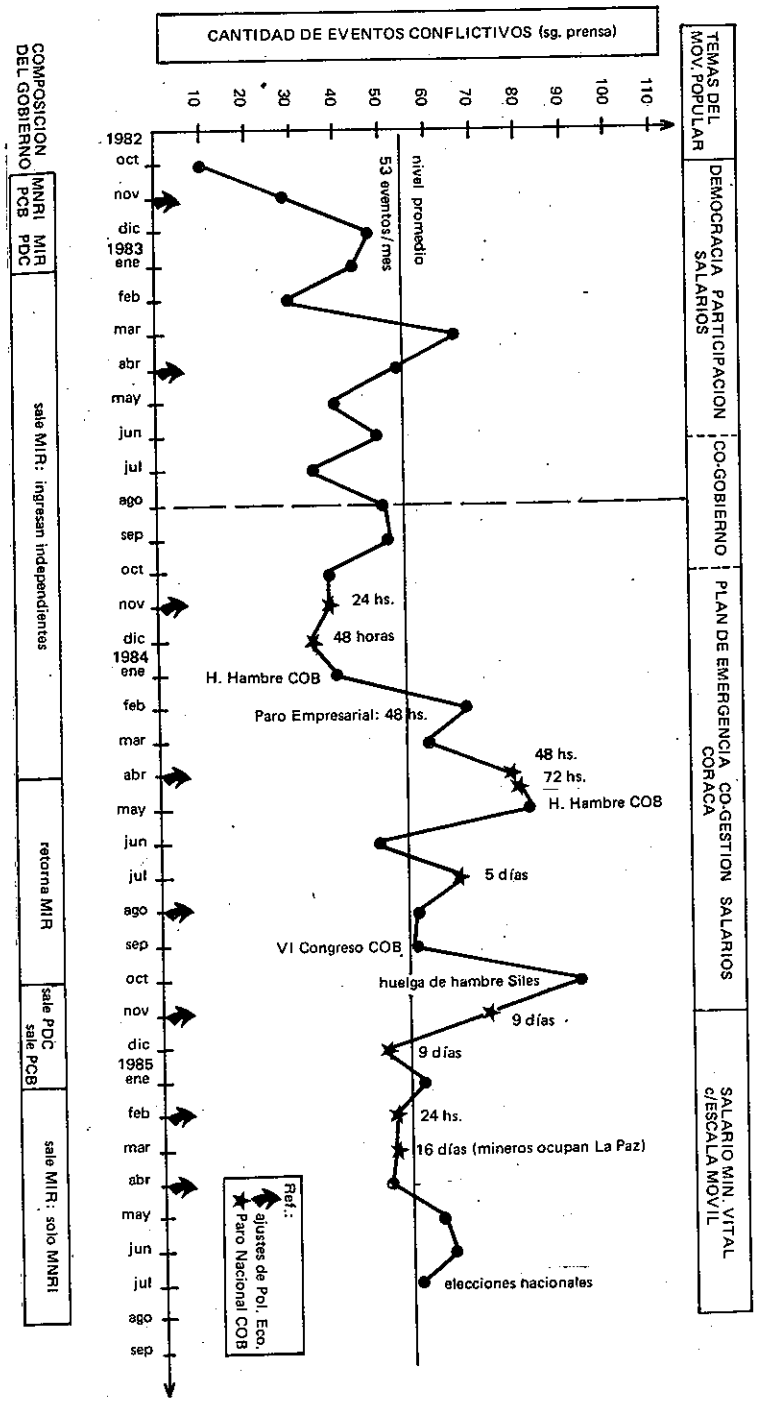
Frente a ello se puede observar claramente la agudización de la lógica conflictiva en el aumento casi sostenido del número de eventos sociales registrados en la prensa. A esa curva habría que sumarle los eventos que no alcanzan a figurar en los diarios, así como las amenazas de huelga, los estados de emergencia y los pronunciamientos "exigentes" que también configuran el clima de agitación en el que se desenvuelve la coyuntura.

Completa el cuadro la ubicación temporal de las temáticas en torno de las cuales se concentró la acción de los grupos obreros y campesinos. La franja destaca la cuestión del cogobierno como punto de clivaje antes del cual podría hablarse de una etapa de "politización" de objetivos, a la que seguiría una de "economización" que es la que se prolonga hasta nuestros días.

Es notorio el hecho de que en la segunda etapa se ubiquen las nueve huelgas generales convocadas desde la COB (en la coyuntura), pues la radicalización de las formas de lucha y el inmediatismo de los contenidos planteados muestran hasta qué punto cambió la relación del movimiento popular con el gobierno luego del fracaso de las negociaciones sobre la participación del sindicalismo en los más altos niveles de decisión económica y política.

La "politización" de la primera etapa muestra que, en ella, el énfasis estuvo puesto en la cuestión de la democracia.

Para el movimiento obrero y para el movimiento campesino era



muy claro el hecho de que la coyuntura abierta era el resultado de su acción y que, por lo tanto, no sólo tenían el deber de preservarla, sino el derecho de definir sus contenidos, de "profundizar la democracia". Una extrema rigidez teórica y conceptual, que suponía la representación de clase de los partidos y un rol exclusivamente gremial para los sindicatos, compartida tanto por dirigentes del gobierno como por dirigentes del movimiento popular, obstaculizó permanentemente este proyecto tal como lo denunciara con lucidez el dirigente minero Filemón Escóbar.[55] La imposibilidad del cogobierno, que es el fracaso de la politización, no sólo abrió el campo para las corrientes economicistas en el seno de las organizaciones, sino que agravó la crisis de representación de los partidos, puesto que en las bases mismas de los trabajadores y campesinos ya se había gestado una expectativa de real participación. No es que los partidos se negaran a ella, al contrario, también la anhelaban, pero carecían de los mecanismos necesarios para hacerla posible rápidamente, en tanto que las organizaciones sindicales, aunque fuera de modo ineficiente o insuficiente, sí disponían de canales y procedimientos participativos en su propia estructura institucional.

Sin una perspectiva política ni una responsabilidad frente a la nación, que era lo que hubiera representado el cogobierno, esos canales y procedimientos transmitieron las urgencias inmediatas de las bases, alimentando y fortaleciendo las corrientes radicalistas que esgrimieron banderas económicas para conducir a los movimientos obrero y campesino hacia la confrontación con el gobierno "reformista".

Es interesante anotar el hecho de que durante esta primera etapa la conducción superior del movimiento obrero y campesino trataba de establecer un cuidadoso equilibrio entre la cautela que preservara la coyuntura democrática, y la aspiración de fortalecerla y profundizarla a través de la participación organizada de los trabajadores *en cuanto tales,* recuperando, en esa orientación, la memoria de otras experiencias participativas anteriores.

Por su parte, los movimientos regionales en esta etapa pugnaron por reorganizarse de acuerdo con la nueva realidad surgida de su inserción en la lucha por la democracia, así como de conservar el lugar que habían conquistado en el sistema político durante los años anteriores. Algo similar ocurre entre los trabajadores del Estado, los que durante esta primera etapa concentran sus esfuerzos en lograr el reconocimiento de sus organizaciones y en conquistar un lugar para ellos en el escenario político.

La lectura que el movimiento vecinal hace de la participación no deja nunca de estar ligada a los problemas de la crisis y a la preocupación de sus dirigentes por afianzar un poder institucional. Frente al desabastecimiento, se demanda el control directo en la distribución de algunos productos. Con oscilaciones, el movimiento vecinal prolonga

esta actitud a lo largo de todo el período, aunque logrando menos impacto en la segunda etapa ya que el escenario de la lucha económica es ocupado poco a poco por organizaciones con más fuerza y tradición: los sindicatos.

En todo caso, en la explicación del clivaje de posiciones de los actores sociales más importantes podría aceptarse la afirmación de que la crisis económica actuó como fuerza social antigubernamental y, de algún modo, también antidemocrática. Porque la preocupación por los salarios o los precios nace de los problemas cotidianos y materiales de los trabajadores, y no de abstractas posiciones economicistas. Incluso los dirigentes superiores del movimiento son llevados hacia esas posiciones ya que, en una práctica sindical populista, es preciso ser consecuentes con la Asamblea de bases, aun cuando ello suponga renunciar al rol dirigente para convertirse en simple portador de reivindicaciones. Esta situación es reforzada porque la misma confusión y desorientación buscan refugio en el asambleísmo, llevándolo al punto extremo del anarcosindicalismo.

Atenazado por el desborde de las presiones sociales y la descomposición de los partidos que lo integraban, el gobierno no pudo plantear ni desarrollar ninguna iniciativa frente a la crisis, limitándose a responder, siempre tardíamente, a las demandas que le venían de afuera. Si, como hemos dicho, no tenía poder político, la crisis erosionaba su limitada capacidad económica, y constreñía aun más sus posibilidades de acción.

Y sin embargo, prevaleció durante todo el período una concepción instrumental y paternalista del Estado, incluso en quienes desde el gobierno podían comprobar a diario la disgregación del poder y la pérdida de autoridad.

Compartiendo esta concepción, desde los movimientos obrero y campesino el economicismo se tradujo en una actitud de creciente confrontación con el gobierno, reproduciendo una actitud "estatolátrica" y voluntarista que, o no quería reconocer las limitaciones impuestas por la estructura económica a sus demandas, o se justificaba imaginando que la agudización de contradicciones llevaría a las masas a la insurrección revolucionaria.

En esta segunda etapa, el movimiento obrero se ha ido aislando de otras fuerzas y, en su descomposición interna, ha perdido la iniciativa y se ha debilitado emprendiendo acciones de gran envergadura sin alcanzar ni siquiera las elementales metas que se propuso.

En esa situación, pese a que las cúpulas del movimiento obrero y campesino comparten un discurso radical, tienen muchas más dificultades para coordinar acciones y concertar objetivos, de modo que las discrepancias de hecho muestran ahora, más que antes, las dificultades de origen estructural para una alianza obrero-campesina. A ello se suma una creciente dispersión de acciones y objetivos a nivel de las bases campesinas, que ponen en peligro a la misma CSUTCB y alientan al resurgi-

miento de prácticas clientelares y de dirigentes con un pasado de subordinación corrupta y oportunista.

Sin embargo, al contribuir a develar mitos y actitudes ideológicas centradas en el Estado-objeto, que es algo que también explica la fragmentación y dispersión de la acción social, la crisis posibilita también la renovación de prácticas y concepciones políticas o ideológicas.

Exploremos ese camino con algunas hipótesis.

La efectiva convergencia social que dio inicio a este período ha sido, evidentemente, circunstancial, pero al producir una coyuntura democrática produjo también un espacio de reconocimiento mutuo y preocupaciones compartidas entre los diversos sectores, en el que se establecen algunos elementos que podrían conducir a una futura convergencia programática.

En principio, la coyuntura democrática ha puesto de manifiesto, con mucha claridad, la *crisis de Estado*, y ello ha sido percibido por los actores sociales como lo demuestra la existencia de un campo temático en cierto modo común a sus preocupaciones más avanzadas: el de la *reforma del Estado.*

Esto es particularmente relevante en el movimiento obrero, en el movimiento campesino y en los movimientos regionales. Desde las tres perspectivas en las que se sitúan esos actores se ha reconocido la escasa representatividad del sistema estatal vigente, explicándose su limitada capacidad para absorber y procesar los problemas de una sociedad altamente heterogénea por su rigidez institucional y el restringido ámbito de su acción a pesar del tamaño relativamente grande de sus aparatos. Y en los tres movimientos se han adelantado ya planteamientos orientados a la reforma estatal: la cogestión mayoritaria en las empresas públicas propuesta por el movimiento obrero, la participación campesina en las entidades estatales y en el diseño de las políticas agropecuarias propuesta por el movimiento campesino, que además recuerda constantemente que el pluriculturalismo no está considerado en el armazón estatal; y la descentralización política y administrativa planteada con fuerza creciente por el movimiento regional.

El campo temático de la reforma estatal tiene un potencial transformador de innegable importancia puesto que, en definitiva, replantea la cuestión nacional en Bolivia. Después de varios intentos frustrados de constituir a la nación desde el Estado, la crisis actual plantea el desafío de reconstruir al Estado desde la nación. Y para ello, como implícitamente lo plantean los movimientos sociales, es preciso concebir de un modo distinto a la nación. Ya no como una entidad homogeneizada y uniformizada por una hegemonía ideológica y cultural y por un dominio económico, ya sea de la burguesía y el sistema mercantil como del proletariado y la producción estatal planificada, sino como una sociedad que

admite su heterogeneidad económica, su diversidad geográfica y su pluralidad cultural.

Cristalizar la convergencia programática en torno de la reforma del Estado implica, para cada uno de los actores, una redefinición de sus relaciones y de sus prácticas que tienda a superar el absolutismo político y el autocentrismo excluyente, para desarrollar nuevas pautas de acción política y social fundadas en el reconocimiento del derecho del otro a existir y disentir.

Hay varios indicios que muestran la posibilidad de que pueda realizarse esta redefinición.

Es evidente, por ejemplo, que en los últimos años ha tenido lugar un significativo acercamiento entre los movimientos obrero y campesino, tanto a nivel de la práctica (la resistencia a Natusch en noviembre de 1979, la disposición a un combate conjunto contra los golpistas de julio de 1980 en algunas zonas, la acción coordinada en abril de 1983), como a nivel institucional (la reincorporación del campesinado a la COB a través de la CSUTCB), e incluso a nivel programático (las propuestas participativas durante la primera etapa de la coyuntura democrática). Pero es cierto, también, que persisten las dificultades y los distanciamientos, sobre todo por la vigencia de estereotipos culturales y políticos en el movimiento obrero tales como el vanguardismo, el paternalismo, el clasismo obrerista y una tradición fincada más en el enfrentamiento que en la negociación, y naturalmente por la persistencia de lógicas "económicas" contrapuestas entre los precios agrícolas y los salarios urbanos.

Por otro lado, se han producido también casos de acercamiento entre el movimiento obrero y los movimientos regionales, sobre todo a niveles departamentales. Pero más que reducir las fricciones entre la COB y los organismos cívicos regionales, este acercamiento ha introducido fricciones entre la COB y las organizaciones obreras departamentales, lo cual revela dónde se sitúan los problemas que impiden una relación menos conflictiva.

Finalmente, donde persisten mayores distancias es en la relación entre el movimiento campesino y los movimientos regionales, pero ello se debe más a la diversidad de problemáticas que tocan habitualmente unos y otros que al antagonismo que pudiera existir en sus objetivos y temas particulares.

Hemos mencionado estos tres tipos de actores, obreros, campesinos indios y regiones, no solamente porque reconocemos en ellos a los de mayor importancia y fuerza en el país, sino porque creemos que sólo una articulación de las tres perspectivas que ellos aportan puede resolver adecuadamente la cuestión nacional en Bolivia. El encuentro de una perspectiva de clase, aportada por el movimiento obrero, una perspectiva cultural, aportada por el movimiento campesino, y una perspectiva territorial de la nación, aportada por el movimiento regional es indis-

pensable, en Bolivia, para la reconstitución de la nación y del pueblo como productores de su historia. Ese es, en el fondo, el desafío que se plantearon a sí mismos los movimientos sociales al producir la democracia.

Cochabamba, abril de 1985

Notas

[1] Instituto Nacional de Estadísticas (INE), *Resumen estadístico 1983,* INE, La Paz, 1984.

[2] Véanse Banco Central de Bolivia (BCB), *Memoria anual,* BCB, La Paz, 1982 e ibíd., 1983.

[3] Prudencio, Julio, *La sequía en Bolivia,* CERES-CLACSO, Santa Cruz, 1984 (Ms.).

[4] Información del Ministerio de Agricultura, cit. en *IPE Sólo Cifras,* núm. 16, 1984.

[5] Carmona, Juan y Escobar, Angel, *Mercado de divisas en Bolivia,* BCB, 1980 (trab. mimeografiado).

[6] BCB, ob. cit., 1983.

[7] *IPE Sólo Cifras,* núms. 12 y 13, 1985.

[8] Datos obtenidos en Blanes, José y Flores, Gonzalo, *Donde va el Chapare?,* CERES, Cochabamba, 1984.

[9] Mayorga, René Antonio, "Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la COB", en Laserna, R., *Crisis, democracia y conflicto social,* CERES, Cochabamba, 1985.

[10] Antezana, Luis H., "Sistemas y procesos ideológicos en Bolivia", en Zavaleta, René (comp.), *Bolivia hoy,* Siglo XXI, México, 1983.

[11] Laserna, Roberto, *Los paros cívicos en Cochabamba (1970-1982),* CERES, Cochabamba, 1983 (Ms.).

[12] Rivera, Silvia, *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua 1900-1980,* Hisbol, 1984.

[13] Calderón, Fernando, *Cuestionados por la sociedad: los partidos políticos en Bolivia,* CLACSO-UNU, Buenos Aires, 1985 (Ms.).

[14] Véanse Escóbar, Filemón, *Testimonio de un militante obrero,* Hisbol, La Paz, 1984 y Calla, Ricardo, "La encrucijada de la COB, temas del movimiento obrero boliviano (1982-)", en Laserna, R., *Crisis, democracia y conflicto social,* CERES, Cochabamba, 1985.

[15] Mayorga, René Antonio, ob. cit.

[16] Arauco, Isabel, "Acción social de los sectores medios: el caso de la burocracia estatal", en Laserna, R., *Crisis, democracia y conflicto social,* CERES, Cochabamba, 1985.

[17] Rivera, Silvia, "El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática", en Laserna, R., *Crisis, democracia y...,* ob. cit.

[18] Laserna, Roberto, "La protesta territorial. La acción regional y urbana en una coyuntura de crisis y democracia", en Laserna, R., *Crisis, democracia y...,* ob. cit.

[19] Zavaleta, René, *El poder dual,* Siglo XXI, México, 1974; Lora, Guillermo, *Movimiento obrero contemporáneo (1952-1979),* Masas, La Paz, 1979.

[20] Cit. en Lebot, Ivon, *"L'Experience de Cogestion à Mayorité Ouvrière (1983-1984), entre l'Utopie et le Déclin Minier",* en *Problemes d'Amérique Latine,* núm. 73, 1084, pág. 111.

[21] Lebot, Ivon, ibíd.

[22] Seminario nacional "Democracia, participación y concertación social", Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), La Paz, abril de 1985.

[23] Lora, Guillermo, ob. cit.

[24] Zavaleta, René, ob. cit.

[25] Lora, Guillermo, ob. cit.

[26] Calla, Ricardo, ob. cit.

[27] Calla, Ricardo, ob. cit. Véanse también las ponencias de Jorge Lazarte, Filemón Escóbar y José Pimentel en el Seminario nacional "Democracia, participación y concertación social", CERES, La Paz, abril de 1985.

[28] Mayorga, René Antonio, ob. cit.

[29] Machicado, Flavio, *Deuda externa en Bolivia,* La Paz, 1984. (folleto).

[30] Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (comps.), *Bolivia: La fuerza histórica del campesinado,* CERES, Cochabamba, 1984.

[31] Condarco, Ramiro, *Zárate: el temible Willca,* La Paz, 1965 (s. s.).

[32] Dandler, Jorge, *Sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucureña (1935-1952),* México: III, reedición, CERES, Cochabamba, 1969.

[33] Soto, César, *El pacto militar-campesino en Cochabamba: 1964-1974,* CERES, Cochabamba, 1985 (trab. mimeografiado).

[34] Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (comps.), ob. cit., pág. 44.

[35] Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (comps.), ob. cit., pág. 47.

[36] Lavaud, Jean Pierre, "Los campesinos frente al Estado", en Calderón y Dandler, ob. cit.

[37] Rivera, Silvia, ob. cit.

[38] Laserna, Roberto, *Conflicto social y crisis de mercado en Cochabamba*, CERES, Cochabamba, 1983 (Ms.).

[39] Zavaleta, René, *Las masas en noviembre*, Juventud, La Paz, 1983.

[40] Rivera, Silvia, *El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática*, ob. cit.

[41] Rivera, Silvia, ibíd., pág. 12.

[42] Confederación Unica de Trabajadores de Bolivia, *La ley agraria fundamental*, 1984 (ss. s1.).

[43] Rivera, Silvia, ob. cit., 1984.

[44] Rivera, Silvia, ob. cit., 1985, pág. 23.

[45] Rivera, Silvia, ibíd., págs. 30 y 31.

[46] Seminario nacional "Democracia, participación y concertación social", CERES, La Paz, abril de 1985.

[47] Flores, Gonzalo, "El movimiento regional cruceño: aproximación e hipótesis", Santa Cruz, en Laserna, R., *Crisis, democracia y...*, ob. cit.

[48] Véanse Laserna, Roberto, *Los paros cívicos en Cochabamba (1970-1982)*, CERES, Cochabamba, 1982 (Ms.) y Calderón, Fernando, y Laserna, Roberto, *Estado, nación y movimientos sociales regionales en Bolivia*, CERES-UNU, Cochabamba, 1983.

[49] Laserna, Roberto, ob. cit., 1982.

[50] Calderón, Fernando, *La política en las calles*, CERES, Cochabamba, 1983, e ibíd., *Urbanización y etnicidad en Bolivia*, CERES, Cochabamba, 1983 (Ms.).

[51] Touraine, Alain, *Las sociedades dependientes. Ensayos sobre América Latina*, Siglo XXI, México, 1978.

[52] Arauco, Isabel, ob. cit.

[53] Ibíd, pág. 13.

[54] Ibíd.

[55] Escóbar, Filemón, ob. cit. Véanse también varias declaraciones públicas del dirigente.

Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en el Ecuador *

Luis Verdesoto Custode **

Introducción

Los casos incluidos en este trabajo son representativos de "lo nuevo" que está gestándose en la sociedad civil y de los cambios en los movimientos sociales con mayor profundidad histórica en el Ecuador. Los temas no son novedosos para América Latina, aunque sí lo es su articulación en la coyuntura de crisis y redemocratización. También el marco de

* De varios modos, este es un trabajo colectivo. Transcribe el sentido de las conclusiones del seminario realizado en CIUDAD en la última semana de enero de 1985, en el que participaron los investigadores invitados para el proyecto "Movimientos Sociales ante la crisis en América Latina". Los trabajos presentados fueron:

- "Crisis y movimiento sindical en el Ecuador: las huelgas nacionales del Frente Unitario de Trabajadores (1981-1983)" de Jorge León (CEDIME) y Juan Pablo Pérez (FLACSO);
- "La organización barrial entre la democracia y la crisis" de Mario Unda (CIUDAD);
- "Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador" de Mercedes Prieto (CEPLAES);
- "Movimentos sociales regionales en el Ecuador" de Simón Pachano (CIESE-IEE); y,
- "Crisis y movimiento campesino e indígena" de Manuel Chiriboga (FLACSO-CAAP).

Es colectivo también porque asume la "angustia" de los investigadores sociales preocupados por la crisis de los paradigmas tradicionales de la investigación y de la política, y por la falta de claridad en la prospectiva de la realidad social. La conceptuación de los movimientos sociales tampoco es, necesariamente, una salida global. Es un cambio en varias puertas de entrada y acentos de la investigación: permite revalorar el interior de las relaciones sociales y "releer" el poder, alejándose de perspectivas donde se lo reduce al Estado.

** Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Quito.

un Estado rentista, formas gubernamentales reformistas y autoritarias, y la persistencia de un crecimiento económico por la circulación del excedente petrolero.

El trabajo comienza por indagar la conformación del sistema político frente a la desestructuración del régimen oligárquico, la crisis, la instalación democrática y la situación actual. Luego plantea los antecedentes y la característica sobresaliente en la actualidad de los movimientos escogidos y otros no estudiados. Finalmente, se presentan los grandes temas que definen a los movimientos sociales.

El crecimiento industrial sustitutivo, la reforma agraria, la urbanización acelerada, la exportación de petróleo, la redefinición regional y la reconformación del mercado laboral son los grandes acontecimientos que acompañaron al cambio de sistema político y a la adopción estatal de nuevos roles. Por un lado, el Estado crea órdenes en la sociedad civil, particularmente ante la crisis. Por otro lado, la ruptura de la forma hacendataria de funcionamiento social, la crisis de representación y la transición a un sistema de partidos condiciona el acceso de los movimientos sociales a la política.

La democracia fue viabilizada por un nuevo centro del espectro político, el que aparece condicionado por la crisis para afrontar las iniciativas de la sociedad. Si bien aquella se interiorizó tardíamente en la economía, generó reacciones en los sectores subalternos y en los dominantes. Los sectores dominantes definieron una ofensiva política, en tanto los sectores subalternos plantearon una ofensiva social. El momento actual se caracteriza por el manejo estatal arbitrario de la legitimidad y por la ruptura de muchos acuerdos básicos del funcionamiento social.

La forma de lucha privilegiada por el movimiento sindical ha sido la huelga nacional de trabajadores, cuyas plataformas han transitado desde una posición "obrerista" hacia la inclusión de nuevos temas de corte "democrático" y "nacional", incluyendo en su convocatoria a un mayor número de sujetos sociales subalternos. El protagonismo político que alcanzó fue posible también por la crisis, pues ésta hizo que el acento en la distribución del excedente estatal se transformase en cuestionamientos oscilantes entre lo estratégico y lo reivindicativo, aunque sin amenazar la globalidad del poder instituido.

La educación en la lucha y la disputa de poder con el sistema institucional estuvieron condicionadas por la democracia. Más aun, la convocatoria electoral finalmente desplazó a la iniciativa sindical; situación condicionada por la percepción "instrumentalista" del Estado y por la ausencia de un discurso hacia la reproducción, espacio de referencia fundamental del comportamiento de los sectores populares.

Con el crecimiento reciente de las organizaciones de pobladores se registran tendencias innovadoras que redimensionan las necesidades populares en la crisis, la vinculación con el movimiento popular y las

tareas en el barrio y sus sujetos sociales. Comienza una disputa por la apropiación de la ciudad y por la iniciativa en la democracia. La organización se convierte en un valor referencial y el barrio en punto de encuentro de múltiples reivindicaciones.

La "invisibilidad" de la temática femenina comienza a ser atacada por una cantidad de organizaciones, que problematizan a la mujer desde todo el espectro político y desde el Estado. La disputa por la cuestión se ha iniciado y se perfilan sus variantes estratégicas: cooptación versus resistencia. La tarea es clara: constituir la identidad. El camino no lo es: asimilar lo femenino a las clases, incorporarlo al desarrollo o entenderlo como espacio de dominación particular. La crisis condiciona la formación de organizaciones: presiona por la inserción en el mercado laboral y por nuevas estrategias de supervivencia. También refuerza las formas opresivas domésticas y barriales. En este marco, las organizaciones son mediadoras entre lo público y lo privado y politizadoras de esto último.

La región aun es una categoría de difícil definición. Los movimientos sociales que aloja pueden ser tipologizados; una de las variables principales puede ser el carácter nacional de sus actores y el acceso al poder.

El movimiento campesino tiene una amplia trayectoria histórica, ampliamente investigada. Desde su etapa de constitución como presión abierta o asedio a los recursos de la hacienda hasta la actualidad de repliegue frente a la redistribución de la tierra, ha sufrido un proceso modernizador. Por un lado, el Estado constituyó varios sectores específicos en sus interlocutores y, simultáneamente, la crisis presiona por la recampesinización de la fuerza laboral. Por otro lado, su proceso organizativo tiene como tema fundamental la gestión productiva. Esta situación derivó en una relación flexible entre las organizaciones regionales y las federaciones campesinas, cada cual con su demanda específica. La organización campesina privilegia acciones tendientes a "limitar la diferenciación". Esta brecha se cierra en la práctica política en torno del poder local.

El movimiento étnico despliega formas distintas de entendimiento del Estado que surgen en la especificidad de su reivindicación: la autodeterminación es comprendida como reafirmación de la identidad y autosuficiencia económica. La territorialidad reconocida e infranqueable es su objetivo. Los movimientos campesino y étnico definen a sus enemigos en el plano local y perciben al Estado como asociaciones duales.

La crisis acentúa los desplazamientos de identidades de los sectores subalternos. No se trata de movimientos sociales que procesan una sola identidad, sino de una combinación de escenarios de lucha social que replantean su sentido estratégico. La definición paradigmática de la clase obrera es la primera en cuestionarse: su incapacidad para rearmar un apa-

rato productivo que no controla. Sin embargo, el sindicalismo permite la continuidad del movimiento social —desde el paro productivo a la huelga política— y finalmente se desplaza hacia la problemática espacial.

La representación del sindicalismo en la política está expuesta a la apelación de otras identidades. Empero no lo estructuran las ideas del socialismo o de la democracia sino la idea de "poder sindical".

La superposición de sistemas de contradicciones espaciales permiten mirar la conformación heterogénea del sindicalismo. La ciudad y el barrio son "subsistemas políticos" en los que se enfrentan el Estado como forma relativa del capital y el despliegue del mayor número de identidades de lo popular. La profundización del capitalismo a partir de la revitalización de actividades primario-exportadoras, la participación de los campesinos en la canasta básica y la acelerada urbanización, sin que esto implique la proletarización estable y profunda, redefine la significación de lo productivo y de lo colectivo.

La penetración del Estado en la sociedad civil ordena a los movimientos: (re) conforma a los sujetos sociales; los vincula al capital; y tematiza a los sujetos. Los actores sociales, en tanto, tienen diferentes ópticas acerca del Estado. La crisis y la democracia han actuado imponiendo criterios al movimiento social. Especialmente la democracia, que actúa como código de las demandas y frontera de la legitimidad. Se distinguen varias posiciones de los sujetos frente a la legitimidad y su conquista. En unos casos, ésta actúa como límite para la demanda y, en otros casos, los movimientos la ensanchan.

Este trabajo termina cuestionando la pregunta sobre la universalidad o el particularismo de los movimientos sociales. Por un lado, se plantea que frente a la escisión no voluntaria entre el sistema partidario y los movimientos, los dos deben coexistir como formas de acceso a la política. Por otro lado, no se trata de encontrar un sector social reconstructor de una sociedad disgregada, sino de permitir que aflore toda la conflictividad subyacente en la sociedad "como paso previo al socialismo".

A. Crisis y democracia en el Ecuador contemporáneo

1. Hasta los años '60, la acumulación se basó en la exportación de banano y, secundariamente, de cacao y café. A diferencia de otros países de la región, no se introdujo una economía de enclave, aunque la dinámica de articulaciones sectorial y regional fue similar. Desde 1955 descendieron significativamente los precios de los productos exportados, lo que se tradujo en notables consecuencias económicas y sociales.[1] Desde entonces el Estado actúa claramente como agente de reconstitución de los espacios de rentabilidad para el capital y como generador de nuevas clases y fracciones. En los años siguientes tres fenómenos condicionaron a la

sociedad: la inducción de crecimiento industrial por sustitución de importaciones, la reforma agraria y la urbanización. Las modificaciones económicas y sociales que se incubaron en la década del sesenta, se aceleraron en la siguiente con la exportación petrolera. En los años '80, la crisis redimensiona el sentido de los cambios, ya que lleva a intentos reconstitutivos de la forma de la acumulación y de la penetración estatal en la sociedad.

La exportación de petróleo ecuatoriano no pesa en el mercado mundial. No obstante, la circulación interna de esta renta generó una dependencia umbilical con la acumulación. Desde 1972 a la actualidad las tasas de incremento del producto interno nos muestran dos momentos: un crecimiento sin precedentes que va hasta el año 1978 con una tasa promedio cercana al 9 % y la aparición de los primeros síntomas de crisis, que se manifestaron como desaceleración económica. La tasa de crecimiento promedio entre 1978 y 1982 fue de alrededor del 4 % anual hasta llegar a una tasa negativa en 1983. Se deduce la presencia tardía de la crisis internacional en relación con otros países de la región.

El crecimiento de la actividad industrial fue significativo: 10,6 % promedio durante 1972 y 1978 con una participación del 17 % en el PBI.[2] La base de la cual partió la industria fue débil y sólo pudo alcanzar esta dinámica con el fomento a la inversión basado en la circulación del excedente estatal, que es el ingrediente básico de la ganancia del sector. Del crecimiento industrial no puede deducirse el reordenamiento global del patrón de acumulación, ni la proletarización masiva de la fuerza de trabajo, ni la constitución de un mercado interno dilatado. La dependencia hacia el sector externo de la economía se multiplicó en relación con su crecimiento; en 1976 el personal ocupado en la industria fabril era el 3,8 % de la PEA, la relación inversión/hombre ocupado permite prever un impacto cada vez menor en la generación de empleo; y la distribución del ingreso ensanchó fundamentalmente a los sectores medios en los que se basa la realización industrial.

La reforma agraria ha tenido dos fases. Una que va de 1964 hasta 1968 y otra desde 1970 hasta 1975. Alcanzó a un 10 % de la tierra agrícola y sus efectos fueron el reordenamiento de las estrategias productivas del capital en el campo y la reinserción de los campesinos en la economía. De los bienes de la canasta básica, el 62 % son producidos por campesinos. La gran propiedad, en tanto, se ha especializado en bienes de procesamiento agroindustrial y de exportación.[3]

La distribución de la población asentada en áreas urbanas y rurales ha cambiado en el último período intercensal. En 1974 el 58,6 % se encontraba en áreas rurales y en 1982 se asentó el 50,3 %. Existe una creciente urbanización de la economía y una asignación de roles cada vez más definidos a los conglomerados urbanos.

El explosivo crecimiento de la ciudad de Guayaquil —el más grande

de los dos centros— fue anterior al fenómeno industrial y simultáneo a la crisis de la exportación de banano. Las altas tasas de crecimiento de la población urbana no parecen explicarse por las mismas causas que en los países desarrollados. Actualmente varios conjuntos de ciudades intermedias tienen dinámicas particulares ligadas a fenómenos productivos de sus entornos, a la urbanización de sus economías locales y al hecho de ser la primera etapa de la migración campo-ciudad. Cabe señalar que no se dispone de información específica acerca de los patrones de migración en el conjunto del país, aunque sí se conoce el papel cada vez más importante de la migración temporal, funcionalmente vinculada a cambios en las estrategias campesinas y a la expansión o depresión de la acumulación urbana y agraria.[4]

2. La desestructuración del régimen oligárquico se expresó, por un lado, en la creciente presencia estatal en todos los niveles de la sociedad, y por otro, en el cambio de espectro organizativo y el resquebrajamiento de las bases de la dominación.

El Estado acumuló funciones y tomó iniciativas frente a la sociedad civil, impulsó su tecnificación; captó funciones normativas o indicativas sobre la economía y la política; y generó proyectos para el reconocimiento de los actores dominantes. La industrialización, la reforma agraria, el desarrollo regional enfrentaron su coherencia con las presiones corporativas. En esta relación conflictiva se consolidó un Estado capitalista, cuyos grados de modernidad fueron acelerados por la disponibilidad del excedente petrolero.

La creación de economías externas para el capital y un orden para la acumulación y la provisión de servicios para la reproducción de la fuerza del trabajo son las funciones estatales que aparecieron con claridad y gran regularidad. Las fracciones burguesas llegaron a un acuerdo ante el Estado sobre el monto para transferir y los montos de captación de la renta petrolera, en tanto las clases subalternas lo enfrentaron como espacio para la disputa por el excedente para el gasto social.

En la crisis se pueden distinguir tres modos en que el Estado la afrontó a lo largo del tiempo. Uno, de respuesta inorgánica frente a la presión corporativa de dominantes y dominados. Luego, la coherencia y respuesta global representando al capital en general. No obstante, no pudo integrar totalmente las exigencias de un ritmo y una forma de recuperación de sectores empresariales monopólicos que plantean la modificación global del Estado y, particularmente, de la transferencia del excedente. Para ello; en un tercer momento, a través del ejercicio directo del gobierno, se instrumenta una estrategia neoliberal. Los dos últimos momentos fueron salidas a una crisis política que comenzaba a emerger, definida por la ofensiva política de las corporaciones dominantes y la ofensiva social de los subordinados.

La organización de la sociedad civil también registró cambios desde los años '60:

Primero, el resquebrajamiento de las bases de dominación del Estado oligárquico. En la sierra, la ruptura de la autoridad en el modelo hacendatario de funcionamiento social, ruptura que se dio a través de diversas situaciones agrarias y con formas disruptivas de los sectores subalternos locales. Ante la creciente diversificación económica y social, la tierra dejó de significar inmediatamente poder. En la costa, la urbanización acelerada y el debilitamiento de la agroexportación como polo dinámico obligaron a la reconstitución de las formas políticas.

Segundo, la falta de reconocimiento de los sectores dominantes en los proyectos estatales y la ausencia de un proyecto unificador gestado desde la sociedad. En este marco de "crisis de representación", las identidades sociales se produjeron en los gremios, que imprimieron su sello a la política y coparon el aparato estatal. Su contrapartida fue el procesamiento periódico de la crisis en regímenes autoritarios y el movimiento pendular hacia la democracia.

Tercero, la transición hacia un sistema de partidos. Pueden distinguirse cuatro momentos sucesivos de este proceso: a) la reconformación de la tendencia conservadora, que asumió la crisis de la formación regional serrana; b) la crisis del liberalismo, que evidenció la necesidad de un cambio de mirada de la política desde los sectores dominantes —y su imposible identificación en un proyecto— hacia las masas, la organización y el Estado; y c) la crisis del llamado "populismo" basado en "desideologización de la política" como estilo de conducción de las masas.

En la actualidad la reconformación del sistema de partidos, como nivel en el que se expresa la búsqueda de institucionalidad del Estado y del sistema político, se da a través de un conflicto con los diferentes movimientos sociales. Estos, que atraviesan distintos momentos en relación con su constitución o consolidación, disputan la representatividad de las necesidades e intereses populares en la política.

3. La democracia es uno de los temas que condiciona a los movimientos sociales. La redemocratización fue mediada por un nuevo centro del espectro político. Esta tendencia —cuyos focos de iniciativa fueron la democracia cristiana y la social democracia— debió construir la institucionalidad en la cual actuar. Por un lado, un rediseño estatal que tendía a la concentración de poder en el Ejecutivo y a la reasignación de funciones del Parlamento. Por otro lado, la conformación de un sistema de partidos políticos que buscara una representación estable.

Se trataba de constituir e institucionalizar una "nueva organicidad". El cambio, la modernización, el desarrollo, la redistribución, la

organización social, la tecnificación del poder trataban de ser —entre otros— los nuevos temas del conflicto político.

El proceso redemocratizador estuvo condicionado por dos factores: por un lado, un tutelaje cercano de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones empresariales que, además de otras demandas, impusieron la ruptura con el movimiento sindical en procesos de consolidación. Por otro lado, la legitimidad de la forma democrática se montó en una convocatoria ciudadana que, a su modo, también enajenó la demanda popular específica. La respuesta popular a la redemocratización fue la masiva adhesión electoral a los partidos de centro que correspondía a las demandas en el período previo. Sin embargo el sistema partidario no penetró en la sociedad civil. Más aun, en su mismo nivel de masa ciudadana, la afiliación a los partidos bordea el 25 % de la población electoral de las ciudades grandes.

El reconocimiento de la conflictividad social alcanza sólo al discurso partidario del centro.[5] Se reconoce la demanda popular específica, pero se percibe a las organizaciones como "grupos de presión". La economía es entendida como la gran limitación de la política. Las posibilidades de la coyuntura se circunscriben al sostenimiento de los ritmos de la economía y no se recupera la entidad de la política. Así, la crisis fue la limitación central de la redistribución económica y de poder en la democracia.

4. La crisis económica penetró tardíamente en la economía. Si desde 1978 se evidenció una desaceleración, sólo en 1982 en el Estado y en las organizaciones sociales se percibió que el país atravesaba por una situación de crisis. Desde 1976 el Ecuador cabalga sobre una crisis, cada vez más firmemente. Tampoco hubo conciencia de la magnitud y consecuencias del excedente petrolero en los años 70. Entonces, el crecimiento de los precios del petróleo no fue ni podía ser imaginado. La acumulación dependió cada vez más de ese excedente, situación que no fue afectada por su disponibilidad. Cuando escaseó, las demandas del sector privado no cesaron ni se racionalizaron. Se acudió al endeudamiento, inicialmente estatal, capital que permitió sostener la transferencia y el acuerdo interempresarial que lo amparaba.

Durante la década del setenta se consolidó el sector interno de la economía y se reestructuró y diversificó el sector externo, cuya mayor porción es estatal. Ante la demanda creciente de excedente y el estancamiento en los precios y volúmenes de la exportación, el endeudamiento permitió mantener las tasas de ganancia sectoriales y los ritmos de inversión. De modo complementario, pero con creciente importancia, la inducción externa de crédito de corto plazo presionó sobre la capacidad de pago. Concomitantemente, se registró un hipercrecimiento del capital financiero sobre el conjunto de la economía.

Durante 1981 la crisis se presentó desde el sector externo. Decreció la rentabilidad de todos los productos de exportación, sea por los precios o por los volúmenes comercializados. El estancamiento y el descenso posterior del precio del petróleo, luego del alza coyuntural de 1979, debilitó al Estado. La necesidad de restituir el excedente incrementó la demanda por crédito externo y la imposibilidad posterior de pago.

El Estado manejó sus instrumentos económicos en varios ejes. El precio del dólar fue el mecanismo para reconstituir la ganancia del sector externo y dotar de mayores recursos al Estado. Adicionalmente se usaron otras medidas de fomento.

El desmontaje tanto de la política de fijación estatal de precios de la canasta básica como del control de otros productos industriales compensó los nuevos costos y la baja demanda del mercado, al tiempo que incrementó la inflación. La baja de la capacidad adquisitiva real de los salarios no fue compensada por los incrementos nominales. De este modo, se puso en marcha un mecanismo de regulación de la demanda y de restitución de la rentabilidad empresarial. El manejo del gasto público permitió varios niveles de reordenamiento económico: se cambiaron los patrones de inversión y de asignación de recursos disminuyéndose los servicios. Contra estos ejes de la política estatal se montó la reacción de los movimientos sociales.

5. El momento actual se caracteriza por su fluidez y cambio respecto del proceso reseñado. En enero de 1984, cuando la derecha fue derrotada circunstancialmente en las urnas, se produjeron apreciaciones sobre la "maduración" que había alcanzado la sociedad ecuatoriana. Para unos, la democracia y el llamado "cambio" habían anclado positivamente en las masas y, en contrapartida, se habían estabilizado las tendencias de centro-izquierda e izquierda, los que hacia el mediano plazo podrían construir un sistema político participativo en asociación con el movimiento popular. Para otros, el preliminar triunfo sobre la derecha mostraba la derrota de la tendencia fascista del capital y la viabilidad de una administración burguesa "racional" del Estado, lo que clarificaba definitivamente el panorama de contradicciones clasistas del país. En suma, el peligro del autoritarismo legitimado por un proceso electoral y por una organización constitucional se había alejado.

Cuando en mayo la derecha ganó las elecciones con un escaso margen, el desconcierto fue la reacción dominante. Pese a que la mitad de la población había votado en su contra, aún no se reconocían las formas que adoptaría el enfrentamiento. El problema consistía en el diseño de una oposición democrática (dentro de los límites de la institucionalidad e incluso fortaleciéndola) y frontal, cohesionando a las masas en la orilla opuesta al gobierno. En agosto se abrió una coyuntura cuyas formas de lucha pueden verse ahora con claridad.

El sustento en factores reales de poder con que se inició el gobierno fue significativo: la unidad de todos los partidos políticos tradicionales, el soporte en la totalidad de fracciones empresariales empíricamente visibles y una considerable influencia en las masas más atrasadas del electorado. Ahora, la identidad política de la burguesía en el gobierno se depura, aunque sin alternativa de representación en la escena, sino a través de sus corporaciones. Si inicialmente el gobierno respondió a sus intereses globales más coyunturales (la conversión en moneda nacional de la deuda contratada en el exterior y su refinanciación con un interés fijo y plazo largo), el cumplimiento de otras tareas diferencia a las fracciones y evidencia cada vez más la hegemonía del sector financiero, cuya lógica cambia las coordinadas del capital: la concentración y el monopolio se sobreponen al funcionamiento e intereses sectoriales.

Un conflicto con el Parlamento —dominado por la oposición— era funcional a las necesidades de reorganización estatal y de reconstitución política de un gobierno débilmente legitimado en su origen. En el momento actual el Ejecutivo usa la ilegalidad real en el marco de la legalidad formal para condicionar la oposición del conjunto de partidos democráticos que tiene base de funcionamiento en el Parlamento, provocar una respuesta políticamente inadecuada de las masas y desactivar el movimiento popular.

B. Los movimientos sindical, barrial, femenino, regional, campesino e indígena.

En la actualidad los ejes en torno de los cuales se estructuran los movimientos sociales condicionados por la democratización y la crisis son, por un lado, el mercado laboral urbano desde el cual se perciben continuos desplazamientos y fronteras grises hacia la esfera de la reproducción. En este plano se articulan lo sindical, lo vecinal y lo femenino. Por otro lado, los agrupamientos y conflictividades sociales alrededor de las distintas situaciones de desarrollo capitalista: redes de ciudades y sus entornos agrarios que constituyen sociedades civiles locales y regionales de contornos definidos y situaciones campesinas étnico-culturales homogéneas que entablan relaciones distinguibles con la sociedad nacional y sus organizaciones. En este segundo nivel se articulan demandas pluriclasistas regionales, campesinas y étnicas.

1. Los trabajadores en las crisis

Se ha intentado reconstruir la historia de la clase obrera registrando los conflictos surgidos en las primeras fábricas y la participación en "fechas clásicas" como el 1° de Mayo. Otra entrada ha sido la búsqueda

de las ideas socialistas, anarquistas y comunistas asociadas con los orígenes de la clase obrera. Muchos de estos intentos adolecen de premura académica y política. Tratan de encontrar clases que en la realidad no se habían constituido, como la burguesía industrial, o el proletariado, se les asigna roles sociales que bordean lo imaginario y se proyecta una sociedad esquemática, en la que habían cumplido tareas que ocurrieron sólo en la mente de intelectuales que pretendían una "organicidad impositiva".

El proceso de industrialización (enfatizando el carácter de proceso, es decir, la ocupación de un lugar en la acumulación por una fracción de capital que subsume realmente al trabajo, genera mercancías para el mercado y se apropia de un plusvalor para lo cual establece relaciones con otras fracciones de capital y generaliza la constitución de la tasa de ganancia como forma específica) no fue fruto de la crisis de los años '30. No obstante, los núcleos obreros tuvieron una participación importante en las principales movilizaciones populares de los primeros sesenta años del siglo: las del 15 de noviembre de 1922 y el 28 de mayo de 1944. Desde esta última la derrota de la posición progresista presiona fuertemente sobre la imagen de socialismo y de institucionalidad política que se disputa en la sociedad ecuatoriana.

Sólo a partir de los años '60 se presenta un fenómeno industrial de significación nacional con sus actores fundamentales y a mediados de la década siguiente se forma el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) con las tres principales centrales sindicales: Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC). Las primeras acciones conjuntas arrancaron en 1971 con una fracasada huelga de alcance parcial. Entre 1975 —año en que las Centrales Sindicales ubican el inicio del proceso unitario— y 1985 se han realizado diez huelgas nacionales de trabajadores. Pese a la evidencia de una movilización de creciente importancia y de plataformas que pueden ser calificadas de "obreristas", se subraya la dominación del movimiento como sindical y no como obrero, argumentando la falta de generalización de la relación capital en la sociedad.[6] La clase obrera es la vértebra social de la organización de las centrales, pero la práctica de la movilización implica a muchos otros actores y problemáticas. Más aun, pone de manifiesto los diversos espacios de constitución de la identidad de los obreros y su desplazamiento.

En el ensayo de Jorge León y Juan Pablo Pérez, *Crisis y movimiento sindical en Ecuador: las huelgas nacionales del FUT (1981-1983)*, se reconstruyen cinco movilizaciones de trabajadores desde cuatro preguntas: las modalidades de respuesta del movimiento sindical frente a las medidas estatales, la actitud de los aparatos Legislativo y Ejecutivo frente al sindicalismo y su movilización; las alianzas con otros actores sociales; y

la dinámica de la movilización. Finalmente plantean varias características del sindicalismo como un movimiento social.

Durante el período estudiado, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) alcanzó un protagonismo en la escena política y con respecto a las necesidades populares. No obstante, su constitución como actor social no es homogénea, ni su conformación como movimiento, lineal. El FUT encara una serie de tareas de construcción de su representatividad de las clases subalternas, varias de las cuales merecen un tratamiento crítico.

La crisis presentó sus primeros signos en 1981. Para entonces, el movimiento sindical se encontraba condicionado por dos factores. Por un lado, la redemocratización había generado en la base popular expectativas sobre la solución de sus demandas, y en la dirigencia se había producido un resquebrajamiento por la actitud que debía adoptarse en la coyuntura. De otro lado, el FUT había logrado una relación directa con los trabajadores, en el marco del régimen autoritario 1973-79. El período en análisis empieza con un desplazamiento de la actitud del FUT respecto de la política. Si el acento inicial de sus preocupaciones fue la distribución del excedente estatal, cambia luego hacia los efectos más inmediatos de la crisis sobre los trabajadores. Sólo en el año siguiente logra una conciencia mayor sobre la dimensión de la crisis, aunque no se puede afirmar que posteriormente haya planteado cómo afrontarla. Más bien, junto al inmediatismo y corporativismo con que se representó la demanda, las reivindicaciones estratégicas adquirieron carácter complementario. Las plataformas sindicales para las huelgas lo tradujeron bajo la forma de dualismo.

Las movilizaciones de 1981 dejaron un resultado en la organización: la reconstitución del tema de la unidad sindical. Pero también la impresión de que el FUT fue arrastrado por la protesta popular.

El año 1982 fue el más importante para el crecimiento del movimiento sindical en todos los órdenes. Levantó la contradicción clasista fundamental de la sociedad y la articulación más amplia de espacios y actores en respuesta al Estado y al capital. La dinámica de los acontecimientos mostró potencialidades y limitaciones. Por un lado, la posibilidad de enfrentar al sistema político. Por otro lado, el límite que impuso el sostenimiento de la democracia, que entrampó a las salidas, una vez que "la lucha popular desbordó el marco impuesto por el régimen democrático al conflicto social, erosionándose así la legitimidad del régimen representativo".[7] El balance final fue una acumulación de experiencias en el FUT: tomó conciencia de su capacidad para ser el "portavoz del descontento" y de su debilidad hegemónica.

En 1983 el FUT definió un discurso más inclusivo. Además de lo popular tematizó lo democrático y lo nacional. Involucró al mayor número de actores sociales e instituciones. Puede criticarse el carácter de la interpelación, pero creó las bases de ampliación de su espacio.

Si en el discurso se avanzó, la capacidad de convocatoria y movilización que se había desplegado en el mediano plazo se encontraba agotada. La debilidad para la expresión colectiva daba lugar a respuestas individuales y familiares. En el contexto aparecieron las elecciones como un factor condicionante; o sea, la "reconstrucción de la forma ciudadano (a) cerrando la brecha de la legitimidad del sistema representativo que ocasionaron las luchas de octubre de 1982."[8]

El Estado fue el opositor fundamental del movimiento sindical en toda la coyuntura, ya que fue la instancia más importante de la reestructuración social y económica obligada por la crisis. Se definió por dos momentos. En 1981 no se planteó una estrategia estatal global para encarar la crisis, sino que más bien las diferentes políticas fueron producto de presiones corporativas de distintas fracciones burguesas. Hacia adelante, la redefinición del patrón de desarrollo orientándole hacia contenidos neoliberales le permitió asumir al Estado el papel de capital colectivo y responder a sus intereses globales.

La actitud del movimiento social frente al Estado estuvo fuertemente teñida de "instrumentalidad". Se lo concibió redistributivista, es decir, con el papel de repartir el excedente social.

Frente al sistema representativo, las movilizaciones del FUT tuvieron diversas posiciones. Inicialmente prescindieron de la Cámara Nacional de Representantes, para posteriormente acudir a ella, involucrándola en su acción. Se destacó la debilidad de la mediación parlamentaria, mostrándose incapaz de procesar la conflictividad social. Los partidos que no habían penetrado en las organizaciones del FUT actuaron desde la Cámara. Las formaciones políticas involucradas en la organización sindical reprodujeron las rupturas entre lo sindical y lo político, a través del esquema de la "correa de transmisión".

Las alianzas que montó el movimiento sindical se manifestaron endebles, sea por la situación estructural de los campesinos frente a la crisis, sea por la supeditación de los antagonismos étnicos a los de clase. Se plantea como hipotesis que "el principal referente del comportamiento para los sectores populares urbanos (incluidos los mismos obreros industriales) es la ciudad y no la fábrica (y por extensión el mismo mercado laboral)".[9]

Con respecto a la política, la principal conclusión de la investigación es la necesidad de un proyecto político del FUT, lo que le permitió avances cualitativos.

2. Los barrios se organizan

No existe investigación acumulada acerca de los movimientos urbanos. Es preciso rastrear sus orígenes en las movilizaciones promovidas por Concentración de Fuerzas Populares (CFP), partido político de

asiento regional que inicialmente basó su organización en los barrios de Guayaquil, para luego expandirse hacia varias ciudades intermedias de la costa. La CFP interpeló a la política municipal —en torno de la cual se define— desde posiciones antioligárquicas y anticomunistas. El lenguaje de respuesta a la necesidad inmediata configuró un liderazgo "populista" y cooptó la organización barrial y las cooperativas de vivienda formando redes políticas clientelares y despóticas.

Más recientemente, a mediados de los años '70, se multiplicaron las organizaciones de pobladores y de demandantes de tierra en la ciudad de Quito. Inicialmente fueron bases de apoyo de partidos tradicionales —salvo contadas excepciones— y en la actualidad son una arena de disputa con los partidos de izquierda.

La redemocratización permitió el nacimiento de nuevas organizaciones en todo el país, en concordancia con las tendencias de la urbanización; la competencia entre las formas organizativas; y la integración de sus reivindicaciones en contextos más generales de movilización de clases subalternas. También implicó la politización de varias organizaciones barriales.

"La organización barrial entre la democracia y la crisis" es el título del ensayo de Mario Unda. Pretende responder a dos preguntas: el carácter de las tendencias renovadoras en el interior de las organizaciones populares, que si bien no son las únicas ni mayoritarias en todos los casos podrían ser síntomas de la constitución de un "movimiento vecinal"; y la vinculación entre éstas y el movimiento popular. Para ello reconstruye empíricamente los cambios del espectro organizativo, el redimensionamiento de las necesidades populares en medio de la crisis, y, finalmente, examina los vínculos entre demandas, movilizaciones y organizaciones urbanas con las de otros sectores subalternos.

En varios períodos se ha incrementado y diversificado la organización de los "vecinos". Estas asociaciones cubren temas tradicionales como las "cooperativas provivienda" y "comités barriales", y otros nuevos, como Asociaciones "juveniles", "femeninas" y de "cristianos de base". En la actualidad en su interior se incuban tendencias innovadoras que se definen por la mayor organicidad contra la dispersión y el individualismo; cuestionan la organización "cacical" a través del desarrollo de la participación interna; responden al paternalismo estatal a través de la movilización y de la ampliación y diversificación de sus demandas; evitan la cooptación estatal y partidaria y el aislamiento creando organizaciones abarcativas independientes.

La vida regular y el ensanchamiento de los objetivos de las nuevas organizaciones son sus aspectos centrales. En la forma tradicional de las organizaciones pro vivienda, éstas morían cuando "el objetivo de los asociados (la tierra) y el de la empresa (el lucro) se habían conseguido [...] para ambos".[10] Por el contrario, en las formas innovadoras se percibe

un alto nivel de convocatoria, consenso y participación en la lucha por la tierra; la constitución de conciencia política y de la necesidad de una continuidad organizativa en la consolidación del barrio; y la legitimación de la organización, transformada de hecho en Comité barrial aunque su formalidad pueda ser otra. En las organizaciones femeninas y juveniles lo más llamativo es la apropiación progresiva de temas y acciones de la vida barrial y de sus actores sociales y conflictividades.

Dos vías de cambio se observan en los Comités barriales. Por un lado, frente a la relación clientelar vecino-Estado y al carácter de "organizaciones de los propietarios de lotes y viviendas *y no* del conjunto de moradores" comienzan a tomar a su cargo la gestión de la vida barrial, entendiéndola también como aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo y su inserción laboral. Por otro lado, la formación de organizaciones inclusivas a otro nivel es calificada como "la *irrupción* de los moradores en la vida urbana [que] encuentra posibilidades de tornarse en una *apropiación* de la ciudad por parte de los sectores populares".[11] Las Federaciones, al unificar las organizaciones de distintos barrios —preferentemente de una zona determinada—, son la expresión más alta de las tendencias innovadoras.

La crisis y la democracia son condicionantes de la nueva situación de las organizaciones vecinales y del germen de un movimiento social. La crisis creó nuevas demandas, mecanismos organizativos y formas de lucha, ya que reordenó la distribución espacial en la ciudad de los diferentes sujetos sociales, profundizó la desigual distribución del equipamiento colectivo e hizo surgir nuevas reivindicaciones más globales y cotidianas, relativas al consumo individual. El momento actual se define por el "papel que está jugando la crisis en la aparición del movimiento social".

La democracia, "entendida como posibilidad organizativa", amparó el crecimiento cuantitativo de las organizaciones y redefinió la tradicional cooptación de las organizaciones barriales por el Estado o el sistema partidario. Lo más llamativo es que la legitimación de la reivindicación barrial se produce a través de organizaciones centralizadas. Sin embargo, "la organización popular no se ha desarrollado lo suficiente como para volverse un impulso motor de coyunturas democráticas que faciliten su propio desenvolvimiento".[12] Antes bien, el autoritarismo gubernamental actual se muestra en que han sido menos afectadas las organizaciones transitorias y más las organizaciones reivindicativas.

Las dos contradicciones que estructuran el momento actual son, por un lado, el conflicto entre la existencia pasiva de las organizaciones y la defensa del espacio que han conquistado, constituyéndose las organizaciones en "actores de los derechos democráticos de la nación". Por otro lado, la relación de fuerzas entre tendencias innovadoras y tradicionales en el interior de las organizaciones y entre ellas influye en la con-

formación del movimiento popular. Se expresa en la participación que no es espontaneidad pura, sino que se encuentra amparada por la organización.

En suma, el barrio y sus organizaciones son un "punto de encuentro de una serie de preocupaciones populares más o menos organizadas", pese a la evidente heterogeneidad en su composición social.

3. Nace un movimiento feminista

Con un grado todavía débil de tematización social y marcada por el carácter de "no visibilidad" de su actor, emergió una demanda femenina también asociada con la redemocratización. Sus antecedentes no fueron necesariamente los movimientos sufragistas. El Estado ecuatoriano se ha destacado por el reconocimiento temprano de estos aspectos formales de los derechos políticos de la mujer. Sin embargo, desde los años '60, aparecieron en la escena varias formas de reivindicación de lo femenino vinculadas con el movimiento popular y con la derecha. En el primer caso, reivindicando la presencia femenina en la historia y como parte de la clase obrera. En el otro, planteando su incorporación al desarrollo. También factores internacionales indujeron la temática. Lo más importante fue la adopción de la cuestión femenina en las políticas estatales vinculadas con la democracia.

Las diversas posiciones permiten pensar en una disputa futura a múltiples niveles. Por un lado, la institucionalidad política formaliza y encierra en sus límites a la reivindicación. Por otro lado, las formas que se instrumentan desde la sociedad: resistencia (doméstica y barrial); de interpelación (lenguaje diferenciado masculino/femenino); y de ofensiva (demandas que persiguen constituirse en ideologías de organización social).

La representación política de una entidad femenina no emerge; se encuentra en suspenso. Los partidos políticos en sus planteamientos instrumentalizan o bien omiten un tratamiento específico. La derecha plantea un tratamiento de los problemas más superficiales de la mujer levantando formas conservadoras de su inserción familiar y formas liberales de su incorporación al mercado de trabajo. La centroizquierda no trata el problema, que a su modo es una forma de afrontarlo. La izquierda lo asume de modo subordinado, sin autonomía y reduccionista respecto de las problemáticas de clase.

El momento actual se define más bien por la multiplicación y el crecimiento de organizaciones femeninas, antes que por su centralización. Más aun, se producen planteamientos acerca de la no vigencia de la centralidad como forma. La constitución de la identidad —de modo pluralista— es la etapa actual, antes que el acceso a la institucionalidad.

En el artículo *Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador,* de Mercedes Prieto se plantean dos entradas para estudiar la formación actual de un movimiento femenino: se indagan los factores globales y contextuales y se examinan dos experiencias de formación de organizaciones femeninas. Concluye diagramando la existencia latente de un movimiento femenino.

Se explicitan varias premisas teóricas. A saber, evitar el reduccionismo de lo femenino a las clases y plantear su articulación a través de las relaciones de poder, subordinación y dominación. Se realiza un balance de las proposiciones sobre la imposibilidad o viabilidad de la formación de un movimiento de mujeres en América Latina. Para el caso ecuatoriano, no existiría un examen de los conflictos de la mujer desde las esferas institucionalizadas. Sin embargo, actualmente, las reivindicaciones y estilos más innovadores operan a nivel del poder social, pese a su constitución histórica "bajo los parámetros de la ideología liberal y que en su versión más moderna tiene además otros referentes en el Estado".[13]

En los años '60 se operaban cambios en la familia que permitieron la individualización de la mujer, quien "deja de ser un signo de intercambio en las relaciones sociales y se convierte en sujeto de deberes y derechos, lo que le permite encontrar su identidad como ser diferenciado respecto del núcleo familiar".[14] También se incorpora crecientemente al mercado laboral. El reconocimiento estatal de la igualdad creó una dicotomía con la cotidianeidad, en la que se reprodujeron estereotipos e ideologías que actualmente son cuestionadas. La participación tradicional femenina en la política fue la lucha por reformas legales y junto a las demandas de los movimientos obrero y campesino, cuyas centrales y federaciones crearon organizaciones de mujeres en la década siguiente. En estos años también apareció un "voluntariado" que, vinculado a conservadores y liberales, planteó la promoción de la mujer pobre. Sin embargo, más allá de las tendencias políticas, diversos sectores se juntaron para la celebración de eventos específicos.

La redemocratización desbloqueó la temática femenina y produjo dos efectos. Por un lado, "encapsuló el proceso vivido por las organizaciones femeninas que nacieron fuera de la iniciativa estatal"; y, por otro, "permea hacia abajo una ideología acerca de la mujer facilitando la problematización social de la temática".[15] En los años '80 aparecen como decisivos los factores externos y la creación de un aparato estatal especializado que interpela a la mujer como sujeto social específico.

Prieto plantea que en la actualidad se perfilan tres concepciones acerca de la mujer: a) "La problemática femenina es una derivación de las estructuras capitalistas y de explotación", en las que una mayor incorporación productiva permitirá a las mujeres elevar su independencia y disminuir la exclusión en otras esferas de la sociedad. Se critica la afirmación, ya que al privilegiar la adscripción a las clases subordinadas se debilita la búsqueda de identidad femenina. El planteamiento está vinculado

a organizaciones populares y de clases medias radicalizadas; b) "El problema femenino como resultado de la exclusión de la mujer del desarrollo." Este es un tema de la derecha —aunque no exclusivamente—, que pretende, a partir de un reconocimiento de la exclusión, obviar el examen de las causas de la asignación social de roles y "una compleja dinámica de inclusión— exclusión... [la mujer] tiene una incorporación concreta a la dinámica social... [y] [...] [el planteo] pierde de perspectiva el carácter disruptivo que tiene el movimiento de mujeres. Se intentaría una integración de la mujer comparativamente semejante a la masculina y, también, una adaptación casi sin contradicciones al sistema vigente"; y c) "Lo femenino como espacio de dominación particular que atraviesa al conjunto de las clases y otras formas de identidad social." La "invisibilidad" a que está sujeta la mujer debe ser tratada desde la lucha contra la dominación capitalista y la dominación patriarcal a la que está adscrita.

Varios datos muestran, por un lado, una ideología dominante de lo femenino en los marcos de la igualdad, crítica de la depresión del consumo y de la exclusión. Secundariamente se alude a situaciones de subordinación de género. Estas concepciones no tienen continuidad clara con las demandas, en las que se privilegian aspectos de la esfera pública, como protección y servicios estatales. Las plataformas de las organizaciones femeninas, en unos casos, evidencian la reducción de la política a la institucionalidad y, en otros, nuevos elementos que no han sido rescatados.

El tema de la crisis atraviesa a las organizaciones femeninas: presión por la inserción en el mercado laboral y la sofisticación de las estrategias de supervivencia. Los casos corresponden a un barrio periférico reciente y a uno consolidado. La mujer aparece como el sujeto que constituye cotidianamente al barrio desde su ámbito familiar y en las relaciones externas.

Entre las formas opresivas fundamentales se destacan el matrimonio o los hijos, ya que significan una ruptura con el ámbito público, que se ve reducido al barrio. Empieza entonces una serie de estrategias para conseguir ingresos complementarios —ahora notablemente urgidos dada la crisis— situación que se enfrenta con una estructura ideológica rígida, una "moralidad" que la mujer no puede transgredir. Por un lado, la actividad femenina está sujeta al tipo de ocupación de los hombres, a su entrega de trabajo a la unidad doméstica y a su rango de ingreso. Por otro lado, la exposición de la mujer al espacio público está mediada y controlada por los hombres. La esfera pública es un espacio de incertidumbre para la mujer y fuente de conflicto con los hombres.

La valoración del trabajo doméstico entre las mujeres, los hombres y la comunidad barrial forma parte básica de las alienaciones a que se encuentra sujeta. También la dependencia que se reedita a nivel de la organización. La reproducción opera a través de redes de vecindad o familiar. En los dos niveles, como en las organizaciones barriales, operan formas clientelares y autoritarias.

Luego de examinar las contradicciones básicas de la vida barrial desde la perspectiva de las mujeres, se plantean los aspectos que actúan como obstáculos y potenciadores de la movilización femenina: a) la organización femenina como mediación entre lo público y lo privado, que permite el acercamiento de los niveles y la tematización de lo privado incorporado a la política; b) el reconocimiento del trabajo doméstico y negación del alejamiento de los mecanismos de socialización del ámbito público; y c) el reconocimiento de una identidad, del "nosotras", rompe la dependencia y el aislamiento.

4. Las regiones capitalistas

Los movimientos regionales y locales han tenido fuerza a lo largo de la historia ecuatoriana. El tema de la constitución de "sociedades regionales" empieza a ser reestudiado y redimensionado, una vez que existe perspectiva histórica. La crisis de representatividad de los años '60 evidenció la falta de un proyecto nacional para el conjunto social. Su revés temático, la cuestión regional, adquiere su real dimensión no sólo de ideología sino de práctica constitutiva del Estado y de "anclaje" de la formación de las clases y agrupamientos sociales. Así las movilizaciones de contornos regionales y locales dejan de ser únicamente la expresión de ideologías arcaicas y son repensadas como formas de constitución de la sociedad civil y de existencia del Estado. En las dos últimas décadas la aceleración de la acumulación capitalista y los proyectos estatales de reformulación del espacio se superpusieron a las formas históricas constituidas de las regiones y a sus demandas.

Se ha clasificado a las movilizaciones entre las que corresponden a regiones estructuradas, las que corresponden a regiones que aún no se han constituido o que están en proceso de hacerlo. [16] En todo caso, siendo la forma más antigua de movilización, es también una modalidad nueva de responder a la penetración desigual del Estado en la sociedad.

En lo que va del siglo, no existe territorio del Ecuador en el que no se hayan presentado reivindicaciones ligadas a las condiciones de producción y reproducción de ese espacio y de sus relaciones sociales. En general, implican a los partidos actuantes en la escena local, los que diluyen su perspectiva más global como efecto de la movilización. Los movimientos regionales generalmente no se expanden a territorios vecinos, sino que a su aparición simultánea en sitios distantes geográficamente, corresponden iguales problemáticas económicas y sociales.

Simón Pachano articula su trabajo *Movimientos sociales regionales*

en el Ecuador alrededor de tres temas: la definición y constitución de regiones; las características de los movimientos sociales regionales y el examen de un caso sobre los cambios cualitativos en los movimientos regionales de los últimos años, enmarcado por la coyuntura de crisis.

La categoría que define a una región es su "dinámica interna", la constitución en su interior de grupos de poder que enfrentan al Estado central y/o a otras regiones y que luchan por la hegemonía estatal. Aquellos espacios que no tienen estos atributos son objetos de disputa desde el ámbito estatal. Basado en esto Pachano divide al Ecuador en tres regiones: Guayas, Cuenca-Sierra Sur y Quito-Sierra Norte. Una región en vías de consolidación por la presencia del movimiento étnico sería la Amazonía, quedando los restantes espacios como formas no estructuradas y con diversos grados de dependencia.

Los movimientos sociales regionales implican la "movilización de la región como un todo, con una presencia sostenida [...] una determinación de metas comunes para el conjunto de sectores internos y la identificación de un adversario".[17] Debe existir un sector dominante capaz de expresar la voluntad general que puede tener múltiples formas de presentación: copamiento del aparato del Estado, movilización y desarrollo ideológico enraizado en la población.

Cabe diferenciar los movimientos sociales regionales de los movimientos en la región. Estos se definen por la falta de continuidad, "pueden tener un carácter de clase o inclusive pluriclasista, pero que tienden siempre a alterar la situación interna conformada históricamente de la región".[18] La hegemonía no es una condición para su surgimiento, pero sí lo es el grado de antagonismo que cuestiona la estructura de poder regional.

La cuestión regional y sus movimientos sociales atraviesan una situación de transición marcada por la "conformación o fortalecimiento de clases nacionales, la ampliación y relativa descentralización del aparato estatal, la mayor presencia del Estado a nivel de la sociedad civil, el reordenamiento del juego político."[19]

Las autoridades seccionales de la ciudad de Guayaquil convocaron a un paro general que se llevó a cabo en dos momentos entre mayo y junio de 1984. El primero "constituyó un revés para los impulsores del evento: división, ausencia de metas claras, imposibilidad de lograr consenso"; en tanto el segundo, mostró "cohesión de diversos sectores, metas explícitas y posibles enfrentamientos con el poder central".[20] La reconstrucción de los acontecimientos muestra la constitución y capacidad de convocatoria de los líderes —como el alcalde—, la forma de los opositores y el reordenamiento de las fuerzas en la ciudad.

Pachano llega a la conclusión de que se trató de "un nuevo tipo de movimiento en la región y que no llegó a ser —ni se lo planteó jamás— un movimiento de la región".[20] La movilización, pese a que tuvo como

referente al Estado, no implicó el conjunto de actores de la región, sino a una ciudad dentro de ella. La coyuntura política nacional de transición gubernamental sobredeterminó la movilización.

5. Servicios y tierra, campesinos e indígenas

Los orígenes del movimiento campesino estuvieron asociados, desde 1926, con el Partido Socialista —que presentó un ideario más bien industrialista— y, desde 1931, con el Partido Comunista, de ideología marcadamente obrera. Particularmente este último impulsó la sindicalización de "huasipungueros" en haciendas en las que se había fracturado la presencia terrateniente. El Estado como sustituto no logró reconstituir las bases de la dominación frente al asedio de los campesinos.[21]

Sobredeterminado por las coyunturas nacional e internacional reaparece el movimiento campesino en la década del sesenta. Se produjeron diversas situaciones de transición en las que se disolvieron, conservaron o transformaron las relaciones de huasipungo, bajo diversas formas de los antagonistas —inserción de los terratenientes en los cambios nacionales y modalidades para afrontar la presión campesina en sus unidades de producción (liquidación de huasipungos, redistribución de la tierra y cambios tecnológicos).

La hipótesis general más relevante sobre el período es que la supeditación formal del proceso de producción inmediato al capital permitía la sobreexplotación de grupo doméstico —combinaba renta en trabajo y plusvalía—, y afincaba a la estructura familiar en la hacienda, situación que no choca con la modernización y el incremento de la productividad. Varias tácticas fueron utilizadas por los terratenientes, de las cuales no puede deducirse la existencia de un proyecto político que les permitiera salir de su debilitamiento a nivel nacional y local. El movimiento campesino enfrenta al patrón a través de acciones abiertas y a través de presiones económicas encubiertas para conseguir la reapropiación de la tierra y del producto. En definitiva, la presión dependía del lugar que ocupaba en la correlación de fuerzas en el momento.[22]

La pluralidad de vías de penetración de capital en el campo, de respuestas de los diversos actores campesinos, de espacios y de formas reivindicativas, plantea la necesidad de analizar si se trató de un movimiento o de una movilización. En el segundo caso habría en ella una posición crítica con respecto a la dirección política de los campesinos, posición que profundizó sus características estructurales antes que conferirles unidad.[23] Estos fueron los condicionantes de la primera fase de la reforma agraria.

Para la segunda fase (1970-1975) el panorama agrario se había reordenado y el proceso de diferenciación se había profundizado. Las debilidades fueron superadas por la presencia de la conducción centralizada de

Federaciones Campesinas, que sin embargo dependía de las iniciativas de la política estatal y estaba imposibilitada de producir acontecimientos a nivel nacional. No obstante, en determinadas zonas se impulsaron importantes acciones redistributivas.

Dos factores pesan sobre el actual repliegue del movimiento campesino. Por un lado, la priorización de las políticas de fomento agropecuario, que constituyeron a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria en interlocutores de sus servicios y de las nuevas políticas de precios. Por otro lado, la gestión de las unidades productivas o de las formas asociativas, que diferencia a los campesinos y debilita la presión de los sin tierra. Sin embargo, la crisis impulsa a la recampesinización de la fuerza de trabajo expulsada del mercado urbano, que inicialmente se tradujo en presión sobre la tierra disponible en sus propias unidades y luego podría levantar nuevas demandas por la tierra.

Las modalidades de evolución del movimiento campesino e indígena permiten entender su inserción en la crisis, plantea Manuel Chiriboga en su trabajo *Crisis económica y movimiento campesino e indígena.* Las características del desarrollo capitalista en el agro, el proceso de diferenciación social, los modos de articulación de los campesinos del mercado, el papel del Estado, el resurgimiento de planteamientos étnicos, las políticas estatales indigenistas, han presionado no sólo en favor de la heterogenización del campesino, sino de la constitución de organizaciones regionales de segundo grado más homogéneas, que llevan adelante luchas en consonancia con las características de los sujetos involucrados y que mantienen cierta autonomía con respecto a las Federaciones Campesinas Nacionales. Chiriboga califica esta relación entre organizaciones regionales y Federaciones Nacionales como una centralización flexible o descentralizada.

Se analizan cuatro casos de organización campesina regional y una lucha local y se pregunta a cada caso sobre su origen, la orientación, la gestión y la reivindicación, la vinculación con el Estado, los efectos de la crisis y la participación política y sindical. También se analiza el papel de una de las Federaciones Campesinas Nacionales en torno de reivindicaciones globales, su relación con el movimiento obrero y su vinculación con las organizaciones campesinas de segundo grado.

El contexto de la situación actual del movimiento campesino e indígena es el cambio de la política agraria. Desde los años '60 hasta mediados de la década del setenta el tema estatal dominante fue la redistribución de la tierra, lo que condujo a una respuesta nacional de los campesinos. De allí a la actualidad, cambió hacia el aumento de la productividad en todas las unidades, lo que incrementó el proceso de heterogeneneización campesina. Desde la base se ha generado una demanda por autonomía organizativa y su "constitución como sujetos políticos abierta por la democracia".[24]

Las organizaciones depositarias de la tendencia a la autonomización son Uniones Campesinas de segundo grado. La expresión reivindicativa de la heterogeneidad campesina es por políticas estatales diferenciadas y dirigidas hacia cada sujeto campesino. Superpuesta a esta tendencia existe una memoria de lucha por la tierra que los relaciona con las organizaciones sindicales y federaciones campesinas. No obstante, en la toma de decisiones, prima su vinculación con la coyuntura local, para posteriormente plantearse el sentido de las directivas de los centros urbanos.

Acerca del nacimiento de las organizaciones investigadas en la costa, un caso tiene origen en el período de "agrarismo reformista radical" de su filial, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), definido por la lucha por la reforma agraria, nuevos sistemas de comercialización y democratización del acceso a los recursos estatales. El otro caso se vincula a la FENOC luego de un proceso de disputa por la tierra con un "enclave bananero" —de los pocos que existieron en el país— y en el momento en que declina la reforma agraria.

Las líneas de trabajo actual de las organizaciones luego de conseguida la tierra, son programas de apoyo a los miembros basados en recursos estatales o de entidades de desarrollo privadas. Las demandas comunes son crédito, comercialización y servicios. El objetivo de estos campesinos que producen mayoritariamente para el mercado es el mejoramiento del nivel de vida y algún nivel de capitalización. Las organizaciones también se plantean cómo limitar los procesos de diferenciación.

Entre 1982 y 1983 el invierno destruyó significativos volúmenes de cultivos e infraestructura. Entonces se reforzó la demanda de recursos del exterior por parte de las organizaciones, y se probó su capacidad de gestión. Esto les planteó la poca capacidad de autosubsistencia en estas situaciones. A su vez, la crisis actúa doblemente sobre ellas: incrementando los precios de los productos que ofertan al mercado y bajando su capacidad de consumo de bienes no producidos.

Las organizaciones de la sierra presentan dos vertientes de constitución. En un caso, una organización campesino-indígena que se planteó cómo enfrentar la opresión que sufren en tanto indígenas, basados en la reducidísima disponibilidad de tierra y en condiciones de semiproletarización. La consecución de la tierra implica la reivindicación étnica, en el sentido de que la pobreza conduce al "amestizamiento". También se vincularon a la FENOC.

El otro caso es una comuna que lucha por la tierra con el apoyo de una organización nacional sindical y no una campesina. Chiriboga ejemplifica una situación en la que "Las Federaciones Nacionales parecen no poder expandirse más allá de las zonas donde tienen una influencia lograda en el período de auge de la lucha por la tierra: 1970-1975",[25] Estos campesinos recibieron la tierra sin romper los lazos con la hacienda.

Con el tiempo la presión demográfica aumentó, y con las restricciones del mercado urbano y agrícola producto de la crisis se tomaron la hacienda.

La reivindicación por un Estado pluriétnico y multicultural se examina en una organización de la Amazonía que fue originalmente impulsada por una comunidad religiosa, pero que al fortalecerse determinó por sí misma su estrategia frente a la sociedad nacional: reafirmación de la etnicidad y autosuficiencia económica a través de la modernización. Frente al Estado, adoptan dos posiciones: enfrentar a las Fuerzas Armadas y a la colonización y colaboración en proyectos, cuya programación y ejecución controlan. Lo más significativo fue obtener la entrega de títulos colectivos de tierras creando una frontera a la colonización: "[...] constituyeron paulatinamente una territorialidad reconocida por el Estado e infranqueable a través del mercado".[26] La crisis los afectó por la apertura de nuevos proyectos agroindustriales. En respuesta se han acercado al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), sobre el cual tenían reservas.

La FENOC es analizada en su carácter de organización campesina más grande del país. En su origen estuvieron presentes militantes urbanos vinculados a dirigentes campesinos. Transitaron desde una posición cristiana radical hacia una socialista. En 1973 la FENOC promovió importantes movilizaciones por la reforma agraria, en contrapartida al anuncio de una nueva legislación. Ahora su base social son antiguos beneficiarios de la redistribución de tierras, en torno de los cuales se crearon las organizaciones regionales que reivindican la especificidad antes que la globalidad. Por ello, la FENOC levanta temas de alcance nacional: tierra, crédito, legalidad. En la práctica esta dualidad se traduce en el reconocimiento de un discurso y, simultáneamente, en la inserción en el Estado. Si esto puede generar una ruptura, el ejercicio político en torno del poder local tiende a soldarla.

Los campesinos beneficiarios de la reforma agraria tienen un aspecto en común: la clase terrateniente parece haberse diluido como el enemigo claro; "el enemigo parece estar centrado en la pequeña burguesía comercial pueblerina y, en general, los intermediarios, usureros, etc."[27] El Estado aparece dual: una asociación positiva con el proveedor de servicios y una asociación negativa con el responsable de políticas que afectan a los campesinos.

6. Los sectores medios también protestan

En el marco de las anteriores movilizaciones se produjeron otras ligadas a los sectores medios. Choferes, maestros, profesionales y estudiantes ocuparon circunstancialmente y sin continuidad la escena ya que

dependen de estímulos externos puntuales y circunscritos al actor. Cada una tiene especificidades que reseñaremos ligeramente.

Las huelgas de choferes paralizaron ciudades o regiones e impusieron condiciones económicas a los gobiernos contra los que estaban dirigidas. Sus reivindicaciones se articulaban con los conflictos coyunturales, con la modalidad de una masa de maniobra que obtenía réditos, siempre de una de las partes: de sus antagonistas o de sus aliados objetivos y circunstanciales en la oposición. Si inicialmente las organizaciones de choferes formaron parte de la Central de Trabajadores Ecuatorianos, al consolidarse una actividad terciaria empresarial del sector interno adquirieron personalidad e intereses independientes y, en general, contrapuestos a los populares como en el caso del transporte de pasajeros. En los últimos años, las relaciones con el Frente Unitario de Trabajadores son las de una mutua utilización cuando existe convergencia (que desde 1981 no se ha producido). Contrariamente, el FUT empuja por la sindicalización de los asalariados contra sus patrones que forman cooperativas con lógica económica enteramente capitalista.

Las movilizaciones de profesionales generalmente presionaron por condiciones salariales y de trabajo para funcionarios estatales. Obtuvieron solidaridad de sus colegios profesionales o de facultades universitarias. Su relevancia fue inflada por los medios de comunicación, que encuentran desproporcionado que estos sectores sociales acudan a la movilización para el logro de sus reivindicaciones. La mayor parte responde a la depresión del consumo vinculada con la congelación de sus salarios. Corresponden a capas empobrecidas de los sectores medios, que se constituyeron o expandieron con el petróleo y a los que la depresión económica y la baja del gasto estatal aproximan a los ingresos familiares obreros de las industrias de punta.

Los trabajadores estatales sujetos al Código Laboral se agrupan en sindicatos por institución y la mayor parte se encuentran adscritos a las centrales sindicales nacionales. Los empleados estatales sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa poseen su propia organización, que en varios casos se ha plegado a la movilización sindical, pero es manifiesta su debilidad para conseguir una posición clasista independiente. Sin embargo, valiéndose de una interpretación de la Constitución Política del Estado, se lucha por su sindicalización.

El grupo más homogéneo de trabajadores estatales son los maestros. Forman aproximadamente la tercera parte del empleo directo del Estado y presentan organización local, provincial y nacional. Los gremios de maestros tradicionalmente han sido disputados por los partidos de izquierda de origen universitario. Desde hace varios años son fuente para el reclutamiento de militantes del Movimiento Popular Democrático (maoísta) y siguen sus directivas de constitución sindical fuera del FUT. No obstante, cambios en las orientaciones de las organizaciones

provinciales e iniciativas locales los han aproximado a las movilizaciones sindicales y a convergencias de base hacia una Central Unica de Trabajadores. Las movilizaciones protagonizadas por la Unión Nacional de Educadores (UNE) logran un alto grado de combatividad y oposición al Estado. En varios casos tienden a prolongarse y, por esta vía, involucran a otros actores urbanos que se polarizan con la movilización.

En la segunda mitad de la década del sesenta y los primeros años de la del setenta, los estudiantes fueron los portavoces más radicales de las demandas populares. Los partidos políticos de izquierda habían constituido a las universidades en las fuentes tradicionales de aprovisionamiento de militantes, que sustituía a buena parte del trabajo organizativo en el campo pupular. La magnitud de la población con ocupación industrial era bastante pequeña y dado el libre ingreso en las universidades estatales, el tamaño de la población estudiantil fue y es superior a la clase obrera urbano-industrial.

Hasta inicios de los años '70 las movilizaciones estudiantiles fueron sustitutos de las populares; luego, los partidos que las organizaban y competían por su control se diversificaron y se desplazaron hacia la esfera sindical y en la actualidad, la acción estudiantil precede y, en varios casos, detona la movilización sindical y vecinal. También hacen las veces de válvulas de escape de comportamientos "anónimos" de sectores juveniles. Por último, reivindican la reproducción del sistema universitario, que en los últimos quince años, antes que aparato estatal reproductor de ideologías se ha convertido en mecanismo de movilidad social y de calificación intermedia que facilita la inserción laboral.

7. Un caso de excepción

Por último, cabe mencionar a la movilización nacionalista-estatal en ocasión del conflicto con Perú en el sitio "Paquisha", en 1981. Se produjo una articulación pluriclasista amplia, una disputa por apropiarse de la "cuestión nacional" entre los bloques sociales fundamentales, un liderazgo estatal de la movilización y de la demanda y la actualización de la "Historia Muerta" (1941) en los sectores subalternos que se evidenció como cohesionante del sistema político.

La movilización comprometió a todos los actores sociales y sujetos económicos; pero se diferenciaron las actitudes frente al conflicto bélico. Estas evidenciaron el modo como se entendía el problema nacional. Se desarrollaron creativas formas de organización y de respuesta al acontecimiento, algunas distintas de la tradicional canalización de intereses. En torno de ellas se produjo una correlación de fuerzas entre el movimiento popular y los sectores dominantes, que fue condicionada por el Estado. El resultado de la disputa fue la incapacidad del movimiento popular para transformar un planteamiento "nacionalista" en "nacional-popular". Las medidas económicas que se adoptaron en ocasión del conflicto fueron —voluntariamente o no— inicio de una política económica neoliberal para el tratamiento de la crisis, situación que suscitó la respuesta del movimiento sindical.

En suma, las características específicas de la movilización fueron la temática, la participación del Estado, la dilusión de las formas de representación tradicionales, la transparencia con que articuló una situación histórica y las vertientes ideológicas que justificaron el acontecimiento.

C. Características y temas de los movimientos

1. Crisis y desplazamientos de las identidades de los subalternos

Lo más distante de sociedades heterogéneas como la del Ecuador es una sola forma de identidad social de los sectores subalternos. Su existencia "disgregada y discontinua" no encuentra solución superestructural en partidos que persiguen la representación uniclasista, ni en estructuras corporativas que enajenan partes de sus demandas, ni en el Estado, en tanto éste no sea una vía para alcanzar el autogobierno.

La precariedad de la clase obrera en la acumulación, por hallarse expuesta, por un lado, a una burguesía industrial dependiente de una gestión estatal de sustitución de importaciones, y, por otra, a procesos de tecnificación productiva que la desplazan, determina una reubicación ante subordinados y dominantes. La articulación con el capital es realizada a través de formas nuevas e inestables. En su horizonte se encuentra la imposible proletarización masiva de la sociedad y la coexistencia necesaria y conflictiva con otros sectores subordinados y con el Estado.

Los obreros conocen su capacidad de presión coyuntural en puntos estratégicos del sistema de acumulación, pero perciben su fragilidad para rearmar un aparato productivo que no controlan. Desde esta posición son convocados como interlocutores de una transformación global de la sociedad; a su vez, la convocatoria tiende a asignarles roles de hegemonía desde "lo obrero" hacia las otras determinaciones de clase e identidades de los subalternos.

La clase obrera permite la continuidad del movimiento sindical. Más aun, despliega su sentido estratégico en la práctica misma de la movilización, en tanto conduce la dinámica interna de las huelgas nacionales de trabajadores. El componente de todas ellas es el paro de la producción. Es el punto mínimo de la huelga en el que intervienen, de modo más o menos masivo, el conjunto de los obreros urbano-industriales, primordialmente de la ciudad de Quito. De allí puede extenderse hacia un paro urbano o nacional y adquirir distintas significaciones tendiendo hacia la huelga política. Sin embargo, más allá del paro productivo, la

ampliación del arco de fuerzas sociales intervinientes implica también el desplazamiento de la identidad obrera hacia otras formas. En todo caso, la clase obrera movilizada actuando como "portavoz" o como "altavoz" de los sectores subalternos ha logrado arrebatar poder al sistema institucional. La devolución de este poder arrebatado por las calles ocurre en medio de la imposibilidad de generar una alternativa política o social. Esto nos plantea el problema de la representación del movimiento laboral en la política. Para comenzar por el final, el problema es que la representación estable del movimiento en la escena pasa actualmente por la legitimidad que consiga; es decir, la tematización de su práctica en el espacio del consenso y de la voluntad política de la masa.

La representación de los obreros en la política atraviesa una multitud de formas. Desde los partidos de la izquierda —todos llenos de planteamientos cercanos al obrerismo—, la representación se debería conseguir por traducción literal del poder sindical en político y, consiguientemente, la tarea básica sería el copamiento del mundo sindical. Desde el aparato sindical, la presencia política se conquista de tres modos: accediendo a la institucionalidad política —arena para el enfrentamiento o la negociación—; en la acción directa que, voluntariamente o no, deslegitima al sistema institucional; y bajo la mediación del sistema de partidos. Son formas que coexisten en la actualidad y bajo las cuales se presenta el movimiento sindical. Ahora bien, el protagonismo obrero dentro del movimiento sindical es arrebatado por otras formas de identidad subalterna en determinadas coyunturas. En otras, el protagonismo sindical dentro de las clases subalternas es arrebatado por la identidad ciudadana. Estos son aspectos de una contradicción imposible de resolver.

Junto a estas formas de acceso a la política —que nos hablan de la fragmentación y heterogeneidad de la clase obrera y en general del movimiento sindical— la falta de una vertebración temática es evidente. Conforme se acentuó la penetración del Estado en la vida social, la idea del socialismo se debilitó y, en grandes períodos, desapareció. Sin embargo, no fue sustituida por la idea de la democracia. Es, tal vez, el "poder sindical" la idea no verbalizada que atraviesa al movimiento y recoge la actual situación de crecimiento orgánico y expresión de reivindicaciones, también de otros actores. Actualmente es posible que las coordenadas para el movimiento sindical cambien, conforme el autoritarismo gubernamental se ocupe de sus manifestaciones.

En suma, el movimiento sindical no se identifica con el socialismo, ni con la democracia. A su vez, la sociedad no se identifica con la clase obrera, ni con el movimiento sindical. No se trata de un sindicalismo apolítico, sino de una crisis en la modalidad de establecer una relación política entre la sociedad, el Estado y el movimiento sindical.

A la conformación heterogénea del mercado laboral urbano corresponde un juego de desplazamiento de los actores sociales subalternos entre múltiples formas de identidad. La pregunta que usualmente se formulan los estrategas del movimiento sindical es: hasta dónde la movilización es obrera y dónde comienza la movilización urbana? No es posible una respuesta y la pregunta debe ser reformulada ya que el mismo sujeto social desplaza las formas de identidad en la protesta y los planos en los que desenvuelve su práctica.

La heterogeneidad del movimiento sindical y la heterogeneidad de contradicciones urbanas y de sujetos sociales territorialmente ubicados no son las mismas. Corresponden a planos distintos de las relaciones entre el Estado, el capital y los sectores subalternos. Mientras el movimiento sindical genera formas de crecimiento orgánico en su respuesta al capital y al Estado, la barriada acumula imperceptiblemente descontento y genera formas de "explosión social". Ahora bien, en general, los dos se definen por su carácter "reactivo" contra la política estatal, pero con diferencias en los planos de focalización de la demanda y de técnica de lucha en el interior de una misma forma.

La superposición de diversos sistemas de contradicciones en la vida barrial es un acontecimiento por demás estudiado. Un mero listado nos permite acercarnos al objeto de nuestra discusión. Por un lado, la reproducción de los sujetos y problemas de la sociedad global; las relaciones de opresión de la ciudad sobre sus barrios —que implica el conflicto entre alternativas del capital para asignar una función a las ciudades en la reproducción del conjunto del sistema productivo y la ciudadanía—, y los conflictos por la reproducción de la fuerza de trabajo y las políticas estatales que lo operativizan. Por otro lado, las formas a través de las cuales se constituye un "subsistema político" desde el interior del barrio —con sus temas sociales y problemáticas específicas—, y las formas opresivas y despóticas que se constituyen alrededor de esa "institucionalidad barrial".

En este sentido, el barrio y la ciudad son instancias en las que se despliega el mayor número de formas de identidad de lo popular, que antes se mantenían en estado latente. ¿Por qué el barrio es un articulador de identidades? Para encontrar una explicación estructural debe indagarse en el carácter globalmente terciario de la sociedad y en la función de la red urbana como reproductora de la globalidad de este funcionamiento. Más allá, en el plano de la ideología y la política, la respuesta puede encontrarse en la poca permeabilidad del sistema institucional nacional, que no permite abrir las múltiples conflictividades que estructuran los sujetos populares.

Sin embargo, el movimiento vecinal, como las otras formas germinales que aloja —femenino, jóvenes— no aparecen en la superficie de la escena política y de la sociedad como conjunto. Son formas afectadas de "invisibilidad" en tanto reivindicaciones específicas, pero articuladas

por el consumo, la reproducción y la inserción al mercado de trabajo. En este plano se plantean las vinculaciones entre el barrio y el movimiento sindical.

Las plataformas del movimiento sindical manejan muchas dicotomías. Una importante es el juego entre salarios y precios que, a su modo, traduce los desplazamientos de los mismos sujetos entre la producción y la reproducción, sin una inserción que los identifique prioritariamente ante la sociedad. La fábrica no es un organizador del espacio en la sociedad ecuatoriana,[28] la crisis ha reforzado las estrategias de supervivencia y redes de ayuda de los obreros industriales [29] y la presencia de un Estado centralizador de renta desplazan las reivindicaciones populares, fundamentalmente hacia lo espacial.

Las plataformas del FUT tratan de insertarse en la coyuntura guiadas por una visión cerrada del orden político. Así, se devalúa su carácter estratégico y a sus demandas se las percibe inmediatistas. Su acercamiento a las reivindicaciones externas al mundo sindical no pasa de agregar nuevos puntos a un esquema predefinido. En suma, la proletarización y la conflictividad —desde el espacio y desde otras categorías organizativas de la sociedad— cuestionan la representatividad del FUT. Más aun, en un nivel, éste reprime la creatividad que pueda tener el cuestionamiento del poder desde fuera de sus marcos.

Las reivindicaciones populares que se desplazan fuera del mercado laboral evidencian la trama constitutiva de la vida social de los actores. En este plano, la sociedad se dirige a la rápida desproletarización y al levantamiento de nuevas formas de identidad. ¿Qué se plantean y hacia dónde se dirigen estas identidades? Analicemos el estereotipo obrero.

La visión cerrada del objetivo político, aquella que debería guiar la producción de un acontecimiento fundamental —el socialismo—, nos plantea la proletarización en el mercado laboral como hecho económico o condición objetiva material desde la cual, por extensión, progresivamente se lograría introducir una conciencia política. El movimiento social, en consonancia, es entendido como etapa prepolítica. La política es una forma superestructural del hecho objetivo, la proletarización económica. El resto del discurso es por demás concocido.

La primera respuesta a la posición reseñada es que en el horizonte de una sociedad como la ecuatoriana no está la proletarización masiva como hecho productivo. Antes bien, la característica de su vida social es la multiplicación de las identidades de agrupamientos sociales. Pobladores, mujeres, jóvenes, indígenas, regiones, etcétera, se constituyen bajo otros parámetros de política e interpelación del poder. Su espacio en la vida social es lo que está en juego. Miran hacia adentro de las relaciones que los constituyen y cuestionan al sistema político, ya que no reconocen la especificidad de su conflicto.

Entre estas identidades cuya vocación es un orden abierto se crean

redes de parentesco. Tal vez la más importante es la construcción de un colectivo popular que redefine constantemente sus objetivos en la acción. Esta práctica fractura eficazmente la cara restrictiva de la institucionalidad política. Las identidades en gestación van dotándose de nuevas formas de entender y cuestionar al Estado, no desde el poder que éste ejerce, sino desde la construcción de un poder social. En este plano se ubica su objetivo y su imagen es la de una sociedad opcional, más no de reemplazo estatal.

2. *¿Qué movimientos sociales son posibles en una sociedad terciaria?*

El paradigma de la conflictividad organizada por la clase obrera se debilita ahora en el Ecuador. Durante algún tiempo y casi sin cuestionamiento, el corolario de la disputa sobre el carácter de la formación social fue un sujeto soporte de su destrucción o reemplazo. Igual estructura deductiva funcionó con la industrialización. Casi sin indagar sobre la naturaleza del fenómeno se planteó la expansión y generalización de sus relaciones económicas y de capital.

La imagen de una proletarización urbano-industrial creciente de la fuerza laboral carece de fundamento empírico. Actualmente se cuestiona la asociación directa e inmediata entre la existencia de los obreros y su rol estratégico. Por un lado en la realidad se ha profundizado el capitalismo no con el desarrollo sectorial masivo de la industria, sino asentado en la regeneración de actividades primario-exportadoras y comerciales, y sujetas a la lógica del capital financiero. Por otro lado, se percibe la heterogeneidad interna de los obreros y el desplazamiento de su identidad hacia lo espacial y hacia lo estatal.

La proletarización inestable es la característica central del mercado laboral. Se reconoce el acceso temporal al salario como un ingreso importante de los pobladores urbanos [30] y, simultáneamente, se pondera el rol de salario en la reproducción de la fuerza laboral, particularmente de los obreros industriales.[31] También se indaga a la migración temporal para la obtención de ingresos monetarios vinculada a una estrategia de reproducción campesina.[32] En conjunto, se relevan las paradojas de la constitución del mercado laboral, sin que implique la proletarización de la vida social.

¿Qué se constata ahora en el capitalismo ecuatoriano frente a su situación previa? Las tendencias en la conformación de los agrupamientos sociales, que presionan en muy diversos sentidos. Por un lado, la proletarización no es homogénea ni profunda. Más aun, podría plantearse que existen diversos "planos de proletarización" cuyo elemento común es su carácter relativo y la urbanización acelerada, sin que responda linealmente a nuevos patrones de empleo y de crecimiento del capital.

Por otro lado, las políticas estatales hacia el sector agropecuario

han creado dos situaciones: una masa inmensa de campesinos productores de la mayor parte de la canasta básica, y un crecimiento empresarial que no impuso la proletarización profunda de la fuerza de trabajo disponible.

La cuestión que se deriva es: qué tipo de sociedad política puede estructurarse sobre la base de la reproducción permanente de una sociedad de carácter terciario; se plantea entonces, la imposibilidad de una conformación plenamente ciudadana del sistema partidario y de una forma orgánica, estable y continua del movimiento social, en correspondencia con los sujetos que lo conforman.

Dado este contexto, no caben varias de las preguntas realizadas para los movimientos sociales de los países desarrollados, como por ejemplo la pregunta por la permanencia y continuidad del movimiento social. Estamos frente a una situación de aparición esporádica, cuya constitución no es lineal ni uniforme. La dinámica de la conflictividad será permanentemente heterogénea (muchos movimientos referidos a diversas situaciones) y los puntos de aplicación en el sistema político serán los más variados.

¿Qué es lo productivo y cuál es su rol bajo estas características de sociedad? Para repreguntarnos acerca de lo productivo debemos alejarnos de una perspectiva "obrerista" acerca del papel de la clase. Por un lado, la reflexión debe flexibilizar la frontera entre las esferas de la producción y reproducción; entre el mercado laboral y el espacio. Por otro lado, se debe revalorar a otras conflictividades sociales.

La función decisiva de lo espacial y de lo estatal en la vida social de los sectores subalternos nace en el rol de la reproducción. Se trata de un proceso de valorización basado en la remuneración por debajo del valor de cambio de la fuerza de trabajo [33] y en la intervención estatal en la generación de nuevos actores sociales y conflictividades.

El proceso de creación de valor en nuestras sociedades se define más bien como un un hecho individual que colectivo. Más aun, se podría pensar que lo colectivo y lo productivo tienen otra significación que la acepción tradicional en el capital industrial. El espacio y la función global de la ciudad y de las regiones lo acotan, adquiriendo funciones de creación de valor y estructuración de lo colectivo.

¿Cuáles son los ámbitos y lógicas del enfrentamiento social? El capital controla decisivamente la estructura económica formal, la que sin embargo no puede extenderlo hacia el conjunto de la vida social. En ésta actúan redes estatales invisibles que encarnan al capital, pero que están sobredeterminadas por la política. Así, no existe control estricto del capital en lo espacial y la presencia estatal se define también como espacio de enfrentamiento. Igual relación puede observarse en la familia y las regiones. Los nuevos movimientos son respuestas a estos espacios para la conflictividad.

El espacio, la familia, las cuestiones étnicas y la conformación regional, que usualmente son concebidos como condiciones de reproducción de un capital productivo urbano-industrial, deben ser redefinidos a la luz de los movimientos sociales que alojan.

3. La penetración del Estado en la sociedad civil y los movimientos

Las movilizaciones que tienen antecedentes más profundos en la historia —campesinos e indígenas, sociedades regionales e incluso obreros— se orientaban prioritariamente contra su antagonista inmediato. Así, la lucha en el interior de la hacienda serrana tenía formas específicas de asedio a los recursos y a la estructura de dominación personificada en agentes concretos —el cura, el terrateniente y el teniente político—; generaba y procesaba la conflictividad y sólo incipientemente rozaba las formas estatales nacionales. El Estado existía como estas formas locales, la dimensión de sus aparatos nacionales era reducida y la dinámica de la lucha de clases era el antagonismo directo.

Las movilizaciones regionales de más amplios alcances tendían a la disputa por la ocupación del aparato de un "Estado terrateniente",[34] cuya característica básica fue la fragmentación. En este sentido, la cuestión de la formación nacional no estuvo plenamente en juego hasta los años '60 y los conflictos inter e intrarregionales sustituían al enfrentamiento por la mediación estatal. A su vez, los primeros conflictos obreros que han podido ser reconstituidos muestran una dinámica dentro de los linderos de la fábrica, en que el Estado no aparece como referente.

En suma, bajo esta forma de la conflictividad social se asentó el "compromiso" como vía de la política ecuatoriana hasta los años '60.

Las movilizaciones de los diferentes actores dejan de ser acontecimientos y progresivamente adquieren dimensión nacional y referente, en la medida en que el Estado penetra a la sociedad civil y organiza el sistema político. Primero, el Estado actuó (re) constituyendo decisivamente a los actores; segundo, éstos se vinculan al capital a través del Estado y, tercero, la democratización asume desde el Estado la tematización de una serie de "cuestiones sociales" que funcionan como gérmenes de movilizaciones.

La clase obrera y la burguesía industrial emergen del proceso de sustitución de importaciones, el cual económicamente se sustenta en el excedente y en la normatividad estatales. Socialmente se constituyen como corporaciones eficaces en la escena por un proyecto "reformista" de reorganización de la economía. Políticamente, son demandantes de un espacio en el sistema representativo. Ahora bien, de este proceso no sigue necesariamente una conclusión acerca de la "dependencia" de la organización y la movilización sindicales del Estado, ni de la actitud que adopte la burguesía industrial, ni de ningún otro agente externo. Más

bien, se trata de problematizar el tipo de vinculaciones entre sociedad civil y Estado, que plantean a la hegemonía y a la correlación de fuerzas como condicionantes de la evolución social. La simultaneidad de la acción directa y de la delegación de la representación se constituyen en formas necesarias de la política en estas condiciones.

El movimiento sindical ha tenido diferentes ópticas acerca del Estado. En 1971 se planteaba como instancia sustitutiva del partido e imaginaba a su plataforma como un nuevo régimen. Para entonces el movimiento era débil y su presentación ideológica era de la intelectualidad de izquierda, antes que propia. Luego, desde 1975, el movimiento sindical encara al Estado en tanto agente de distribución de recursos y no a partir de un cuestionamiento de la globalidad del poder. En la base de esta percepción se encuentran el carácter del Estado como constitutor de las relaciones sociales y distribuidor del excedente de que dispone; el debilitamiento de la idea del socialismo como imagen de la sociedad y su conversión en radicalidad reivindicativa; el copamiento del sindicalismo por los partidos de izquierda que se plantean como vía de acceso a la política; y, la formación de un "poder sindical" que se escinde del poder político.

No obstante, la crisis ha impuesto criterios al movimiento sindical. No sólo el parcial abandono de la concepción del Estado como asignador de recursos sino también el esbozo de interpelaciones alrededor de lo nacional, lo popular y lo democrático frente al Estado, la fortificación de la sociedad civil como condición de eficacia y la preliminar revaloración de nuevos temas de otros agrupamientos y conflictividades sociales.

También la democracia ha impuesto criterios de realidad al movimiento sindical. Si inicialmente se pensaba que al cambio de políticas estatales correspondían reacciones inmediatas de sectores populares, ahora se plantea la necesidad de legitimar la movilización popular, no sólo frente a la coyuntura sino hacia el mediano plazo. También se ha impuesto una relación con el Parlamento y los partidos políticos. También en el reconocimiento de su debilidad —y el vacío de representación que se provoca cuando se enfrentan directamente con el Ejecutivo o cuando se salen de la escena— se le ha otorgado funciones.

4. El orden de la democracia

La democracia actúa sobre los movimientos sociales en dos sentidos. Por un lado, como creadora de un "orden" para el planteamiento de las demandas y, por otro lado, como código organizador de su alcance.

Los movimientos se ubican frente a la democracia desde tiempos sociales y políticos específicos. La democracia es entendida como espacio en el que pueden acelerar y profundizar la demanda y tiene como punto de residencia fundamental al Estado.

Existe una interacción entre los movimientos sociales y la democracia. En la coyuntura de transición a la democracia en el Ecuador se desplegaron el mayor número y variedad de movilizaciones, prácticas que constituyeron identidades. También las reivindicaciones consideradas como legítimas se exacerbaron, en consonancia con la búsqueda de legitimidad de la democracia y del sistema partidario.

La formalidad democrática levanta derechos y crea otros nuevos en relación con cada sujeto social. El movimiento urbano la ejemplifica: se multiplicaron las organizaciones y se expandió el ámbito de la legitimidad de las demandas. Dicho concretamente, se multiplicaron las organizaciones porque fue factible alcanzar la tierra, ensanchando en lo cotidiano la legalidad (los municipios son un ejemplo de ello) y se logró mayor legitimidad en las demandas, aunque fuera por vínculos clientelares (la aceptación de la demanda en períodos electorales y la posibilidad de presión posterior).

La inexistencia de órdenes estatales favorece la constitución de nuevas identidades. Es el caso de los grupos étnico-culturales, que pueden plantear sus reivindicaciones desde una óptica estratégica, ya que no existe una legalidad previa que los identifique como interlocutores específicos y los circunscriba.

La articulación de los movimientos regional y sindical se basa en una constante. Cuando el movimiento sindical se encuentra en primer lugar de la escena, el movimiento regional se repliega; y cuando la movilización sindical decae, la reivindicación regional reaparece. Esta articulación objetiva de los movimientos ha sido posible por la existencia de un escenario en el que resuenan las demandas, al que se accede desde el exterior.

El Estado como punto de residencia de la democracia delimita a la legalidad. Los movimientos sindical y campesino han sido fuertemente afectados por esta situación.

Por un lado, se trató de deslegitimar al movimiento social oponiéndolo a la representación electoral. Por otro lado, se introdujo una escisión entre la acción del movimiento social y su legitimidad. Sus demandas estarían condicionadas a la viabilidad económica estatal y a la conflictividad que el movimiento pueda exhibir.

De hecho, una faceta del sistema partidario también actúa como agente estatal en la democracia. En varias situaciones se imputa al movimiento sindical un carácter antiinstitucional y, consiguientemente, ilegítimo.

No obstante esta faceta de los partidos, los movimientos también delegan representación en el sistema y buscan legitimidad, lo que les ha permitido dos situaciones favorables: problematizar la aceptación social de la movilización y enfrentar al Estado en el plano de la legitimi-

dad. También han obligado al sistema partidario a tener como referente a la sociedad civil.

5. ¿Uno o varios universales?

¿Quién y qué define el interés global de una sociedad y, consiguientemente, la oposición entre la universalidad y el particularismo? La tradicional respuesta estuvo asociada a la hegemonía de la industrialización y al enfrentamiento de sus factores fundamentales. En sociedades de débil desarrollo, la proposición básica fue forzar un proceso homogeneizador económico con la industrialización y socialmente reducir o eliminar la fragmentación de la sociedad, reconstruyendo la unidad en la colectividad obrera.

Las posiciones reconstructoras de la unidad —en tanto portadoras supuestas de los intereses universales de la sociedad— devienen en cooptación y eliminación de las identidades. Frente a ellas, la práctica de los movimientos sociales crea bases de órdenes abiertos, desde los cuales se puedan diseñar y construir estilos opcionales de organización social.

En el Ecuador, entre el sistema partidario y los movimientos sociales existe una tensión por el acceso a la política. En los diversos momentos de la coyuntura de instalación democrática se plantearon varias modalidades: articulación orgánica a través de una relación política, competencia por la representación, en la que el movimiento recupera para sí parte de las formas delegadas, y deslegitimación del sistema representativo a través de la explosión social. En suma, el destino de esta articulación parece ser la coexistencia permanente. Uno y otro se basan en identidades que no pueden encontrar (y no cabe que encuentren) homogeneidad superestructural.

Esta tensión tiene fundamentos objetivos. Los movimientos sociales despliegan atributos no siempre concordantes con el sentido de la resolución de la contradicción principal. Pueden empujar, incluso, por equívocas salidas de la coyuntura. No obstante, esto muestra que la idea de "hegemonía como paso previo al socialismo" también supone el desarrollo y explicitación de toda la conflictividad subyacente; y que la sociedad opcional debe basarse en sistemas de procesamiento de las contradicciones siempre abiertos.

Los movimientos sociales del Ecuador actual demandan como perspectiva su reconocimiento en el sistema: la construcción de su identidad social y política. De este modo, la demanda es su viabilidad como agrupamiento social y no su negación. En unos casos, se trata de su futuro de clase y en otros, del reconocimiento de su identidad. La idea de universalidad correspondiente no es la dilución de sus identidades, sino un sistema político capaz de acoger las diferencias. En el horizonte estratégico de esas demandas no se encuentra un sujeto social mayoritario, homogeneizador de la sociedad futura. De este modo, hizo crisis la idea de un socialismo uniformizador.

Dos casos ejemplifican esta situación. Por un lado, el movimiento femenino (ista) que, en una de sus vertientes, se sustrae de hacer proposiciones globales acerca de la sociedad y cuestiona la frontera entre lo público y lo privado. Plantea la constitución de un "nosotras" (a través de muchas formas organizativas) y la lectura de la sociedad desde un punto de vista de género. Así, su intelección del socialismo no es la reproducción de una opresión de género. Impulsa la aceptación de sus intereses como óptica global para entender las opresiones capitalistas.

Por otro lado, los movimientos étnico-culturales plantean el conflicto por la multinacionalidad del Estado en el largo plazo. Ante los requerimientos por la inserción en los conflictos nacionales inmediatos, manifiestan su desconfianza y responden con un discurso estratégico acerca de sus intereses. La idea del "poder del Estado" actual les es ajena, en el sentido de que no constituye garantía para la realización de su identidad. No obstante, garantizan su autonomía en el acceso a la toma y gestión de las decisiones.

La articulación necesaria entre los escenarios de la lucha social, en que los movimientos se preocupan por la defensa de la opresión dominante y el reconocimiento de su capacidad de autodeterminación y los partidos, como portadores de imágenes de futuro y de la voluntad de mayorías, definen una "dialéctica perversa".[35] Esta situación obliga al diseño y proposición de un sistema político de respeto a las autonomías, en el que coexisten varios colectivos articulados y no un uniformizador de la sociedad. Para (re) pensar en el desarrollo de las facetas progresistas de las democracias actuales (levantar las facetas no desgastadas por una práctica formal y, en no pocos casos, opresiva), es preciso articular en un solo sistema político los movimientos sociales y los partidos como acceso a la política.

Los partidos deben recoger lo nuevo de la sociedad civil sin una codificación que negocie las demandas en aras de una "universidad", y los movimientos deben concertar su demanda en el interior de un sistema orgánico de procesamiento de conflictos. No se trata de rebajar la conflictividad, sino de procesarla hacia futuro, rompiendo la sectorización impuesta por la forma capitalista de funcionamiento social.

La tensión entre movimientos y partidos es la garantía de un funcionamiento democrático de la sociedad. El Estado no puede ser sólo la preocupación centralizadora del poder: pueden coexistir diferencias para su acercamiento, conceptualización y cuestionamiento. La universalidad y el particularismo no son parejas imputables a la falta de conciencia de movimiento social y a la debilidad de la vanguardia. Son invisibles redes estatales las que provocan este orden de escenarios, que no pueden

ser superados voluntariamente, sino tratados desde el lugar en que está procesándose lo nuevo.

Notas

[1] Larrea, Carlos, *Empresas transnacionales y exportación bananera en el Ecuador (1948-1972): un ensayo interpretativo,* FLACSO, 1980.

[2] Larrea, Carlos, *La estructura social ecuatoriana entre 1950 y 1979,* Nueva Historia Ecuatoriana, 1985. (Próxima publicación)

[3] Chiriboga, Manuel, "El sistema alimentario ecuatoriano: análisis y alternativas", CEPAL-FAO, 1985; "Crisis y movimiento campesino e indígena", UNU/CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

[4] Chiriboga, Manuel, "Campesinado andino y estrategias de empleo: el caso de Saicedo", en *Estrategias de Supervivencia en la comunidad Andina,* CAAP, 1984.

[5] Pérez, Juan Pablo, *Clase obrera y democracia en el Ecuador,* FLACSO, 1984. (Próxima publicación)

[6] León, Jorge y Pérez, Juan Pablo, *Crisis y movimiento sindical en el Ecuador: las huelgas nacionales del Frente Unitario de Trabajadores (1981-1983),* UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

[7] Ibíd.

[8] Ibíd.

[9] Ibíd.

[10] Unda, Mario, *La organización barrial entre la democracia y la crisis,* UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

[11] Ibíd.

[12] Ibíd.

[13] Prieto, Mercedes, *Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador,* UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

[14] Ibíd.

[15] Ibíd.

[16] Pachano, Simón, *Movimientos sociales regionales en el Ecuador,* UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

[17] Ibíd.

[18] Ibíd.

[19] Ibíd.

[20] Ibíd.

[21] Prieto, Mercedes, "Haciendas estatales: un caso de ofensiva campesina", en *Ecuador: cambios en el agro serrano,* FLACSO-CEPLAES, 1980.

[22] Guerrero, Andrés, *Haciendas, capital y lucha de clases andina,* El Conejo, 1983.

[23] Velasco, Fernando, *Reforma agraria y movimiento campesino indígena de la sierra,* El Conejo, 1979.

[24] Chiriboga, Manuel, obras citadas.

[25] Ibíd.

[26] Ibíd.

[27] Carrión, Fernando, *Crisis urbana y organización territorial en Quito-Ecuador,* CIUDAD, 1985. (Inédito)

[28] Pérez, Juan Pablo, *Entre la fábrica y la ciudad,* FLACSO-ILDIS, 1985. (Próxima publicación)

[29] García, Jorge, y otros, *Las organizaciones de moradores en los barrios populares de Quito,* CIUDAD, 1984.

[30] Pérez, Juan Pablo, ob. cit., 1985.

[31] Chiriboga, Manuel, ob. cit., 1984.

[32] Pérez, Juan Pablo, ob. cit., 1985.

[33] Quintero, Rafael, *El Estado terrateniente de los Andes,* FLACSO, 1984.

[34] Laclau, Ernesto, *Ciclo de conferencias Universidad de York,* 1984.

[35] Cardoso, Fernando, "La democracia en las sociedades contemporáneas", en *Crítica & Utopía* núm. 6, CLACSO, Buenos Aires, 1983, s/f.

Los movimientos sociales en la crisis: el caso peruano *

Eduardo Ballon E. **

A manera de introducción

Presentar el tema de los movimientos sociales en el Perú resulta una exigencia. Una sociedad desarticulada y desestructurada, marcada a lo largo de toda su historia por la diversidad y la multiplicidad social, que tiene que hacer frente a la mayor crisis de los últimos ciento cincuenta años, constituye un óptimo telón de fondo para el surgimiento y desarrollo de estos movimientos.

Más aun cuando la crisis que abarca todos los órdenes de nuestro tejido social desborda los límites de las categorías con las que tradicionalmente científicos sociales y políticos hemos tratado de entender dicha sociedad. Los viejos esquemas clasistas, los comportamientos predecibles desde la teoría, las determinaciones estructurales que encontrábamos en la sociedad peruana, no bastan para explicar los distintos procesos que hoy día vive nuestro país.

Prácticamente agotados los esquemas anteriores, quienes queremos entender la dinámica reciente del Perú tenemos que comenzar por subrayar la importancia elemental de la diversidad social de nuestra realidad, diversidad en la que de manera muy compleja y con ritmos muy variables se generan simultáneamente la ambigüedad y el precario orden que caracterizan al Perú de hoy día.

La consecuencia inmediata de esta constatación es que no es posible pretender explicar la dinámica social de nuestra patria desde una sola racionalidad. Las paradojas se han sucedido con mucha rapidez en nuestro historia reciente. En términos de régimen político, por ejemplo, podemos oponer fácilmente una dictadura militar que generó en sus primeros años de gobierno infinidad de espacios democráticos, a un régimen democrático en el cual la democracia política no tiene un mínimo sustento social.

Hay muchas racionalidades en movimiento y ninguna es hegemónica; cada una de ellas nos pone frente a identidades básicas, frente a largas y tortuosas tradiciones históricas, pero también frente a la enorme dificultad de encontrar identidades más generales, espacios de unidad y de definición clara de lo nacional.

En este heterogéneo contexto, donde el amplio movimiento social democrático que viene produciéndose desde la segunda mitad de la década del setenta no ha conseguido cuajar a nivel político en una propuesta viable de Estado y sociedad, ni siquiera en las organizaciones que pudieran hacer verosímiles dichas propuestas, se agudiza en los últimos años el desfase entre lo social y lo político.

Lo que está en discusión hoy es entonces el proceso mismo de constitución de los sujetos y la política. Los distintos trabajos que se reseñan en este documento, pretenden dar cuenta del proceso de algunos de los movimientos sociales más importantes en nuestro país.

El rasgo común más saliente en todos los análisis que comentamos es la constatación de que el carácter político de una práctica —cualquiera que fuere el movimiento social que la produce— no es su naturaleza inmanentista sino su capacidad de articular un significado social de importancia, es decir, un discurso político, entendido éste como el con-

* Este documento ha sido preparado para el proyecto "Movimientos sociales frente a la crisis", auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas, bajo la coordinación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

En él se sintetizan y discuten los aportes contenidos en cinco trabajos, elaborados dentro del proyecto en mención:

a. *La desmovilización del sindicalismo peruano,* de Jorge Parodi, Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
b. *Vecinos y pobladores en la crisis,* de Teresa Tovar, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).
c. *Notas y tesis sobre los movimientos regionales en el Perú,* de Narda Henríquez, Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA).
d. *La identidad confundida: el movimiento empresarial frente a la crisis reciente,* de Manuel Castillo, Lima, 1985 (trab. mimeografiado).
e. *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros,* de Carlos Iván Degregori, Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Todo este material fue largamente discutido en un seminario realizado en DESCO el 28 y 29 de enero de 1985. En este sentido, las líneas que siguen son el resultado claro de un esfuerzo colectivo compartido con todos los investigadores señalados.

Finalmente, hay que lamentar la ausencia de una reflexión sobre el movimiento campesino en el contexto de la crisis. Ausencia especialmente importante en un país como el Perú, donde la presencia y la importancia del campesinado son innegables. Mariano Valderrama, quien debería haber desarrollado este tema, no pudo hacerlo por diversas razones.

** Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Lima.

junto de actividades prácticas a través de las cuales el sujeto aparece como productor y como producto de su tiempo.

1. La naturaleza de la crisis

Sostener hoy que el Perú vive una crisis profunda es simplemente un lugar común. Máxime si consideramos que nuestro país ha vivido casi permanentemente en una situación de crisis, al extremo de que ésta es en la práctica un rasgo constitutivo de nuestro ser. Son muy pocos los momentos de nuestra historia, sería mejor decir los instantes, en que el país aparece frente a un curso estable, de consolidación tanto en lo político como en lo económico.

Sin embargo, los rasgos de la crisis actual son de tal magnitud que tenemos que aceptar que ésta es orgánica. Su manifestación más visible se da indudablemente en el terreno de la economía: con una deuda externa que excede los 14.000 millones de dólares, un producto nacional bruto que registró en 1983 la caída más drástica de su historia (-12 %), una actividad manufacturera que mostró ese mismo año una reducción del 17,2 % en comparación con el año anterior; índices de inflación y devaluación que superan largamente los temidos tres dígitos y tasas de desempleo y subempleo que superan el 65 % de la PEA, la crisis en nuestro país tiene una materialidad impresionante.

Pero la crisis social no es menos visible; lo poco que se había conseguido hasta ahora, que no era mucho ciertamente, amenaza con derrumbarse. Las necesidades de la población y la incapacidad de la sociedad para resolverlas o por lo menos para regularlas explotan en forma múltiple y fragmentada.

Más grave aun: a las formas tradicionales de reacción y defensa de los marginados, se agrega en nuestra sociedad la violencia extendida. Ya no son sólo los paros nacionales, expresión extrema en los últimos quince años del malestar y de la protesta de las masas del país. Sendero Luminoso aparece en este contexto como un movimiento de desesperación, de organización de la desesperación por el terror, si se quiere. Esto es por cierto, una primera lectura de este fenómeno, que será mejor precisada más adelante, a partir del excelente trabajo de Carlos Iván Degregori.

La violencia cotidiana y su figura extrema, la delincuencia[1] constituyen también una manifestación de este fenómeno. Todo ello como parte de un divorcio grande entre lo social y lo político, que por lo demás nunca constituyeron un matrimonio muy avenido en nuestra historia republicana.

El vacío histórico entre sociedad y Estado, profundizado en los últimos años por el ambiente represivo que se vive en el país y por la

"guerra sucia" que se sufre en algunas regiones, no sólo ha generado un resquebrajamiento profundo en las distintas instituciones del Estado —llámense policía, poder judicial, alta burocracia, etcétera— sino que ha ahondado un vacío histórico entre los partidos y nuestra débil sociedad civil.

Los tejidos que en estos últimos quince años se han construido y reconstruido, los distintos movimientos sociales que allí han surgido miran con temor, o por lo menos con desconfianza, las distintas formas del poder político. Sin embargo, su destino en buena medida está sujeto a lo que allí se decide.

Y el poder político no puede, en este contexto, mantenerse al margen de la crisis. La pérdida de la legitimidad y de la credibilidad, a través de los últimos cinco años, de un gobierno que fuera electo con más del 40 por ciento de los votos, no sólo lo pone en cuestión a éste sino que, más grave aun, debilita notoriamente nuestra precaria democracia.

El gobierno acciopepecista de la alianza entre el partido Acción Popular y el Partido Popular Cristiano enfrenta una crisis de legitimidad paralela a sus agudos problemas para gobernar el país, en tanto que la crisis en las alturas adquiere caracteres y matices propios que se manifiestan de manera nítida en la crisis moral de nuestro actual gobierno, manifestada en su nivel elemental: la pérdida del valor de la vida. Los asesinatos colectivos, las torturas impunes, la violación de la dignidad de los peruanos, si bien se sufren directamente en las zonas de emergencia, especialmente en Ayacucho, han empezado a contaminar todas nuestras redes sociales.

En palabras de Juan Enrique Vega, se trata de "una suerte de capitalismo salvaje en que, sin acumulación originaria, personas y grupos minoritarios no trepidan en nada para aumentar su poder...".[2] El narcotráfico, como una de las manifestaciones más visibles de este fenómeno, sin alcanzar los dramáticos ribetes que tiene en países como Bolivia, cubre todo el espectro social, al extremo de que uno de los más conocidos traficantes del país —actualmente detenido— llegó a plantear públicamente la posibilidad de pagar toda nuestra deuda externa si lo dejaban "trabajar" libremente durantes dos años.

La corrupción que acarrea toda esta realidad crece a un ritmo geométrico y se ha convertido en un mecanismo aceptado plenamente por el cuerpo social. Los escándalos más notorios, aquéllos que llegan a las primeras planas de los periódicos y que no han tenido ninguna sanción del actual gobierno[3] son la expresión máxima de una práctica que tiñe toda la vida cotidiana de los peruanos.

Obviamente las organizaciones populares no son inmunes a esta situación. Es más, en alguna medida son parte de ella y viven a su manera las tensiones institucionales, culturales, ideológicas y económicas que la

crisis agudiza. Esta se vive de muchas maneras y genera, a partir de las diversas experiencias previas, respuestas diferenciadas y fragmentarias, incluso de signo ideológico encontrado.

Y esta manera de vivir la crisis, la de las organizaciones y el mundo popular, está estrechamente ligada a los límites particulares que muestran en este contexto sus utopías, a las carencias evidentes que tienen y a su incapacidad para responder a las infinitas demandas de participación y representación que vienen desde abajo.

En esta perspectiva, la crisis de las organizaciones tradicionales de los sectores populares, aparece claramente vinculada a su incapacidad para incorporar las nuevas prácticas sociales de éstos —por lo menos para entenderlas en todo su potencial movilizador— pero también, para responder a sus necesidades y demandas actuales.

2. Los momentos de la crisis

El año 1968 constituye uno de los momentos de ruptura básica en la historia reciente de nuestro país. Un régimen militar que desarrolla una de las experiencias reformistas más complejas que haya conocido el continente canceló definitivamente el anterior orden oligárquico. A lo largo de cinco años el escenario político y los actores que en él se desenvolvían se modificaron drásticamente.

A ritmo acelerado, y desde la estructura del Estado, se intentó llevar adelante la construcción de un proyecto nacional capaz de aglutinar y definir una identidad en nuestra sociedad. Como parte de ese esfuerzo, y en su búsqueda por lograr una base social propia, el velasquismo a través de sus distintas reformas, le dio una impulso gigantesco a la organización tradicional de los sectores populares: bástenos decir, a manera de ejemplo, que en ese lapso, el Estado reconoció legalmente más organizaciones sindicales que las reconocidas en toda la historia anterior del país.[4]

La creación de espacios nuevos, consecuencia tanto de las políticas del gobierno cuanto de los términos de la relación que los distintos sectores —beneficiarios y afectados— establecían con el régimen, se multiplicó grandemente. Así, el tercer reformismo que vivió nuestro país en el presente siglo[5] propició situaciones inéditas en nuestra historia y trató de presentarse como una alternativa superior a las escasas democracias liberales que vivió el Perú.

En esos cinco años, y en una perspectiva histórica, se realizó una mayor y más profunda redistribución del ingreso que en gobiernos anteriores a la vez que, en oposición a los patrones culturales e ideológicos oligárquicos, se produjo cierta revaloración de "lo popular", todo dentro de los parámetros que se establecían desde el Estado.

En otras palabras, se vivió en ese tiempo un proceso relativamente democratizante en lo económico y en lo social, que sin embargo marchó a contracorriente del autoritarismo y el "controlismo" que existió en lo político. Este fue el límite fundamental del reformismo militar, que, por razones que no es del caso analizar acá, inicia un viraje pronunciado en 1975.

Creemos que ese período 1958-74 constituye el primer momento para entender la actual crisis de nuestro país. El golpe del 29 de agosto de 1975 no sólo liquidó el tercer reformismo, sino que también canceló la fase de lucha antioligárquica en el país, abriéndose un nuevo escenario social en el que viejos y nuevos actores debían enfrentar los graves problemas de nuestro desarrollo en términos históricamente redefinidos.

Así, se inicia el segundo momento de esta larga crisis, que se desarrolla entre 1975 y 1980. Período éste marcado de manera especial por la presencia masiva del pueblo organizado en la lucha contra un gobierno militar que se alejaba de sus "encantos reformistas" y hacía frente a la crisis económica con una política de claro corte neoliberal.

Los paros nacionales que se suceden en 1977 y 1978 tienen la virtud de presentar, por fugaces momentos, una imagen cristalizada de los bloques sociales en pugna en el país. El deterioro del régimen —y su respuesta represiva— se agudiza rápidamente; el movimiento obrero se ve descabezado con el despido de más de 5000 dirigentes sindicales como consecuencia del paro nacional de 1977 y, en la búsqueda de una salida política, se convoca a una Asamblea Constituyente.

Las organizaciones tradicionales de los sectores populares —sindicatos, federaciones, gremios campesinos, etcétera— viven en este período un apogeo aparente. Su dinámica de movilización, su vinculación cotidiana con lo político no tienen, sin embargo, la fuerza suficiente para romper las crecientes dificultades que afrontan en cuanto a participación y representación. Su esquema de comportamiento, esencialmente defensivo y de respuesta, no es capaz de incorporar las nuevas prácticas sociales que van surgiendo.

En todo este proceso los sectores populares, que son quienes enfrentan directamente al gobierno militar, no consiguen tampoco una expresión política que los represente adecuada y cabalmente. Los distintos partidos de izquierda a ellos vinculados no logran superar el divorcio entre lo social y lo político que atraviesa a la mayoría de las instituciones de nuestra sociedad, e incluso no pueden plantear una salida política para el país, a pesar del creciente aislamiento del gobierno militar.

Van a ser los gremios burgueses y los partidos tradicionales los que demanden el retorno a la democracia, los que presionen por convocatoria a elecciones. Salidos de un largo período de hibernación, 1968-74, reaparecieron en la coyuntura de 1977-78 como si nada o muy poco hubiera ocurrido en el país.

Las elecciones de mayo de 1980 van a cerrar este segundo momento de la crisis: la esperanza democrática de las mayorías nacionales, la retirada ordenada pero en clara derrota de los militares y el desconcierto y la sorpresa de los distintos movimientos sociales populares marcaron el tránsito de la democracia a la dictadura en el país.

Finalmente, el tercer momento de la crisis es el que se da desde 1980 hasta la fecha. En medio de una situación económica explosiva, que constituye la parte más visible de la crisis, la punta del iceberg, el país vive un profundo desfase entre el intento de constituir lentamente una democracia social que germina desde abajo, y una democracia política "en el aire" que "no se vincula directamente con la anterior, ni recoge sus experiencias sobre ellas absolutizando el mecanismo de las elecciones universales y la legitimidad que ellas otorgan, para imponer una política económica antinacional que exacerba las contradicciones sociales".[6]

Es en este desfase que amenaza con desarticular rápidamente las organizaciones sociales, especialmente las populares, y acaba por desgastar la imagen y el contenido de las libertades políticas, que la acción de Sendero Luminoso adquiere la posibilidad de potenciarse.

En este tercer momento de la crisis —y ello es uno de los rasgos progesivos de ésta— empiezan a surgir nuevas identidades, "colectivos heterogéneos"[7] que explicitan largos y complejos fenómenos de mestizaje cultural y étnico, por ejemplo. Nuevas identidades que atraviesan a los movimientos sociales clásicos y que los empujan a su redefinición.

La búsqueda de consensos y de espacios que permitan definir identidades comunes parece multiplicarse en el país. En este sentido, aunque parezca muy burdo, conviene recordar que en 1980 el neoliberal Belaúnde Terry fue elegido, ofreciendo ser un presidente para todos los peruanos. Tres años más tarde el izquierdista Alfonso Barrantes ganó la alcaldía de nuestra capital comprometiéndose a lograr una Lima para todos. Finalmente —y tras un largo proceso de modificación de la imagen y de rasgos básicos de la identidad partidaria del APRA-Alan García llega a la presidencia anunciando que su compromiso es con todos los peruanos...

Son tres procesos distintos, de signos ideológicos encontrados, pero los tres tienen en común el intento de definir espacios y compromisos de unidad que encuentran terreno fértil en los sentimientos, actitudes y soledades que esta larga crisis produce en todos los sectores sociales del país. Tema éste que retomaremos necesariamente al final del presente trabajo.

3. Los movimientos sociales frente a la crisis

Uno de los mejores caminos para entender la dimensión y el proceso mismo de la crisis consiste en analizar los rasgos y los efectos que la crisis genera en los movimientos. Por esa vía, adicionalmente, se deja de lado uno de los esquemas clásicos de las ciencias sociales en América Latina, esquema que se preocupa más por entender los modelos de la realidad que la realidad misma.

En estos últimos quince años los distintos movimientos sociales que han actuado en nuestro país han propiciado —como parte del proceso conjunto de constitución de los sujetos y definición de un orden— largos debates entre científicos sociales y políticos. Al fin de cuentas, nuestra realidad social y sus escenarios han sido tan cambiantes que, por ejemplo, los mismos movimientos sociales han tenido que vincularse con un Estado que propugnaba ciertas formas de solidaridad (instrumentadas y controladas las más de las veces) para, cinco años después, enfrentarse a un Estado desorganizador, enfrentamiento éste que en muchos casos los llevó a recomponer formas tradicionales de solidaridad.

A efectos del análisis, tal como se dijera en la presentación, se han escogido cinco movimientos sociales distintos: obreros, pobladores, empresarios, frentes regionales y senderistas. En la mayoría de los casos se trata de viejos actores —que en el contexto de la crisis empiezan a producir nuevos discursos— presentes en el escenario nacional desde comienzos de siglo.

Los senderistas son quizá los únicos actores nuevos, aunque su discurso, tal como veremos, está estrechamente ligado a distintos aspectos de nuestra vieja historia. En todo caso, todos estos movimientos han sufrido profundas transformaciones como parte de su vida cotidiana dentro de una crisis de la que son productores en alguna medida.

3.1 El movimiento obrero en la crisis

"Si no luchamos estamos jodidos,
si luchamos también estamos jodidos..."
Testimonio de un dirigente obrero.

Las palabras de un dirigente obrero metalúrgico que encabezan esta sección, resumen drásticamente la manera cómo amplios sectores sindicales encaran su actual situación, su ubicación ante la crisis y sus dificultades de respuesta. ¿Cuál ha sido el largo y conflictivo proceso vivido por el sindicalismo peruano estos años que hace que lo que era un movimiento en pleno desarrollo a inicios de la década del setenta se nos aparezca hoy día con una autoimagen tan gris, tan deteriorada?

Con una pérdida de más del 80 por ciento en los salarios reales y de cerca del 40 por ciento en los sueldos, con miles de trabajadores expulsados de la industria por la crisis, en medio de una situación de permanente inestabilidad de los puestos de trabajo, sorprende que no existan niveles significativos de articulación sindical en defensa del trabajo y el ingreso.

Sorpresa que tiene que ser mayor si asumimos que este fenómeno se da en una situación de pérdida de capacidad adquisitiva y en un contexto, por lo menos formal, de libertades políticas. En el lenguaje catastrofista de los años 70, este fenómeno de crisis económica debería producir un mayor auge de la lucha sindical. Ello no es así. ¿Por qué?

Jorge Parodi,[8] en un agudo análisis del movimiento obrero, más específicamente del movimiento sindical, encuentra en su dinámica interna hilos importantes para entender qué es lo que está ocurriendo.

El movimiento sindical que se desarrolló entre 1968 y 1977 presentaba algunos elementos novedosos frente a su historia anterior. Primeramente contaba con la cobija del gobierno militar, que si bien creó instancias extrañas a la tradición laboral del país, lejos de perseguir a la organización sindical la apoyó de manera casi abierta. En segundo lugar como resultado del proceso anterior, el APRA perdió peso sustancial en el movimiento sindical, mientras que el Partido Comunista (con el apoyo tácito del gobierno), y la nueva izquierda se afirmaron en las direcciones sindicales más importantes, impulsando nuevas organizaciones sindicales. En tercer lugar, la ley de Estabilidad Laboral[9] promulgada por los militares aceleró el proceso de sindicalización que se vivía en aquel entonces.

Las relaciones entre la izquierda y los sindicatos, fundamentales para entender al movimiento hoy, fueron muy complejas y estuvieron marcadas desde un inicio por una "doble instrumentación: los partidos, por las concepciones políticas que predominaban, al idealizar el rol del proletario como integrante de una clase 'vanguardia' —donde los obreros de carne y hueso siempre eran 'masa atrasada'— pretendían organizar a la clase a fin de que el partido cumpliera su destino histórico, lo que en el corto plazo muchas veces se concretaba en dirigir contra el gobierno el radicalismo de los sindicatos que controlaban.

"Por parte de los obreros, lo que interesaba de esa izquierda era que aportaba una visión y una propuesta acerca del manejo de las relaciones laborales, que resultó eficaz en el contexto del gobierno militar y que consistió en percibir que las mejoras sindicales dependían menos de la actitud negociadora que de la presión a través de movilizaciones y huelgas".[10]

Así, por la vía de la posición radical —"clasismo" se la llamó en esa época— se constituyó un matrimonio relativamente feliz entre unos, que ganaron presencia y crecieron políticamente, y otros, que se afirmaron organizativamente y consiguieron mejores salarios y condiciones de trabajo.

En toda esta primera etapa, es claro que el gran perdedor es el gobierno militar, que a pesar de haber propiciado la estabilidad laboral, la participación en la gestión, la propiedad y las utilidades de las empresas, no consiguió un apoyo definitivo al régimen del movimiento sindical que, en esta lógica, se preocupó por preservar su capacidad de presión cuando los mecanismos de negociación fueron insuficientes.

En esta dinámica, secreto de su fuerza y su éxito en esos años, vamos a encontrar la explicación básica de la debilidad que mostró más adelante el movimiento sindical, a medida que la dimensión económica de la crisis empezó a manifestarse y los comportamientos obreros tuvieron que cambiar.

Ya desde 1975, y como parte de la nueva política económica que se desarrolla en el país, la actitud de la dictadura se modificó. El bloqueo de los canales de negociación anteriores hizo que los sindicatos se movilizaran contra el gobierno buscando, aunque sin claridad, un cambio de régimen político para negociar sus demandas.

Son los años de los paros nacionales que contribuyeron de manera decisiva a dar fin a la dictadura. Si bien, y por un instante, pareció articularse el bloque nacional popular con la clase obrera a la cabeza, lo que le daba a ésta una legitimidad básica en el país, el movimiento sindical sufría derrotas importantes: el despido de 5000 dirigentes sindicales en 1977 fue la más significativa.

Así, luego de siete años de consolidación organizativa y de varios logros, la nueva situación "introdujo el miedo y disminuyó la confianza de los trabajadores en las posibilidades de acción a través de su organización sindical distanciando a los trabajadores de sus direcciones clasistas...".[11]

El supuesto curso ascendente y lineal del movimiento sindical se rompe definitivamente y el ingreso del país a un régimen democrático, al que el movimiento sindical había contribuido en forma decisiva con sus luchas, aumenta la confusión y explicita los límites que se venían insinuando.

A partir de 1980, y en abierta contradicción con su política económica neoliberal, el belaundismo trató infructuosamente de lograr niveles mínimos de concertación laboral. En esta nueva situación, los sindicatos recurrieron una vez más a la presión directa a la que estaban acostumbrados.

A través de luchas aisladas, los sindicatos con mayor capacidad de presión reivindicativa (bancarios y mineros) consiguieron algunos logros, mientras que la amplia mayoría del movimiento sindical tenía que aceptar los términos de la concertación. Así, queda claro que el "clasismo"

dentro del movimiento sindical es más un principio de radicalismo sectorial que de solidaridad de clase.

En este contexto la política económica del gobierno y los términos de concertación fueron desnaturalizando la negociación colectiva ante la impotencia del movimiento sindical que fue incapaz de defender sus espacios de legalidad por cuatro razones básicas:

a) La lógica de los sectores más poderosos del movimiento sindical, que los llevó a luchar aisladamente por sus intereses inmediatos antes que a asumir iniciativas que beneficien al conjunto del movimiento sindical.

b) La visión predominante en las dirigencias sindicales acerca de la legalidad como un territorio ocupado por la burguesía. Aprisionados en una visión surgida de su experiencia histórica en los primeros años del reformismo, los dirigentes confían casi exclusivamente en su capacidad de movilización, despreciando canales legales de negociación.

c) La noción de participación política más arraigada en el movimiento sindical tiene su modelo en la lucha contra la segunda fase del gobierno militar, de donde su tradición inmediata reduce la participación política a la lucha contra el gobierno.

d) Los partidos políticos contribuyen también a la falta de integración del movimiento sindical, al utilizarlo muchas veces como masa de maniobra para la negociación con el gobierno, realidad ésta percibida por muchos obreros que "descubren" así la ineficacia de varias de sus luchas a la par que ven cómo muchas organizaciones de izquierda prácticamente abandonan al movimiento sindical para instalarse en el Parlamento.

En este contexto, la profundización de la crisis económica y sus efectos laborales debilita aun más al movimiento sindical y a sus organizaciones. Contra lo que se suponía en los años '70, la crisis, lejos de radicalizar al movimiento sindical, tiende a desmoralizarlo, diluyendo la identificación con su clase y debilitando los mecanismos de integración a su condición de clase obrera.

El obrero de carne y hueso siente cómo se termina la relativa seguridad en la condición asalariada que había logrado en la década del setenta. El empleo industrial dejó de ser una vía de incorporación a la economía urbana para los migrantes, y los obreros, que a través del sindicato creyeron reconocerse como iguales en los años '70, hoy día enfrentan individualmente los procesos de reducción de personal y la crisis económica en general.

Esta tiene entonces un gran efecto disolvente sobre la clase en tanto que el movimiento no ha podido responder a la preocupación de los obreros que para sobrevivir han desarrollado estrategias individuales,

actividades complementarias que, lógicamente, disminuyen su participación en la organización sindical.

La huelga misma en una situación de baja productividad carece de eficacia, añadiéndose así a la reeditada ineficacia de los canales formales de negociación. El movimiento sindical, en resumen, se encuentra atrapado por la crisis, con su ya precaria identidad bastante desdibujada. Así lo han entendido algunos dirigentes, que intentan, infructuosamente hasta hoy, desarrollar un planteamiento conjunto frente a la crisis: una propuesta de política industrial que pueda convertirse en eje aglutinador de sus necesidades y que permita reagrupar fuerzas.

3.2. Pobladores y vecinos en la crisis

El movimiento de pobladores es relativamente nuevo en nuestro país y su surgimiento está ligado a los procesos de crecimiento y diversificación del proletariado, a la migración andina a las ciudades, así como a la afirmación de los sectores medios. En él, desde un inicio, confluyeron distintos protagonistas: obreros, artesanos, vendedores ambulantes, empleados y desocupados; se articulaba así una población absolutamente heterogénea en torno de un mismo espacio territorial.

El movimiento de pobladores estaba inicialmente vinculado en condición de clientelaje al APRA y a los partidos de derecha, pero su dinámica empieza a cambiar drásticamente desde comienzos de la década del setenta. El velasquismo intentó, por aquel entonces, lograr un control directo sobre las organizaciones vecinales, como parte de su búsqueda de una base social propia.

En esa perspectiva, y desde el Estado, se crea la organización vecinal que sustituyó a las tradicionales asociaciones de pobladores y que entre 1968 y 1971 activó a un buen número de personas a través de los comités por cuadras y manzanas. Los pobladores, por su parte, aprovecharon el nuevo esquema organizativo, pero reafirmaban su autonomía frente al Estado. Es en este contexto de lucha en defensa de su independencia y de expectativa y espacios creados por las reformas que el movimiento se aleja de las ideologías de derecha.

Paralelamente empiezan a surgir pobladores "clasistas" que trasladan la experiencia y la visión obrera de la relación con el Estado de la fábrica al barrio. Este hecho, así como la presencia de obreros en los distintos barrios explica que entre 1973 y 1978 de manera especial el movimiento de pobladores sume a sus reivindicaciones de consumo urbano demandas relativas al costo de vida, trazándose vínculos claros de lucha con el movimiento obrero y sindical.[12]

En ese período el movimiento barrial bajo la influencia obrera, sin perder sus características y peculiaridades, va tomando formas nuevas de lucha: "comités barriales", "ollas comunes", "frentes de defensa", etcé-

tera. El impulso colectivo que anima a los movimientos urbano-sindicales de esos años despierta un sentido de responsabilidad social de los pobladores y contribuye a que éstos adquieran una perspectiva de lucha más global.

En este marco, no es sorprendente que entre 1977 y 1979 se diera un significativo proceso de radicalización y concientización de importantes capas de población barrial, ligado a la dinámica general del país: paros nacionales, Asamblea Constituyente, etcétera.

Sin embargo, en tanto que los esquemas organizativos que primaban eran excesivamente obreros, a pesar de los importantes avances logrados en términos de organización y centralización del movimiento hasta 1980, la profundización de la crisis económica y sus efectos disolventes desnuda en los últimos cinco años los límites de este proceso, a la par que descubre una riquísima y compleja red de acciones y movimientos en el interior del mismo movimiento de pobladores.

Los últimos años son especialmente ilustrativos en ese sentido. Un movimiento que había nacido fundamentalmente como *lucha* —el suelo y el equipamiento urbano—, que tiene su primera *manifestación colectiva* como movimiento social en el contexto de los paros nacionales de 1977 y 1978, marcado siempre por su carácter *reactivo*, de defensa, enfrenta una coyuntura especialmente compleja en la que sus esquemas organizativos no se muestran capaces de representar todas las dimensiones de su realidad.[13]

Hoy las reivindicaciones de los pobladores tienen que ver con diversos aspectos: nivel de vida, ordenamiento capitalista de la ciudad, democracia, cultura, etcétera. Todas estas reivindicaciones se encuentran subsumidas en la identidad "vecino", que en la práctica se refiere al poblador como habitante de las zonas más pobres de la ciudad.

Esta identidad unifica y caracteriza a un colectivo cada día más heterogéneo y complejo; fue alcanzada a lo largo de estos años en la lucha por el ejercicio de ciertos derechos públicos en un conjunto de espacios diferenciados: el de la organización territorial, el espacio municipal, el espacio regional y finalmente, el de la vida cotidiana.

En cada uno de estos espacios están presentes los pobladores. Sus ritmos y su importancia para el movimiento son distintos, y las organizaciones que se generan en estos espacios son también variadas. Así podemos diferenciar analíticamente lo siguiente:

a) La organización vecinal clásica se encuentra inmovilizada frente a la crisis. El agotamiento del "clasismo" que la impulsó en los años '70, la solución de muchas de las reivindicaciones de consumo urbano que la motorizaron —sobre todo en el caso de los barrios más antiguos— hacen que languidezca en el contexto de la crisis económica, máxime cuando los problemas que ésta genera son vividos individualmente por los pobladores.

b) El municipio, que como resultado de la lucha política en el país se ha convertido en una herramienta al alcance de los pobladores, es un segundo espacio en el que, a través de la mediación de los partidos, también se desenvuelve el movimiento. Siendo una instancia del aparato estatal, los municipios vienen siendo redefinidos desde la sociedad civil —de manera especial en los barrios populares— como un nuevo espacio de organización que pretende convertirse en órgano real de gobierno local.

c) Finalmente, en los últimos años se han multiplicado las organizaciones funcionales y sectoriales dentro de los barrios, agrupando a la población por grupos humanos, por actividades económicas, por estrategias de supervivencia, por actividades culturales, etcétera.[14]

Por estar directamente vinculadas a la vida cotidiana de la población, son ellas las que mejor responden a la crisis, concentrando la capacidad más significativa de convocatoria y movilización dentro del movimiento de pobladores.

La diversidad y heterogeneidad que se ve en el movimiento crece en dimensión y pluralidad en el contexto de la crisis. Al tiempo que la situación de la economía popular empeora, aumenta el número de formas de articulación, sin que la antigua organización vecinal pueda absorberlas.

En este contexto, el movimiento barrial registra varias dimensiones, distintas determinaciones estructurales, tradición histórica reciente, presencia en una coyuntura de crisis y formas de organización propias. Todos estos rasgos no le dan ciertamente una unidad estructural pero sí lo presentan como una expresión colectiva de un sector de masas en la escena política.

El movimiento barrial produce el nuevo rostro urbano del Perú y es, a la vez, producto de él. La ciudad es el gran espacio donde se está operando un largo y complejo fenómeno de mestizaje cultural y étnico que sienta las bases de una cultura "urbano-popular", donde conviven las costumbres provincianas con las modernas, donde los migrantes alcanzan paulatinamente la legitimidad de "ciudadanos" y se van identificando como "vecinos".

Quizá la chicha (combinación del huayno andino con la cumbia) represente culturalmente de manera clara el surgimiento de esta nueva identidad, sintetizando los sentimientos y el origen provinciano de la mayoría de los pobladores con sus aspiraciones por acceder y formar parte de la ciudad, con todos los problemas y frustraciones que este proceso acarrea.[15]

3. 3. El movimiento empresarial: la identidad confundida

Los empresarios en este contexto de crisis son un fenómeno particular. ¿Pueden acaso ser considerados un movimiento social, o son simplemente, una movilización ordenada, "decente"? Manuel Castillo, en un trabajo muy agudo,[16] busca resolver éstas y otras incógnitas a partir del análisis exhaustivo de los comportamientos y prácticas de este sector.

Tradicionalmente agrupados en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y agrupados también en la Asociación de Exportadores (ADEX), poco es lo que se sabe de la identidad y características de los empresarios peruanos. Y ello porque de alguna manera en el Perú ha habido un proceso de industrialización sin revolución industrial, es decir que dentro de las clases dominantes los grupos y fracciones se han abierto espacio por la transacción antes que por la transformación, por la cooptación y la integración mas no por el deslinde y el zanjamiento.[17]

La Sociedad Nacional de Industrias, el gremio básico de los industriales, dentro de esa lógica se mantuvo durante cerca de medio siglo subordinada, cobijada por los sectores agroexportadores. Sólo tendrá un rol protagónico importante tras la promulgación de la ley de industrias del gobierno militar, hegemonizando el espacio empresarial y legitimándose como voz directriz de la oposición al proceso de reformas que se dio entre 1968 y 1974.

El empresariado industrial aparecía en ese momento con un discurso liberal abstracto, con un antiestatismo principista y oponiéndose a la estabilidad de los trabajadores, discurso éste que era heredado de su anterior vida gremial y que disimulaba las contradicciones y pugnas que se producían en su interior, pero que era útil para su imagen y su necesidad de oposición radical al gobierno.

Con la caída de Velasco, 1975, y durante todo el gobierno de Morales Bermúdez —caracterizado por su retirada ordenada del Estado y de la sociedad— los industriales desarrollaron un doble juego: los grandes empresarios, desplazados por la dirección del gremio en el período anterior por medianos empresarios —lo que explica en parte la radicalidad que mostraban— recuperaron el control de la SNI y, desde allí, se fueron acercando al gobierno, despolitizaron la actividad gremial y abrazaron el espejismo friedmaniano. A pesar de este acercamiento, mantenían su discurso anterior y apostaban en el espacio electoral que se abría a la alianza entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano como la garantía de una fase de acumulación privada sin los controles estatales.

La crisis golpea a los industriales en su dimensión económica, y y se les presenta con una envoltura institucional: la democracia. La democracia los despolitizó, como al conjunto de los movimientos sociales, pero adicionalmente —lo que era más serio para ellos— los encontró

con un discurso muy débil y una práctica económica corporativa, de enfrentamiento gremial, que tuvo que readecuarse a la nueva situación (colocación de Ministros, por ejemplo), pero que ya claramente se retrasaba frente al movimiento político de la sociedad.[18]

Este desfase fue tan grave que fueron incapaces por ejemplo, de formular modelos de desarrollo, atender la situación del mercado interno o preocuparse por la protección arancelaria. Se limitaron a asegurar subsidios para la producción industrial, y se vieron así paradójicamente sometidos a una relación con el gobierno donde era éste —supuestamente su gobierno— el que les imponía las reglas de juego.

A lo largo de todas esta relación, el gremio se mantuvo en su miope racionalidad empresarial, dejando toda racionalidad sobre la sociedad a las fuerzas políticas. Su situación, en todo el período, aparece opacada —intermediada por los intereses político-partidarios en su llegada al Estado—, dificultando la presentación directa de sus demandas al gobierno.

La actual política económica, que beneficia directamente al capital extranjero, profundiza las diferencias en el interior del movimiento y afecta de manera sustancial a los medianos empresarios, produciendo una confusión de identidades cada vez mayor en el movimiento.

Llevados por su antiestatismo y por su oposición radical al velasquismo —a pesar de que se trataba de un gobierno industrialista en su intento de favorecer al mercado interno y en su política económica (créditos baratos, tasa de cambio fija, intereses menores que la inflación, protección arancelaria, etcétera)— los industriales no vieron cómo la ideología se convirtió en un freno fundamental del movimiento.

Y si bien la oposición cerrada a los trabajadores tiene una larga historia en la mentalidad empresarial, ni la idea de libre empresa ni la defensa irrestricta de la propiedad privada bastan para cohesionar a los empresarios y, sobre todo, para articular en sus gremios a grandes, medianos y pequeños industriales. De allí que resulte fundamental explicar la estructura de participación tanto de la SNI como de ADEX.

A pesar de las diferencias evidentes entre ambos gremios, tienen características en común. Los dos están controlados por dirigencias de grandes capitales, con una estructura de reglas casi oligopólicas por las cuales son los grandes industriales los que realizan un efectivo control sobre los pequeños industriales y las bases regionales amparándose en su mayor poder.

En este contexto, cabe preguntarse si con ideas tan simples el gremio empresarial mantiene la identidad del movimiento que representa. A juzgar por su comportamiento en estos últimos cinco años, y más allá de su restringida visión de la sociedad, creemos que sí, en tanto que, a través de este tiempo, han "manifestado con claridad su oposición que funciona como un centro aglutinador del descontento sobre el cual se articulan".[19]

Pendulando entre un liberalismo abstracto y un pragmatismo oportunista, los industriales como movimiento han logrado definir una autoimagen basada en un estereotipo elemental pero muy práctico: inversión, ganancias y Estado promotor que protege la inversión constituyen la trilogía de la racionalidad empresarial.

Finalmente conviene resaltar en este caso, porque es uno de los niveles de su identidad/oposición, el alcance de la conciencia mostrada por el movimiento en todo este proceso. Es obvio que a través de sus pronunciamientos y manifestaciones el empresariado industrial muestra conciencia de clase: un nivel corporativo de articulación y una visión de su relación como clase frente al Estado y frente a otras clases; una visión que les permite un sistema de alianzas y un manejo táctico.

En otras palabras, el movimiento empresarial guarda una relación más o menos coherente entre su mentalidad y sus intereses reales y tiene capacidad política para actuar. Sin embargo, esta conciencia reduce la realidad a sus intereses y se suma al corporativismo del movimiento por lo que resulta teniendo límites muy estrechos.

Sin embargo, y en el contexto de los últimos meses del actual gobierno, llevados por su pragmatismo pero también por su necesidad de mantener su legitimidad como gremios y manejar sus contradicciones latentes —entre grandes y pequeños empresarios, entre lo centralizado y lo regional, entre lo formal y lo informal—, los dirigentes del movimiento tratan de escapar de los límites de su racionalidad empresarial y buscar entender con una racionalidad más global la sociedad.

Ello explica por qué en una coyuntura de previsible polarización como la recientemente vivida en el país con las elecciones, lejos de buscar la ruptura (como lo hicieron otros movimientos sociales) el movimiento empresarial ha buscado el centro, el equilibrio como parte de un proceso en el que está redefiniendo su identidad.

3. 4. Los movimientos regionales y la crisis

Uno de los elementos más relevantes del conflicto social de los últimos años en el Perú ha sido indudablemente la protesta regional. Regiones y localidades íntegras subordinadas a la circulación capitalista se han movilizado contra el agobiante centralismo existente y contra la acción del Estado produciendo diversos movimientos de variada significación y consistencia.

El análisis de los mismos es de especial complejidad[20] porque no se desarrollan en el marco de las relaciones sociales, sino fundamentalmente en el de las relaciones políticas y sus acciones tienden a confundirse en ambos niveles. Por añadidura, en los últimos años estos movimientos más que otros evidencian cómo las formas de dominación son cada vez más globales y cómo las prácticas sociales aparecen sumadas

a un conjunto de prácticas tradicionales expresadas de distinta manera.

Así, no resulta exagerado afirmar que en muchos de estos movimientos ha ido surgiendo una conciencia nacional a partir de identidades locales, provinciales o regionales y actores colectivos que participan en la lucha en torno de los proyectos regionales.

En este terreno, el proceso que se dio entre 1968 y 1975 es fundamental no sólo por las reformas que se instrumentaron sino por la concepción de Estado que se desarrolló y que, en este terreno, implicó un intento de afrontar el problema regional. Velasco trató de impulsar el desarrollo de las regiones a partir de la capacidad de inversión del Estado a la par que sus reformas modificaban las estructuras de los poderes locales y producían una redefinición de los espacios económicos vinculando más el campo con la ciudad.

La urbanización de las provincias del interior del país y la organización de una vanguardia campesina en un gremio centralizado que abarca las áreas de reforma agraria será uno de los resultados de este proceso, definido por una progresiva integración territorial y nacional que encuentra distintas resistencias.

El Estado, al expandirse, empezó a formar parte de las relaciones económicas internas de la región, a la par que intervenía en la vida política y, en el proceso de ideologización a través del SINAMOS. "Por adhesión o por oposición, el Estado se asimiló como una institucionalidad inherente a la vida económica y política de la provincia..."[21] El Estado en las provincias toma el papel de intermediario entre los intereses locales y los nacionales.

Es en este contexto acelerado de transformaciones sustanciales que se producen los distintos movimientos regionales que, al tiempo que cuestionan el modelo de Estado centralizado, tienen a ese mismo Estado como el principal interlocutor de sus demandas. En tanto imaginario colectivo, dichos movimientos surgen como historia viva pero también como producción intelectual regional; como reivindicación económica pero también como exigencia democrática. De allí su complejidad, a la que ciertamente concurren distintos elementos étnico-culturales que hacen, por lo general, que lo regional aparezca como la visualización del interés de la comunidad de pertenencia así como la convocatoria a los distintos sectores de la misma.

Estos movimientos, que se han desarrollado entre la presión y la negociación, que permanentemente han recurrido a la movilización directa y que han generado formas organizativas como los frentes de defensa, desarrollándose muchas veces a través de formas institucionalizadas como el municipio, cuestionan aspectos básicos del devenir de nuestra sociedad.

¿Qué similitud tienen entre sí estos movimientos regionales? Si nos atenemos a su forma de organización, sus nombres, la manera de

vertebrarse, etcétera, no se puede hablar de ningún modo de un "modelo" que se haya implantado con mayor o menor éxito en tal o cual sitio. En realidad, se puede señalar que cada uno corresponde a una situación muy particular, muy local, y de ninguna manera son expresiones de un proceso dirigido por alguna fuerza política a nivel nacional. Aun más, cuando las demandas son efectivamente regionales, suelen producirse choques entre frentes de distintos departamentos o provincias, como el caso del Frente de Iquitos o el del cabildo abierto de Huánuco, ambos contra las demandas de Pucallpa.

¿Qué se puede encontrar, en relación con los grupos de poder locales, en los frentes regionales? En este punto sí encontramos que los sectores vinculados principalmente con el comercio local han sido entusiastas impulsores de las reivindicaciones levantadas. Las Cámaras de Comercio han jugado un papel descollante en las luchas de las regiones y —en la mayor parte de los casos— han sido sus demandas las que ha resuelto con mayor rapidez el gobierno central. Por otro lado es curioso comprobar cómo de las luchas regionales no han salido, en las elecciones de mayo de 1980, parlamentarios para los partidos de izquierda, mientras que Acción Popular llevó a la Cámara de Diputados a hombres como Gilberto Muñiz Caparó, de destacada actuación dentro del Comité de Organizaciones Populares del Cuzco, u Odón Huidobro, del Frente de Acción Cívica de Tarapoto. La presencia de las organizaciones populares "clasistas" hubiera sido incluso menos notoria en las movilizaciones regionales, si no fuera por dos gremios —bancarios y profesores— que en todas las luchas han jugado un destacado papel y que integran las dos organizaciones sindicales con mayor cobertura nacional: la Federación de Empleados Bancarios y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Perú.

El problema regional, claro está, es interpretado de distinta manera por los diversos sectores que participan en los movimientos que se generan en torno de él. Los grupos de poder regional entienden el problema en términos de impulsar las condiciones para un cierto desarrollo capitalista en la zona que dominan. Por ello, exigen intervención estatal para mejorar la infraestructura productiva, buscan regímenes de excepción, etcétera.

En una palabra, estos grupos esperan que el Estado haga todo aquello que no esté en sus manos hacer adicionalmente, y por si esto fuera poco, por lo general reducen el problema regional a la acumulación regional de capital productivo y a la expansión del mercado interno. Dentro de esta lógica, están dispuestos a unirse e incluso a impulsar muchas veces frentes regionales.

Por parte de los sectores populares —obreros, campesinos, empleados, pequeños comerciantes, profesores, etcétera— la participación en los movimientos regionales tiene una doble racionalidad: por un lado

exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones a nivel de servicios (salud, educación, vivienda, etcétera) y el impulso al desarrollo de su región; por otro, combatir a los sectores dominantes locales para incrementar la participación de los sectores populares en la riqueza producida por ellos.

Mientras los movimientos regionales se quedan en el terreno exclusivo de las exigencias al Estado, son los grupos de poder local quienes tienen por lo general las mejores posibilidades de hegemonizar las luchas y los frentes que se articulan. Sin embargo, cuando en las regiones en lucha existen formas de organización popular, especialmente en el terreno sindical, las posibilidades del pueblo de imponer su hegemonía son mayores.

Al respecto hay que recordar que la principal arma de lucha de los movimientos regionales es el "paro general". A través de éste, y más allá de la eventual hegemonía de los grupos de poder local, los grupos sindicalizados se convierten en un pivote fundamental de la movilización, en un eje vertebrador de la lucha. Por cierto, los paros son más genéricamente urbanos que meramente fabriles, pero son las organizaciones del pueblo las que por último los definen.

Con estos elementos es preciso detenerse en la relación entre movimiento regional y frente de defensa de los intereses del pueblo. [22] Es claro que en sentido estricto no son la misma cosa y que los movimientos regionales no se transforman en frentes de defensa de los intereses del pueblo por un acto mágico.

El movimiento regional es una cuestión básicamente coyuntural, de un momento determinado de la lucha de los pueblos y regiones contra el poder central. El frente de defensa de los intereses del pueblo pretende ser una forma de organización bastante amplia que, sin embargo, tiene un contenido popular muy neto. Dentro de esta lógica, un frente de defensa puede nacer al calor de un movimiento regional o puede propiciar y dirigir un movimiento de este tipo, pero de ninguna manera se limita al movimiento.

En cualquier caso, mientras los movimientos regionales se quedan en el terreno exclusivo de las exigencias al Estado, son los grupos de poder local —y el APRA políticamente— quienes tienen las mejores posibilidades de hegemonizar las luchas y los frentes que se articulan. Sin embargo, cuando en las regiones en lucha existen formas de organización popular, es decir fuerza, y hay un mínimo desarrollo de propuestas opcionales, las posibilidades del pueblo de imponer su hegemonía son mayores.

Finalmente hay otras tres cuestiones relativas a estos movimientos a subrayar:[23]

a) En ellos se produce frecuentemente un encuentro entre la vanguardia intelectual y política de una localidad en el sen-

tido más amplio de la palabra, donde a partir de una identidad "regional" se da la búsqueda del cambio en la realidad inmediata.

b) Mientras los actores regionales se han diversificado —obreros, empleados, comerciantes, industriales, pobladores, ambulantes y productores agrarios—, el opositor se ha homogeneizado en la figura del Estado.

c) La participación del campesinado en los paros regionales ha sido muy reducida y se ha limitado a éste en tanto gremio y no en cuanto a organización económica, social y cultural.

3. 5. Sendero luminoso y la crisis

Sendero Luminoso constituye uno de los movimientos más complejos y difíciles de entender en nuestro país. Sus raíces sin embargo, son profundas y están vinculadas a largos procesos históricos. Carlos Iván Degregori, en un trabajo a la vez pionero y brillante[24] se aproxima a este fenómeno y a los hilos oscuros que lo explican.

Este movimento aparece en los intersticios de democracia y autoritarismo enraizados en nuestra historia y en todas las tradiciones populares como producto de los desfases que se producen entre lo urbano y lo rural, entre andinos y criollos, representando "la reacción extrema, defensiva y autoritaria de una estrecha franja social ubicada en el polo más golpeado y desarticulado por el tipo de desarrollo capitalista que se da en el país: provincias-campo-Andes".[25]

Sendero aparece en la brecha que se abre entre democracia social y democracia política, en un desfase que ya hemos mencionado y que amenaza con desarticular cada vez más las organizaciones populares, precisamente allí donde la acción de este movimiento puede potenciarse.

Sendero surge en Ayacucho, en un contexto de pobreza generalizada que, sin embargo, no basta para explicarlo. Degregori encuentra luces importantes en la historia de la región, y señala tres factores fundamentales:

a) Los desplazamientos étnicos que se remontan a los siglos XI (caída del imperio Wari), XV (secuela de la guerra entre los Incas y la Confederación Chanka) y XVI (consecuencia de las reducciones del virrey Toledo), a lo que se añaden las mitas.

b) A lo largo de su historia Ayacucho aparece como una región sacudida intermitentemente por la violencia, desde la expansión Wari hasta la guerra con Chile.

c) Ayacucho nunca en su historia ha sido una región aislada o autárquica; aunque el desarrollo capitalista y la penetración imperialista la van a afectar fuertemente, su subordinación a otros polos regionales se acentuó en este siglo y terminó por

destruir el antiguo eje Pokra-Chanka o región tradicional al Norte de Ayacucho.

Las acciones iniciales de Sendero se asentaron precisamente allí, lo que mostraría a este movimiento como una expresión inicialmente regional pero de la antigua región que se defiende contra la modernidad capitalista. En esta dinámica se producen profundos desencuentros que se expresan en la situación actual.

La historia de Sendero está ligada a Ayacucho, de manera más precisa a Huamanga. Y allí, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga se constituye en el marco institucional en que se desarrolla este movimiento —Universidad ésta que desde 1959 fue el foco dinamizador de la vida de la ciudad .

En Ayacucho, hacia comienzos de los años '60, los grupos dominantes regionales, están profundamente debilitados, económica y políticamente, al extremo de que la defensa del orden tradicional se concentra en lo ideológico y se enfrenta con la Universidad, que fue un centro de difusión de ideas progresistas pero también, fundamentalmente, el corazón de la vida ayacuchana incluso en términos económicos.

En Huamanga confluyen profesores "cosmopolitas" y otros "provincianos" dándole a la Universidad un perfil *sui generis*. En ese contexto nace Sendero y se forja su máximo líder: Abimael Guzmán, quien llega a la Universidad en 1962 como militante del Partido Comunista Peruano; a la ruptura de éste entre pro chinos y pro soviéticos, Guzmán y su grupo se alinean con las posiciones maoístas.

Rápidamente conquistan al estudiantado y a un importante grupo de profesores y, proyectándose hacia la sociedad, impulsan entre 1966 y 1969 un frente de defensa de Huamanga que evita el recorte de rentas de la Universidad y que en ese período —inicios del reformismo—, ante la retirada de las capas terratenientes, se convierte en verdadero poder en Ayacucho.

A pesar de su dogmatismo leninista, que los lleva a restringir las alianzas dentro del frente de defensa, este grupo utiliza audazmente los espacios legales y encabeza las demandas más sentidas de la población por lo que alcanza por esos años, con base en la Federación de Barrios y en los universitarios, lo más cercano a una hegemonía social.

Los principales dirigentes del partido, en esa época "Bandera Roja", ocupan cargos importantes en la Universidad y desde allí, en medio del desconcierto que generó el velasquismo entre la izquierda, dividen el partido a partir de la polémica que generó la caracterización del régimen y la promulgación de la Reforma Agraria. Nació así el Partido Comunista Peruano "Sendero Luminoso", liderado por Guzmán y cuya base fundamental estaba en Ayacucho.

Con esta división Mariátegui, en una comprensión cientificista e iluminista, se convierte en punto central de referencia e identidad. Era

el año 1972 y en Ayacucho, impulsadas por Sendero, sonaban juntas las consignas "Agua y luz para Ayacucho" y "La guerra popular está en avanzada"[26] como signo de la combinación entre maximalismo ideológico y pragmatismo economicista que caracterizó el accionar de Sendero en ese momento.

A lo largo de los primeros años del reformismo, calificado de fascista por Sendero, la Universidad de Huamanga se convierte en el último bastión de la resistencia. El manejo de la Universidad, controlada por el "partido elegido", se hace más vertical y los enfrentamientos entre senderistas y antisenderistas aparecen en la Universidad como conflictos entre ayacuchanos y foráneos.

Ya en ese momento, segunda mitad de los años '70, el movimiento popular ayacuchano corre por fuera de Sendero; muchas organizaciones surgen por todos sus costados sin que el movimiento logre presencia en ellos. Los senderistas se atrincheraron entonces en el Programa de Educación de la Universidad y en el sindicato magisterial, cuyas características estaban ligadas al viejo sector "provinciano". Por aquel entonces Sendero empieza a expandirse en los departamentos vecinos y, paradójicamente, cada vez que sufre una derrota en las masas logra cohesionar más a sus cuadros.

Restringida ya por ese tiempo la posibilidad de la educación como canal de movilidad social en la región, Sendero se encapsula y en 1980 se rebautiza "Partido Comunista del Perú", iniciando sus acciones armadas. Culminaba así un proceso de lucha interna en el que curiosamente se retiraban del movimiento los pocos líderes costeños que éste tenía.

Abimael Guzmán (o el Comandante Gonzalo, su nombre de guerra) afirma su liderazgo y le da forma propia en el terreno de la ideología: "sintetiza las leyes de la dialéctica en la de la contradicción".[27] Conocido como Puka Inti (Sol Rojo) por sus seguidores, hasta en esto el movimiento es muy complejo. Si no, veamos: Sol rojo = sol poniente = Pachacámac, representante del ukupacha o mundo de abajo; pachakúti = revolución que trastoca el orden del Universo.

Con este esquema, con una gran voluntad política, inédita en este país, y guiados por una utopía autoritaria, se lanzan a la guerra popular. En ésta es posible distinguir dos grandes etapas: el período de avance, entre 1980 y 1982, y el período que comienza con el ingreso de las Fuerzas Armadas en 1983.

Sendero inicia sus acciones mostrando una audacia, una capacidad de organización y un funcionamiento descentralizado muy eficiente. Las primeras acciones se ejecutan en zonas de comunidades con poca tradición de organización moderna, encerradas en sí mismas y reticentes al Estado, que al ser zonas de comunidades son zonas de escuelas también.

Inicialmente atacan a la policía y castigan a algunos abigeos y gamonalillos, inscribiendo su llegada a las comunidades en el tradicional

autoritarismo andino: aparecer como un terrateniente bueno, como un Inkarri que llega de arriba a imponer un nuevo orden o restaurar uno antiguo más justo, pero no necesariamente democrático.

Extendiendo esta tónica del castigo al terreno moral, Sendero logra efectivamente implantar un nuevo orden. En la segunda mitad de 1982, Sendero decide el "levantamiento de cosechas" y el cerco de las ciudades desde el campo. Este proceso se enfrenta con dos debilidades básicas, consecuencia de su estrategia: por un lado sus militantes son casi exclusivamente maestros y estudiantes y no campesinos, y por otro, Sendero desconoce las organizaciones existentes.

Este intento colectivista muestra pronto sus límites y el intento de retorno a una economía autárquica, exigido por su concepción de la guerra popular clásica, al afectar a los campesinos, crea malestar. El ingreso de las Fuerzas Armadas logra "comprometer" más efectivamente que Sendero a importantes sectores campesinos por su mayor capacidad represiva y económica: cuando de "señores" se trata, el sentido común campesino opta por el más poderoso.

Se inicia así, a partir de 1983, una insoportable presión de las Fuerzas Armadas y Sendero sobre el campo ayacuchano, que explota en una serie de conflictos. Sendero aterroriza a las comunidades que lo traicionan o que no lo apoyan y las Fuerzas Armadas hacen lo mismo: la guerra sucia se desata y se exacerban en esta macabra lógica los enfrentamientos intercomunales.

En un segundo momento de su estrategia contrainsurgente, las Fuerzas Armadas crean en distintas comunidades "comités de defensa civil", que centralizan a varias poblaciones en el esquema de las "aldeas estratégicas" creadas por los norteamericanos en Vietnam. Reeditan así en Ayacucho las reducciones del virrey Toledo, hoy día sin ninguna viabilidad económica.

Estos comités se transforman pronto en bandas paramilitares que asolan la región y complejizan aun más la situación. Las comunidades no tienen otra alternativa, casi como estrategia de supervivencia, que encerrarse en sí mismas, ganando en cohesión pero perdiendo toda perspectiva regional o nacional.

En resumidas cuentas, Sendero, que surge en los años '70 como producto del encuentro entre una élite universitaria provinciana y una base social juvenil provinciana, no rompió nunca con la estructura estamental y autoritaria del Perú tradicional. El marxismo leninismo es el orden más simple que encontraron que les explica el mundo físico (materia/movimiento), la historia de la filosofía (idealismo/materialismo) y la historia del Perú (camino burocrático/camino democrático).

Teniendo como límite claro su "estrategia de asalto frontal", cuando la sociedad civil en el Perú se fortalece y cuando la población —repitiendo un comportamiento secular— en vez de polarizarse en medio

de la crisis, busca el centro como punto de equilibrio, Sendero está hoy en situación de derrota, donde su freno mayor es el tejido organizativo masivo que ha surgido en nuestra sociedad y no un Estado incapaz y represivo.

4. A modo de conclusión

Del análisis de estos cinco movimientos sociales en un contexto de crisis es preciso tratar de extraer algunas constantes, algunas conclusiones. En el largo proceso de constitución de nuestra sociedad, los movimientos sociales han jugado un papel básico. Además de estar presentes en todos los momentos de crisis y definición social, han ido forjando una suerte de memoria colectiva de la sociedad, que frecuentemente repite situaciones pasadas en las prácticas de hoy día. Es evaluando esa dinámica como se puede entender el potencial de estos movimientos.

4.1. El análisis anterior nos remite como cuestión primera a algunos rasgos interconectados a lo largo de nuestra historia que sirven como telón de fondo pero que también son resultado de los movimientos sociales. Por un lado está la profunda heterogeneidad de relaciones sociales existentes en nuestro país, donde coexisten distintas relaciones que tienen diferentes expresiones políticas que en ningún caso llegan a representarlas. Una economía capitalista dependiente a la que se llega como resultado de un complejo proceso histórico, es incapaz de homogeneizar las relaciones sociales en el país. Ligado a ello, es preciso aludir a la multiplicidad de culturas que convienen en nuestro espacio nacional: mestizajes más o menos infelices que generan un complejísimo sistema de resistencias y comportamientos culturales que difícilmente logran encontrarse, sintetizarse.

Finalmente, y también como resultado del modelo de acumulación y del tipo de desarrollo, pero teniendo como base las diferencias culturales y la diversidad geográfica de nuestro país, se han profundizado las desigualdades regionales y los desequilibrios y diferencias entre las sociedades locales, que cada día más luchan contra el centralismo.

En este contexto el reformismo militar (1968-1975) al lograr constituir un esquema moderno, logró *homogeneizar* el sistema de oposiciones por uno de los lados. A pesar de la heterogeneidad y la multiplicidad de los movimientos sociales, desde ese momento el Estado aparece como un vértice ordenador, por lo menos claramente referencial.

4.2. Es absolutamente claro, y basta mirar el panorama peruano actual para entenderlo así, que los movimientos sociales son productores permanentes de sociedad, de orden. El complejo tejido organizativo del que

los cinco movimientos analizados son parte, así lo demuestra: los sindicatos, el movimiento de pobladores con todas las dimensiones de su organización, el movimiento empresarial y los distintos movimientos regionales entre otros, han cristalizado un orden particular, han establecido nuevas formas de relacionarse y si no logran cuajar nuevas estrategias de desarrollo, por lo menos muestran una vitalidad de supervivencia y una capacidad de creación y recreación gigantesca.

Es esto, en unos casos con más flexibilidad que en otros, lo que les permite afrontar su relación y su oposición con un Estado que en quince años cambia drásticamente de orientación: de propugnador de la solidaridad a desorganizador de la sociedad. En este terreno la recomposición de solidaridades tradicionales (clubes provincianos, asociaciones de migrantes, comedores populares, bibliotecas, etcétera) atraviesa los distintos movimientos sociales y complejiza las identidades individuales.

Todo esto en una sociedad donde la informalidad y la precariedad de las instituciones se generaliza a la par que lentamente aún surgen nuevos órdenes y nuevos códigos, que hablan muchas veces de una memoria colectiva pero que sobre todo, dicen mucho de una tendencia permanente al equilibrio.

4.3. En la situación de crisis que vive el país, ésta actúa como un factor disolvente del orden y las prácticas anteriores. Eso es muy claro. Sin embargo, los distintos movimientos sociales —en ese mismo contexto— y con el importante impulso del viento que significó el reformismo, han ido robusteciendo y también enmarañando el tejido de la sociedad civil como factor básico del equilibrio, al extremo de que son la mejor garantía frente a la utopía autoritaria que representa Sendero Luminoso.

La crisis representa un momento largo de cuestionamiento de las identidades básicas anteriores de los movimientos sociales. Ello se manifiesta muy claramente en los sindicatos, los gremios empresariales y las organizaciones de pobladores tradicionales. Pero a su vez, y ello es su efecto progresivo, desnuda límites autoritarios en el interior de éstos, acelera procesos de democratización interna y cuestiona los mecanismos básicos de representación y participación, exigiendo que los movimientos sociales, desde sus organizaciones, tengan que reconocer y recoger la diversidad para fortalecerse.

4.4. La crisis, que se ha dado en medio de la apertura y consolidación democrática que despolitizó a los gremios de la sociedad, desplazando la contradicción política que se daba entre los movimientos sociales y el Estado a la mediación tradicional de los partidos, desnudó uno de los discursos básicos —por lo menos más nítidamente presentes— en la mayoría de los movimientos sociales reseñados: el clasismo, entendido como la

visión de la sociedad a partir de una racionalidad unívoca y de intereses absolutamente excluyentes.

En buena medida los agudos problemas de identidad que muestran hoy día tanto el movimiento empresarial como el sindical, pero también la organización tradicional en el movimiento de pobladores, están ligados a estas explicaciones clasistas del mundo, donde la conciencia de clase, que existía en muchos de esos movimientos, terminaba reduciéndose a sí misma, y si bien no es del todo incapaz para entender y explicar el proceso económico, su visión política se sesga totalmente por el supuesto interés de clase.

Adicionalmente su reduccionismo se expresa en un comportamiento de defensa —común a varios de los movimientos analizados— como único camino de relación y de acción.

4.5. En esta dinámica, la crisis rompe las previsiones que se podían hacer a partir de lecturas superficiales y parciales de los movimientos sociales y de la dinámica del país.

Una vez más la polarización social no ha terminado en la hecatombe. Hay, por el contrario, una suerte de reacomodo, una búsqueda de equilibrio, que lleva a los movimientos hacia el centro. Los resultados electorales, por ejemplo, son una clara expresión de ello.

En cierto sentido, entonces, la sociedad peruana parece caminar hacia la modernidad de manera bastante *sui generis:* en medio de la heterogeneidad y la fragmentación que la crisis agudiza, ante las opciones individuales que ésta alienta, los movimientos sociales no se desplazan a los extremos. Así, los actores se definen más en términos de su movilidad que de su situación, generando y abriendo nuevos momentos en nuestra historia.[28] Se afirma una vez más la diferencia entre lo general (político) y lo particular (social).

4.6. Por otro lado, aunque ello no aparezca explícitamente planteado en la dinámica de cada uno de los movimientos, es claro en la coyuntura que se cumple una vez más el aserto de Mariátegui, quien sostiene que toda crisis de hegemonía burguesa provoca una crisis en la estrategia popular y, a partir de las respuestas populares a la nueva situación, empiezan a germinar inevitables replanteamientos y modificaciones en la práctica social que deberían redefinir la estrategia a seguir.[29]

A fin de cuentas es la posibilidad de crear y acumular poder, ya no desde el Estado como espacio privilegiado, sino desde el nivel de las relaciones microsociales,[30] y ello se desprende del análisis de los movimientos sociales; las nuevas formas y prácticas constituyen el espacio común entre movimientos sociales, democracia y participación popular en nuestro país.

Notas

[1] De acuerdo con recientes informes policiales hechos públicos por la revista *Visión* (núm. 9, Lima, 12 de mayo de 1984), sólo en Lima se cometen diariamente 4 asesinatos, un asalto cada media hora, se roban 30 vehículos y hay un promedio de 3 secuestros semanales.

[2] Vega, Juan Enrique, *Buscando América Latina,* trab. mecanografiado, México, 1985.

[3] La corrupción es tan intensa que alcanza los niveles más altos del gobierno. Los casos que han involucrado a altas autoridades como los de Vollmer (Manuel Ulloa, Premier), Guvarte (Enrique Elías, Ministro de Justicia), la CPV (Fernando Chávez Belaúnde, Ministro de Transportes), etcétera, son sólo un botón de muestra.

[4] Ballon, Eduardo, y Tovar, Teresa, *Informe cuantitativo del movimiento popular peruano,* trab. mimeografiado, DESCO, Lima, 1982.

[5] El primer reformismo estuvo marcado por la lucha encabezada por el APRA contra el estado oligárquico entre fines de los años '20 e inicios de los '30. Reformismo que al escindir lo nacional-popular y lo democrático de lo socialista, llevaba en sí el germen de su frustración.

El segundo reformismo, la alianza AP-DC de los '60, hizo evidente desde el mismo tejido económico de la sociedad la inadecuación de la oligarquía y su Estado para dar cauce al desarrollo social.

Sobre el particular, véase Nieto, Jorge, *Izquierda y democracia en el Perú: 1975-1980,* DESCO, Lima, 1983.

[6] Degregori, Carlos Iván, *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros,* Lima, 1985 (trab. mimeografiado).

[7] Véase Moisés, Alvaro, "O estado, as contradiçoes urbanas e os movimientos sociaes", en *Cidade, povo e poder,* Paz e Terra - CEDEC, Río de Janeiro, 1981, págs. 26-27.

[8] Parodi, Jorge, *La desmovilización del sindicalismo peruano,* Lima, 1985 (trab. mimeografiado).

[9] La Ley de estabilidad laboral, promulgada por el gobierno militar, redujo el período de prueba a sólo tres meses. Este fue uno de los aspectos que más conflictos generaron entre el régimen y los empresarios.

[10] Parodi, Jorge, ibíd.

[11] Parodi, Jorge, ibíd.

[12] Tovar, Teresa, *Vecinos y pobladores en la crisis,* Lima, 1985 (trab. mimeografiado).

[13] Tovar, Teresa, ibíd.

[14] Entre estas organizaciones tienen especial significación los comedores populares (alimentación), clubes de madres y guarderías (mujeres), bibliotecas populares y asociaciones culturales (cultura), comités de salud y grupos de enfermos (salud), comunidades cristianas de base, etcétera.

[15] La letra de la mayoría de las chichas resume estos sentimientos. Así, una de las más populares dice: "Hay lugares modestos / modestos pero unidos, donde no existe riqueza / donde no existe envidia / tan sólo con el sudor de su frente laboran su porvenir. / Este es mi pueblo joven / pueblo joven / pueblo joven / donde mis hermanos trabajan sin cesar, / y así en mi humilde casa reina la felicidad". Citado en *Quehacer,* núm. 9, DESCO, Lima, febrero de 1981.

[16] Castillo, Manuel, *La identidad confundida: el movimiento empresarial frente a la crisis reciente,* Lima, 1985 (trab. mimeografiado).

[17] López, Sinecio, "De imperio a nacionalidades oprimidas", en *Nueva Historia del Perú,* Mosca Azul, Lima, 1979.

[18] Castillo, Manuel, ibíd.

[19] Castillo, Manuel, ibíd.

[20] Henríquez, Narda, *Notas y tesis sobre los movimientos regionales en el Perú,* Lima, 1985 (trab. mimeografiado).

[21] Henríquez, Narda, ibíd.

[22] Sobre el particular véanse Ballon, Eduardo, "Frentes de defensa, factor clave en la lucha regional", en *Alternativa,* núm. 2, Lima, agosto de 1982 y "Movimiento regional y frentes de defensa", en *Canon, región y movimiento popular,* SERPO-UNMSM, Lima, 1983.

[23] Henríquez, Narda, Ibíd.

[24] Degregori, Carlos, ibíd.

[25] Degregori, Carlos, ibíd.

[26] Degregori, Carlos, ibíd.

[27] Degregori, Carlos, ibíd.

[28] Al respecto, como reflexión general sobre los movimientos sociales, véase Touraine, Alain, *The voice and the eyes: An analysis of social movements,* Cambridge University Press, 1980.

[29] Mariátegui, José Carlos, "Historia de la crisis mundial", en *Obras completas,* Amauta, Lima, 1971. Véase también "Biología del fascismo", en *Obras completas,* t. I, "La Escena Contemporánea" de la misma colección.

[30] Foucault, Michel, *Microfísica del poder,* La Piqueta Editores, Madrid 1978, págs. 282-283.

Crisis económica y crisis política bajo el gobierno de Betancur.

Los movimientos sociales frente a la crisis en Colombia*

Fernando Rojas **

Introducción

El tema de este ensayo es particularmente ambicioso. Y en muchos sentidos no hace justicia a la riqueza de los trabajos que le sirvieron de base.

Ocurre que vivimos, durante la década del ochenta, un período de reorganización traumática del capital en el plano mundial. Y esta reorganización establece nuevos parámetros de acumulación e impone la vigencia de remozadas relaciones sociales en todos los planos.[1] De manera que los cambios del capitalismo mundial condicionan de manera imperceptible —y muchas veces inconsciente— las decisiones de los actores nacionales, ya se trate del sector público o del sector privado.[2] Condicionan también nuestra propia capacidad cognoscitiva, en la medida en que se trata de fenómenos globales cuyo horizonte final es apenas perceptible tras nubosidades de incertidumbre. En otras palabras, estamos atravesando el bosque de las mutaciones capitalistas y aún no tenemos suficiente perspectiva para dibujar su conjunto o precisar sus senderos.

A ese difícil telón de fondo universal de los años que transcurren debemos agregar otra valla de no menor envergadura, esta vez propia del caso colombiano. Sucede que han surgido en el país formas de lucha de contenido y orientación todavía borrosos y de alcances enteramente impredecibles.

* Este trabajo forma parte de un esfuerzo de investigación más amplio: "Los movimientos sociales frente a la crisis en Sudamérica", auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas —Programa América Latina (PAL)— y coordinado por el profesor Pablo González Casanova (UNAM-México) y por Fernando Calderón (Secretario Ejecutivo de CLACSO). En cuanto tal, será publicado junto con las otras monografías nacionales dentro de la serie de libros del PAL y de "La Biblioteca América Latina: actualidad y perspectivas" (Siglo XXI, México).

** Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Bogotá.

La guerrilla y los movimientos cívicos y su eventual capacidad de aglomerar los movimientos populares son expresiones remozadas o incipientes, muy jóvenes aún para anticipar su destino final. Con el agravante de que su sola presencia juvenil ha dejado ya su impronta en todas las dimensiones de la política y la economía y les ha estampado una dinámica hasta ahora inusitada en la vida colombiana.[3] ¿Son las suyas simples contiendas por una apertura de la democracia burguesa que llegarían a su cima con una ampliación de las vías de participación y una mejor distribución del ingreso? ¿Ofrecen acaso la perspectiva de un nuevo orden social, distinto o antinómico del capitalista? Las respuestas variarán según las preferencias del autor, los grupos o las luchas examinados y la perspectiva teórica empleada. Al fin y al cabo todos somos actualmente actores secundarios o principales en el mismo escenario y no tenemos la preciosa oportunidad de sentarnos a contemplar la obra.

Mas decíamos que, al pecado de la ambición, este ensayo suma el de la injusticia con los trabajos que lo inspiraron. Porque, en efecto, cinco investigaciones realizadas por siete investigadores nutrieron de información e infundieron vapor teórico a este artículo. Aquí sólo pudimos incorporarlas parcialmente; haciendo uso de los derechos de abuso del recopilador, las leímos sintomáticamente y las exprimimos selectivamente.

Esas investigaciones son:

— *Las luchas de las mujeres en Colombia,* a cargo de Cristina Escobar y Diana Medrano. De inmenso valor histórico y sintético, el trabajo distingue los períodos de estas luchas y las disímiles causas propugnadas por las distintas organizaciones. Su tratamiento de los medios o instrumentos de reivindicación es complementado e ilustrado por valiosas alusiones bibliográficas que constituyen por sí mismas propuestas de investigación.

Del trabajo de Escobar y Medrano recogemos justamente la idea de la diferenciación y la periodización, caracterizamos la heterogeneidad cronológica de las luchas en la fase de transición actual del capitalismo y esbozamos hipótesis explicativas de lo que parece ser su común denominador actual: más allá de las luchas por los plenos derechos ciudadanos, civiles y políticos, ahora se propulsan unas reivindicaciones de movilidad y de sustituibilidad que tienen que ver con las transformaciones de los ámbitos de la producción y de la reproducción bajo la fase capitalista que se inicia.[4]

—*El movimiento campesino,* estudiado por Isauro Suárez. El autor da cuenta del rápido ascenso y del igualmente acelerado declive de la movilización campesina impulsada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, a lo largo de los años '70.[5] Se interna luego en los años '80 y nos da pistas sobre las tendencias de reorganización, ampliación y transformación de las luchas campesinas: de mayor cobertura nacional, confundidas a veces con los movimientos cívicos o con los guerrilleros, próximas en otros casos a los movimientos sindicales, dudan en este momento si agruparse en una organización que corresponda a su especificidad o confundirse con algunos de esos movimientos. Y, en la primera de estas opciones, dudan si reunir únicamente a los grupos de una misma posición política o agrupar también a todos aquellos que abogan por un cambio radical de la tenencia de la tierra y de las condiciones de producción y de reproducción en el campo.

En este ensayo retomamos ese rasgo sobresaliente de un abanico multicolor de expresiones campesinas y nos detenemos especialmente en la fusión de los pobladores rurales con los movimientos cívicos o con los guerrilleros. Lejos de corresponder esa fusión, como podría pensar un observador superficial, a la violencia secular del campo en Colombia, ella habla de etapas de organización y de lides sin antecedentes en la historia del país.

Nos detenemos, también muy brevemente, más de lo que el fenómeno reclama, en el movimiento indígena, más vigoroso hoy que ayer pero más atravesado por dagas contradictorias que lo escinden internamente y lo enfrentan a otros movimientos guerrilleros.[6] Mantener y profundizar su autonomía y su especificidad o incorporarse subordinamente a otras organizaciones de más amplio espectro, parece ser el dilema central de los indígenas colombianos en la etapa actual.

— *El movimiento sindical y sus relaciones con el resto del movimiento obrero* es el tema tratado por Mauricio Romero, quien describe y explica las razones de la baja representatividad, de la división y del marcado economicismo del sindicalismo colombiano.[7] Analiza también Romero las tendencias actuales de las organizaciones sindicales, fragmentadas (¿definitivamente?) en un grupo que muestras síntomas de estancamiento y que ha defendido tradicionalmente el régimen vigente y otro que, con matices y separaciones, se opone a la continuidad del régimen, exige redistribuciones incompatibles con los actuales requerimientos de acumulación del capital y rechaza con mayor vehemencia los arreglos con el sistema monetario internacional. También este último grupo ha creado o ha admitido ciertos lazos con movilizaciones de afiliación más amplia como las cívicas y las guerrilleras.

Para nosotros, el eje explicativo de los fenómenos examinados por Romero reposa en el contraste de la fase capitalista que agoniza con la alborada de una nueva fase del capitalismo.[8] Aquélla prescribía un mercado de trabajo estratificado, una continuidad estricta de la relación laboral y unas reglas de negociación orientadas a impedir la interrupción de esa relación. Esta, por el contrario, acaba con el rígido fraccionamiento

de la clase trabajadora, instituye la precariedad o la incertidumbre de la relación y sustituye las reglas de negociación por las leyes del mercado.[9]

— *La trayectoria de la guerrilla colombiana,* presentada por Gilberto Naranjo, quien divide también la aparente continuidad histórica y busca los hitos y las raíces de cada período.

Este es un tema que tratamos con relativa extensión en este ensayo en atención a que parece haberse constituido en punto de referencia de toda la política colombiana y en cruce de caminos de movimientos que provienen de distintos rumbos.[10]

— *El movimiento urbano, los movimientos cívicos y las uniones o recesiones entre uno y otro* son estudiados por Santiago Camargo y Javier Giraldo. En bien lograda síntesis, los autores presentan la dinámica de los movimientos, revisan sus fuentes y puntos de convergencia y divergencia y formulan hipótesis explicativas.

Los movimientos cívicos son el prototipo más visible de las luchas de composición ecuménica o universal.[11] Convocan por igual a hombres y mujeres, empleados y desempleados, sindicalistas y no sindicalistas, militantes de partido y quienes no lo son, guerrilleros o modelos de civismo, etcétera. Y los orígenes de esa propensión a la organización trabajadora global son el objetivo principal del presente ensayo, como lo son también las fuentes actuales de división de los movimientos populares.

Ambas fuerzas, centrípeta y centrífuga, han sido animadas en Colombia por el actual gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-86). No podemos elaborar aquí una caracterización del gobierno Betancur, pero sí mostramos cómo la fuerza de la crisis económica que lo rodea y lo somete lo lleva inconscientemente a tomar medidas de unificación de las clases trabajadoras, mientras que, paralelamente, la crisis política lo conduce a fomentar de manera deliberada la división de los movimientos cívicos, sindicales, campesinos y guerrilleros. Crisis económica y crisis política llevan entonces a recomponer y reorganizar los movimientos populares.

Desafortunadamente, este esfuerzo colectivo tuvo que dejar de lado otros movimientos u organizaciones del mayor interés, ya fueran o no de carácter popular: las llamadas comunidades eclesiales de base, el movimiento indígena, las inestables organizaciones del narcotráfico y sus vastas repercusiones sobre la economía colombiana, el movimiento pluripartidista hacia la renovación de un pacto de partidos políticos, los movimientos paramilitares de extrema derecha, los diversos movimientos que giran en torno de la causa de los derechos humanos, etcétera. Cada uno de ellos nos lanza un reto en la forma de uno o más objetos de investigación.

Importa también mencionar otro tipo de movimientos, presentado brevemente en los trabajos de Romero y de Camargo-Giraldo, como el llamado paro cívico nacional.[12] Cualitativamente distintos de todos los demás y distintos también entre uno y otro, los paros cívicos nacionales de 1977, de 1981 y de 1985, comienzan a tener frecuencia regular. Es la inconformidad popular frente a cada uno de los tres últimos gobiernos (López Michelsen, Turbay Ayala y Belisario Betancur) plasmada en una parálisis más o menos global de las mayores ciudades, integrada por elementos sindicales y pobladores, adobada en el último año por la intervención guerrillera y aderezada también por los movimientos cívicos urbanos y rurales.

¿Gestación de un bloque popular a partir de organizaciones de composición mixta? ¿Comienzo de una guerra civil prolongada? ¿Consolidación de un poder dual? ¿Aventurerismo contraproducente de grupos guerrilleros urgidos por los avatares de su propio sobrevivir? Todo esto y mucho más son los movimientos cívicos nacionales, cuya tercera acción de protesta se realizó el 20 de junio de 1985.

¿Qué crisis?

Nos referimos a un fenómeno pluridimensional que está estremeciendo los cimientos de la sociedad toda, desde el proceso de producción inmediato hasta la esfera de la reproducción; desde el sentido de la intervención estatal hasta las relaciones entre las esferas pública y privada. En cuanto crisis, es a la vez expresión de agonía de un escenario de relaciones sociales y de surgimiento de uno nuevo. Tales escenarios son también, naturalmente, lugares paramétricos de las vías de lucha y marco de las contradicciones sociales. Por esta última razón, es pertinente detenernos en las distintas dimensiones de la crisis en este trabajo dirigido a examinar y a contextualizar los movimientos sociales de los últimos años en Colombia. Cada una de esas dimensiones incide en la nueva configuración de esas expresiones de contradicción y lucha.

Algunos aspectos de la crisis y del replanteamiento son comunes a muchos otros países, en cuanto manifiestan una reorganización general de la relación social capitalista fundamental, que arrastra consigo ineluctablemente a todas aquellas formaciones que se hallan dentro de su órbita de vigencia o influencia. Otros son peculiares de Colombia. Evidentemente, existe interacción entre unos y otros; empero, nuestro método de exposición exige que tratemos por separado cada dimensión.

La crisis económica colombiana y mundial: de la rigidez a la flexibilidad

Tal vez la diferencia más ostensible entre Colombia y los demás países latinoamericanos a lo largo de la década del setenta fue la relativa estabilidad cambiaria y el crecimiento inusitado de las divisas acumuladas por el país.[13] Los elevados precios del café, el principal producto de exportación legal, y el auge sin par de los ingresos en moneda extranjera en concepto del tráfico internacional de la marihuana y la cocaína llevaron a la economía colombiana a una posición singular en el contexto regional. Todavía a comienzos de los años ochenta el país gozaba de una baja relación servicio de la deuda/exportaciones, contaba con una tasa de cambio considerablemente sobrevaluada, una tasa de mercado negro por debajo de la tasa oficial y un ritmo relativamente bajo de inflación.[14]

Colombia disponía, pues, de ahorros en moneda extranjera suficientes para esperar con tranquilidad un desarrollo normal de su economía sin alteraciones sustanciales de sus flujos de dinero y mercancías desde y hacia el país. Con el aditamento de que los gobiernos no adoptaron, como sí ocurrió en algunas naciones vecinas, medidas librecambistas o neoliberales de carácter radical que agotaran aceleradamente las divisas acumuladas y trastornaran severamente la composición de las importaciones y las condiciones de protección de la producción interna.[15]

Sin embargo, no van más allá las condiciones de rareza del panorama económico colombiano. A lo largo de esa misma década del setenta se presentaron bajas tasas de inversión en la manufactura y en otros sectores; la industria tradicional mostró síntomas progresivos de crisis de rentabilidad; el dinero caro no eliminó sus crecientes necesidades de recursos de funcionamiento y hacia fines de esa misma década se anunciaban ya las quiebras de empresas y la crisis del sector financiero.[16] De poco han servido las políticas de valoración artificial de la producción de una industria doméstica obsoleta; ni el proteccionismo ni el crédito subsidiado o los estímulos fiscales han sido suficientes para detener su precipitado declive. Tampoco han bastado incentivos similares para motivar la recuperación de la inversión nacional o extranjera, ahora en nuevas ramas de la actividad económica. Con excepción de unos pocos (aunque grandes) proyectos de desarrollo minero-petrolero, las nuevas inversiones han sido poco menos que insignificantes; las incertidumbres políticas colombianas y la perplejidad del inversionista local frente a las opciones de inversión productiva han llevado a la concentración del ahorro en documentos de deuda pública y en monedas extranjeras poseídas ilegalmente en el país o en el exterior.

Nótese cuán poco sirvió la disponibilidad de recursos en monedas

fuertes. Aun subsanado ese obstáculo secular a la inversión y a la modernización del aparato productivo interno, el país quedó sin saber qué camino seguir. Ciertamente, la preferencia por el equilibrio presupuestario llevó a ofrecer atractivos papeles con respaldo del Estado; lo cual condujo a su turno, bajo una política de moneda sana, a un "crowding out" de los recursos del crédito disponibles para la inversión privada. Pero esto no basta para explicar la ausencia de proyectos de inversión de plausible rentabilidad. Tampoco es suficiente esgrimir el argumento de que las políticas de corte monetarista seguidas con la tasa de interés desde mediados de los años '70 fueron las causantes del excesivo endeudamiento empresarial y del apogeo del capital especulativo. A la postre, el resto de la economía arrastró consigo a la banca, sumiéndose todos en dificultades de liquidez y en abundancia de créditos de dudoso o difícil cobro.[17] Y aun bajo esta dura realidad, que es la de los años '80, no se vislumbran todavía las ramas de la economía en las cuales podrá florecer nuevamente la inversión.

De manera que, salvo breves y contados períodos de recuperación, la economía colombiana ha atravesado en los últimos años por una prolongada recesión que reclama infructuosamente la reorganización de la producción y de su composición por ramas. Es una especie de período de tinieblas que impide entrever en el horizonte el sendero del replanteo.

Al exagerado endeudamiento empresarial y al desmoronamiento del edificio bancario se agregaron, desde comienzos de los años '80, la disminución de los ingresos de la balanza de pagos, la elevación del servicio de la deuda externa y el freno a las importaciones.[18] La crisis tomó entonces la forma más conocida en América Latina: el estancamiento del sector externo. Y vinieron las negociaciones de refinanciación (que no todavía de renegociación) con sus ataduras de programas de ajuste, de austeridad y de profundización de la recesión. Hoy, cuando se escriben estas líneas, Colombia comienza a orientar sus ahora magros recursos externos, crediticios y fiscales hacia el sector exportador. Las prioridades de la política económica son, como es usual, la "actualización" de la tasa de cambio hasta recuperar la competitividad de las exportaciones, el restablecimiento del equilibrio fiscal resquebrajado por la crisis del sector externo y una apertura (aún moderada) de las importaciones.

Aspero y riguroso como es ese programa de ajuste, ofensivo del sentimiento nacional y destructivo del mito de la soberanía local bajo el régimen capitalista mundial, no debe impedirnos ver la particular profundidad de la crisis actual ni sus raíces estructurales. No importa cuánto se devalúe, no hay seguridad alguna de la recuperación de las exportaciones en el mediano o largo plazo. En términos económicos, se desconoce la elasticidad-precio de las exportaciones en el momento actual. De

poco sirve, como sucedió en el caso colombiano, la disponibilidad de ahorro en moneda nacional o extranjera: la obsolescencia de las ramas económicas y de los procesos productivos tradicionales desestimula la inversión en las grandes empresas de otrora, dinosaurios en el mundo de la tercera revolución tecnológica. Y como los replanteamientos de esa revolución en lo que respecta a la división internacional del trabajo no han irradiado aún el panorama productivo colombiano, se desconocen las alternativas sólidas de valorización del capital en el plano interno. Con el agravante de que es muy plausible pensar que esa nueva división internacional del trabajo se caracterizará, sí, por una mayor interdependencia, pero también por una mayor volatilidad y por una dinámica permanente de cambio.[19]

En esa esfera oscura para ahorradores, inversionistas y gobiernos hay, sin embargo, ciertos elementos de juicio que permiten hacer una prognosis tentativa de la recomposición de la producción y de las consecuencias que ella tendrá sobre el marco de acción de los movimientos sociales y especialmente de los llamados movimientos populares.

Se sabe, por ejemplo, que hubo factores que precipitaron la decadencia de técnicas de producción y que condenaron al cuarto de San Alejo a procesos productivos previos. En este sentido, se ha citado hasta el cansancio el aumento por etapas del precio del petróleo en la década del setenta. Se suele invocar también la pérdida de la hegemonía norteamericana y el ascenso relativo de los japoneses. O la crisis del dólar y del sistema monetario internacional, con sus consiguientes cambios en los flujos de excedentes monetarios mundiales.[20]

Mas los verdaderos catalizadores del cambio en las técnicas de producción, en los procesos de producción inmediatos y en las relaciones sociales en general parecen ser otros, distintos de aquellos aceleradores y quizás agentes a su vez de éstos. La robótica y la informática arrasaron con la función esencial del trabajador o, cuando menos, abrieron la posibilidad de fases de producción y de relaciones de extorsión sin la presencia del trabajador mismo.[21] El capitalismo requirió entonces recuperar la capacidad de prescindir con prontitud y agilidad del trabajador y de rehacer sus procesos de producción. Vastas han sido y seguirán siendo las implicaciones de estas dos exigencias, entre otros campos, en el de la configuración de los movimientos populares, hasta el punto de que ellas son, en nuestra opinión, los determinantes de fondo, objetivos si se quiere, de la emergencia de nuevas modalidades de lucha, de nuevas vías organizativas, de nuevas reivindicaciones y de nuevos delineamientos de senderos revolucionarios y anticapitalistas en nuestras sociedades.

Nótese que el trabajador había ganado estabilidad ocupacional; tan rígida era su relación laboral que el salario había adquirido en la práctica la condición de costo fijo para la empresa, ajeno a la rentabilidad o a la valorización del capital vinculado a ésta. Amparado paradójicamente

por la modalidad de la plusvalía relativa que lo ligaba indisociablemente a la máquina (fruto de una prolongada maduración por los canales de la educación formal y del entrenamiento en el trabajo), se confundía por el resto de su vida con una misma y única función en simbiosis permanente con la máquina que lo ataba y le imprimía firmeza y permanencia a su ocupación dentro de la empresa.

Ese fue el marco de reivindicaciones y de institucionalización de las luchas obreras en lo que va de este siglo. Mercados estratificados de trabajo y diferencias abismales de productividad que llevaron a teorizar el dualismo y a hablar del contraste (a veces dicotómico) entre los sectores "moderno" e "informal" de la economía. Organizaciones sindicales que arrancaron conquistas y, encerradas en el recinto inamovible de la empresa, confundían sus vidas y a veces sus intereses con los destinos de ésta; luchas, por ende, que parecían limitarse al plano de la determinación del nivel de vida y que ayudaron a la conceptualización de los enfrentamientos meramente económicos o reivindicativos por contraposición a otros supuestamente políticos o puramente revolucionarios. "Privilegios" obreros que poco a poco despertaron la reacción del mismo capitalismo que los había abonado y que movieron a éste a buscar la indignación y el enfrentamiento de los desempleados y subempleados contra los trabajadores permanentes.

Como se han encargado de mostrarlo los críticos del dualismo, de la marginalidad y de la informalidad, ése no era un orden social parcial. Ligaba y graduaba a la sociedad entera en órdenes y rangos imperceptibles en su época y denunciados hoy con vehemencia e irritación.

Era, para citar un caso, un orden integral que asignaba sentido y contenido a la intervención estatal. Ciertamente, se mantuvo la separación entre Estado y sociedad civil, fruto ésta de la escisión entre economía y política, una y otra creadas como esferas separadas por un mismo orden social que necesita distinguir y combinar el ámbito de la creación y la recreación permanentes de las condiciones de la circulación mercantil y el ámbito de la vida de la mercancía. Pero el Estado se combinó más evidentemente con la esfera de la reproducción para mantener la estratificación del mercado y contribuir a garantizar un mínimo de vida y una estabilidad vital al trabajador vinculado al "sector moderno". Hasta el punto de que hoy hablamos del "Estado benefactor" y lo contrastamos con el Estado "leseferista" que lo precedió o lo recordamos con añoranza cuando denunciamos la crudeza de los replanteamientos que en esa misma esfera de la reproducción viene articulando el llamado Estado neoliberal de hoy en día.

Intervino también el Estado, por su participación en la esfera de la reproducción y en la determinación de la demanda agregada y aceleró el proceso de acumulación participando directamente en el suministro de las muy costosas condiciones infraestructurales que caracterizaron

aquella época. O participó directamente en la oferta de bienes y servicios que se distinguían por sus condiciones monopolistas o por otras características que resulta innecesario enumerar aquí. Todo ello llevó a hablar del "Estado keynesiano", ya sea justa o no esa imputación al lord inglés.

No puede extrañar entonces que buena parte del movimiento popular se concentrara en los sindicatos y organizaciones obreras del sector estatal, como tampoco que esas mismas organizaciones hayan sido puestas en jaque con los replanteos del Estado en la actualidad. En Colombia, por ejemplo, han arreciado los ataques de todos los últimos gobiernos contra los obreros de los puertos, del petróleo, de la siderurgia o de los ferrocarriles, los viejos bastiones del sindicalismo. Y han dirigido sus más enérgicas baterías contra las organizaciones del personal de la salud y de la enseñanza oficiales, frutos ambas de esas mismas especificidades de la intervención pública bajo la fase estatal que agoniza.

Era asimismo, como todavía podemos verlo, un orden social que separaba radicalmente las esferas de la producción y de la reproducción respecto de esos trabajadores ocupados en el "sector moderno" de la economía. Y esa separación conllevaba obviamente (y con apariencias de naturalidad) un orden familiar donde también se estratificaba en un microcosmos la macrodistinción entre el asalariado y quien no lo era o no lo era de manera permanente. Y al igual que sucedía en el plano sectorial, allí también sólo se reconocía al trabajador del sector moderno, generalmente hombre en edad de reproducción, como susceptible de formar parte de organizaciones populares.

Y, como podemos imaginarlo, ese mismo contexto sirvió de caldo de cultivo a las tesis de la vanguardia obrera o de la primacía del movimiento sindical sobre otras manifestaciones de lucha popular. Irrupciones de rebeldía urbanas eran tachadas de "espontaneístas", anarquistas o simplemente bárbaras. Las luchas campesinas o indígenas no tenían, en ese entendimiento, capacidad de autogestión: no integrarían un movimiento de control del poder social mientras no se asociaran subordinadamente al movimiento obrero del sector moderno para controlar los centros más vitales de la acumulación capitalista. Y las mujeres se hallaban condenadas a formar prioritariamente parte de algunos de esos grupos de movimientos de segunda categoría o a circunscribirse a la reivindicación de sus condiciones de ciudadana-proletaria en igualdad de condiciones con el hombre. De todo lo cual hay evidencias fehacientes en el caso colombiano.

Las jerarquías internas del movimiento popular no se detenían allí. Se prolongaban hasta la cúspide, donde se entronizaba al trabajador intelectual y al pensamiento abstracto, lo que hoy es mirado con arrepentido desdén por buena parte de la izquierda colombiana y latinoamericana.[22]

El contexto y la configuración de movimientos que acabamos de

esbozar no han desaparecido por completo. Sobreviven muchas de sus expresiones, como lo podríamos esperar de una etapa de transición, pero al lado de los rezagos del pasado germinan ya otros cuerpos, de formas aún vagas e imprecisas. El sindicalismo colombiano, por ejemplo, después de más de cincuenta años de historia fundamentalmente aislada, cuando no reducida al tablero de la empresa, sale a las calles de las grandes ciudades en búsqueda de un movimiento urbano todavía etéreo y las más de las veces efímero. Pero el hecho es que desde hace algunos años no se atreve ese sindicalismo a lanzar programas regionales o nacionales sin apelar al movimiento urbano o apoyarse en éste. Y la realidad de las cifras indica que los denominados movimientos urbanos, confundidos a veces con los "movimientos cívicos" son ya una expresión más frecuente, más universal o de mayor cobertura y más vigorosa en sus conquistas y proyecciones que el viejo movimiento sindical.

Y al hablar en Colombia de movimientos cívicos recogemos una expresión corriente que ha hecho carrera por razones estratégicas, pero que nos sirve también para eludir la inmensa tarea que se presenta al investigador y al activista cuando intentan descifrar lo común, lo esencial o lo previsible respecto del futuro de estos anuncios de próximas formas organizativas. Esta dificultad, desde luego, se debe parcialmente a la circunstancia de que más de cincuenta años del binomio institucional sindicato/partido nos acostumbraron al facilismo de tratar con las manifestaciones de lucha autorizadas, reguladas e institucionalizadas, olvidando, entre otras cosas, que el decantado sindicalismo de hoy tuvo orígenes igualmente borrosos en sus años de mayor beligerancia y de superior creatividad.

Fuere como fuere, y no obstante la heterogeneidad de sus detonadores particulares o reivindicaciones concretas, los movimientos cívicos colombianos cruzan hoy el país en todas sus regiones, en el campo y la ciudad, en la urbe pequeña y en la metrópoli. Cubren también por igual expresiones de asalariados y no asalariados, de hombres y mujeres, jóvenes o viejos, laicos o religiosos. Son el germen de movilización más universal que haya afrontado hasta ahora el capitalismo en Colombia.

Esta universalidad parece ser la diferencia específica de los nuevos vehículos de organización y lucha populares. Diversos factores están contribuyendo a ese acercamiento de causas y estratos, hasta ahora separados cual archipiélago, de trabajadores de distintos colores. Lo sorprendente es que el mismo capitalismo, en su afán de recomposición y fortalecimiento de la relación de extorsión, está propiciando el fenómeno, sentando sus bases objetivas. Las mujeres han sido llamadas al mercado de trabajo y esta sola vinculación opera con mayor fuerza liberadora que la que jamás alcanzaron los movimientos que reclamaron la igualdad de los derechos civiles y políticos con el hombre entre las décadas del veinte y del cincuenta. Pone a su vez en evidencia otra serie de

causas que van desde el replanteamiento de la organización familiar hasta la revisión de la organización popular, desde la actualización de su especificidad hasta la combinación o la disolución de ésta en el torrente de las causas comunes.

Transformaciones de efecto semejante está operando el capitalismo en el agro; sólo que esas transformaciones no tienen aún desarrollos considerables en Colombia. Es la biotecnología, que se asoma decididamente en el campo brasilero y, posiblemente, en las veredas de algunos otros países latinoamericanos. Es un fenómeno éste de tal envergadura que podría llevar a la sustitución de la tierra y a la eliminación de la renta del suelo. Como sabemos, el valor mercantil asignado a la tierra era el factor de distinción principal entre el campo y la ciudad.

Ya veremos más adelante otros elementos de unión del campesinado con un movimiento popular más amplio, que vienen aflorando en Colombia y que parecen ser particulares de este país. Reconozcamos por lo pronto cuál es el determinante de fondo de esa erosión de las barreras de apariencia natural que aislaban a unos trabajadores de otros. Ese determinante se inscribe en el proceso de crisis del capitalismo, se origina en la superación de la fase capitalista precedente y por contraposición a ésta, y apunta a la constitución de la nueva fase de este modo de producción. En efecto, la necesidad de vencer las rigideces planteadas por el capital fijo y los asalariados, la búsqueda de la flexibilidad y de una rotación más acelerada del capital acorde con la época y la urgencia de garantizar la valorización del capital en cada momento y en cada proceso están llevando a la sustituibilidad de unos trabajadores por otros. Se desvanecen entonces las estratificaciones yertas y se llama a un juego de libre competencia entre miembros de una misma familia, entre viejos, jóvenes y niños.

Flexibilidad y sustituibilidad suponen la superación de las barreras físicas y sociales que encerraban a la gran industria. La descentralización y la atomización de la empresa y la confusión de los lugares de producción y reproducción presuponen a su vez el desarrollo de procesos productivos parciales bajo tecnologías y flujos uniformes o procesos productivos susceptibles de ser llevados a cabo bajo distintos flujos. Cumpliéndose estas condiciones, se puede trabajar para una empresa sin hallarse sujeto a la vigilancia de capataz o gerente y aun sin tener conciencia del lazo que lo liga a la empresa. Se puede ser trabajador independiente o desempleado y, sin embargo, nutrir a través del mercado de mercancías (por oposición al mercado de trabajo) la producción y la utilidad de una inversión capitalista.[23]

Se entiende entonces que una labor complementaria al desmonte de la empresa, del Estado benefactor, de la legislación laboral, de la familia patriarcal basada en el salario, etcétera, sea la constitución de vínculos entre los trabajadores atomizados y los núcleos de acumulación del

capital. Es una labor que habrá de desempeñar el nuevo Estado dentro de sus nuevas modalidades de intervención, en representación del capital en conjunto. Y es lo que ya viene practicando y generalizando el Estado colombiano a través de diversas vías de fortalecimiento y consolidación de las microempresas, de las pequeñas empresas o de las empresas asociativas.

Paralelamente, se vislumbra desde ahora una gestión estatal destinada a la formación de organizaciones de tipo corporativo entre los microempresarios, las que vendrían a sumarse a las que se tratan de impulsar desde hace algunos años entre los consumidores. No obstante resulta difícil pronosticar si estos gérmenes de organización habrán de madurar, adquirirán ropajes institucionales regulados o se convertirán en canales principales de articulación entre la sociedad civil y el Estado.

Todo esto no implica que la gestión estatal de las nuevas organizaciones populares conduzca a suprimir necesariamente las expresiones autónomas del nuevo proletariado que viene configurándose. Esas modalidades organizativas reguladas podrán efectivamente, en cuanto tales, servir de camisa de fuerza a la movilización popular. Pero ese corsé puede ser roto por el movimiento. En Colombia se advierte que, por lo pronto, la iniciativa para trazar el molde de las nuevas organizaciones la han tenido los mismos actores del proletariado. La Iglesia popular o de base, los dirigentes comunales, los sindicalistas o ex sindicalistas, etcétera, han ido forjando estructuras de comunicación, coordinación y solidaridad que escapan en su mayor parte al control tutelar del Estado o de los mismos partidos políticos.[24] El denominador común de estas estructuras es que cortan deliberadamente con los viejos conceptos que separaban la lucha económica de la lucha política; pero lo hacen animadas por un cierto "basismo" o inmediatismo que rara vez trasciende los contornos de la dominación capitalista. Lo cual lleva a decir, en síntesis, que las nuevas formas organizativas han desdibujado la pugna anticapitalista que se hallaba anteriormente en el horizonte; pero, en cuanto vehículos de lucha, podrían ser atravesadas en cualquier momento por destellos que replanteen ese horizonte. Para lo cual cuentan, por lo demás, con la ventaja de la ausencia de un marco legal.

La crisis política: el fracaso de la pareja represión/conciliación en Colombia

Existen otra expresión y otro entendimiento de la crisis, esta vez más circunscritos a Colombia, que sirven también para encuadrar los nuevos movimientos sociales del país. En esta acepción, la crisis engloba los siguientes fenómenos:

— El reconocimiento de actores políticos hasta ahora ignorados, los

cuales no encuentran aún ubicación dentro de las instituciones constitucionales.[25]

— La aceptación usual de que las instituciones constitucionales no recogen o incorporan a algunos de los más influyentes actores políticos, como lo son la guerrilla y los movimientos cívicos. La primera, repudiada y reprimida hasta ahora; los segundos, fundamentalmente ignorados.

— El fracaso de las estrategias de represión o concesión, el estancamiento y aparente fracaso de la estrategia de conciliación e incorporación de esos nuevos actores políticos.[26]

— La posibilidad de que esta crisis trascienda el mero proceso de desajuste/ajuste institucional, esto es, que no culmine con una ampliación de la democracia burguesa sino que desemboque eventualmente en formas políticas novedosas, acaso de transición hacia una sociedad no capitalista.[27]

Así planteadas las cosas, esta crisis se sitúa en dos planos: el de la representatividad o el funcionamiento democrático burgués y el del cuestionamiento de todas las formas burguesas de organización de la sociedad. En esta sección sólo nos ocuparemos del primero de estos planos. Es, si se quiere, una disfuncionalidad que conduce a la falta de legitimidad del régimen. Estaría ubicada en un terreno distinto y de menor envergadura en relación con la otra crisis expuesta más arriba. Sin embargo, existen numerosas conexiones entre los dos tipos de crisis, algunas de las cuales coadyuvan a entender y a enmarcar los nuevos movimientos populares.

En primer lugar, el contexto de crisis y de reorganización del capital ya descrito impone una dualidad de canales de acumulación que deja poco o ningún margen para las concesiones a las clases trabajadoras. El capitalismo doméstico se ha visto forzado durante los últimos años a sostener a las empresas atrasadas supérstites y a destinar fondos en búsqueda de nuevos proyectos de inversión o de impulso a la nueva articulación empresarial. Estas limitaciones impiden, obviamente, el cabal desarrollo de una política de recuperación de la legitimidad por la vía del gasto público o de los subsidios crediticios. Dicho de otra manera, la transición o reorganización actual es un mal momento para que el gobierno recupere la legitimidad por la vía de la integración y la conciliación.

En segundo lugar, los actores políticos que pretenden ir o que se pretende llevar a las instituciones de representación consagradas en la Constitución política se han visto abocados a colmar las exigencias de universalidad que ordenan los nuevos movimientos. Ya habíamos hablado de la configuración de los llamados paros cívicos. Más adelante nos detendremos en el análisis de las mutaciones del movimiento guerrillero colombiano.

Por lo pronto, el plano de la crisis que hemos descrito en primer

lugar parece descartable. ¿Por qué? Porque las fuerzas y las circunstancias de la lucha han condenado al fracaso la vía de la pacificación, del diálogo y de la apertura democrática reclamada hace unos años por todos y hoy sostenida únicamente de manera formal por el gobierno de Betancur,[28] y por una parte de la guerrilla.[29]

Sucedió que, derrotada la estrategia de eliminación de la guerrilla por la vía de la represión en los años '70, todos los partidos políticos propusieron la vía de la paz, la tregua o la conciliación en ocasión de la campaña electoral que llevó a la presidencia al actual gobierno de Belisario Betancur en agosto de 1982. Hoy, después de casi tres años de estar Betancur en la presidencia, se hace cada día mas inminente la ruina del proceso de paz y la apertura democrática que le era concomitante. Sin embargo, no cabe duda de que toda reforma política o económica adoptada por el Legislativo o el Ejecutivo constitucionalmente establecidos dependerá en su eficacia y efectividad de la actitud que adopten la guerrilla y las organizaciones populares que le son cercanas o del momento de lucha en que se encuentren éstas. El mismo estilo de gobierno del presidente Betancur, de conciliación y equilibrio, su populismo consistente en los esfuerzos por atraer al proceso político ordinario a sectores hasta ahora alejados de él, su plataforma tercermundista y su participación en el Grupo de Contadora para Centroamérica, sólo pueden entenderse por referencia a los avances militares de la guerrilla y, sobre todo, a su creciente arraigo dentro de otros organismos populares. Así las cosas, queda establecido el escenario constitutivo del segundo plano antes citado: escenario de relativo equilibrio de las fuerzas políticas, el cual da pie a que numerosos grupos apunten a transformaciones que, en mayor o menor grado, trasciendan la democracia actual. Tal es el tema de la próxima sección.

La crisis política es la crisis de fondo de la Colombia de hoy

Sería miope pensar que la crisis de la sociedad colombiana se centra en el problema económico. La crisis económica es común a todos los países de la región y, con distintos grados y manifestaciones, cobija a la mayoría de las naciones de la órbita capitalista. Como todas las crisis, es a la vez agonía de unas formas de valorizar el capital y surgimiento de otras.

Ciertamente, esas nuevas modalidades de valorización y acumulación no se han plasmado aún en Colombia y nadie puede predecir con certeza cuáles serán los sectores y las ramas de mayor rentabilidad y crecimiento en los años venideros. ¿El agro o la industria? ¿Las confecciones o la imprenta? ¿La electrónica o la metalmecánica? Preguntas que hoy en día dejan perplejos por igual a gobernantes y empresarios domésticos.

Empero, puede decirse confiadamente que la devaluación de la moneda, la orientación de la producción hacia el sector externo o de exportación, la apertura de las importaciones (así sea tímida), la desvalorización del capital interno y la reducción de los costos salariales y de la estabilidad laboral habrán de abonar el terreno en el que germinarán inevitablemente las nuevas modalidades de la extorsión capitalista, las que se basan en la sustitución del capital fijo por capital circulante o de pronta y predecible valorización.[30]

Algo diferente ocurre con la crisis política colombiana. Puede decirse, inclusive, que sus características se contraponen una a una a las de la crisis económica. La fragilidad del régimen y la esterilidad de las instituciones vigentes sólo encuentran parangón en unos pocos países, cuyo número no supera tal vez el de los dedos de las manos. No se vislumbra aún el orden nuevo que ha de reemplazar a los viejos partidos políticos o al igualmente decadente Congreso nacional.[31] Los organismos del pasado fenecen sin que surja una nueva idea en su lugar. Y, según dijimos al hablar del primer plano de la crisis política, ni siquiera se observa que los medios empleados sean los adecuados para crear el clima propicio en el cual germinaría un nuevo, creíble y representativo andamiaje institucional.

No en vano se admite comúnmente que el primer problema colombiano es la paz o la resolución del nudo político. Al lado de esto la crisis económica es juego de niños.

Vías sinuosas y hasta esquivas llevan día a día a una confluencia de los senderos que habrán de librar batalla a muerte. El carácter ineluctable de esta aproximación bélica nos distingue de otras sociedades de régimen estable y aun de aquéllas que han visto renacer (así sea fugazmente) su esperanza de unidad nacional y de robustecimiento institucional: la Argentina de Alfonsín, el Perú de Alan García, el Brasil de Tancredo Neves y en menor medida el Uruguay de Sanguinetti. La nuestra es, desde este punto de vista, una situación más próxima a la boliviana, sólo que en Colombia no se puede invocar un glorioso pasado revolucionario que hay que salvaguardar ni los bandos se reconocen en estado de relativo equilibrio y de inacción por imposiblidad hegemónica como sucede en ese país mediterráneo. Es también una situación semejante a la de algunos países centroamericanos; pero los tiempos y las oportunidades son distintos en cada caso y la colombiana es una sociedad más sutil y compleja, lo que exige organismos y procesos de más lenta maduración.

Nótese entonces que al referirnos a la cuestión de la paz, los colombianos nos referimos a luchas, procesos y aspiraciones que desbordan por entero los diálogos que sobre esta materia se han venido adelantando entre gobierno, partidos, gremios del capital y representantes de la guerrilla o voceros de los sectores populares. A diferencia de lo que constituye por estos días el objeto y el horizonte de la lucha política en la Argentina y en el Uruguay, o aun en el Brasil, en Colombia la cuestión de la paz pone en la agenda de la historia el dilema de transigir o no con los pilares de la sociedad actual y anuncia como utopía concreta la constitución de un nuevo orden social.

Aquellos países se entretienen en los pormenores de la apertura democrática o apertura política: cómo restablecer la actividad partidista, cómo vincular a la escena pública a grupos que no tuvieron organización, reconocimiento o actividad bajo las dictaduras, cómo prevenir la usurpación de esos espacios políticos en el futuro, cómo purificar la sociedad de la perversión personificada en ciertos órganos o agentes, etcétera. La recuperación del terreno perdido los hace mirar con añoranza el pasado y rehuir temerosamente la visión del futuro. Abatidos por años de sufrimiento y frustración, tachan de "aventurerismo" toda vía alternativa de "hacer política" y toda nueva conceptualización de lo que es política, de las relaciones de ésta con la economía o de la separación entre las esferas privada y pública. No piensan en una nueva ética, sino que se aferran a la precedente. Sus anhelos de restablecer el régimen político ordinario los hace subordinar las expectativas reivindicativas y las ansias de manejo económico nacionalista a la recuperación y a la readecuación del capitalismo interno. E inclusive velan su apego a la democracia burguesa del pasado con denominaciones novedosas y juegos teóricos simbólicos. En el mejor de los casos, su ambición de una democracia alternativa se halla circunscrita a esferas parciales y sobredeterminadas de la vida capitalista de nuestras sociedades: la recuperación de una "cultura nacional" o "cultura popular", el afianzamiento de la voluntad individual, familiar o colectiva en los "espacios libres" de la vida cotidiana, la identificación de ejercicios espontáneos de autonomía ciudadana como pueden serlo el baile o el deporte, etcétera. Y como fruto de todo lo anterior, sus intelectuales prefieren ignorar, descartar o menospreciar los caminos de búsqueda trascendental que están recorriendo actualmente otros países, aun aquellos localizados dentro del mismo mapa latinoamericano.

Debemos señalar sin ánimo triunfalista y menos aun aleccionador, sino como simple testimonio histórico del presente, sujeto a los vaivenes e incertidumbres del porvenir, cuán distintas son nuestras faenas y preocupaciones de hoy. Observemos las disyuntivas en juego en los diálogos y procesos de paz que se han desarrollado en Colombia en los últimos años.

Recordemos previamente que los diálogos y los demás canales de las estrategias de participación han sido impuestos por la energía de los movimientos populares y han sido concebidos y puestos en práctica conjuntamente por éstos y el gobierno, el Congreso, los partidos políticos y hasta los gremios de la producción y distribución. Han sido, si se quie-

re, una salida común a una situación de relativo equilibrio ocasionada por el auge de la guerrilla y de los mismos movimientos y por el temor del bloque a la confusión de estos últimos entre sí y con el resto del movimiento popular. Empero, el hecho de ser generalmente aceptados no les quita a esos diálogos y procesos el carácter de estrategia particular con la que cada grupo o fracción pretende avanzar y consolidarse en perjuicio de los otros.

Las disyuntivas de fondo con las que se enfrentaron los movimientos populares a propósito de la tregua o de la paz, más allá de sus estragias grupales o coyuntulares, han sido las siguientes:

— Cejar en la lucha ante los ofrecimientos de revitalización democrática propuestos por el gobierno o mantener la pugna por una democracia alternativa, independiente de la suerte de las reformas constitucionales.

— Incorporar la energía combativa dentro de los aparatos partidistas o cuestionar, ya sea de manera particular o esencial, el significado de éstos y crear múltiples formas paralelas de materialización, de expresión y de realización de la voluntad popular.

— Institucionalizar los denominados "movimientos cívicos" y las otras manifestaciones de imposición popular, esto es, aceptar las propuestas de recuperación de "la democracia participativa" en los planos local y regional o mantener su actual margen de libre surgimiento.

— Sumarse a los procesos electorales y depositar en ellos y en los órganos representativos vigentes la fe y la esperanza de un pueblo que los ha mirado con indiferencia durante décadas, o repudiar y negar toda credibilidad a esa vía castrada y distorsionada de canalización de las fuerzas sociales. Reclamar, alternativamente, la confusión de sociedad civil y Estado y la eliminación de la distinción entre los campos público y privado. Exigir, también, la supresión de la igualdad formal y abstracta, las leyes del mercado y la libertad contractual para imponer en su lugar otras reglas de distribución de la producción y de asignación de los recursos, asadas ahora en necesidades concretas y en determinaciones particulares.

— En ese mismo orden de ideas, convenir con las demandas invisibles de los procesos de acumulación y de readecuación del capital, pactando y ejecutando los procesos de ajuste correspondientes, o violentar esas ataduras etéreas e indelebles aun a costa de costosas y dolorosas readecuaciones de la producción y la distribución. En pocas palabras, los dos planos de la crisis política a los cuales hicimos referencia más arriba.

No es poco, pues, lo que se disputa en torno del proceso de paz. La beligerancia e intransigencia de los sectores populares, que limita, reorienta, cuestiona, desiste o denuncia una y otra vez ese proceso, se explica por la latencia de una opción social fundamental y porque el vigor de múltiples e inicialmente inconexas manifestaciones de lucha le han dado posibilidad a esa opción. El obstinado mantenimiento de una utopía cimenta la pertinacia, la terquedad, la indiferencia y el escepticismo con que se acercan los sectores populares a los coqueteos de la paz. La incansable creación de causas universales a partir de reivindicaciones particulares, genera —con avances y reveses— un bloque popular de pretensiones hegemónicas.

Ni tímida ni presumida, fruto paulatino de distintas intuiciones, paciencias y urgencias de los más diversos actores, animada en ocasiones por inacabados y hasta incoherentes replanteamientos teóricos, encuentro de islotes con un destino común, esa sumatoria de fuerzas populares que vemos hoy altiva y optimista disputa la organización social (el poder en un sentido que trasciende los límites de lo que se entiende corrientemente como política).

Sujeto sin proceso y proceso sin cabeza, se puede hoy, al cabo de muchos años de historia, visualizar al bloque popular como un bando inevitablemente llamado a disputar la supremacía en el terreno de batalla. Ya ha estado, desde luego, batallando por igual el campo bifurcado en represión y concesión que le define su contraparte. Y hasta puede decirse que ha creado su propio campo de actores y de terrenos: la guerrilla, los movimientos cívicos, las fusiones entre guerrilla y movimientos cívicos y de ambos con el movimiento sindical y el indígena, el campo de la participación —no participación, el de la institucionalización— no institucionalización, el de la convivencia entre reivindicación armada y reivindicación negociada, el del paro reivindicativo inmediato que es a la vez utópico— político, etcétera.

El otro bando posee también múltiples caras y fértiles manantiales de estrategias. Culminación insaciable de interminables historias, no forma parte de este estudio de movimientos sociales puesto que ya ha sido descrito y examinado en otros trabajos. Aquí sólo nos interesa en cuanto contradictor que fija el no ser y la esperanza de ser de los movimientos sociales. Y nos interesa también, para efectos coyunturales, estudiar los alcances y las posibilidades de sus grandes estrategias de los últimos tiempos.

Singulares son las modalidades de aproximación fatal de los bandos y propios son los múltiples ropajes y maquillajes con que se cubren el rostro y el cuerpo a cada instante. La inagotable creatividad y la insaciable dinámica de estos desarrollos colombianos apenas si guardan proporción con la inmensa dificultad para encasillarlos y comprenderlos que tienen nacionales y extranjeros. Se suele hablar de un mundo "macondino" para describi la libre y misteriosa alucinación que parece guiar caprichosamente estos fenómenos, cual si estuviéramos en el Macondo de García Márquez.

Pero ese calificativo, en vez de aclarar, elude el esclarecimiento y confunde en una nube de estupefacción sucesos que reclaman interpretación y tientan como ningún otro a los ejercicios de vaticinio.

El primer paso para un entendimiento cabal ha de ser la disección de: 1) el bando de la rebeldía popular y 2) las estrategias del capitalismo, todo ello entendido dentro del contexto global de los límites y las exigencias impuestas por las transformaciones contemporáneas del capital a las cuales ya aludimos. Es éste un método que reúne lo subjetivo y lo objetivo hasta el punto de hacerlos inseparables: los sujetos colectivos construyen su historia dentro de marcos que les son ineludibles pero que se rehacen y redefinen por saltos como fruto del movimiento del conjunto.

Ha de advertirse que cualquiera sea el actor del que estemos hablando, todos sin excepción han buscado y continúan buscando fortalecer su legitimidad y su credibilidad en cuanto movimientos capaces de cohesionar a la nación, a través de una doble estrategia de coacción (las más de las veces armada) y de diálogo o conciliación. Ya se trate del gobierno (por ejemplo el gobierno de Betancur), de los partidos políticos tradicionales, de la guerrilla, de los gremios representativos del capital y aun de los movimientos cívicos, sindicales, campesinos o indígenas, la tregua, la paz o el diálogo no son fines en sí mismos sino peldaños en la ruta hacia la conquista de un nuevo escenario de lucha para la obtención de un fin superior. Es decir, no se está frente a una situación insalvable de equilibrio que llama a la pasividad y al cansancio sino ante una situación de puja por la ruptura favorable del equilibrio.[32] Lo paradójico es que, dada la conciencia generalizada de la existencia de un equilibrio, y el rechazo instintivo de la población a un desenlace suicida de guerra civil, todos los actores tienen que aceptar forzosamente la vía del diálogo y de la tregua para aspirar a la simpatía o a la adhesión ciudadana. De manera que la paz se convirtió desde los meses previos a la iniciación del gobierno de Betancur (agosto de 1982), y durante unos tres años de la presidencia de éste, en el camino estratégico común, impuesto por las circunstancias, por el cual transitan diversas y a veces antagónicas estrategias. Sólo así se puede comenzar a entender este intrincado rompecabezas de estrategias y subestrategias coherentes o contradictorias adoptadas por cada grupo a lo largo de estos tres años de tregua, amnistía e indulto.

Porque prácticamente todos los grupos, de uno y otro lado, pueden ser acusados de haber violado los acuerdos o de haber interpuesto obstáculos más o menos sustanciales para la culminación en un nuevo pacto social y en una paz duradera. Ya veremos, al examinar los intereses de algunos de los actores, cómo cada uno de ellos asignaba estratégicamente distintos significados y alcances a ese pacto social al cual todos acudían y del cual simultáneamente todos rehuían.

Tendencias hacia la unión de los movimientos populares

¿Cuáles son, pues, los "actores" de la política colombiana y qué caminos vienen recorriendo hacia su intersección o choque?

Tenemos el bando de oposición que tiende a configurarse en antagonista irreductible frente al actual orden de cosas. Tratemos de precisar sus contornos o, mejor, de explicar por qué no tiene un perímetro identificable.

— Es un bando que se va construyendo *al margen del orden institucional,* carente de reglas y de procedimientos definidos por el Estado. Son los llamados " movimientos cívicos populares" que no pueden ser encasillados en ninguna de las formas organizativas reconocidas: ni en los partidos, ni en la Iglesia, ni en las juntas de acción comunal, ni en los sindicatos. Se reúnen a veces con ellas y las trascienden por momentos para luego desvanecerse dejando nuevamente visible y aparentemente cada uno de esos cascarones institucionales.

La guerrilla es congénitamente antiinstitucional y los movimientos campesinos e indígenas se encuentran en buena medida subsumidos en ella o en los paros cívicos.

— Es, por ende, un *bando indeterminable y anónimo cuando no clandestino.* No existen organismos permanentes ni sedes fijas ni miembros con carnet en los paros cívicos. La clandestinidad del movimiento guerrillero lo hace inasible por las autoridades y las frecuentes escisiones o adhesiones espontáneas al bando de oposición lo hacen incontable para sus propios jefes. Las separaciones regionales lo fragmentan y, sobre todo, los distintos grados de pertenencia al movimiento lo diluyen imperceptiblemente en el mar de las actividades civiles. Recuérdese que en Colombia se es frecuentemente campesino de día y guerrillero de noche; informante o vigía por razones de temor o simpatía, si no de adhesión formal, sindicalista en la empresa y guerrillero en la ciudad, colaborador impensado y momentáneo en un episodio pasajero de lucha, etcétera. Poco a poco cobra vigencia la máxima de Mao en el sentido de que la guerrilla tiene que mimetizarse con su medio y moverse en él como un pez en el agua.

— Es también, como corolario, un bando que se construye y reconstruye constantemente *rompiendo las barreras* que pretenden encasillar y aislar a las clases trabajadoras y reducir y dividir su horizonte de lucha. Empleados y desempleados, sindicalistas y no sindicalistas, colonos y minifundistas, mestizos e indígenas coinciden en estos movimientos cual espectadores en un estadio de fútbol que tuviera una sola tribuna. Este bando es en sí mismo considerado un espacio propicio para la gestación de causas universales que sinteticen la aspiración popular al control integral de la sociedad.

Factores de división de los movimientos populares. Las causas "objetivas"

No obstante los anteriores factores de infinita amplitud y de inclinación a la unidad, persisten límites y escisiones que se sobreponen a la vocación de este bando y a la voluntad de congregación de sus miembros, cuando ella se halla presente. Son diferencias que provienen en buena medida de las antiguas barreras de clases, capas y fracciones de clase. Barreras que parecían distinguir irremediablemente al campesinado del proletariado, a éste del lumpenproletariado o al trabajador manufacturero del trabajador del sector de los servicios, que todavía subsisten parcialmente y aún tienen cierta eficacia para impedir la configuración de causas universales entre las clases trabajadoras.

Esa segregación, basada en la existencia misma de las clases desposeídas, llegó a ser tan determinante en el pasado que se la consideró esencial o insuperable hasta el punto de que servía de fundamento a la constitución de "la clase en sí" misma considerada, independientemente de su poder, su conciencia o su actuación. Eran separaciones indelebles que sólo se corregían para ciertas ocasiones mediante la formación de coaliciones o frentes que reunían en una sola plataforma los intereses diferentes de las distintas clases o fracciones. Hoy las consideramos susceptibles de ser borradas (o cuando menos replanteadas) por el mismo capitalismo, ávido como está de poner a competir a todos los trabajadores en un mismo y único mercado laboral.

La división del sindicalismo

Otras divisiones emanan de las cercas tendidas por el capital al campo de acción de una misma clase o fracción. Tal es en Colombia el caso del sindicalismo. Entre un 30 y un 40 por ciento del sindicalismo colombiano, el llamado sindicalismo democrático, sigue fundamentalmente circunscrito al ámbito de la empresa, de la lucha por el nivel salarial o prestacional y de los parámetros del orden constitucional y de la acumulación de capital. Hasta el punto de que el apelativo de "democrático" se debe a su reticencia a cuestionar al régimen vigente. De líderes curtidos en su función de intermediación y conciliación, y distanciados o indiferentes por ende a toda expresión autónoma de las bases, este tipo de organización sindical se ocupó de torpedear la fusión del movimiento obrero con movimientos urbanos más amplios a lo largo de la última década. Y en los años '80, cuando se inscribió en la agenda del movimiento sindical su fusión con los movimientos cívicos urbanos o rurales, con los movimientos guerrilleros y con los movimientos indígenas, ese mismo tipo de sindicalismo se encargó de denunciar los llamados "paros políticos" o de causas universales y fundamentales y de participación de los grupos guerrilleros. Embriagados sus dirigentes por las prebendas que les brindan consuetudinariamente gobierno y capital, permanecen miopes a la decadencia de la organización sindical y del tipo de empresa que les dio origen. No pueden percatarse de que este mismo capital que los adula los ha condenado a muerte ni de que su única tabla de salvación es justamente transformarse en un sujeto más amplio, dentro del cual los llamados movimientos cívicos nacionales habrán de ocupar un lugar fundamental.

La fragmentación de los movimientos cívicos

El movimiento popular se halla también entrecortado por las franjas que marca el desigual desarrollo regional y local. Es éste el principal factor de segmentación del llamado movimiento cívico.

Es difícil reunir en un programa común las reivindicaciones nacionalistas, de comunicaciones o de infraestructura estatal demandadas por los habitantes de la región rural del Arauca en la frontera medio oriental de Colombia con las aspiraciones más puntuales de los habitantes de zonas semirrurales del departamento occidental de Antioquía que han protestado vehementemente contra las tarifas del servicio de energía eléctrica. Tampoco es fácil reunir las causas de uno y otro con la de los residentes en medianas y grandes urbes que luchan contra la erosión, la inundación y las condiciones infrasanitarias de sus predios. De allí que siga siendo difícil aglomerar todas sus exigencias inmediatas, y que los intentos de conformación de organizaciones o "coordinadoras" de movimientos cívicos del nivel nacional —aunque pioneros e imaginativos— hayan tenido que luchar contra las esclusas de la heterogeneidad.

Obsérvase de paso que la heterogeneidad de que hablamos no se predica solamente de la naturaleza misma de las causas sino también de la desigualdad temporal con la que ellas se presentan en las distintas regiones o localidades. Es una irrupción intermitente de situaciones explosivas que impide su mutuo reforzamiento y permite la concentración regional de la gestión represiva o conciliadora del Estado.

Con todo, no creemos que esa desigualdad en el contenido o en el tiempo de las causas detonadoras de los movimientos cívicos impregne a éstos de una parcialidad o una debilidad singulares. También eran aparentemente distintas las reivindicaciones de un sindicato a otro o de una huelga a la otra. Los conflictos brotaban a destiempo en las distintas empresas y cada uno de ellos parecía tener una vigencia efímera. Sin embargo, existían causas y momentos en los cuales todos ellos se agrupaban y actuaban como fulminante de un paro nacional. Otro tanto sucede con los determinantes que provocan la descarga de los movimientos cí-

vicos, de los movimientos indígenas o de los movimientos nacionales de unidad popular.

De manera que, en nuestra opinión, los únicos contrastes válidos entre los movimientos cívicos y el movimiento sindical estriban en la mayor cobertura y universalidad de los primeros y en los grados de libertad o autonomía que ofrece su falta de institucionalidad. Son movimientos que pueden actuar como un fogonazo simultáneo para todos los estratos de trabajadores, en torno de causas generales que trascienden la particularidad, la negociabilidad, el pragmatismo y el inmediatismo que pretende imprimir el capital a toda rebelión popular. De allí que sus actuaciones revistan más evidentemnte un tono político. Su carencia de institucionalidad actual se debe a la dificultad (quizá subsanable o transitoria) que afronta el capital para regular relaciones indefinidas, reivindicaciones ilimitadas, actores imprecisos y lugares sin mojones.

En vano ha intentado el Estado colombiano someter esas movilizaciones, canalizándolas a través de las instituciones vigentes; alcaldes, concejos municipales, juntas comunales o de defensa civil, párrocos, partidos políticos, etcétera, todos han fracasado cuando intentaron someter las gestas cívicas a los parámetros y a los fines de su propia organización mediadora: o se suman al torrente popular o son desbordados por él.

Intento de disección del movimiento guerrillero colombiano: las diferencias de concepción, organización y acción y la estrategia divisionista del gobierno de Betancur

La guerrilla actual es un fenómeno nuevo. Fruto de rupturas, de replanteamientos y de incesantes creaciones, aparece hoy con una envergadura, una orientación y un significado que no han sido debidamente escudriñados por el resto del movimiento popular y acaso tampoco por los mismos guerrilleros. Parte de la dificultad es, desde luego, la falta de acceso a información de primera mano; pero quizás el mayor obstáculo lo constituye la falta de distancia respecto de fenómenos que, como la guerrilla colombiana, nos sorprende diariamente con hechos novedosos que crean y recrean el entorno social en el cual nos movemos. Y no podemos dejar de mencionar la dificultad cognoscitiva derivada de la originalidad de los procesos que vivimos, la que impide el trasplado simple o irreflexivo de conceptos y de teorías estereotipados sobre la guerrilla, adecuados tal vez a otros contextos.

Hemos esbozado en otros trabajos algunas de las principales características del movimiento guerrillero colombiano.[33] Lo hemos diagramado en su conjunto, sin prestar atención a sus divisiones superficiales o de fondo. Hemos reconocido su actitud de búsqueda imaginativa de caminos idóneos para la transformación de la sociedad colombiana. Ahora juzgamos pertinente cuestionarnos acerca de sus divisiones internas, de su interacción con el resto de la sociedad y acerca del tipo de organización social que van gestando de acuerdo con lo que podemos entrever a través de sus propias acciones u omisiones, y comenzar a preguntarnos en qué medida continúan operando las limitaciones consustanciales a esta forma de lucha y hasta qué punto se trata de luchas de otro género, libres de las cortapisas congénitas que enfrenta la lucha armada aislada.

¿Cuáles son esas restricciones que hacen de la guerrilla una causa políticamente ambigua, en cuanto expresión de rebeldía que puede al mismo tiempo llevar a la pasividad y a la desorganización de las clases trabajadoras, cuando no al contubernio de éstas con la defensa del orden existente o a su acatamiento sumiso de la nueva autoridad en caso de victoria militar de la guerrilla? ¿Dónde observamos síntomas de corte con esas deficiencias connaturales, si bien no necesariamente su total superación?

La lucha armada supone un corte radical con las reglas de vida (que son también de sujeción) bajo el capitalismo. Desmiente el monopolio militar del Estado, rechaza el supuesto campo de libertad y de autonomía otorgado a los civiles y se lanza en campaña abiertamente subversiva y necesariamente clandestina. Salvo en circunstancias sociales excepcionales, esa posición es asumida inicialmente por reducidos grupos de personas las cuales, a pesar de su minoría, se ven forzadas a imponer su vía de lucha al resto de la población. Lo contrario sería coordinar y subordinar la contienda guerrillera a ritmos y movimientos que escapan a la lógica marcial. Es decir, el guerrillero se halla actualmente trenzado en exclusiva batalla a muerte, difícilmente reversible; no puede distraer su atención en consideraciones distintas de su propia causa, so pena de perder irremediablemente la guerra y en ella su razón de ser. La guerrilla se vuelve entonces, por fuerza de las circunstancias en que se ve envuelta e independientemente de las intenciones de sus dirigentes, un movimiento exclusivo, excluyente de otras formas de lucha, imperativo y unilateral, tanto frente al Estado cuanto respecto de las mismas clases trabajadoras.

Sin embargo, ha habido movilizaciones inicialmente guerrilleras que se conjugan más adelante con una efervescencia generalizada de lucha y todos al unísono, armados o no, producen un cambio de régimen. Es lo que se vio, para no ir más lejos, en la Nicaragua de fines de los años '70.

En el caso colombiano, la guerrilla experimenta con modalidades distintas a las de su pasado nítidamente foquista. Al convertirse en un poder paralelo, como lo ha llegado a ser efectivamente en algunas regiones, adopta posiciones de cohesión, de representación, de protección y hasta de sustento de numerosas capas de trabajadores. Su fuerza relativa durante los últimos años obliga a que los temas, las decisiones y las ejecuciones estatales queden condicionados, de manera implícita o explícita, a la reacción de los grupos armados. De allí que la guerrilla opere de he-

cho como una fuerza de apoyo tácito a las reivindicaciones del resto del movimiento popular. Su sola presencia vigila cual *ombudsman* las disposiciones públicas y el comportamiento privado, y se yergue amenazante contra la medidas más notoriamente oprobiosas. En ocasiones incorpora expresamente las exigencias populares más sentidas en sus programas de negociación y lucha; ha logrado un cierto grado de penetración y arraigo en la vida civil o en las ocupaciones ordinarias, ya sea campesinas, indígenas, sindicalistas, de movimientos cívicos, etcétera. Presta parcialmente servicios propios del Estado benefactor en las zonas por ella controladas: salud, educación, nutrición, administración de justicia, etcétera. Su sola continuidad, excepcional en América Latina, es indicadora de viabilidad; la incorporación a sus contingentes es alternativa de supervivencia para muchos desposeídos. Su repudio a las formas más ruines y estériles de la violencia (interrumpida a veces más por unos grupos que otros) es prenda inicial de responsabilidad y anuncio de un espíritu edificante. Es innegable que la guerrilla colombiana es, por todo lo anterior, símbolo de poder y sugerencia de una vía alternativa para vastas masas desesperanzadas. Y podría convertirse en una esponja que absorbiera o sustituyera las luchas populares, como también en un embudo que concentrara y dinamizara los demás cauces de expresión de la inconformidad popular.

El examen de esas continuidades o de esas rupturas de la lucha guerrillera colombiana exige penetrar la anatomía propia de cada organización y comenzar a precisar su lógica interna y su significado actual. Lo cual nos permitirá, de paso, escudriñar las formas y contradicciones que separan y a veces enfrentan a las distintas facciones del movimiento guerrillero. Estas provienen, a su vez, de las diferencias estratégicas entre las distintas facciones de la lucha armada.

Esos distintos puntos de vista tienen que ver con su inserción en los procesos de transformación social y con los medios para cumplir esa misión. Y ellos dan pie, a su turno, para que el gobierno recurra a estrategias separadas y a tácticas divisionistas respecto del movimiento guerrillero.

Sería dispendioso elaborar una síntesis de los planteamientos implícitos o explícitos de cada movimiento a lo largo de su decurso histórico. Y esa síntesis no podría hacer justicia a la inmensa riqueza y a la inagotable dinámica de esos movimientos. Optamos más bien por contrastar, de manera estereotipada, las concepciones estratégicas que se desprenden de las actuaciones recientes de dos de los principales movimientos: las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el M-19 o Movimiento 19 de Abril.

(i) Las FARC asignan prioridad a la construcción de su propio aparato político militar. La suya ha sido una campaña de varias décadas y

todavía tienen aliento para largo plazo. Sin premuras ni aventuras, programan y proyectan su acción con miras a lograr paulatinamente la expansión de su propia organización.
El tiempo del M-19 no se mide en décadas sino en lustros. irrumpieron tardíamente en el mundo guerrillero y lo penetraron aceleradamente. Mediante golpes de opinión y escándalos publicitarios, se dieron a conocer y magnificaron exponencialmente su tamaño real. Se han basado y se siguen basando en el supuesto de que las deficiencias en la solidez o en la envergadura de su propio aparato pueden ser compensadas con creces por su interacción con simpatizantes o con sectores externos a su propia organización.
Si se quiere, las FARC miran hacia adentro mientras que el M-19 mira hacia afuera.

(ii) El énfasis de las FARC en la construcción de su propio instrumento de acceso al poder se ve corroborado por sus vinculaciones formales o informales con un partido político pequeño pero de más de cincuenta años de historia: el Partido Comunista de Colombia. Consolidado en alto grado, de rígida estructura jerárquica y de concepción vanguardista intelectual-obrera, "el partido" (como se lo conoce comúnmente) se mueve lentamente en su organización interna y en sus acciones externas. Madura programas, crea sistemas operativos y afilia o desafilia miembros como si su tiempo fuera el mismo de los geólogos y el resto de la sociedad permaneciera estática; no tiene afanes por cuanto goza en el fondo de la íntima convicción de que ese órgano en construcción es y será el partido revolucionario. Aunque podría existir cierto divorcio entre el partido y la organización guerrillera dada la base abrumadoramente campesina de ésta, de manera paralela a como se producen ocasionales desacoplamientos entre el partido y las organizaciones sindicales que se reclaman de él, todos coinciden en advertir su paciente labor de robustecimiento de la estructura interna.
Entre tanto, el M-19 carece de una institución partidista que le sirva de vínculo orgánico con la política entendida en el sentido corriente. O de un brazo sindical con el cual se relacione formando un solo cuerpo. Sólo cuenta con simpatizantes anónimos entre los minúsculos y desvencijados partidos de la izquierda y quizás entre algunos grupos agazapados dentro de los tradicionales partidos Liberal y Conservador. Otro tanto puede decirse de sus etéreos lazos con el movimiento sindical.

(iii) En vista de lo anterior, se comprende que la estrategia de las FARC sea predominantemente *organizativa* mientras que la del M-19 es principalmente *insurreccional*. Este último grupo, más que aquél,

se mira a sí mismo como detonante en sentido estricto. Busca producir el estallido en un terreno que supone regado de combustible explosivo. Se trata de despertar al monstruo de las mil cabezas, de avivarlo con acciones simbólicas de poder, de solidaridad, de capacidad, de autogestión popular. Por ello, las maniobras del movimiento 19 de Abril están cargadas de mensajes alegóricos y emblemáticos. Tienen que ser, por fuerza de las circunstancias, visibles y hasta escandalosas. No caben en su estrategia el silencio sigiloso ni la clandestinidad hermética. El suyo es un mensaje notorio y permanente; sus ejecutorias, manifiestas y sonoras.

¿Cuánto va, para citar un ejemplo atinente a las estrategias de reclutamiento seguidas por los dos movimientos en los últimos meses, de los campamentos barriales del M-19 a la afiliación selectiva, discreta y supervisada de campesinos por parte de las FARC? Los primeros son abiertos al público, localizados en barrios obreros o marginados de las urbes grandes o medianas, anunciados con banderas, escudos o himnos alusivos a la organización, de vocación temporal evidentemente efímera por cuanto constituyen una afrenta intolerable para el monopolio militar del Estado, aun en tiempos de tregua. Allí se imparte, ciertamente, instrucción marcial; pero nadie puede confiar razonablemente en constituir un ejército paralelo, a la luz del día y con adeptos de pasado desconocido. Otro es el significado principal de los campamentos: acumulación masiva de poder, recado de fe en vías diferentes de lucha, bando de levantamiento. ¿Y el destinatario de todos estos mensajes? El pueblo anónimo e inasible.

(iv) Las consideraciones anteriores sirven de fundamento a otra diferencia entre las dos organizaciones guerrilleras: la conceptuación de su interlocutor privilegiado y la relación que se establece con él. Tratándose de las FARC, el interlocutor es una clase social bien definida, el campesinado, y dentro de ésta, los colonos, los aparceros y los minifundistas. Otros segmentos de clases trabajadoras son atendidos, según dijimos, mediante organizaciones paralelas o conexas dirigidas por cuadros políticos, sindicales o barriales afines pero no vinculados formalmente a las FARC.

El M-19 se dirige a un interlocutor a la vez vago y universal: el pueblo, vieja noción heredera del más acrisolado linaje burgués. El concepto de clase se diluye y se sustituye entonces por el de ciudadanía. Allí caben por igual campesinos e indígenas, empleados y desempleados, moradores urbanos y habitantes de las zonas rurales, asalariados y profesionales independientes, trabajadores "de cuello blanco" y trabajadores "de cuello azul", pequeños y medianos empresarios, funcionarios del Estado y hasta mandos

medios de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el M-19 coincide con tendencias actuales que se dicen marxistas y que, a la luz de las transformaciones contemporáneas de las relaciones sociales de producción, agrupan con mayores o menores salvedades a todo el proletariado en un mismo talego. Sin embargo, con excepción de las corrientes de raigambre más gramsciana, todas esas tendencias introducirían refinamientos y distanciamientos cautelosos en el tratamiento de la noción de ciudadanía.[34]

Ahora bien, la diferencia en cuanto a los destinatarios principales repercute también en la conceptualización de su propia relación con éstos y con el resto del movimiento. Las FARC, en virtud de su énfasis en la construcción del aparato político militar y de su consolidación como un poder dual y hasta en áreas o "repúblicas" independientes, impone relaciones jerárquicas sobre los habitantes de las zonas por ellas controladas. Son un "Estado dentro del Estado", un Estado paralelo (poder dual) o el único Estado en estas zonas, y así como prestan servicios, prescriben las reglas de comportamiento social. Con la advertencia de que aquí el interés público parece ser más amplio que en la sociedad capitalista ordinaria o, a la inversa, parece ser más reducido el campo de lo privado, de lo familiar o de lo puramente individual.

La supremacía de las FARC no puede ser cuestionada, so pena de languidecer su propósito indeclinable de construcción de un edificio verticalmente integrado. De allí sus actos de sanción de toda voz discordante, así venga de clases desposeídas y apunte a la reivindicación de sus más legítimos intereses. Todo queda subordinado a su propio crecimiento y ningún principio puede obstruir el logro de esta finalidad. Su pragmatismo las lleva, por ejemplo, a pactar financiación institucional con los terratenientes en desarrollo cuyas vidas e inmuebles las FARC amparan al tiempo que reprimen otras expresiones de lucha campesina o indígena contra ese mismo terrateniente.

Otras son las relaciones del M-19. Su afán de lograr una movilización amplia o universal, la inconstancia e inestabilidad de sus propias ubicaciones geográficas y el carácter incircunscrito de su propia organización lo llevan a congraciarse con todas las capas y fracciones de los trabajadores. Su aproximación es participativa y aglutinante. No tendría razón de ser ni viabilidad alguna lanzarse por sí solos a la conquista o a la destrucción del Estado. Si toman la iniciativa, lo hacen esperando ser seguidos o inducir un efecto en cadena; si no se produce el deseado efecto multiplicador o de bola de nieve, tienen que detenerse y buscar nuevos caminos de concertación tácita con el pueblo. El éxito de su acción requiere un sondeo permanente de la opinión popular y una sensibilidad

aguda para detectar las reacciones e inclinaciones del pueblo. Ciertamente, la estrategia insurreccional se aviene con el carácter desinstitucionalizado, universal y relativamente espontáneo de los movimientos cívicos.

Aunque seguramente tiene un papel de vanguardia, no impone su ley y su orden sobre los trabajadores. Es más bien próximo a las posiciones "basistas", esto es, a las de quienes aceptan o proclaman que el único criterio legítimo y adecuado de la lucha emana de las necesidades sentidas y de las reivindicaciones y transformaciones ambicionadas por las bases de los movimientos populares (las que no siempre coinciden con sus dirigentes). Esto libra al M-19 de la inclinación secular de la izquierda a asociarse con líderes y organizaciones de pretensiones jerárquicas y lo aproximan a los enfoques participativos de toda índole, como también a los ex militantes de izquierda que atravesaron una espinosa autocrítica al foquismo, al vanguardismo jerárquico de los intelectuales, al menosprecio por las luchas económicas inmediatas y al entendimiento puramente instrumental o voluntaristas de "el partido revolucionario".

En el fondo, los dilemas actuales y futuros de las FARC y del M-19 no son ajenos a los dos grandes caminos concebidos hasta ahora para la transición hacia un mundo no capitalista: una dictadura del proletariado, en la cual prevalece generalmente la organización política triunfante, o una profundización de la democracia burguesa con transformación gradual de la misma. Y reflejan cada uno sus mismas dudas y perplejidades; ¿cómo avanzar por el camino de la dictadura (en este caso de extradición o cuando menos de hegemonía del interés obrero, campesino, popular) sin aniquilar las formas y las fuerzas de liberación y de tránsito hacia el socialismo? ¿Cómo operar una transición democrática sin dejar que sucumba a los tentáculos siempre remozados del régimen burgués?

(v) Apoyándonos en lo que acaba de decirse, podemos ahora dar sentido a dos aparentes paradojas del movimiento guerrillero y, en términos más generales, del proceso político colombiano. La primera de ellas puede formularse así: ¿por qué una agrupación como las FARC, fundamentalmente clandestina y militarmente la más poderosa dentro del movimiento guerrillero colombiano, capaz quizá de enfrentar y resistir al ejército colombiano en el mediano o largo plazo, ha observado como ninguna otra los acuerdos de tregua y paz y ha sido la más ferviente defensora de éstos y del camino de normalización e institucionalización de su acción política en el que ellos desembocan?

La respuesta es llana y simple: porque la transformación en partido político (la llamada Unión Patriótica de reciente creación) contribuye a su tarea prioritaria de fortalecimiento y ensanchamiento del aparato político sin menoscabo de su aparato militar; incluso con posibilidades de valerse del proceso electoral y de algunos triunfos electorales en el nivel local para acrecentar su hegemonía político-militar en ciertas regiones. Su campaña no sería nacional ni rivalizaría con la labor urbana del Partido Comunista.

La paz no descompone a las FARC; es para ellas ocasión de consolidación y de reiteración de su clandestinidad. A pesar de los planes de gasto público (llamados genéricamente de rehabilitación o de fronteras) y de un cierto grado de penetración del ejército, en zonas por ellas controladas su hegemonía sigue siendo indiscutible, todo bajo un paraguas de aparente tranquilidad económica y social. Su ansia de tregua y su transitoria bifurcación estratégica entre lo partidista y lo militar; con prioridad aparente de la labor proselitista ordinaria, pueden llevarlas a distanciarse del resto del movimiento guerrillero, inconforme como éste se halla con la esterilidad de los acuerdos de paz. Y pueden al mismo tiempo, en honor a todo su pragmatismo, sumarse a los otros movimientos guerrilleros y al resto del movimiento popular en expresión de abierta y desestabilizadora rebeldía contra el gobierno de Betancur, tal como viene sucediendo en relación con el paro nacional del 20 de junio de 1985. Así las cosas, el criterio pragmático-organizacional de las FARC esclarecería sus infidelidades y haría predecible su comportamiento coyuntural y oscilante: de solidaridad, de distanciamiento y hasta de abierto enfrentamiento con otros grupos guerrilleros y con otros movimientos populares; de coincidencia puntual o de sustancial ruptura ocasional con el gobierno de Betancur.

El interrogante se desplaza entonces a otro actor de la política: el gobierno. ¿Por qué transige el presidente Betancur con un posición de paz puramente formal y con una regulación apenas aparente de la actividad político-militar de las FARC, que no pasa en ningún momento por la entrega de armas ni por el desmonte de de la organización guerrillera? A primera vista, esa actitud complaciente podría originarse en las rigideces de la plataforma de gobierno de Belisario, las cuales lo atarían a la paz aun después de que los partidos políticos y los representantes del capital considerasen frustrada esa arista estratégica.

Empero, esa interpretación no permite explicar el comportamiento flexible y selectivo del gobierno de Betancur con respecto al movimiento guerrillero. En el caso de los dos grupos que nos ocupan, la complacencia y hasta los encomios oficiales para las FARC son antinómicos con la vocación de persecución y enfrentamiento ar-

mado característica del tratamiento que el gobierno dispensa al M-19.

En vista de esta circunstancia, sólo cabe pensar en una táctica estatal de división y de parcelación del movimiento guerrillero, posible gracias a las diferencias de estilos y de conceptos estratégicos que imperan actualmente en la guerrilla colombiana. Betancur puede entonces ramificarse y casarse con las FARC en lo relativo a los acuerdos de paz, lo cual le permite mantener la imagen de rigidez de su plataforma, mientras se trenza en una guerra semioculta con el M-19. La primera actitud, si bien recibida con escepticismo por parte del bloque de clases dominantes, es justificada por el gobierno en aras de la seriedad, el cumplimiento y la responsabilidad social demostrados por las FARC desde los preámbulos a la firma de los acuerdos hasta la fecha. Dicho sea de paso, esta justificación se ha convertido en una trillada alabanza a las FARC por parte de los órganos oficiales, que contraponen estas supuestas virtudes con sus antitéticos defectos en las otras organizaciones guerrilleras. Defectos que, a su turno, invoca el gobierno para atraer el respaldo público a su actitud agresiva y desleal hacia el M-19 y otras organizaciones guerrilleras.

(vi) Lo anterior lleva al siguiente interrogante: ¿por qué ese comportamiento oficial respecto del M-19? La respuesta resulta obvia para quien sigue las noticias de Colombia: porque el M-19, a diferencia de las FARC, hizo visible su estrategia político-militar durante la vigencia de los acuerdos de paz. Notoria actividad de construcción de fortines y levantamiento de campamentos; amplia publicidad a sus objetivos de largo plazo, más allá del período de tregua; terca exigencia de que los convenios de paz se traduzcan en reformas y en satisfacción de las demandas ciudadanas y no solamente en un cese al fuego, etcétera.

Así las cosas, el interrogante planteado nos lleva a la consideración de la segunda de las paradojas enunciadas más arriba: ¿por qué un movimiento como el M-19, en apariencia más cercano que otros al funcionamiento democrático burgués y a los conceptos sobre los cuales se edifica el funcionamiento capitalista de la política y la economía, es más reticente a su normalización institucional como organización política, es decir, como partido? ¿Por qué antepone la visibilidad de sus procedimientos bélicos y reclama eficiencia a su gestión de reformas de interés colectivo por encima de sus propias necesidades organizativas y con sacrificio de su propio desarrollo institucional? ¿A qué se debe esta especie de inclinación al martirio?

A diferencia de las FARC, el M-19 no puede dejar de ser visible

sin perder eficacia y sin amenazar el desarrollo de su propio camino hacia el poder; no puede dejar de ser el abogado de las causas generales o de las reivindicaciones inmediatas sin menoscabo de su credibilidad y del crecimiento de su vasto vehículo institucional. De allí que lo que se presenta como autosacrificio de la organización sea en realidad su fórmula de crecimiento y de comunicación con el resto de la sociedad.

Tan indispensable es para el M-19 su presencia en todo conflicto, en compañía de sectores ajenos al movimiento mismo, que hará todo lo que esté a su alcance por involucrar a las clases trabajadoras en la que tiene que ser una gesta colectiva. Y si el clima no es favorable a tal coparticipación, buscarán forzar las circunstancias, crear artificialmente el terreno correspondiente a su diagnóstico y apto para el ejercicio de su propia voluntad como si fuera la voluntad colectiva. De allí que lo que es una actitud inicial de respeto a las clases trabajadoras y de coordinación con el ritmo y el tono de éstas pueda transformarse, por virtud de la demanda unilateral que ese movimiento guerrillero tiene que formular a pueblo en general, en precipitada imposición (lo que se conoce como "aventurerismo") y en el foquismo que precisamente se quería evitar.

Las separaciones del movimiento indígena

El movimiento indígena afronta tres tipos de separaciones. La primera es una separación geográfica regional e histórica que impide que se constituya en sujeto colectivo a escala nacional. Distintas focalizaciones y desiguales experiencias de lucha y diferentes grados de cohesión e identificación internas dificultan la sólida agrupación de la reducida proporción de verdaderos indígenas (por oposición a la inmensa mayoría mestiza) del país. Sin embargo, ésta es una dificultad que viene siendo subsanada mediante la federación de las organizaciones regionales y la identificación y concentración de los aborígenes entre aquellas comunidades carentes de tradiciones de lucha propiamente indígenas.

La segunda separación es más difícil de superar en la medida en que es connatural a este género de movimientos: la especificidad propia de la lucha indígena, concebida y definida como causa singular que resulta difícil incorporar dentro de causas más amplias o universales y aun dentro de alianzas o coaliciones de clases y fracciones de clase.

Esa dificultad estructural habrá de requerir en un futuro un fino balance entre lo general y lo particular, entre la cohesión interna de las comunidades y su inserción armónica en contextos más amplios.

Habrá de ser un afinamiento entre el respeto a la cultura, la idiosin-

cracia, la autonomía, las relaciones familiares comunitarias y la organización político-jurisdiccional propia, por un lado, y los criterios generales de asignación y distribución de los recursos, por el otro. En cuanto a lo político, no cabe duda de que la noción de sujeto colectivo, subyacente a toda la vida indígena, y el desvanecimiento de lo privado en lo público, habrá de servir de presente en el seno de la sociedad que se resiste a morir.

Por lo pronto, debemos señalar con indignación un obstáculo adicional, esta vez coyuntural, que se yergue contra la unidad del movimiento indígena con los otros movimientos populares. Se trata del enfrentamiento entre algunas organizaciones guerrilleras, principalmente las FARC, y las organizaciones indígenas. Las primeras, interesadas más en la consolidación institucional y financiera de su propio aparato que en el respeto a principios revolucionarios, no han tenido escrúpulos en llegar a acuerdos de exacción con los mismos terratenientes que persiguen aniquilar a los indígenas. ¡Y en virtud de tales acuerdos el terrateniente acepta el gravamen o tributo que impone la guerrilla a condición de que ésta lo proteja de la misma guerrilla... y de las organizaciones que propugnan la reivindicación de la tierra indígena!

Notas

[1] Cf. Attali, J., *Les trois mondes. Pour une théorie de l'après-crise,* Fayard, París, 1981; Lipietz, A., *Le monde enchanté,* La Découverte, Maspero, París, 1983; "A work revolution in U.S. Industry. More flexible rules on the job are boosting productivity, en *Business Week,* 16 de mayo de 1983; Gorz, A., *L'agonie du capital,* Galilée, París, 1983; Gordon, D., Edwards, R. y Reich, M., *Segmented work, divided workers. The historical transformation of labor in the United States,* Cambridge University Press, 1982; Murray, F., "The decentralisation of production. The decline of mass collective worker?", en *Capital and Class,* núm. 19, 1983; Rosenberg, S., "Reagan social policy and labor force restructuring", en *Cambridge Journal of Economics,* junio de 1983.

[2] Es sorprendente la falta de percepción del proceso de reestructuración global entre la tecnocracia pública y privada colombiana. Y, al mismo tiempo, es fácil ver los condicionamientos, las confusiones y las incertidumbres que les impone este proceso.

[3] Rojas, F., "La incrédula indocilidad colombiana", en *Qué Pasó?,* CINEP, Bogotá, diciembre de 1984.

[4] Proliferan ahora los estudios sobre la condición de la mujer en los más diversos estratos sociales. Algunas de las recopilaciones más conocidas son: León, M. (compiladora), *Debate sobre la mujer en América Latina y El Caribe,* Vol. I: La realidad colombiana. Vol. II: Las trabajadoras del agro. Vol. III: Sociedad, subordinación y feminismo. ACEP, Bogotá, 1982. *Año Interamericano de la familia. Memorias 1983,* ICBF, Bogotá, 1983.

[5] Cf. Escobar, C., *La trayectoria de la ANUC,* CINEP, Bogotá, 1983; Rivera, S., *Política e ideología en el movimiento campesino,* CINEP, Bogotá, 1983 y Zamosc, L., *Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70,* CINEP, Bogotá, 1983.

[6] Una colección de documentos históricos recogidos por los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca, la mayor y más combativa organización indígena del país, en ocasión de la celebración de sus diez primeros años de autodefensa indígena, se encuentra en *CRIC. Controversia,* núms. 91-92, CINEP, Bogotá, 1981.

[7] Desafortunadamente no existen análisis globales recientes del movimiento sindical y del movimiento obrero colombianos. Quizás el último de ellos fue Moncayo, V. M. y Rojas, F., *Luchas obreras y política laboral en Colombia,* La Carreta, Bogotá, 1978.

[8] Una presentación esquemática de esta fase y de sus implicaciones para el intervencionismo estatal y el replanteamiento del Estado benefactor en Colombia se halla en Rojas, F., "El Estado colombiano desde los antecedentes a la dictadura de Rojas Pinilla hasta el Gobierno de Betancur (1948-1983)", en Pablo González Casanova (comp.), Siglo XXI, México, 1985.

[9] Un bosquejo de análisis para el caso colombiano se encuentra en el artículo del autor incluido en Kalmanovitz, S. y otros, "Más equidad y más cambio", en *Controversia,* núms. 117-118, CINEP, Bogotá, 1984. De manera más general, Kundig, B., "Du Taylorisme Classique à la 'flexibilisation' du système productif. L'impact macro-économique des differentes types d'organisation du travail industrial". en *Critiques de l'Economie Politique,* núm. 26, 1984. También Rubbery, J. Tarling, R. y Wilkinson, F., *Government policy and the labor market: the case of the U.K.,* y Sengenberger, W., *The gradual reactivation of the labour reserve army mechanism (in West Germany),* documentos presentados ante la Conferencia sobre las políticas gubernamentales y el mercado de trabajo durante la crisis, Aix-en-Provence, 18-22 de julio de 1983.

[10] No parece existir una buena recopilación de documentos programáticos de los distintos grupos guerrilleros colombianos. Algunas publicaciones recientes son: Arango, G., *FARC, Veinte años. De Marquetalia a La Uribe,* Aurora, Bogotá, 1984; Vergara, R. (comp.), *Notas sobre el movimiento popular en Colombia,* Universidad Autónoma de Guerrero, 1983; Lara, P., *Siembra vientos y recogerás tempestades,* Fontamara, Barcelona, 1982; Bateman, J., *Oiga Hermano. La promesa que será cumplida,* Macondo, Bogotá, 1984. La prensa colombiana de los dos últimos años ha recogido gran cantidad de declaraciones y propuestas de las FARC, el M-19, el EPL, el Ricardo Franco y otros grupos menores. No así del ELN, que permaneció al margen de los diálogos de tregua y paz abiertos por el gobierno de Belisario Betancur.

[11] Cf. Medina, M., "Los paros cívicos en Colombia", en *Estudios Marxistas,* núm. 14, octubre de 1977; Santana, P., "Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia", en *Controversia,* núms. 107-108, CINEP, Bogotá, 1983; Fonseca, L. A., "Los paros cívicos en Colombia", en *Desarrollo y Sociedad,* Separata Estudios Laborales, núm. 3, Bogotá.

[12] Véase, por ejemplo, Alape, A., *Un día de Septiembre. Testimonio del Paro Cívico 1977,* Armadillo, Bogotá, 1977; Delgado, A., "El Paro Cívico Nacional", en *Estudios Marxistas,* núm. 15, Bogotá, 1978; Delgado, O., *El paro popular*

del 14 de Septiembre de 1977, Latina, Bogotá, 1978; Santana, P. y otros, "El paro cívico 1981", en *Controversia,* núm. 101, CINEP, Bogotá, 1982; Hoyos, A., "Paros cívicos: de Rojas al 14 de Septiembre", en *Teoría y Práctica,* núms. 12 y 13, Bogotá, 1978.

[13] Las reservas netas en moneda extranjera pasaron de 152 millones de dólares en 1970 a 5630 millones de dólares el 31 de diciembre de 1981.

[14] Se estima que para volver a la tasa de cambio real imperante en 1975 Colombia deberá devaluar en 1985 su moneda en más de un 50 % con respecto al dólar americano. Cf. López, J. F., "En 1985: ¿se puede equilibrar la tasa de cambio?", en *El Tiempo,* 25. ii. 195, p1-C. En cuanto a la probable influencia del llamado narcotráfico en estos fenómenos cambiarios, véase Child, J. y Arango, M., *Narcotráfico. Imperio de la cocaína,* Percepción, Bogotá, 1984.

[15] Cf. *Coyuntura Económica,* Vol. IX, núm. 3, 1979, pág. 89.

[16] Cf. Avella, M. y Caballero, C., "La economía política de la reforma financiera", en *Coyuntura Económica,* Vol. XIII, núm. 4, diciembre de 1983, págs. 141-182.

[17] Ibíd.

[18] Cf. Garay, L. J., "El proceso de endeudamiento externo colombiano", en *Controversia,* núm. 121, CINEP, Bogotá, 1984, págs. 13-44.

[19] Cf. Lipietz, A., "L'imperialisme, ou la bete de l'apocalypse. Modestes considérations sur la mouvante division internationale du travail", en *Les Temps Modernes,* núm. 447, octubre de 1983.

[20] Cf. Frisfeld, D., "The next great depression; the impending financial collapse", en *Journal or Economic Issues,* Vol. XIV, núm. 2, junio de 1980.

[21] Cf. Coriat, B. (comp.), *La Robotique,* La Découverte/Maspero, Col. Repere, 1983.

[22] Cf. Mires, F., *El subdesarrollo del marxismo en América Latina y otros ensayos,* Alai, Montreal, enero de 1985.

[23] Cf. Lipietz, A., "Fordisme, fordisme periphérique et metropolisation" (redacción provisional), documento CNRS, CEBREMAP, París.

[24] Incluyendo los partidos políticos de izquierda, ellos mismos replanteando sus relaciones con el pueblo. Véase, por ejemplo, "¿Qué hacer? La izquierda ante la actual coyuntura", en *Solidaridad,* núm. 55, Bogotá, junio de 1984.

[25] Sobre esa búsqueda de ampliación de los canales de participación en la política corriente, véase, por ejemplo, *Diálogo para una nueva democracia,* Doc. ANIF, Bogotá, 1983; "Diálogo Nacional. Diagnóstico y propuestas", en *Colombia Hoy,* núm. 36, noviembre-diciembre de 1984; "La Reforma Política", en *Economía Colombiana,* núm. 165, Bogotá, enero de 1985; "Ampliar el espacio político, única arma contra la subversión", en *El Tiempo,* 17 de diciembre de 1984, pág. 10-B.

[26] Lo cual parece ya evidente en el momento en que se escriben estas líneas: varias organizaciones guerrilleras se hallan nuevamente en abierto enfrentamiento con el ejército y se anuncia para el 20 de junio de 1985 un paro cívico nacional que podría marcar el fin de la tregua o paz.

Los siguientes son algunos de los testimonios que, desde todos los bandos, cuestionan la paz y llaman a otras salidas estratégicas: "No se pudo. La política en 1984: decisiones postergadas... ¿para 1985?", en *Solidaridad,* núm. 60, Bogotá, noviembre de 1984; Espinosa Valderrama, A., "Clarificaciones indispensables", en *El Tiempo,* 2 de abril de 1985, pág. 5-A; "Al proceso de paz hay que fijarle un término: Turbay", en *El Tiempo,* 15 de marzo, 1985, pág. 1-A; "El minuto fatal no ha llegado: Procurador", en *El Tiempo,* 24 de marzo, 1985, pág. 1-A; "Enérgica actitud de congresistas con gobierno sobre orden público. Fuerzas Armadas fijan posición sobre la tregua y el diálogo. No confundir mano tendida con debilidad: Betancur", en *El Tiempo,* 13 de marzo de 1985, pág. 1-A; "Dice el Procurador: la Nación está desesperada de tanta audacia insurreccional", en *El Tiempo,* 3 de marzo de 1985, pág. 1-A; Valencia, J., "Se enreda la paz", en *El Tiempo,* 4 de marzo de 1985, pág. 5-A; "Gobierno sancionará a los sindicatos con infiltración guerrillera", en *El Espectador,* 6 de marzo de 1985; "Contra el secuestro, el Gobierno debe disponer de toda su fuerza represiva: CTC", en *El Tiempo,* 4 de marzo de 1985; "No sacrificaremos las instituciones en aras de la pacificación del país", en *El Tiempo,* 17 de diciembre de 1984, pág. 11-B.

[27] Algunos de los grupos participantes en la tregua, como también los no participantes en ella, han hecho explícita su exigencia de fórmulas democráticas distintas a las burguesas. Véase, por ejemplo, "Ante el Diálogo Nacional", Movimiento Pan y Libertad, doc. núm. 2 (sin ciudad ni fecha); "¿Qué hacer? La izquierda ante la actual coyuntura", en *Solidaridad,* núm. 55, Bogotá, junio de 1984.

[28] Es difícil establecer hasta dónde llegan las "rigideces" del gobierno o, lo que es lo mismo, sus compromisos con la búsqueda de la paz. En nuestra opinión, Betancur dispone todavía de márgenes de flexibilidad que le permitirían renunciar a los propósitos y a los medios de pacificación por él concebidos desde su campaña presidencial.

[29] Más adelante se expondrán los factores de división de la guerrilla a este respecto.

[30] En otras palabras, los programas de ajuste acordados con el Fondo Monetario Internacional, uno de los cuales celebró con reticencias el gobierno de Betancur en el primer semestre de 1985, terminan por producir los resultados que de ellos se espera. Más tarde o más temprano, según la elasticidad precio de las exportaciones, los niveles de sobrevaloración de la moneda y del capital internos, etcétera, las fórmulas de la depreciación del capital y de reducción del nivel de vida de los trabajadores terminan por sentar las condiciones indispensables para una valorización remozada del capital.

[31] Rojas, F., "La incrédula indocilidad colombiana", en *Qué Pasó?,* CINEP, Bogotá, diciembre de 1984.

[32] El equilibrio del que se habla no es exclusiva ni principalmente militar. Ni se refiere a dos organizaciones plenamente consolidadas. Desde el punto de vista del movimiento popular, por ejemplo, se refiere a lo posible a partir de lo actual. La fusión de movimientos, la paralización de la economía, el desbarajuste de la institucionalidad vigente, etcétera, son desarrollos plausibles en la Colombia de hoy. Este reino de lo probable, en medio del fracaso de las estrategias hermanas de la represión y la conciliación, eleva exponencialmente las fuerzas del movimien-

to popular y lo nivela con el bloque dominante hasta el punto de amedrentarlo y arrinconarlo.

[33] Rojas, F., "La incrédula indocilidad colombiana", en ¿Qué Pasó?, CINEP, Bogotá, diciembre de 1984.

[34] De hecho, el M-19 parecería incorporar ciertas nociones y recomendaciones del pensamiento gramsciano. Algunas de sus acciones pueden leerse como la búsqueda de una hegemonía cultural; otras apuntan al afianzamiento de un bloque paralelo de vocación hegemónica; se hace cierto hincapié en la guerra de posiciones, etcétera. Sin embargo, veremos a continuación que hay considerables diferencias entre el M-19 y la vertiente principal de ese pensamiento.

Los movimientos sociales en Venezuela ante la crisis *

Luis Gómez Calcaño **

Introducción

Los movimientos sociales de la Venezuela actual se han constituido a partir del proceso de modernización experimentado por el país en los últimos cincuenta años y de la estructura sociopolítica que ha resultado de dicho proceso.

En efecto, a pesar de ciertas semejanzas inevitables en la composición social y en los campos de acción entre estos movimientos y los de los países desarrollados, la existencia de movimientos sociales en Venezuela no puede reducirse a un fenómeno reflejo ni a un síntoma de dependencia cultural; ellos se arraigan en experiencias y conflictos característicos de una sociedad que se moderniza y urbaniza rápidamente, produciendo efectos ecológicos, económicos y socioculturales semejantes, y a veces más acentuados, que los de los países de industrialización y urbanización tempranas.

La velocidad misma de la modernización y su carácter de consecuencia no planeada de una reinserción en el mercado mundial en condiciones privilegiadas han derivado en una "heterogeneidad estructural" acentuada, en términos de la coexistencia de actividades produc-

* En el presente trabajo se pretende aportar un marco histórico contextual a cuatro estudios de caso sobre movimientos sociales en Venezuela, encomendados por CLACSO como parte del proyecto "Movimientos Sociales en América Latina". Las ponencias de base son: E. Lander y S. Arconada, "La Confederación de Trabajadores de Venezuela ante la crisis (el mito del movimiento obrero en Venezuela"; Eduardo Matute, "Enfrentando juntos la crisis (un proyecto de abastecimiento popular en Venezuela)"; Omar Ovalles, "Movimientos de cuadro de vida en la Venezuela urbana actual: posibles actitudes para enfrentar la crisis", y Centro Gumilla, "Comunidades eclesiales de base en Venezuela".

** Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Caracas.

tivas y circuitos económicos de muy diverso nivel tecnológico, magnitud de capitales y formas de apropiación y distribución.

Ello hace que tanto la organización de la sociedad civil como la estructura institucional del Estado muestren una gran diversidad en cuanto a consolidación, alcances y objetivos de sus componentes.

Esta diversidad se manifiesta en los movimientos sociales que se han venido conformando en la Venezuela contemporánea, y explica el carácter de la selección de los casos estudiados.

Los inicios de la modernización en las décadas del veinte y del treinta generaron un conjunto de organizaciones en diversos ámbitos de la vida social;[1] a través de un proceso de decantación fueron cristalizando, hacia la década del cuarenta, en dos grandes tipos: los partidos políticos, que de allí en adelante, con breves interrupciones, hegemonizarían la actividad de representación y de articulación de intereses, y las organizaciones gremiales, especialmente las sindicales.

La influencia de las organizaciones políticas en la constitución de los gremios, y sobre todo de los sindicatos, tuvo como consecuencia que estos últimos surgieran estrechamente tutelados por los partidos, condición que en lugar de disminuir con el crecimiento y consolidación de la estructura sindical, ha venido intensificándose ininterrumpidamente hasta el momento actual.

Esta dependencia respecto de los partidos crea dudas sobre la adecuación de la definición del movimiento obrero venezolano como movimiento social, en la forma en que se ha venido manejando el concepto contemporáneamente. Sin embargo, es innegable que una importante fracción de los trabajadores de Venezuela se enmarca en el movimiento sindical organizado, sea por convicción, sea porque no dispone de otra alternativa para defender sus derechos. Es por ello que uno de los trabajos se dedica a analizar la Confederación de Trabajadores de Venezuela, para llegar a la conclusión, entre otras consideraciones, de que la CTV no es un verdadero movimiento social. Sin embargo, dada la casi inexistencia de organizaciones opcionales de los trabajadores, se consideró necesario estudiar el proceso por el cual uno de los primeros entes asociativos que se desarrollan en el país no logra superar su condición de instrumento de un partido político (situación ésta a la que no han escapado muchas de las grandes confederaciones obreras tanto de los países industrializados como de los latinoamericanos).

Los otros casos estudiados responden más adecuadamente a lo que se concibe como "nuevos movimientos sociales", aunque ello requiere algunas precisiones.

En efecto, una de las ponencias tiene como objeto la presentación y discusión de una propuesta concreta de abastecimiento popular como respuesta a la crisis por parte del movimiento cooperativo. Si bien es cierto que el cooperativismo es hoy en día más que centenario, y que

en los países industrializados tiende a cumplir un papel predominantemente pasivo y complementario de la economía privada, este movimiento ha adquirido en algunos países de América Latina modalidades de organización, acción y doctrina que le dan características originales. Ese es el caso en Venezuela, donde predomina un cooperativismo fundamentalmente arraigado en los sectores populares, no limitado a la solución de problemas económicos inmediatos, y ligado a otros movimientos populares. Otra característica singular del cooperativismo venezolano es que es una de las pocas, si no la única organización de masas no penetrada ni controlada por los partidos políticos; esto le proporciona una autonomía de acción y una autoridad creciente frente al deterioro de los partidos, aunque al mismo tiempo lo hace vulnerable ante el Estado. Finalmente, el movimiento cooperativo parece ser uno de los que más se acercan a la formulación de un modelo opcional de sociedad dotado de coherencia.

El tercer estudio es el que más se asocia en el lenguaje común con la idea de "nuevos movimientos sociales"; se trata de las organizaciones vecinales y ecológicas, surgidas como consecuencia y respuesta crítica frente a los efectos del acelerado desarrollo urbano del país, especialmente en la capital, con sus consecuencias de deterioro en la calidad de la vida y destrucción de recursos naturales. Este movimiento, surgido de luchas puntuales por la defensa de áreas verdes y otras reivindicaciones urbanas, sobre todo de "clase media", lentamente ha ido expandiendo su rango de acción, y, enlazado con las corrientes ecologistas norteamericanas y europeas, también plantea esbozos acerca de otras formas de sociedad.

El último trabajo considerado es un estudio de las comunidades eclesiales de base, movimiento quizá menos organizado y consolidado que los precedentes y caracterizado por su multiplicidad de actividades, en tanto no se organiza alrededor de reivindicaciones específicas, sino en torno del proyecto de materializar en la práctica una determinada interpretación de la fe cristiana. Aunque el papel de estas comunidades es menos visible en Venezuela que en otros países de América Latina, pueden jugar un papel importante en la medida en que pierdan fuerza las ideologías del progreso individual ininterrumpido y aumente la necesidad de la acción solidaria para enfrentar las consecuencias de la crisis. Por otra parte, su flexibilidad les puede permitir convertirse en un elemento de comunicación y articulación de movimientos sociales particulares.

Como toda selección, la efectuada tiene algo de arbitraria. Es evidente que existen en Venezuela otras formas organizativas que merecen la calificación de movimientos sociales. Entre ellos se encuentran las organizaciones locales que desarrollan actividades culturales en el seno de las comunidades populares. Guardan relaciones con los movimientos ana-

dores de un nuevo sujeto social, que podría definirse como un *movimiento popular con autonomía organizativa.*

Por otra parte, el estudio de los movimientos que no han tenido éxito o de aquéllos que —como el sindicalismo— han sido instrumentados por el orden establecido también es necesario para identificar los fuertes obstáculos que enfrenta la constitución del sujeto popular autónomo.

I. El modelo de desarrollo y su actual crisis

I.1 Antecedentes

Es un lugar común atribuir la estabilidad del régimen democrático venezolano a la capacidad del Estado para repartir un excedente cuantioso entre todos los grupos sociales. Sin negar que la existencia de tal excedente juega un papel importante como condición para su utilización como estabilizador del régimen, es necesario ir más allá de esta visión excesivamente simple y lineal, ya que ella no logra explicar dos aparentes paradojas del desarrollo sociopolítico venezolano:

a) Los altos ingresos petroleros no sólo han coincidido con regímenes "aperturistas" o incluyentes, sino con dictaduras —como las de Gómez y Pérez Jiménez— orientadas hacia el monopolio del poder y la exclusión de las mayorías del proceso de decisión política.

b) No existe una correspondencia lineal entre mejoras en el ingreso externo y estabilización de los regímenes políticos vigentes. El actual régimen democrático se afianzó en medio de una seria depresión de los precios del petróleo, y atraviesa su crisis de legitimidad más profunda después de dos períodos del altísimos ingresos.[2]

Una explicación de estas paradojas sería que los altos ingresos pueden dar lugar a efectos contrapuestos: o bien exacerban la pugna por la distribución entre sectores sociales, contribuyendo a desestabilizar las estructuras de poder establecidas, o bien se insertan en una red de acuerdos institucionalizados que garanticen a cada actor social el acceso a los recursos y a las decisiones sobre su uso, dependiendo de su peso relativo en la sociedad, con lo cual se estabiliza un sistema político de transacciones y conciliación.

El proceso de desarrollo sociopolítico de la Venezuela petrolera muestra la emergencia, lenta y difícil, de las condiciones para que tal sistema lograra legitimidad y viabilidad. En efecto, desde el impacto inicial del petróleo sobre la sociedad venezolana, los gobiernos, comenzando por el de Gómez, trataron de usar los ingresos de origen externo para responder a ciertas demandas de la población. Sin embargo, tanto el régimen gomecista como los que le sucedieron estaban más dispuestos a distribuir obras, servicios y empleos que a compartir poder de decisión.

Los regímenes que intentaron efectuar una transición pacífica del gomecismo a la democracia (López Contreras y Medina Angarita, 1936-41 y 1941-45), si bien produjeron importantes avances en cuanto a la libertad de organización política, mantuvieron restricciones al voto y privilegios regionales heredados del régimen anterior.

La "Revolución" de octubre de 1945 pretendió romper las barreras a la participación popular, instituyendo el voto universal, directo y secreto, y una Constitución reformista avanzada.

Estas y otras medidas "populistas" proporcionaron a Acción Democrática un sólido y durable apoyo de los sectores populares y de buena parte de los grupos medios. Sin embargo, la inclusión de las masas en el sistema político se correspondió con una reacción de los grupos que se consideraban excluidos o amenazados, principalmente parte de las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y los sectores más conservadores, que mantenían intacto su poder real.

Es por ello que, cuando se produce el golpe contra Rómulo Gallegos, la inmensa mayoría del país que lo había llevado a la presidencia no dispuso de medios organizativos ni políticos para impedir su derrocamiento.

I.2 Hacia un nuevo modelo de hegemonía

La junta militar que sustituyó a Gallegos, y más adelante el gobierno unipersonal de Pérez Jiménez, también trataron de sustentarse a través del reparto del ingreso petrolero, pero manteniendo restringida la participación política; ello desembocó, después de algunos años de relativa estabilidad, en el aislamiento del régimen frente a la mayoría de los actores sociales y políticos.

Este aislamiento no se debió sólo a las numerosas torpezas y errores del grupo gobernante, sino a cambios en la estrategia de actores políticos que se habían venido enfrentando hasta el momento y tendían a aproximarse en la medida en que pasaban al campo de la oposición.

El cambio de estrategia consiste, principalmente, en el otorgamiento de concesiones mutuas entre los actores políticos alrededor de un fin común: establecer un régimen pluralista, abierto, reformista pero no radical, dentro del marco de un capitalismo desarrollista con fuerte intervención estatal. Dichos acuerdos se concretan en la forma de varios pactos que ligan a los actores: partidos políticos y empresarios se reúnen en Nueva York para aunar esfuerzos para el derrocamiento de la dictadura (enero de 1958); las organizaciones representativas de los empresarios y los trabajadores firman un "avenimiento obrero patronal" aus-

piciado por los partidos políticos (abril de 1958); los candidatos de los tres partidos principales firman el "Pacto de Punto Fijo", por el cual se comprometen a formar una coalición y a respaldar en todo momento la institucionalidad democrática. (julio de 1958); los mismos candidatos firman una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno (noviembre de 1958).[3]

Además de estos acuerdos generales se van dando otros, tácitos o explícitos, con sectores como las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica, destinados a garantizarles cierto grado de autonomía dentro de su esfera de acción, y un amplio acceso a los recursos que repartirá el Estado entre estos y otros actores sociales, a cambio de su apoyo a la institucionalidad.

Posiblemente sea esta amplia trama de acuerdos institucionales, formalizados o no, lo que explica la sorprendente resistencia demostrada por la incipiente democracia venezolana frente a los numerosos asaltos que, desde posiciones ideológicas contrapuestas, intentaron sustituirla.

Otro aspecto, no menos importante que el anterior, es la existencia de un amplio apoyo popular al proyecto de un régimen reformista y democrático, más allá del partido específico que ocupara el gobierno. Los acuerdos parecían ofrecer oportunidades de participación en lo económico, social y político a todas las personas o comunidades que lograran articularse con los mecanismos distributivos del Estado, para lo cual las correas de transmisión eran las organizaciones sociales (sindicales, gremiales o comunales) "controladas" por alguno de los partidos de la coalición.

Por su parte, la burguesía local y las empresas extranjeras mantuvieron su autonomía organizativa frente a los partidos y al Estado, lo cual les daba amplia capacidad de demanda y presión, en contraste con un movimiento sindical débil y carente de fuerza propia.

I.3 El modelo de desarrollo [4]

El nuevo régimen tuvo como eje ordenador el intento de dar un mayor impulso a la industrialización por sustitución de importaciones que se había venido desplegando en los años anteriores. Dadas las características de la economía venezolana, esta forma de crecimiento no podría siquiera concebirse sin una permanente intervención protectora del Estado. Esta intervención determina un crecimiento del sector público que se expresa en varias modalidades:

a) la ampliación y complejización de los mecanismos institucionales para el otorgamiento de las diversas formas de protección y control sobre el proceso productivo;
b) el crecimiento de un sector productivo estatal, conformado por dos vías independientes: por una parte, un sector de industrias básicas y de servicios (siderurgia, aluminio, electricidad, agua, comunicaciones, etcétera) destinado a complementar y suplir a la inversión privada; y por la otra, un sector "residual", conformado por empresas que han llegado a manos del Estado por quiebra o ejecución de créditos o por entes creados para corregir las deformaciones del sector privado;
c) la gran ampliación de las responsabilidades sociales del Estado, determinada a su vez por dos grandes fuerzas: por una parte, la incapacidad del modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones para crecer a un ritmo adecuado y para absorber la creciente población, ni como fuerza de trabajo ni como demanda efectiva; y por la otra, la necesidad de traducir en aportes concretos y visibles la promesa de inclusión que sustentaba la legitimidad del régimen democrático entre los sectores subordinados y medios.

Este modelo de desarrollo, en el cual el Estado estimula, complementa y corrige los efectos negativos de una economía de mercado, tuvo un relativo éxito, tanto en términos económicos como sociopolíticos, durante la década del sesenta. Después de una recesión inicial, se obtuvieron tasas de crecimiento favorables, y se expandieron aceleradamente la participación sindical, la escolarización en todos los niveles y los servicios de salud.

Esta política expansiva favoreció el combate político-ideológico frente a la estrategia de la izquierda revolucionaria, que fue perdiendo posiciones en la medida en que la represión de las organizaciones controladas por la izquierda era acompañada por el apoyo masivo a los sindicatos y otras organizaciones ligadas a la coalición gobernante; la división del movimiento sindical, la creación de organismos de base que monopolizaban el flujo de demandas y recursos hacia y desde el Estado, fueron algunos de los mecanismos que, junto a evidentes errores estratégicos del "movimiento" revolucionario, contribuyeron a reforzar la legitimidad de la democracia hegemonizada por los grandes partidos.

A principios de la década del setenta, sin embargo, comienzan a emerger ciertas dificultades para la ampliación y reproducción del modelo de desarrollo: agotamiento de la etapa "fácil" de la sustitución, persistencia del carácter poco incorporador de la industrialización, sobrecarga de demandas hacia el Estado y estrechez (relativa, por supuesto) de recursos para satisfacerlas.

El auge petrolero iniciado en 1973 proporcionó una inesperada salida al estancamiento, aunque al mismo tiempo sentó las bases para una profundización de las tendencias que una década más tarde desencadenarían la crisis. Esto se debe a que la estrategia escogida para la absorción del ingreso extraordinario consistió en una profundización y aceleración de las grandes líneas de desarrollo que se habían venido apli-

cando hasta el momento: en primer lugar, se nacionalizaron el petróleo y el hierro, con lo cual se trataba de maximizar el ingreso externo para aplicarlo a la acción estatal; en segundo lugar, se trató de ampliar en un plazo relativamente corto y en dimensiones gigantescas al sector de las empresas básicas. Con esto se pretendía superar los cuellos de botella y las inconexiones en la estructura industrial venezolana. Igualmente, se amplió y aceleró la construcción de infraestructura productiva y, como consecuencia de la nacionalización petrolera, se emprendió un ambicioso plan de inversiones destinado a mantener la capacidad de producción y refinanciación.

En la política estatal hacia la sociedad civil, también se repitieron, pero a una escala mucho mayor, las acciones tradicionales: aumentó masivamente el crédito preferencial a la industria y a la agricultura, se expandieron los servicios públicos y el empleo burocrático, se decretó un aumento salarial y crecieron las transferencias directas a distintos grupos sociales.

En síntesis, se trató de dar un "gran salto adelante" bajo el supuesto de que las transformaciones emprendidas permitirían a la economía venezolana diversificarse, superando la excesiva dependencia con respecto al petróleo y acercando al país a la condición de "desarrollado". La magnitud de los proyectos fue tal que se recurrió al endeudamiento externo masivo, por primera vez en la Venezuela petrolera.

Los primeros años del auge parecieron confirmar las expectativas optimistas, ya que se produjo un vigoroso crecimiento de la economía, al difundirse en ella el gasto estatal. Sin embargo, un cambio de tales dimensiones concentrado en un tiempo tan corto no podía dejar de producir efectos negativos que fueron imponiéndose gradualmente sobre la imagen de prosperidad.

En primer lugar, la acción estatal se hizo aun menos eficaz, por el desmesurado crecimiento de los institutos, empresas y otros organismos públicos, muchos de los cuales no fueron capaces de enfrentar el rápido aumento de la demanda de servicios derivado de los mayores ingresos de la población y de la inmigración masiva.

Por otra parte, se inició un proceso inflacionario que anuló los efectos de los aumentos salariales del principio del período, y que se vio agravado por las insuficiencias de la producción interna —especialmente de bienes esenciales— para cubrir la demanda. Ello creó situaciones de desabastecimiento, al mismo tiempo que aumentaba la dependencia respecto de las importaciones.

Otra consecuencia de la abundancia de recursos fue una extensión de la corrupción, la cual, si no era en absoluto un fenómeno nuevo, se convirtió en un hecho cotidiano que afectaba, con pocas excepciones, a todos los niveles del aparato estatal y a importantes grupos privados.

El resultado de estas tendencias fue que, si bien al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez el ingreso per cápita y el empleo habían crecido, se percibía un descenso en la "calidad de la vida", expresado en las deficiencias en la prestación de servicios, la inseguridad personal, el costo de la vida, problemas ambientales como la sobreurbanización, la contaminación, y el deterioro de la infraestructura física. Desde un punto de vista político-ideológico, renacieron las críticas al régimen democrático por su fracaso en mostrar una clara superioridad frente a la última dictadura en términos de justicia social, eficiencia y ética administrativa.

Tras estos síntomas anunciadores de una crisis coyuntural, es posible percibir tendencias estructurales que la explican. En efecto, aunque el modelo de desarrollo intentado a partir de 1958 logró sólo parcialmente sus objetivos básicos en lo social y económico, tuvo otros efectos importantes sobre la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, la política de expansión estatal culminó, con la nacionalización petrolera, en un control directo de la principal fuente de riqueza del país, con lo cual el Estado se convirtió definitivamente en el agente económico y político decisivo.

En segundo lugar, la acción estatal hacia el sector privado y hacia la población en general contribuyó a la diversificación de la sociedad civil, tanto por sus propias tendencias a la diferenciación interna, como por el estímulo dado a determinados grupos y organizaciones. Así, por una parte, la organización empresarial global (FEDECAMARAS) se diferenció en consejos representativos de las ramas industrial y comercial e intensificó la creación de nuevas organizaciones empresariales; la Confederación de Trabajadores de Venezuela emprendió actividades empresariales bajo el amparo estatal. Por otra parte, algunos grupos económicos lograron grandes tasas de crecimiento en pocos años gracias a sus vínculos con los diferentes partidos gobernantes. El crecimiento económico fue extendiendo las actividades empresariales de los capitales de provincia, dando lugar a la gradual conformación de grupos económicos de ámbito regional con tendencias a la expansión nacional.

También los sectores medios y laborales crecieron y se diversificaron: la extensión de la educación superior creó una considerable capa de profesionales al servicio de los sectores público y privado, que conforman un fragmento decisivo del mercado interno y que, junto a otras capas medias, tienen un peso político significativo.

Por otra parte, el modelo de desarrollo en sí mismo se acercaba una vez más al dilema entre el estancamiento y la inflación, por su incapacidad de expandirse hacia el mercado interno sin recurrir al creciente gasto y protección estatales.

La estabilización del flujo de divisas hacía más difícil para el Estado seguir satisfaciendo las demandas cada vez mayores de la sociedad civil, amortizar la deuda proveniente de las grandes inversiones y financiar las crecientes importaciones de bienes finales, equipos e insumos. Así, ya

en 1977 y 78, la balanza comercial era deficitaria.[5] En otras palabras, la economía venezolana se acercaba al "estrangulamiento del sector externo", situación bastante sorprendente para un país con tan altos ingresos de divisas.

En síntesis, los cambios producidos en la sociedad venezolana bajo el impulso del modelo de desarrollo adoptado en 1958 forjan una estructura económica y social a la cual le será cada vez más dificultoso seguir enmarcada en los modos de gestión política acordados en los pactos iniciales; el Estado y los partidos políticos acusan el impacto de estos cambios bajo la forma de creciente desorganización, fragmentación interna, incapacidad para la toma y ejecución de decisiones, y pérdida de legitimidad. Asimismo, los mecanismos de conciliación y transacción sufren tensiones más y más grandes, debido a la mayor injerencia de organizaciones y grupos de presión que a los partidos les resulta difícil controlar.

A estas condiciones estructurales para la conformación de una crisis en lo económico y lo político se sumarían aspectos coyunturales decisivos en el período de gobierno de Luis Herrera Campins.

I.4 La coyuntura crítica

El gobierno que se iniciaba en 1979 se planteó como tarea prioritaria el restablecimiento de los "equilibrios básicos" de la economía y el control de la inflación, para lo cual aplicó un conjunto de medidas restrictivas hacia el gasto fiscal, la expansión monetaria y el endeudamiento externo. Se trataba de aminorar las tasas de crecimiento para que ellas volvieran a sus niveles históricos previos al auge. Por otra parte, se pretendió dar al mercado un lugar central en la dinámica económica, reduciendo la protección arancelaria de la industria y liberando los precios; en otras palabras, se trató de seguir un esquema de orientación monetarista y neoliberal. Sin embargo, su aplicación no fue coherente, por la existencia de diferentes posiciones en el gobierno y en el partido COPEI, y por la respuesta de la oposición política y sindical, que impuso una Ley de aumento salarial. Además, la disminución del gasto estatal se vio frenada por los compromisos adquiridos en grandes inversiones que no podían ser paralizadas. Las marchas y contramarchas de la política estatal desestimularon la inversión privada, paralizando el crecimiento de la economía. Al presentarse el segundo auge petrolero, se abandonaron las restricciones al gasto fiscal, pero no se reactivó el aparato productivo, entre otras razones porque las reducciones arancelarias y la sobrevaluación de la moneda estimularon las importaciones.

La desconfianza del sector privado se tradujo en una creciente exportación de capitales, lo cual, junto a la negativa de la banca internacional a seguir renovando préstamos a corto plazo y la reducción de los precios del petróleo en 1982 y 1983 precipitaron la devaluación del bolívar a principios de 1983.

Este hecho, que en otros países puede formar parte de la política económica cotidiana, adquirió en Venezuela una profunda significación como símbolo del "fin de una época", y el inicio de una sociedad "pospetrolera". Aunque es obvio que el petróleo seguirá siendo el motor fundamental de la economía, la opinión pública ha sido orientada a redefinir su relación con él; por una parte se hace énfasis en la casi imposibilidad de nuevos auges como los recientemente experimentados, y por la otra se insiste en la necesidad de "sacrificios compartidos" para superar la crisis. El petróleo ha dejado de ser héroe para convertirse en villano, tal como lo preconizaban en pleno auge Juan Pablo Pérez Alfonzo y otras voces aisladas.

La coyuntura venezolana actual, si bien no puede ser caracterizada como una crisis global, muestra elementos críticos convergentes en diferentes aspectos de la vida social; desde el punto de vista económico, la recesión iniciada en 1979 no ha podido ser revertida, agravándose por los ajustes de precios derivados de la nueva tasa de cambio y por la permanencia de altas tasas de desempleo.

En el campo político, el período presidencial de Herrera Campins permitió constatar serios desajustes en los mecanismos de conciliación establecidos; el enfrentamiento —ya mencionado— alrededor de la Ley de aumento salarial de 1979, las frecuentes polémicas entre algunos ministros de la economía y el sector privado, y hasta las disensiones internas en el partido de gobierno, crearon una sensación de que la institucionalidad democrática estaba en peligro. Ello condujo a que los dos partidos políticos predominantes, Acción Democrática y COPEI, prestaran gran atención en la campaña electoral de 1983 al tema de la concertación entre los actores sociales y políticos. La abrumadora victoria de Jaime Lusinchi, con su propuesta de "Pacto social", dio una amplia base consensual a los intentos de recomponer los deteriorados mecanismos de conciliación.[6] Quizás el más importante ha sido la designación de una comisión para la reforma del Estado, que incluye representantes de prácticamente todos los actores sociales y políticos institucionales (aunque, significativamente, no de los nuevos movimientos sociales).[7]

Esta actividad de redefinición del Estado encuentra su correlato en las dos principales organizaciones de la sociedad civil, que en los primeros años de la recesión económica formularon programas de reforma social limitada: el Manifiesto de Porlamar, que exponía la posición de la CTV y la Carta de Maracaibo, proveniente de FEDECAMARAS.

Más allá de estas propuestas limitadas —y orientadas a mejorar posiciones relativas en un esquema de desarrollo básicamente incambiado— han venido surgiendo otros tipos de propuestas, aún poco difun-

didas; las de algunos sectores empresariales que pretenden sustituir el modelo "populista" de desarrollo por uno más centrado en el mercado y con menor injerencia partidista y las de nuevos movimientos sociales que cuestionan la validez misma de los grandes objetivos del desarrollo tal como fueron definidos en el modelo predominante en Venezuela. Sin embargo, con este aspecto se entra ya en las respuestas de los movimientos sociales a la crisis, que será examinado más adelante.

En síntesis, la actual coyuntura crítica de Venezuela se caracteriza por una conciencia generalizada de la necesidad de introducir cambios en el modelo de desarrollo, el Estado y el sistema político; sin embargo, la mayor parte de las propuestas hasta ahora explícitamente formuladas no plantean rupturas radicales sino reacomodos que permitan conservar las posiciones relativas alcanzadas bajo los actuales mecanismos de poder. Podrá hablarse de crisis en el sentido más fuerte del término cuando llegue el momento de optar, por presión de las circunstancias económicas o por la presencia de un desafío político al sistema, entre el actual modelo de desarrollo y de hegemonía y otros que hoy en día están gestándose.[8]

II. Los movimientos sociales ante la crisis

Examinaremos las respuestas formuladas por los movimientos sociales analizados frente a la coyuntura crítica descrita. Considerando las diferencias de organización, fines y composición de cada uno de ellos, se ha preferido tratarlos por separado para destacar sus rasgos comunes y sus diferencias en una síntesis final.

II.1 El movimiento sindical

El rasgo característico del movimiento sindical venezolano actual es la hegemonía de la Confederación de Trabajadores de Venezuela sobre las demás centrales y sobre cualquier intento de organización laboral independiente. Para los autores de la ponencia sobre la CTV, la clave de esta posición está en el papel asignado a la organización en el modelo hegemónico iniciado en 1958. Ese papel es el de controlar a los trabajadores para que sus demandas y reivindicaciones no amenacen los beneficios ni la "confianza" empresarial, requisitos indispensables para lograr el apoyo de ese sector al régimen democrático partidista.

La imposición de este rol no se dio sin conflicto; en efecto, pasó por la expulsión y persecusión de los sindicalistas que mantuvieran posiciones críticas, y se vio facilitada por la estrategia insurreccional de la izquierda en la década del sesenta, que descuidó el trabajo sindical.

Un segundo elemento que explica esta hegemonía es la articulación entre el Estado y la CTV. El Estado le otorga a la CTV el monopolio de la representación legítima de los trabajadores, y la subsidia con importantes contribuciones directas. La transferencia de recursos públicos a la CTV alcanzó niveles realmente masivos con la creación del "Banco de los Trabajadores de Venezuela". Este organismo, propiedad conjunta del Estado y de la CTV, tuvo un crecimiento explosivo desde mediados de la década del setenta hasta que las numerosas irregularidades en que incurrió motivaron que fuera intervenido en noviembre de 1982, comprobándose la existencia de un gigantesco fraude que alcanzaba alrededor de ocho mil millones de bolívares.

Sin embargo, dicha intervención no afectó demasiado la legitimidad de la CTV, puesto que los directivos del banco habían logrado comprometer a dirigentes de casi todos los partidos en sus negocios dudosos. A cambio de la lenidad con que fue tratado el escándalo, la CTV ha reforzado su papel de conciliadora entre los trabajadores, el Estado y el sector privado. Otro rasgo esencial de la actual CTV es su íntima fusión con la dirigencia sindical de Acción Democrática, y en consecuencia, su subordinación a la política global de ese partido; en otras palabras, la CTV es la "correa de transmisión" entre AD y los trabajadores.

En el último Congreso de la CTV, efectuado en mayo de 1985, AD obtuvo el 61 por ciento de los votos y COPEI, su más cercano seguidor, el 21 por ciento.[9]

Ni siquiera la elección de los representantes de AD en la dirección de la Confederación es dejada a las bases, sino que se decide en el "buró sindical" del partido.

Una consecuencia de esta relación es la diferente actitud de la CTV ante los gobiernos: militante y combativa cuando AD está en la oposición, se vuelve paciente y comprensiva cuando el partido gobierna.

En relación con la base sindical, la actitud de la CTV es una combinación de paternalismo y represión: la dirigencia discute "en frío" los contratos y luego de acordarlos informa a la base; los escasos movimientos cuestionadores son enfrentados con una combinación de violencia directa y represión estatal.

La actual situación de recesión económica, combinada con desempleo y crecimiento de los precios, representa un desafío para Acción Democrática y "su" movimiento sindical; se acrecienta la dificultad para mantener la lealtad hacia el partido cuando ya no se dispone de recursos abundantes que repartir, y los que existen deben ser disputados con otros actores.

El análisis de las respuestas de la CTV ante la crisis es desarrollado por los autores del estudio de caso por medio de "tres grandes problemas que coparon la escena política y económica durante el año 1984:

1) las condiciones para el pago de la deuda privada externa, la renegociación de la deuda pública externa y la definición de la política económica que permitiese un acuerdo con la banca acreedora; 2) la política de precios y salarios, y 3) el VII Plan de la Nación".[10]

El primer problema se debe a la presión ejercida por los empresarios para que el gobierno les suministrara divisas al cambio anterior a la devaluación para el pago de su deuda externa. Esta demanda fue reforzada por la banca internacional, que pretendía asegurar su cumplimiento como condición para el refinanciamiento de la deuda pública. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional hizo recomendaciones de política monetaria y fiscal del corte recesivo ya conocido en todos los países deudores.

El gobierno de Lusinchi completó la política iniciada por el de Herrera en el sentido de aceptar la petición empresarial, pero se resistió a aplicar abiertamente el programa del FMI. Es por ello que, al anunciar el otorgamiento del dólar preferencial para la deuda privada externa, también anunció medidas compensatorias para los trabajadores, como la obligación de las empresas de pagar un bono de transporte, establecer comedores industriales, aumentar el personal en un diez por ciento, y limitar el reparto de dividendos.

La CTV no se opuso al subsidio a la deuda privada, considerándolo un sacrificio necesario para el logro de la "confianza". Pero las compensaciones ofrecidas inicialmente se han cumplido en forma muy incompleta. Al finalizar 1984, se había logrado mejorar considerablemente las reservas internacionales y la balanza de pagos, pero la economía siguió estancada: de hecho, se había aplicado un programa muy semejante al propuesto por el FMI sin que el movimiento obrero venezolano hubiera efectuado una sola movilización de protesta. Basta comparar esta actitud con la de los movimientos sindicales de otros países de América Latina para darse cuenta de que el venezolano es ciertamente un caso excepcional.

La política de precios y salarios fue emprendida por el gobierno de Lusinchi a través de un mecanismo de concertación: la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Dicha comisión, integrada por representantes del gobierno, los empresarios y la CTV, debía procesar toda la política de precios. La presión empresarial logró que las decisiones de la Comisión perdieran su carácter vinculante para el gobierno, con lo cual se derrotó a la CTV en un punto que ella había considerado de honor. Además, el gobierno, representado por tres ministros, tiene mayoría absoluta en la Comisión, por lo cual ella tiende a reducirse a un simple instrumento de legitimación de la política económica estatal. De hecho, en los primeros meses de funcionamiento, la actividad principal de la Comisión fue autorizar aumentos de precios, ante una CTV minoritaria y pasiva. Cuando la Comisión pasa a considerar la congelación de precios de algunos productos básicos, FEDECAMARAS se retira de ella, con lo cual queda prácticamente paralizada.

Como una forma de compensar los aumentos de precios, la CTV solicita un aumento del salario mínimo, a lo cual el gobierno accede, llevándolo a 1500 bolívares (aproximadamente $ 120 al cambio libre) no sin establecer numerosas excepciones para su aplicación. Es de hacer notar que la CTV había pedido originalmente el doble de este monto, que sería el verdadero ingreso mínimo necesario para el sostenimiento de una familia.

Desde el punto de vista de la estrategia a mediano plazo, se enfrentaron en el gobierno de Lusinchi dos concepciones: una de orientación claramente socialdemócrata, liderada por el ministro de Planificación, Luis Matos Azócar, y otra de tipo recesivo, que da prioridad al pago de la deuda, impulsada por los ministros más ligados al sector empresarial.

El VII Plan de la Nación propuso un conjunto de medidas orientadas a reactivar la economía por medio del gasto fiscal, y a crear a mediano plazo un "sistema económico de cooperación" que estimularía fórmulas cooperativas, cogestionarias y autogestionarias de producción.

Una vez más, las presiones empresariales se hicieron sentir, culminando con la renuncia del Ministro de Cordiplan, al ser descartado su programa de inversiones públicas. No obstante ser este ministro percibido por la opinión pública como el más ligado a la CTV en el gabinete, la organización no presionó ni se movilizó para apoyarlo, dejando así el campo libre para la aplicación de las políticas recesivas.

En síntesis, la CTV se ha convertido en la antítesis de un "movimiento" social, en la medida en que su papel ha venido siendo el de desmovilizar cualquier respuesta de los sectores laborales frente a la crisis. Y en esta tarea es indudable que, hasta ahora, ha tenido éxito.

En los últimos meses la CTV ha aumentado sus peticiones de reajuste salarial, que han sido firmemente denegadas por el gobierno; a pesar de las consecuencias negativas de la política económica estatal para los trabajadores, la organización sindical sigue estando controlada por Acción Democrática. Ello demuestra la permanencia de mecanismos —algunos ideológicos, otros de coacción pura— de sujeción burocrática muy difíciles de romper.

En cuanto a las demás centrales sindicales, aparte de su tamaño insignificante frente a la CTV, en ellas se repite el mismo esquema de control partidista, en dos casos por fracciones de COPEI y en otro por el Partido Comunista.

Los grupos que pretenden desarrollar un sindicalismo distinto han sido contenidos a unos pocos sindicatos de dos o tres ciudades, y están sometidos a un constante hostigamiento.

Se puede concluir, entonces, que no existe en Venezuela el movimiento obrero como fuerza social capaz de presionar por sus intereses.

Este movimiento, después de numerosos fracasos, logra implantarse en Venezuela en la década del sesenta. A diferencia de otros países, donde ha pasado de su primigenio carácter de organización obrera a ser una organización integrada por sectores medios, en el caso venezolano estos últimos han sido poco proclives a organizarse en esta forma. Por el contrario, los mayores éxitos han sido logrados en los sectores populares.

La clave del crecimiento y arraigo del cooperativismo ha sido su integración local y regional, que le ha permitido agrupar los esfuerzos de cooperativas individuales para satisfacer la demanda de servicios comunales. Actualmente existen catorce centrales regionales, que a su vez se han agrupado en la Central Cooperativa Nacional (CECONAVE).

Esta forma de integración permite un cambio en la concepción de la cooperativa como unidad sectorial que presta servicios a sus asociados; por tratarse de asociaciones de segundo grado, los socios son las cooperativas y no individuos; además, se ha implantado un esquema de gestión que da participación tanto a los empleados como a los usuarios de los servicios. CECONAVE agrupa a trescientas cincuenta cooperativas y aproximadamente a 200 mil familias.

El movimiento, especialmente en la última década, ha dado un gran énfasis a las actividades de educación y planificación.

La educación no comprende sólo los aspectos técnicos de la gestión, sino que abarca la discusión de problemas generales de la comunidad y del país. Y la planificación es entendida como un ejercicio de gestión democrática, puesto que incluye la discusión del Plan anual de las centrales regionales y del Plan Nacional por todos los sectores involucrados en sus ejecución.

Estas prácticas de organización y gestión están orientadas por un proyecto sociopolítico centrado en la extensión de las organizaciones autogestionarias de base y su entrelazamiento gradual en unidades mayores, que debe proporcionar una creciente base económica autónoma y la coherencia ideológica necesarias para convertirse en una fuerza social.

En otras palabras, aunque la política partidista está excluida del movimiento, éste no es políticamente neutral o irrelevante. Por el contrario, el cooperativismo se ha convertido para muchos de sus miembros en un punto de referencia para la formación de criterios acerca de los grandes problemas del país y de las opciones para superarlos. Estos criterios tienden a coincidir con los de otras organizaciones populares de base, y de hecho existen múltiples y permanentes lazos entre el movimiento y estas organizaciones. La ideología que predomina actualmente en el movimiento enfatiza los aspectos anticapitalistas del cooperativismo pionero, se presenta como alternativa de organización frente al mercado y al estatismo, y valora en alto grado la democracia de base, el colectivismo, la solidaridad y el trabajo voluntario.

Aunque no está explicitado totalmente, el modelo de sociedad predominante en el cooperativismo actual sería un socialismo autogestionario.

Es necesario subrayar, sin embargo, que existen sectores del movimiento enfrentados a esta tendencia hoy predominante, a la que consideran ajena al cooperativismo tradicional y ligada a posiciones revolucionarias y subversivas. La lucha ideológica en el seno del movimiento no ha cesado desde que comenzó a orientarse hacia el proyecto más avanzado, y aunque este último está hoy firmemente arraigado en las centrales más importantes, sus adversarios continúan enfrentándolo.

A esta lucha interna se añaden las incursiones de los partidos políticos y del Estado, que intervienen permanentemente para apoyar o atacar a sectores del movimiento. Ciertamente, la existencia de una organización popular masiva no controlada por los partidos es una anomalía en el sistema político venezolano; esta característica hace que los mecanismos tradicionalmente usados para manipular y controlar a las organizaciones de base, como son, por ejemplo, los caudillos locales fieles al partido, no funcionen con el movimiento. Esta frustrante situación ha sido experimentada por los gobiernos de AD y COPEI, y se ha manifestado en frecuentes conflictos de los cuales participan los grupos internos, dirigentes de los partidos y funcionarios del Estado, en combinaciones diversas y alianzas inestables.

A pesar de esta situación de conflicto latente, el movimiento cooperativo ha logrado consolidarse como la organización popular independiente más grande y de mayor solidez organizativa.

Apoyándose en estas condiciones y en la experiencia adquirida por las centrales, el movimiento está intentando una respuesta concreta a la recesión económica, que es al mismo tiempo una expresión puntual de su proyecto estratégico. Se trata de un sistema de abastecimiento popular que los mismos cooperativistas destacan como ejemplo-síntesis de las principales características de su acción.

El proyecto consiste en la realización, en las ciudades más importantes, de una venta semanal de productos agrícolas a precios muy inferiores (entre 40 y 50 %) a los del mercado.

Esto es posible gracias a una combinación de trabajo voluntario y sistemas de comercialización que minimizan los costos, apoyándose en la estructura organizativa de las centrales regionales y de CECONAVE.

Los objetivos básicos de este proyecto han sido definidos como el abaratamiento de los productos alimenticios, el fortalecimiento de la integración cooperativa —enlazando producción, distribución y comercialización—, la producción de cambios en los hábitos alimenticios, y el fortalecimiento de las unidades cooperativas.[11]

Es posible captar en este proyecto, a pesar de su aparente sencillez, el entrelazamiento de los medios y fines a corto y largo plazo que denota la existencia de una visión estratégica.

En efecto, la actividad se dirige a ampliar la penetración y el prestigio del movimiento en la población no afiliada (puesto que los productos son vendidos al público general y no a un grupo restringido) y al mismo tiempo a fortalecer las unidades de base y los vínculos internos. Asimismo se destaca la intención educativa, dirigida a producir cambios en los hábitos de consumo de la población. Con ello se enlazan a preocupaciones de otras tendencias como el ecologismo y los movimientos que operan en el campo de la salud.

Las complejas relaciones entre el Estado y el movimiento no dejan de estar presentes en esta actividad. Diferentes niveles y sectores del Estado muestran actitudes contrapuestas frente al proyecto, evidenciando, por una parte, la incoherencia del aparato estatal (que se mencionó en la primera parte de este trabajo) y por la otra, las influencias variables de los partidos políticos y las diversas tendencias internas del movimiento sobre la acción del Estado.

II.3 Movimientos "de cuadro de vida"

Esta expresión es usada por Omar Ovalles, en su estudio de caso que engloba a los movimientos vecinal y ecologista en Venezuela, para destacar la estrecha relación que ellos han tenido y su problemática común.

El origen de estos movimientos es doble: por una parte, las primeras organizaciones vecinales, surgidas en la década del sesenta, se constituían en las zonas de vivienda de los sectores populares y tenían como objetivo principal la lucha por la dotación de servicios públicos.

Muchas veces estas organizaciones fueron promovidas por el Estado y organizaciones privadas, en un esfuerzo por contrarrestar la influencia del movimiento revolucionario en las organizaciones de base.

La otra modalidad de movimiento vecinal surge más tardíamente, cuando se acelera el proceso de urbanización y comienzan a saturarse los servicios como consecuencia de un crecimiento desordenado de las ciudades. El impacto es especialmente serio en Caracas, por la gran presión demográfica que se ejerce sobre un área muy limitada.

Los cambios en las densidades y usos de los terrenos, acordados por influencias políticas o por la corrupción de funcionarios, alteraban cotidianamente el ambiente urbano, agravando las insuficiencias de los servicios básicos. Las primeras luchas de los vecinos son puntuales, dirigidas contra la destrucción de alguna zona verde o la instalación de actividades comerciales en una zona residencial.

Lentamente, las asociaciones de vecinos de clase media van articulándose hasta formar una agrupación para toda el área metropolitana de Caracas, la Federación de Asociaciones y Comunidades Urbanas (FACUR).

Algunos enfrentamientos con el Estado son exitosos y logran frenar grandes proyectos de destrucción de áreas tradicionales del casco urbano para la construcción de viviendas de alta densidad.

El mayor conflicto hasta el momento ha sido el que en 1981 enfrentó a FACUR y al Concejo Municipal del Distrito Sucre (que tiene autoridad sobre parte del área metropolitana) alrededor del uso que se daría a un conjunto de terrenos no urbanizados. La presión de los propietarios de los terrenos favorecía la definición para uso comercial, mientras que la posición de FACUR era la de reservarlos para la construcción de servicios y áreas verdes.

La movilización de FACUR logró cierto impacto en la opinión pública, pero no su objetivo principal: el Concejo Municipal ratificó los usos propuestos por los propietarios.

Otra importante lucha fue la de un conjunto de asociaciones del Sureste de Caracas por limitar la densidad de esa zona. Aunque la ordenanza impulsada por los vecinos fue aprobada, diversas maniobras legales e ilegales la han hecho casi inoperante.

Estas jornadas hicieron particularmente visible el sesgo del sistema político y jurídico en contra de la participación de los ciudadanos y la indiferencia de los Concejos Municipales frente a las reivindicaciones vecinales. Y esto se debe a que el sistema político, diseñado para otro tipo de demandas, no ha sido capaz de asimilar la transformación que lleva desde organizaciones paternalistas fácilmente manipulables, orientadas a solicitar obras al Estado protector, hasta las asociaciones de nuevo tipo, caracterizadas por la exigencia de racionalizar la acción del Estado y someterla a la vigilancia de los afectados por ella.

En consecuencia, las asociaciones comienzan a presionar hacia la reforma del régimen municipal.

Un primer logro —relativo— es la separación entre las elecciones municipales y las nacionales, como un medio para valorizar el voto local y evitar que sea arrastrado por el presidencial. Una reivindicación básica ha sido la elección uninominal de los concejales; ella ha encontrado una gran resistencia en los partidos políticos principales, que actualmente presentan listas cerradas. Otra exigencia es que se reconozca a las asociaciones como representantes de la comunidad y que obligatoriamente se deba consultarlas ante cualquier decisión que las afecta. Aunque se han logrado algunos éxitos en este sentido, todavía existe un fuerte desbalance de poder entre los partidos políticos y los promotores urbanos, por un lado, y las asociaciones, por el otro.

La recesión económica ha afectado de dos formas principales a los

movimientos vecinal y ecológico. Por una parte la casi paralización de la construcción ha disminuido la necesidad de estar enfrentando cada día nuevos atentados al ambiente y a la vida urbana, dando más tiempo para la reflexión a largo plazo y para consolidar la organización, y por otra parte, el impacto de la recesión ha llevado a la búsqueda de formas para atenuar los efectos del desempleo, la inflación y el deterioro de los servicios.

Se comienza a ensayar, aún en pequeña escala, formas de agricultura alternativa urbana y periurbana, sistemas de reciclaje de basura, y otras actividades tendientes a buscar espacios de autonomía frente al mercado de productos y de trabajo.

El proyecto a largo plazo subyacente en estas actividades todavía experimentales está fuertemente influido por una orientación ecologista que puede resumirse en los términos de "supervivencia" y "prosumidor".

En términos de Omar Ovalles: "Se trata, en los términos más elementales, de darse a sí mismo y al grupo de afinidad las condiciones existenciales de alimentación, vivienda, cultura, etc., pero con una tecnología y práctica organizativa [en] que prevalezca la solidaridad por encima de la dependencia, la modestia por encima de los superfluo, lo autodeterminado por encima de lo impuesto".[12] "El cambio fundamental que se trata de buscar es pasar del consumidor al prosumidor, [...] donde la relación entre el individuo y los objetivos, y entre los individuos entre sí pierda su enajenación." [13]

Puede notarse en estas tendencias recientes la evolución que han sufrido los movimientos vecinales y ecológicos, desde las luchas concretas y locales hacia una visión de alternativas de organización social.

Sin embargo, este enfoque sólo empieza a desarrollarse en algunos grupos y comunidades, coexistiendo con las movilizaciones tradicionales. Por otra parte, a pesar de su extensión, estos movimientos no han consolidado hasta ahora una organización a nivel nacional, en parte por su gran heterogeneidad y en parte por su desconfianza ante los peligros de la burocratización y el centralismo. Mientras tanto, continúan su lucha desigual frente a los partidos y el Estado.

II.4 Las comunidades eclesiales de base

Las comunidades eclesiales o comunidades cristianas de base (CEB) son grupos de acción y reflexión que tratan de realizar en la práctica una determinada concepción del Evangelio.

Han venido desarrollándose en América Latina como resultado del creciente compromiso de grupos cristianos con la transformación social (aunque esto incluye a todas las denominaciones, lo que aquí se expone vale sólo para las de orientación católica, que fueron las estudiadas).

El origen de estas comunidades está en la gradual transformación de la acción evangelizadora bajo el impacto del Concilio Vaticano II y de las condiciones de vida de las grandes masas latinoamericanas.

Las componen personas unidas por su condición de cristianos, independientemente de otras referencias, políticas, organizativas o laborales. Tratan de reflexionar sobre el sentido de la Fe en el mundo actual y la manera de transformarla en acción concreta. Y se han implantado fundamentalmente entre los sectores populares, bajo la concepción de la "Iglesia de los pobres" o "Iglesia popular".

Estas comunidades no han alcanzado en Venezuela el mismo grado de notoriedad y capacidad de movilización que en otros países de América Latina, y no se han agrupado como una organización nacional. Algunos obstáculos que se oponen a su crecimiento son el fuerte peso de la ideología individualista y la competencia de organizaciones "clientelistas" que ofrecen reivindicaciones inmediatas por la vía de la petición al Estado. A ello se suman los intentos deliberados de esas organizaciones por desarticular cualquier movimiento popular autónomo que comience a competir con ellas.

Por otra parte, la forma de vivir el cristianismo que tiene el venezolano es distinta a la de otros países de América Latina, puesto que la escasa implantación de la Iglesia le ha restado autoridad, dando oportunidad para que las personas definan su relación con el cristianismo en forma flexible y poco exigente.

En estas condiciones, el factor decisivo en el surgimiento de una CEB es el agente pastoral. Si es una persona identificada con las corrientes avanzadas de la Iglesia, es muy probable que surjan comunidades cristianas en su área de influencia. Por el contrario, es poco probable que se formen espontáneamente, sin la animación o el apoyo eclesiástico.

Las comunidades se forman cuando logran responder a ciertas necesidades populares difíciles de captar a primera vista, porque trascienden lo inmediato sin dejar de ser cotidianas.

Ellas se refieren a la autoimagen de los sectores populares, a su necesidad de defender su derecho a mejorar sus condiciones de vida, aunque están dispuestos a trabajar durante muchos años para lograrlo, y más importante aún, su derecho a la dignidad y a ser reconocidos como seres humanos valiosos en sí mismos, independientemente de su situación en la estratificación social.

En este sentido, la conexión con el mensaje cristiano es un fuerte elemento de autovaloración, puesto que otorga el reconocimiento, por la comunidad y la doctrina, de la dignidad e importancia de cada persona.

Un elemento adicional, que adquiere mayor relevancia en la actual situación crítica, es el carácter ineludible de la solidaridad en los sectores populares. Dado el empobrecimiento individual extremo, la única ma-

nera de enfrentar cualquier situación inesperada es recurrir a la ayuda de familiares, amigos o vecinos. En la medida en que las CEB no se limitan a la reflexión, sino que ofrecen alternativas de acción solidaria, reafirman su validez para la comunidad en la que están insertas.

Las actividades de las CEB incluyen reuniones de reflexión sobre el Evangelio y sobre problemas locales o nacionales, así como de planificación y evaluación de acciones. Estas son generalmente emprendidas en conjunto con otras organizaciones de la localidad y están dirigidas al logro de reivindicaciones concretas.

Esta acción, organizativa y formativa a la vez, está orientada por un proyecto definido de la siguiente manera por los autores del estudio de caso: "En América Latina viene gestándose un Proyecto histórico de liberación cuya proposición fundamental sería el convocar al propio pueblo para que asuma su destino. La base de dicho proyecto estaría en la realización de la organización popular autónoma. Las posibilidades de triunfo dependerán del grado de participación popular que se alcance mediante organizaciones propias y esto frente a la llamada del status que exige consumismo y domesticación y frente a la masificación de los populismos y a la burocratización de los llamados 'socialismos reales'." [14]

En síntesis, se trata de la autonomía de la organización popular como medio para su liberación. Pero de este proyecto se derivan tres dificultades centrales: las relaciones con la Iglesia como institución, con los sindicatos y partidos políticos, y con el Estado.

En primer lugar, no toda la Iglesia considera que su compromiso prioritario sea la identificación con esta organización popular; la lucha ideológica interna, sin ser violenta, no deja de ser intensa. La dedicación de miembros de la institución al fortalecimiento y creación de CEB, que, como hemos visto, tiene hoy un carácter imprescindible para su existencia, puede ser amenazada por decisiones jerárquicas que impongan otras prioridades. Sólo una dinámica más autónoma de crecimiento podría alejar este peligro.

En relación con los sindicatos y partidos, las CEB critican su estructura burocrática y manipuladora, pero no pretenden sustituirlos. En cierta forma, se presentan como organizaciones complementarias, uno de cuyos papeles sería el de formar individuos con capacidad de trabajar organizadamente sin perder su visión crítica y autonomista.

Otra función de las comunidades es la de dar un espacio para la expansión de todas aquellas actividades que van más allá de lo económico y lo político, para evitar la reducción de la experiencia a los marcos institucionalizados, y para enfrentar situaciones que exijan la solidaridad más allá de barreras corporativas o ideológicas.

Finalmente, a semejanza de lo que ocurre con otras organizaciones de base, las CEB son frecuentemente objeto de represión o desconfianza por parte del Estado. Su carácter de organizaciones autónomas es, de hecho, "subversivo" para un sistema que requiere de la pasividad de las bases para funcionar. Quizás el bajo perfil que ellas mantienen hasta ahora hace que no sean percibidas como una amenaza inmediata pero sí han sido hostigadas en algunos casos de conflictos locales.

La presencia de estos obstáculos se convierte en un estímulo para que las CEB fortalezcan sus lazos de integración con otras organizaciones populares autónomas, contribuyendo a la formación de un movimiento popular independiente de las organizaciones tradicionales de masas.

III. Conclusiones

El recorrido que hemos llevado a cabo permite extraer algunas conclusiones comparativas aún preliminares:

1) Puede distinguirse una clara separación entre las grandes organizaciones tradicionales de encuadramiento de las bases: partidos políticos y movimiento sindical, y los movimientos sociales de nuevo tipo.
   Los primeros han sido casi totalmente absorbidos por el sistema hegemónico y funcionan como sus legitimadores y realimentadores; los segundos se constituyen al margen de los partidos políticos y en relaciones conflictivas con el Estado.
2) Es posible percibir la lenta emergencia de un proyecto sociopolítico opcional, con importantes puntos de coincidencia entre los tres movimientos sociales analizados. La convergencia fundamental es la prioridad de la autonomía organizativa. Este proyecto es, muy probablemente, compartido por los demás movimientos existentes.
3) Las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado apoyan la hipótesis de una pérdida de vigencia de los mecanismos del sistema político para procesar demandas y tomar decisiones.
4) Los efectos de la coyuntura crítica han generado respuestas específicas en los movimientos sociales que son coherentes con sus proyectos estratégicos, demostrando una mayor vitalidad y creatividad que los partidos y sindicatos, incapaces hasta ahora de generar respuestas adecuadas y novedosas.
5) Las relaciones entre los nuevos movimientos sociales y el Estado son coyunturalmente ambiguas, dada la heterogeneidad e incoherencia del Estado que pueden ser aprovechadas favorablemente en ocasiones, pero son estratégicamente antagónicas, ya que el Estado se orienta por un modelo negador de la autonomía de la base.

Sólo una profunda reforma del Estado podría ser compatible con los objetivos de los nuevos movimientos sociales.

Notas

[1] López Maya, Margarita, *Organizaciones asociativas de la Venezuela en transición,* CENDES, Caracas, 1984 (trab. mimeografiado).

[2] Gómez C., Luis, *Algunos problemas de la investigación sobre el Estado en Venezuela,* CENDES, Caracas, 1980 (trab. mimeografiado).

[3] López Maya, Margarita y Gómez C., Luis, *Crisis y concertación en Venezuela: dos coyunturas históricas,* CENDES, Caracas, 1984 (trab. mimeografiado), págs. 7-19.

[4] Esta sección se basa en: López Maya, Margarita y Gómez C., Luis, *Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958-1985,* CENDES, Caracas, 1985 (trab. mimeografiado), cap. I. (Proyecto parcialmente financiado por CONICIT, Subvención S1-1420.)

[5] Díaz Bruzual, Leopoldo, *Crisis y recuperación,* Arte, Caracas, 1984, pág. 40.

[6] López Maya, Margarita y Gómez C., Luis, ob. cit., 1984, págs. 31-34.

[7] Ovalles, Omar, *Movimientos de cuadro de vida en la Venezuela urbana actual: posibles actitudes para enfrentar la crisis,* pág. 25.

[8] López Maya, Margarita y Gómez C., Luis, ob. cit., págs. 40-43.

[9] *El Nacional,* Caracas, 24/5/85, pág. D-1.

[10] Lander, E. y Arconada, S., *La Confederación de Trabajadores de Venezuela ante la crisis (el mito del movimiento obrero en Venezuela),* pág. 14.

[11] Matute, Eduardo, *Enfrentando juntos la crisis (un proyecto de abastecimiento popular en Venezuela),* págs. 10-11.

[12] Ovalles, Omar, ob. cit., pág. 34.

[13] Ibídem, pág. 35.

[14] Centro Gumilla, *Comunidades eclesiales de base en Venezuela,* pág. 30.

Luchas y movilizaciones sociales en la crisis: ¿se constituyen movimientos sociales en Chile? *

Guillermo Campero **

1. Un decenio que no logró fundar una sociedad sin actores colectivos (1973-1983)

Las llamadas "protestas nacionales",[1] que se inician en 1983, y se manifiestan como activas movilizaciones urbanas por parte de la mayoría de los sectores sociales en contra del régimen militar, en particular de su política económica, pero sin duda también en contra de su carácter autoritario y coactivo, mostraron que en la sociedad chilena reemergían dinámicas de lucha colectiva que parecían, hasta entonces, relativamente neutralizadas.

Estos hechos, que adquirieron la fisonomía de una explosión contestataria contenida por mucho tiempo, pusieron, por primera vez, al régimen militar en situación de perder la iniciativa política e hicieron visible su condición de minoría social.

Las "protestas" tuvieron un alto perfil de espontaneísmo, aun cuando su origen estuvo ligado a una convocatoria surgida desde el movimiento sindical opositor, tal vez el segmento social más organizado —pese a su debilitamiento en el decenio—, el que venía movilizándose desde hacía ya tiempo y aspiraba a un paro nacional de actividades. Se dio así una coyuntura de convergencia entre sectores que conservaban

* Trabajo preparado como resumen e introducción al estudio de los movimientos sociales en Chile. Las investigaciones de base fueron las siguientes: Jaime Ruiz Tagle, "El movimiento sindical chileno y la crisis del capitalismo autoritario"; Gonzalo Tapia Soko y Gonzalo Vio Grossi, "El problema de la recomposición de los actores campesinos en una perspectiva redemocratizadora; Vicente Espinoza, "Los pobladores en la política"; Eduardo Valenzuela, "Los jóvenes y la crisis de modernización, y Cristián Vives, "El pueblo mapuche: elementos para comprenderlo como movimiento social".

** Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), Santiago.

cierto grado de organicidad y de articulación política (el sindicalismo había mantenido sus lazos con los partidos políticos opositores, los cuales también se estaban reestructurando persistentemente) y aquellos sectores más dispersos y atomizados (pobladores, jóvenes, segmentos de capas medias, profesionales y comerciantes, entre otros), en términos de un espacio común y flexible, definido, si no por una estrategia común, sí por un signo de confrontación opositora frente a los resultados de la crisis económica y el autoritarismo excluyente del régimen.

A partir de ese momento, y pese al reflujo posterior que las "protestas" tuvieron (hacia la segunda mitad de 1984 ellas perdieron en parte su carácter masivo y multiclasista concentrándose sobre todo en los sectores marginales urbanos), no cabe duda de que la sociedad entró en una dinámica de activación social y política. Ella se expresó en la constitución de referentes orgánicos en ambos niveles (se constituye el Comando Nacional de Trabajadores, la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular; se forman partidos en la derecha más o menos independientes del régimen; se reinstala la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile —FECH—; se organiza la Central Nacional Campesina y cobran vida activa numerosos núcleos de acción entre los jóvenes, los profesionales y las mujeres).

En consecuencia, el Chile post 1983 vive un emergente proceso de reconstitución de actores sociales colectivos, el que pese a su carácter lento, todavía extremadamente frágil y no exento de constantes involuciones, marca —a nuestro juicio— el comienzo del fin de un perfil social que estuvo dominado por un alto grado de inmovilismo. Esta situación designa, al mismo tiempo, el fracaso de aquella dimensión del proyecto de transformación social y cultural que intentó el bloque dirigente del régimen militar, consistente en ordenar las relaciones sociales en torno de la lógica individualista de concurrencia mercantil, neutralizando la referencia estatal y política de los intereses y su articulación colectiva.[2]

En la base de este proceso de rearticulación social están sin duda los efectos de la crisis económica que enfrenta el régimen desde 1981, los cuales hicieron evidentes los límites y la fragilidad del modelo económico implantado a partir de 1975, así como profundizaron dramáticamente su carácter concentrador y marginalizante.[3] Sin embargo, lo que dicha crisis, a nuestro juicio, permitió, sobre todo, fue la extensión a grupos sociales más amplios de una conciencia crítica respecto de la necesidad de recuperar un estilo de desarrollo que privilegiara la nación por sobre las dinámicas de un mercado transnacionalizado como el eje articulador de tal desarrollo, más que solamente generar respuestas reactivas puramente coyunturales. Si bien estas últimas existieron entre segmentos del empresariado, atentos a sus posiciones de corto plazo en el mercado,[4] lo cierto es que entre ellos mismos, así como entre las corporaciones profesionales, los sindicalistas, los estudiantes, o como entre

los desocupados y el mundo de los jóvenes y los excluidos urbanos y rurales, la perspectiva de recuperación de una "economía nacional" cobró progresivamente vigencia. Esta orientación se articuló necesariamente con una referencia a la política, puesto que la permanencia del régimen en su modalidad de dictadura personalizada, dadas sus convicciones y sobre todo su lógica de rechazo a la negociación social, hacía impracticable casi cualquier tipo de concertación sociopolítica capaz de reorientar al país hacia nuevos destinos. En consecuencia, la crisis económica llevó a plantear la cuestión del régimen político y su transformación, en ámbitos más amplios que aquéllos que lo venían haciendo recurrentemente desde 1973, esto es, los partidos opositores, el sindicalismo mayoritariamente crítico, los segmentos estudiantiles y poblacionales más radicalizados y ciertos núcleos de la Iglesia católica, así como el mundo de la intelectualidad y los profesionales progresistas.

Con todo, esta reposición a nivel colectivo de "la política" tuvo y sigue teniendo dinámicas y ritmos muy diferentes, tanto porque ella ha estado asociada con los espacios de "apertura" política que se vio obligado a proveer el régimen —los cuales se abren o cierran según éste recupera la iniciativa y puede o no usar sus recursos de coacción, los que no ha perdido— como porque los referentes políticos constituidos no han logrado proponer una estrategia de transición desde la situación actual hacia otra de restauración democrática que logre ser admitida como viable por una mayoría social suficiente. Esto es sobre todo importante en aquellos sectores empresarios y segmentos de capas medias interesados en ver garantizadas condiciones de gobernabilidad para ese tránsito, que eviten su derivación en procesos de explosión social, reeditando los riesgos sociopolíticos de los cuales piensan que se liberaron en 1973 con la intervención militar.

Al mismo tiempo, la no disposición que parecen tener las corporaciones militares a considerar una pauta de retiro de la gestión estatal y política en plazos cercanos, insistiendo por lo tanto en su rol de garantes de un proceso que lleve al régimen militar a establecer un régimen político establemente autoritario,[5] según la Constitución plebiscitada en 1980, constituye un factor que, al introducir una fuerte rigidez en la lógica política, neutraliza y entraña que la politización de la crisis económica adquiera, con mayor rapidez, un ritmo de ascenso permanente y se constituya en la matriz dominante de acción de los actores sociales y políticos que se reconstituyen.

Sin embargo, el proceso de politización parece ser ya un hecho persistente, que el régimen sólo logra retener o encapsular sobre todo con recurso a la coerción. Esto, que puede ser eficaz por un tiempo, incluso largo, no elimina el dato sustancial de que la escena social está llena de tensiones y de que existe presión de los actores sociales por ocuparla. Así, la mano invisible de un orden social abstracto se retira para dar lugar

a la reemergencia progresiva de intereses colectivos que se manifiestan y entran en relación.

Hay entonces no puramente una crisis económica que se politiza gradualmente, sino una crisis del proyecto social y cultural del bloque dirigente que condujo el proceso del régimen militar. Este último administra hoy dicha crisis intentando hacer el puente con una solución política autoritaria en 1989, pero la cual —de producirse— no cabe duda de que no será la consolidación del modelo social buscado después de 1973, sino que seguramente estaremos en presencia de un régimen rígidamente conservador, con cautela militar, pero muy alejado de aquello que pretendían configurar las "modernizaciones" intentadas entre 1975 y 1981.

Con todo, la crisis no puede ser definida solamente en esos términos, pues no se trata únicamente de un proceso en que un bloque dirigente pierde este carácter (el de portador de un modo de organización social y cultural que logra ser consensual y exitoso) y pasa a ser exclusivamente una clase dominante, defensora de privilegios y posiciones de poder. En efecto, hay que considerar al mismo tiempo que no surge claramente una nueva y emergente clase o coalición con capacidad de dirigencia suficiente como para hegemonizar las luchas y movilizaciones que se oponen al régimen articulándolas en un proyecto opcional de sociedad. Ello refleja la existencia de un vacío de dirigencia y de liderazgo y la dificultad de formación de consensos estables. En consecuencia, no se trata sólo de la crisis de un régimen, sino más profundamente de la desarticulación y atomización de una "idea de Chile",[6] capaz de convocar a un espacio común a actores sociales y políticos diversos. Esto es el resultado de la dilución del consenso histórico que después de los años treinta y hasta los años setenta estuvo definido por la relación industrialización con democratización, y del fracaso posterior en constituir nuevos modelos de sociedad, en particular aquél intentado después de 1973, el que tuvo sobre todo efectos desorganizadores de la matriz histórica de la sociedad, pero que no consiguió configurar establemente modos diferentes de orden social, económico, cultural y político.

En consecuencia, más allá de la crisis económica y del debilitamiento del régimen, la crisis es una crisis de liderazgo, de capacidad dirigente y de capacidad de reformulación de los consensos históricos. En ese marco, las nociones de un desarrollo centrado en la nación y de la democracia política como régimen deseable, que aparecen como orientaciones globales de las luchas y movilizaciones, son —pese a su gran importancia— todavía líneas muy dispersas, marcadas a menudo por la evocación del pasado o desprovistas de una referencia precisa a las nuevas condiciones estructurales y sociales surgidas en el último decenio.

Lo anterior no implica en absoluto que la politización emergente no sea desde ya considerada una indicación de que los actores sociales han comenzado a romper el primer cerco que obstaculiza su potencialidad para generar nuevos proyectos sociales y que, por lo tanto, el camino de superación de la crisis comienza a ser recorrido.

El punto es entonces plantearse en qué condiciones socio-estructurales, políticas, culturales, surgen estos actores. Al mismo tiempo es necesario interrogarse sobre la fuerza o fragilidad con que ellos emergen y saber si se trata de viejos o nuevos actores sociales: saber también qué orientaciones prevalecen en sus acciones, si hay o no nuevas matrices de comportamiento y de qué manera están procesando la crisis actual. Estas y otras preguntas pueden ayudar también a saber si están surgiendo verdaderos movimientos sociales.

Los trabajos reunidos en este volumen abordan estos temas con distinta intensidad, pero todos ellos contribuyen a formarse una visión —todavía gruesa o imperfecta— de las respuestas. A partir de esos estudios —y el debate que les siguió en los seminarios donde se presentaron—, se intenta en las secciones que siguen mostrar nuestra propia perspectiva. No se trata de un trabajo pleno de rigor, sino de un ensayo general, cuya finalidad sólo es *sugerir* ideas, no necesariamente todas articuladas entre ellas.

2. Estructura social y actores sociales en Chile

2.1. Una visión global de la evolución de la estructura social

Tal vez el hecho más importante desde el punto de vista de la estructura social ha sido, en este último decenio, la enorme magnitud, relativa y absoluta, que adquirió el crecimiento de una masa marginal excluida a largo plazo de las posibilidades de ingreso a la ocupación formal.[7] Esta masa excluida y empobrecida es la nota dominante en el mundo urbano, pero también caracteriza progresivamente al mundo rural, donde la casi desaparición del latifundio y la involución privatista del proceso de Reforma Agraria no fueron sugeridos por la implantación de la moderna empresa agroindustrial exportadora y forestal y por la formación o extensión de un campesinado propietario, parcelero mediano y sobre todo pequeño, a menudo subsistente. En consecuencia, el campesino expulsado de los fundos, el que perdió su asignación de tierra de la Reforma Agraria o tuvo que vender para sobrevivir, así como la fuerza de trabajo joven que no es fácilmente incorporada a las unidades modernas —altamente capitalizadas y que ofrecen sobre todo trabajo temporal— ni tampoco al tradicional fundo triguero o ganadero golpeado por la apertura externa, se ha ido constituyendo en un segmento marginal creciente, dando origen a los "poblados rurales", suerte de poblaciones "callampas" en los bordes de los pueblos agrícolas.[8] Así, la estructura social del campo se ha segmentado en una creciente masa marginal, un

proletariado agrícola en reducción que se precipita a la marginalidad o al empleo temporario y un campesinado parcelero pobre o medianamente subsistente.

La desindustrialización redujo, por su parte, los contingentes obreros, al mismo tiempo que los empobreció, sin que surgieran, sino escasamente, núcleos modernos o se produjeran cambios sustanciales en la composición técnica de la fuerza de trabajo.[9] En consecuencia la clase obrera industrial y sus diferentes segmentos sufrieron una jibarización y pauperización, pero no se transformaron en una "nueva" clase obrera, resultado de un nuevo estado de desarrollo capitalista, que no se produjo. Consecuentemente se origina un persistente flujo de obreros desocupados que engrosan los contigentes marginales urbanos y el sector informal.[10]

En el amplio sector terciario se encuentran también transformaciones de importancia. En primer lugar, se expandió mucho más rápidamente que en el período previo al decenio militar, particularmente en el comercio y servicios privados y en las actividades financieras. En el interior de este crecimiento se observa, sin embargo, una dicotomía muy clara. Por una parte, una alta proporción de ocupados en este sector se caracteriza por su pertenencia o proximidad a las llamadas categorías "informales", esto es, inestables en su ocupación y de baja productividad, que además se sitúa a menudo fuera de relaciones de trabajo reguladas legalmente. En suma, un segmento social altamente inorgánico, heterogéneo y sólo subsistente. Paralelamente, la disminución de la administración pública y su desprivilegio, profundizó el empobrecimiento de sus estratos medios y bajos y los congeló en una situación de difícil ascenso y movilidad social. Por otra parte, la formación de núcleos de burocracia tecnocrática privada y pública, altamente modernos y generalmente bien rentados, situados en empresas, bancos, servicios o consorcios ligados al sector monopolista o a grandes entidades estatales. De este modo, la denominada "clase media", constituida históricamente de manera importante en torno del empleo público, del comercio o servicios y de las profesiones liberales, se ha visto fuertemente dualizada entre "polos" cuya distancia hace difícil hoy día recuperar como válida la noción de un país con una amplia "clase media", pues ésta ha estallado entre esos dos referentes polares y se ha segmentado agudamente entre ellos. A esto hay que unir el bloqueo económico al acceso a la educación superior y la polarización de esta última en instituciones que permiten acceder al mercado ocupacional alto y otras que sólo producen desempleo ilustrado.

Por último, en las categorías empresariales, los resultados del modelo económico generaron la expansión de un empresariado comercial y de servicios de nivel medio y pequeño junto al segmento monopolista durante los años del "boom" (1978-1980). Al mismo tiempo, se redu-

cía persistentemente el empresariado industrial, especialmente en sus estratos pequeños y medianos. Posteriormente, la crisis del modelo afectó fuertemente a ese empresariado comercial y de servicios de nivel medio y pequeño provocando su drástica reducción. Se acentuó así el carácter concentrador del empresariado, el cual, sin embargo, se transformó posteriormente en deudor del Estado. En la agricultura, la apertura comercial posterior a 1975 produjo la reducción de los empresarios agrícolas no exportadores y el surgimiento de un segmento exportador dinámico, concentrado en el Valle Central. Este segmento se forma, al parecer, no por una reconversión —que fue sólo limitada— del antiguo empresario de mercado interno, sino sobre todo a partir de nuevos núcleos provenientes de los grupos económicos monopolistas ligados en muchos casos al capital financiero transnacional.

En síntesis, y de manera más general, puede sugerirse que los años posteriores a 1973, mostraron una evolución de la estructura social en que crecieron ampliamente las categorías socio-ocupacionales más inorgánicas, urbanas y rurales, y se redujeron aquéllas más formalizadas y estables, sin que al mismo tiempo en estas últimas se produjeran, sino marginalmente, transformaciones en su composición interna y en su grado de modernización, con excepción de la emergencia de una alta burocracia privada y pública, tecnocrática y del segmento exportador agroindustrial. También hay que considerar aquí la consistente consolidación de un verdadero "estamento militar" que, dado su número y su posición de influencia, constituye una categoría distinguible con sus propias pautas internas de estratificación.

Junto a ese proceso de inorganicidad, se generó una rigidez o impermeabilidad de la estructura socio-ocupacional que afectó el ingreso de nuevos sectores a la vida activa, en particular jóvenes y mujeres, por lo que la población que ocupa los puestos formales de trabajo ha ido envejeciendo y masculinizándose.[11]

En consecuencia, la tendencia de la estructura socio-ocupacional está claramente definida por un perfil de exclusión persistente desde las posiciones formales hacia las informales y más inorgánicas, por la inflexibilidad para absorber nuevos contingentes y por el abultamiento de una masa marginal que resulta de ambos procesos y cuya composición incluye ostensiblemente a los jóvenes y a las mujeres.

2.2. Actores sociales y su constitución

Desde el punto de vista de la formación de actores sociales, es indudable que la base estructural de éstos constituye un criterio importante a tener en cuenta, pues una condición relativamente común

de existencia, con una densidad y permanencia de interrelaciones como la que puede generar una posición estructural compartida, facilita normalmente la formación de comportamientos colectivos diferenciables, definidos por una identidad común y también por una referencia común a otras categorías sociales. Así, una categoría analítica, socioeconómica, puede ser examinada como un agente o actor social concreto en cuanto adquiere, por así decirlo, historicidad, a través de la capacidad de acción colectiva y de autorrepresentación.

Obviamente no puede sostenerse que las categorías socioeconómicas analíticamente definidas se correspondan siempre con actores o sujetos efectivos. A menudo ocurre también que estos últimos se constituyen sin corresponderse con categorías precisas, o que su base estructural es mixta o multicategorial.

Con todo, la proposición de que una mayor intensidad de interrelaciones entre personas que comparten condiciones de existencia y posiciones socio-ocupacionales más bien homogéneas y estables constituye una situación objetiva relativamente favorable a la formación de un actor social concreto, nos parece una hipótesis que opera en la situación examinada.

Desde este punto de vista, la tendencia de la estructura socio-ocupacional en este decenio hacia el abultamiento de la marginalidad, ha limitado las dinámicas de constitución de actores sociales estables, precisamente por el carácter segmentado, heterogéneo y atomizado de estos conglomerados o masas marginales. Al mismo tiempo, la persistente reducción e inestabilidad de las categorías más formales (los obreros industriales, el proletariado agrícola, la burocracia pública media y otras), les ha hecho perder centralidad estructural y política, limitando su capacidad de acción colectiva. Estas últimas categorías sociales habían dado origen históricamente a los movimientos propiamente "clasistas", es decir, aquéllos que se correspondían con categorías centrales en la sociedad y que eran capaces —a partir de una identidad de clase— de interpelar el poder del Estado, disputando el control de sus orientaciones y las de la sociedad a otras clases. Así, la evolución de la estructura social ha generado condiciones para un debilitamiento de estos actores "clasistas", al mismo tiempo que ha dado lugar a un amplio conjunto de masas relativamente inorgánicas, capaces sin embargo de producir luchas y movilizaciones intermitentes, pero con dificultades para constituirse más fluidamente en actores con una base de interrelaciones permanentes y dotados de una estrategia, así como de intereses colectivos claramente compartidos.

Este debilitamiento de los actores clasistas no ha implicado en absoluto su disolución, pues ellos se han mostrado persistentes pese a la limitación de sus bases estructurales de existencia y de reproducción. Más bien lo que ocurre es que la acción "clasista" adquirió características sobre todo defensivas, haciéndose relativamente más difusas sus orientaciones hacia la transformación.[12]

En síntesis, la matriz estructural en configuración no ha favorecido condiciones fluidas para la constitución de nuevos actores consistentes y, al mismo tiempo, ha ido congelando la base material de reproducción de los actores históricos, con las ya mencionadas consecuencias defensivas en sus orientaciones.

Lo anterior no supone que no existan procesos que se orienten hacia la constitución de nuevos actores y hacia la vitalización de los actores clasistas históricos. De hecho, el proceso de politización descrito en el primer párrafo de este texto es resultado de luchas y movilizaciones por las que transitan dinámicas en ese sentido. En consecuencia, nuestras observaciones sobre los condicionantes que genera la estructuración socioeconómica, no deben ser entendidas como la adopción de un criterio determinista absoluto respecto de la constitución de actores sociales concretos, esto es, de sujetos sociales que se expresen en una acción colectiva, con identidades y orientaciones distinguibles, sino solamente como factores que intervienen —en los sentidos ya comentados— sobre la fluidez, secuencia y ritmo de su constitución potencial, reconstitución o vitalización. Así comprendidas nuestras referencias, es claro que la evolución de la estructura social dio lugar a una desarticulación relativa de las condiciones materiales históricas de formación de actores o sujetos sociales en Chile. En ese contexto, la situación actual se define por un proceso —con involuciones y progresos— de complejos intentos de reconstitución de actores y sujetos sociales, más que como una situación de vacío de actores o de actores ya plenamente constituidos o revitalizados.

3. Actores sociales y sistema político

El análisis de las condiciones estructurales antes presentado debe ser acompañado, al mismo tiempo, por un examen del otro factor sustancial que intervino, en Chile, en la formación de actores sociales y políticos: el sistema político, entendido como el mecanismo institucional de procesamiento de demandas y de formación de decisiones políticas a través del cual se articuló la relación entre el Estado y la sociedad civil. En nuestro caso, fue fundamentalmente un sistema de partidos y de organización parlamentaria.

Como bien lo ha señalado Manuel Antonio Garretón,[13] el sistema político constituyó una verdadera "columna vertebral" de la sociedad chilena, a tal punto que las instituciones políticas fueron casi más fuertes que las organizaciones sociales y, en muchos casos, estas últimas surgieron, en número importante, creadas y sostenidas desde aquéllas.

En consecuencia, la fuerte desarticulación que sufre el sistema de partidos y la desaparición de los espacios públicos de negociación y contrapeso, después de 1973, hizo que prácticamente se anularan los mecanismos de mediación y representación de intereses colectivos, al mismo tiempo que se diluía uno de los núcleos motores más importantes de la movilización social. Recogiendo una expresión difundida en los medios sindicales, podría decirse que las organizaciones sociales quedaron "al garete", es decir, desprovistas de lo que había sido su timón principal.

Esta situación hizo que los agentes sociales y sus movilizaciones enfrentaran una lucha casi sin mediadores y sin catalizadores —rol que cumplían los partidos— y en la cual instituciones como la Iglesia católica o los intelectuales cumplieron un rol parcial y limitado de reemplazo.

El resultado de esta desarticulación del sistema político ha tenido efecto, por lo tanto, en el modo histórico de constitución de los actores sociales, puesto que ellos se formaron en estrecha relación y articulación con la lógica de acción y de representación de los partidos y siguiendo sus dinámicas. Dicho efecto se expresa en que los procesos de colectivización de intereses y demandas han debido adquirir un perfil necesariamente más autónomo, así como la definición de identidades y referencias a otros intereses distintos o antagónicos. Con todo, esta autonomización, en tanto se ha manifestado como una exigencia de las circunstancias anotadas, y no como un proceso inscrito en una tendencia histórica independiente de aquéllas, carece todavía de una consistencia suficiente como para suponerlo un rasgo ya sólidamente definido del perfil de los actores sociales en proceso de formación o de revitalización. Esto se ha hecho evidente en el momento en que los partidos comenzaron a reorganizarse, ocasión en que las emergentes luchas y movilizaciones iniciaron también procesos de religamiento con los núcleos políticos. De todas formas, es evidente también que este relacionamiento está fuertemente marcado por la experiencia de autonomía vivida en la práctica, lo que pone en claro que las vinculaciones entre actores sociales y partidos probablemente no seguirán una matriz de articulación con la misma alta dependencia que tuvieron hace una década.

Sin embargo, el hecho mismo del debilitamiento de esa matriz histórica y su no reemplazo consistente por otra —dado que la relación entre autonomía y dependencia está en proceso de compleja definición— hace que el modo de constitución y revitalización de actores sociales tenga una dimensión de fragilidad. Retomando la noción de "columna vertebral" antes mencionada, puede sugerirse que no se ha estructurado una nueva y persistente vertebración y que ésta oscila entre configurarse sobre principios constitutivos propios de la sociedad civil y configurarse sobre los de un sistema político partidario, más bien ligado a la relación con el Estado, que emerja reconstruido en el futuro. Esto tiene que ver, también,

con la multidimensionalidad de las orientaciones que expresan las luchas y movilizaciones, las que combinan, a veces en confrontación y a veces en convergencia, perspectivas de acción centradas en los temas estatales y políticos, y perspectivas centradas en los temas de las relaciones sociales no estrictamente políticas (comunitarias, éticas y de la vida cotidiana, entre otras).

Así entonces, la desarticulación de la matriz de constitución de actores sociales que llamaremos "política", todavía no reemplazada o recompuesta, se cruza con la desarticulación relativa de la matriz que podemos denominar "estructura social histórica" ya examinada, configurándose como resultado una situación que tiene muchos rasgos de inorganicidad. En el seno de tal situación, sin embargo, persisten, con variable visibilidad y consistencia, los antiguos actores y las orientaciones clásicas, al mismo tiempo que existen señales por ahora intermitentes de formación de nuevos actores y orientaciones.

4. Actores sociales y consensos culturales

Estructura social y sistema político constituyen las matrices socioeconómicas e institucionales de constitución histórica de los actores sociales en Chile. Pero es necesario cruzarlas con un tercer factor que denominaremos convencionalmente "consensos culturales". Designamos con este término a un conjunto de valores, tradiciones y prácticas presentes en la sociedad y en sus capas dirigentes respecto de acordar una legitimidad al ejercicio de la representación colectiva de intereses. Esto, que estaba asociado al funcionamiento de un régimen político democrático, podía tener un carácter de adhesión más genuino o más instrumental a esos valores y procedimientos en los distintos grupos sociales y políticos,[14] pero en los hechos constituía un "consenso", cuyo resultado era la conciencia, en los diferentes núcleos y agrupamientos sociales, de que asociarse, movilizarse, presionar, incorporar una ideología y constituirse como sujetos con capacidad de interpelación al Estado, al sistema político y a otros sectores sociales era una práctica legítima.

En consecuencia, hay que considerar que la revitalización de los actores históricos y la potencial emergencia de nuevos actores debe enfrentarse hoy no sólo con las situaciones estructurales y políticas de inorganicidad, sino también con la necesidad de recuperar esa legitimidad, que ha sido puesta en duda sistemáticamente por el régimen militar y su política coactiva. La barrera del temor parece hoy ser un factor a superar más fuerte que aquellos elementos de convicción que, en algún momento, por la presión de los medios de comunicación y el espejismo del "boom" económico, parecieron haberse difundido entre algunos segmentos sociales, en un sentido de deslegitimación de la acción colectiva de intereses y su

ideologización. El proceso de repolitización antes mencionado es una muestra de que esta barrera ha comenzado a superarse, pese a sus involuciones y dificultades.

Con todo, la recuperación de este "consenso cultural" no parece darse necesariamente en torno de la noción de representación "política" como el mecanismo dotado de la mayor legitimidad, sino que se advierte también la presencia de orientaciones que privilegian formas generacionales, éticas y propiamente sociales de expresión.[15]

5. Los actores sociales en presencia

Los factores de estructura social, de tipo político y cultural y sus interrelaciones, constituyen el contexto o situación en que pueden ser analizados los actores sociales concretos que comienzan a operar en el marco del proceso de politización mencionado desde el principio.

En los trabajos preparados para el caso de Chile se abordan cinco actores sociales específicos: los jóvenes del mundo popular urbano, las organizaciones sociales de los pobladores de las zonas marginales urbanas, los campesinos, los sindicatos y el denominado movimiento mapuche. Esta enumeración no pretende agotar todas las experiencias presentes en la sociedad chilena actualmente, pero constituye, a nuestro juicio, una buena muestra del tipo de actores que emergen o se revitalizan, así como de las tensiones de que éstos son portadores.

Intentando situar a estos actores en el contexto antes analizado y reexaminando los planteamientos presentados en los trabajos, es posible formular una primera hipótesis general:

a) Las movilizaciones y luchas en que se involucran los grupos sociales mencionados, si bien los perfila como agentes o sujetos dotados de cierta capacidad de intervenir colectivamente en la vida social —lo que permite referirse a ellos como actores— no parecen todavía haber dado constitución consistente a movimientos sociales propiamente tales. En efecto, casi todos esos grupos sociales poseen una definición de identidad más o menos distinguible, pero marcada a menudo por un sentido defensivo, lo que los limita para jugar un rol más dinámico.

Por lo tanto, no se manifiestan aún como portadores de una imagen opcional de sociedad suficientemente nítida y compartida, capaz de ser propuesta y percibida como convocatoria al resto de la sociedad. En consecuencia, todos ellos son actores con una orientación antiautoritaria definida, pero su sistema de oposiciones y de alianzas no está claramente comandado por una estrategia de transformación ni por una lógica persistente de desempeñar un rol central en la sociedad.

Lo anterior nos sugiere que, en el cuadro de condiciones generadas por la situación de relativa inorganicidad estructural y política y

de obstáculos a la legitimación de la acción colectiva, las movilizaciones sociales que surgen con la politización se definen todavía —sobre todo— como luchas *antiautoritarias*, más que como anticapitalistas o pro socialismo, por tomar sólo un ejemplo indicativo.

Esta hipótesis general sugiere que las movilizaciones son principalmente *luchas para enfrentar la exclusión*, ya sea ésta económica, sociopolítica o cultural. Naturalmente, cada actor social específico tiene distintas posibilidades de superar esta condición más bien defensiva.

b) En el marco general ya propuesto, sugerimos —como segunda hipótesis— que es posible encontrar dos orientaciones gruesas que configuran la manera o el modo específico en que los diversos actores considerados viven e intentan superar la exclusión, las que tienen importancia para percibir el tipo de movimientos sociales que podrían constituirse a partir de estos actores.

Denominaremos a la primera de ellas orientación *simbólico-expresiva*, e *instrumental-política* a la segunda.

En el primer caso, la lucha y movilización antiautoritaria o anti-exclusión adquiere sobre todo el sentido de búsqueda o cimentación de una identidad y de la capacidad de expresarla. Así, importan menos los resultados materiales o políticos alcanzados que la afirmación de una existencia colectiva y el reconocimiento de ella por otros actores, aun cuando ésta se dé como condena o como represión en el caso del gobierno.

Si tomamos los estudios sobre los jóvenes y sobre los pobladores del mundo popular urbano,[16] vemos claramente que éstos se involucran en luchas protestatarias dotadas de un fuerte simbolismo, donde las ideas de estrategia, de negociación y de alianzas, propias de la política, están a menudo ausentes. De lo que se trata es entonces de "liberar" expresividad contenida, lo que —en el caso de los jóvenes— puede manifestarse, incluso, con un sentido "sacrificial", es decir, la disposición a inmolarse en una lucha cuyo resultado no será obtener algo político o material, sino generar un símbolo que les permita reconocerse y ser reconocidos.

Al mismo tiempo, esta orientación simbólico-expresiva de las luchas apunta hacia la formación de "comunidades" que tengan sus propias pautas de autoestima y reconocimiento, capaces de superar el sentimiento de ser expulsados de la sociedad global. En la situación del mundo juvenil popular lo anterior se manifiesta en opciones tan distantes como la "comunidad cristiana de base" en la población marginal o como el grupo de drogadicción en la misma población. En ambos casos se constituyen redes de sociabilidad con sus valores y normas, las que al mismo tiempo operan como mecanismos de nucleamiento y movilización para participar y expresarse en las protestas y en las luchas.

Tanto jóvenes populares urbanos como pobladores corresponden a las zonas más inorgánicas de la estructura social y donde la desarticu-

lación política fue más nítida. Si bien su condición de marginales no es nueva y corresponde a un fenómeno común en América Latina, es claro que el último decenio profundizó no sólo cuantitativa sino cualitativamente esa marginalidad. Como fue señalado en otros trabajos de esta serie, "la ruptura del eje industrialización-democratización, no sólo por su agotamiento en un sentido económico, sino sobre todo por la pérdida del consenso en cruzar democracia y desarrollo, significó que estos sectores se enfrentaran a una idea de sociedad donde los medios para arribar a los fines presentados como legítimos y deseables no pasaban por la política (vista como la capacidad ciudadana de formar decisiones), el recurso fundamental en su experiencia histórica previa". En consecuencia, se generan fuertes procesos anómicos que derivan en la protesta y en las prácticas comunitarias como intentos opcionales de intervención y organización social.

Con todo, esta orientación simbólico-expresiva aun siendo dominante sobre todo en la movilizaciones y luchas (es decir, en las manifestaciones más colectivas y masivas y en la organización comunitaria) no constituye la única orientación presente en los dos actores sociales mencionados, pues el proceso de politización manifiesta también la presencia de orientaciones instrumental-políticas.

Se podría hablar de cierto continuo de orientaciones, donde tal vez el caso de los jóvenes populares urbanos constituya el polo más definidamente simbólico-expresivo, los pobladores marginales (ciertas expresiones de las movilizaciones campesinas y del pueblo mapuche), representan situaciones intermedias, y el sindicalismo, el polo más próximo a lo instrumental-político. Esta última orientación podríamos definirla gruesamente como aquélla en la cual existe una búsqueda de medios organizacionales relativamente estables, que incluyen ciertas jerarquías, apropiados para perseguir fines de negociación, alianzas y presión, en relación con el Estado, otros actores sociales y cierto sistema político subsistente y donde la noción de estrategia ocupa un lugar de cierta importancia.

Así, en el caso de los pobladores marginales y los campesinos[17] se planteó que una dirigencia ligada a partidos, que reconstruye organizaciones territoriales, federativas o nacionales según el caso, coexiste con movilizaciones, agrupamientos, luchas de base, que se relacionan erráticamente con las primeras y que se sitúan más bien en la perspectiva simbólico-expresiva.

El estudio sobre el movimiento mapuche[18] nos indicó también la tensión entre la reivindicación étnico-cultural de esta minoría racial, que pone el énfasis en la preservación y reconocimiento de su identidad y formas de vida, y la reivindicación "clasista" que busca articular lo anterior con la pertenencia a la "clase campesina". Esta última apela más directamente a las afiliaciones partidarias y a una vinculación con proyectos de alianzas y de transformación social en el marco de una sociedad definida sobre todo por relaciones de clase.

El sindicalismo urbano y minero[19] expresa sobre todo al mundo de los que (aún) tienen empleo —lo que no es nuevo—, y sus lazos con los desocupados y los marginales no parecen ser hoy mucho más estables y fluidos que antes. Aquí, si nos referimos a las dirigencias superiores e intermedias, estamos en presencia de un cuadro nítidamente politizado y atento a movilizarse por una estrategia de "concertación" social y política que garantice el paso a un régimen democrático y la recuperación de derechos.[20] Lo anterior implica una consideración de las "correlaciones de fuerzas" y de las condiciones objetivas que permiten o dificultan la estrategia. La posición "de clase" del sindicalismo —que persiste— se expresa, en su dirigencia, en una visión de relaciones de clases en competencia que requieren de la intermediación política.

Como ha mostrado el estudio de Jaime Ruiz-Tagle, el rol de la dirigencia sindical ha sido decisivo en el origen y desarrollo del proceso de politización y de las "protestas nacionales" que comenzó en 1983. Esta capacidad de convocatoria señala el lugar preponderante que ocupa el sindicalismo en el campo opositor, que es un campo político, lo que refuerza el carácter ya mencionado de este actor.

Con todo, como lo han sugerido otros trabajos[21] a través de la tensión dirigencia-bases, que aparece intermitentemente en los procesos de movilización sindical, se manifiesta una vertiente expresivo-simbólica que adquiere diversas connotaciones. Tal vez la principal sea un "clasismo de base", cuyo principio parece ser el de luchar por evitar que los adversarios de clase coopten o contaminen la conciencia obrerista o clasista, lo que empuja a cierto rechazo de la política. Hay aquí una suerte de culturalismo obrero, que remite a la organización territorial, y a la inclusión de la vida cotidiana (la población obrera y la familia) como temas prioritarios, antes que los del Estado y del sistema político, o por lo menos, intenta tener una "visión obrera" de ellos a partir de sus prácticas y formas de sociabilidad cotidianas, más que a través de la política. Estas orientaciones persisten en el mundo obrero de la pequeña industria, en los segmentos más inestables del empleo formal y con más puentes hacia el espacio de la marginalidad. Sin embargo también se manifiestan entre los sindicalistas "radicalizados" de las empresas más estables.

En síntesis, expresividad e instrumentalidad política parecen ser dos orientaciones que atraviesan y tensan hoy a los actores sociales examinados. La posición de mayor o menos exclusión sociopolítica y cultural, tal vez más que la exclusión económica, parece también estar relacionada con el predominio de lo expresivo y lo instrumental, los actores que se movilizan en las zonas más desintegradas son más próximos a las orientaciones del primer tipo que los del mundo más formalizado.

También los estudios sugieren que la base es a menudo más expresiva que las direcciones, así como éstas son o permanecen más políticas.

La crisis económica y sus derivaciones políticas post 1983 son procesadas entonces por los actores sociales de una manera multidimensional, a la vez como espacio de contestación política y como espacio de reafirmación de identidades. En este último caso, la crisis, más que un fracaso del régimen significa también la dilución de un modelo social que legitimaba la exclusión. De la crisis en adelante, la exclusión continúa, pero aparece sólo como resultado de la coacción.

6. ¿Nuevos o viejos actores?

La ilusión de que la sociedad se refundaba por completo —ya sea según la óptica de los neoliberales o según aquélla de los desilusionados de actores que "debían" ser revolucionarios y no lo habían sido— parece no haberse confirmado. Desarticulación y desestructuración no parecen ser exactamente lo mismo que surgimiento de una nueva sociedad. Como señalaba Fernando Calderón: "los modelos de destrucción nacional también pueden subsistir por largo tiempo".

El cuadro que presentan los estudios parece sugerir que hubo un doble fenómeno en el contexto de una situación de marginación creciente, desarticulación del sistema político y ruptura de ciertos consensos culturales. Estos fueron, por una parte, el "congelamiento" de ciertas prácticas sociales históricas y, por otra, la activación de luchas y movilizaciones heterogéneas, segmentadas y difícilmente articulables.

En el primer caso se trata de una suerte de "hibernación" de los actores clasistas históricos: los sindicatos, las organizaciones campesinas nacionales y federativas, que son las más formalizadas de los pobladores. Esta "hibernación" supone que su matriz de acción y de orientación no fue cambiada, sino, como dijimos, congelada. Pero cuando hubo cierto espacio político éstas resurgieron y están resurgiendo, si no intactas, preservadas en lo fundamental. Así, sindicatos y partidos se cohesionan, las organizaciones campesinas de nivel superior se expresan políticamente, al igual que los núcleos dirigentes de los llamados "movimientos de pobladores". En consecuencia, los actores históricos de clase no fueron destruidos o drásticamente recompuestos. Lo que ocurrió es que vieron reducida su base material de existencia y de reproducción y fueron empobrecidos, al mismo tiempo que perdieron el tipo de centralidad estructural que tuvieron un decenio antes. En ese sentido hay una perseverancia de viejos actores y de sus matrices de acción.

Sin embargo, precisamente por la aparición del otro fenómeno —las luchas y movilizaciones, sobre todo del mundo marginal y juvenil— estos "viejos" actores enfrentan el surgimiento, si no de "actores nuevos" en

un sentido estricto, sí de la problemática de un mundo cada vez más amplio que responde ahora, con más fuerza que antes, a una lógica "popular", no reductible o representable *sólo* en términos de "clase". Digámoslo de otra manera: los actores políticos, que eran principalmente actores clasistas, ya no hegemonizan necesariamente la representación de los intereses sociales de ese mundo popular-marginal. En ese sentido, lo popular es ahora una noción cultural, que habla de tipos de sociabilidad, de búsqueda de identidades, de prácticas colectivas religiosas, éticas y de sobrevivencia económica, etcétera, que se formaron y se están formando en el mundo de los excluidos, que es cada vez más amplio y creciente. Este mundo no está separado de la política, pero tampoco es representado completamente en ella.

¿Pero, entonces, por qué no hablar allí directamente de nuevos actores, sin ambigüedad?

Tal vez porque, salvo en el caso de los jóvenes, no es claro que los sujetos colectivos que operan en ese mundo sean completamente distintos de los que ya operaban antes. Más bien se trata del militante de partido que, sin abandonarlo, se ha convertido ahora sobre todo en representante de su medio poblacional en el partido y ha dejado de ser principalmente el representante del partido en la población. Se trata también del grupo de miembros de la Iglesia católica que es más genuinamente el segmento popular en la Iglesia que, al revés, un brazo de ésta en el mundo popular. Entonces, no es que hayan aparecido nuevos actores en todos los sentidos, sino que el mundo popular se ha hecho tan intenso como vida social y como práctica de la exclusión, que los viejos actores e instituciones se desgarran, ellos mismos, entre su dimensión histórica que permanece no cambiada (el sindicato, el partido, la organización dirigente) y su dimensión nueva, la de sus redes en este mundo popular, redes que adquieren autonomía y luchan por su identidad propia.

El desafío parece ser entonces el logro de una superación de la tensión de lo viejo y lo nuevo o la ruptura de los puentes entre ellos, dando lugar a dos tipos de actores, ahora sí completamente distinguibles. Actores que podrán ser confrontacionales o convergentes, lo que a su vez está ligado, a nuestro juicio, a la capacidad que tengan los actores clasistas históricos de procesar su rol en la lucha frente al autoritarismo, como una lucha de mayorías sociales y no sólo de capas dirigentes.

Notas

[1] Un seguimiento de las "protestas" puede ser encontrado en la serie *Hechos urbanos*, SUR-Profesionales, Santiago de Chile, 1983-1984.

[2] Un análisis sobre la crisis del proyecto "fundacional" del régimen y sus consecuencias políticas se encuentra en Manuel A. Garretón: *Dictaduras y democratización*, FLACSO, 1984.

[3] Al respecto véanse: Arellano, J. P. y Cortázar, R., "Del milagro a la crisis", en *Estudios CIEPLAN,* núm. 8 y Foxley, A., "Cinco lecciones de la crisis actual", en *Estudios CIEPLAN,* ob. cit., 1982; Vega, H., "Crisis económica, estabilidad y deuda externa. Un pronóstico económico para el análisis político", Doc. núm. 33, PET, agosto de 1984.

[4] Sobre los empresarios y su comportamiento en la crisis hacia 1983, cf. Campero, Guillermo, "Los gremios empresariales en el período 1970-1983", *Serie Estudios,* ILET, 1984.

[5] Sobre la noción de régimen militar como tránsito hacia un régimen autoritario, véase Garretón, M. A., "El proceso político chileno", FLACSO, 1984.

[6] Esta noción de la crisis y la necesidad de una "idea de Chile" fue desarrollada por Javier Martínez en: *Serie Proposiciones,* SUR, 1981.

[7] El trabajo más reciente sobre estructura social es el de Martínez, J. y León, A., "La involucion del proceso de desarrollo y la estructura social", *Doc. para discusión* núm. 53, CED, noviembre de 1984.

[8] Al respecto véase: Cruz, María E. y Rivera, Rigoberto, *Los poblados rurales: una nueva realidad,* GEA, 1984.

[9] Sobre los cambios tecnológicos en la actividad industrial y de servicios véase: Barrera, Manuel y Selamé, Teresa, *El cambio tecnológico y las calificaciones de la fuerza de trabajo en Chile,* Doc. de Trabajo núm. 1, CES.

[10] Sobre el tema del no surgimiento de una "nueva" clase obrera véase: Campero, Guillermo y Valenzuela, José A., "El sindicalismo chileno en el régimen militar chileno", *Serie Estudios,* ILET, 1984, cap. I.

[11] Estas nociones de inorganicidad y de impermeabilidad han sido tomadas de Martínez, J. y León, A., ob. cit.

[12] Respecto de estas ideas puede encontrarse un mayor desarrollo en: Campero, Guillermo, "Los cambios en la estructura social", en *Margen,* marzo de 1983, cap. II.

[13] Garretón, M. A., "El proceso político chileno", ob. cit.

[14] Sobre la adhesión axiológica o instrumental al régimen democrático véase el análisis de M. A. Garretón en "El proceso político chileno", ob. cit.

[15] Al respecto se sugieren ideas interesantes para el análisis en: Tironi, Eugenio, "No todo es política", en *La torre de Babel,* SUR, 1984.

[16] Valenzuela, Eduardo, "Los jóvenes y la crisis de la modernización" y Espinosa, Vicente, "Los pobladores y la política", Seminario CLACSO, enero de 1985.

[17] Tapia, Gonzalo y Vio, Gonzalo, "El problema de la recomposición de los actores campesinos en una perspectiva redemocratizadora: algunos elementos de análisis", Seminario CLACSO, enero de 1985.

[18] Vives, Cristián, "El pueblo mapuche: elementos para comprenderlo como movimiento social", Seminario CLACSO, enero de 1985.

[19] Ruiz-Tagle, Jaime, "El movimiento sindical chileno y la crisis del capitalismo autoritario", Seminario CLACSO, enero de 1985.

[20] Sobre el tema de la concertación social y el sindicalismo, véase: Campero, Guillermo, "Empresarios, sindicatos y concertación social para la democracia", Documento de Discusión núm. 48, CED, 1984.

[21] Campero, Guillermo, "Prólogo", *El Movimiento Sindical Chileno,* ob. cit. También, de manera indirecta, en: Barrera, Manuel, "La demanda democrática de los trabajadores chilenos", Doc. de trabajo núm. 15, CED, 1984.

Los movimientos sociales en el Paraguay

Domingo M. Rivarola *

Introducción

A primera vista, un estudio acerca de movimientos sociales en el Paraguay podría considerarse como algo extraño e impensable. Parecería que un proceso de formación de movimientos sociales no puede asumir proporciones significativas en una sociedad que estuvo sumida en una suerte de "inmovilismo" socio-político en el último cuarto de siglo. Vistos desde una perspectiva históricamente amplia, los intentos de movilización obedecieron a situaciones que los han mantenido como acontecimientos efímeros, rápidamente desmembrados al no cristalizar en formas estables.

Por otra parte, tampoco se puede explicar la ausencia de movilizaciones sociales por la existencia de una red institucional capaz de canalizar las demandas. La sociedad paraguaya no pudo generar los mecanismos institucionales para ello, a pesar de que el hecho de haber logrado un avance en su desarrollo socio-económico sin modificar sustantivamente los niveles de participación de las capas sociales más desfavorecidas, permite presumir el surgimiento de este tipo de fenómenos.

Asimismo, no resulta convincente la explicación, marcadamente simplista pero insistentemente utilizada, que atribuye tal característica

*Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Asunción.

a la naturaleza extremadamente rígida y despótica del sistema político, al que se considera no sólo capaz de mantener sin alteraciones sustantivas un determinado ordenamiento social, sino que además consigue reducir a su mínima expresión cualquier atisbo de movilización.

Este tipo de argumentación resulta bastante simplista, sobre todo porque deja de reconocer que el funcionamiento del sistema político responde a una compleja combinación de *consenso* y *coerción*. Es precisamente la situación de equilibrio alcanzado —por casi tres décadas— lo que dificulta apreciar cómo opera internamente el proceso, cuya persistencia sí se explica por los múltiples recursos de *consenso* y *coerción* acumulados en un único centro de poder.

Esta manera diferente de apreciar la naturaleza del sistema de poder imperante permite incluso distinguir con cierta nitidez los mecanismos que operan en uno u otro sentido y, aun más, cierta multifuncionalidad en ciertos recursos de poder que —de acuerdo con la circunstancia— pueden emplearse para fines claramente compulsivos o para buscar algún grado de conformidad.

Lo expuesto permite enfocar el problema de una manera distinta, por cuanto el énfasis se centra más bien en tratar de entender la enorme capacidad desmovilizadora del sistema y, en menor medida, en explicar por qué las expresiones de movilización social fueron en este lapso tan débiles y efímeras.

A cierto nivel, esta situación obedece simplemente a la exigua autonomía que les queda a las instituciones partidarias, que terminan convirtiéndose más bien en una parte del Estado antes que en medios de los que dispone la sociedad civil para canalizar sus intereses. Por lo común, los partidos se constituyen por dos tipos muy disímiles de motivaciones: por un lado, mantener su legitimidad sobre la base de la capacidad de articular los reclamos colectivos, y, por otro, resguardar su primacía, para lo cual resulta fundamental impedir que surjan nuevas modalidades de expresión de la sociedad civil que rebasen su campo de dominación.

En lo que al caso paraguayo se refiere, lo particular del Estado es, pues, su ilimitado margen de poder para demarcar el rumbo de la sociedad civil acorde con el contenido de sus propios intereses políticos. Y en ese plano, es indudable que cuenta con los recursos que le permite utilizar —alternativa o complementariamente— los mecanismos de *consenso* o *coerción*, tanto en su esfera específica, como en la totalidad de la sociedad nacional.

No es difícil visualizar este contradictorio juego en el que están sumidas las organizaciones partidarias, más como víctimas que como verdaderas gestoras de determinada situación histórica. Tampoco debe mirarse con extrañeza el hecho de que una preocupación central de los partidos sea mantener dentro de sus límites de observación y control aquellos espacios donde se suscitan con mayor persistencia manifestaciones

que responden a la que Touraine definió como una acción colectiva que se dirige hacia un adversario social.

Contrariamente, el esfuerzo por delimitar espacios "independientes", en los ámbitos de la juventud, de las mujeres, de los campesinos, etcétera, no deja de estar fuertemente demarcado por esta realidad histórica. En lo esencial responde a dos objetivos centrales: por un lado, escapar a lo que se considera una inclinación "inmovilizadora" de las estructuras partidarias, por otro, la búsqueda de nuevos contenidos de convocatoria que permitan a ciertos estratos de la sociedad recibir los estímulos adecuados como para incorporarlos como sujetos activos de un proceso de cambio social.

En última instancia, se trata de afirmar un *contraliderazgo* con suficiente fuerza social como para debilitar el margen de *consenso* prevaleciente, lo cual supone arraigar —entre otras cosas— una nueva manera de concebir la "crisis nacional" y de definir los agentes sociales válidos para gestar tal proceso de transformación. Todo esto implicaría, en definitiva, una nueva opción de la práctica política y de su sustentación ideológica.

Es precisamente en este último plano donde las iniciativas de movilización encuentran las mayores dificultades para su avance en la medida en que, aun cuando se apoyan en reivindicaciones concretas y compartidas, todavía carecen de proyección suficiente como para concretarse más allá de la mera denuncia e impugnación del sistema de dominación y de la forma de operar de los partidos políticos. En tal circunstancia, la tendencia conservadora aparece relacionada en menor medida con el consenso o la conformidad que con el descreimiento y la confusión.

1. Economía, desarrollo económico y urbanización

Hasta el presente, el modelo agroexportador de acumulación sigue prevaleciendo en la economía paraguaya. Su base consistió, durante un largo período histórico, en los productos propios de la economía campesina como el tabaco y el algodón, hasta incorporar, más recientemente, la soja, cuya producción se debe en gran medida a la emergente empresa agrícola comercial.

Un hecho resaltante, sobre todo teniendo en cuenta la influencia que ha tenido sobre las formas históricas predominantes de organización social, es que el desenvolvimiento agrícola paraguayo se dio esencialmente a través de la pequeña unidad económica familiar. Hasta 1960, todavía el 70 % del total de las unidades productivas agropecuarias correspondía a parcelas de menos de diez hectáreas.

Recién a comienzos de la década del setenta comienza a cobrar importancia en el país la empresa agrícola comercial, altamente tecnificada,

que se concentra primordialmente en el cultivo de la soja. En 1969, la producción de este grano no alcanzaba a sobrepasar las diez mil toneladas, a pesar de los intentos que se hicieron durante varias décadas por incentivar su cultivo. Sin embargo, diez años después, la producción superó las quinientas mil toneladas como efecto de la aplicación de un esquema productivo de escala, la presencia de un mercado internacional creciente y el masivo financiamiento proveniente de la empresa multinacional.

Otro rubro de explotación de la empresa agrícola comercial es el trigo que —a diferencia de la soja— se destina en su totalidad al mercado interno y está manejado en gran parte por el empresariado local.

Lo interesante es que, en uno y otro casos la empresa agrícola comercial no interfiere directamente el desenvolvimiento de la economía campesina. En parte, porque a pesar de su tardía aparición no entró en competencia directa con ésta, ya sea por la disputa de tierras, por el mercado de mano de obra o por la comercialización. Tal circunstancia ha sido posible debido a la gran disponibilidad de tierra existente aún en el país, en áreas alejadas de las zonas de asentamiento tradicional de la población rural y, en otro orden, por circunscribir su actividad a productos que no forman parte habitual de la estrategia productiva campesina.

Un primer resultado destacable es que el campesinado todavía no ha sido afectado seriamente por este incipiente proceso de incorporación de la empresa capitalista en el agro paraguayo, lo que a su vez permite al Estado implementar una política de carácter dualista, sin caer aún en contradicciones marcadas o incompatibilidades insalvables, tanto en el campo económico, como en el social o el político. De esa manera se explica que, tal como se ha venido observando durante las dos últimas décadas, sea posible efectivizar un amplio programa de colonización tendiente a expandir la frontera agrícola incrementando el estrato de pequeños productores, mientras, en otro sentido, directa o indirectamente, se canalizan grandes recursos financieros y de infraestructura tendientes a consolidar la presencia y actividad de la gran empresa agrícola comercial.

Sin embargo, la rápida y extensiva apropiación de tierras por parte de estas grandes empresas está generando efectos más directos e inmediatos. El impacto más contundente se expresa en la creciente dificultad para el avance de la frontera agrícola y el costo cada vez más prohibitivo para establecer nuevas colonias campesinas. En suma, imprevistamente está desapareciendo uno de los mecanismos históricos más efectivos de ajuste con los que contaba la población campesina para satisfacer las demandas básicas de su propio crecimiento demográfico y de consumo.

Otros dos aspectos resaltantes del desenvolvimiento histórico paraguayo fueron el precario desarrollo industrial y, concomitantemente, el lento ritmo de crecimiento urbano. En 1960, el 15,6 % de la población urbana estaba concentrada en una única ciudad, Asunción, la

capital del país. En 1980, con excepción de este centro urbano, ninguno llegaba a superar los 50.000 habitantes.

Las dificultades históricas y geopolíticas para consolidar un nivel significativo de industrialización mantuvieron sin alteraciones apreciables, en el plano económico, el patrón de acumulación agroexportador. A la vez, en lo que atañe al ordenamiento social, tal circunstancia no dio cabida alguna para que —tal como acaeció en otros países latinoamericanos— surgiera un proceso de proletarización masiva de la fuerza de trabajo, ni se consolidara un mercado de trabajo urbano capaz de alcanzar una medida preponderante de influencia política. Igualmente, la condición parcelaria predominante de la agricultura paraguaya, tal como ya se indicó, redujo también a un mínimo el nivel de los salarios de los campesinos.

El primer censo industrial del país se realizó en 1955, y brindó información suficiente como para dejar entrever el limitado alcance que la actividad industrial había logrado hasta entonces. Conforme a los datos aportados, se pudo constatar que las tres cuartas partes del total de los establecimientos industriales correspondían al sector de alimentos, bebidas, textiles y productos químicos. Según Juan Carlos Herken, en estas ramas se generaba el 80 % del valor de la producción industrial.

Este panorama siguió prevaleciendo durante las dos décadas que siguieron. En 1963, según los datos del segundo censo industrial, se constata un hecho muy llamativo: a pesar de darse durante el período un notable crecimiento en el número de establecimientos fabriles —que pasa de 2722 a 5851— el total de la población ocupada permanece prácticamente invariable.

En el desenvolvimiento económico paraguayo, el bienio 1973/1974 marca una divisoria importante, por cuanto se constituyó en el inicio de un quinquenio de expansión económica sin precedentes.

En el orden industrial, se produjeron algunos cambios importantes en cuanto a la naturaleza de las actividades productivas, en el pasado condicionadas predominantemente por una economía de marcada orientación agroexportadora. La construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaipú y la fuerte dinamización del sector de la construcción fortalecieron nuevas líneas de producción, particularmente en lo referente a las industrias metálicas, artesanías y reparaciones. En la primera de ellas, por ejemplo, el número de personas ocupadas se incrementó de 9841 en 1972 a 19.980 en 1982; en el sector de la construcción, el aumento en dicho decenio fue de 24.468 a 67.190, lo que muestra que se llegó a triplicar la cantidad de ocupaciones. Contrariamente, en el sector de bebidas y alimentos, la población ocupada decrece en ese lapso, pasando de 20.780 a 17.620, en tanto que permanece prácticamente estancada en textiles y vestuarios.

Aun con estas transformaciones, explicables por la naturaleza de

los estímulos que permitieron esa fuerte dinamización económica, el sector industrial continúa manteniendo uno de sus rasgos históricos más persistentes: la primacía de la pequeña empresa. En 1963, el 80 % del total de unidades industriales pertenecía a un rango de tamaño —medido por cantidad de personal ocupado por empresa— con menos de diez personas. En 1982, tal característica permanece aún como el atributo más notorio de la organización industrial del país.

Durante el último período intercensal 1972/1982, la relación urbano-rural experimentó una leve variación, con un moderado incremento de la población urbana. Sin embargo, la característica predominante sigue siendo la de un predominio rural, lo que no hace sino reflejar la elevada proporción de la población paraguaya que aún depende de ocupaciones ligadas directa e indirectamente con el sector productivo primario. Tal fenómeno, por lo demás, explica el lento ritmo de crecimiento urbano en el país. Durante el período intercensal 1960/1972, dicho sector creció al 3,1 %, en tanto que al 4,1 % entre 1972 y 1982.

La variación en la relación población urbano-rural tuvo poco cambio, como puede percibirse por las cifras aportadas en los diferentes censos. En 1962, la relación fue la siguiente: urbana, 30,4 % y rural, 69,6 %; en 1972, 33,0 % urbana y 67,0 % rural y, finalmente, en 1982, 42,7 % urbana y 57,3 % rural.

Esta dinámica resulta explicable a la luz de la persistencia, tal como ya se señaló, de un sistema productivo sustentado fundamentalmente en la actividad agropecuaria y, de igual modo, por el débil desenvolvimiento de la industria. Un peso también preponderante debe atribuirse al mercado de trabajo argentino —tanto rural como urbano— que durante décadas absorbió un porcentaje importante de la mano de obra paraguaya. Con excepción del período 1975/1980, en el que la dimanización de la economía paraguaya permite ampliar el mercado interno laboral, la migración al exterior —transitoria o definitiva— formó parte de la estrategia de supervivencia de la población nacional, en particular la localizada en el área rural y los centros urbanos intermedios.

En ese sentido, debe anotarse que el estancamiento de los centros urbanos intermedios —con excepción de aquellos ubicados en la línea de frontera o en zonas de reciente colonización— expresa la baja densificación demográfica que caracteriza al país, así como la debilidad de las zonas campesinas tributarias de estas localidades.

La única excepción ha sido, sin duda, la capital —y su área aledaña de influencia— que pudo mantener una fuerte tasa de crecimiento en razón de su capacidad de concentrar recursos y debido a su papel como sede de la administración del país. De esa forma, aun cuando no haya contado con el efecto atractivo que prodiga la industrialización, el expansivo crecimiento del Estado y la concentración de servicios le ha permiti-

do a este centro urbano alcanzar una posición de fuerte primacia sobre el resto del sistema urbano.

2. Expansión del Estado, cooptación y clientelismo

A partir de la década del cuarenta se dieron nuevas condiciones que permitieron consolidar un proceso ininterrumpido de crecimiento del Estado, en los planos ideológico, político y financiero.

En lo que se relaciona con lo ideológico, surgieron dos situaciones condicionadas mutuamente en su origen: por una parte, el rápido debilitamiento de la concepción "laissezferista" del Estado que había inspirado por más de medio siglo la orientación del Estado nacional y, por otra, la creciente atracción hacia una estructura estatal dotada de mayor poder compulsivo, de más amplias prerrogativas de intervención y, por consiguiente, más activo y con mayor margen de iniciativa para conseguir un reordenamiento económico-social. Dicho enfoque quedó ya explícitamente consignado en la nueva Constitución promulgada en 1940 en la que se sostiene que "... se busca un Poder Ejecutivo fuerte pero no despótico; a mayor responsabilidad deben corresponder más amplias posibilidades para afrontarla. Al fortalecer las atribuciones jurídicas estatales, no se trata de crear un sistema dictatorial, puesto que la dictadura consiste esencialmente en el ejercicio discrecional de funciones, sino de defender mejor nuestra sociedad y ampliar el radio de acción del Estado en lo que se refiere a su intervención en la vida social y económica, con lo cual se abandona el concepto caduco del Estado neutral e indiferente. El Estado moderno no puede ser un simple gendarme... En los países de rudimentario desarrollo, en que la iniciativa privada es débil y en que existen problemas superiores a la capacidad del particular, el Estado no puede practicar, sin compometer el progreso, la doctrina del dejar hacer".

En el plano político, con el ascenso al poder del Gral. H. Morínigo y la exclusión drástica del sector liberal que gestó el ascenso del Mcal. Estigarribia, quedó la vía abierta para una rápida consolidación de un gobierno de fuerte tono autoritario.

En el orden financiero, se toman dos decisiones de indudable significación: el control de cambio y la reforma monetaria. Según refiere Fernando Vera, el Decreto–Ley Nº 665, del 6 de octubre de 1943, que estableció un nuevo régimen monetario orgánico para la República del Paraguay, creó el *guaraní* como única unidad monetaria nacional, suprimiendo así la dualidad entre el *peso oro sellado* y el *peso fuerte,* que había llegado a convertirse en peso de curso legal. Con posterioridad se creó el Banco del Paraguay como banco del Estado, con funciones múltiples de banca central, comercial, de ahorro e hipotecas. Tal proceso

culminaría finalmente en la creación del Banco Central del Paraguay en 1952.

Sucesivamente por gestión del Estado se promueve y organiza una serie de actividades económicas; para el efecto surgen varias empresas estatales descentralizadas. En 1941 se crea la Corporación Paraguaya de Alcoholes (COPAL), que años después se convierte en la actual Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL); en 1944 se establece la Corporación Paraguaya de Carnes (COPACAR); en 1945, la Flota Mercante del Estado (FLOMERES). En 1948 el Estado adquiere la empresa privada propietaria del servicio tranviario y electricidad conformando la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y, posteriormente, en 1961, se nacionalizan los ferrocarriles. De acuerdo con J.C. Herken, "el proceso de la década del cuarenta implicó que cerca del 30 por ciento del PIB pasó a ser generado por el Estado". Como es sabido, tal tendencia continuó con la sucesiva creación de nuevas empresas estatales tales como SIDERPAR (1974) VALLE MI (1969), etcétera. Además, debe considerarse que la mayoría de estas empresas experimentaron aumentos muy importantes en cuanto a la amplitud de sus actividades; tal es el caso de la ANDE, que ha estado ligada al ente Binacional Itaipú, encargado de la construcción de la Hidroeléctrica de Itaipú, que llegó a movilizar en cierto momento a más de 30.000 operarios.

El proceso descrito tuvo su principal soporte en la creciente asistencia técnica y financiera que comienza a afluir al país desde comienzos de la década del cuarenta. De esa forma, el sector gubernamental incorpora las nuevas funciones e igualmente procede a la tecnificación de actividades tradicionalmente bajo su control, como la agricultura. Este esfuerzo cuenta con el apoyo del Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA), que inicia sus actividades en el Paraguay con el auspicio del programa conocido como Punto IV, sustentado por el gobierno de los Estados Unidos.

La creciente ayuda financiera permite al Estado emprender ambiciosos programas relacionados con el desarrollo regional, la colonización de una extensa franja en el área Este y Noreste del país, culminando durante el período 1973/1985 con la construcción de Itaipú, con un costo aproximado de veinte mil millones de dólares.

Esta última empresa, por lo demás, tuvo una excepcional gravitación en el fuerte y sostenido crecimiento que alcanzó la economía paraguaya desde los primeros años de la década del setenta, la que –precisamente al concluirse la obra– cae abruptamente a sus antiguos niveles. Tanto por la magnitud de la demanda de mano de obra y servicios, como por los recursos financieros que incorpora al país, el Proyecto Itaipú representa un elemento imprescindible para comprender esa etapa histórica.

El auge antes mencionado no impidió que al desencadenarse la cri-

sis en 1980 reaparecieran varios de los antiguos rasgos estructurales, tanto en el plano económico, como en el social. Estos son: el escaso peso económico de la ciudad, constreñida a una actividad comercial y administrativa fundamentalmente; la ya citada debilidad industrial; el Estado como sustento principal de una estrecha clase media, y, como hecho central, la inalterable importancia económico-social del sector agrario, que como lo señalara Delich, no implica que se la debe considerar como un sector políticamente dominante.

Esta acumulación sin precedentes de funciones y recursos que el Estado experimentó durante estas tres últimas décadas le brindó una base de hegemonía frente a la cual la sociedad civil no ha hecho sino sufrir un proceso de continuo retroceso y debilitamiento. Dondequiera se hurgue en la misma podrá visualizarse un mecanismo que asegura el control y la dominación del Estado. De allí que el fenómeno más resaltante de este tramo histórico sea, por un lado, la tendencia totalitaria del Estado y, por otro, la dificultad para que diferentes agentes sociales alcancen a articular y a hacer primar sus intereses de manera autónoma. Esta creciente sujeción se torna aun más crítica en la medida en que partes significativas de las organizaciones partidarias —a través de diferentes modalidades de articulación— se constituyen más bien en elementos del Estado que en canales de expresión de la sociedad civil.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la expansión de la burocracia estatal, tanto en el campo de la administración central, como de los entes descentralizados, no responde estrictamente a las exigencias productivas, en al medida en que el sistema político fue adquiriendo una orientación marcadamente clientelista o, si se quiere, "prebendaria" en los términos de Weber.

En tal circunstancia, el "consenso" es más bien de carácter *forzoso*, ya que proviene cada vez más de una masa que depende directa o indirectamente del Estado, en cuya esfera se puede manipular la lealtad por vía del poder que ofrece la capacidad de *distribuir* o *restringir* al usufructo de múltiples recursos, entre los cuales está la ocupación. Según Efraín Enriquez Gamón, en la actualidad cerca del 80 % de las actividades económicas del país está bajo el control directo o indirecto del Estado.

La situación descrita ilustra la estrecha vinculación que se da entre las esferas política y económica, al punto de que las imbricaciones resultan sumamente complejas y de difícil delimitación. Así, no resulta extraño que las decisiones en uno y otro campos estén continuamente condicionadas y superpuestas, lo que también ayuda a comprender la versatilidad y eficacia del sistema para obtener efectos "desmovilizadores" por conductos inequívocamente institucionales.

3. Estudios sobre los movimientos sociales

En lo referente a los movimientos campesinos, lo que se trata de resaltar son las invasiones de tierras consideradas como la respuesta campesina a la situación de crisis.

Las ocupaciones masivas de tierras se dieron primordialmente durante 1984 y fueron protagonizadas —de acuerdo con el estudio de Ramón Fogel— por pequeños productores agrícolas; tales ocupaciones se intensificaron durante 1985 dándose estas manifestaciones fundamentalmente en la región que conforman los Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

Una de las ideas centrales del trabajo consiste en que, a diferencia de las ocupaciones acaecidas en el pasado, las actuales se caracterizaron por su alto grado de conflictividad. El mecanismo en aquel entonces era muy simple: los minifundistas y productores que ya no disponían de tierra, por mutua iniciativa ocupaban tierras libres que luego se consideraban como colonias nacionales. En estos casos el Estado legitimaba tales ocupaciones.

Los movimientos gestados durante el bienio 1984/1985 se presentan como acciones colectivas, sin conexiones orgánicas, de corta duración y relativamente aisladas unas de otras. Sin embargo, estas acciones colectivas implican una impugnación del ordenamiento económico-social y político dominante, así como la prosecusión organizada del interés colectivo de los movilizados —el acceso a la tierra— y, en cierta medida, constituyen movimientos sociales.

Estos movimientos tienen su explicación en las transformaciones socioeconómicas de la región y la misma crisis nacional. También, y no con menos importancia, incidieron los graves problemas que han venido afectando la zona de Alto Paraná-Canindeyú.

En el caso específico de los semi-asalariados, su deterioro respondió a diversos factores, tales como la disminución del salario real y el desequilibrio en los términos de su intercambio, en la medida en que la tendencia en el aumento de los precios de los insumos se dio en niveles muy superiores a los de la venta de sus productos.

¿En qué medida los principales hechos políticos desencadenados en los países de la región incidieron sobre estos movimientos? De acuerdo con Fogel, el principal efecto fue atenuar las indicaciones de presión sobre los mismos, de manera que pudieron contar con condiciones más flexibles para movilizarse.

Un fenómeno estable fue el proceso de transformación de la estructura productiva, que llevó a la consolidación de las medianas y grandes empresas agrícolas y, concomitantemente, a un significativo incremento de la producción. Sin embargo, es necesario destacar que el campesinado tuvo una precaria participación en este proceso, de modo que no sólo

quedó al margen de los beneficios derivados del mismo, sino que se empobreció.

La composición social de quienes participaron en las invasiones de tierra muestra fahacientemente que se trata de capas que han llegado a niveles de deterioro. En Tabapy y San Francisco predominaron ex obreros de Itaipú y empresas conexas que antes de que se iniciara esta actividad ya venían a la región central, caracterizada por su fuerte minifundización.

Estos ex-obreros de baja calificación —de acuerdo con la interpretación de Fogel— ante la carencia de posibilidades ocupacionales, tanto a nivel local, como regional, recurren de nuevo a la vieja lucha por la tierra. En otros casos, se trata de campesinos sin tierra o de quienes accedieron a tierras muy pobres para la agricultura. En suma, se trata más que nada de ex-minifundistas semiasalariados o de subasalariados ya desarraigados. Una acotación interesante en este sentido, es que se trata de campesinos que no tenían relaciones de trabajo con los propietarios de las fracciones que llegaron a ocupar.

En la mayoría de los casos, las propiedades afectadas por las ocupaciones estaban relacionadas con el capital internacional o transnacional. Se trata de propiedades con buenos suelos para la agricultura, que se mantenían con fines especulativos, localizadas en posiciones muy favorables por su acceso a las principales vías de comunicación del país.

Los campesinos exponen diversos motivos como principal argumento de ocupación. Por un lado, se menciona la dificultad de obtener tierra para establecerse como productor; además existe un monopolio de las mejores tierras por parte de las empresas ligadas al capital internacional. En el caso de una proporción importante de los ocupantes de Alto Paraná y Canindeyú, el principal factor causante fue, aparentemente, la insuficiencia del mercado de empleo para absorber la mano de obra cesante al concluir la obra de Itaipú.

Un aspecto que Fogel destaca es el carácter de la legitimación que tratan de hacer los campesinos ocupantes de esta acción. En ese sentido expone este autor, "la ocupación de fracciones libres, básicamente, es presentada como basada en normas legítimas, aunque se utilizan canales no institucionales. Esas normas —concluye— son las que se basan en el principio enunciado en la retórica oficial que establece que 'la tierra es para quien la trabaja' ".

En cuanto a la explicación de por qué las ocupaciones se dieron primordialmente en el área de Alto Paraná/Canindeyú se menciona lo siguiente: 1) el grado de descomposición campesina producido por la modernización de la estructura productiva como por la creciente especulación inmobiliaria; 2) la expansión de la gran empresa agrícola y la canalización de "capital de reserva" hacia grandes fracciones, que determinó la fuerte concentración de la tierra; 3) la desocupación proveniente de las especiales relaciones socioeconómicas predominantes en esta región; y 4) el alto costo de vida imperante en la zona, particularmente por la incidencia del Proyecto Itaipú y del creciente comercio fronterizo.

Específicamente, en relación con la experiencia obrera de Itaipú, se señala que aun cuando tal empresa densificó las relaciones internas entre los asalariados, no creó las condiciones para un desarrollo acabado de la conciencia social de los que con posterioridad actuarían como ocupantes de tierra.

Fogel concluye, a través del análisis de las modalidades que tuvieron las ocupaciones de tierra, que, bajo regímenes opresivos, si una reacción colectiva tiene las características de un movimiento de tipo político "ella no puede tener un alcance mayor que el de movimientos aislados, de alcance local y objetivos limitados", que son precisamente las características que él reconoce en los movimientos de ocupación de tierras que examina.

Un objetivo explícitamente indicado en el estudio realizado por Graziella Corvalán, es el de identificar aquellos elementos que condicionan la emergencia y estabilización de movimientos protagonizados por mujeres. Este propósito no es ajeno al reconocimiento de que —a pesar de los reiterados esfuerzos protagonizados durante un largo ciclo histórico— los niveles de movilización alcanzados resultaron limitados y casi siempre efímeros. En ese orden, Corvalán apunta que "resulta interesante desentrañar la naturaleza de estos factores desmovilizadores operantes en la sociedad paraguaya y que, sucesivamente, han venido desarticulando los intentos por constituir y afianzar un esfuerzo contestatario que expresara los intereses específicos de la mujer". Tampoco es ajeno al interés de este trabajo el análisis de las diferentes modalidades a través de las que las mujeres intentaron ganar un espacio de expresión dentro de la realidad sociocultural paraguaya.

El punto de partida que utiliza Corvalán para encarar el problema consiste en dilucidar el alcance del concepto mismo de feminismo, tal como se ha dado en el país. En ese orden, resalta uno de sus sentidos más vulgarizados relacionado con la acción reivindicativa sobre el derecho a una mayor equidad en el acceso a las posiciones sociales o al usufructo de privilegios y protección jurídica.

En la concepción feminista tradicional, sostiene Corvalán, se trata de compatibilizar el desempeño de papeles muy privativos de la mujer —tales como el de esposa, madre, etcétera, con el ejercicio de actividades políticas y profesionales. Efectivamente, el elemento subyacente en el feminismo contemporáneo es el de la búsqueda de una liberación, esto es, lograr un cambio drástico que implica eliminar definitivamente la participación masculina como una instancia de intermediación para lograr participar con plenitud en la sociedad. Es lo que señala Corvalán al

indicar que se trata de obtener mecanismos de "participación directa en el ámbito de acción del hombre y no más a través de él".

Una característica llamativa en este estudio es el esfuerzo de aplicar una metodología histórica que apunta a mostrar en qué medida la mujer ha ido cambiando —inducida por condicionamientos estructurales cambiantes— su propia noción respecto de la naturaleza del problema de la discriminación ejercida por una sociedad que se estructura con un fuerte y privilegiado dominio masculino.

En esa presentación diacrónica sobre las condiciones de desempeño y los intentos de movilización femeninos, la autora dedica una especial atención a los esfuerzos hechos por la mujer en el campo de la política, el sindicato, las organizaciones culturales y de defensa de los derechos humanos. En opinión de Corvalán, todavía es muy exiguo el margen de logros alcanzados por la mujer en estos campos. Entre los factores que han interferido la posibilidad de una progresión más significativa y firme, la autora reitera la tendencia fuertemente excluyente hacia la mujer que impera en instituciones como la Iglesia, los sindicatos y los partidos políticos. "El liderazgo efectivo —concluye— sigue en manos masculinas, tanto en el plano de las decisiones como de la administración, independientemente de los niveles de capacidad de la mujer".

El problema principal que plantea Esteban Caballero es el que se refiere a la relación Estado y sociedad civil.

¿Por qué una sociedad civil cuyos grupos sociales constitutivos experimentan las secuelas de una grave crisis económica no logra cuestionar, a nivel de la práctica, el orden social imperante? Sin lugar a dudas, la respuesta se da en la naturaleza misma de ese orden social vigente.

En el Paraguay el mencionado orden no surge de un contrato social que involucra a los distintos grupos y donde cada uno negocia sus derechos y obligaciones de manera que el resultado final se exprese como voluntad general fundada en el consenso.

En cambio, es evidente que dicho orden es el resultado de una norma impuesta y que emana de una estructura de poder donde prevalece el poder Ejecutivo. En tal contexto, los actores sociales surgen de esa normativización gubernamental, de manera tal que su identificación con los roles que le son asignados está fuertemente signada por la noción de obediencia.

Paralelamente a esta verticalización de la relación gobernante-gobernados el orden normativizado cuenta con los tradicionales mecanismos compulsivos que terminan por controlar cualquier expresión de disenso.

Estas condiciones impiden que se integre una sociedad civil con cierta autonomía respecto del Estado, entendiéndolo como un resultado o producto de la relación gobernantes-gobernados.

Ninguno de los actores sociales menejados por el Estado tiene la posibilidad de replegarse sobre sí mismo e intentar un proceso de reidentificación sobre la base de interpelaciones que no concuerden con las pautas que él mismo impone. De ahí la carencia de movimientos sociales independientes. Ni la burguesía, ni los trabajadores asalariados, ni los campesinos e indígenas pueden reconstituir sus identidades sociales sobre la base de propuestas alternativas a las del gobierno. ¿Qué papel desempeñan los partidos políticos en todo este proceso?

La función del partido que participa en el gobierno es de legitimación. No cuestiona al Estado, sino que lo legitima utilizando su estructura partidaria y su metodología clientelística para obtener el consenso de determinados segmentos de las clases subalternas y de la ciudadanía en general. Como tal, este partido no actúa como gestor del Estado, sino como su incondicional apoyo. Por esa circunstancia no puede implementar políticas que contradigan los intereses del Estado en el sentido de intentar dirigir una reorientación de la relación gobernantes-gobernados por vía de la redefinición de los roles y de las identidades de los distintos actores que emergen en la esfera del Estado.

Los dos desgajamientos del tradicional Partido Liberal disponen de muy poca capacidad para alterar la relación gobernantes-gobernados. Su incapacidad se debe fundamentalmente al hecho de que —al aceptar el juego parlamentario en condiciones de extrema restricción— no han logrado sino afianzar la propia estrategia de legitimación del Estado. Dada la fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, el parlamento retiene un margen muy escaso de soberanía, lo que lo convierte en una instancia burocrática que en la práctica lo aleja cada vez más de los actores sociales concretos. Por dicha razón, su capacidad de convertirse en un mediador en el proceso de constitución del Estado va desapareciendo en la medida en que se restringe su nivel de credibilidad.

Por su lado, los partidos reunidos en el llamado Acuerdo Nacional tienen igualmente serias limitaciones para alterar las relaciones imperantes entre gobernantes y gobernados, por el mismo hecho de que intentan hacerlo creando un nuevo espacio de acción de carácter extra-parlamentario. Es lógico suponer que si éste creciera desmedidamente pondría en peligro un elemento muy importante del funcionamiento del sistema. Por ello se explica que el gobierno mantenga un control muy estricto de las actividades y que parte central de su esfuerzo se aboque a la tarea de restringir al máximo su presencia y operatividad. En semejante contexto, es notorio que los márgenes de movilización se presentan sumamente restringidos.

En el trabajo referido a los movimientos laborales, Roberto Céspedes considera que la crisis paraguaya es esencialmente económica antes que política. El efecto de la crisis sobre el movimiento laboral se mani-

fiesta en el deterioro del salario real y en el aumento del desempleo y del subempleo. Según Céspedes, dos factores intervienen para bloquear la transición de la crisis económica a una dimensión específicamente política. Por una parte, no parece haber una ruptura interna de proporciones significativas en el bloque dominante acerca de las estrategias necesarias para salir de la recesión y tampoco parece emerger una propuesta alternativa por parte de la oposición que cuente con amplio apoyo de las masas. Por otra parte, la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) está estrechamente ligada a la estructura de poder, y, a pesar de reconocer la situación crítica del salario y del empleo obrero, ha seguido alineándose con la posición gubernamental.

En las organizaciones que actúan de manera independiente, se advierten diversas posiciones. Por ejemplo, en el caso de los sectores obreros organizados bajo la influencia de la Democracia Cristiana y la izquierda, es opinión predominante que en la presente crisis convergen elementos propios del desarrollo capitalista mundial, la situación regional y los factores ligados a los condicionamientos locales. Para el autor, una percepción diferente sería la de la dirigencia influida por el Instituto de Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), dado que no entra a cuestionar al sistema capitalista.

Tanto la percepción de la crisis como la estrategia de acción derivan de las posiciones de cada grupo frente al Estado y a las alternativas planteadas por los grandes movimientos laborales.

De esa forma se entiende el alto grado de condescendencia de la CPT frente a los lineamientos y acciones gubernamentales, de igual modo, resultan comprensibles las respuestas de los gremios independientes cuya principal prioridad es realmente asegurar su presencia en las difíciles condiciones en las que deben actuar, lograr un fortalecimiento de las organizaciones de base y consolidar un margen de capacidad negociadora que les permita establecer acuerdos mínimos.

En tales circunstancias, Céspedes anota que el rasgo característico del movimiento laboral paraguayo es el de oscilar entre la mera protesta y la incipiente movilización; lo que se observa es una constante confrontación entre la actitud "desmovilizadora" de la CPT y los intentos de sobrepasar este obstáculo de parte de los sindicatos independientes.

Este tipo de forcejeo impregna profundamente el desenvolvimiento de las organizaciones laborales, aunque la desigualdad de capacidades para confrontar resultan muy notorias dado el poder de que dispone la CPT a través del irrestricto apoyo que recibe del Estado.

El autor enfatiza igualmente el grado de subordinación del movimiento laboral respecto de los partidos políticos cuyo efecto suele tender a la desmovilización. En otro orden, no menos significativa en la conformación y fuerza del movimiento laboral es la marcada incidencia del clientelismo y los vínculos familiares que prevalecen, dado el alto porcentaje de unidades artesanales o semiartesanales. A todo esto debe agregarse el factor "desempleo", que influye negativamente en la toma de un compromiso más efectivo por parte del obrero, principalmente por el temor de quedar sin fuente de trabajo.

En suma, el autor enfatiza las dificultades que enfrenta el movimiento laboral para crear un espacio de acción en el marco de un sistema sumamente rígido y con gran capacidad disuasiva. Esto explica, en definitiva, una situación ambivalente que oscila entre la debilidad e intermitencia de su capacidad de acción concreta y cierto grado de estructuración y permanencia en la escena social paraguaya.

Aun cuando el trabajo de Luis Galeano se apoya en dos casos, el análisis de los mismos permite una comprensión muy amplia de las características y alternativas de este tipo de manifestación urbana. El mismo autor avala este criterio, sobre la base de que se trata —de acuerdo con sus términos de "conflictos que se han distinguido por sus envergaduras y complejidades y que lograron impactar el proceso político urbano e inclusive la propia escena política nacional".

Puesto el problema en una perspectiva más coyuntural y microsocial, el proceso examinado —de acuerdo con lo expuesto por Galeano— adquiere un connotación muy diferente, en razón de que los condicionamientos van teniendo una significación diferente. En ese orden, un factor central que es encarado en el análisis —en el intento de lograr una explicación contextual— es el notable dinamismo que experimentaron determinados centros urbanos, en particular Asunción y sus ciudades periféricas. Sobre este punto llama la atención que una parte importante de ese crecimiento poblacional fue cubierto por contingentes expulsados de diferentes barrios de Asunción, pertenecientes a las capas populares. En gran medida ese proceso obedeció, entre otras cosas, al acelerado crecimiento de los costos de la tierra urbana y de los servicios públicos (luz, pavimento, agua, etcétera).

Un aspecto importante que se ofrece en el estudio de Luis Galeano es la periodización de los movimientos urbanos sobre la base de la naturaleza de los reclamos y de las etapas de desmovilización. Al respecto, se reconocen dos etapas: una, que culmina entre el período 1975/1979 y cuyos rasgos fundamentales se definen por la *ocupación de tierra y la defensa del techo propio*; otra, entre 1979 y 1983 que estaría demarcada por la *lucha política* y *la defensa jurídica.*

El hecho más llamativo durante la primera etapa fue —según lo refiere Galeano— la idea de "respeto y aceptación" de la propiedad privada que profesaban los ocupantes y adversarios respectivamente, y que respondía presumiblemente a la preocupación de que la lucha pudiera ser "ilegitimada" por contrariar un principio muy arraigado en la sociedad.

Otro elemento significativo que muestra el trabajo es el papel protagónico de los ex-combatientes en estos eventos, que obedecía primordialmente al interés de estos ocupantes de contar como principales dirigentes a un grupo de personas que, además de poseer prestigio social, no presentara demasiada vulnerabilidad frente a las imputaciones que recibiría por parte de los afectados.

Una característica distintiva de la segunda fase fue el gran esfuerzo desplegado por estos pobladores para captar apoyo y nuevos adherentes en favor de su casa, y particularmente la iniciativa de encarar la cuestión en un contexto hasta entonces no utilizado, esto es, el plano jurídico. Por un lado, esta derivación se debió al mismo agotamiento de los apoyos obtenidos, tanto a nivel estatal, como de otros organismos privados, sin que la cuestión pudiera ser definitivamente resuelta; por otro, tal instancia quedó abierta al recurrir la parte afectada a este mecanismo para tratar de dirimir el problema en dicho terreno.

Desde el punto de vista de su composición, el estudio pudo detectar el alto grado de heterogeneidad entre estos pobladores que se comprometieron a movilizarse para ocupar los terrenos. Esa circunstancia, de acuerdo con Galeano, tuvo mucho que ver en la manera cómo los mismos llegaron a visualizar a sus oponentes y, también, en la poca consistencia y firmeza que de pronto afectó al movimiento. Por lo demás, como el mismo autor anota, los adversarios de los ocupantes contribuyeron a la confusión, dado que las más de las veces jugaron un papel ambiguo y oscilante.

En contraste, un aspecto integrador relevante que el estudio destaca es el de las relaciones vecinales. En dicho ámbito, se generó un verdadero microclima político que se caracterizó por estimular un alto grado de participación y de manifestaciones de ayuda mutua.

Por último, Galeano puntualiza que otra peculiaridad del tipo de movilización por él estudiado es la de darse igualmente de manera aislada, es decir, sin vínculos con otras fuerzas y movimientos sociales.

En opinión de Gustavo Laterza una característica peculiar del movimiento estudiantil en el Paraguay es el de haber reproducido el mismo esquema político nacional. Tan así es, señala Laterza, que en el mismo ingreso a la Universidad —como se demostró en otros trabajos— los estudiantes se identifican con su adscripción partidaria personal o la de su familia y, a partir de ello, se integran a los grupos correspondientes.

No obstante, este comportamiento muy extendido, enfatiza el autor, siempre se ha percibido como una resistencia a aceptar una integración total a los cuadros partidarios en lo que se refiere a los grupos de oposición.

Un fenómeno importante en el curso de la existencia del movimiento estudiantil en años recientes fue, sin duda, el "movimiento independiente" al que Gustavo Laterza dedica su principal atención.

El supuesto de partida es que este movimiento representó una voluntad de ruptura con el mecanismo tradicional de la política que arranca de las organizaciones partidarias urbanas. Por ese hecho, el Movimiento Independiente planteó una doble escisión: por un lado, la no dependencia de las organizaciones partidarias y, por otro, la renuncia al enfrentamiento político personalizado en los dirigentes de los organismos respectivos. Avalando tal aserto, Laterza transcribe párrafos de un documento del Centro de Estudiantes de Ingeniería que dice lo siguiente: "...El frente es político, en el claro sentido de estar profundamente interesado en todo aquello que desarrollándose en el ámbito nacional, revista una verdadera importancia para la Patria y el Pueblo, o incida directamente sobre los fines e intereses de la Universidad...; es político pero no partidista ni sectario, porque intervendrá en toda política que afecte a la Nación, sin entrometerse en las destructivas rivalidades de partido...".

El trabajo pone una especial atención en mostrar los cambios que el movimiento fue experimentando a través de más de una década de fuerte influencia en el movimiento estudiantil universitario. En ese orden, un punto esencial en el ideario de este sector es su definición de los grupos estudiantiles oficialistas como su principal contrincante. La acción política es así definida como de "oposición estructural" al régimen de gobierno, tanto en el nivel nacional como en el universitario, lo que lleva a resaltar como aspecto fundamental de su praxis política el hecho de que la lucha no está dirigida a un mero cambio de personas en el gobierno o a la sustitución de partidos con los mismos programas e ideologías. En definitiva, lo que el movimiento independiente define como su objetivo fundamental es que lo que debe modificarse es el sistema. Al respecto, Laterza puntualiza que "este punto diferencia lo que el MEI reclama del reclamo de los grupos juveniles de los partidos de oposición". El autor señala además que con la desvinculación formal de las organizaciones partidarias lo que busca el Movimiento Estudiantil Independiente es mantenerse al margen de las luchas entre partidos y de esa manera ganar cierta autoridad moral.

Aun cuando en ciertos períodos la capacidad de movilización del estudiantado universitario respondió fundamentalmente al Movimiento Independiente, el Estado, por sus organismos de poder u otros mecanismos de disuasión, logró desarticularlo siempre que su crecimiento llegaba a alcanzar niveles más allá de lo tolerable.

Por último, Gustavo Laterza señala una serie de limitaciones en este movimiento, tales como su escasa vinculación con otros movimientos, su carácter generacional, su escasa proyección en el estamento de egresados y sus prejuicios acerca de las tácticas y la organización político-partida-

ria, etcétera. Según este autor, estas limitaciones reducen la influencia de este movimiento, aunque —concluye—, su alto nivel de integración, organización y continuidad le permite mantener una fuerte influencia y capacidad movilizadora.

Los movimientos sociales frente a la crisis *

Fernando Calderón Gutiérrez **

I. La sociedad no es una estructura

Los análisis predominantes de las Ciencias Sociales en América Latina en cualquiera de sus corrientes interpretativas han dejado de lado de alguna manera la comprensión de los movimientos sociales y de otras formas de la acción colectiva.

Las llamadas teorías desarrollistas elaboradas sobre todo en la década de los '50 y a principios de los '60 hicieron hincapié en los procesos de modernización, industrialización y aculturación. Su interés fundamental giraba en torno de la evolución de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, expresada a través de un continuo societal; allí la noción de

* Trabajo presentado en el seminario sobre Movimientos Sociales, realizado del 29 al 31 de mayo de 1985 en la sede de DESCO, Lima, Perú, en el marco del proyecto "Los movimientos sociales frente a la crisis en Sudamérica", patrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).

**Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

cambio connotaba una secularización creciente, con conflictos y asincronías de las estructuras sociales y políticas. Así el desarrollo era concebido como el lúcido destino de la acción racional victoriosa.[1]

Mientras se formaban estas construcciones teóricas, introduciendo la problemática de la modernización y la industrialización en América Latina, sucedían movimientos nacionales que, si bien promovían cierto desarrollo económico y cierta modernización social, por otra parte provocaban nuevos conflictos y finalmente, una nueva dependencia de los países capitalistas centrales, siendo además portadores de formas "irracionales", confusas y difusas, de acción social: los populismos.[2]

La década de los '60 se caracterizó en gran medida por la crítica al desarrollismo, tanto en el plano de sus resultados fácticos, como en el de sus análisis teóricos, emergiendo desde distintas versiones la llamada "escuela de la dependencia". Nociones como desarrollo del subdesarrollo (Franck), situación dependiente (Cardoso-Faletto), dependencia y marginalidad (Quijano-Weffort), condición dependiente (dos Santos), subimperialismo y formas de acumulación de capital subordinadas (Ruy M. Marini), constituyeron análisis críticos a las teorías anteriores desde las estructuras latinoamericanas.

Más allá de la crítica histórica y de la relativa inadecuación nacional de estos análisis, aquí interesa resaltar que en estas "escuelas" los movimientos sociales fueron poco estudiados, concebidos como reflejos voluntaristas o como acciones determinadas por el orden económico o estatal, o por la acción partidaria. De alguna manera el Estado era visualizado como el productor de sociedad, y las élites o burguesías dependientes, como las fuerzas malignas sustentadoras del orden social dependiente; al proletariado, en varias de estas versiones, le correspondería cumplir sus metas históricas preestablecidas, su práctica de alguna manera ya estaba escatológicamente concebida, sólo había que alcanzar la conciencia necesaria.

Tal vez es posible distinguir dos supuestos implícitos en estas teorías.

Por una parte, conciben a los movimientos sociales como prácticas subordinadas a los partidos, al menos en dos sentidos. Para unos la acción colectiva se subordinaría a la acción consciente del partido-vanguardia; para otros, esta acción colectiva se caracterizará por combinarse y yuxtaponerse con el partido (partido-movimiento), donde el líder, el gran conductor nacional, interpretaría y sintetizaría los intereses de los movimientos sociales. Así, para unos y otros, los partidos serían en definitiva los que podrían interpretar la estructura, producir sociedad y, en definitiva, hacer la historia. Ciertamente, aquí no pretendemos negar la importancia histórica de los partidos de vanguardia (leninistas) ni de los partidos-movimiento (populismos) en América Latina —sus efectos sociológicos han sido y son muy importantes en la región—, sino que deseamos resaltar que esta visión partidaria altamente elitista impidió visualizar globalmente las características particulares de los movimientos sociales, sus intereses, sus oposiciones, sus identidades, sus sueños y deseos, sus mismterios y su propia producción societal.[3]

Por otra parte, varias de estas concepciones dependentistas contenían cierto reduccionismo estructural de las relaciones de clase, que los inhibía de analizar las prácticas sociales.

Explícita o implícitamente se suponía que los sujetos sociales sólo son sujetos de clase mientras que, paradójicamente, varios estudios concretos probaron que en América Latina no existen clases puras, plenamente constituidas, que los sujetos sociales están adscriptos a múltiples posiciones que corresponden a diferentes capas sociales que se jerarquizan y ordenan según los conflictos y las luchas sociales, culturales y étnicas vividas. Tal vez ejemplos más claros son los de las oligarquías y del campesinado.[4] Otro aspecto importante es que, aunque todo actor está formando parte de relaciones de clase, también existen otras formas de relación: étnicas, juveniles, religiosas, regionales, de género, etcétera, que son esenciales para entender la acción y la conciencia de los grupos sociales.

Incluso en textos como los de Cardoso y Faletto,[5] su valiosa tipología sobre las situaciones dependientes no alcanza a incluir un análisis dialéctico entre movimientos sociales, Estado, grupos dominantes e imperialismo; allí, en realidad, se analizan bloques de clases y alianzas donde el Estado y el modelo de desarrollo económico son el resultado de dichas alianzas; el mismo Estado es visualizado como puente o pacto de dominación entre las clases dominantes nacionales y el capitalismo internacional; para los autores, los movimientos sociales en realidad cumplen un papel complementario a alianzas paraestatales o estatales.

En fin, se podrán desarrollar muchos argumentos en este sentido, pero aquí se desea revelar sólo una hipótesis: para el conjunto de los pensamientos señalados y otros no analizados, lo movimientos sociales fueron percibidos y analizados de manera secundaria. Los análisis de la "estructura" y su racionalidad cubrían el escenario social de la realidad latinoamericana. Quizá los análisis no podían comprender (o se negaban a hacerlo) el conjunto complejo, viscoso, ambiguo y creativo de las relaciones sociales y sus mutuas interacciones y con ellas, las capacidades de acción de la sociedad sobre sí misma. Tal vez los movimientos sociales de manera latente o implícita o subconscientemente eran percibidos como "lo irracional", lo no explicable.

¿Dependencia teórica de un modo de pensar racional y eurocéntrico? ¿Positivismo mecánico producido por la creciente industrialización? ¿Realismo mágico sólo visible para García Márquez? ¿Diversidad e interpenetración de actores sociales y políticos con estructuras de clase no consolidadas? ¿Presencia de pensamiento partidario, elitista y totali-

tario que absorbe a los movimientos sociales? ¿Ausencia de demandas sociales de autopercepción? ¿Dificultades metodológicas inherentes a la ciencia social para entender "lo irracional"?, etc. etc. Las preguntas son ejemplos de una problemática más amplia y las respuestas probablemente tendrán que ser complejas, críticas y colectivas.

Toda esta incipiente crítica no puede dejar de mencionar, sin embargo, la presencia de varios e importantes estudios sobre movimientos sociales que se hicieron en la región. Efectivamente, son varios los estudios sobre movimientos campesinos, estudiantiles, nacionales, sobre sindicalismo obrero u otros;[6] aquí no se desea, ni mucho menos, negar su importancia y su actual utilidad, sino solamente ponderar sus consecuencias, en tanto no constituyeron ejes analíticos básicos de las sociedades latinoamericanas.

Por otra parte, la actual crisis que sacude a la región, concomitantemente con la emergencia de procesos democráticos o de redemocratización ha tenido en el corazón de su razón de ser la emergencia de movimientos sociales, que en gran medida exigen o demandan a los analistas entender "lo irracional" para poder visualizar no sólo la crisis y sus opciones, sino a las mismas sociedades latinoamericanas.

Con la crisis de los modos de industrialización y del sistema cultural que los acompaña, los nuevos comportamientos, de viejos y recientes actores sociales, de alguna forma están redefiniendo sus mutuas interacciones y sus relaciones con el Estado y la política; en este sentido tal vez no sea muy atrevido hipotetizar que los movimientos sociales, en su diversidad y complejidad, sean potencialmente portadores de un nuevo orden social.

Sin embargo, se debe entender que la emergencia de movimientos sociales configura una amplia panorámica, un horizonte muy diverso. Lo que existe es un abanico de movimientos sociales multicolores, multiformes y heterogéneoos. Tal vez éstos hayan roto, o estén provocando la ruptura de algunas concepciones totalizantes, excluyentes y únicas del destino de América Latina.

Parecería ser que los mismos movimientos sociales, más que las interpretaciones analíticas, van mostrando un horizonte de posibilidades a través de sus conflictos, del fracaso o creciente descomposición de los autoritarismos, y en la búsqueda de un cambio de la condición social de gran parte de las sociedades latinoamericanas.

Como se pudo apreciar en la década del setenta,[7] estudios realizados a lo largo y ancho de Latinoamérica, nuevos conflictos nacionales, de clase, regionales, urbanos, de género, étnicos, de violencia revolucionaria, juveniles, burocráticos, etc., empiezan a plantear desde su misma lógica, formas de identidad y conflictualidad que trastocan tanto visiones unidireccionales, economicistas y tecnocráticas de la crisis, como las meramente estatistas o partidarias, y de alguna manera los nuevos movimientos,

con mayor o menor intensidad, apuntan a la emergencia de un nuevo orden democrático y a la elaboración de nuevas formas de pensar la sociedad, la política y el desarrollo.

En este sentido, la idea central del presente estudio es que en gran medida los movimientos sociales viven un momento de inflexión entre sus orientaciones y características tradicionales (por ejemplo de modernización, de liberación social y/o nacional) y la emergencia de nuevas prácticas y orientaciones, tanto en los actores clásicos (obreros, campesinos, etc.) como en las nuevas prácticas y movimientos sociales (género, juventud, derechos humanos, etcétera).

La pluralidad de estos movimientos tendería a caracterizarse por prácticas particularistas, reactivas y defensivas frente a la crisis, y sus identidades también tenderían, al menos inicialmente, a encerrarse sobre sí mismas, desconectándose en un primer momento de las nuevas lógicas abstractas pero reales del dominio mundial, que también está en pleno proceso de reestructuración y ampliación. Es decir que existiría una especie de distorsión entre el sistema de oposiciones percibidas como reales por los movimientos sociales y la materialidad en construcción de una nueva economía política mundial (revolución tecnológica, militarización del consumo, internacionalización del capital, destrucción o disminución del Estado de bienestar, etc.); ésto no quiere decir que exista un problema de falsa conciencia de la nueva lógica del poder por parte de los movimientos sociales (al FMI se lo percibe ajeno y abstracto), sino una inadecuación temporal entre oposiciones reales y factores de poder.

Sin embargo, aquí se sustenta que en estos espacios de resistencia pequeños, cotidianos y culturales, comienzan a emerger valores y formas sociales colectivistas, de autogobierno, de solidaridad, de autogestión, etc., que probablemente puedan reconstituir el sistema de oposiciones y viabilizar la reconstrucción de sujetos históricos.

El texto que sigue, sólo pretende ser un instrumental preliminar, crítico y teórico, para comprender estos procesos.

II. La voz con huellas

El análisis teórico de los movimientos sociale sen América Latina es por el momento limitado y está más bien en construcción.

Es muy fácil caer en la repetición o adecuación mecánica de desarrollos teóricos realizados en Francia, Italia o Estados Unidos, que obedecen a dinámicas nacionales distintas. Así la generalización excesiva sobre el o los movimientos sociales o el historicismo genérico de la acción social son tan peligrosos como la pura descripción local detallada; sin embargo, de alguna manera es necesario construír un cuerpo teórico generalizable, pero condicionado y alimentado por los procesos concretos de las prácticas sociales en la región.

Tal vez dos parámetros puedan servir como punto de partida para enmarcar este propósito: uno referido a los largos y conflictivos procesos de formación nacional[8] y el otro al sistema de relaciones sociales y su articulación en los diferentes espacios nacionales, donde si bien las relaciones de clases y las potencialidades de cambio son vitales, éstas no cubren ni explican otras relaciones también muy importantes como las regionales, las étnico-culturales, las de género, etc.; el problema consiste en poder captar la dinámica del conjunto de estas relaciones, pero también sus especificidades en el contexto internacional.

Pero las relaciones sociales no son sinónimo de movimientos sociales, ni todo lo que se mueve en la sociedad es un movimiento social; si bien éstos son los productos y el reflejo de la misma, se producen cuando los distintos actores, cualesquiera sean, actúan y se orientan para recrear y transformar las relaciones en cuestión.

En este sentido, quizás una característica propia de América Latina es que no existen movimientos sociales puros o claramente definidos, dada la multidimensionalidad no sólo de las relaciones sociales, sino también de los mismos sentidos de la acción colectiva; por ejemplo, un movimiento de orientación clasista probablemente esté acompañado por sentidos étnicos y de género, que lo diferencian y asimilan a otros movimientos de orientación culturalista con contenidos clasistas. Así, los movimientos sociales se ven nutridos por múltiples energías que incluyen en su constitución desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural, hasta modos de transformación y participación cotidiana de autoproducción societal, como la forma real de hacerse sujetos, donde la lógica polivalente de los conflictos vividos permiten visualizar la totalidad nacional o regional en la cual estos movimientos se desenvuelven.

De alguna manera se trataría de entroncar los diferentes conflictos puntuales de determinados movimientos con la sociedad analizada, y muy específicamente con las relaciones sociales que están en juego, lo que de suyo además implica explicar la formación de las prácticas de los movimientos, sus efectos institucionales, su creación de formas sociales y valores culturales y cómo se constituyen en ellos nuevas identidades y nuevas orientaciones societales.

Una pregunta que vale la pena formularse en cada situación, es acerca de cómo se construyen estas formas identificatorias, tanto en términos de recreación de experiencias del pasado presentes en la memoria colectiva del sujeto —donde por lo general se redefinen de acuerdo al tipo de enfrentamiento vivido y a los mitos construidos—, como en términos de las formas psicológicas de autoafirmación colectiva. Los momentos de crisis parecen tener la virtud de mostrar con más claridad estos fenómenos, pero de manera paradójica. "La crisis libera al mismo tiempo las fuerzas de la muerte y las fuerzas de la regeneración; de allí su ambigüedad radical". "Puede tener un resultado regresivo y progresivo".[9]

En este sentido, conviene analizar toda acción colectiva también en términos culturales y psico-sociales, ya que estas acciones no siempre son explícitas y a veces sólo pueden leerse "entre líneas". Sin embargo, creemos que el sentido de toda acción debe buscarse en dos planos: en el de la acción propiamente tal y en el del sentido de la misma.[10]

Lo importante entonces es poder entender el (o los) sentidos de los movimientos, pero teniendo presente que éste puede ir mutando en el tiempo, marcando los diferentes momentos que recorre el movimiento. Así, es importante tratar de no quedarse con una única imagen o una explicación racionalmente cristalizada de este sentido, sino más bien interpretarlo acompañado de los cambios ocurridos, en función de su propia historia, de sus huellas, que van definiendo y redefiniendo al movimiento.

La dinámica de los movimientos sociales puede tener como referencias fundamentales cuatro tipos diferentes de campos de desarrollo.[11]

En primer lugar, todo movimiento social posee una estructura participativa, como consecuencia de su propio objeto y experiencia de organización y lucha. Las formas, los niveles y los tipos de participación en un movimiento, definen en gran medida las fortalezas de las metas de éste. Un aspecto central que conlleva este campo es el carácter piramidal o restringido de la participación, y sus formas democráticas o expansivas. Aquí la problemática de la "pequeña política" o de la cotidianeidad vivencial del movimiento cobra especial importancia.

En segundo lugar, todo movimiento social tiene su propia temporalidad, en gran medida definida por su acción frente al sistema de relaciones históricas. Por lo tanto, aunque todo movimiento posee su propia continuidad histórica y su cotidiana vivencia existencial, los momentos de crisis y conflicto agudo son los que definen su cualidad. De esta manera, la combinación del "tiempo" diacrónico y sincrónico del movimiento son fundamentales para su compresión.

Aquí, la visualización de la actual crisis latinoamericana y nacional cobra una importancia vital en la medida en que, en sus múltiples expresiones y sentidos, está presente en las vivencias y acciones de los movimientos sociales; sobre todo si asumimos que estos son portadores en alguna medida —aunque preliminarmente— de un nuevo orden social, demandantes de un "nuevo modelo" de desarrollo económico y de una cierta visión política del conjunto de la sociedad. Claro está que esto no niega que el cambio dependa relativamente de las relaciones económicas, que organizan endógenamente a la sociedad.

En tercer lugar, los movimientos sociales se desarrollan en forma multilateral y heterogénea en el espacio, en función del desarrollo desigual de la conciencia, la organización y la economía de una localidad o región determinadas. Por ejemplo, un movimiento social de liberación na-

cional puede incluso llegar a tener características y significados distintos en diversos contextos geográficos. Los movimientos sociales, aunque ellos puedan plantearse, no tienen fines teleológicos predeterminados, los redefinen en el propio conflicto.[12]

Un último elemento global que debe tomarse en cuenta para el estudio de las prácticas colectivas es el relativo a los efectos sociales específicos de estos movimientos sobre las relaciones sociales y sobre la sociedad, pero no solamente como el producto de la acción del sujeto, sino muy especialmente como producto de un campo de conflicto donde los actores involucrados en la acción se modifican a sí mismos por la interacción recíproca y compartida para obtener un fin, para lograr una meta. Esta relación es la que puede introducir además modificaciones específicas y generales en la sociedad, tanto en términos de transformaciones en las relaciones de poder —piénsese en la revolución mexicana o boliviana por ejemplo— como de efectos específicos sobre determinados órdenes sociales —piénsese en la reforma agraria de esas mismas revoluciones. Pero también los movimientos sociales pueden introducir sobre la base de las relaciones sociales que los recrean, culturas cotidianas de un nuevo orden que modifica la vida de los hombres: hábitos, costumbres, valores, etc. Por todo esto, los movimientos sociales pueden ser considerados como motores de la historia.

Dicho todo lo anterior, parece necesario aclarar y enfatizar algunos aspectos conceptuales claves acerca de la constitución de los movimientos sociales, tanto en términos de reduccionismo clasista como respecto de su adecuación para la región.

Los científicos sociales tendemos a olvidar demasiado a menudo que el concepto de clase social es un concepto analítico que sirve para describir las estructura social en términos de un modelo teórico, pero que difícilmente pueda ser observado como tal en la realidad empírica que nos toca analizar.

Cuando nos dirigimos a la realidad social en busca de los actores sociales agentes del cambio, no vemos clases conformadas actuando orgánicamente como tales (ya que la "clase en sí" no es motor del cambio social y la "clase para sí" es más bien una expresión de deseos que forma parte de la utopía revolucionaria). En cambio, sí vemos una mulplicidad de actores sociales agrupados en una heterogeneidad de movimientos sociales, con diferentes grados de capacidad de cuestionamiento del sistema social global.

Probablemente es cierto que, al decir de A. Melucci,[13] lo sincrónico dirige a lo diacrónico, es decir, el cambio depende de la estructura y tiene una causa endógena, estructural, en la exigencia que tiene un sistema de clase para mantenerse y controlar el conflicto, siendo éste una dimensión estructural del sistema.

Para el perspicaz italiano, el análisis marxista ha ignorado los procesos de formación de la acción colectiva, las redes de relaciones y el modo del pasaje de las formas elementales de la revuelta a la acción de clase organizada. Para él, la acción colectiva es el fruto de complejos procesos de interacciones, mediados por redes de pertenencia. Por otra parte, como ya se dijo, en Latinoamérica las relaciones sociales en gran medida no están consolidadas, los actores sociales mutan permanentemente; de alguna manera son clases metamorfósicas, con características estamentales en sociedades patrimoniales.[14] La categoría "pueblo", por ejemplo, puede explicar más un cambio revolucionario que la pura visión obrerista de una revolución liberadora.[15]

Por su parte, Guy Bajoit[16] sostiene que aun cuando todo actor esté formando parte de relaciones de clase, existen otras formas de relación que a veces son más determinantes de la "conciencia de sí" de un grupo social determinado que la conciencia de clase, lo que no necesariamente significa alienación en el sentido marxista del término. Ejemplos de esto serían la mayoría de los movimientos sociales que nos ha tocado analizar en este trabajo: movimientos étnicos, de mujeres, de jóvenes, movimientos urbanos, regionales, etc. Las relaciones sociales forman a la vez actores "en sí" y "para sí". Toda relación tiene un sentido, una orientación, no es arbitraria.

Para Alain Touraine, con razón. "...no hay clase sin conciencia de clase. La idea de que pueda haber una clase en sí y que sean los organismos políticos o sindicales los que dan conciencia de sí miama y por lo tanto capacidad de actuar a una clase dominada, debe ser totalmente descartada".[17]

Sin embargo, a pesar de los aportes de estas ideas para el análisis latinoamericano, ¿es posible acercarse a la heterogeneidad de movimientos sociales que nos ofrece nuestra realidad latinoamericana, con esquemas analíticos como los de Bajoit o Melucci, con clasificaciones que diferencian las acciones de masas, las acciones conflictuales reivindicativas, las acciones conflictuales políticas, los movimientos reivindicativos y los movimientos políticos, los movimientos de clase y los movimientos políticos de clase, a partir de los cuales es posible establecer graduaciones en los niveles de conciencia y de capacidad de lucha por la apropiación y/o la destinación de los recursos o valores sociales, según sean capaces o no de atacar a la estructura de las relaciones de clase?

Incluso en este tipo de análisis subyacen presupuestos teleológicos racionalistas, en los que se prescribe un "destino" manifiesto y deseable para la evolución de los movimientos sociales y que abandonan con demasiada ligereza la pregunta acerca de cuál será en definitiva la voluntad y la dirección de los cambios que nuestras sociedades se prescriben a ellas mismas.

De hecho, parece demasiado simplista establecer una pirámide de movimientos sociales, en cuya encumbrada cúspide sólo estarían aquellos

que manifiestamente se dirigen hacia la lucha por la apropiación de los medios de producción, el control social y el poder y en cuya difusa base se ubicarían todos aquellos movimientos sociales que hacen de su objetivo la lucha por cambios en la cultura, en la reproducción o distribución de los servicios, o por una nueva forma de encarar las relaciones sociales la centralización del poder, la participación social, etcétera.

Incluso en la conceptualización que hace Touraine de lo que él llama "sistema de acción histórica latinoamericano", donde se estaría estructurando un nuevo sistema de acción en base a la simplificación y racionalización progresiva de las características de la acción social colectiva, la especificidad de cada segmento social implicaría que los movimientos sociales pugnen por la distribución del ingreso y las fuerzas políticas, por el poder del Estado; para el francés, los actores sociales en Latinoamérica van "detrás" de su constitución como clase, en cuanto a la estructura social, pero van "por delante" de su constitución como clase en términos de movilidad social y de participación política y cultural.[18]

¿Qué significa este estar "detrás" o "delante" de su constitución como clase? Tal vez esto haga referencia a la debilidad de los actores sociales, a su falta de organicidad, a su pendularidad; pero más bien, en Latinoamérica ¿no son las clases dominantes (la falta de una burguesía industrial consecuente y asentada), las que resultan débiles políticamente y dependientes económicamente y que, al no generar acciones homogéneas ni hegemónicas, impiden también la conformación de oposiciones claras y orgánicas? En nuestras sociedades, más o menos industrializadas, penetradas por el capital financiero internacional, por una compleja red de multinacionales que eligen sus políticas con relativa independencia de las relaciones sociales, en las que ora se asientan, ora abandonan según intereses ocasionales, los movimientos de clase centrados en la producción encuentran enormes dificultades para desarrollar una acción coherente, darse formas de organización duraderas y evolutivas; más bien en muchos casos sus orientaciones de clase se han integrado a orientaciones de liberación nacional o a pactos de dominación.

Surgen a la vez múltiples prácticas sociales centradas más bien en la lucha por la distribución de servicios, en cuestiones étnicas y grupales o reivindicativas. Pero concomitantemente, hay procesos culturales que se internacionalizan y que atraviesan las formaciones económico-sociales aun cuando no siempre se corresponden con su grado de desarrollo económico o político. Conflictos que son una reacción, por ejemplo, a los mecanismos más sutiles de dominación social en las sociedades urbano-industriales, a la manipulación de las necesidades (se ve la serie Dallas de la TV norteamericana, pero también se bailan las salsas de Willy Colon.[19]

La relativa superación de las diferencias entre lo público y lo privado, la extensión de los conflictos hasta terrenos considerados hasta ahora como privados (como las relaciones sexuales, el cuerpo, las relaciones

interpersonales, la identidad biológica, etc.), provocan una readecuación de la energía polivalente de los movimientos sociales más clásicos.

Así se constituyen identidades que van más allá de la producción económica y de las relaciones políticas, identidades culturales que tienen que ver con los rechazos a la fragmentación individual y a la soledad colectiva de este mundo que habitamos.

Estos rechazos favorecen de extraña manera nuevos comportamientos colectivos, desde la anomia, el rito sacrificial, la acción terrorista hasta el comunitarismo cristiano y la reivindicación ciudadana [20] entre otros, basados en la creación o el recrecimiento de redes de relaciones sociales organizadas en torno a nuevas demandas y liderazgos abiertos, comportamientos estos al decir de Nun, que se salen del lugar asignado en el coro.[21]

Pero como se apreciará más adelante, este divorcio, esta distinción entre estos enigmas y el sistema político, de algún modo reafirman la necesidad de redemocratización de la sociedad y de reconstitución y generación de actores históricos.

Por otra parte, estos procesos abren un terreno de conflictos que ya no es el mismo ámbito restringido e institucionalizado de la política partidaria o estatal; es tal vez el reclamo de un nuevo tipo de relaciones sociales que no sólo cuestionan el control y la propiedad de los medios de producción, sino también muy especialmente la cotidianeidad existencial de nuestras sociedades. Tema éste que abre el debate sobre las relaciones entre movimientos sociales, Estado y partidos políticos (o mejor dicho y política), es decir entre legitimidad y representación social.

III. Caminos truncos y conflictos abiertos

La crisis ha tenido la propiedad de revelar con claridad el alto grado de interdependencia asimétrica entre la economía y la política de los países capitalistas centrales y las de las sociedades periféricas, donde es factible observar una autonomía cada vez menor de estas últimas sociedades con respecto a las primeras.

De manera específica, la situación que vive la región latinoamericana es el producto simbiótico entre cierto proceso de integración de la economía internacional que data de la Segunda Guerra Mundial, que generó fuertes mecanismos de transnacionalización, y de los distintos dinamismos de desarrollo capitalista que vivieron los países de la región.[22] Varios estudios y discusiones actuales permiten deducir que dichos procesos y el modelo keynesiano (neo) que los avalaba se encontrarían ya agotados y que en la década del '80 se verá emerger una nueva reestructuración económica mundial, como también, muy probablemente, nuevos conflictos y nuevas formas de acción colectiva.

El proceso de transformación e integración capitalista que vivió la región pasó por varios momentos y asumió distintas especificidades; la literatura producida al respecto es extensa y variada; aquí, a título introductorio a la temática que atañe al texto, sólo se desean resaltar algunas características de su evolución.

Desde los años '40 y durante la década del cincuenta, merecen destacarse tres aspectos. En primer lugar, la emergencia o reemergencia, en algunos casos, de Estados-Nación que buscaban organizar el dominio interno en función de valores propios. Desde entonces el Estado, a pesar de sus múltiples variaciones, pasó a ser el articulador y, en muchos casos, el actor principal de la economía y las sociedades latinoamericanas, al menos en América del Sur.

En segundo lugar, la emergencia de un conjunto de valores, prácticas y proyectos nacionalistas, modernizantes e industrialistas, que buscaban afirmar a la nación en el contexto internacional.

En tercer lugar, el desarrollo de un particular proceso de industrialización que generó parcialmente cierta sustitución de importaciones y la expansión de un mercado interno, y que además provocó intensos procesos de movilidad y diferenciación social.

Hacia mediados de la década del '60 estas orientaciones económicas, políticas y sociológicas, se empezaron a transformar y a desdibujar, fundamentalmente por la orientación de su producción económica al mercado externo y la subordinación progresiva al capital internacional. En alguna medida, los altos índices de crecimiento económico registrados en varios países de la región fueron producto de una mayor integración de la industria al capital internacional.[23]

En la década del '70 el impacto de la crisis del petróleo a nivel internacional fue importante para los procesos socioeconómicos internos de la región;[24] salvo los países petroleros, el resto experimentó un gran deterioro en los precios de intercambio, que se expresó drásticamente por el incremento de los costos de importación de manufacturas y tecnología. Paralelamente, la liquidez de la banca comercial internacional y la alta oferta financiera provocaron un gran endeudamiento de los países de la región.[25]

Por otra parte, en los países desarrollados se experimentaban fuertes desequilibrios monetarios, incrementos vertiginosos de su déficit fiscal, aumento del desempleo, afianzamiento del proteccionismo interno, disminución de políticas de bienestar social y, en definitiva, orientaciones nacionales y externas de corte liberal.

Así, éstos y otros dinamismos provocaron una aguda situación de crisis en la región, que si bien se expresa en múltiples y conocidos indicadores de monto de la deuda y sus intereses (altas tasas inflacionarias, bajos niveles de salarios y aumento del desempleo, fuertes déficits fiscales, exportación de capitales, porcentajes negativos de productividad indus-

trial, disminución de la calidad de vida y de las condiciones sociales de la población, incremento de huelgas y protestas, crisis de gabinetes, etcétera), más bien son figuras que muestran la crisis del ciclo económico iniciado en la postguerra, es decir, la crisis del modelo de transnacionalización, que cuestiona a las sociedades, las políticas y las economías de la región.

Ciertamente, los impactos, procesos y situaciones no son iguales, dependen de las características socio-históricas de cada caso. En Brasil, y en menor medida en México, el endeudamiento provocó a la vez cierta reindustrialización transnacional que incrementó la capacidad exportadora de ambos países, y un fuerte proceso de polarización y marginación socio-política. En Ecuador se operó un proceso de industrialización y modernización importante, en Bolivia, luego de inducir un importante crecimiento económico, la dinámica de la crisis casi aniquiló la economía formal, y en países como Argentina, Uruguay y Chile, el desarrollo de políticas monetaristas antiindustriales, acompañadas por órdenes despóticos, afectó seriamente sus estructuras productivas y sus relaciones sociales.

En fin, la situación es variada; empero, de una u otra manera los países en su globalidad tienen que afrontar los problemas de la deuda y el círculo vicioso que implica su crecimiento, el mercado internacional y el deterioro creciente de los precios de intercambio, la disminución neta de su actividad productiva y, muy especialmente, afrontar las políticas sobre el déficit fiscal y el proteccionismo, así como los vaivenes del mercado laboral de las economías centrales, particularmente de Estados Unidos, y más aun, las revolucionarias implicaciones que acarrean las transformaciones tecnológicas.[26]

La panorámica ciertamente no es halagüeña; varios estudios prospectivos muestran una mayor contracción económica para la región. El Banco Mundial, por ejemplo, diseñó dos escenarios de simulación: uno alto, positivo, y el otro bajo, negativo, en función de la interacción de dos bloques de variables. Las primeras, propias de los países desarrollados (EE.UU.), proteccionismo, equilibrio monetario-fiscal y mercado laboral; los segundos, propios de los países en desarrollo: precios económicos, tipo de cambio y políticas comerciales de ahorro interno, es decir, más o menos, la aplicación de los paquetes económicos propuestos por el F.M.I. En ambas situaciones los intereses de la deuda cumplirían un papel central: el curso de los mismos influiría determinantemente en los resultados de la economía regional.

Es decir que si el comportamiento de las variables fuese óptimo, América Latina recuperaría sus niveles de crecimiento de la década del '60, pero aun así los ingresos per cápita seguirían disminuyendo; por el contrario, en la simulación baja se prolongarían los niveles de decrecimiento que vive la región. Así, los países de ingresos medianos tendrán que resistir contracciones de importaciones, reducción de inversiones, y

no se esperaría crecimiento para la última década del siglo; el mismo Banco afirma: "los resultados económicos proyectados para los países plantean la duda acerca de la capacidad de la estructura sociopolítica de muchos de ellos para resistir tales presiones persistentes. La crisis de desarrollo de muchos países de ingresos medianos se agudizaría";[27] según esto, las tendencias para los países más pobres, sobre todo en las hipótesis más pesimistas, serían francamente catastróficas.

En este orden, no se debería dejar de lado en el análisis el desarrollo y fortalecimiento de nuevos procesos de producción, reproducción y organización social operados en todos los países de la región, especialmente en los más pobres; así, el crecimiento de economías llamadas sumergidas o informales, la proliferación de extrañas estrategias de supervivencia, el desarrollo de economías familiares diversificadas, etcétera, como también en varios casos la producción y comercialización de cocaína o marihuana, indican de alguna manera nuevas formas de resistencia popular y de desarrollo perverso del capital frente a la crisis que vivimos.

En todo caso, desde una óptica global parece que las variables determinantes del curso de la crisis para la región estarían relacionadas con el tratamiento de los déficits fiscal-monetarios y de la cuenta corriente de la balanza de pagos en Estados Unidos; ambos tratamientos, además, estarían relacionados e influenciados por el pago o no al servicio de la deuda latinoamericana.[28] Las implicaciones teóricas y políticas de estas tendencias serán retomadas en el último acápite.

En síntesis, la crisis de América Latina es muy heterogénea y vasta, pues expresa el agotamiento de los modelos capitalistas de desarrollo, atrasados y deformes, basados en la asociación entre el capital financiero internacional, los Estados Nacionales y los procesos de industrialización, que directamente afectan al conjunto de las relaciones sociales que se dan en las distintas sociedades. Las transformaciones operadas en los últimos 30 años en América Latina, no sólo se relacionan con los cambios ocurridos en la industria, la diferenciación campesina, la urbanización acelerada o la innovación tecnológica, sino también con la constitución y reconstitución de nuevos actores sociales y, muy principalmente, con la emergencia de un nuevo tipo de Estado, no sólo organizador y reproductor de relaciones de dominación, sino también actor productivo y social fundamental en todas estas sociedades. La crisis parece haber afectado a la totalidad de estas relaciones y produjo, además, nuevos campos de conflicto y orientación de los actores afectados por ella.

Es decir que la crisis latinoamericana consiste en un conflicto que concierne al conjunto de las relaciones societales, y que probablemente provocará modificaciones en las relaciones humanas, tanto en términos de los aspectos cotidianos de la vida, como en términos de relaciones sociatales más amplias. Pero la crisis, si bien es un momento de decisión, no tiene un destino preestablecido; depende de múltiples

factores, como sociológicamente señala Freund:[29] "La crisis es una situación colectiva caracterizada por contradicciones y rupturas, plena de tensiones y desacuerdos, que hace que los individuos y los grupos vacilen acerca de la línea de conducta que deben adoptar, porque las reglas y las instituciones ordinarias quedan en suspenso o inclusive algunas veces están desfasadas en relación con las nuevas posibilidades que ofrecen los intereses y las ideas que surgen del cambio, sin que sea posible, sin embargo, pronunciarse claramente sobre la justeza y la eficacia de las nuevas vías."

En este sentido, la pregunta global que nos formulamos es ¿cuáles son los movimientos sociales que cumplen un papel importante en la crisis y qué rol jugarían en probables sociedades emergentes? ¿Es posible pensar en un modelo teórico global de la acción social latinoamericana en su conjunto? ¿Cómo se expresan y definen los diferentes campos de conflicto, qué orientaciones están en pugna y qué tendencias de articulación nacionales y regionales es posible prever? El resto del texto apunta a responder preliminarmente a algunos aspectos de estas preguntas, más en términos de conflictos y sus tendencias que en términos estrictos de la relación crisis-movimientos sociales.

De alguna manera, los campos de conflicto son el conjunto de acciones construidas por los diferentes movimientos sociales que expresan sus identidades, intereses, producciones y orientaciones, y que hacen mención a las relaciones sociales involucradas y a los intereses de poder en juego.

Obviamente, los campos de conflicto particulares cobran sentido en el contexto nacional en el que se hallan involucrados. No obstante, con el objetivo de tener una visión regional de las diferentes orientaciones de la acción colectiva y como reflejo parcial de los conflictos nacionales, hemos detectado cinco grandes campos de conflicto en los cuales se encuentran involucrados los diferentes movimientos sociales en América del Sur.[30]

A. Industrialización y condición obrera

Indudablemente, la crisis afecta a los procesos de industrialización en la región, en algunos casos limitando o estancando su crecimiento, en otros desindustrializando el país, pero siempre mostrando la fragilidad de la independencia industrial nacional y afectando en su totalidad y de muy diversas maneras a la condición obrera.[31]

Parecería que la tendencia global del capital multinacional será fomentar los llamados procesos de industrialización en sectores de punta y desindustrializar el resto de las economías.[32] Frente a esto, en el seno del movimiento obrero se generan distintas formas de reacción y

de respuesta ante la crisis, así como la formulación, en algunos casos, de criterios para una futura reconstrucción industrial. Estos últimos aspectos de la discusión en el seno de la clase trabajadora y de sus organismos sindicales son por el momento muy incipientes.

En realidad, la pregunta no sólo abarca las respuestas defensivas a la crisis, sino también a qué tipo de industrialización se operará en el futuro y quién controlará o dirigirá dicho proceso. Los intereses y fuerzas en juego son múltiples y variados; aquí sólo se observarán algunas de las acciones obreras visualizadas como importantes.

Pese a los diferentes niveles de desarrollo y calidades de la industrialización, que van desde países francamente industrializados como Brasil, Colombia o Argentina, hasta países débilmente industrializados como Bolivia o Paraguay, las clases obreras en su conjunto han reconocido como factor precipitante de la crisis a fuerzas externas: el acelerado endeudamiento, las políticas de negociación del FMI, las experiencias monetaristas, etcétera. Sin embargo, las orientaciones de la acción social y las definiciones de los campos de conflicto han variado de país a país.

Groso modo, es posible percibir tres grandes orientaciones. Una primera tendencia es hacia la pervivencia de un sindicalismo paraestatal, hiperinstitucionalizado, basado en acuerdos nacionales y/o fuertes clientelismos entre las estructuras sindicales y el Estado, cuyos comportamientos sólo se dan en términos de negociación, en el mejor de los casos, de precios, salarios y algunas condiciones sociales. Orientaciones de este tipo se encuentran en Venezuela y Colombia. Sin embargo, hemos encontrado una orientación subordinada que se caracterizaría por la emergencia de una acción obrera independiente, comunitaria, con luchas aisladas y con orientaciones de renovación y democratización sindical; incluso en el Paraguay se visualizan algunas acciones de este tipo.

Otra tendencia significativa es la de los movimientos obrero-sindicales que de alguna manera cuestionan el orden estatal y las políticas económicas que de ellas emergen; allí la relación Estado-empresariado-sindicatos es muy compleja y se caracteriza por conflictos constantes y de variados tipos. En el interior de estas orientaciones existirían variadas tendencias —como las del sindicalismo obrero boliviano, que propugna metas de poder político y económico— hasta mecanismos de reciente constitución nacional organizada, como en el caso de Brasil y Ecuador donde el movimiento obrero pugna por independencia, democratización y unidad sindical. Por otra parte, en el interior de estos movimientos es posible encontrar tendencias y oposiciones distintas; por ejemplo, entre búsquedas de concertación u oposiciones radicales, dependencia e independencia partidaria, etcétera. Entre estas dinámicas se encontrarían los movimientos obreros chileno y uruguayo, y, en alguna medida, el argentino, aunque este último viviría una situación especial en razón de su entronque con el justicialismo, su oposición democrática al gobierno actual y su

acentuado verticalismo burocrático interno, coexistiendo también en su seno fuertes tendencias democratizadoras.

Finalmente, una orientación tal vez común a todos los movimientos sería cierta dispersión y heteronomía en su acción más puntualmente empresarial que nacional; incluso empezaría a cuestionarse la nueva condición obrera como forma de identidad que alimenta la acción; parecería que en el Perú esta tendencia ha cobrado mayor fuerza.

Pero más vale plantear casos específicos.[33]

—El movimiento obrero boliviano expresado en la Central Obrera Boliviana (COB) se caracteriza por una fuerte presencia sociopolítica en la historia del país, especialmente en la revolución del '52, la Asamblea Popular de 1971 y el proceso de democratización iniciado en 1978.

Frente a la crisis, la COB se caracterizó por plantear planes económicos alternativos, aplicar la cogestión obrera mayoritaria en las minas nacionalizadas y por variadas formas de participación en los problemas de abastecimiento alimenticio y control de la especulación. El punto culminante de la acción de la COB constituyó la demanda, en agosto de 1983, de un cogobierno tripartito entre la Unidad Democrática y Popular (UDP), la Confederación Campesina y la COB. Este órgano de poder obrero (la COB), según Calla Ortega, es un organismo fundamentalmente político, con clara orientación hacia el poder del Estado, la democratización del mismo y el control de los procesos económicos;[34] pero también autonomista frente a los partidos políticos y renuente a otro tipo de representación que no sea la democracia directa.[35] La COB tiene una dirigencia que se asimila a una minoría consistente en torno al liderazgo carismático de Juan Lechín.

No obstante, la COB también posee variadas contradicciones, tendencias y limitaciones en su acción, como la asociación entre asalarialismo e izquierdismo de fines, ausencia de un amplio pluralismo ideológico, tendencia a arrogarse toda la representatividad nacional, renuncia a toda concertación y cierta lógica reduccionista en sus planes de acción.[36]

Hoy en día, el fraccionamiento interno de la COB y la crisis del sistema político impiden a la clase obrera jugar un rol ofensivo en el juego político democrático.

—La democracia en Uruguay tuvo como componente central a la movilización sindical impulsada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Las demandas del movimiento obrero, basadas no sólo en una rica experiencia pasada, apuntaron directamente al proceso político vivido: amnistía, reposición de los destituidos, relegalización de los partidos, elecciones, salarios, mejoras en el nivel de vida, etcétera.

En Uruguay, según Cosse,[37] en ciertas conyunturas el movimiento obrero y popular se adelantó a los partidos tradicionales. Por ejemplo, el paro nacional de enero de 1984 fue un éxito gracias a los gremios y sindicatos. Así, pese a la presión desmovilizadora del régimen militar, la CNT

logró persistir en la clandestinidad y aun renovar sus direcciones.

Respecto de la crisis, su impacto implicó un rápido incremento de las tasas de desocupación y del cuentapropismo, así como un deterioro de los niveles de vida; empero, parecería que, al decir de Cosse, esto no afectó a la clase obrera industrial como para poder afirmar que ha cambiado su conformación estructural.

El movimiento sindical emergió del período autoritario con fortaleza y legitimidad renovada, habiendo logrado el reconocimiento nacional como un actor político central. Tal vez una característica peculiar del movimiento obrero uruguayo sea su interés y capacidad de concertación social adecuada a las circunstancias políticas y económicas; probablemente, del desarrollo autónomo de esta lógica dependerán en parte, no sólo el curso de la democracia uruguaya, sino también el futuro papel de la clase obrera y de la menoscabada industria nacional.

—La presencia de un modelo económico liberal en crisis y la permanencia de un sistema despótico defensivo han generado en Chile una sociedad que tiende a fragmentarse y polarizarse socialmente, donde la lógica del terror dificulta permanentemente la emergencia de principios de integración nacional y de articulación contractual. El Estado cumple una función de regulación negativa del orden social.

Frente a esta situación, el movimiento obrero chileno, a pesar de su obligada debilidad organizacional, tiene una influencia considerable en el conjunto de la sociedad, dada su capacidad de convocar y aglutinar no sólo a la clase obrera sino también a otras fuerzas, sobre la base de orientaciones antiautoritarias y prodemocráticas.

"En Chile hubo un fuerte proceso de desindustrialización a partir del modelo neoliberal que se impuso a partir de 1973 y que provocó una grave crisis en el sector industrial. Esta terciarización de la economía chilena constituyó un cambio estructural que afectó duramente al movimiento sindical. No obstante, los trabajadores industriales siguen ocupando un rol central en la producción, sobre todo en las grandes empresas, relativamente menos afectadas por la crisis".[38]

Dado lo anterior, el movimiento obrero puso énfasis en los últimos años en hechos y acciones en defensa de la industria nacional, el desempleo y la estabilidad laboral, y en un mayor vínculo con las organizaciones poblacionales.

En síntesis, el movimiento obrero ha sido capaz de desencadenar una serie de acciones muy significativas en el proceso político chileno y además ha demostrado poseer cierto poder combativo que trasciende a sus propias bases organizacionales y abarca a toda la sociedad.

Actualmente es posible percibir dos tendencias en su interior: una más "culturalista", que pretende fomentar la democracia, la solidaridad interna y la autonomía de la clase obrera, y otra más "instrumentalista", que busca alianzas y negociaciones desde los partidos políticos.

En todo caso, el desarrollo de estas potencialidades del movimiento obrero chileno está condicionado por la apertura democrática.

—En Brasil, después de transitar por varios momentos de subordinación, oposición y orientación estatal, la clase obrera se encuentra ahora ante la crisis del modelo propuesto por el "milagro brasilero" y ha asistido al comienzo de una etapa de crisis profunda de los modelos económicos propugnados desde el Estado.[39]

Ante esta crisis —y con la experiencia y memoria históricas acumuladas [40] (las huelgas de 1978 y 1979)—, según Marini se perfilan actualmente dos tendencias: una, más combativa y clasista, ligada políticamente al PT y capaz de cuestionar al sistema en su globalidad; la otra, de corte más reivindicativo-sindical y negociadora, ligada al PMDB y a otras fuerzas. Sin embargo, en ambas existen tendencias autonomistas de organizaciones partidarias.

A partir de estas dos vertientes contradictorias en el sindicalismo brasilero, según el autor mencionado, se podría percibir el nivel y la capacidad de generar alternativas y propuestas de acción: este nivel es ambivalente, pues, por una parte, subsiste la tradición sindical más negociadora y clientelista y, por otra parte, nuevas tendencias democratizantes en el seno del movimiento obrero son capaces de influir sobre capas sociales como las clases medias asalariadas, proletariado de profesionales, o como el campesinado representado en las Ligas Agrarias, los trabajadores de la agricultura, etcétera. Se perfilan también importantes tendencias a modificar la relación entre bases y dirigencia sindical, una presión incrementada pugnando por la participación creciente de las bases en la toma de decisiones sindicales y también una revalorización de las acciones de masas en busca de ciudadanía política.

Sin embargo, un hecho que se destaca en la clase obrera brasilera con respecto al resto de América Latina es la complejidad de sus distintas formas de comportamiento socio-político, tanto en términos de su relación con el sistema democrático nacional, como de los procesos internos de democratización, unificación e independencia sindical, sumado a una creciente preocupación clasista de la búsqueda de un modelo de industrialización nacional relativamente independiente. Quizá también habría que agregar su búsqueda de un sistema de interrelaciones más complejo con el conjunto de las fuerzas sociales de la sociedad brasileña, donde las temáticas de las orientaciones meramente clasistas como las de concertación social constituyen ejes sustanciales de sus oposiciones internas.

Recientes estudios muestran las características complejas y fragmentadas del sindicalismo brasilero donde, si bien se visualizan aspiraciones de unidad sindical y autonomía con respecto al Estado, también se dan, como afirma Regis de Castro, perplejidades y así "el deseo de autonomía es acompañado por un temor a la orfandad".[41] En síntesis,

los trabajadores brasileros se encuentran aún buscando definiciones sobre variados temas, como las elecciones directas, la organización en los lugares de trabajo, la democratización de la vida, la autonomía sindical de partidos y Estado, y la relación democrática con las fuerzas políticas; en definitiva, la elaboración —como señala Roque Aparecido da Silva— de un nuevo proyecto sindicalista en el que se materialicen valores de unidad, autonomía y democracia.[42]

—En Ecuador, la principal expresión del actual movimiento sindical está representada en el FUT (Frente Unitario de Trabajadores) cuya primera acción importante data de 1975, año de una huelga general que tuvo carácter eminentemente político, de apoyo a la política reformista del gobierno de Rodríguez Lara. En 1977 se celebró otra huelga que respondió a la política de austeridad del régimen autoritario instalado desde 1976, lo que generó una feroz represión contra las organizaciones laborales y populares en general. Posteriormente se produjo un reflujo de las luchas populares que mantuvo la desmovilización popular hasta 1981. Desde la reinstauración del régimen democrático, desde agosto de 1979 hasta finales de 1980, la movilización popular fue mínima.

En esta etapa, las movilizaciones fueron, por ejemplo, la marcha del FUT a la Cámara Nacional de Representantes donde se denunció la política gubernamental en lo que se refiere al endeudamiento externo, al congelamiento de salarios, al aumento de precios, etcétera.[43]

Vemos entonces que el movimiento sindical ecuatoriano tuvo claros avances y retrocesos en relación con los cambios políticos de la sociedad global. Después de su reflujo en 1983 y su opacamiento durante el último proceso electoral, las dos huelgas nacionales en los primeros cinco meses del actual gobierno de Febres Cordero expresan una revitalización del movimiento sindical. En resumen, según los autores, las reivindicaciones del FUT apuntan a una comprensión de la crisis como fenómeno internacional, intentando encarnar lo nacional ante un gobierno calificado como "títere" del imperialismo.

Otro polo de referencia para el discurso del movimiento sindical lo constituye "lo democrático".[44] La postura mayoritaria considera que este tipo de régimen ofrece mejores condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones laborales. Desde esta perspectiva se valora la reinstauración de un régimen democrático. El FUT disputó primero lo popular, luego lo nacional y finalmente lo democrático, visualizando como adversarios al mismo gobierno y al FMI.

En relación con otros movimientos sociales, el FUT puede ser acusado de "obrerista"; aún tiene una visión etnocentrista y quiere supeditar los antagonismos étnicos a los de clase (la condición de indígena se subordina a la de campesino). Los sectores de pobladores fueron los grandes protagonistas en las dos últimas huelgas, a pesar de lo cual el sindicalismo no logra percibir que para los sectores populares urbanos,

incluidos los obreros industriales, el referente de comportamiento social es muchas veces la ciudad y no la fábrica. Esto impide una alianza sólida con los sectores de pobladores.[45] Sin embargo, las transformaciones del movimiento obrero ecuatoriano han sido notables en estos últimos años.

—En Argentina, el proceso de democratización social trajo aparejada una profunda demanda de democratización también en el seno del movimiento obrero y de los organismos sindicales.

Junto a las consuetudinarias prácticas simbióticas estatales, sindicales y partidarias dominantes en la Confederación General del Trabajo (CGT) en sus tres vertientes: las 62 organizaciones, el grupo de los 25 y el Grupo de Gestión y Trabajo, ligadas al Partido Justicialista y a orientaciones verticalistas y burocráticas, surgieron obras orientaciones en el mismo peronismo o fuera de él, que ya se habían manifestado en etapas anteriores (CGT de los Argentinos, Cordobazo, etcétera). Estas nuevas tendencias sindicales se conocen como el "sindicalismo de base" y constituyen algo así como un frente antiburocrático.

El sindicalismo de base, aunque dominantemente peronista, hace confluir a numerosos sectores de diferentes tendencias ideológicas y políticas, en tanto los sindicalistas ortodoxos se "disputan una herencia común".[46]

No obstante el control, la CGT sigue en manos del "sindicalismo peronista"; la crisis del partido justicialista y del movimiento peronista deja un espacio al cuestionamiento de lo que antes fuera un organismo corporativo monolítico, ligado al Estado o al Partido Justicialista, de manera heterónoma.

Por otra parte, el sindicalismo de base es más permeable a la relación con otros sectores de la sociedad civil, como por ejemplo los organismos de derechos humanos. Sus consignas pueden expresarse como: "independencia del gobierno, de los partidos y de los patrones, una CGT no partidista, pluralismo en el seno del movimiento obrero".[47]

En resumen, el movimiento obrero en Argentina ha salido del período de la dictadura militar con cierta recomposición de sus orientaciones, antes más homogéneas y monolíticas, pero también más burocráticas y heterónomas. La crisis del peronismo tradicional parece dar lugar a la emergencia de otros sectores combativos y politizados que, primero por la fuerza del movimiento peronista y su vertiente sindical, y luego por la represión de la dictadura militar, no habían tenido oportunidad de ensayar un sistema alternativo de alianzas y opciones frente a la conducción cerrada de la CGT.

A pesar de que el gobierno radical intentó desde el Estado una "democratización sindical de 'arriba hacia abajo' " con el objeto de relativizar la monolítica oposición de los sindicatos peronistas y abrir el juego, la demanda de democratización no es heterónoma al movimiento sindical, sino que es hondamente sentida por él en esta etapa.

Actualmente, el juego de relaciones de fuerzas dentro del movimiento obrero está precondicionado por la crisis económica, las políticas del Estado, las pugnas en el interior del peronismo y, muy especialmente, por la capacidad del llamado sindicalismo de base para impulsar una participación interna —sobre todo en los sindicatos tradicionalmente más fuertes—, negociar y movilizar demandas obreras exitosas en el marco de la legitimidad democrática, y proponer orientaciones más totalizadoras al conjunto del movimiento.[48]

No obstante, las prácticas y protestas sindicales impulsadas por la CGT constituyen la principal fuerza de convocatoria de la clase obrera argentina, que no necesariamente se identificará con las tácticas e intereses del oficialismo justicialista.

—En Paraguay, en parte debido a condiciones estructurales por las que este país no ha desarrollado una industria que propicie una clase obrera en condiciones de movilizarse, y en parte a causa de la presión desmovilizadora de la dictadura militar, actualmente no es posible hablar de movimiento obrero en sentido estricto.

Los diversos organismos "sindicales" son en realidad órganos subsidiarios del partido en el poder, que representan más bien una parodia de central sindical, alimentada por vínculos clientelistas y por "lealtades verticales al partido y al caudillo, en lugar de identificaciones horizontales, de clase, y al actor colectivo, el sindicato".[49]

En especial la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) está controlada por la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido gobernante, el IADSL, escuela sindical ligada a una central norteamericana y la Juventud Obrera Católica (JOC) que se han opuesto al sindicalismo clasista con una prédica ideológica explícitamente anticomunista.

Por su parte, es de notar la ausencia de líneas progresistas en el movimiento obrero, ya que el Partido Comunista centra sus tareas en el sector campesino y es destruido sistemáticamente por la represión.[50]

No obstante, es posible detectar dentro del marco de escasísima movilidad política y sindical, flujos y reflujos en la movilización sindical:

—una etapa de flujo, iniciada a comienzos de la década pasada y que culmina en setiembre de 1982 con la victoriosa huelga de Coca Cola; esta etapa de flujo corresponde a un período de crecimiento económico acelerado del Paraguay, a causa de la represa de Itaipú y la demanda internacional de granos, acompañados por la reducción del desempleo, el desarrollo capitalista de la agricultura y una mayor urbanización. A esta etapa corresponden los intentos más importantes de creación de un movimiento sindical autónomo y se producen protestas espontáneas;

—una etapa de reflujo (1982-84), caracterizada por recesión, inmovilismo político y retroceso en el movimiento sindical. El autor mencionado atribuye la desmovilización al grave desempleo y a la represión patronal y policial que "no permiten la sindicalización".[51]

Dentro del bloque político dominante no se dan conflictos de significación. "La crisis paraguaya es una recesión económica, no una crisis política".[52]

El movimiento laboral está latente en los sindicatos independientes de la CPT y en las bases de muchos gremios. Las orientaciones predominantes del movimiento laboral son: la clasista y la nacionalista. El nacionalismo es manipulado ideológicamente por el partido gobernante. Aparentemente, las consignas más movilizadoras deben combinar orientaciones clasistas y orientaciones nacionalistas, como en el caso de la huelga de Coca Cola contra una empresa multinacional.

En resumen, el aparente éxito en la consecución de un bloque dominante sin fisuras y la generación de diferentes tipos de hegemonía ideológica por parte del partido dictatorial gobernante, inmovilizan y desmovilizan al actor obrero en Paraguay mediante diversas fórmulas: represión, hegemonía ideológica, penetración cultural, desocupación y recesión. No obstante, hay elementos potenciales a los que la clase obrera aún no ha recurrido, como alianzas con otros sectores sociales: los campesinos y la izquierda. En el caso paraguayo, es potencialmente posible una relación más estrecha con los partidos políticos, a fin de generar alianzas capaces de ofrecer alternativas al régimen en una posible coyuntura futura de "sucesión", coyuntura que tal vez presentará una fisura al bloque dominante. Estas alianzas podrían orientarse hacia lo clasista y hacia lo nacional, teniendo en cuenta la tradición ideológica de la cultura política paraguaya.

—En el Perú, a pesar del acelerado proceso de desindustrialización y de deterioro de los salarios, sumado a la desocupación, el movimiento obrero no ha logrado organizarse en esta etapa para luchar por sus reivindicaciones. Esto resulta aun más sorprendente cuando se considera que en la década pasada, en el tramo final del gobierno militar, el nivel de acción fue tal que los paros nacionales obligaron a buscar una salida por la vía electoral. En la década pasada y durante el gobierno militar de Velasco, el movimiento obrero logró grandes niveles de organizaciones y movilización con la participación de los partidos de izquierda. El gobierno de Velasco ofreció estabilidad laboral, participación en la gestión, propiedad y utilidades en las empresas estatales, pero todo ello no impidió que se agudizaran las movilizaciones. El movimiento sindical logró, además, un importante nivel de acción conjunta, y en 1977 y 1978 se hicieron dos paros nacionales que congregaron masivamente a los trabajadores, aun a los no organizados.

Después de convocar a las movilizaciones populares que dieron fin al gobierno militar, las organizaciones sindicales sufrieron duros golpes: tras el paro nacional de 1977 fueron despedidos unos 5 mil dirigentes, las remuneraciones siguieron cayendo y se observó una tendencia a la inflexibilidad frente a las demandas obreras del nuevo gobierno. Esto debilitó

mucho a las organizaciones sindicales entre 1977 y 1979. Se introdujo el miedo y perdieron la confianza los trabajadores en sus posibilidades de acción organizada.[53]

El gobierno de Belaúnde aplicó políticas altamente recesivas como parte de los requisitos del programa del Banco Central de Reserva para reducir la inflación, en coordinación con el FMI. Para ello, el gobierno aplicó aumentos por debajo de lo ofrecido por las empresas en su trato directo con el sindicalismo. Esta política estatal hizo muy difíciles las presiones de los obreros al empresariado.[54]

En la coyuntura democrática, el desafío para los sindicatos era ya no la protesta antigubernamental, sino la ampliación de una legalidad conquistada por el mismo movimiento sindical en su lucha contra la dictadura.

Se observa una atomización del sindicalismo, en la forma de división entre los sindicatos fuertes y los pequeños, en función de su capacidad desigual para presionar y obtener reivindicaciones. Por su parte, quedan fuera de toda capacidad de presión y organización los desocupados o aquellos trabajadores temporarios que no están sindicalizados y que son la gran mayoría de los trabajadores despedidos.[55]

Los partidos políticos han fomentado una concepción de la política como protesta, plasmada en los paros nacionales en los que el movimiento obrero no consigue nada. El papel de los partidos, que intentan capitalizar políticamente al sindicalismo y a sus acciones radicalizadas, contribuye aun más a la falta de integración de los sindicatos.

La crisis no ha servido para alcanzar una mayor integración, sino para desmoralizar al obrero y diluir la identificación de clase, propiciando la búsqueda de salidas individuales. Esto se refuerza por la informalización de la clase obrera y el cuentapropismo. Se evidencia en la indiferencia por el sindicato, la baja asistencia a las asambleas, la falta de pago de las cuotas sindicales, el desinterés por ocupar cargos sindicales, etcétera.[56]

La huelga, principal arma de lucha sindical, no tiene ninguna eficacia ante una amenaza de cierre o de baja productiva. El número de huelgas ha descendido sensiblemente en los últimos dos años.

No obstante, y en contraposición con este panorama sindical deprimido, hubo acciones espontáneas aunque esporádicas de las bases, como tomas de fábricas ante intentos de reducción del personal. Pero la acción sindical "dentro de la fábrica" tiene límites muy estrechos. Hay luchas aisladas pero no existe convergencia en las orientaciones ni en los tiempos; es notable la falta de unidad del movimiento obrero.

En resumen, el movimiento obrero peruano, que conoció en la etapa política anterior momentos de gran movilización y notable unidad de acción, hasta el punto de ser el principal actor social que desencadenó, mediante su acción combativa y contestataria, la ruptura del régimen militar, en esta etapa democrática está desmovilizado y su tendencia actual muestra una clara atomización y dispersión.

El conjunto de la historia del movimiento obrero peruano nos hace pensar que más bien está atravesando por una "impasse" histórico que tenderá a disolverse para dejar resurgir las tradicionales tendencias del movimiento sindical, pero seguramente reformuladas, rescatando la experiencia del régimen de Velasco, y tal vez pergeñando estrategias políticas de mayor extensión a nivel nacional que las planteadas hasta ahora, ya que es evidente que los niveles de movilización alcanzados no tardaron en diluirse en sistemas de gobierno no propicios a ellos, a pesar de tratarse de una "democracia".

Esto deberá dejar como saldo de experiencia histórico que no hay simplismos adecuados en política: no todo régimen democrático es necesariamente más propicio al movimiento obrero y los logros obtenidos a través de la lucha no tardan en perderse cuando se deja de luchar para sostenerlos y ampliarlos más allá de la mera "protesta antigubernamental" ensayada hasta ahora.

—En Venezuela, la carencia de una adecuada representación autónoma de los intereses del sector obrero se evidencia por la existencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), central sindical que es un instrumento político-organizativo bajo el control de la Acción Democrática y que a pesar de la existencia de otras tres centrales sindicales y de algunos sindicatos independientes, es cuantitativamente la principal organización obrera del país.

Se trata de una estructura burocrática y se la considera como "pieza institucional esencial del sistema político conocido como la Venezuela democrática".[57] En efecto, luego de la derrota de la dictadura perezjimenista y cuando la izquierda prioriza la lucha armada (1958), la dirigencia sindical de la Acción Democrática, con el respaldo del gobierno, derrota a la izquierda (PC de Venezuela y MIR) dejando el campo libre para una completa hegemonía de la Acción Democrática sobre el movimiento sindical organizado.

Los conflictos obreros más importantes que se desarrollaron en el período de la Venezuela democrática se produjeron principalmente como parte de un enfrentamiento a la burocracia sindical ceterista (huelga de obreros de Sidor, 1971, y paros de obreros textiles, más de 25.000 trabajadores de todo el país, en 1980).

La crisis actual es la más profunda que experimentó el país desde el inicio de la explotación petrolera y data de los primeros años de la década del ochenta.

La crisis se caracteriza por el aumento del desempleo y el subempleo, el crecimiento del sector informal urbano y la agudización de la pobreza crítica.

La crisis se atribuye a las concepciones económicas neoliberales

monetaristas y al reinado de los organismos financieros internacionales, que llevan a renegociaciones leoninas de la deuda pública externa, y a exigencias y presiones de las instituciones financieras internacionales con respecto a las políticas salariales y económicas.

El gobierno consiguió una especie de equilibrio entre represión y hegemonía, sumado a prácticas clientelistas y al fomento de la corrupción sindical mediante la cual ha logrado la desmovilización y el quietismo de los intereses de clase de los trabajadores.

En resumen, desde 1958 Venezuela vive una especie de exitoso pacto social en el que se ha logrado un equilibrio del bloque de poder gobernante. En este contexto, y alimentada por el auge petrolero, la corrupción y las prácticas hegemónicas exitosas, la clase obrera no ha logrado darse formas de organización y lucha alternativas al organismo que les fuera impuesto desde el gobierno como presunta central representativa: la CTV. En el contexto de la crisis en que se encuentra el país a raíz de su dependencia de organismos internacionales, se intenta afinar aun más los argumentos de "solidaridad nacional" dirigidos a la clase trabajadora con el objeto de "superar la crisis", obviamente a fin de deshacer los efectos movilizadores y revulsivos del deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana en la coyuntura de crisis. No obstante, con la nueva fase económica parecen comenzar a expresarse alteraciones en el régimen político dominante y una pérdida de legitimidad debido a la impotencia del Estado para continuar otorgando concesiones que mantengan controlada a la organización sindical. Esta coyuntura puede presentar un frente vulnerable del sistema, para la acción futura del movimiento obrero.

—La acción obrera en Colombia puede analizarse en el contexto de un largo proceso político de democracia restringida, y un modelo económico industrial y agroexportador que excluye fuertemente la ampliación de espacios de participación social y concertación política, procesos ambos que en alguna medida entran en crisis a causa de la disminución de la actividad productiva agropecuaria, la relativa desindustrialización y la deuda externa, pero también por los conflictos y demandas por parte de una serie de actores sociales como el campesinado, los paros cívicos, las demandas urbanas y la misma guerrilla.

En el pasado, el sindicalismo colombiano fue parte del pacto social iniciado en 1957 y debido a esta aceptación se desarrolló un movimiento obrero hiperinstitucionalizado, fuertemente captado por el Estado a través de un complejo sistema de clientelismo y prebendalismo socioeconómico. Así, el Frente Nacional le otorgó al sindicalismo obrero la representación popular; sin embargo, esta relación consistente fue perdiendo fuerza y se empiezan a visualizar importantes distancias y cuestionamientos latentes desde las bases a las direcciones sindicales.[58]

Tal vez se esté desarrollando un tipo de organización obrera más

comunitaria, más relacionada con el lugar de vivienda que con el espacio de la fábrica, organización que daría lugar a la discusión y búsqueda de alternativas para una revitalización del movimiento obrero colombiano, fenómeno también reclamado por otras fuerzas sociales como las de pobladores urbanos, asalariados de pequeñas empresas y campesinos.

En síntesis, el panorama del movimiento sindical mencionado en estas páginas muestra de alguna manera un comportamiento obrero bastante diverso, cuyas orientaciones dependen de las condiciones sociales de trabajo y de la situación política nacional. En este sentido, regionalmente no existe una clase obrera homogénea; incluso en todos los casos específicos se perciben fácilmente fuertes diferencias y oposiciones entre orientaciones e intereses sociales de diferentes líneas políticas, oposiciones entre direcciones y bases, oposiciones y ambivalencias en el interior de un mismo sindicato, etcétera.

En este sentido, en la mayoría de los casos las prácticas obreras son principalmente defensivas del puesto de trabajo, de los salarios y los beneficios sociales. Los efectos del estancamiento industrial o los procesos de desindustrialización parecen condicionar estos comportamientos y, posiblemente, con excepción relativa de la COB boliviana y de la CUT brasilera, el movimiento obrero sudamericano pierde aparentemente centralidad en la política y en la economía latinoamericanas, impugnando más a los gobiernos y a los ministerios de trabajo que al capital, sea éste nacional o internacional; la dirección industrial de la sociedad no está en cuestión para los obreros.

Sin embargo, en estos espacios también es posible visualizar demandas de autonomía estatal, de independencia política partidaria y de democratización interna que probablemente reconecten al movimiento obrero, de manera muy distinta a la del pasado, con el sistema real de oposiciones capitalistas que empieza a vivir la región.

B. Calidad de la vida, consumo colectivo y descentralización

Uno de los rasgos básicos del proceso de urbanización en la región es la creciente inconsistencia entre las demandas de consumo colectivo y calidad de la vida en general, versus las débiles posibilidades de satisfacerlas por parte del Estado o del capital.[59]

La presente crisis agudizó esta tendencia, pues los impactos sobre la industria y sobre el Estado provocaron una disminución significativa de los procesos de reproducción social en general. Así, el Estado disminuyó sus presupuestos orientados a satisfacer las necesidades de consumo colectivo para racionalizar sus políticas internas y atender a las negociaciones con el FMI. Por otra parte, la desindustrialización, el despido de trabajadores, la nueva inseguridad del empleo, la disminución de salarios y

de beneficios sociales coadyuvan a un panorama caótico del mundo urbano.

Dentro de este marco se desarrollan en todas las ciudades de la región economías informales y estrategias de resistencia a la crisis que contemplan, desde formas familiares de acción, hasta organizaciones comunitarias, protestas y rebeliones urbanas; las ciudades se convierten en frágiles refugios de los pobres y de los sectores medios para enfrentar de múltiples maneras —cogestionariamente algunas veces, anómica y desesperadamente otras—, las carencias sufridas.[60]

Estas características suscitan un alto grado de homogeneidad regional en lo que hace a la emergencia de luchas y movimientos sociales urbanos que se instituyen en el centro de la protesta y de la acción política urbana.

Así, al tiempo que emerge una serie de luchas y demandas por el consumo colectivo y la tierra urbana, se desarrollan organizaciones comunitarias que, tratando de superar el cooperativismo paraestatal y dependiente del poder de turno, demandan medidas de descentralización estatal y democratización local y en algunos casos, además, juegan un papel vital en las oposiciones a dictaduras y políticas autoritarias vividas, llegando a constituirse en verdaderos epicentros de la lucha popular.

A grandes rasgos, al lado de las prácticas urbanas tradicionales, e incluso en ellas mismas, se han desarrollado recientemente cuatro formas de acción colectiva.

La primera, de fortalecimiento de unidades productivas o reproductivas de pequeña escala: talleres artesanales, pequeños comercios, unidades o asociaciones de consumo, pequeñas unidades productivas diversificadas en espacios urbanos y/o rurales, etcétera, que de alguna manera buscan ideologías y formas de organización autogestionarias.

La segunda implica el desarrollo de distintas organizaciones sociales urbanas, juntas de vecinos, comités de abastecimiento, centros cívicos, etcétera, que generan demandas de descentralización barrial de las políticas y acciones municipales, y que, en alguna medida, sustentan reclamos de ejercicio del derecho ciudadano. Asimismo, en varias regiones y en distintos países comenzaron a compaginarse, desde el ámbito urbano, luchas por la descentralización del Estado en términos de obtención de mayores recursos económicos y políticos. En gran medida, los habitantes urbanos se han vuelto buscadores de un nuevo orden democrático en la "pequeña política".

La tercera consiste en demandas de renovación urbana, que implican tanto transformaciones en las relaciones socio-culturales, como impugnaciones al orden espacial y ecológico de nuestras ciudades; en esta orientación se destacan los movimientos tendientes a mejorar el cuadro de vida protagonizados fundamentalmente por sectores medios.

Una cuarta acción colectiva se refiere a las luchas urbanas que se

convierten en espacios de comunicación plurisocial y cutural entre diferentes grupos humanos, rompiendo la inmersión urbana del pasado; así se escuchan demandas de alianzas de clases, solidaridad nacional y cultural, en un pequeño ambiente de resistencia callejera donde conviven grupos sociales étnicos, etarios, etcétera.

Probablemente, la crisis productiva, la contracción del mercado de trabajo y en muchos casos los regímenes coactivos han incidido en el fortalecimiento de este tipo de acciones colectivas que en lo cotidiano se expresan en la calle, el barrio o la barricada de la esquina, y que permiten espacios de protesta más amplios y menos controlados que las fábricas. Además, la crisis genera para grandes sectores populares la pérdida de un ámbito de trabajo y de relación que altera también la posibilidad de protesta. La calle se vuelve para los desocupados, los marginados de la producción y para todo el mundo urbano sumergido el único espacio posible de encuentro, resistencia e identidad.[61]

El campo de conflicto de las organizaciones urbanas en Buenos Aires se caracterizó a la vez por una búsqueda de un espacio de reconocimiento democrático y de satisfacción de demandas colectivas, referidas a la calidad de la vida, la tierra urbana, la vivienda y la ciudadanía.

Son tres las tendencias que pueden registrarse en la Argentina en relación con los movimientos vecinales. Uno, más tradicional y con antigua raigambre está constituido por el "fomentismo";[62] tiene una vieja trayectoria institucional y de relación con el Estado. Mantuvo estilos organizativos durante décadas, pero en la coyuntura de la etapa democrática actual se plantea el desafío de superar el modelo tradicional y de redefinir sus objetivos a fin de concebir de manera más amplia la lucha por la calidad de vida.

Otro, aparentemente coyuntural, que emergió del seno de la última etapa del régimen militar después de la guerra de Malvinas, fueron los "vecinazos",[63] bajo la forma de acciones espontáneas en las que la población se autoorganizó para protestar contra los abusos impositivos del régimen, el agio, los negociados y la malversación de los fondos públicos invocando a la Constitución, y que presenta la situación como un estado de atropello a los principios de la ciudadanía. El movimiento vecinal se enfrentó activamente al poder municipal y amenazó con extender su acción contra el gobierno provincial, pero su actuación pública fue efímera.

Por último, los "asentamientos", como el de San Francisco Solano[64] fueron formas espontáneas y organizadas de responder activamente al problema de la carencia de viviendas para amplios sectores de la población, optando por recuperar tierras fiscales en desuso. Esta última forma obtuvo del gobierno constitucional la legitimación de sus demandas mediante la promulgación de leyes que les otorgaban la posesión legal de los terrenos y establecían formas adecuadas de pago. El triunfo obte-

nido abre una nueva historia en lo referente a los movimientos urbanos, ya que sienta precedentes en la posibilidad de que "la democracia sea capaz de asumir, incluso de institucionalizar las formas de organización autogestionarias que los sectores populares se fueron dando para reclamar por sus derechos en un contexto autoritario". [65]

En conclusión, por una parte todas las formas de acción comunal emprendidas por las poblaciones tuvieron un grado de eficacia que dependió, en gran medida, de la coyuntura en la que emprendieron las acciones y de la forma en que supieron presionar para negociar sus reivindicaciones. Es sintomático que los asentamientos, que en definitiva fueron la acción más exitosa, hayan tenido su última etapa de negociación en el contexto preelectoral del radicalismo y que la promulgación de las leyes que los beneficiaron fuese uno de los primeros actos de gobierno que la administración hizo públicos.

Por otra parte, es posible que estas formas de organización vecinal evolucionen hacia formas participativas más amplias de poder local y de demandas de consumo colectivo.

—En Brasil y más específicamente en Río de Janeiro y San Pablo, a partir de mediados de la década del '70, coincidiendo con la crisis de legitimidad del régimen, los movimientos sociales urbanos se multiplicaron. A partir de 1980, con la agudización de la crisis económica y de desempleo, el marco de referencia de los movimientos sufrió significativas transformaciones. Las movilizaciones se concentran alrededor de las cuestiones del desempleo y la vivienda, además de las habituales demandas por mejorías en las condiciones de vida. [66]

Movimientos de desocupados, de moradores, de mutuarios, de usuarios de transportes colectivos se caracterizan por una dinámica concentrada en la demanda por derechos de ciudadanía vinculados a la dimensión de lo cotidiano y de lo local. [67]

Actualmente, la liberalización política del régimen posibilitó un mayor grado de asociativismo de los movimientos ciudadanos —primero de aquellos sectores más excluidos y, recientemente, de la clase media—, que representan una forma de cuestionar el excesivo centalismo del Estado.

En todas estas demandas está en juego el tema de la dignidad pública de los marginados de la producción y del consumo. Se trata de la lucha por una cualidad nueva de la ciudadanía.[68]

El campo del conflicto es un espacio nuevo, en el que la ciudadanía exige directamente, sin mediaciones, que el Estado dé cabida a la participación de los sectores marginados en la gestión de la cosa pública, desde la interpelación al Estado en la forma de diálogo con los gobiernos municipales, hasta las acciones directas de masas.

En otras vertientes, los movimientos de "favelados" [69] han sido instrumentos de organización para la autodefensa de la población favelada. Tienden a agruparse en Federaciones de Favelas por Estados, y muchas veces están sujetos a las prácticas clientelistas de los partidos de turno (Brizolismo, Chaguismo). Por su parte, la Iglesia emitió varias "pastorales de favelas" en la década del '70, a través de las comunidades de base. Estas evolucionaron hacia opciones partidarias como el Partido de los Trabajadores (PT). También los partidos de izquierda actuantes en el PMDB ejercieron cierto control de las Asociaciones. La inmediatez de las demandas y urgencias de la población favelada hace que puedan caer bajo proteccionismos paternalistas partidarios. Asimismo, la heterogeneidad de la población favelada dificulta la creación de formas orgánicas de resistencia que vayan más allá de lo reivindicativo. [70]

—En Montevideo, los movimientos de pobladores de Uruguay se inscriben en la crisis económica que genera desocupación, caída del salario, etcétera, de los últimos doce años de proceso dictatorial. En este contexto de pauperización de los sectores populares, temas como la salud, la alimentación y la vivienda se vieron extremadamente agudizados en sus carencias. Ante esta situación, diversas iniciativas populares intentaron paliativos, dándose diversas formas de organización y cooperación. [71]

Los Servicios de Salud Populares Privados (SSPP) que se dieron formas de agrupación entre los años 1982 y 1983, y que generaron un encuentro en 1984, en su discurso explícito van mucho más allá de medidas paliativas. Lograron generar una conciencia política en el sentido de que el Estado no se hacía cargo —ni había perspectivas de que lo hiciera— de la situación de la población. Se expresaba claramente la voluntad de un "cambio hacia un modelo de sociedad donde se haga efectivo el derecho a la salud como derecho humano fundamental." [72]

Por su parte, los Clubes de Compra, las ollas populares, etcétera, se dieron formas de coordinación interbarrial creando Mesas Coordinadoras que intentaron afianzar el espacio social conquistado por separado por los Clubes y las ollas.

El Movimiento Pro-Vida Decorosa (MOVIDE), a través de la Comisión pro-viviendas decorosas, reuniendo comisiones de cantegriles o barrios humildes, reclamaron lo que prometía la Constitución uruguaya de 1967 (que el Estado colabore para que cada integrante de la sociedad tenga una vivienda decorosa). Según su declaración: "no se pide algo nuevo". [73]

Aparentemente mediante estas instancias de autoorganización popular, se ha pasado de enfoques reivindicativos o reformistas a otros más amplios. En sus declaraciones acerca de los políticos sostienen que "los políticos nos utilizaron y nos engañaron siempre". Una vez más, a partir de la experiencia de autoorganización y lucha, el actor popular descubre su soledad y la necesidad de autosuficiencia, al menos en una primera instancia de lucha. Dos rasgos son comunes a estas formas de movilización:

la exigencia de acción eficaz por parte del Estado y el deseo de preservar la independencia del movimiento frente a posibles cooptaciones. Sin embargo, es notable la participación de sectores cercanos a los actores populares, como en el caso de los Servicios de Salud y de ciertas capas de la Iglesia Católica. Por otra parte, es de notar la ausencia de la izquierda, por su alejamiento o inadecuación a las problemáticas reivindicativas y de supervivencia de los actores populares, que tiende a priorizar su relación con el movimiento sindical y estudiantil. [74]

—En el caso de Chile, [75] el análisis de los movimientos de pobladores debe verse como el resultado de un brutal proceso de descomposición, fragmentación y polarización social de la sociedad chilena y, a la vez, como un cuestionamiento del sistema autoritario por parte de los pobladores, y de una afirmación de su identidad social.

Los procesos sociales anteriormente citados generaron en el mundo de los pobladores el desarrollo de una serie de estrategias de subsistencia de orden colectivo (como las ollas comunes, las economías familiares diversificadas) e individual (como aquéllas que involucraron una serie de comportamientos anómicos). Este tipo de situaciones implicó una serie de demandas reivindicativas, sobre todo de tierra urbana y tomas de terreno, así como de mejoramiento de las condiciones de existencia.

El conjunto de esas demandas y de esas necesidades estuvo asociado con la emergencia de protestas colectivas masivas en Santiago, que desde la acción rebelde cuestionaron el poder despótico del Estado, y que de manera más espontánea que orgánica lograron una convocatoria propia frente a la sociedad chilena que los lleva a constituirse en protagonistas sociales, aunque probablemente exista una oposición entre su fuerte capacidad movilizadora y la elaboración de propuestas políticas totalizadoras.

El conjunto de estos nuevos comportamientos urbanos tal vez pueda explicarse porque gran parte de las demandas de las ciudades chilenas y latinoamericanas pasaron de la órbita de la producción y del trabajo a la órbita de la reproducción y el nivel de vida. Incluso es posible pensar que las limitaciones orgánicas de la acción obrera fortalecen, en el campo y en el espacio de la residencia, las acciones colectivas urbanas. Es decir, que es posible afirmar que existe cierto grado de simbiosis en la capacidad de convocatoria de la clase obrera y su movimiento sindical en determinados momentos de crisis y protesta social, que cobran vida y fuerza por la incorporación masiva de los pobladores urbanos que desde los barrios, las calles y las esquinas cuestionan la legalidad vigente. Y viceversa, los pobladores necesitan de la centralidad y de la tradición obrero-sindical para llevar adelante sus movilizaciones. [76]

—La peruana Teresa Tover [77] diferencia las actitudes de los pobladores en etapas de crisis económica y política (años 1976-1979) en que

los pobladores se movilizan en la esfera de la producción por pedidos de mejoras salariales, y etapas en que la crisis es solamente económica y generadora de fuerte recesión, pero no política, como la etapa '80-84, en la que, debido a la recesión, los actores populares intentan estrategias de supervivencia, defensa del empleo, etcétera, y donde lo particular y sectorial avanzan sobre lo colectivo.

Recientemente, los pobladores se movilizan por motivos muy diferentes: el Programa del Vaso de Leche, el plan de Emergencia del Agua, el apoyo para comedores populares, la visita del Papa en 1983, etcétera. Las reivindicaciones se encuadran en tres aspectos: a) nivel de vida, b) ordenamiento capitalista de la ciudad, c) democracia y cultura (voto, participación, organización, etcétera). [78]

Las formas de movilización también cambiaron: de marchas y protestas callejeras se pasó a Cabildos Abiertos y Asambleas populares. Se trata de un nuevo horizonte donde el movimiento de pobladores tiene que llegar a sintetizar distintos componentes económicos, estructurales, sociales y culturales de la identidad de "vecino", a fin de lograr presencia y legitimidad en el panorama político. En la coyuntura actual, después de intensos años de crisis política, parece diluirse la capacidad de protagonismo popular, y es justamente ahora cuando el movimiento popular debe formular alternativas frente a la crisis, en relación con otras fuerzas que aparecen: APRA, Izquierda Unida, Sendero Luminoso, etcétera.

—En Quito, [79] en los últimos quince años, hubo importantes cambios en la organización de los moradores de barrios populares. Se expresan en el explosivo incremento organizativo (multiplicación) de todo tipo de asociaciones creadas por los vecinos (comités pro-mejoras, grupos juveniles, asociaciones femeninas, comunidades cristianas, federaciones de barrios populares, cooperativas de viviendas, etcétera).

Hay tres aspectos en los que se expresan tendencias renovadoras en los barrios y en todas estas organizaciones:

1) organicidad de las asociaciones,
2) ampliación y diversificación de las reivindicaciones,
3) tendencia a la unidad mediante agrupaciones de tipo barrial popular. [80]

Estas transformaciones se enmarcan en el proceso de modernización capitalista experimentado por la sociedad ecuatoriana, que se tradujo en la urbanización de la economía y de la población.

Las nuevas tendencias surgidas en los barrios populares son fruto, en buena parte, de la crisis de la economía nacional, cuyos primeros efectos surgieron hacia fines de la década de 1970. Son una manera de enfrentar la crisis, para lo cual el ámbito de la organización se extiende de la calle al hogar y del barrio a la ciudad.

Otro elemento importante en estas tendencias renovadoras es la democracia entendida como posibilidad organizativa: 1) en cuanto al reconocimiento de la legitimidad social de la población, y 2) en cuanto a la posibilidad de independencia frente al Estado y a los partidos políticos de las clases dominantes. [81]

La organización vecinal suele generar una suerte de dependencia frente al Estado, frente a las instituciones de gobierno y frente a los intermediarios visibles, los partidos, etcétera, sobre la base de relaciones "clientelares". Pero últimamente se agudizó la contradicción entre estas tendencias tradicionales, clientelistas, de la organización barrial, y las tendencias renovadoras.

—En Bolivia, la organización territorial tiene hondos antecedentes en las culturas andinas. No son novedosas en la sociedad boliviana las formas de lucha urbanas y regionales. Pero, en los últimos años, formas organizativas como los Comités Cívicos lograron construir y controlar espacios políticos e ideológicos con gran poder de convocatoria y de legitimación. [82]

En muchos casos, el llamado regionalismo respondió a objetivos particularistas y a prácticas de sectores dominantes. No obstante, grupos integrantes del campo popular sentaron su presencia en las luchas regionales y en los Comités, con relativo éxito. [83]

Por su parte, las Juntas Vecinales, antiguas formas organizativas, protagonizaron en las últimas décadas acciones colectivas frente al proceso de urbanización boliviano, aglutinando a habitantes de barrios o de zonas urbanas con el objeto de luchar por su hábitat.

Durante los años del autoritarismo ganaron campos de acción y de representatividad y partiparon en la demanda de democratización social, de lucha contra la dictadura y el centralismo estatal. Su relativo aislamiento de otras formas de organización social, bajo la forma de prejuicios desde la izquierda o desde las organizaciones sindicales, los han enfrentado a veces a situaciones en las que se los polarizaba desde afuera con otras formas de movilización popular.

Ello no quita el gran potencial transformador de las organizaciones territoriales que se proponen, en definitiva, la reforma del Estado, la construcción de una nueva institucionalidad y el reconocimiento de una sociedad en toda su heterogeneidad, contribuyendo así a crear una posibilidad para solucionar la crisis de representatividad del Estado boliviano. [84]

No obstante, cabe destacar que no hay conciencia acerca de las posibles orientaciones y cierta dependencia del Estado que, tomado como adversario en las luchas, no llega a constituirse en un verdadero antagonista, subyaciendo una concepción del Estado como "protector". Se trata más bien de luchas dirigidas *hacia* el Estado que *contra* el Estado. [85]

De la cronología de eventos registrados desde 1982 se desprende

la vigorosa capacidad y vocación de lucha de estas asociaciones territoriales, tal vez con ritmos y frecuencia más sostenidos que en la mayoría de las sociedades de América del Sur. [86]

—En Colombia, los paros cívicos son formas de protesta cívica originados en reivindicaciones comunes a diversos sectores sociales; por lo tanto, son policlasistas. Generalmente se relacionan con el consumo masivo o con el desarrollo regional. Implican la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una localidad o región, como forma de presión sobre las autoridades que pueden dar satisfacción a las demandas.

A partir de 1957 la modalidad del Paro Cívico comienza a constituir una forma frecuente de la lucha reivindicativa. Entre agosto de 1982 y agosto de 1984 (los dos primeros años de gobierno de Betancur) se realizaron 58 paros cívicos. [87]

Más que movimientos sociales, los autores colombianos señalan que se trata de "luchas sociales" centradas en problemas relativos al equipamiento urbano: ampliación de servicios de acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, vías, transporte, educación y salud, reducción del alza desmedida de las tarifas de los servicios, distribución más equitativa del presupuesto nacional o regional.

Estas reivindicaciones quedan enmarcadas dentro de una problemática sectorial que no toca los fundamentos de la sociedad vigente. Sin embargo, de una manera indirecta pesan sobre el papel del Estado develando la contradicción por la cual el Estado trata de asegurar, por una parte, la rentabilidad del capital, y, por otra, un equipamiento urbano no rentable, pero necesario para la legitimación social del Estado mismo.

Además, cuando estas reivindicaciones locales pasan a ser formuladas por movimientos cívicos coordinados, se generan reivindicaciones más radicales que ya apuntan a la racionalidad económica del sistema vigente: estatización del transporte público, municipalización de la tierra urbana y creación de bancos de tierras en las principales ciudades del país, con la participación de organizaciones autogestionarias de vivienda popular, legalización de asentamientos populares, nacionalizaciones de fábricas, nacionalización del sector financiero, etcétera. [88] Otras son de importancia para el diseño de una sociedad alternativa: control popular de determinados servicios, fiscalización del Estado y control de sus mecanismos de administración.

Hay dos tendencias en los tipos de actores involucrados: en las grandes ciudades, donde las relaciones de clase prevalecen sobre los vínculos familiares, vecinales o semifeudales, la población participante tiende a pertenecer a las franjas más oprimidas de la sociedad. [89]

Cuando se trata de movimientos más estables y bien organizados, no tan espontáneos, la convocatoria incluye a otras capas sociales. Pero, en general, este tipo de movimientos se caracteriza por su poli-

clasismo. El adversario, el blanco de la protesta cívica es el Estado, en cuanto administrador y garante del equipamiento colectivo.

Por último, cabe señalar que estas formas de organización y de movilización son generadoras de conciencia y posibilitan experiencias colectivas que tienden a evolucionar. Son un tipo de lucha social que no puede caracterizarse como un verdadero movimiento social, pero que contiene sus posibles gérmenes.

Tal vez convenga aquí mencionar a los movimientos regionales que presentan algunas características similares en Perú, Ecuador y Bolivia; [90] en dichos países las diferencias y conflictos regionales del pasado en cierto modo se reconstituyeron en función de demandas puntuales y de impugnaciones al centralismo estatal, haciéndose eco de viejos valores regionalistas.

En Ecuador, como señala Pachano, [91] los procesos de reestructuración regional implicaron procesos de diferenciación social que mostraron conflictos en el interior de la región. Más que movimientos auténticamente regionales —no obstante la reestructuración de procesos económicos en varias subregiones (Esmeralda, el Triunfo, etcétera)— se expresaron en demandas contra el Estado central; estas demandas también implicaban un reclamo de incorporación al sistema político.

En Perú la situación parece más compleja, pues las luchas y demandas regionales tuvieron una experiencia más reciente en el norte y especialmente en el sur del país; se realizaron paros y demandas (por el costo de vida, electricidad, irrigaciones, etcétera) que planteaban, además, orientaciones de transformación de las relaciones de poder. Recientemente fue clave el papel de los municipios provinciales que, con características pluriclasistas y culturales, protestaron por injusticias regionales. Como señala Narda Henríguez, [92] las demandas regionales son heterogéneas, pero el opositor —el Estado— es homogéneo.

—En el caso de Bolivia, los procesos cívicos tendrían las mismas características de demandas regionales puntuales, pero, a diferencia de las tendencias señaladas hasta ahora, sobresale la presencia de un auténtico movimiento social regional: el cruceño. Este, a través de grupos dirigentes locales, logró cierta hegemonía regional y mediante variadas formas de lucha busca el poder del Estado y la dirección de la sociedad nacional. El trabajo de G. Flores analiza con precisión las características de este movimiento. [93]

Como sea, en el conjunto de estos países andinos parecería que tanto las demandas puntuales como las orientaciones descentralizadoras globales de las sociedades locales se relacionan con los procesos de constitución nacional en cada país; así, el problema de la formación nacional sigue siendo uno de los problemas clave en estas sociedades.

—En Venezuela, los movimientos sociales de "cuadro de vida" engloban al movimiento vecinal y al movimiento ecologista. En el marco

de una sociedad desproductiva que vive de la renta petrolera, modelo actualmente en crisis, surgen fenómenos como el desempleo, la delincuencia, el desabastecimiento, el alto costo de vida, etcétera, y junto a estos fenómenos negativos surgen también nuevas formas de lo político que defienden los espacios vitales amenazados por el espacio económico. El movimiento vecinal orientado a la obtención de reivindicaciones, como los servicios públicos, la tierra, el agua, etcétera, se ha combinado y potenciado en su relación con el movimiento ecologista en la lucha contra el urbanismo salvaje por mejores niveles de calidad de vida, por una ciudad diferente.

Más allá de las reivindicaciones puntuales, estos movimientos emprendieron una acción con sentido más global, como la impugnación —desde la ecología— al paradigma del progreso indefinido, el cuestionamiento a la centralización estatal, las demandas de democratización de la sociedad civil y del Estado. La descentralización es fuertemente apoyada también por el movimiento regionalista. No obstante, la reforma del Estado se plantea de arriba abajo y se genera contradicción entre la deseada y propuesta reforma política de democratización estatal; por otro lado, se reactiva un aparato industrial por y para un Estado centralista. [94]

Una amplísima gama de propuestas que van desde la autoproducción y el cooperativismo de la salud, el consumo, la autoconstrucción, la agricultura orgánica, etcétera, y tendencias como el cooperativismo, el movimiento vecinal y el movimiento ecologista se combinan y apoyan mutuamente, enriqueciéndose. [95]

Cabe destacar que estas iniciativas empiezan donde los problemas de empleo, salario, alimentación, salud o servicios públicos no son tan graves, tal vez porque en situaciones críticas, planteos como el ecologista no son todavía muy potables. No obstante, en la "ciudad de los campesinos" las propuestas de autonomía no parecen demasiado extrañas, cuando el movimiento campesino tiende a sustraerse lo más posible de la economía de mercado. [96]

En este contexto, los partidos parecen estar en crisis y permanecer ajenos a todas estas cuestiones. Por su lado, el movimiento teme perderse dentro de una estructura partidaria. El autor del trabajo sobre los movimientos de cuadro de vida en Venezuela sugiere que estos movimientos, que coinciden en numerosos temas, tienden a la unidad, y que la ecología está llamada a establecer la síntesis.

—En Asunción, los dos estudios de casos acerca del movimiento de pobladores en Paraguay pertenecen sintomáticamente al período de auge de la economía paraguaya, 1972-1981, década en la que variados fac tores de tipo económico (Itaipú, ingresos de importantes masas de capital extranjero, colocación favorable en el mercado internacional de su producción agrícola, etcétera) produjaron un giro en las condiciones

económicas y sociales que generaron un desarrollo y una urbanización, mayor y radicalmente diferente del que tuvo lugar en el período de lento crecimiento precedente.[97]

Uno de los casos, la ocupación del barrio de Nuestra Señora de la Asunción, se extendió como conflicto desde 1975 hasta 1983, período excepcionalmente prolongado, y fue coronado por el éxito de los actores populares al lograrse la legalización de la propiedad de los terrenos ocupados, donde actualmente viven alrededor de 1500 familias. [98]

El caso Hidrosil, más breve en el tiempo (marzo a julio de 1979), puede caracterizarse como una lucha social alrededor de la protesta por los desmedidos costos de la obra de alcantarillado llevada a cabo por la empresa ganadora de la licitación. En este último caso fracasaron las tentativas por vía legal de los actores populares, pero finalmente se retiró la obra de manos de la empresa, aunque la suspensión de las obras, en definitiva, perjudicó a la población involucrada. [99]

Ambos conflictos coinciden en una serie de factores que es válido enumerar: 1) la heterogeneidad de los actores populares involucrados, 2) el liderazgo de los "ex-combatientes de la guerra del Chaco", 3) la participación favorable y decisiva de la Iglesia Católica como mediadora, 4) la recurrencia en algún momento al recurso jurídico legal, 5) la soledad de los pobladores en esta instancia de lucha y su falta de relaciones con otras fuerzas sociales y 6) el aparente "apoliticismo" de las demandas, expresado en el discurso de los pobladores. [100]

En una sociedad desmovilizada a la fuerza como la paraguaya estas luchas adquieren una relevancia especial, ya que sientan precedentes de experiencia de lucha, organización, solidaridad, triunfo y fracaso, que a pesar de un contexto represivo y desmovilizador como el actual, se han inscrito en la memoria colectiva. De los rasgos comunes de estas luchas podemos deducir que para los actores populares en Paraguay en esta etapa de aislamiento de otras fuerzas sociales, resulta indispensable la recurrencia a instancias legitimadoras como la Iglesia Católica y las asociaciones de ex-combatientes, que no pueden ser tachadas fácilmente de subversivas del orden existente. A la vez, quedó clara la voluntad de los sectores populares de mantenerse al margen e independientes de las instituciones políticas oficialistas (como el partido en el poder) y la inoperancia de las instituciones judiciales como mediadoras del conflicto.

Para el actor popular resultó evidente la corrupción, la arbitrariedad y los intentos de capitalización de todos los estratos e instancias relacionados con el orden político imperante, así como las tradicionales relaciones de patronazgo de los caudillos (el abogado defensor del caso Hidrosil utilizó el prestigio ganado para liderar una nueva corriente en el Partido Colorado). Por el contrario, resaltó la importancia de la consecuencia en la unidad y la lucha en el campo popular. [101]

En síntesis, es fácil constatar la proliferación de cientos de conflictos urbanos que recorren América del Sur, conflictos que desde luego tienen diferente intensidad según las situaciones nacionales, pero que expresan en lo fundamental nuevas formas de acción y organización social urbanas. Correlativamente a estas múltiples y espasmódicas protestas callejeras, en el interior de las organizaciones y de los movimientos sociales, no sin conflicto, se producen cambios cotidianos en torno de la solución comunitaria de sus problemas específicos, recreando experiencias del pasado —muchas de ellas campesinas.

Así, protesta hacia afuera y solidaridad hacia adentro se constituyen en espacios de resistencia fragmentados pero comunes en las ciudades sudamericanas. Resistencias que, además, en ámbitos restringidos, permiten el encuentro y la comunicación de diversos y heterogéneos grupos humanos afectados por la crisis.

C. Tierra, mercado, etcnicidad y Estado [102]

Los campos de conflicto del campesinado son relativamente heterogéneos y están directamente relacionados con la profundidad y extensión de la Reforma Agraria aplicada en cada uno de los países estudiados.

Ciertamente influyen también otros factores, como los antecedentes históricos de organización y lucha, el carácter del sistema político y los procesos de diferenciación campesina, el nivel de desarrollo del mercado y el grado de penetración del capital en las agriculturas sudamericanas. [103]

En este marco, sólo el Estado y sus políticas agrarias constituyen los parámetros comunes de la acción campesina, el resto de las acciones es múltiple y dispersa; así, pues, varias prácticas se centran sobre el problema de la tierra o la explotación mercantil a la que están sometidos los mismos campesinos.

Sin embargo, a pesar de los diferentes campos y acciones, parecen ser comunes las orientaciones más o menos consistentes de demandas de organización autónoma y democratización nacional. Un hecho que resalta en la región es la reemergencia de movimientos campesinos con contenidos étnico-culturales que cuestionan no sólo las relaciones de explotación a las cuales están sometidos, sino también los procesos de degradación cultural y discriminación racial. De alguna manera, es factible pensar que tres tipos de orientaciones y combinaciones están presentes, real o potencialmente en la acción campesina: una orientación de reivindicación y organización clasista, otra de liberación y autonomía nacional y una última de autonomía cultural. [104]

—El movimiento campesino boliviano tiene su expresión orgánica en la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos en Bolivia (CSUTCB). Esta fue el resultado de un largo proceso de luchas de-

mocráticas, de recuperación de identidades autóctonas y de constitución de formas organizativas autónomas, que lleva a cabo, desde fines de la década de los '60, sobre todo un grupo de aymaras denominados kataristas.

Esta larga lucha significó, como señala Rivera, "la incorporación y superación del horizonte histórico de 1952".[105] Las acciones llevadas a cabo en estos 20 años incluían oposiciones contra los comerciantes intermediarios y el Estado, y sobre todo contra una estructura sindical campesina paraestatal, subordinada a los regímenes militares de turno. Es así como, con el correr del tiempo, la Confederación logró articular en sus acciones orientaciones de democratización, de liberación nacional y de autoafirmación étnico-cultural, acciones que además incluyen un sistema de comunicación y lucha con la clase obrera y otros grupos sociales y políticos, y que culminó con la incorporación de la Confederación a la Central Obrera Boliviana (COB).

Ahora bien, si es cierto que no se puede comprender la actual democracia boliviana sin tener en cuenta la participación campesina y las metas de poder político a las que apuntaba, no es menos cierto que el mismo proceso democrático iniciado hace tres años desarrolló y generó nuevas oposiciones y conflictos entre el Estado y el movimiento, así como dentro del movimiento mismo. Estos conflictos le impiden convertirse, conjuntamente con otras fuerzas populares, en una alternativa de poder nacional. [106]

Dos fases permitirán entender la aseveración anterior. Primero, la de la crisis económica y su correlato político en la sociedad boliviana que, en relación con el campesinado, significó no sólo el deterioro de su nivel de vida sino una serie de conflictos con el Estado y los partidos gobernantes que limitaron su desarrollo. El campesinado articuló sus acciones en torno de demandas participativas en las más variadas esferas de las actividades económicas, políticas y culturales, demandas que culminaron en agosto de 1983 con la proposición del cogobierno COB-CSUTCB y UDP. Estas reivindicaciones fueron rechazadas, manipuladas o no procesadas por el Estado, que a su vez vivía una aguda crisis de gobernabilidad. Esta primera fase se caracterizó por la debilidad o ausencia de espacios de concertación social entre la sociedad y el Estado.

En una segunda fase, a raíz de la pérdida global del proyecto integrativo, comenzarán a generarse una serie de conflictos y oposiciones en la misma Confederación, sobre todo por conflictos entre un ala "clasista" (movimiento de campesinos de base) y otra "culturalista", los kataristas. También se desarrollará una serie de demandas fraccionadas y sectoriales de los campesinos por todo el país, que junto con otros conflictos —analizados por Rivera [107]— debilitaron y aislaron la acción de la Confederación.

La crisis política de la sociedad boliviana parecería responder a la debilidad y limitación de las actuales formas de representación estatal, partidaria y sindical; cada una de ellas posee rasgos monádicos y excluyentes, donde la articulación intrasocietal no será viable si no se promueve un cambio cualitativo en la interacción en y entre los actores del mismo movimiento campesino.

—En la actualidad, la agricultura colombiana vive una dura crisis en razón del receso de la actividad industrial y una disminución de los precios internacionales de los productos agrícolas de exportación, llegando incluso a tener que importar alimentos y materias primas para el mercado interno.[108]

Por otra parte, el grueso de la producción alimentaria colombiana se mantiene gracias a la pequeña y mediana producción agrícola. Este último sector es el más empobrecido y afectado por la crisis de la sociedad; apenas controla el 12 % de la tierra disponible y concentra un 83 % de las exportaciones.[109]

Esta situación provocó una serie de movilizaciones por tomas de tierra a lo largo y ancho de toda Colombia para influenciar al Estado hacia una modificación del sistema de tenencia y de la Reforma Agraria.

Sin embargo, estas acciones y demandas campesinas se encuentran dispersas y atomizadas y no alcanzan a expresar un movimiento campesino nacional y unificado, fenómeno probablemente condicionado por el fracaso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUNC) en la década pasada y la política clientelista y coactiva del Estado.[110]

Tres son los procesos de organización campesina que parecen destacarse: por una parte, la del campesinado pobre (asalariados, pequeños y medianos propietarios) que a través de una serie de acciones espontáneas, dispersas y aisladas llevaron a cabo tomas de tierras en terrenos baldíos y en las de propietarios ausentistas, cuestionando el orden legislativo vigente. Probablemente, como afirma Isauro Suárez, en estos grupos "se retoman los más claros gérmenes de reorganización campesina autónoma frente al Estado y los partidos tradicionales".[111]

Por otra parte, el proletariado rural, en razón de la disminución de los salarios, la calidad de vida y el desempleo, intenta fuertemente el acceso a la tierra; sin embargo, estas demandas no coinciden con su capacidad organizativa, fenómeno probablemente relacionado con el fracaso de las experiencias de la década pasada y también con el status social disperso del sector, ya que un grupo puede ser asalariado, otro a medias, con fuerte relación con la producción parcelaria, y un tercero, temporalmente ligado a las empresas agrícolas.[112]

Finalmente, el movimiento campesino indígena arrastra consistente y coherentemente una serie de luchas por la recuperación de sus tierras que fueron punitivamente apropiadas por terratenientes. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), iniciado en 1971, es la organización de

este grupo, que orienta sus acciones en torno de demandas clasistas y étnico-culturales, mediante una estructura democrática cohesionada.[113]

En términos de futuro es probable que las orientaciones para transferir la tenencia de la tierra persistan e incluso pasen a organizar un proceso creciente de unificación del campesinado colombiano, en la medida en que se consoliden las organizaciones locales, interactúen regional y nacionalmente, y, concomitantemente, se produzca una ampliación del sistema político colombiano en su conjunto.

—La historia del campesinado en Chile siguió un proceso de diferenciación orientado a su constitución como actor social, privilegiando la lucha por "el reconocimiento social" por parte de la sociedad y del Estado.

La Reforma Agraria constituye el hito fundamental de su reconocimiento como sujeto social y político, aunque su accionar está mediatizado fundamentalmente por los partidos políticos; situación que, por cierto, es revertida por el gobierno militar de 1973 que enfrenta al movimiento campesino a una nueva encrucijada.

Haciendo una retrospectiva del movimiento campesino podemos ver la fuerte influencia que tuvo la estructuración económica de la agricultura y su inserción en una clase económicamente poderosa a nivel nacional. También ha sido fundamental el origen y la composición del campesinado, que desde sus inicios amalgamó una rica experiencia sindical y política. Esta progresiva proletarización excluyó siempre al movimiento mapuche, que resume reivindicaciones étnicas y nacionales que van más allá del campesinado. Las demandas que inicialmente fueron reivindicativas tradicionales, cambiaron esencialmente luego de la Reforma Agraria asumiendo un carácter revolucionario en la medida en que se exigía la expropiación y tenencia de la tierra.

El nuevo régimen militar provocó una situación de quiebra en este devenir político del movimiento campesino. Junto al fuerte cambio en las relaciones económicas derivadas de los productos de la tierra, se produjo en lo político una brutal represión y una vuelta atrás de la reforma agraria (devolviendo la tierra a sus antiguos dueños o a nuevos propietarios ligados a los intereses del gobierno). Se minimizaron drásticamente las organizaciones campesinas; los trabajadores rurales y los campesinos se vieron empujados a una situación de subproletarización y cesantía donde algunas acciones del gobierno, como el empleo mínimo, constituyeron el único sostén económico posible, generando cambios en la organización interna de los trabajadores del agro. Como consecuencia de este excesivo empobrecimiento surgieron algunas iniciativas de organización y agrupamiento basadas principalmente en las necesidades de subsistencia de estos sectores marginados, limitándose a conservar un carácter estrictamente regional y de supervivencia y donde la posibilidad de empleo permanente constituye la reivindicación central.[114]

De todas formas, en este desolado panorama habría que destacar el hecho de que las Confederaciones Campesinas hayan logrado sobrevivir y tengan presencia en varias regiones del país. También consiguieron articularse con otros movimientos sociales. Otro hecho notable es la cada vez más importante significación que empezaron a tener las mujeres y los jóvenes en este tipo de movimientos, situación que proviene aparentemente de su inserción en el empleo mínimo y su derivación de manejo económico dentro de una familia en extremo pauperizada.[115]

La Reforma Agraria aún existe como reivindicación futura, obedeciendo más a principios de dignidad que a posibilidades de acción política inmediata.

—La crisis económica del Paraguay, que no tiene correlato con el sistema político dictatorial, afectó a la producción agropecuaria e incidió en el desempleo; este último fue particularmente acelerado por la desocupación de mano de obra que suscitó la terminación de la represa de Itaipú.

Este proyecto absorbió mano de obra rural, sobre todo de campesinos pobres de la pequeña producción agrícola que luego se vieron sin empleo, proceso que precondicionó la emergencia de tomas de tierras en áreas de colonización en Alto Paraná y Canindeyú, emergiendo así un movimiento campesino que se enfrentó al Estado y a empresas agrícolas transnacionales propietarias de las tierras, que en la mayoría de los casos eran de "engorde". Así, entre 1983 y setiembre de 1984 se produjeron 47 ocupaciones por parte de 8.568 familias. Lo nuevo de estas movilizaciones, al decir de Fogel,[116] estuvo dado por su intensidad, su carácter masivo y la creciente violencia implicada.

El Estado legitimó su represión, afirmando que los campesinos eran rebeldes empujados por la subversión comunista internacional, mientras que los campesinos legitimaban su acción a través de normas de la Constitución y de la reforma agraria paraguaya (la tierra es para quien la trabaja), reivindicándose a sí mismos como paraguayos pobres con derecho a la tierra. Así, la identidad campesina incluyó una identidad nacional sobre la base de la oposición frente al capital extranjero —sobre todo brasileño—; es decir, que se trata de una afirmación nacional desde el campesinado, referida a la apropiación extranjera de la tierra.[117]

En este sentido, no es aventurado afirmar que este tipo de acciones tal vez embrionarias en la sociedad paraguaya, cuestionan el orden social y las condiciones de dominación y dependencia. Sin embargo, una vez realizadas las tomas, la organización disminuye y no alcanza a concretarse, como en el caso de las ligas agrarias, en organismos de autogestión campesina. Probablemente esto esté determinado por la represión política y la prohibición explícita por parte del gobierno de la existencia de organizaciones sindicales; empero, en la medida en que el sistema polí-

tico se vaya abriendo por éste y otros tipos de conflicto, es probable que se dé una recuperación de estas experiencias colectivas.

—Una de las características básicas de la crisis de la economía uruguaya radica en el largo estancamiento productivo del sector agropecuario, principalmente el ganadero, que es quien crea por excelencia los excedentes de la economía nacional; en este sentido, Piñeiro deduce que "es lógica entonces la explicación de que los conflictos sociales se desatan con mayor intensidad cuando los distintos sectores deben luchar por un comercio que no crece."[118]

Como quiera que sea, dado que la ganadería es la actividad económica más importante del país, su análisis y alternativas de transformación atañen al conjunto de la sociedad uruguaya, sobre todo en términos de modificar la forma de producción estanciera.

Tres son los componentes más importantes que configuran las relaciones sociales en la agricultura: los mismos estancieros, con una lógica de reproducir las relaciones tradicionales, los asalariados agrícolas, que no tienen ninguna organización, y los agricultores familiares; estos últimos en un embrionario proceso de organización y acción colectiva, sobre todo en el período autoritario, que potencialmente los puede convertir en un sujeto de cambio social.

La posibilidad de que estos grupos se constituyan en un movimiento social está condicionada por su unidad de acción, pues son muchas y dispersas las organizaciones de pequeños y medianos productores rurales; recién en 1984, en medio del proceso de negociación para la transición a la democracia, comenzóia gestarse un movimiento unitario.[119]

Debido a la demanda de la multipartidaria que convocó a campesinos y a otras fuerzas sociales del país para proponer y discutir la concertación futura en el Uruguay, la Federación Rural y la Asociación Rural elaboraron documentos que evidenciaban su clásica posición liberal, posición que fue fuerte y rápidamente rechazada por la Asociación de Colonos del Uruguay y la Intergremial Lechera que convocaron al conjunto de los gremios de pequeños y medianos productores a partir de una política social más amplia de fuerte contenido democrático.[120]

Y si el conflicto estalló, no obstante, pasado algún tiempo, estas posiciones confrontadas se superaron temporalmente por el peso de la concertación política nacional, activada principalmente por la acción de los partidos políticos. En todo caso, es probable que el conflicto persista, se manifieste de múltiples maneras y potencie el desarrollo del movimiento.

La problemática de la discriminación étnico-cultural y las luchas y los movimientos relacionados con ella aparecen a menudo ligados a los temas y luchas del campesinado. Aunque son múltiples sus puntos de contacto, sobre todo cuando se trata de países cuya principal forma de producción y fuente de ingresos es agrícola y cuya población es fundamentalmente campesina y descendiente de grupos étnicos nativos, estas dos orientaciones no llegan a confundirse. Conviene complementar este panorama introduciendo algunos casos y aspectos de la problemática étnico-cultural en función de las respuestas colectivas de los grupos discriminados.

De los trabajos de los tres países que han estudiado específicamente movimientos étnicos en este programa[121] (Ecuador, Chile y Brasil) surgen a la vez rasgos comunes y peculiaridades distintivas en las modalidades de sus luchas, reivindicaciones y estrategias, y en las características de sus escenarios.

En efecto, en dos de ellos (Ecuador y Chile) se trata de contextos fundamentalmente rurales y las luchas étnicas; sobre todo en Ecuador, aparecen íntimamente ligadas a la problemática campesina, si bien el movimiento étnico no se confunde, sino que se yuxtapone y se combina con el movimiento campesino.[122]

En Chile, aunque los medios de vida de la comunidad india provienen fundamentelmente de sus actividades agrícolas, no se puede decir que movimiento étnico y movimiento campesino se homologuen, ya que la importancia numérica de los grupos étnicos dentro del campesinado no es tan relevante como en Ecuador, Bolivia o Perú, sino que forman más bien un "pueblo minoritario en el interior de la nación chilena".[123] Por otra parte, la campesinización de la comunidad india fue reciente y prácticamente forzada. "...La compulsión legal a 'reducirse' a espacios físicos concretos y delimitados de terreno, que se inició el siglo pasado en Chile, obligó al mapuche a transformarse en agricultor. A partir de la 'pacificación' de la Araucanía, al mapuche se le campesiniza a la fuerza, siendo así hoy día principalmente un campesino, un productor agrícola directo...".[124]

Para el mapuche, la tierra no ha sido tradicionalmente un bien de cambio, sino un bien de uso, ya que en épocas anteriores a la colonización no existía la propiedad individual de la tierra; el trabajo se encaraba más bien como un trabajo comunitario, donde instituciones de colaboración mutua (mingaco, keluwn, vuelta de mano, etcétera) eran las formas habituales de la organización del trabajo.

En Brasil, en cambio,[125] el movimiento negro, que data de la década del treinta, fue eminentemente urbano. Con etapas de auge y de reflujo, tuvo en un principio (1931-1945) una estrategia integracionista que apuntaba a ganar para la población negra urbana un lugar en la sociedad, sin cuestionarla. En tiempos del populismo, hubo lugar para la utopía de la democracia racial y recién en la década del setenta, una vez muerto el sueño del "milagro brasilero" y sus posibilidades de movilidad social para los negros, el movimiento negro comenzó a cuestionar a la sociedad global y a sus paradigmas de desarrollo; empezó a cobrar cuerpo una ideología más radicalizada, influida en parte por el movimiento negro

norteamericano.[126] La población negra, predominantemente urbana, comparte y se entremezcla con la cultura ciudadana, haciendo sus propios aportes: música, religión, ritos, danza, etcétera y se manifiesta en gran número de expresiones como: terreiros de candomblé (religiosas), clubes de negros (recreativas), Grupo de Danza Afro (artísticas), centros de investigación y políticas (como el MNU), acciones de movilización política, de protesta, acciones de masa, etcétera. Dentro del movimiento existe cierto policlasismo que va desde la clase baja hasta la clase media alta, intelectuales, etcétera, cosa que difícilmente ocurre en las comunidades étnicas indias en Ecuador, Chile, y otros países.

No obstante las evidentes diferencias, hay elementos en común que asemejan a los diferentes movimientos étnicos estudiados. Su interlocutor es siempre el Estado, y su problemática intenta ser definida por los actores como una *problemática nacional*, de integración e interés nacionales. En efecto, en sus etapas "nacionalistas" o "populistas", los diferentes movimientos étnicos sudamericanos han vivido la promesa de la democracia participativa, de la inclusión de su comunidad racial en el nivel nacional, de plena e igualitaria participación con inclusión expresa de sus problemáticas sectoriales en los temas nacionales. Pero en casi todos los casos esta promesa no se cumplió.

En lugar de la deseada integración hubo asimilación y las consignas y plataformas se usaron como formas de captación masiva de votos en etapas preelectorales, o para obtener consenso político. Más que intentos serios de modificar tendencias racistas y marginadoras seculares hubo formas de instrumentalización de la voluntad de los movimientos étnicos.

Los diferentes movimientos étnicos sudamericanos se caracterizan también por una pendularidad en sus estrategias que van desde el abroquelamiento y sectarismo defensivo, cerrado a los posibles pactos y acuerdos con otros actores populares, hasta una politización radicalizada que a menudo se basa en consignas heterónomas al movimiento mismo. Los movimientos indios, ligados al campesinado, tienden a radicalizarse acompañando al movimiento campesino. El movimiento negro ha tomado consignas de los movimientos negros de otros países (por ejemplo EE.UU.) y su intelectualidad de izquierda manifiesta cierto teleologismo o finalismo que coloca en la cúspide la utopía de un movimiento negro politizado, radicalizado y clasista, que tenga una expresión político-partidaria monolítica. No obstante, entre ambos polos surgieron intentos de pactos y acuerdos con otros sectores, como en Ecuador, con organizaciones sindicales, y en Brasil, con los partidos políticos.

Como ya señalamos, existe una tensión entre autodefinirse como movimiento de clase o bien como movimiento étnico cultural, que es común a todos los movimientos étnicos examinados. En Chile, por ejemplo, la organización AD-MAPU se expide en noviembre de 1982 por una forma de organización escindida y diferenciada del resto del campesinado (no mapuche), y al año siguiente, luego de un cambio de directorio la Asamblea Nacional del organismo, declara que "...nuestra lucha está directamente ligada a los intereses de los trabajadores y de la inmensa mayoría del pueblo chileno en general..."[127]

En cuanto a la crisis, ésta ha profundizado la atomización de los diferentes movimientos étnicos al generar demandas cada vez más heterogéneas.

La historia de la lucha de los movimientos étnicos registra en todos los casos una discusión a nivel de la legislación nacional de temas como la propiedad de la tierra, la preservación de la comunidad, y de sus formas y estilos tradicionales de producción y organización, de su acceso pleno a los derechos de ciudadanía, etcétera. Vale decir que el Estado ha sido el adversario e interlocutor por excelencia, y que la lucha se dio en un terreno político y cultural, el de los mecanismos ideológicos discriminatorios de la cultura dominante, que se traducen muchas veces en leyes velada o abiertamente marginadoras.

El intento de los movimientos étnicos apunta a mostrar y a difundir ideológicamente que la cuestión étnica no es una problemática "de minoría", sino que ésta es constitutiva de la nacionalidad y de la ciudadanía mismas. Es una problemática nacional que debe plantearse en el campo de toda la sociedad nacional.

Retomando algunos aspectos generales de la temática analizada en este capítulo, podemos señalar, por una parte, que la tierra, el mercado y la organización campesina constituyen las demandas mínimas del mundo agrario. Pero también emergen intereses y orientaciones del campesinado que apuntan a incidir en espacios nacionales y políticos más amplios, conjugando a la vez orientaciones clasistas, nacionales y culturales. Dos hechos coexisten en la región: la presencia de fuertes y organizadas confederaciones nacionales de campesinos con características autónomas pero capaces de establecer compromisos con otras fuerzas sociales, compromisos a veces lábiles e insuficientes para constituir proyectos nacionales compartidos; por otra parte, organizaciones sociales campesinas atomizadas en sindicatos locales que aún persiguen de alguna manera procesos de unidad nacional. Un hecho que se destaca en la última década es la presencia en varios países de la región de organizaciones campesinas que van más allá de sus demandas clasistas y que a un mismo tiempo se estructuran en el rechazo a prácticas discriminatorias raciales, revalorizando a través de su memoria histórica prácticas vernaculares, para finalmente tratar de proyectarse como fuerzas culturales alternativas en las sociedades capitalistas criollo-mestizas.

Por otra parte, se destacan en las prácticas analizadas las demandas étnico-culturales, por una incorporación ciudadana y nacional a par-

tir del reconocimiento de la identidad de los grupos discriminados; no obstante, esta observación quedaría inconclusa si no se señalara que varios de los movimientos estudiados en este texto incluyen tensiones y demandas internas de carácter étnico-cultural que probablemente constituyan elementos explicativos e importantes de la acción colectiva analizada, elementos que hasta el momento han sido poco estudiados.

D. La libertad, el género y la cultura [128]

Los movimientos de derechos humanos apelan, como principio aglutinador de su práctica política, a un sistema de valores fundamentales: la vida, la verdad, la justicia, planteando exigencias éticas de fundamentos humanitarios.[129] En principio, en etapas de dictadura y de autoritarismo de Estado han sido intentos defensivos ante situaciones de agresión a los derechos humanos elementales.

Aunque su lógica es defensiva, su potencialidad reside en la capacidad de desnudar, desde una ética fundamentalista, la lógica de la dominación. Así, a partir de una estrategia defensiva se va estructurando lentamente en la sociedad un consenso social sumamente amplio y capaz de convocar a sectores muy amplios y heterogéneos que cuestiona y descalifica la legalidad de la dominación dictatorial. Pero se trata en principio de prácticas *expresivas*, no instrumentales, que necesitan mantenerse equidistantes de todas las mediaciones políticas partidarias para poder seguir generando un amplio consenso.[130]

Esta representatividad responde en parte a la existencia de un "vacío político" que frente a la desmovilización popular genera una utopía profundamente movilizadora y con un fuerte potencial democratizador. En efecto, en buena parte de la región los movimientos de derechos humanos fueron (y son, en Chile y Paraguay) la brecha por la cual comenzó a renacer el movimiento popular, recuperando la *memoria histórica de las luchas populares*, en la medida en que frente a un discurso dictatorial aniquilador de lo político supieron generar una revalorización de aquellos valores de lucha que suele enarbolar la juventud: el proyecto de liberación y transformación social que los padres y familiares de los presos, perseguidos y desaparecidos asumen, en buena medida, sin declinar en ningún momento.[131]

Los derechos humanos surgen junto con una revalorización de la democracia como construcción, no ya como algo dado y preexistente. Todos aquellos valores que eran obvios y que conformaban algo así como un conjunto mínimo de normas éticas que se daban por sentadas y más allá de las cuales se dirimían las luchas políticas y sociales, tuvieron que ser reconstruidos, replanteados y revalorizados a partir de la experiencia de su violación sistemática por los gobiernos dictatoriales.

Así, aquellos valores (la democracia política, el respeto a las garantías constitucionales, el respeto a la vida humana, etcétera) que en la Argentina de los años '60 carecían por completo de valor como demanda o consigna política para amplios sectores de la población juvenil y politizada, en los '80 fueron los únicos recursos capaces de abrir una brecha en el oscurísimo panorama social y político nacional, capaces de aglutinar a las diferentes capas de la sociedad, más allá de las múltiples identidades políticas.

La problemática de los derechos humanos comienza a sentirse ya no como un drama particular, circunscrito meramente a las familias de los desaparecidos y detenidos, sino que gana legitimidad como problema de la comunidad nacional toda y es allí donde reside su potencialidad como movimiento social.[132]

En contraste con sus comienzos, signados por el aislamiento, la indefensión y la soledad política, los movimientos de Derechos Humanos comenzaron a aglutinar adhesiones de organismos internacionales, de instituciones como la Iglesia Católica y, paulatinamente, de los partidos políticos y los movimientos sociales. Así fue posible generar espacios relativamente protegidos que permitieron una mayor participación y movilización popular capaces de enfrentar a la represión.[133]

Pero, ¿cuáles son los potenciales democratizadores de estos movimientos, y cuál será su papel en la próxima etapa democrática, una vez que el adversario más visible, el Estado autoritario-militar, cedió paso al gobierno democrático?

En esta instancia el movimiento de Derechos Humanos probablemente intentará redefinir sus relaciones con la sociedad civil, el sistema político y el Estado. Tratará de exigir, de esta democracia en construcción, contenidos explícitos mucho más profundos que los que *per se* promete una democracia parlamentaria. Toda esta experiencia popular, todo aquel sufrimiento y martirologio de los actores populares habría servido entonces para profundizar los significados de la democracia y para constituirse en principio unificador y fundador de un nuevo Estado democrático a partir de una revalorización de la democracia, ya no solamente como sistema formal, sino como construcción sustancial, llena de sentido y que necesita de la participación, de la profundización y aun de la defensa permanente de los valores de vida y de paz, frente a las continuas tensiones y luchas a las que está sometida. Se trataría de un retorno y vuelta a partir del origen ético del concepto de democracia, más todos los contenidos rescatados de la memoria histórica popular.

No obstante, los movimientos de derechos humanos dejaron pendiente su formulación positiva, concreta —ya no sólo fundamentalista y ética— de un proyecto político posible.[134]

—La acción colectiva más elevada entre los movimientos de Derechos Humanos y aun del conjunto de movimientos sociales de la Argen-

tina fue el Movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Este movimiento jugó un papel vital en la descomposición del autoritarismo y actualmente juega un rol central en la construcción de los valores de la democracia argentina.

El Movimiento de las Madres, a diferencia del resto de los movimientos sociales, no plantea metas de poder; por el contrario, su fuerza simbólica reside en el cuestionamiento, desde una lógica de fines últimos, a la lógica del poder vigente en el país. Sus fines consisten en lograr el retorno con vida de los hijos desaparecidos, o bien el castigo para los culpables de acuerdo con la ley y la justicia. Esta demanda cuestiona la razón de Estado y en alguna medida la política; respecto de lo primero, por absolutizar una responsabilidad moral, y respecto de lo segundo porque no se cumpliría la exigencia de evaluar la posibilidad de realizar los fines y de ponderar las fuerzas que poseen los intereses en juego.

Como sea, esta impugnación trágica y justa, más allá de su realización, es la que le da cohesión y fuerza moral al movimiento, para juzgar y criticar a la sociedad en su conjunto.[135]

El género [136]

—En la problemática de los movimientos de género en América del Sur, cabe hacer una diferencia entre aquellos movimientos protagonizados principalmente por mujeres, pero que se estructuran alrededor de demandas muy diversas como los derechos humanos, la calidad de vida, el consumo, la vivienda, la salud, etcétera, que podemos llamar movimientos "femeninos", y aquellos otros que levantan consignas que se refieren a la problemática específica de la mujer, que llamaremos "feministas".[137] Esta distinción es analítica, porque frecuentemente ambas dimensiones se complementan y entremezclan dentro de una misma agrupación femenina.

Los primeros parecen ser una extensión activa, parcialmente politizada en el sentido más amplio de lo político, del ámbito de lo doméstico y del papel central que juegan las mujeres en las múltiples actividades reproductivas demandadas para el mantenimiento social. En etapas de cierre de los canales políticos lo social se politiza; las demandas sociales adquieren potencialidades cada vez más cuestionadoras del orden político. Son formas de participación ancladas en los "roles tradicionales" femeninos, pero que al extenderse toman inusitadas connotaciones capaces de cuestionar el orden global. En sus prácticas muestran una capacidad de democracia y participación internas que no son usuales en otras formas de organización política, tales como los partidos, los sindicatos, etcétera. Un pluralismo abierto, un apoliticismo explícito que intenta preservarse de toda heteronomía, son rasgos comunes de estos movimientos femeninos.

En ellos se lucha por derechos relativos a la familia, los niños, los hombres y las mujeres de los sectores populares: derechos al consumo, derechos de ciudadanos, derechos a la salud y a la vivienda. Surgen en gran parte como respuesta a la crisis, al subconsumo, al desempleo, y son protagonizados por mujeres de extracción fundamentalmente popular, aunque muchas veces ostenten un amplio policlasismo.[138]

Las segundas, las luchas femeninas que encaran el problema de la mujer, no responden puntualmente a la crisis sino que pueden rastrearse desde el siglo pasado y principios de éste, desde aquellas primeras sufragistas cuya lucha era obtener para las mujeres una participación plena en los derechos de ciudadanía y que continúan ininterrumpidamente, pero con flujos y reflujos, hasta las actuales organizaciones feministas que reivindican el derecho sobre el mismo cuerpo (anticoncepción, aborto, maternidad voluntaria), la igualdad de oportunidades y de remuneraciones, y que cada vez más hacen de la cultura su campo de lucha privilegiado.

En general, por el nivel de abstracción de sus demandas, éstas no surgen directamente de situaciones puntuales de crisis, sino que son demandas permeadas culturalmente a nivel internacional, demandas que históricamente fluyeron de los países desarrollados a los subdesarrollados y desde las clases altas y medias hacia las clases bajas. Cada vez más, sus reivindicaciones encuentran eco en las mujeres de los sectores populares y muchas veces organizaciones "femeninas" evolucionan hacia reivindicaciones "feministas".

Siendo su campo de batalla principal la cultura y la ideología, los movimientos feministas contienen la potencialidad de cuestionar el orden social de una manera global, orden definido muchas veces por ellas como el binomio modo de producción capitalista/patriarcado, cuyos términos son mutuamente interdependientes y se refuerzan. Por ello, al cuestionar las prácticas y tendencias paternalistas en la sociedad, el feminismo ha encontrado un cuño capaz de profundizar en las fisuras del orden social y político existente.[139]

Los movimientos etarios

Una de las características comunes de varias de las sociedades latinoamericanas es la alta correspondencia entre las relaciones de poder y las estructuras etarias de la población, donde ingentes masas de jóvenes ven limitadas sus posibilidades de acceso al poder y la autoridad, al prestigio, a los beneficios económicos y al reconocimiento societal, en suma, a la participación social. Esta tendencia se ha visto particularmente reforzada bajo regímenes dictatoriales, cuyas políticas no sólo suprimen los derechos ciudadanos de la juventud, sino que han hecho de ésta su víctima privilegiada. Lo joven solamente es valorizado cuando rinde tributo al orden y al poder.[140]

Por otra parte, los comportamientos juveniles se hacen comprensibles en su referencia a las dimensiones simbólicas de la vida social. De alguna manera, la juventud se caracteriza por su tendencia hacia orientaciones fundamentalistas con arreglo a valores, de orden más cultural que económico.

En Chile, por ejemplo [141] el autoritarismo neoliberal ejercido sobre la juventud produjo el efecto contrario: dispersión y no disciplinamiento social. Los jóvenes aparecen fuera de las jerarquías y de los mecanismos institucionales de control social. Exclusión y atomización en el plano de las relaciones sociales (los jóvenes están usualmente fuera de las instituciones sociales y participan dentro de espacios normativamente poco estructurados, de escasa solidaridad y comunicación colectiva), y extrañamiento y desintegración cultural en el nivel de las orientaciones culturales (escasa identificación con las metas culturales del Estado y la sociedad, y poca capacidad de comunicación y creación cultural propia), son características innegables del divorcio existente entre los jóvenes y las instituciones sociales.

De esta manera, el mundo de los jóvenes queda conformado como un espacio de conductas desorganizadas y de crisis de identidad, donde la acción se propone reproducir aquellas conductas que la modernización quiso desterrar: las orientaciones hacia el placer inmediato, el refugio comunitario, la agresión anómica y la reaparición de mitos sacrificiales (el allendismo) como principio de identidad colectiva, en un intento de refutar la lógica del mercado como principio de integración social y de identidad cultural.[142]

—En Uruguay, el autoritarismo militar y la experiencia monetarista crearon, por reacción, las condiciones para un incipiente desarrollo de movimientos sociales, entre ellos el juvenil.[143]

Sin embargo, a diferencia de lo ya mencionado para Chile y de lo que veremos más adelante al tratar a Paraguay y Argentina, se afianzan formas ya probadas de canalización de la oposición juvenil (movimiento estudiantil, sindical y político) en lugar de surgir nuevas propuestas y formas de acción. Sólo el movimiento juvenil cooperativo adquirió alguna gravitación durante la etapa de la dictadura y fue capaz de mantener instancias de encuentro y socialización autónomas.

—En Paraguay, por el contrario, el Movimiento Estudiantil Independiente (MEI) adquiere relevancia política en el sector estudiantil a partir de la constatación de la consolidación de la dictadura de Stroessner, que conlleva correlativamente la disgregación y debilidad progresiva del único partido con suficiente caudal popular como para representar una alternativa. Esta alternativa de lucha contra el sistema totalitario a partir de un movimiento no vinculado a partidos políticos (novedad absoluta para la juventud paraguaya) fue una respuesta a la situación precaria de las principales fuerzas de oposición. Las propuestas del MEI abarcan tanto aspectos de política nacional (lucha contra la injusticia social y económica, exigencia de implementar una política de desarrollo nacional, promoción para la creación de un ordenamiento político participativo, etcétera) como reivindicativa estudiantil y, en ambos casos, ubican al Estado como a su contradictor. Esto le vale ser considerado, por parte del gobierno, como un sector más fuera del control oficial y, consecuentemente, es hostigado en el mismo nivel que los demás movimientos sociales no oficialistas.

Por otra parte y tal como ocurre en Chile y Argentina, los miembros del MEI entienden su organización como un sistema en el que las relaciones afectivas de sus integrantes predominan sobre el régimen de normatización y disciplina.[144]

—Por último, el proyecto político autoritario inaugurado en Argentina en 1976 intentó redefinir la identidad de los actores colectivos tradicionales, imponer la lógica articuladora del mercado y accionar represivamente sobre el estrato juvenil a partir de la estigmatización del "joven sospechoso". En este contexto, amplios sectores de la juventud conformaron como ámbito de sostén de su identidad un movimiento cultural, el "rock nacional", que pasó a convertirse (ante la desaparición del movimiento estudiantil y de las juventudes políticas) en el principal ámbito de constitución del "nosotros".[145] Es en los innumerables recitales masivos de la época donde el movimiento se festeja a sí mismo y corrobora la presencia del actor colectivo cuestionado.

De esta manera, los recitales aparecen como rituales a partir de los cuales se constituye una colectividad y son también ámbito privilegiado de comunicación entre los jóvenes. Más adelante, pasada la etapa inicial, defensiva, el movimiento se convierte en uno de los principales contradictores del Proceso, a través de las letras y temáticas de las canciones, y de la conducta del público en los recitales.

Por lo tanto, se puede sostener que el movimiento de "rock nacional" desempeñó un papel sumamente importante en la socialización y resocialización de amplios sectores de la juventud argentina durante la dictadura militar, restaurando la comunicación e información veraces acerca del país real, rescatando el sentido de la vida de un contexto de terror y consolidando a un actor colectivo como forma de contrarrestar un modelo de vida individualista, contraponiendo la acción solidaria a la primacía del mercado y a un proyecto de transformación global de los actores colectivos, etcétera.

El contenido altamente contestatario de las canciones, la actitud frontalmente cuestionadora de los asistentes y el encuentro en recintos comunes para expresar su oposición al régimen militar fueron algunas de las características que hacen de este movimiento juvenil una de las pocas alternativas contestatarias en un régimen política y socialmente cerrado.[146]

Los movimientos juveniles latinoamericanos con origen en fenómenos estructurales e históricos similares —reflejo de la situación transicional que compete al joven en toda sociedad— tienen, sin embargo, características nacionales bien diferenciadas.

No obstante, expresiones tan disímiles como "Morir, luchando, de hambre ni cagando" (coreada por los jóvenes chilenos más radicalizados y que es un buen símbolo de la dimensión sacrificial del allendismo)[147] y "...el MEI es político pero no partidista ni sectario porque intervendrá en toda política que afecte a la Nación, sin entrometerse en las destructivas rivalidades de partido" (parte de un "ideario" del MEI paraguayo) o "Mi arma es la paz, mi partido es el rock y mi eterno fin es el amor" (escrita por un rockero argentino en su mochila),[148] son ejemplificadoras de movimientos sociales que indudablemente fueron, para amplios sectores juveniles, refugio, ámbito de resistencia y canal de participación en el contexto de una sociedad autoritaria, cerrada y en crisis.

E. La guerra y la política [149]

Los movimientos de acción revolucionaria se caracterizan por su lucha contra el Estado y el sistema de dominación dependiente mediante la acción violenta. Allí, el campo del conflicto coincide con el campo de batalla; esto conlleva complejas connotaciones sociológicas.

Nadie puede negar la presencia de este tipo de acción en la historia de América Latina; sus orientaciones fueron muy variadas: republicanos, nacionalistas, socialistas, anarquistas y bandidismo social; sus formas de lucha han sido, entre otras, montoneras, republiquetas, guerrillas rurales, guerrillas urbanas y guerras de liberación nacional.

El problema consiste en detectar los distintos sentidos sociológicos de esta acción política y su viabilidad societal en los distintos contextos nacionales y regionales, puesto que varias veces lograron transformaciones sociales y otras, las más, la consolidación o reemergencia de sistemas políticos altamente despóticos. Sin embargo, de alguna manera se autodefinen como los sujetos del cambio, que arrastran tras de sí al resto de la sociedad, monopolizando el Estado y la política.[150]

—En el caso de la guerrilla colombiana, ésta puede comprenderse en el marco de cierta tradición política y social de violencia nacional. Como referencia general, se puede apuntar la década que va de 1947 a 1957, que culminó con el pacto entre conservadores y liberales. Más adelante, en los años '60 se instauró la guerrilla inspirada en el modelo foquista cubano, luego de la guerra popular de orientación china y, más recientemente, de la acción guerrillera urbana en el marco de las luchas de liberación nacional. Actualmente, en razón de la llamada tregua o pacificación nacional, este tipo de acción gira en torno de la búsqueda de frentes

populares más amplios, lo que le da especificidad propia a este tipo de movimiento.

Dos hechos condicionaron su orientación: por una parte, la búsqueda del gobierno y el liderato de Betancur, de nuevas formas de unidad y reconciliación nacional, con el fin de relegitimar las instituciones democráticas y de disminuir la polarización cada vez más crítica del conflicto social, por otra, la demanda por parte de la sociedad y de los grupos populares de pacificación y participación en el sistema político. De todas maneras es indudable que el Estado reconoció en la guerrilla un hecho político de singular importancia y, en este sentido, tal vez formalizó el rompimiento del bipartidismo Conservador-Liberal.[151]

La guerrilla buscó legitimar su existencia en el sistema político nacional; probablemente, una de las variantes virtuales que está en juego detrás de este conflicto y de esta tregua sea la entrada o no en la escena política formal de la misma sociedad colombiana.

El movimiento guerrillero se incorporará al sistema político nacional y acompañará un proceso de democratización, con toda la gama de problemas que ello implica, o retornará a la acción violenta. Esto depende lógicamente de varias fuerzas como el Estado, las clases dirigentes y las mismas opciones guerrilleras que hoy debaten estas alternativas; lo contrario será la reemergencia de la violencia y, probablemente, de la llamada "guerra sucia".

—La guerrilla de Sendero Luminoso en el Perú es tal vez uno de los movimientos revolucionarios más complejos en la historia de América Latina, pues guarda relación no sólo con las luchas de liberación nacional, sino muy especialmente con estructuras socio-culturales de origen colonial y, a la vez, es un movimiento cuya voz se expresa única y exclusivamente por la acción violenta; de allí que comprender sus significados y significantes resulta extremadamente difícil. Sin embargo, después de los trabajos de Degregori y Fabré [152] entre otros, y varias conversaciones y discusiones, es posible hipotetizar varios aspectos.

Hay dos lecturas interdependientes de la evolución de Sendero. Primero, la historia particular de un grupo de líderes intelectuales y estudiantiles, sobre todo de provincia, inspirados en el pensamiento maoísta y que después de múltiples fraccionamientos y conflictos culmina en el grupo dirigente de Sendero. Segundo, las características socioculturales e históricas de la formación de la nación peruana, y más particularmente del mundo andino o del Perú profundo, como diría Arguedas.

Este grupo guerrillero tiene como epicentro de actuación a la provincia de Ayacucho, una de las regiones siempre más pobres e históricamente más conflictivas del Perú;[153] pero esto no niega su impacto en varios nichos de pobreza andina a lo largo y a lo ancho del país. Así, Sendero Luminoso se yuxtapone y se hace eco de una serie de demandas regionales, sociales, étnicas y nacionales, iniciando su acción de influen-

cia y reclutamiento, primero en la Universidad, luego entre la Federación de maestros y barrios pobres de Ayacucho, y posteriormente en comunidades campesinas de Puna y Valle. La articulación de éstas y otras áreas de demandas y conflictos es poco conocida, pero progresivamente van marcando un amplio espectro de múltiples oposiciones: contra el mercado y el dinero, contra el Estado y la democracia, contra el imperialismo norteamericano y ruso, contra la izquierda tradicional, contra grupos y personas que detentan los poderes locales o comunitarios, y contra los valores comunitarios tradicionales; en definitiva, contra todo aquello que se les opone o no se les subordina.

Todo esto es expresado a través de un discurso mesiánico, internamente muy cohesionador y externamente absolutista, donde los fines últimos subordinan a los medios que cada vez más se organizarían en torno de acciones punitivas y violentas: de alguna manera, aspiran a capturar al Perú. Obviamente, esta acción en sí no se explicaría si no es en relación con la reacción del Estado y el ejército, es decir, con la lógica de la guerra sucia.[154]

Pero esta lógica donde "nadie y todos son culpables" produce una serie de efectos sociológicamente perversos, ya no sólo en lo relativo a los derechos humanos en sentido extricto, sino a las mismas dinámicas sociales, como, por ejemplo, la revitalización de rivalidades comunales e intracomunitarias, el fraccionamiento y los conflictos familiares, y el retraimiento comunitario frente a la sociedad nacional.[155]

En términos de efectos sobre la política, la acción senderista, tal vez a diferencia de la guerrilla colombiana, cierra el espacio de la política pues considera al adversario como un enemigo al que hay que aniquilar, acción coincidente con las fuerzas regresivas que cierran el círculo de la guerra y que crecientemente involucran o pretenden involucrar obligatoriamente a toda la sociedad en un campo de batalla donde sólo existen amigos y enemigos, y que tienen además el efecto perverso de generar confusión entre los actores sociales.

Probablemente el grito de Sendero no sólo expresa la lógica del terror, sino más bien la tragedia de la pobreza que no sólo afecta a la sociedad sino, por sobre todo, a la vida, y cuyos efectos y causas todavía estamos lejos de entender, pero que de seguro nos obligarán a ver y a soñar nuestra sociedades de diferente manera.

Porque ocurre que la guerra como instrumento político, aun cuando se trate de una guerra de liberación, una guerra de los oprimidos contra los opresores, carga de violencia hasta las relaciones más cotidianas, lleva a una serie infinita de mutuas represalias cuyo poder destructivo sólo puede ser evaluado por la historia, pero indudablemente subvierte y pone en cuestión a toda una cultura. "...decir basta a la guerra, esto es, rechazar la agresividad allí donde se manifiesta, en sus consecuencias más mortíferas, constituye una buena salida para la superación de una lógica que cree poder resolver los problemas de la vida con la muerte..."[156]

IV. Los movimientos sociales ante la crisis

Las tendencias que hemos encontrado en los diferentes campos de conflicto nos permiten realizar una primera elaboración hipotética explicativa sobre las características y el curso de los movimientos sociales en formación, principalmente en relación con la dinámica de la crisis.

En primer lugar, la crisis y los conflictos estudiados pueden ser leídos en clave teórica. Parecería que la crisis encontró en los países desarrollados tendencias de resolución en el sentido de la reemergencia de un nuevo sistema de poder y de acumulación mundial. Así, para Petras,[157] EE.UU. sería una potencia que reemerge con más fuerza a través de una nueva concentración de poder. Por otra parte, Castells subraya el desarrollo de una mayor concentración de capital y de la gestión a escala mundial, donde las decisiones de las multinacionales estarían cada vez más centralizadas en EE.UU. No se trata, afirma el español, "de que el capital no se dirija a cada Estado en particular. Sino que al realizarse el equilibrio del sistema a nivel mundial, es preciso —además de los Estados particulares— un Estado imperial, que hoy no puede ser otro más que el Estado Americano..."[158]

Los procesos de reestructuración de la economía implicarían cambios en la relación capital/trabajo, con el fortalecimiento superlativo del primero gracias a las interacciones entre capital financiero y revolución tecnológica, donde el capital constante y la acumulación basada en su productividad tendrían amplios y nuevos horizontes que condicionarían, por otra parte, un Estado altamente consumidor de tecnología y recursos militares. Asimismo, esta dinámica implicaría una nueva escala de internacionalización de la economía.

Este proceso daría origen a una nueva división internacional del trabajo donde los países más industrializados, con fuerte presencia de empresas en cadena y de producción complementaria, tenderían a monopolizar la producción y el mercado mundial, mientras que los países subdesarrollados, y especialmente los menos industrializados, quedarían muy reducidos en su participación en la producción y el comercio internacional.[159]

Es decir que estaría emergiendo un sistema de poder multidimensional, hiperabstracto y de difícil comprensión, cuya dirección estaría altamente concentrada en élites cada vez más reducidas de los países desarrollados y minorías consistentes, emergentes en los países atrasados. El control del poder se caracterizaría por la organización de múltiples redes de conexión tecnológico-financieras, donde lo central de una eco-

nomía o de una empresa ya no sería solamente la producción en sentido estricto, sino su *capacidad* productiva; en este extraño espectro, la revolución tecnológica, y más particularmente la de la informática, cumplirían un papel central.

Por otra parte, los movimientos sociales vivirían actualmente un momento de transición entre antiguas y nuevas prácticas colectivas. Las orientaciones seculares de la acción colectiva latinoamericana en términos de modernización, industrialización o liberación nacional o social, tenderían a perder vigencia de no ser que en las prácticas de los movimientos sociales y de otros agentes de la acción social se produzcan mecanismos de renovación y autotransgresión colectiva. Pero por el momento, una lectura preliminar indicaría que no hay actores históricos claramente definidos que se opongan al poder emergente; en sentido estricto, no existirían movimientos sociales, sino más bien expresiones embrionarias de los mismos.

Actualmente, lo que es posible observar en los movimientos sociales es que constituyen —unilateralizando y simplificando grandes significantes de la acción colectiva— un universo múltiple, heterogéneo y disperso de prácticas reactivas de distintas características.

En este conjunto de prácticas colectivas, puede ser que coexistan casi irreductiblemente un particularismo obrero centrado en sus condiciones de trabajo con espacios de resistencia urbana defensivos de sus condiciones de vida, un conjunto de prácticas campesinas fragmentadas en necesidades y orientaciones diversas, y una serie de movimientos culturales, etarios, étnicos, etcétera de orden más fundamentalista que cuestionador de las relaciones de poder.

Puede haber, incluso, situaciones de multi o pluri pertenencia a estas prácticas, pero aun en este caso es posible que se reproduzcan tendencias a conductas irreductibles. Este conjunto de atributos generaría una cualidad monádica generalizable para el conjunto de la acción colectiva sudamericana. Es decir que, aparentemente, la adscripción a una o más identidades, a uno o más movimientos sociales no significa que se esté en condiciones de combinar y complementar estas luchas con vistas a crear un actor histórico con capacidad de disputa por la hegemonía.

Otra característica central de estas prácticas colectivas emergentes consistiría en una atomización intensa y asimétrica que varía según las características, los espacios y los tiempos de cada país concreto. Vistos en conjunto y perspectiva, semejan una galaxia en formación, incandescente y embrionaria, y cuyas partículas aún permanecen distantes entre sí, espasmódicas, incapaces de fusionarse y de tomar una sola órbita común; serían energías dispersas que no alcanzan a transformarse en estrellas.

En este contexto de desencuentro entre una lógica, la del poder, abstracta y difícilmente aprehensible pero sólida, y la otra lógica, atomizada y puntual de las múltiples luchas sociales, por el momento sólo

el Estado o lo paraestatal están en condiciones de reconocer esta nueva lógica sistémica. El Estado se ve presionado a enfrentar estas racionalidades opuestas; por una parte debe oponerse y negociar con la nueva lógica capitalista y, a la vez, reprimir y conciliar una multiplicidad de acciones colectivas, lo que probablemente condicionará una mayor concentración de poder en él.

Sin embargo, es importante recordar que en América Latina el Estado es también parte de las relaciones sociales, y que su constitución y desarrollo están indisolublemente ligados a las relaciones sociales que lo involucran, no sólo en tanto que actor en procesos productivos y reproductivos, sino como regulador de procesos político-culturales más amplios. Precisamente por esto la interacción Estado y sociedad será probablemente una de las temáticas centrales de la reconstitución del campo del conflicto histórico de nuestras sociedades y del sistema mundial de dominación.

Pero todas estas reflexiones, ¿implicarían un proceso de fragmentación de la acción colectiva al infinito, es decir, un proceso de destrucción definitiva de los actores históricos?, ¿o es que en las prácticas analizadas pueden encontrar elementos nuevos de gestación de actores históricos?

Un primer fenómeno a señalar es que parecería no haber un sentido unidireccional, ni un epicentro, que regulen el comportamiento absoluto de nuestras sociedades. En este sentido, no hemos encontrado un único principio que explique el funcionamiento y el cambio de los movimientos sociales; más bien, encontramos una diversidad de comportamientos que reaccionan, se adaptan y proponen de distinta manera variadas opciones sociales, y aunque esto no niega que existan tendencias recurrentes, enfatiza que los movimientos sociales no tienen una sola causa, ni un único destino.

Por otra parte, una alternativa límite para muchos movimientos sociales sería un proceso de descomposición y desintegración social crecientes, donde los actores no alcancen a constituirse plenamente, y el dinamismo de la violencia, el caos o el totalitarismo se impongan a la sociedad; en suma, una alternativa que pase por la ausencia de principios de integración y articulación consensual. Otra alternativa límite sería que estos movimientos sociales fueran portadores de un nuevo orden social, de un nuevo modelo de desarrollo, que tuvieran efectos específicos de producción de formas sociales y de valores, y que a su vez fueran condicionantes de nuevas utopías.

En este sentido, en estos movimientos específicos es posible detectar cinco pares de orientaciones coexistentes en el interior de las prácticas colectivas estudiadas; cada uno de los pares expresa una tensión entre posibilidades antagónicas.

En primer lugar, de búsqueda y consolidación cuidadosa a partir de una intensa valoración ética de la democracia y, particularmente, de los derechos humanos como portadores de un orden político moralmente distinto, versus formas de verticalismo y autoritarismo e intolerancia dentro de los movimientos.

En segundo lugar, de aceptación y, en alguna medida de valorización de la diversidad societal en el sentido más amplio del término, donde los distintos actores en formación empiezan a reconocer a los otros y buscan interactuar con ellos, versus la tendencia al reduccionismo y a la monopolización de la representatividad de la acción social, excluyendo e invalidando el discurso y la acción del otro.

En tercer lugar, de afirmación y autonomía de los mismos movimientos sociales respecto de organizaciones e instituciones externas a ellos (principalmente tendiendo a buscar una autonomía de los partidos y el Estado, pero también de toda forma de acción percibida como manipuladora), versus heteronomía, clientelismo y dependencia.

Una cuarta orientación detectada sería hacia el hallazgo de formas de producción y reproducción societal independientes en gran medida, externas o complementarias al Estado y a la economía formal, es decir, hacia la búsqueda de nuevas formas de cooperación, de gestión, de auto o cogestión progresiva de las dificultades impuestas por la crisis, que de algún modo revitalizan la relación sociedad civil —economía, versus la reproducción de las viejas formas cristalizadas de dependencia estatal y del sistema productivo capitalista.

Una quinta orientación sería la emergencia de nuevos valores de solidaridad, reciprocidad y comunitarismo muy puntuales y específicos, que cada vez más apelan al trabajo solidario y a la decisión colectiva, versus el individualismo, la lógica del mercado y la competencia.

En fin, es posible que de la fricción entre estas tendencias antagónicas surjan formas revalorizadas de la acción social que puedan reagruparse y, a partir de la evolución de sus conflictos, constituir nuevos actores históricos que disputen las nuevas formas del poder.

En este contexto es posible que las identidades, particularmente las de los movimientos sociales, busquen un nuevo imaginario colectivo[160] en la aceptación y el reconocmiento de la diversidad señalada y se generen nuevas identidades societales compartidas a partir de la experiencia y memoria históricas de los actores y que, en definitiva, se recomuniquen y se opongan a la nueva y distinta forma de poder, tal vez como la única forma de hacerse sujetos, es decir, actores de su propia historia, de su propia sociedad.

En este sentido, el clamor que hoy escuchamos en la esquina es el olor a universo de mañana...

Notas

[1] Véase, por ejemplo, Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición,* Ed. Paidós, Buenos Aires, 1971.

Germani, fuertemente influenciado por Parsons en su teoría de la acción social, vislumbra la acción social de grupos e instituciones de las sociedades en transición como un sistema de alternativas de elección que conducirán a la modernidad, siempre y cuando las acciones racionales aventajen a las tradicionales utilizando las normas preestablecidas y se adecuen a las condiciones sociales posibles. Estos elementos lo condujeron en su tipología de evolución del sistema político a la elaboración de etapas políticas que se iniciaban en procesos de dictaduras militares y terminaban en sistemas democráticos de participación total. Pero piénsese, más allá de los aportes conceptuales del autor, los procesos concretos que luego vivió la región.

[2] Existen pocos textos teóricos sobre el populismo en América Latina. Véase para un análisis del discurso, Laclau, *Política e ideología de la teoría marxista,* Siglo XXI, España, 1978. Para un análisis sociopolítico, Quijano-Weffort (compiladores), *Populismo, marginalidad y dependencia,* Costa Rica, 1973.

[3] Para una visión recuperadora de las orientaciones de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina, véase Touraine, Alain, *Las sociedades dependientes,* Siglo XXI, México, 1978, sobre todo págs. 209 en adelante. Para una visión crítica del marxismo latinoamericano véase J. Aricó, *Marx y América Latina,* Alianza Editorial Mexicana, México, 1982. Véase también para un análisis crítico concreto J. Malloy, *The Incompleted Revolution,* Pittsburg University Press, Pittsburg, 1968.

[4] Véase, por ejemplo, Cotler, J., *Clases, Estado y nación en el Perú,* Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1978; González Casanova, Pablo, *La democracia en México,* ERA, México, 1982; E. Fischer, *Estado, clases e industria,* Editorial El Conejo, Quito, 1983; Cardoso, Fernando E., "Régimen político y cambio social", en *Estado y política en América Latina,* Edit. Siglo XXI, México, 1981; varios autores, *Ecuador agrario,* El Conejo-ILDIS, Quito, 1984; en particular trabajos de A. Guerrero sobre haciendas y S. Pachano sobre diferencias entre burguesía agraria y burguesía rural.

[5] *Dependencia y desarrollo económico,* Siglo XXI, México, 197*X*. Véase también post Scriptum *Desarrollo Económico,* núm. 66, julio-setiembre 1977. Una interesante crítica de la visión del Estado a estos autores, véase en Tilman Evers, *El Estado en la periferia capitalista,* Siglo XXI, México, 1981.

[6] Piénsese en varios estudios sobre la revolución mexicana (Womack, Worman) o sobre sindicalismo y protesta obrera (Touraine, Di Tella, Toller, Delich, etcétera), o sobre sindicalismo campesino andino (Dandler, Albo), sólo para hacer referencia a algunos estudios realizados en la década del sesenta. En la década del setenta la producción concreta fue mucho mayor.

[7] Sólo para apreciar un grupo de estudiosos sobre el tema, véase a) *Participación:* UNRISD, Ginebra, Suiza, 1981, serie de publicaciones sobre participación social; b) "Movimientos sociales y participación popular", Seminario UNRISD-CLACSO, en *David y Goliath* núm. 46, enero-diciembre 1984, Buenos Aires; c) Camacho-Menjíbar, *Movimientos sociales en Centroamérica.* FLACSO-UNU-IISUNAM, San José, 1985.

[8] Los estudios nacionales en este texto dan cuenta de ello.

[9] Morin, Edgar, "Para una crisiología", en R. Starn, Freund y otros, *El concepto de crisis,* Ediciones Megalópolis, Buenos Aires, 1979, pág. 293.

[10] En este sentido parecería importante extrapolar algunas hipótesis de la teoría lacaniana en términos de la relación entre el imaginario colectivo y la creación de la imagen especular, pues un imaginario colectivo establecido puede cambiar si la relación de imágenes le exige transformaciones, en razón de que la imagen especular no puede contener más ese imaginario colectivo original.

[11] Una visión preliminar sobre estos aspectos fue elaborada conjuntamente con J. Dandler. Véase *La fuerza histórica del campesinado,* Editorial CERES-UNRISD, Cochabamba, 1985.

[12] A. Touraine señala que "la particularidad de un movimiento social es la de no estar orientado hacia valores conscientemente expresados. Porque él se sitúa al nivel del sistema de acción histórica, él se define por el enfrentamiento de intereses opuestos, por el control de las fuerzas de desarrollo y del campo de experiencia histórica de una sociedad. Un movimiento social no es la expresión de una concepción del mundo. No es posible hablar de un movimiento social si no se puede definir, en ese mismo momento, el contra movimiento al que él se opone" (traducción de F. Calderón). *Production de la société,* Editions du Seuil, París, 1973, pág. 360. Véase también *La voix et le regard,* Editions du Seuil, París, 1978, particularmente págs. 108-127, y la colección de sociología permanente sobre movimientos sociales. El mismo autor define movimiento social como el nivel de acción más elevado y se caracterizaría por la combinación de un principio de identidad, oposición y totalidad. En un sentido más amplio el movimiento social sería un actor de un campo de acción histórica.

[13] Melucci, Alberto, *"L'azzione ribelle. Formazione e struttura dei movimenti sociali",* en Melucci, *Movimenti di rivolta,* Etas Libri, Milano, 1976.

[14] Para una discusión sobre patrimonialismo-corporativismo puede consultarse: a) Malloy editor, *Authoritarianism and corporativism in Latin America,* University of Pittsburg Press. Véanse artículos Malloy, y b) Cardoso-Faletto post scriptum, ob. cit.; las aseveraciones del texto se apoyan en las críticas al corporativismo que realizan estos últimos autores.

[15] Véase Coraggio, J. L., *Revolución y democracia en Nicaragua,* Cuadernos de pensamiento propio, Publicación INIES, Managua, 1984. También puede consultarse Camacho, Menjívar, coordinadora, ob. cit.

[16] Bajoit, Guy, *Esquisse d'un instrument d'analyse pour les mouvements populaires,* Universidad de Lovaina, 1984, trabajo mimeografiado.

[17] Touraine, A., y otros, *Mouvements sociaux d'aujourd'hui, acteurs et analystes,* Les éditions ouvrières, París, 1982.

[18] Para una síntesis de este pensamiento véase "Una tentativa de construcción global: las nuevas pautas de acción colectiva en América Latina", en *David y Goliath* núm. 46, CLACSO, Buenos Aires, agosto 1984.

[19] El interesante artículo de Angel Quintero, "La cimarronería como herencia y utopía (II): Bases populares de una cultura democrática alternativa en el Caribe", en *David y Goliath* núm. 48, Buenos Aires, diciembre 1985, da cuenta de la salsa como una práctica popular emergente y democrática, sobre todo se recomienda oír: Isadora Duncan.

[20] Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, muchos obreros, artesanos y comerciantes urbanos se empiezan a asumir también como aymaras. Véase F. Calderón, *Urbanización y etnicidad,* Ed. CERES, Cochabamba, 1984; véase también O. Ianni, "Raza y pueblo", Brasil, San Pablo, 1984, trabajo mimeografiado. Se calcula que solamente en el Brasil existen aproximadamente cien mil Comunidades Eclesiales de Base. Según Frei Betto, son grupos compuestos por personas surgidas de las clases subalternas, reunidas en función de una motivación religiosa que presenta, en esta capa social creyente y oprimida, una visión del mundo en la que se expresa una manera de ver la vida, el hombre y la historia. "Las Comunidades Eclesiales de Base", en *Amérique Latine,* núm. 18, CETRAL, París, abril-junio 1984.

Respecto de la emergencia de la anomia y el rito sacrificial en la acción colectiva, véase E. Valenzuela, *Los jóvenes y la crisis de modernización,* ILET, Santiago, Chile, 1985, trabajo mimeografiado.

En relación con el terrorismo, véase C. I. Degregori, *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros,* DESCO, Lima, Perú, 1985, trabajo mimeografiado.

[21] Nun, José, "La rebelión del coro", en Revista *Punto de Vista,* núm. 20, mayo de 1984, págs. 6 a 11.

[22] Ferrer especifica este proceso señalando que entre 1945 y 1970 se formó el Sistema Trilateral que implicaba vínculos estrechos entre EE.UU., Europa Occidental y Japón. El sistema se convirtió en el núcleo dominante de la división internacional del trabajo y desplazó al tradicional convenio Centro-Periferia. En "Nacionalismo y Transnacionalización", *Revista Pensamiento Iberoamericano,* núm. 3, enero-junio, España, 1983.

[23] El libro de varios autores: Jaguaribe, Ferrer, Wionczek, y dos Santos, *La dependencia político-económica de América Latina,* Siglo XXI, México, 1984 (14a. edición) trata esta problemática.

[24] Véanse por ejemplo los estudios del presente libro; en ellos se podrán visualizar las características específicas de los impactos de dicha crisis en sus economías. Para una visión de la crisis en los países desarrollados y sobre todo en EE.UU. véase *La crisis económica mundial y el capitalismo americano,* Editorial Laia, Barcelona, 1978.

[25] Para una visión global de la evolución de la economía latinoamericana véase *Crisis y desarrollo en América Latina,* CEPAL, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.

[26] Véase Alzamora, Carlos, e Iglesias, Enrique, "Bases para una respuesta de América Latina a la ciencia económica internacional", en *Revista de la CEPAL,* núm. 20, Santiago de Chile, agosto 1983. Para un análisis de la deuda externa en América Latina, véase Schvarzer, J., "La perspectiva del deudor", en *David y Goliath,* núm. 47, agosto 1985, Buenos Aires.

La relación de los precios de intercambio varió considerablemente entre 1975 y 1983 (más adelante, las cifras son aun más crudas). En estos años (índice: 1970:100 y tasas anuales de crecimiento) América Latina pasó de un índice

de 114 en 1975 a 98 en 1983, y la tasa anual de crecimiento pasó de 4.2 en 1978 a −7.2 en 1983. Fuente: CEPAL, citado por *Economía de América Latina,* núm. 12, México, 2do. trimestre de 1984, pág. 38.

[27] Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 1985. El capital internacional y el desarrollo económico. Indicadores claves del desarrollo mundial,* Editorial Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, Washington D.C., 1985, pág. 163. Véase parte IV.

[28] En otro estudio prospectivo, Sánchez Arnau señala como conclusión que "resulta difícil imaginar escenarios que puedan implicar un mejoramiento sustantivo de la situación presente y que conlleven la esperanza de que América Latina encuentre rápidamente la senda del desarrollo en escenarios de mediano plazo para el futuro desarrollo de América Latina". Instituto Italo Latinoamericano, Roma, 1985, trabajo mimeografiado. Asimismo, el Centre d'Etudes Prospectives et Informations Internationales (CPII) de París, elabora tres escenarios futuros, donde la situación de los países del tercer mundo e incluso Europa aparecen y continúan deteriorados. *"Configurations Prospectives de l'économie mondiale",* París, 1985, trabajo mimeografiado. Véanse también para las perspectivas del comercio mundial artículos de Berthelot y Calderón, en *David y Goliath,* núm. 48, Buenos Aires, 1985.

[29] Freund, J., "Observaciones sobre dos categorías de la dinámica prolegómena. De las ciencias al conflicto" en Morin, Storm y otros, *El concepto de crisis,* ob. cit., pág. 190.

[30] Los campos de conflictos señalados en el trabajo provienen de una síntesis y análisis realizados de los 56 estudios de caso; en realidad se elaboró muy rápidamente una tipología construida a partir de las tendencias empíricas básicas de dichos trabajos; obviamente la responsabilidad de las síntesis e interpretaciones de dichos trabajos sólo son atribuibles al autor de este texto. Para un análisis del valor relativo de tipologías construidas, véase Mc Kinney, J., *Tipología constructiva y teoría social,* Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1968.

[31] América Latina pasó de un crecimiento industrial de 6-5 entre 1950-1983 a −3.1 entre 1980 y 1983, registrándose los niveles más altos de decrecimiento para los últimos años en Uruguay, −10.0; Costa Rica −7.1; Chile 0.1; Perú 6.1 y Bolivia 6.2. Fuente: CEPAL, citado por *Economía de América Latina,* ob. cit., pág. 43.

[32] Para una visión global del proceso industrial véase *Economía de América Latina,* ob. cit., particularmente el artículo de R. Villarreal; allí señala "que las problemáticas de fondo que enfrentan la industria y el comercio exterior en los países de la región son dos: la que corresponde a la estructura misma de la producción y a la organización industrial, y la que se deriva de la peculiar relación entre los agentes de la industrialización", pág. 40. Véase especialmente Hirschmann, Albert, *"Desenvolvimento por efeitos em cadeia: uma abordagem generalizada",* en *Economia e movimentos sociais na América Latina,* varios autores, Editora Brasiliense, San Pablo, 1985.

[33] El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: H. Palomino, R. Mayorga, R. Calla Ortega, R. M. Marini, J. R. Tagle, M. Romero, J. León y J. P. Pérez, R. Céspedes, J. Parodi, G. Cosse, E. Lander, realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

[34] Calla Ortega, Ricardo, *La encrucijada de la COB: temas del movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática,* CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado.

[35] Mayorga, René A., *Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la COB,* CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado.

[36] Mayorga, ídem. Para una visión complementaria de estas pautas, véase Whitehead, "Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia", en *Revista Mexicana de Sociología,* IISUNAM, México, diciembre 1980, y también G. Sandoval, *Los mil rostros del conflicto minero,* La Paz, 1985, trabajo mimeografiado.

[37] Cosse, Gustavo, *Clase obrera, autoritarismo y democracia,* CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.

[38] Ruiz Tagle, Jaime, *El movimiento sindical chileno y la crisis del capitalismo autoritario,* ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado, pág. 9.

[39] Marini, Ruy Mauro, *O movimento operário no Brasil,* FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

[40] Para un análisis de la huelga de mayo del '78, antecedente histórico básico para visualizar los nuevos comportamientos obreros, véase A. Moroni, *A estrategia da recusa,* Brasiliense, San Pablo, 1982.

[41] de Castro, Regis, "Introducción", en varios autores, *Sindicatos em uma época de crise,* CEDEC-VOZES, San Pablo, 1984, pág. 10.

[42] Aparecido da Silva, Roque, *Representatividad, Democracia y Unidad en el Sindicalismo Brasilero,* Varios autores, *Sindicatos em uma época de crise,* ob. cit.

[43] Véase León, J., y Pérez Sáinz, J. P., *Crisis y movimiento sindical en Ecuador: las huelgas nacionales del FUT (1981-1983),* CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

[44] León, J., y Pérez Sáinz, J. P., ídem, pág. 32.

[45] León, J., y Pérez Sáinz, J. P., ídem, pág. 38.

[46] Véase Palomino, Héctor, *El movimiento de democratización sindical,* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

[47] Palomino, H., ídem.

[48] Para una visión global del sindicalismo argentino, véase Jelin, Elizabeth, y Torre, Juan Carlos, "Los nuevos trabajadores en América Latina. Una reflexión sobre la tesis de la aristocracia obrera", en Revista *Desarrollo Económico,* Vol. 22, núm. 85, abril-junio 1982, y de Delich, Francisco, "Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical", en Revista *Crítica y Utopía,* núm. 6, Buenos Aires, marzo 1982.

[49] Céspedes, Roberto L., *El movimiento laboral paraguayo ante la crisis,* CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado, pág. 9.

[50] Céspedes, ídem, pág. 27.

[51] Céspedes, ídem, pág. 38.

[52] Céspedes, ídem, pág. 43.

[53] Véase Parodi, Jorge, *La desmovilización del sindicalismo peruano,* DESCO, Lima, 1985, trabajo mimeografiado.

[54] Véase Parodi, J., ídem.

[55] Véase Parodi, J., ídem.

[56] Véase Parodi, J., ídem.

[57] Lander, E, y Arconada, S., *La Confederación de trabajadores de Venezuela (el mito del movimiento obrero en Venezuela),* CENDES, Caracas, 1985, trabajo mimeografiado.

[58] Véase Romero, Mauricio, *Los asalariados y el movimiento sindical en Colombia,* CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.

[59] Véase para una visión teórica, M. Castells, *Crisis urbana y cambio social,* Siglo XXI, España, 1981, págs. 107-189, y también Calderón, F., *La política en las calles,* Editorial CERES, Cochabamba, 1983.

[60] Para una visión panorámica de estos procesos véase Walton, Chase-Dunn, Langer y otros, *Ciudades y sistemas urbanos,* CLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales núm. 10, Buenos Aires, 1984.

[61] El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: Daniel García Delgado y Juan Silva, María I. González, Luis Fara, Roberto Laserna, Pedro Jacobi, Vania Bambirra, Vicente Espinoza, Javier Giraldo y Santiago Camargo, M. Unda, Simón Pachano, Luis A. Galeano, Teresa Tovar Samanez, Narda Henríquez, Patricio Rodé, Javier Marsiglia, Enrique Piedra Cueva, Omar Ovalles, Eduardo Matute, R. P. Arturo Sosa S.J., realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

[62] García Delgado, Daniel, y Silva, Juan, *El movimiento vecinal y la democracia. Participación y control en el Gran Buenos Aires,* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

[63] González, María Inés, *Protestan los barrios (el murmullo suburbano de la política),* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

[64] Fara, Luis, *Luchas reivindicativas urbanas en un contexto autoritario,* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

[65] Fara, Luis, ob. cit.

[66] Jacobi, Pedro, *Movimentos sociais urbanos e a crise: da explosão social a participação popular autonoma,* FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

[67] Idem.

[68] Idem.

[69] Bambirra, Vania, *Favelas e movimentos de favelados no Estado do Rio de Janeiro,* FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

[70] Para complementar esta visión brasileña, véase José Lavaro Moisés, Lucio Kowarick y otros, *Cidade, povo e poder,* Co-ediçoes CEDES/Paz e Terra, San Pablo, 1982. El estudio de Evers, Tillman, y otros, "Movimientos de barrio y Estado: luchas en la esfera de la reproducción en América Latina" integra una visión teórica del problema que se está tratando. Un aspecto que revela este trabajo es su papel de opositor a las protestas urbanas. "El nivel de consumo individual está en gran medida determinado por el Estado. En América Latina el Estado asume la cualidad de representante directo de los intereses capitalistas, fijando salarios, decretando las condiciones de trabajo, prohibiendo los sindicatos, aumentando los precios, y actuando como propietario de un gran número de empresas lucrativas". Traducción L. Gaustein. Véase también Kowarick, Lucio, *Expoliação urbana,* Paz e Terra, San Pablo, 1979.

[71] Rodé, Patricio; Marsiglia, Javier y Piedra, Enrique, *Experiencias recientes de movilización urbana en las áreas de la salud, nutrición y organización barrial,* CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.

[72] Idem.

[73] Idem.

[74] Idem.

[75] Véase Espinoza, Vicente, *Los pobladores en la política,* ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.

[76] Idem.

[77] Véase Tovar Samanez, Teresa, *Vecinos y pobladores en la crisis (1980-1984),* DESCO, Lima, 1985, trabajo mimeografiado. Para una visión global E. Henly, *La escena urbana,* Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1978.

[78] Tovar, Teresa, ídem.

[79] Unda, M., *La organización barrial entre la democracia y la crisis,* CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

[80] Idem.

[81] García y col., ob. cit. Véase también J. García, *Las organizaciones barriales de Quito,* ILDIS-CIUDAD, Quito, 1987.

[82] Laserna, Roberto, *La protesta territorial (la acción colectiva regional y urbana en una coyuntura de crisis y democracia),* CERES, Cochabamba, 1985, trabajo mimeografiado, y Flores, Gonzalo, *El movimiento regional cruceño,* CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado; este último analizará el desarrollo de un movimiento social regional: el cruceño.

[83] Flores, G., ob. cit.

[84] Laserna, R., ob. cit.

[85] Flores G., y Laserna, R., ob. cit.

[86] Véase en este mismo texto el trabajo de Laserna, R., *La acción social en la coyuntura democrática.*

[87] Camargo, Santiago, y Giraldo, Javier, *El movimiento cívico en Colombia,* CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.

[88] Idem.

[89] Idem.

[90] En la actualidad, el CERES, el IEE y CISEPA se encuentran realizando un importante estudio empírico sobre la problemática.

[91] Pachano, Simón, *Movimientos sociales regionales en el Ecuador,* CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

[92] Henríquez, Narda, *Notas y tesis sobre los movimientos regionales en el Perú,* DESCO, Lima, 1985, trabajo mimeografiado.

[93] Flores, Gonzalo, ob. cit.

[94] Ovalles, Omar, *Movimientos de cuadro de vida en la Venezuela urbana actual: posibles actitudes para enfrentar la crisis,* CENDES, Caracas, 1985, trabajo mimeografiado.

[95] Idem.

[96] Idem.

[97] Galeano, Luis A., *Entre la protesta y la lucha urbana: dos estudios de casos,* CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.

[98] Idem.

[99] Idem.

[100] Idem.

[101] Idem.

[102] El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: Silvia Rivera Cusicanqui, María Conceiçao D'Inçâo, Gonzalo Tapia Soko y Gonzalo Vio Grossi, Isauro Suárez, Manuel Chiriboga, Ramón Fogel, E. Caballero Carrizoza, Diego E. Piñeiro, en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

[103] Para un análisis reciente de las relaciones sociales campesinas y de la agricultura latinoamericana, véase E. Havens, "Transformaciones de la Agricultura: la acumulación de capital y el Estado", en *Estudios Rurales Latinoamericanos,* Vol. 7, núm, 2, mayo-agosto 1984, y también los artículos de Leal, Dandler para Bolivia, Chiriboga para Ecuador en Vol. 7, núm. 3 de la misma revista; véase Crispi para Chile y Samaniego para el Perú, setiembre-diciembre de 1984.

[104] Un análisis teórico-histórico de estos aspectos puede consultarse en Calderón-Dandler, *La fuerza histórica del campesinado,* Cap. I.; véanse especialmente aspectos teóricos págs. 203-217 del artículo de Dandler sobre el "Campesinado y Reforma Agraria en Cochabamba", Edit. UNRISD-CERES, Cochabamba, 1985. Véase también O. Ianni, *Revolução e Cultura,* Ed. Civilizaçâo Brasileira, Río de Janeiro, 1983.

[105] Rivera Cusicanqui, Silvia, *El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática,* CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado. Véase también Rivera Cusicanqui, S., *Oprimidos pero no vencidos,* Hisbol-CSUTCB, Editorial Acuario, La Paz, 1984.

[106] Rivera, Silvia, ob. cit.

[107] Idem.

[108] Véase Suárez, Isauro, *Trayectoria y actualidad de las luchas agrarias en Colombia,* CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado, y Rojas, Fernando, en este mismo libro, *Los movimientos sociales frente a la crisis en Colombia.*

[109] Suárez, Isauro, ídem, pág. 7.

[110] Ibíd.

[111] Ibíd.

[112] Idem.

[113] Idem.

[114] Tapia Soko, Gonzalo, y Vio Grossi, Gonzalo, *El problema de la recomposición de los actores campesinos en una perspectiva redemocratizadora,* ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.

[115] Idem.

[116] Fogel, Ramón, *Las invasiones de tierras: una respuesta campesina a la crisis,* CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.

[117] Idem.

[118] Piñeiro, Diego E., *El plenario de pequeños y medianos productores; un intento de crear un movimiento de agricultores familiares,* CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.

[119] Piñeiro, Diego, ob. cit.

[120] Idem.

[121] El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: Manuel Chiriboga, Cristián Vjves y Joel Rufino dos Santos, realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

[122] Véase, Chiriboga, Manuel, *Crisis económica y movimiento campesino e indígena,* CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

[123] Vives, Cristián, *El pueblo mapuche: elementos para comprenderlo como movimiento social,* ILET, Santiago, 1985, pág. 2, trabajo mimeografiado.

[124] Vives, Cristián, ídem, pág. 3.

[125] Véase Rufino dos Santos, Joel, *O movimento negro e a crise brasileira,* FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

[126] Idem.

[127] Vives, C., ob. cit., pág. 38.

[128] Los textos que utilizamos para realizar esta síntesis son los siguientes:

- **Derechos Humanos:** Sondereguer, María, *El movimiento de Derechos Humanos en Argentina (1976-1983),* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.
- **De Género:** Feijóo, María del Carmen, y Gogna, Mónica, *Las mujeres en la transición a la democracia,* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.
  Saffioti, Heileth, y Ferrante, Vera, *Formas de participação da mulher em movimentos sociais,* FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.
  Escobar, Cristina, *Movimientos de mujeres,* CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.
  Prieto, Mercedes, *Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador,* CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.
  Corvalán, Graziella, *La acción colectiva de las mujeres urbanas en el Paraguay,* CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.
  Prates, Suzana, y Rodríguez V., Silvia, *Los movimientos sociales de mujeres en la transición a la democracia,* CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.
- **De cultura juvenil:** Vila, Pablo, *El movimiento de rock nacional: crónicas de la resistencia juvenil,* CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.
  Valenzuela, Eduardo, *Los jóvenes y la crisis de modernización,* ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.
  Rodríguez, Ernesto, *La juventud como movimiento social. Elementos para el estudio del caso uruguayo,* CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.
  Laterza Rivarola, Gustavo, *El movimiento estudiantil independiente en el Paraguay (1960-1984),* CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.

[129] Sondereguer, María, ob. cit., pág. 1.

[130] Idem, pág. 2.

[131] Idem, pág. 3.

[132] Idem, pág. 16.

[133] Idem, pág. 20.

[134] Idem, pág. 25.

[135] Para un análisis teórico de los derechos humanos y la democracia en América Latina, véase Ansaldi, Waldo (comp.), *La ética de la democracia,* CLACSO, Buenos Aires, 1985.

[136] Véanse trabajos de Gogna, M., y Feijóo, M. del C.; Saffioti, H., y Ferrante, V.; Escobar, C.; Prieto, M.; Corvalán, G.; Prates, S., y Rodríguez, S., ob. cit. cita 131.

[137] Idem.

[138] Idem.

[139] Idem.

[140] Vila, Pablo, ob. cit.

[141] Valenzuela, E., ob. cit.

[142] Idem., ob. cit.

[143] Rodríguez, E., ob. cit.

[144] Laterna, Rivarola, G., ob. cit.

[145] Vila, Pablo, ob. cit.

[146] Vila, Pablo, ob. cit.

[147] Valenzuela, E., ob. cit.

[148] Vila, Pablo, ob. cit.

[149] El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de Naranjo, Gilberto, y Degregori, Carlos I., realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

[150] Véase Touraine, *La voix et le regard,* ob. cit., pág. 119-124. Hobsbawn, *Bandidos,* Ariel, 1976, en especial capítulos I y VII. Para una discusión teórica de la relación entre acciones políticas violentas izquierdistas y totalitarismo, véase F. Furet y col., *Terrorisme et democracie,* Fondation Saint-Simon, Fayard, París, 1985.

[151] Nzranjo, Gilberto, *El movimiento guerrillero,* CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.

[152] Degregori, Carlos I., ob. cit.; H. Fabré, *Sendrier Lumineux, Horizons obscurs,* R. Dokleus A. Latine, París, 1984.

[153] Degregori, Carlos I., ídem.

[154] Idem.

[155] Idem.

[156] Ravaioli, C., *Il quanto e il quale, la cultura del mutamento,* Ed. Laterza, Roma, 1982, pág. 179.

[157] Petras, J., *"Critical perspectives on imperialism and social class in the Third World",* en *Monthly Review Press,* Nueva York y Londres, 1979. H. Brochier en una visión maniquesta, señala que la crisis es una estrategia para el mantenimiento del poder. Véase Brochier en *El concepto de crisis,* ob. cit.

[158] Castells; Manuel, *La crisis económica mundial y el capitalismo americano,* pág. 325, Edit. Laiz, Barcelona, 1978. Véase también de M. Castells, "Cambio político versus cambio social. Cambio social versus cambio político. Testimonio de una trayectoria intelectual: Manuel Castells", entrevista en Revista *David y Goliath,* núm. 48, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 1985.

[159] Véase artículo de Berthelot, Yves, "Perspectivas 1985-1990: Inquietudes", y de Calderón, F., "Entre la desorganización nacional y la creatividad social: notas sobre el impacto de la crisis en Latinoamérica", Revista *David y Goliath,* núm. 48, noviembre de 1985.

[160] Para una mayor elaboración de esta problemática, véase F. Calderón y Mario dos Santos, "Movimientos Sociales y gestación de cultura política", ponencia presentada en el seminario sobre Cultura política y democratización, del Grupo de trabajo sobre teoría del Estado y la política, CLACSO, Bs. As., 1985, trabajo mimeografiado.

Indice

Introducción, por Fernando Calderón Gutiérrez 11

1. Prácticas colectivas y transición a la democracia: Argentina, Brasil y Uruguay

1.1. **Argentina.** "Otros silencios, otras voces; el tiempo de la democratización en la Argentina". Elizabeth Jelin 17

. Antecedentes históricos.
. Movimientos sociales, política y sociedad.
. La transición a la democracia: voces y silencios (Los derechos humanos; los actores barriales; los jóvenes y el rock nacional; las mujeres, el movimiento sindical y la democracia).
. A modo de conclusión.

1.2. **Brasil.** "Crisis y movimientos sociales en Brasil". Theotónio Dos Santos. 45

. Ubicación del tema.
. Los niveles de análisis.
. Movimientos sociales y sujeto histórico.
. Movimientos sociales y proyectos históricos.
. Movimientos sociales, sociedad civil, ciudadanía.
. Crisis y movimientos sociales.

1.3. **Uruguay.** "Movimientos sociales en la restauración del orden democrático: Uruguay 1985". Carlos H. Filgueira.

. Introducción.
. Acerca de la demarcación de los "movimientos sociales".
. Sociedad y movimientos sociales.
. Movimientos sociales: tipos y características. (Movi-

mientos sociales barriales orientados a las necesidades básicas; movimientos gremiales y corporativos rurales; movimientos urbanos: sindicatos y estudiantes; movimientos de mujeres y feministas).
. Consideraciones finales.

2. Democracias inestables y sociedades movilizadas: Bolivia, Ecuador y Perú.

2.1. **Bolivia.** "La acción social en la coyuntura democrática". Roberto Laserna R. 103
. Antecedentes.
. Características económicas de la crisis.
. Dimensiones político-ideológicas de la crisis.
. La democracia de la crisis.
. Panorama de la acción social en Bolivia (1970-1983).
. El movimiento obrero (1982-1985) (Defender la democracia cogestión laboral; cogobierno; propuesta de política económica; salario mínimo y móvil; defensa de la fuente de trabajo; tendencias y cambios en la coyuntura).
. El movimiento campesino en la coyuntura democrática (De la participación al economicismo; otras contradicciones; problemas de representación).
. Los nuevos actores frente a la coyuntura democrática (El movimiento regional; el movimiento vecinal; el movimiento sindical de los funcionarios).
. Hacia la reconstitución nacional-popular.

2.2. **Ecuador.** "Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en el Ecuador". Luis Verdesoto Custode. 157
. Introducción.
. Crisis y democracia en el Ecuador contemporáneo.
. Los movimientos sindical, barrial, femenino, regional campesino e indígena (los trabajadores en la crisis; los barrios se organizan; nace un movimiento feminista; las regiones capitalistas; servicios y tierra, campesinos e indígenas; los sectores medios también protestan; un caso de excepción).
. Características y temas de los movimientos (crisis y desplazamientos de las identidades de los subalternos; ¿qué movimientos sociales son posibles en una sociedad terciaria?; la penetración del Estado en la sociedad civil y los movimientos; el "orden" de la democracia; ¿¿uno o varios universales?).

2.3. **Perú.** "Los movimientos sociales en la crisis: el caso peruano". Eduardo Ballón E. 196
. A manera de introducción.
. La naturaleza de la crisis.
. Los momentos de la crisis.
. Los movimientos sociales frente a la crisis (el movimiento obrero en la crisis; pobladores y vecinos en la crisis; el movimiento empresarial: la identidad confundida; los movimientos regionales y la crisis; Sendero Luminoso y la crisis).
. A modo de conclusión.

3. Pactos políticos y demandas de democratización: Colombia y Venezuela.

3.1. **Colombia.** "Crisis económica y crisis política bajo el gobierno de Betancur - Los movimientos sociales frente a la crisis en Colombia". Fernando Rojas. 225
. Introducción.
. ¿Qué crisis?
. La crisis económica colombiana y mundial: de la rigidez a la flexibilidad.
. La crisis política: el fracaso de la pareja represión/conciliación en Colombia.
. La crisis política es la crisis de fondo de la Colombia de hoy.
. Tendencias hacia la unión de los movimientos populares.
. Factores de división de los movimientos populares. Las causas "objetivas".
. La división del sindicalismo.
. La fragmentación de los movimientos cívicos.
. Intento de disección del movimiento guerrillero colombiano: las diferencias de concepción, organización y acción y la estrategia divisionista del gobierno de Betancur.
. Las separaciones del movimiento indígena.

3.2. **Venezuela.** "Los movimientos sociales en Venezuela ante la crisis". Luis Gómez Calcaño.
. Introducción.
. El modelo de desarrollo y su actual crisis (Antecedentes: hacia un nuevo modelo de hegemonía; el modelo de desarrollo, la coyuntura crítica).

. Los movimientos sociales ante la crisis (El movimiento sindical; el movimiento cooperativo; movimientos "de cuadro de vida"; las comunidades eclesiales de base).
. Conclusiones.

4. Movimientos democratizantes y dictaduras militares: Chile y Paraguay.

4.1. **Chile.** "Luchas y movilizaciones sociales en la crisis: ¿se constituyen movimientos sociales en Chile?" Guillermo Campero 289

. Un decenio que no logró fundar una sociedad sin actores colectivos (1973-1983).
. Estructura social y actores sociales en Chile (Una visión global de la evolución de la estructura social; actores sociales y su constitución).
. Actores sociales y sistema político.
. Actores sociales y consensos culturales.
. Los actores sociales en presencia.
. ¿Nuevos o viejos actores?

4.2. **Paraguay.** "Los movimientos sociales en el Paraguay". Domingo M. Rivarola 308

. Introducción.
. Economía, desarrollo económico y urbanización.
. Expansión del Estado, cooptación y clientelismo.
. Estudios sobre los movimientos sociales.

5. Los movimientos sociales ante la crisis. Fernando Calderón Gutiérrez 327

. La sociedad no es una estructura.
. La voz con huellas.
. Caminos truncos y conflictos abiertos (Industrialización y condición obrera; calidad de vida, consumo colectivo y descentralización; tierra, mercado, etnicidad y Estado; la libertad, el género y la cultura; la guerra y la política).
. Los movimientos sociales ante la crisis.

Este libro se terminó de imprimir
en Artes Gráficas Santo Domingo S. A.,
Santo Domingo 2739, Capital,
en noviembre de 1986.